

alerta 2016!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz



Alerta 2016! Informe sobre conflictos,
derechos humanos y construcción de paz

Alerta 2016!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz

Elaborado por:

Ana Ballesteros Peiró
Vicenç Fisas Armengol
Iván Navarro Milián
Josep Maria Royo Aspa
Jordi Urgell García
Pamela Urrutia Arestizábal
Ana Villellas Ariño
María Villellas Ariño

Con prólogo de:

Martin Griffiths
Director Ejecutivo del
European Institute of Peace

Este libro ha sido impreso en papel reciclado y libre de cloro

Informe finalizado en febrero de 2016.

Edición: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB

Impresión: Ulzama, S.L.

Diseño: Lucas Wainer Mattosso

ISBN: 978-84-9888-731-0

Depósito legal: B 10421-2003

El presente informe ha sido elaborado por: Ana Ballesteros Peiró (conflictos armados y tensiones), Vicenç Fisas Armengol (procesos de paz), Iván Navarro Milián (conflictos armados y tensiones), Josep María Royo Aspa (conflictos armados y tensiones), Jordi Urgell García (conflictos armados y tensiones), Pamela Urrutia Arestizábal (conflictos armados, tensiones y género), Ana Villellas Ariño (conflictos armados, tensiones y género) y María Villellas Ariño (género, conflictos armados y tensiones).

Los contenidos de este informe pueden ser libremente reproducidos y difundidos, siempre que se cite adecuadamente. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau de la UAB y no refleja necesariamente la opinión de la ACCD.

Para citar este informe:

Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2016! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.*

Barcelona: Icaria, 2016.

Escola de Cultura de Pau

Parc de Recerca, Edifici MRA,

Plaça del Coneixement,

Universitat Autònoma de Barcelona,

08193 Bellaterra (España)

Tel: +34 93 586 88 48/ 93 586 88 42;

Fax: +34 93 581 32 94

Email: pr.conflict.escolapau@uab.cat

Web: <http://escolapau.uab.cat>

Índice

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas	7
Prólogo de Martin Griffiths Director Ejecutivo del European Institute of Peace	9
Resumen ejecutivo	11

Capítulos

1. Conflictos armados	27	2.3.2. América	123
1.1. Conflictos armados: definición	27	- América del Norte, Centroamérica y Caribe	123
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2015	30	- América del Sur	126
1.2.1. Tendencias globales	30	2.3.3. Asia y Pacífico	129
- Impacto de los conflictos en la población civil	34	- Asia Central	129
- Embargos de armas	36	- Asia Meridional	131
1.3. Conflictos armados: evolución anual	42	- Asia Oriental	138
1.3.1. África	42	- Sudeste Asiático y Oceanía	143
- África Occidental	42	2.3.4. Europa	148
- Cuerno de África	45	- Europa Oriental	148
- Grandes Lagos y África Central	47	- Rusia y Cáucaso	149
- Magreb - Norte de África	56	- Sudeste de Europa	153
1.3.2. América	59	2.3.5. Oriente Medio	156
1.3.3. Asia y Pacífico	59	- Golfo	156
- Asia Meridional	59	- Mashreq	162
- Asia Oriental	65	3. Procesos de paz	169
- Sudeste Asiático y Oceanía	66	3.1. Procesos de paz: definiciones y tipologías	170
1.3.4. Europa	71	3.2. Evolución de las negociaciones	171
- Europa Oriental	71	3.3.1. África	171
- Rusia y Cáucaso	73	- África Austral	171
- Sudeste de Europa	74	- África Occidental	171
1.3.5. Oriente Medio	75	- Cuerno de África	172
- Golfo	75	- Grandes Lagos y África Central	175
- Mashreq	78	- Magreb - Norte de África	176
2. Tensiones	87	3.3.2. América	176
2.1. Tensiones: definición	87	3.3.3. Asia y Pacífico	177
2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2015	93	- Asia Meridional	177
2.2.1. Tendencias globales	93	- Sudeste Asiático	178
2.2.2. Tendencias regionales	94	3.3.4. Europa	178
2.3. Tensiones: evolución anual	98	- Europa Oriental	178
2.3.1. África	98	- Cáucaso	180
- África Austral	98	3.3.5. Oriente Medio	180
- África Occidental	101	4. Género, paz y seguridad	183
- Cuerno de África	109	4.1. Desigualdades de género	183
- Grandes Lagos y África Central	113	4.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género	184
- Magreb - Norte de África	121	4.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones	184
2.3.2. América	123	4.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados	187
- América del Norte, Centroamérica y Caribe	123	4.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado	189
- América del Sur	126	4.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género	191
2.3.3. Asia y Pacífico	129	4.3.1. La resolución 1325	191
- Asia Central	129		
- Asia Meridional	131		
- Asia Oriental	138		
- Sudeste Asiático y Oceanía	143		
2.3.4. Europa	148		
- Europa Oriental	148		
- Rusia y Cáucaso	149		
- Sudeste de Europa	153		
2.3.5. Oriente Medio	156		
- Golfo	156		
- Mashreq	162		

4.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz _____	193	6.3. RDC ante el riesgo de una escalada de la inestabilidad y del conflicto armado en 2016 _____	216
4.3.3. Iniciativas de la sociedad civil ____	195	6.4. Sudán del Sur: un acuerdo de paz muy frágil _____	218
4.3.4. Agenda internacional de igualdad de género _____	196	6.5. Venezuela, nuevo escenario político marcado por la polarización de poderes_	220
5. Oportunidades de paz para 2016 _____	199	6.6. Afganistán: la falta de legitimidad del liderazgo talibán y su impacto en el proceso de paz _____	222
5.1. El reinicio de las negociaciones en Chipre: ¿el proceso de paz definitivo? ____	200	6.7. Filipinas: el proceso de paz en Mindanao, en la encrucijada _____	224
5.2. Nueva era política en Burkina Faso tras concluir la etapa de transición _____	202	6.8. El conflicto Turquía-PKK: los riesgos de una deriva mayor _____	226
5.3. La exploración de escenarios de paz en el sur de Tailandia _____	204	6.9. Violencia armada en Yemen: ¿una nueva Siria invisibilizada? _____	228
5.4. La transición a la democracia y la paz en Myanmar _____	206	6.10. La amenaza yihadista y sus efectos desestabilizadores a nivel internacional_	230
5.5. La perspectiva de género en los procesos de paz: inclusividad y sostenibilidad ____	208		
6. Escenarios de riesgo para 2016 _____	211	Glosario _____	233
6.1. Al borde de la guerra civil en Burundi ____	212	Escola de Cultura de Pau _____	239
6.2. Malí: riesgo para la estabilidad debido a acciones de grupos yihadistas _____	214		

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas

Mapa 1.1.	Conflictos armados _____	26	Mapa 3.1.	Procesos de paz _____	168
Tabla 1.1.	Resumen de los conflictos armados en 2015 _____	28	Tabla 3.1.	Situación de las negociaciones al finalizar 2015 _____	170
Gráfico 1.1.	Distribución regional del número de conflictos armados en 2015 ____	31	Mapa 4.1.	Desigualdades de género _____	182
Gráfico 1.2.	Intensidad de los conflictos armados _____	32	Tabla 4.1.	Países en conflicto armado y tensión con niveles de discriminación de género altos y muy altos _____	184
Gráfico 1.3.	Intensidad de los conflictos por regiones _____	32	Cuadro 4.1.	Actores armados y violencia sexual en conflictos _____	185
Mapa 1.2.	Número de personas desplazadas internas en 2014 _____	34	Cuadro 4.2.	La crisis de refugio en Europa desde una perspectiva de género _	189
Tabla 1.2.	Embargos de armas de la ONU, UE, OSCE y la Liga Árabe en 2015 _	37	Cuadro 4.3.	Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿suficientes para la igualdad de género? _____	197
Mapa. 2.1.	Tensiones _____	86	Mapa 5.1.	Oportunidades de paz para 2016 _	199
Tabla 2.1.	Resumen de las tensiones en 2015 .	88	Mapa 6.1.	Escenarios de riesgo para 2016 ____	211
Gráfico 2.1.	Distribución regional del número de tensiones en 2015 _____	94			
Gráfico 2.2.	Intensidad de las tensiones por regiones _____	95			

Prólogo

Martin Griffiths **Director Ejecutivo del European Institute of Peace**

Los conflictos de hoy no pueden ser resueltos con las ideas de ayer. Los conflictos están cambiando. Pero nuestra forma de analizarlos y resolverlos está estancada en el pasado. Necesitamos mediación, diplomacia y prevención de conflictos acorde con el siglo XXI.

Los retos para los mediadores no pueden ser mayores. Los conflictos armados han alcanzado nuevos niveles de complejidad. Nuevas tecnologías dan lugar a la guerra híbrida que pone en cuestión nuestro conocimiento sobre cómo construir la paz. Vemos guerras regionales por delegación en las que los actores estatales y los grupos armados tienen la misma capacidad de utilizar nuevas herramientas de comunicación para objetivos propagandísticos. Actores como ISIS y Al-Qaeda llevan los conflictos más allá del Estado nación. Los movimientos yihadistas no solo desestabilizan Oriente Medio, también cambian los discursos en todo el mundo. ¿Están mediadores y constructores de paz preparados para resolver estos conflictos?

Este informe es otro recordatorio de por qué mediadores y constructores de paz necesitan reinventar sus enfoques. La lista de “oportunidades de paz” es relativamente corta. Los procesos de paz en Chipre, Burkina Faso, Myanmar y Tailandia se están convirtiendo lentamente en historias de éxito. Por supuesto que deberíamos estar orgullosos de este avance. Años –en algunas ocasiones incluso décadas– de trabajo duro y negociaciones difíciles han transformado estos países y creado sociedades más pacíficas. Sin embargo, también debemos reconocer que se trata solo de unos pocos casos. La lista de conflictos en curso y disputas sin resolver se va alargando y convirtiendo en más compleja. En Siria, Libia o Yemen vemos guerras brutales que representan retos enormes para los mediadores y constructores de paz.

Un nuevo papel para Europa

Resolver estos nuevos conflictos es un reto y una oportunidad para Europa. Como director del recientemente creado European Institute of Peace (EIP), trabajo duro para asegurar que extraemos las conclusiones correctas de lo que sucedió el año pasado. 2015 fue un año especial. Permitted a Europa vislumbrar los terribles costes de los conflictos. Los vimos en el dolor y las necesidades humanas de las personas refugiadas

huyendo del conflicto, lo vimos en la implicación de ciudadanos europeos en el terror que está destruyendo Oriente Medio y vimos varios atentados terroristas en ciudades europeas.

Finalmente, afrontamos la verdad brutal de que la guerra no tiene fronteras. Lo que sucede en una parte del mundo tiene implicaciones en otras partes del planeta. Ya no se da el caso de que Europa pueda jugar el juego de mirar más allá de sus fronteras serenas y prósperas para compartir el regalo de la paz y el desarrollo con los más desafortunados. Por el contrario, los europeos deben reconocer que son parte del problema y que se están convirtiendo cada vez más en el escenario.

Debemos utilizar las lecciones de la historia de Europa. Una historia de guerra y paz. Una historia de reconciliación, inclusión y visión. Europa puede ofrecer una “nueva manera” de resolver conflictos. Pero esto requiere voluntad política –y creatividad para pensar más allá de los moldes tradicionales–. Debemos reinventar cómo construir paz en el siglo XXI. Debemos mejorar en prevención de conflictos. Debemos incrementar la calidad de la mediación. Y necesitamos reinventar la diplomacia.

Mediación y construcción de paz

Nunca como ahora la construcción de la paz ha sido tan importante. Nunca ha estado tan examinada, escrutada y discutida. Sin embargo, nosotros –la comunidad de constructores de paz y mediadores– hemos sido incapaces de responder a las angustiadas peticiones de la población en conflicto en todo el mundo. Por supuesto que ningún proceso de paz es una operación perfectamente diseñada. Los procesos de paz están basados en acuerdos y los mediadores les dan forma con destreza. Sin embargo, como este informe muestra, muchos procesos fallan en construir paz. Comprender las razones del fracaso es un paso crucial para hacer que la mediación y la construcción de la paz sean más efectivas.

Aquellos suficientemente privilegiados para dedicar su tiempo a mediar soluciones a los conflictos son un grupo pequeño, en su mayoría hombres y en su mayoría del norte. Esto no resta nada a su compromiso y pasión por la paz. Pero es un grupo privilegiado. En las dos últimas décadas la mediación se ha llevado a la arena pública. Ya no es más, como lo fue durante siglos, el dominio del mundo oficial. Actualmente es una comunidad de actores

Europa puede ofrecer una “nueva manera” de resolver conflictos. Pero esto requiere voluntad política –y creatividad para pensar más allá de los moldes tradicionales–. Debemos reinventar cómo construir paz en el siglo XXI

de diferentes organismos –algunos privados, algunos públicos–. Quedan pocas dudas de que esta apertura de puertas, esta “desregulación” ha representado en general un desarrollo positivo. Las partes en conflicto pueden elegir entre mediadores. Los organismos estado-céntricos ya no dominan. Pero se necesitan avances considerablemente mayores.

La mediación todavía opera bajo un modelo antiguo de dos partes reuniéndose en una habitación elegante en un tercer país bajo los auspicios de una tercera parte desinteresada para alcanzar un acuerdo escrito, finalizado con un apretón de manos. ¿Así se construye la paz realmente? Para la mayoría de familias en Siria la cuestión no es si Bashar al-Assad será Presidente o no (lo que es central para el proceso diplomático) sino si podrán comer mañana y si sus hijos podrán ir al colegio. Parar la guerra y construir la paz son dos cuestiones separadas aunque interconectadas.

La ausencia de violencia no es la paz. La paz sostenible es la condición que se genera por un gobierno que rinde cuentas, sistemas que aseguran el estado de derecho, que no haya arrestos o ejecuciones arbitrarias, una economía justa y un futuro para las generaciones futuras. El papel de los mediadores en este proceso es plantar las semillas para la paz sostenible. Demasiado a menudo, los mediadores dejan la responsabilidad de la paz sostenible en quienes hacen las guerras. Pero las personas que se ponen de acuerdo para poner fin a una guerra no son necesariamente las mismas personas que pueden imaginar y crear una sociedad justa. Los acuerdos de paz deberían ser marcos para las acciones de aquellos que realmente crean sociedades pacíficas y justas. En otras palabras, no deberíamos cometer el error de confundir acuerdos de paz con arreglos de conflictos.

Los mediadores saben bien que deben escuchar cuidadosamente a los constructores de paz. Durante las negociaciones hay a menudo observadores (generalmente a una buena distancia) que pueden generar desequilibrios peligrosos. Su insistencia en la paz todavía sigue ausente en los cálculos durante las negociaciones. Los mediadores pueden plantar las semillas para la paz, los constructores de paz son los guardianes de una sociedad pacífica sostenible.

Calidad y rendición de cuentas en la mediación

Resolver los conflictos en el siglo XXI también requiere que repensemos nuestras ideas sobre la rendición de cuentas, la transparencia y la democracia. A lo largo del tiempo, muchas profesiones –derecho, medicina, enseñanza– han evolucionado desde órganos informales de conocimiento y capacidades traspasadas entre quienes las ejercen hacia la profesionalidad reconocida. Para que la mediación sea más efectiva necesitamos invertir tiempo y energía para desarrollar un conocimiento común de las reglas y estándares formales e informales en la mediación. Pero la profesionalización de nuestra mediación debe ir

de la mano de un debate sobre la rendición de cuentas y la calidad. ¿Cómo podemos abrir la mediación?

El reto es nada menos que la democratización del establecimiento de la paz, la irrevocable inclusión de la voz pública en las cámaras de los diplomáticos que nos representan. Necesitamos animar a nuestros líderes a que abran las puertas a la ciudadanía cuyo deseo más hondo y profundo es la paz.

Por ejemplo, podríamos hacer que las negociaciones de paz se abrieran a la participación virtual. Evitar el secretismo siempre que sea posible. Quienes están involucrados en negociaciones difíciles siempre argumentarán a favor de un espacio confidencial que les permitan examinar concesiones antes de que puedan ser evaluadas públicamente. Esto es razonable. Pero también es razonable que sea de interés público el producto de la diplomacia y la claridad sobre quién está promoviendo qué posiciones y por qué. La ciudadanía tiene el derecho de saber. Actualmente tenemos las herramientas online que nos permiten hacer las negociaciones más accesibles y participativas. No es solo un paso hacia una mayor democracia, también es un paso hacia una mayor efectividad.

Transparencia y diplomacia

Cambiar la forma en que pensamos sobre cómo construir paz también está relacionado con la naturaleza de la política exterior y la diplomacia. Durante mucho tiempo la rendición de cuentas y la transparencia no formaron parte de nuestros discursos de política exterior. La diplomacia es un arte refinado durante generaciones y de incalculable valor. Es el lubricante que permite que se llegue a acuerdos entre oponentes. Es el arte sutil del acuerdo. La diplomacia siempre ha sido un deporte de élite. Los diplomáticos normalmente se parecen más entre ellos en vez de ser representativos de sus conciudadanos y conciudadanas. Y esto continúa en las negociaciones de paz. Una cosa en la que muchas partes en conflicto pueden ponerse de acuerdo rápidamente es en la necesidad de mantener a las personas ordinarias fuera de la habitación.

Los diplomáticos comparten una visión del mundo no explícita por la que las diferencias serias se gestionan mejor por quienes saben hablarse entre sí, por quienes comparten un lenguaje común. Pero esto está cambiando. La sociedad quiere saber qué se hace en su nombre. La población quiere una voz en la política exterior. Quiere ser escuchada. Y no puede tener más razón. Reinventar la diplomacia significa incluir a los excluidos –y desarrollar plataformas participativas necesarias para abrir el establecimiento de la paz al público–.

Establecer la paz es demasiado importante para dejarlo en manos de pocos. Debe convertirse en la responsabilidad de muchos. Solo si logramos incrementar la apropiación de los procesos de paz tendremos la posibilidad de resolver los conflictos del siglo XXI.

Resumen ejecutivo

Alerta 2016! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de cuatro ejes: conflictos armados, tensiones, procesos de paz y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2015 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

En cuanto a la metodología, los contenidos de este informe se nutren principalmente del análisis cualitativo de estudios e informaciones facilitados por numerosas fuentes –Naciones Unidas, organismos internacionales, centros de investigación, medios de comunicación u ONG, entre otras–, así como de la experiencia adquirida en investigaciones sobre el terreno.

Algunas de las conclusiones e informaciones más relevantes que contiene el informe son las siguientes:

- Durante el año 2015 se registraron 35 conflictos armados, la mayoría en África (13) y Asia (12), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).
- A lo largo de 2015 se contabilizaron dos nuevos conflictos armados: Burundi, a causa de la escalada de la inestabilidad y la violencia política en el país, en un clima marcado por las movilizaciones populares, represión a la disidencia y un intento de golpe de Estado; y Filipinas (Mindanao-BIFF), como consecuencia de una intensificación de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado BIFF.
- Al finalizar 2015 solo estaban activos 34 de los 35 casos, ya que la situación en India (Assam) dejó de ser considerada como un conflicto armado activo ante el descenso de la violencia, siguiendo un patrón de reducción de las hostilidades en los últimos años.
- 11 conflictos armados registraron una intensidad elevada durante el año, con un balance en algunos casos muy por sobre del umbral de mil víctimas mortales anuales: Libia, Nigeria (Boko Haram), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Pakistán, Ucrania, Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).
- En 2015 una gran parte de los contextos de conflicto (43%) registraron dinámicas y niveles de violencia similares a los del año anterior, mientras que en casi un tercio se observó un descenso en los niveles de confrontación, incluyendo el caso de India (Assam) que dejó de ser considerado conflicto armado. En otra tercera parte de los casos se observó un agravamiento de la situación, fruto de la intensificación de las hostilidades y los niveles de violencia. Cabe destacar que esta evolución negativa fue menor a la registrada en 2014.
- Más allá de su naturaleza multidimensional, dos tercios de los conflictos armados en 2015 (24 casos, equivalentes a un 69%) tuvieron entre sus causas principales la oposición al Gobierno –ya sea a sus políticas internas o internacionales– y la lucha por acceder o erosionar el poder, o bien la oposición al sistema político, social o ideológico del Estado. Más de la mitad (19 casos, un 54%) tuvieron entre sus motivaciones de fondo demandas de autodeterminación o autogobierno y aspiraciones identitarias.
- Durante 2015, los conflictos armados a nivel global continuaron provocando un grave impacto en la población civil. Tal y como se detalla en el análisis de casos de cada uno de los contextos, las consecuencias no se limitan a las víctimas mortales en el marco de los combates, sino que incluyen masacres y ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, torturas y otros múltiples abusos físicos y psicológicos, desplazamientos forzados de población, uso de la violencia sexual, reclutamiento de menores y otros múltiples abusos contra niños y niñas, entre otras dinámicas.
- Respecto al uso de la violencia sexual en contextos de conflicto armado, durante 2015 se constató su utilización deliberada como arma de guerra por parte de actores armados en países como Iraq, Malí, RCA, RDC, Siria, Somalia, Sudán y Sudán del Sur.
- El desplazamiento forzado de población fue una de las consecuencias más notorias de los conflictos armados en 2015, período en que se confirmó la tendencia observada en años previos respecto a un significativo aumento en el número de personas refugiadas y desplazadas internas a nivel global.
- El balance de ACNUR a finales de 2015, basado en los datos correspondientes al primer semestre del año, destaca que la cifra total de personas desplazadas y refugiadas ascendería a los 60 millones de personas.
- Al finalizar el año 2015 se contabilizaron 37 embargos de armas dirigidos contra un total de 24 Estados y grupos armados no estatales, aplicados por parte de la ONU, la UE, la Liga Árabe y la OSCE, uno más que el año anterior por la inclusión de Yemen.

- Durante 2015 se registraron 20 conflictos armados y 52 situaciones de tensión activas en las que ni la ONU ni otras organizaciones regionales establecieron embargos de armas.
- Durante 2015 se registraron 83 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (36) y Asia (20), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron en Europa (11), Oriente Medio (11) y América (cinco).
- Las tensiones de mayor gravedad en 2015 fueron África Central (LRA), Camerún, Chad, Kenya, Níger, Nigeria, Túnez, Bangladesh, Corea RPD-Rep. de Corea, Filipinas (Mindanao), India (Manipur), India-Pakistán, Pakistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Rusia (Kabardino-Balkaria), Egipto, Israel-Siria-Líbano, y Líbano.
- En consonancia con años anteriores, más de la mitad de las tensiones tuvieron carácter interno (43 casos), más de una cuarta parte fueron tensiones internas internacionalizadas (22 casos) y una quinta parte fueron internacionales (18 casos).
- En cuanto a la evolución de las tensiones, dos quintas partes (34 casos) registraron un deterioro de la situación respecto a 2014, mientras un tercio (29 casos) no experimentaron cambios significativos y en una cuarta parte se produjo una cierta mejoría (20 casos).
- En línea con los datos de años precedentes, el 67% de las tensiones tuvieron entre sus diversas causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos –lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder– o la oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados.
- Durante el año se resolvieron satisfactoriamente cuatro negociaciones de paz: RCA, Sudán (Darfur) SLM-MM, Malí (CMA-Plataforma) y Sudán del Sur.
- En tres conflictos se produjeron exploraciones con el objetivo de abrir un proceso de negociación formal: Colombia (ELN), Pakistán (Baluchistán) y Siria.
- Un 17,9% de las negociaciones funcionaron bien o fueron resueltas (siete casos), un 30,7% tuvieron dificultades significativas (12 casos) y un 43,6% fracasaron (17).
- El 70% de los conflictos armados activos durante 2015 para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con graves o muy graves desigualdades de género.
- La crisis de refugio en la UE estuvo marcada por la dimensión de género y evidenció graves violaciones a los derechos humanos de la población que huye de las guerras.
- Durante 2015 se llevó a cabo una revisión de alto nivel de los 15 años de implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad.
- Las negociaciones de paz en Colombia, Chipre y Afganistán evidenciaron la importancia de la dimensión de género en los procesos de paz.
- El informe identifica cinco oportunidades de paz para 2016: el reinicio de las negociaciones de paz en Chipre; la nueva etapa política en Burkina Faso tras concluir el proceso de transición; la exploración de escenarios de paz en Tailandia; el proceso de transición hacia la democracia y la paz en Myanmar; y el positivo impacto de la introducción de la perspectiva de género en los procesos de paz en términos de inclusividad y sostenibilidad.
- El informe destaca otros 10 escenarios de alerta de cara al 2016: el incremento de la violencia y la inestabilidad en Burundi, situando al país al borde de la guerra civil; el riesgo para la estabilidad en Malí que suponen las actividades de grupos yihadistas; las perspectivas de incremento de la violencia y la convulsión política en RDC; la fragilidad del acuerdo de paz en Sudán y los riesgos para su implementación; la polarización de poderes en el nuevo escenario político en Venezuela; el impacto de la falta de legitimidad del liderazgo talibán en el proceso de paz de Afganistán; las dificultades del proceso de paz en Mindanao; los riesgos de una deriva mayor en el conflicto entre Turquía y el PKK; el grave deterioro de la situación en Yemen tras la intensificación de las dinámicas de violencia en el país; y los efectos desestabilizadores de la amenaza yihadista a nivel internacional.

Estructura

El informe consta de seis capítulos. En los dos primeros se analiza la conflictividad a escala global – causas, tipología, dinámicas, evolución y actores de las situaciones de conflicto armado o de tensión. El tercer capítulo aborda los procesos de paz mientras que el cuarto analiza las diversas iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. El quinto capítulo identifica oportunidades de paz, escenarios en los que existe una coyuntura favorable para la resolución de conflictos o para el avance o consolidación de iniciativas de paz durante el año entrante. El último capítulo analiza escenarios de riesgo de cara al futuro. Además de los seis capítulos, el informe también incluye un mapa desplegable en el que se identifican los escenarios de conflicto armado, tensión sociopolítica y procesos de negociación; los embargos de armas decretados por los principales organismos internacionales y el número y la localización de las personas desplazadas por situaciones de violencia.

Conflictos armados

En el primer capítulo (**Conflictos armados**)¹ se describe la evolución, la tipología, las causas y las dinámicas de los conflictos armados activos durante el año, se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados en 2015 y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional, como los embargos de armas y las misiones internacionales.

Durante el año 2015 la cifra de conflictos armados siguió la tendencia de años anteriores, con un total de 35 casos (36 en 2014, 35 en 2013, 38 en 2012).

A lo largo del año se contabilizaron dos nuevos casos: Burundi, a causa de la escalada de la inestabilidad y la violencia política en el país, en un clima marcado por las movilizaciones populares, represión a la disidencia y un intento de golpe de Estado; y Filipinas (Mindanao-BIFF), como consecuencia de una intensificación de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado BIFF, que en los últimos años ha sido muy activo en la oposición al proceso de paz entre el Gobierno filipino y el MILF. Al finalizar 2015 solo estaban activos 34 de los 35 casos, ya que la situación en India (Assam) dejó de ser considerada como un conflicto armado activo ante el descenso de la violencia, siguiendo un patrón de reducción de las hostilidades en los últimos años.

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, la mayor parte se concentraron en África (13)

Durante el año 2015 se registraron 35 conflictos armados, 34 de los cuales seguían activos al finalizar el año

y Asia (12), en línea con años anteriores. Del resto de casos seis tuvieron lugar en Oriente Medio, tres en Europa y uno en América (Colombia). En lo referente al escenario del conflicto y los actores involucrados, cabe destacar que en 2015 solo uno de los contextos fue catalogado como un conflicto armado internacional –Israel-Palestina–, otros ocho tuvieron un carácter eminentemente interno, y **la gran mayoría fueron internos internacionalizados (26 de los 35 casos, equivalentes a un 74%)**.

Por otra parte, el factor de internacionalización también estuvo determinado por la acción de diversos grupos armados más allá de las fronteras estatales de sus países de origen. Este aspecto fue especialmente paradigmático en el caso de grupos como Boko Haram –que traspasó las fronteras de Nigeria para actuar en Chad, Níger y Camerún, en respuesta a la participación de estos países en una fuerza multinacional regional destinada a combatir al grupo armado–, o de ISIS, que continuó operando y controlando territorios en Siria e Iraq y reivindicando acciones

más allá de estos países, en su mayoría perpetradas por filiales que en los últimos años han declarado su lealtad a la organización, sin que exista claridad sobre el nivel de cooperación entre la organización liderada por Abu Bakr al Baghdadi y estas facciones. En todo caso, cabe tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una dimensión internacional o influencia regional vinculada a factores como los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, la participación de

Conflictos armados en 2015*

ÁFRICA (13)	ASIA (12)	ORIENTE MEDIO (6)
Argelia (AQMI) -1992-	Afganistán -2001-	Egipto (Sinaí) -2014-
Burundi -2015-	China (Turquestán Oriental) -2014-	Iraq -2003-
Etiopía (Ogadén) -2007-	Filipinas (NPA) -1969-	Israel-Palestina -2000-
Libia -2011-	Filipinas (Mindanao-Abu Sayyaf) -1991-	Siria -2011-
Malí (norte) -2012-	Filipinas (Mindanao-BIFF) -2015-	Yemen (al-houthistas) -2004-
Nigeria (Boko Haram) - 2011-	<i>India (Assam) -1983-</i>	Yemen (AQPA) - 2011-
RCA -2006-	India (Jammu y Cachemira) -1989-	
RDC (este) -1998-	India (CPI-M) -1967-	EUROPA (3)
RDC (este-ADF) -2014-	Myanmar -1948-	Rusia (Daguestán) -2010-
Somalia -1988-	Pakistán -2001-	Turquía (sudeste) -1984-
Sudán (Darfur) -2003-	Pakistán (Baluchistán) -2005-	Ucrania -2014-
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Tailandia (sur) -2004-	
Sudán del Sur -2009-		AMÉRICA (1)
		Colombia -1964-

*Se incluye entre guiones la fecha de inicio del conflicto armado. En cursiva, los conflictos finalizados durante 2015.

- En este informe, se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:
 - demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
 - la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
 - o al control de los recursos o del territorio.

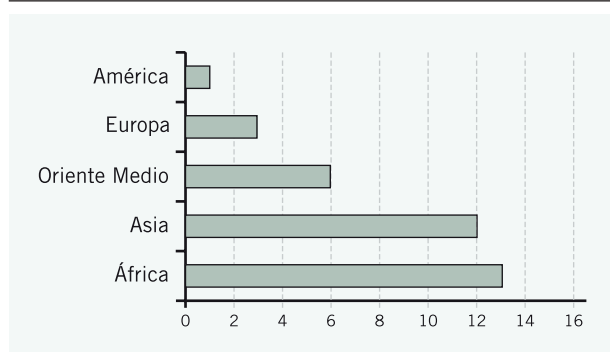
combatientes extranjeros, el apoyo logístico o militar proporcionado por otros Estados a alguno de los bandos en pugna o a los intereses políticos o económicos de países vecinos al conflicto armado, por ejemplo, en lo referido a la explotación legal e ilegal de recursos.

Dos tercios de los conflictos armados en 2015 (24 casos) tuvieron entre sus causas principales la oposición al Gobierno –ya sea a sus políticas internas o internacionales– y la lucha por acceder o erosionar el poder, o bien la oposición al sistema político, social o ideológico del Estado. De este subtotal, el factor de oposición al Gobierno estuvo presente en 10 casos y fue una motivación especialmente destacada en conflictos armados que tuvieron lugar en África. Del subtotal de casos previamente mencionado (24), un total de 19 estuvieron relacionados con la búsqueda de un cambio de sistema político, ideológico o económico del Estado. Entre ellos, cabe distinguir los casos que implican a actores armados movilizados por una agenda ideológica de inspiración socialista –como por ejemplo las FARC-EP y el ELN en Colombia, el CPI-M en India, o el NPA en Filipinas– y aquellos en los que participan grupos insurgentes con una agenda que pretende aplicar su particular interpretación de los preceptos islámicos, como AQMI en Argelia, Abu Sayyaf en Filipinas, al-Shabaab en Somalia, las milicias talibán en Afganistán y Pakistán, la insurgencia en la república rusa de Daguestán en la Federación de Rusia, o ISIS en Iraq, Siria y los distintos grupos armados que le han declarado fidelidad.

Del total de 35 conflictos armados en 2015, más de la mitad (19) tuvieron entre sus motivaciones de fondo demandas de autodeterminación o autogobierno y aspiraciones identitarias. Como en años previos, este tipo de contextos tuvieron una especial prevalencia en Asia y en Europa. Cabe destacar que, en algunos casos, actores con agendas identitarias o de autogobierno convivían con otras organizaciones con demandas más enfocadas hacia un cambio de sistema –como en el caso de Malí (norte)– o ambas motivaciones estaban presentes en las aspiraciones de los actores armados no estatales implicados en la disputa, como en el caso de Abu Sayyaf en la región de Mindanao, en Filipinas, o en el de las organizaciones que operan en el Turquestán Oriental, en China.

En lo que respecta a la evolución de los conflictos armados en 2015, una gran parte de los casos (15 contextos, equivalentes a un 43%) registraron dinámicas y niveles de violencia similares a los del año anterior, mientras que en casi un tercio de los contextos (nueve, que representan un 26%) se observó un descenso en los niveles de confrontación, incluyendo el caso de India (Assam) que dejó de ser considerado conflicto armado. En otra tercera parte de los casos (11, que suponen 31% del total) se observó un agravamiento de la situación, fruto de la intensificación de las hostilidades y los niveles de violencia. Cabe destacar que esta evolución negativa fue menor a la registrada en

Distribución regional del número de conflictos armados en 2015



2014, año en que la mayoría de los casos de conflictos armados a nivel global (55%) presentaron un deterioro. Sin embargo, esta afirmación general no es válida para todas las regiones. En 2015, en Oriente Medio la gran mayoría de los casos empeoraron respecto al año anterior y algunos de los casos que se agravaron en otras regiones lo hicieron de manera significativa, como Burundi en África; Afganistán en Asia –que durante 2015 presentó los peores niveles de violencia desde 2001–; o Turquía (sudeste) en Europa –con una reactivación de las dinámicas de guerra entre el Gobierno turco y el PKK con graves impactos en la población–.

Casi un tercio de los conflictos armados en 2015 fueron de alta intensidad

En materia de intensidad de los conflictos armados, la mayor parte fueron considerados de baja intensidad (14 o 40%) y casi un tercio de los casos (diez contextos o 29%) presentaron una intensidad media, mientras que el balance de contextos graves fue similar al de 2014 –11 casos, equivalentes a un 31% en 2015 (33% en 2014)–. Los conflictos de intensidad elevada de 2015 fueron Libia, Nigeria (Boko Haram), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Pakistán, Ucrania, Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). En muchos de estos casos los niveles de letalidad estuvieron muy por sobre las mil víctimas mortales anuales

Durante 2015, los conflictos armados a nivel global continuaron provocando destrucción, sufrimiento y un gravísimo impacto en la población civil.

Tal y como se detalla en el análisis de casos de cada uno de los contextos, las consecuencias de esta conflictividad armada no se limitan a las víctimas mortales en el marco de los combates entre fuerzas armadas estatales y grupos armados insurgentes o producto de actos de violencia indiscriminados, con impactos devastadores en los civiles en numerosos conflictos. Las consecuencias también incluyeron masacres y ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, torturas y otros múltiples abusos físicos y psicológicos, desplazamiento forzado de población, uso de la violencia sexual, reclutamiento de menores y otros múltiples abusos contra niños y niñas, entre otras dinámicas. Respecto al uso de la violencia sexual en contextos de conflicto armado, durante 2015 se constató su utilización deliberada como arma de

guerra por parte de actores armados en países como Iraq, Malí, RCA, RDC, Siria, Somalia, Sudán y Sudán del Sur.

En cuanto al impacto de los conflictos armados en las y los menores de edad, cabe destacar que esta dimensión continuó siendo motivo de gran preocupación. Durante 2015 el secretario general de la ONU alertó sobre las dificultades sin precedentes para la protección de menores en contextos de conflicto y subrayó las gravísimas violaciones a las que se vieron expuestos niños y niñas en grandes crisis como Iraq, Israel-Palestina, Nigeria, Siria, RCA y Sudán del Sur, así como en conflictos prolongados como Afganistán, RDC y Somalia, y otros conflictos más recientes como Yemen.

Durante 2015 se confirmó la tendencia observada en años previos respecto a un significativo aumento en el número de personas refugiadas y desplazadas internas a nivel global

El desplazamiento forzado de población fue una de las consecuencias más notorias de los conflictos armados en 2015, período en que se confirmó la tendencia observada en años previos respecto a un significativo aumento en el número de personas refugiadas y desplazadas internas a nivel global. Según los datos publicados por ACNUR a finales de año –que arrojan un balance parcial de la situación basándose en los datos correspondientes al primer semestre del año–, en 2015 la cifra total de personas desplazadas dentro y fuera de las fronteras de sus países a causa de conflictos armados, situaciones de violencia y persecución superaría, por

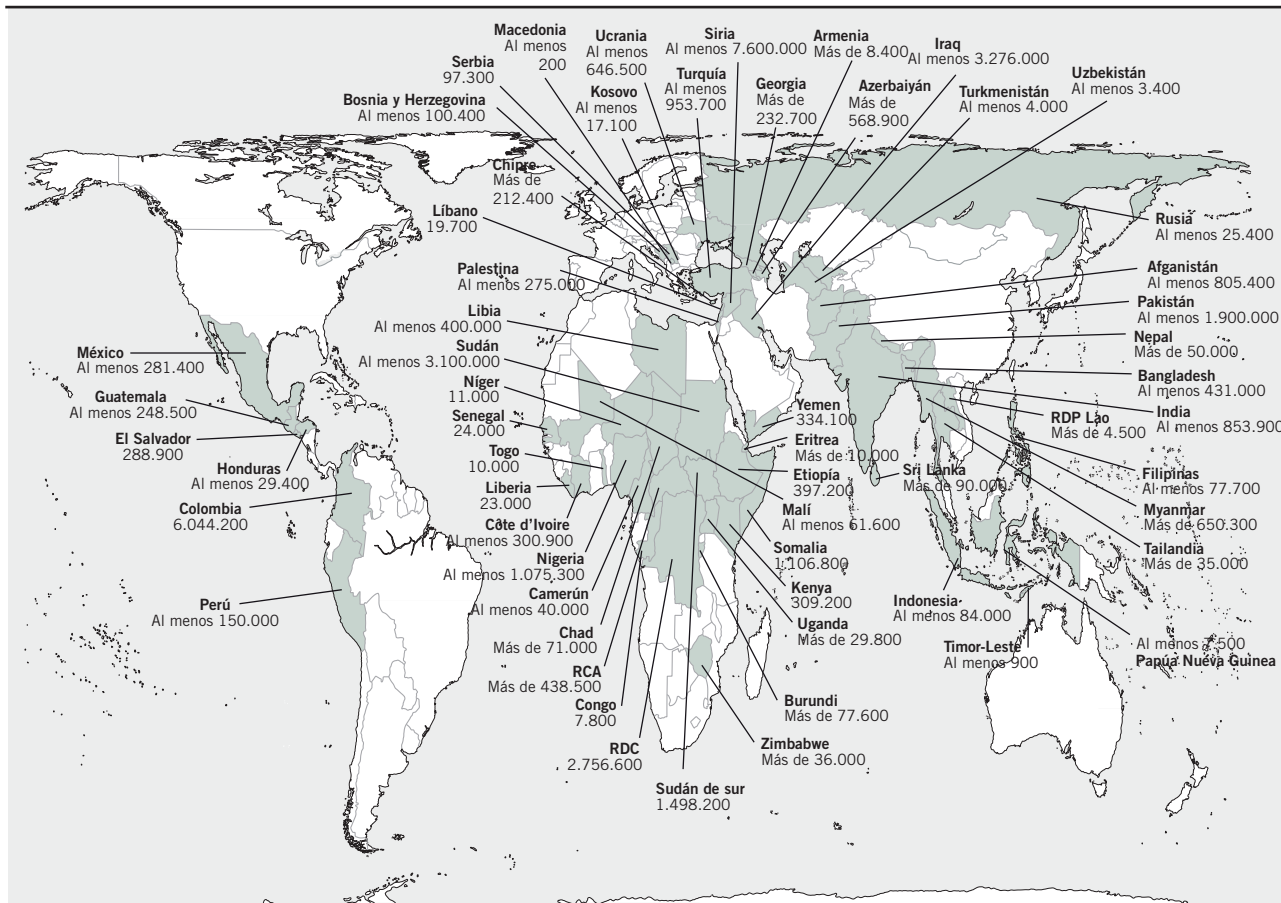
primera vez desde que se registran datos, los 60 millones de personas. Esto implica que una de cada 122 personas en el mundo ha tenido que abandonar sus hogares a causa de situaciones de conflicto y violencia. Si a finales de 2014 se contabilizaban 59,5 millones de personas en esta

situación, durante los primeros seis meses de 2015 la agencia de Naciones Unidas había identificado nuevos desplazamientos forzados de casi cinco millones de personas, la mayor parte de carácter interno. El número total de personas refugiadas en el mundo, que a finales de 2014 ascendía a 19,5 millones de personas, a mediados de 2015 había superado el umbral de los 20 millones por primera vez desde 1992.

El primer país emisor de población refugiada, y principal causante del abrupto ascenso en las cifras de desplazamiento forzado a nivel global en los últimos años, fue Siria, aunque el estallido o empeoramiento de otros conflictos armados como Afganistán, Burundi, RDC, Malí, Somalia, Sudán del Sur y Ucrania también contribuyeron a esa tendencia.

El informe también analiza dos de los principales instrumentos de los que dispone la comunidad internacional para intentar hacer frente a las amenazas a la paz y la seguridad: los embargos de armas y las misiones internacionales. En cuanto a los embargos, que constituyen una

Número de personas desplazadas internas en 2014



Fuente: IDMC, *Global Overview 2015: People internally displaced by conflict and violence*, IDMC, mayo de 2015.

Embargos de armas de la ONU, UE, OSCE y la Liga Árabe en 2015

País*	Entrada en vigor	País	Entrada en vigor
Embargos decretados por Naciones Unidas (14)		Embargos decretados por la UE (22)	
Al-Qaeda y entidades e individuos asociados, milicias talibán**	2002	Al-Qaeda y milicias talibán**	2002
Corea, RPD	2006	Belarús	2011
Côte d'Ivoire	2004	China	1989
Eritrea	2009	Corea, RPD	2006
Irán	2006	Côte d'Ivoire	2004
Iraq (FNG*** desde 2004)	1990	Egipto	2013
Líbano (FNG)	2006	Eritrea	2010
Liberia (FNG desde 2009)	1992	Irán	2007
Libia	2011	Iraq (FNG desde 2004)	1990
RCA	2013	Líbano (FNG)	2006
RDC (FNG desde 2008)	2003	Liberia (FNG desde 2008)	2001
Somalia (FNG desde 2007)	1992	Libia	2011
Sudán (Darfur) (FNG)	2004	Myanmar	1991
Yemen (FNG)	2015	RCA	2013
		RDC (FNG desde 2003)	1993
Embargos decretados por la Liga Árabe (1)		Rusia****	2014
Siria	2011	Siria	2011
		Somalia	2002
Embargos decretados por la OSCE (1)		Sudán	1994
Armenia - Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	1992	Sudán del Sur	2011
		Yemen (FNG)	2015
		Zimbabwe	2002

* En negrita, país o grupo en conflicto armado sujeto a embargo.

**Embargo no ligado a un país o territorio en concreto.

*** FNG: Fuerzas No Gubernamentales.

**** En el caso de Rusia el embargo es relativo a la cuestión de Crimea y no a los conflictos que afectan el Cáucaso Norte.

Fuente: Elaboración propia a partir de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), <http://www.sipri.org/databases/embargoes> y European Commission, http://eeas.europa.eu/cfsp/index_en.htm.

de las principales medidas coercitivas contempladas en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, al finalizar el año 2015 se contabilizaron 37 embargos de armas dirigidos contra un total de 24 Estados y grupos armados no estatales, uno más que el año anterior por la inclusión de Yemen. Cabe señalar que 13 de los 22 embargos establecidos por la UE respondían a la implementación de los embargos del Consejo de Seguridad de la ONU. Los nueve restantes correspondían a iniciativas europeas: Belarús, China, Egipto, Myanmar, Rusia, Siria, Sudán, Sudán del Sur y Zimbabwe.

De los 24 Estados y grupos armados no estatales señalados por la ONU, la UE, la Liga Árabe y la OSCE, 12 hacían referencia a actores de conflictos armados activos a finales de 2015 (China, Egipto, Libia, Myanmar, RCA, Siria, Sudán y Sudán del Sur y grupos armados en Iraq, Somalia, RDC y Yemen –en el caso de Sudán y RDC, afectan a los dos conflictos que padecen cada uno de estos países–), es decir, 12 embargos que afectan a 14 situaciones de conflicto armado. Cabría añadir el embargo que pesa sobre al-Qaeda y las milicias

A finales de 2015 se contabilizaron 37 embargos de armas dirigidos contra un total de 24 Estados y grupos armados no estatales por parte de la ONU y otras organizaciones regionales

talibán, pero aunque gran parte de ambas organizaciones tienen sus bases y operan en Afganistán y Pakistán, el embargo de armas no corresponde a ningún territorio en concreto, según señala la resolución 1390.

De los otros 12 Estados sobre los que pesan embargos, 10 tenían como objetivo países que son escenario de tensión de intensidad variable (Armenia-Azerbaiyán, Côte d'Ivoire, Eritrea, Irán, Líbano, RPD Corea, Rusia, Sudán y Zimbabwe –la mayoría de estos países padecen diversos escenarios de tensión a la vez, que se ven

afectados por un mismo embargo–). En conclusión, de los 35 conflictos armados activos a finales de 2015, existían 21 casos en los que ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni la UE, ni la Liga Árabe ni la OSCE plantearon el establecimiento de un embargo de armas como medida sancionadora. Además, de las 83 situaciones de crisis sociopolíticas identificadas en el año 2015, **existían 52 situaciones de tensión que tampoco fueron objeto de embargos**. Ello, pese a que en muchos casos, el carácter preventivo de la medida podría incidir en una reducción de la violencia.

Tensiones

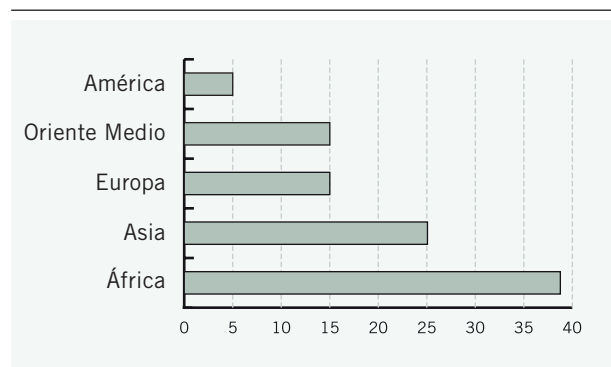
En el segundo capítulo (**Tensiones**)² se analizan la naturaleza y los acontecimientos más relevantes referidos a las tensiones sociopolíticas registradas durante el año y se realiza una mirada comparativa de las tendencias globales y regionales. Durante 2015 se identificaron 83 escenarios de tensión a nivel mundial. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas tuvo lugar en África, con 36 casos (44%), seguida de Asia, donde se registraron 20 casos (24%). Oriente Medio y Europa fueron escenario de 11 casos de tensión cada una (13% en ambos casos), mientras que en América se identificaron cinco (6%).

Cabe destacar la identificación de seis nuevos escenarios de tensión. Entre ellos, Camerún, por las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram en suelo camerunés, con más de dos centenares de víctimas mortales, incluyendo numerosos civiles; Lesotho, por la crisis política en 2015 y las pugnas entre sectores del Ejército tras las elecciones generales de febrero; y México, por el incremento en los últimos años de la crisis en seguridad humana y violencias múltiples, incluyendo la represión contra sectores opositores políticos y sociales (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos y estudiantes, entre otros). Además, los casos de África Central (LRA), India (Manipur) y Rusia (Kabardino-Balkaria), que en años anteriores habían sido considerados conflictos armados, pasaron a considerarse situaciones de tensión por presentar umbrales más reducidos de violencia. Pese a la desescalada, se trata de tres casos que involucran a insurgencias armadas activas. A su vez, varias situaciones de tensión sociopolítica dejaron de considerarse como tales, ante la reducción de la tensión en los últimos años. Por otra parte, dos casos considerados en años anteriores como tensión pasaron a ser calificados como conflictos armados en 2015 debido al incremento de violencia: Burundi y el conflicto entre el Gobierno de Filipinas y el grupo armado BIFF.

Las situaciones de tensión tuvieron causas múltiples, con más de un factor principal en gran parte de los casos. El análisis del panorama de crisis en 2015 permite identificar tendencias en lo referido a sus principales causas o motivaciones. En línea con los datos observados en años precedentes, el 67% de las tensiones tuvieron entre sus diversas causas principales **la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos** –lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder– o la oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados.

2. Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Distribución regional del número de tensiones en 2015



En segundo lugar, cerca de la mitad de las tensiones (49%) tuvieron como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias. En el continente europeo se superó ampliamente esa media (91% de casos). En tercer lugar, cabe destacar que en más de una tercera parte de las tensiones en el mundo (34% o 28 casos) el elemento de disputa por el control de territorio y/o recursos fue un factor especialmente relevante entre las causas principales, con mayor presencia en el continente americano y africano (40% y 39%, respectivamente), si bien se trata de un elemento que alimenta de manera directa o indirecta, y en grados diversos, numerosas situaciones de tensión.

En consonancia con años anteriores, algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron carácter interno (43 casos o un 52%), más de una cuarta parte fueron tensiones internas internacionalizadas (22 casos o 26%) y una quinta parte fueron internacionales (18 casos o 22%). En cuanto a la evolución de las tensiones, dos quintas partes (34 casos) registraron un deterioro de la situación respecto a 2014, mientras un tercio (29 casos) no experimentaron cambios significativos y en cerca de una cuarta parte se produjo una cierta mejoría (20 casos).

En términos de intensidad de las tensiones, durante 2015 cerca de la mitad de las tensiones presentaron una intensidad baja (48% o 40 casos), mientras que casi una tercera parte registró una intensidad media (30% o 25 casos) y algo más de una quinta parte se caracterizó por niveles elevados de inestabilidad y/o violencia (22% o 18 casos). **Las tensiones de mayor gravedad en 2015 fueron África Central (LRA), Camerún, Chad, Kenya, Níger, Nigeria, Túnez, Bangladesh, Corea RPD-Rep. de Corea, Filipinas (Mindanao), India (Manipur), India-Pakistán, Pakistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Rusia (Kabardino-Balkaria), Egipto, Israel-Siria-Líbano y Líbano.**

Resumen de la conflictividad global en 2015

Continente	Conflicto armado			Tensión			TOTAL
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	
África	<i>Libia</i> Nigeria (Boko Haram) Somalia <i>Sudán del Sur</i>	<i>Burundi</i> <i>Malí (norte)</i> <i>RCA</i> <i>RDC (este)</i> RDC (este-ADF) <i>Sudán (Darfur)</i> <i>Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)</i>	Argelia <i>Etiopía (Ogadén)</i>	Africa Central (LRA) Camerún Chad Kenya Níger Nigeria Túnez	Burkina Faso Côte d'Ivoire Eritrea Etiopía Etiopía (Oromiya) Lesotho <i>Mozambique</i> Nigeria (Delta Níger) RDC <i>Sudán</i> <i>Sudán – Sudán del Sur</i>	Angola (Cabinda) Congo Djibouti <i>Eritrea – Etiopía</i> Gambia Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Madagascar <i>Marruecos – Sáhara Occ.</i> Mauritania RDC – Rwanda RDC – Uganda Rwanda <i>Senegal (Casamance)</i> Somalia (Somalilandia-Puntlandia) Uganda Zimbabwe	
SUBTOTAL	4	7	2	7	11	18	49
América			<i>Colombia</i>		Haití Perú Venezuela	Bolivia México	
SUBTOTAL			1		3	2	6
Asia y Pacífico	<i>Afganistán</i> Pakistán <i>Pakistán (Baluchistán)</i>		China (Turquestán Oriental) Filipinas (Mindanao – BIFF) Filipinas (Mindanao – Abu Sayyaf) <i>Filipinas (NPA)</i> <i>India (Assam)*</i> India (Jammu y Cachemira) India (CPI-M) <i>Myanmar</i> <i>Tailandia (sur)</i>	Bangladesh Corea, RPD – Rep. de Corea <i>Filipinas (Mindanao)</i> India (Manipur) <i>India – Pakistán</i> Pakistán	China - Japón Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea <i>India (Nagalandia)</i> <i>Myanmar</i> Nepal Tailandia Tayikistán	China (Tíbet) Indonesia (Aceh) Indonesia (Papúa Occ.) Kirguistán Sri Lanka Tailandia – Camboya Uzbekistán	
SUBTOTAL	3		9	6	7	7	32
Europa	<i>Ucrania</i>	<i>Turquía (sudeste)</i>	Rusia (Daguestán)	<i>Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)</i> Rusia (Kabardino-Balkaria)	Rusia (Chechenia) Rusia (Ingushetia)	Bosnia y Herzegovina <i>Chipre</i> <i>Georgia (Abjasia)</i> <i>Georgia (Osetia del Sur)</i> Macedonia <i>Moldova, Rep. de (Transdnestría)</i> <i>Serbia – Kosovo</i>	
SUBTOTAL	1	1	1	2	2	7	14
Oriente Medio	Egipto (Sinaí) Iraq <i>Siria</i> <i>Yemen (al-houthistas)</i>	Yemen (AQPA)	<i>Israel – Palestina</i>	Egipto Israel – Siria – Líbano Líbano	Arabia Saudita Irán (Sistán) Baluchistán) Yemen (sur)	Bahrein Irán (noroeste) Irán – EEUU, Israel Iraq (Kurdistán) Palestina	
SUBTOTAL	4	1	1	3	3	5	17
TOTAL	12	9	14	18	26	39	118

Se señalan en cursiva los conflictos armados y tensiones con negociaciones de paz, ya sean exploratorias o estén formalizadas. Con asterisco, los conflictos armados finalizados durante 2015.

Además de la letalidad, las situaciones de tensión tuvieron otros impactos graves en seguridad humana. Entre ellos, se produjeron nuevos desplazamientos forzados de población (con casos como Eritrea, de donde huyeron unas 400.000 personas en los últimos años, según la ONU, en un contexto de represión y pobreza; Níger, con cifras de 66.000 personas desplazadas internamente por la violencia de Boko Haram en suelo nigerino; la huida forzada de más de 10.000 personas de la comunidad rohingya, en Myanmar, solo en el primer trimestre de 2015 debido a la violencia contra este grupo). Otros impactos incluyeron secuestros (casos como los más de 400 raptos por parte del grupo armado de origen ugandés LRA en los ocho primeros meses de 2015, con un aumento del 60% con respecto a ese periodo en 2014), desapariciones (Kenya, México, entre otros), ejecuciones (unas 300 en Pakistán a raíz del nuevo plan antiterrorista; una veintena en Kenya) y violencia sexual (como en Haití, uno de los cinco países con más denuncias contra personal de misiones de la ONU por abusos y explotación sexual, según datos de 2015). Hubo también impactos cotidianos como restricciones de libertad de movimientos y militarización del territorio, restricciones o negación del derecho al retorno de población desplazada (como en las regiones de Abjasia y Osetia del Sur en Georgia), represión de derechos humanos y libertades (como en Eritrea o en Etiopía). Resultó especialmente preocupante el impacto de leyes y medidas antiterroristas con efectos indiscriminados, así como la persecución del islam en el espacio público en parte bajo amparo de la llamada lucha global contra el terrorismo, con riesgos de agravar conflictos con dimensión sectaria.

Procesos de paz

En el tercer capítulo (**Procesos de paz**)³ se analiza la situación de 39 contextos de negociación o exploración,

incluyendo un seguimiento de los acuerdos de paz con el MILF y el MNLF (Filipinas), por haber sufrido serias dificultades en su implementación. En los casos de Baluchistán (Pakistán), del grupo armado ELN de Colombia y de Siria se produjeron conversaciones y contactos exploratorios que podrían consolidarse durante el año 2016. En el sexenio 2008-2013, la media de las negociaciones que acabaron mal al terminar el año fue solo del 17,3%. Algunos de los hechos más relevantes del año en relación a los procesos de paz fueron los siguientes:

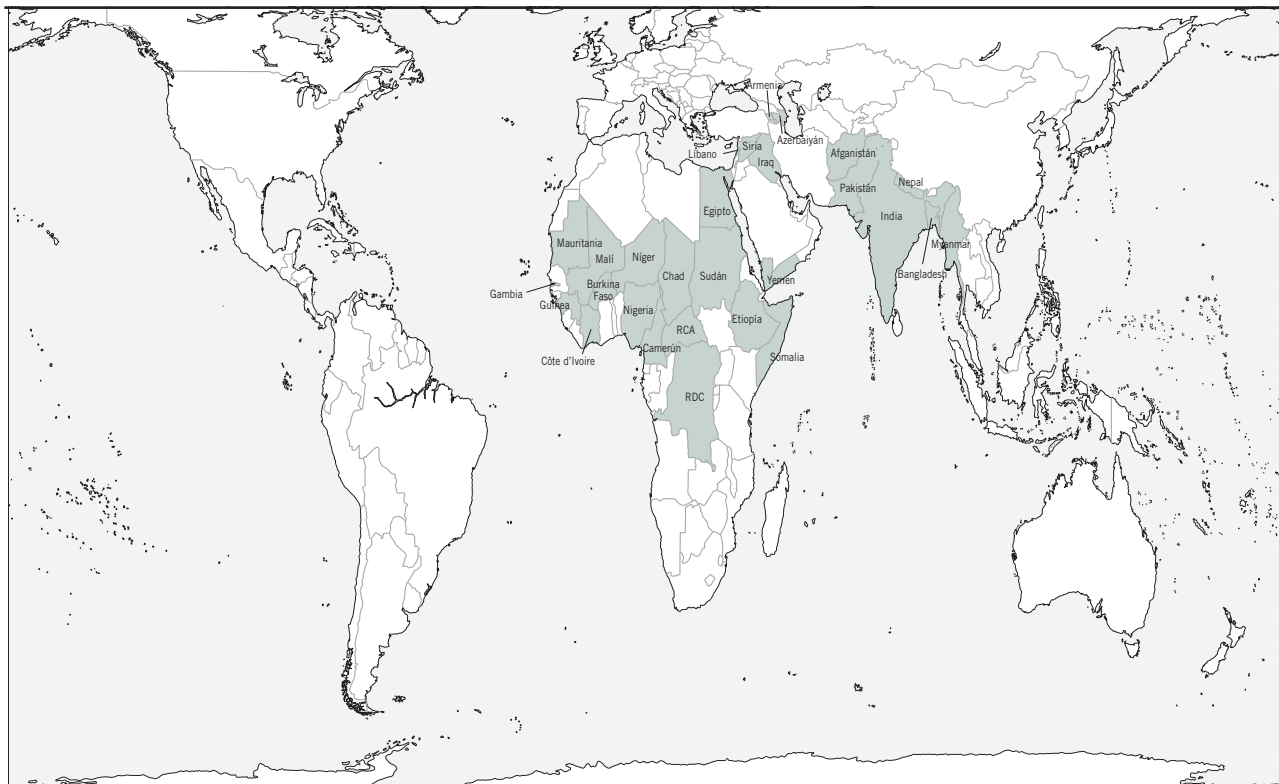
- Durante el año **se resolvieron satisfactoriamente cuatro negociaciones de paz**: RCA, Sudán (Darfur) SLM-MM, Malí (CMA-Plataforma) y Sudán del Sur.
- En tres conflictos se produjeron exploraciones para abrir un proceso de negociación formal: Colombia (ELN), Pakistán (Baluchistán) y Siria.
- Un 17,9% de las negociaciones funcionaron bien o fueron resueltas (siete casos), un 30,7% tuvieron dificultades significativas (12 casos) y un 43,6% no tuvieron éxito (17).
- El Gobierno de **Malí** suscribió una propuesta de acuerdo de paz preliminar elaborada en el marco de un proceso de mediación liderado por Argelia. El 15 de mayo se logró el primer Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional.
- Respecto al conflicto en la **R. Centroafricana**, se celebró con éxito el Foro para la Reconciliación Nacional, y al finalizar el año se celebraron las elecciones presidenciales, aunque el país siguió inmerso en un clima de fragilidad.
- En **Sudán del Sur**, el acuerdo de paz propuesto por la IGAD-Plus fue ratificado por todas las partes implicadas en el conflicto. Las partes acordaron un alto el fuego permanente y firmaron un acuerdo transicional de seguridad, por el que el Gobierno y los rebeldes del SPLA-IO acordaron los términos

Situación de las negociaciones al finalizar 2015

Bien (3)	Con dificultades (12)	Mal (17)	En exploración (3)	Finalizadas ¹ (4)
Chipre India ([Nagalandia] [NSCN-IM]) India – Pakistán	Birmania Colombia (FARC) Filipinas (MILF) India (Assam) (ULFA) Moldova (Transdniestria) Senegal (MFDC) Serbia – Kosovo Sudán (Diálogo Nacional) Sudán (Darfur) Sudán (Kordofán y Nilo Azul [SPLM-N]) Tailandia (sur) Ucrania (Donbás)	Afganistán (talibán) Armenia – Azerbaiyán (Nagorno Karabaj) Burundi Etiopía (ONLF) Etiopía – Eritrea Filipinas (NDF) Filipinas (MNLF) Georgia (Abjasia y Osetia del Sur) India (Nagalandia)(NSCN-K) Israel – Palestina Libia Marruecos – Sáhara Occidental Mozambique (RENAMO) RD Congo (FDLR) Sudán – Sudán del Sur Turquía (PKK) Yemen (al-houthistas)	Colombia (ELN) Pakistán (Baluchistán) Siria	Malí (CMA-Plataforma) RCA Sudán ([Darfur] disidencia SLM-MM) Sudán del Sur

3. Se entiende por negociación el proceso por el que dos o más partes enfrentadas (ya sean países o actores internos de un país) acuerdan discutir sus diferencias en un marco concertado para encontrar una solución satisfactoria a sus demandas. Esta negociación puede ser directa o mediante la facilitación de terceros. Normalmente, las negociaciones formales tienen una fase previa, o exploratoria, que permite definir el marco (formato, lugar, condiciones, garantías, etc.) de la futura negociación. Por proceso de paz se entiende la consolidación de un esquema de negociación, una vez que se ha definido la agenda temática, los procedimientos a seguir, el calendario y las facilitaciones. La negociación, por tanto, es una de las etapas de un proceso de paz.

Países en conflicto armado y/o tensión con graves desigualdades de género



de la desmilitarización parcial de la capital Juba. A finales del año, sin embargo, ambos bandos siguieron acusándose mutuamente de violar el alto el fuego.

- En **Colombia**, prosiguieron las negociaciones con las **FARC**. El 15 de diciembre se hizo público el contenido íntegro del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, cuyas líneas generales ya fueron avanzadas en septiembre. El presidente y “Timochenko” se comprometieron, además, a finalizar las negociaciones antes del 23 de marzo de 2016. Por su parte, la guerrilla del **ELN** finalizó su fase exploratoria, acordando con el Gobierno una agenda de negociación para los inicios de 2016.
- En la **India**, se produjo una primera ronda de conversaciones entre el Gobierno indio y la facción favorable a las negociaciones del grupo armado de oposición de Assam, **ULFA**. El líder del ULFA-Pro Negociaciones, Anup Kumar Chetia, fue puesto en libertad.
- En **Tailandia (sur)**, se celebraron conversaciones entre el Gobierno y una plataforma, conocida como Majlis Syura Patani (Mara Patani, Consejo Consultivo de Patani), que agrupa a seis organizaciones insurgentes. Se inició una serie de encuentros informales entre ambas partes en Kuala Lumpur, con la facilitación del Gobierno de Malasia.
- En **Chipre** se reanudó el proceso de paz en mayo tras siete meses de estancamiento y se pusieron en marcha medidas de confianza y comisiones técnicas.

Género, paz y seguridad

En el cuarto capítulo (**Género, paz y seguridad**) se analizan las diversas iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género.⁵ Esta perspectiva permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI, por sus siglas en inglés) de la OCDE; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación

5. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.

Países en conflicto armado y tensión con niveles de discriminación de género altos o muy altos

	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación
Conflictos armados*	Etiopía Iraq India (3) Myanmar Pakistán (2) Afganistán RCA	Nigeria Siria RDC (2) Egipto Somalia Malí Sudán (2) Yemen (2)
Tensiones	Burkina Faso Camerún Côte d'Ivoire Etiopía (3) Guinea India (3)** Myanmar Nepal Pakistán (2) Armenia*** Azerbaiyán Iraq Líbano (2)****	África Central (LRA) Chad Gambia Mauritania Niger Nigeria (2) RDC (3) Somalia Sudán (2) Bangladesh Egipto Siria Yemen

* Entre paréntesis, el número de conflictos armados o tensiones en dicho país.

** Una de las tensiones protagonizadas por la India hace referencia a la que mantiene con Pakistán.

*** Armenia y Azerbaiyán protagonizan una única tensión internacional, la relativa a la disputa en torno a Nagorno-Karabaj.

**** Una de las tensiones en Líbano hace referencia a que mantiene con Israel y Siria.

Fuente: Tabla elaborada a partir de los niveles de discriminación de género del SIGI (OCDE) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escola de Cultura de Pau. El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.

en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

En lo que respecta a la situación en términos de equidad de género, de acuerdo con el índice SIGI, los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 38 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este indicador con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que 21 de los 35 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2015 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación y que cinco conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Argelia, Libia, Israel-Palestina, Rusia, Sudán del Sur–. Así, **el 70% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con graves o muy graves desigualdades de género**. Asimismo, en otros siete países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles medios (China, Burundi, Filipinas) y en otros con niveles bajos (Ucrania, Colombia, Tailandia y Turquía). El elevado porcentaje sería coincidente con las tesis que defienden algunas autoras que apuntan a que la inequidad de género en un país eleva las probabilidades de que éste experimente un conflicto armado de carácter interno. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, al menos 33 de las 83 tensiones activas durante el año 2015 transcurrieron en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles altos o muy altos según

**21 de los 35
conflictos armados
que tuvieron lugar
a lo largo de 2015
se dieron en países
donde existían graves
desigualdades de
género**

el SIGI), lo que supone un 51% de las tensiones para las que existían datos.

La violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos durante el año 2015.

Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes. El secretario general de la ONU presentó en marzo su informe anual de seguimiento del impacto de esta violencia en los conflictos armados, que cubría el periodo de enero a diciembre de 2014, identificando actores armados responsables de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia de sexual. El informe también documenta los patrones y tendencias en la utilización de la violencia sexual en el marco de los conflictos de Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Darfur (Sudán), Siria, Yemen; de los casos de posconflicto de Bosnia y Herzegovina, Côte d'Ivoire, Liberia, Nepal y Sri Lanka, además de la situación en Nigeria. En el informe se recogen también diferentes iniciativas de respuesta llevadas a cabo por los Gobiernos o desde otras instancias como Naciones Unidas o la sociedad civil.

Durante todo el año se registraron numerosos casos de violencia sexual en diferentes lugares afectados por conflictos armados, tensiones sociopolíticas o en situación posbélica. Uno de los casos más graves fue el de la región de **Darfur** en Sudán, donde diferentes organizaciones informaron del impacto de la violencia

sexual en los últimos años. Especialmente graves fueron también los casos de violencia sexual cometidos por personal de Naciones Unidas que se denunciaron en diferentes momentos del años. La situación en la **RCA** destacó especialmente después de que la organización reconociera que la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MINUSCA) había sido acusada de abusos sexuales a menores en la capital, Bangui. Otros casos de especial relevancia fueron **Myanmar, Egipto y Sri Lanka**.

En lo referente a la construcción de paz desde una perspectiva de género, cabe destacar que durante el año 2015 se cumplió el 15° aniversario de la aprobación de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU. Coincidiendo con esta efeméride, se llevó a cabo una extensa revisión de su implementación a lo largo de estos 15 años por Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil. A tal efecto se presentaron diferentes informes de evaluación y se llevó a cabo un debate abierto en el Consejo de Seguridad. Además del informe anual del Secretario General de la ONU, presentado ante el Consejo de Seguridad en cumplimiento de lo establecido en la resolución, Naciones Unidas presentó el *Estudio Global sobre 15 años de aplicación de la resolución 1325* elaborado de manera independiente por la experta Radhika Coomaraswamy. Además, el Consejo de Seguridad aprobó una nueva resolución, la 2242 (2015), que se añade a las siete resoluciones previas que conforman la agenda sobre mujeres, paz y seguridad –1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) y 2122 (2013)–.

El Estudio Global llevado a cabo por Radhika Coomaraswamy supone la revisión más exhaustiva que se ha llevado a cabo hasta el momento de la implementación de la resolución 1325. Está basado en una revisión muy completa de esta implementación, incluyendo investigaciones específicas sobre los diferentes temas abordados, así como numerosas consultas con los diferentes actores involucrados (sociedad civil, gobiernos, organismos regionales y Naciones Unidas) aportando conclusiones pertinentes. El estudio, que destaca que la resolución 1325 debe ser interpretada como un mandato de derechos humanos para la comunidad internacional, ofrece evidencias sobre la importancia y el impacto positivo de la inclusión de la dimensión de género en la prevención de conflictos y la construcción de la paz –específicamente

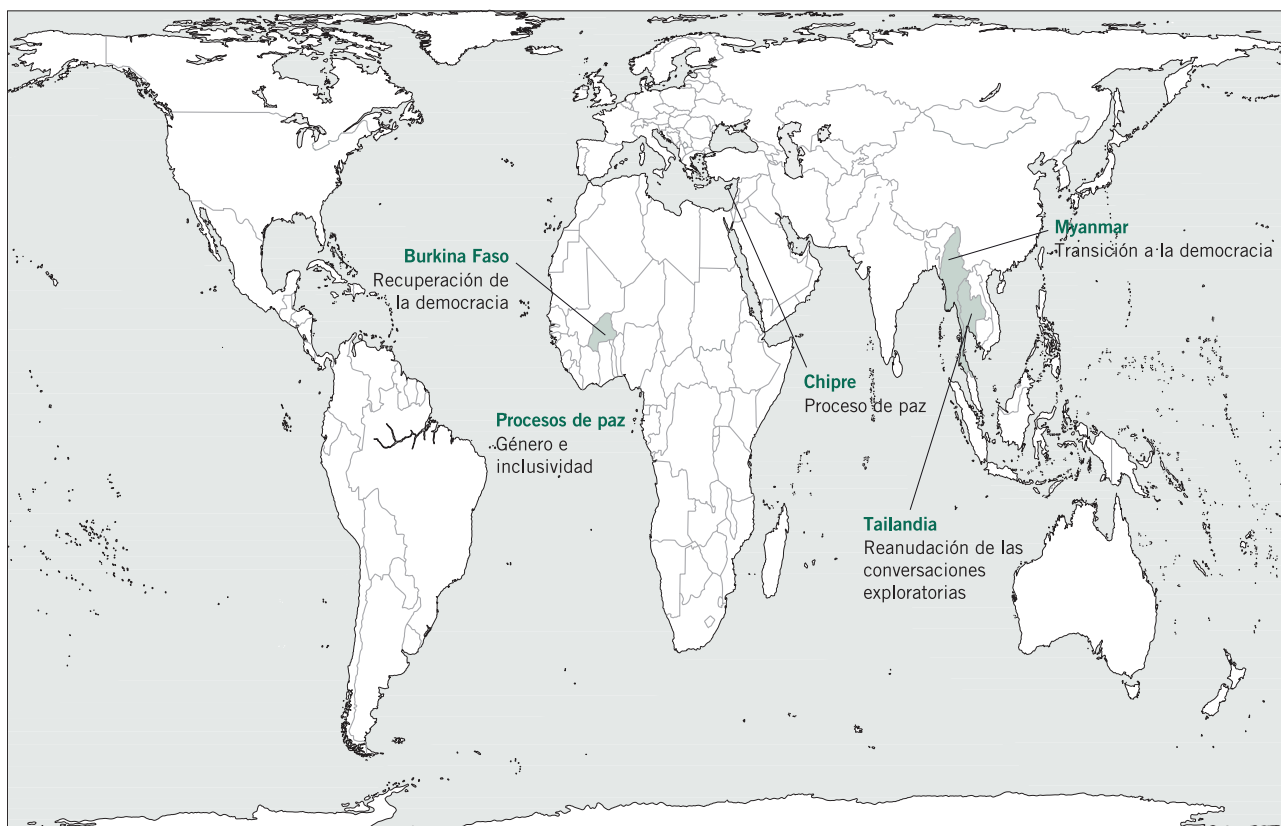
El informe Alerta identifica y analiza cinco contextos propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz en el año 2015

en los procesos y acuerdos de paz–, poniendo énfasis en la importancia de potenciar la prevención frente al uso de la fuerza y la securitización de los conflictos. Además, se constatan los múltiples desafíos que persisten para esta implementación. Por último, cabe destacar la relevancia de varias negociaciones de paz desde un punto de vista de género durante el año 2015. Diferentes investigaciones recientes han puesto de manifiesto cómo la presencia de actores más allá de las partes en conflicto, especialmente de la sociedad civil, incrementa la sostenibilidad de los procesos de paz. Además, la inclusión de la sociedad civil y, de manera específica, los grupos de mujeres, tiene efectos positivos tanto sobre las posibilidades de alcanzar acuerdos de paz, como sobre su sostenibilidad. En este sentido, son remarcables los avances en clave de género en los procesos de paz en países como Afganistán, Chipre, Colombia y Turquía.

Oportunidades de Paz para 2016

En el quinto capítulo (**Oportunidades de Paz para 2016**), el informe identifica y analiza cinco escenarios propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz en el año 2016. Las oportunidades identificadas durante 2015 hacen referencia a diferentes regiones y temas.

- **Chipre:** El reinicio las negociaciones de paz en 2015 y la confluencia de factores vinculados al proceso –compromiso del liderazgo local; acompañamiento internacional; movilización pro-diálogo de actores no gubernamentales de ambas comunidades de la isla; y resultados tangibles, incluyendo medidas de confianza de peso; entre otros– supone una ventana de oportunidad histórica para la consecución de un acuerdo definitivo, a pesar de los obstáculos coyunturales y de fondo.
- **Burkina Faso:** El país ha puesto fin a la fase de transición abierta tras la caída del régimen de Blaise Compaoré mediante la celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias que habían sido pospuestas tras el fracasado golpe de Estado de septiembre de 2015. Los comicios han devuelto al pueblo burkinés el control de las instituciones políticas tras 18 meses de Gobierno interino, representando para la sociedad burkinesa el comienzo de un nuevo periodo democrático.

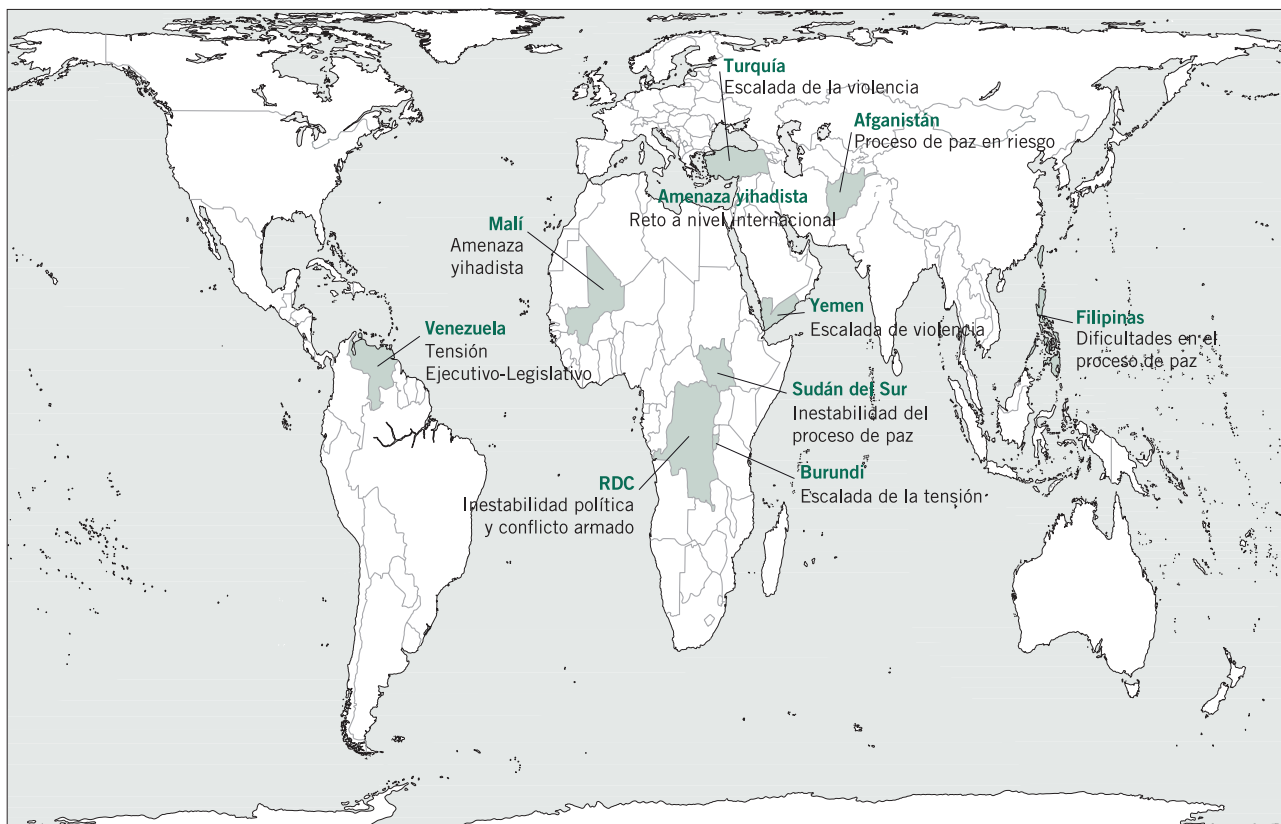


- **Myanmar:** Los resultados de las elecciones generales, que han otorgado una abrumadora mayoría al partido opositor NLD de Aung San Suu Kyi y que conducirán a la formación de un nuevo Gobierno sin tutela militar, unidos a la firma de un acuerdo de alto el fuego con ocho organizaciones insurgentes, permiten augurar avances en el camino hacia la democracia y la paz en el país durante 2016.
- **Tailandia:** Durante el 2015 se reanudaron las conversaciones exploratorias entre la junta militar y Mara Patani, una organización que agrupa a los principales grupos armados que operan en el sur del país. La unificación de las demandas por parte del movimiento insurgente y el reconocimiento por parte del Estado de que hace falta el diálogo para resolver el conflicto armado suponen dos condiciones necesarias para la creación de confianza entre las partes.
- **Género y procesos de paz:** Investigaciones recientes demuestran que los procesos de paz inclusivos desde una perspectiva de género y con la sociedad civil son más sostenibles y tienen más posibilidades de resultar en la firma de acuerdos de paz que aquellos que no lo son. Además, la presencia de mujeres podría contribuir también a la redacción de acuerdos en los que se integren cuestiones de igualdad.

Escenarios de riesgo para 2016

En el sexto capítulo (**Escenarios de riesgo para 2016**), el informe identifica y analiza 10 escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante el año 2016.

- **Burundi:** En los últimos años se ha producido un deterioro significativo de la gobernabilidad en el país. El creciente autoritarismo y la controvertida candidatura del presidente Pierre Nkurunziza junto al clima de violencia política y las violaciones de los derechos humanos son diferentes elementos que revelan la gravedad de la situación y que han situado al país en los últimos meses al borde del conflicto armado.
- **Malí:** En junio del 2015 se logró un acuerdo de paz entre el Gobierno y los movimientos rebeldes árabe-tuareg que operan en la región septentrional, después de tres años y medio de conflicto armado. Sin embargo, la exclusión de los movimientos yihadistas de las negociaciones y la ineficacia de las medidas de *securitización* para contener su presencia representan serios obstáculos para lograr



el fin de la violencia, pudiendo incluso poner en riesgo la implementación de los acuerdos de paz.

- **RDC:** La proximidad del nuevo ciclo electoral está derivando en una escalada de la violencia política y de la inestabilidad general como consecuencia de los intentos del presidente Kabila para posponer las elecciones presidenciales y así prolongar su mandato, a lo que se unen los fracasos de la operación militar contra las FDLR y de amnistía y retorno del grupo armado M23, que podrían suponer la reactivación del conflicto.
- **Sudán del Sur:** Tras la firma de la paz después de 20 meses de cruenta guerra civil, la falta de apropiación del acuerdo por parte de las partes enfrentadas, las decisiones unilaterales del Gobierno en materias que deberían ser competencias del nuevo Gobierno de Transición aun por crear, las violaciones reiteradas del alto el fuego, así como el surgimiento de nuevos actores armados, están poniendo en serio riesgo las perspectivas de paz en el país.
- **Venezuela:** El contundente triunfo en las elecciones parlamentarias de la oposición ha abierto en el país un nuevo escenario político marcado por la polarización de fuerzas entre el poder Ejecutivo y

el Legislativo. Esta nueva situación política, que tras 15 años modifica sustancialmente el poder del chavismo, puede favorecer nuevas tensiones y disputas entre el Gobierno y las fuerzas opositoras que podrían convulsionar aun más la política nacional, ampliar la fragmentación social y propiciar brotes de violencia.

- **Afganistán:** El proceso de negociación entre los talibán y el Gobierno afgano ha sufrido un parón por la crisis interna del movimiento talibán. La división en torno al liderazgo perjudica el futuro de las negociaciones. La apuesta de Ashraf Ghani por dialogar a pesar del aumento de la violencia y de tender la mano a Pakistán, que sigue dando santuario a la cúpula talibán, debilita aún más al ya frágil Gobierno afgano. Asimismo, aunque Pakistán debe formar parte del acuerdo, su deseo de controlar el proceso está enfrentando más a las partes.
- **Filipinas:** Las dificultades y retrasos por parte del Congreso para aprobar la Bangsamoro Basic Law, una suerte de estatuto de autonomía que regula la nueva entidad autónoma de Bangsamoro y concreta los contenidos del histórico acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y el MILF en 2014, han provocado una parálisis en el proceso de paz y

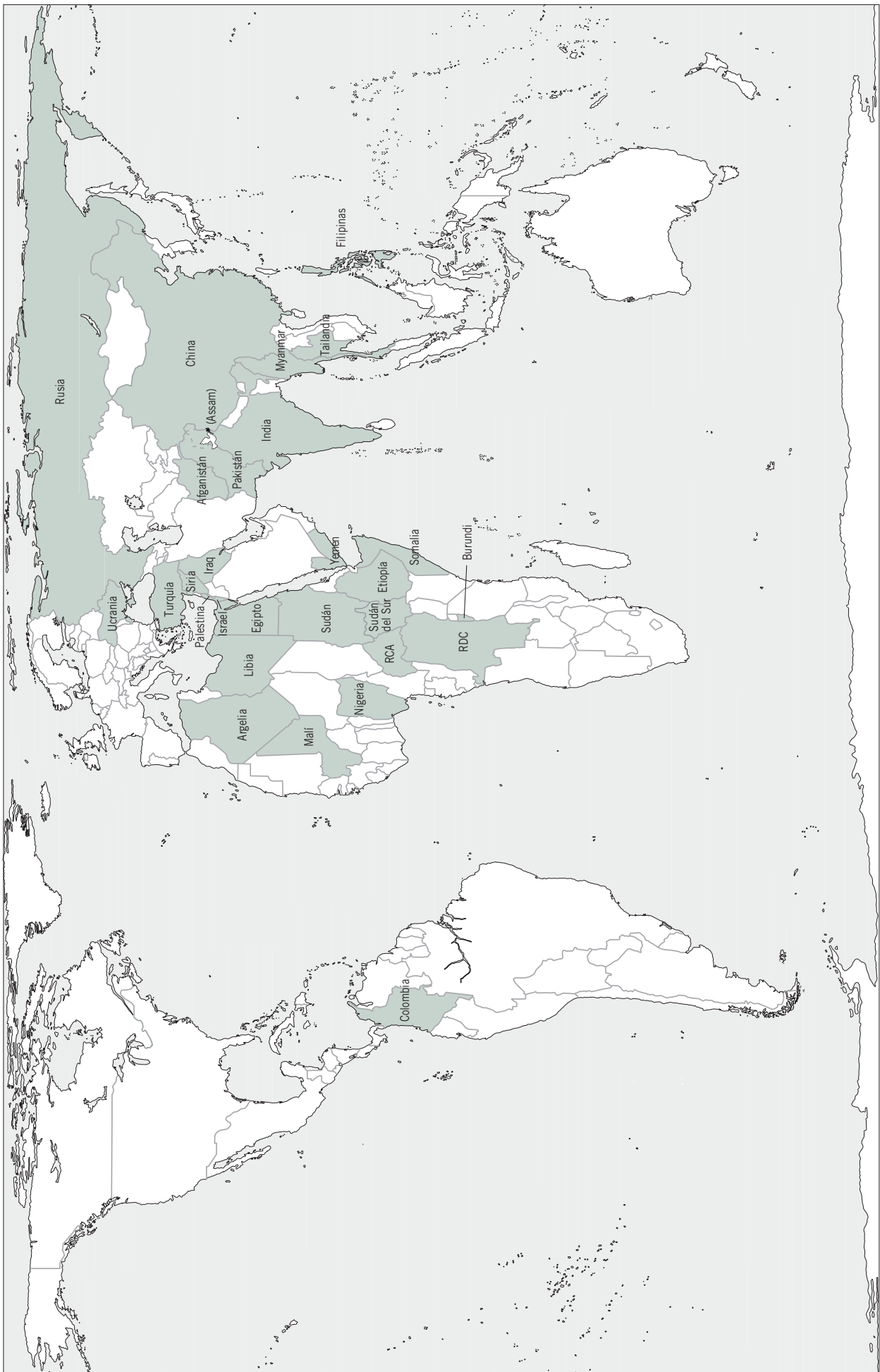
hacen temer por una fractura interna del MILF y una reanudación de la violencia en Mindanao.

- **Turquía:** El conflicto entre Turquía y el PKK se deterioró gravemente en 2015 de la mano de factores como la urbanización de la guerra, la “sirianización” de la cuestión kurda de Turquía y la irrupción de ISIS en suelo turco, el deterioro del clima social, la regresión democrática y los interrogantes sobre opciones sostenibles de diálogo. Estas dinámicas podrían agravarse en 2016 si no se ponen en marcha urgentemente medidas de confianza y de desescalada de la violencia.
- **Yemen:** La violencia en el país escaló significativamente a partir de marzo de 2015, cuando una coalición internacional liderada por Arabia Saudita decidió intervenir para frenar el

avance de las milicias al-houthistas, que a principios de año habían forzado la caída del gobierno. De cara a 2016, la situación amenaza con agravarse dada la creciente complejidad del conflicto armado, el severo impacto de la violencia en la población civil y los obstáculos para una salida política al conflicto.

- **Amenaza yihadista:** ISIS se ha consolidado como un nuevo modelo para el yihadismo internacional y competidor de al-Qaeda, demostrando una mayor capacidad para actuar con una proyección global. Múltiples factores pueden favorecer un aumento de la violencia yihadista en el futuro, entre ellos una intensificación en la pugna entre ISIS y al-Qaeda, una mayor incidencia de acciones armadas de milicianos retornados o “lobos solitarios” y los posibles efectos adversos de la respuesta internacional a ISIS.

Mapa 1.1 Conflictos armados



■ Países con conflicto armado

Fin del conflicto armado durante 2015

1. Conflictos armados

- Durante el año 2015 se registraron 35 conflictos armados, la mayoría en África (13) y Asia (12), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).
- La violencia política y la inestabilidad escalaron dramáticamente durante todo el año situando a Burundi en un clima de guerra.
- Tras 20 meses de guerra las partes enfrentadas en Sudán del Sur firmaron bajo presiones internacionales un acuerdo paz que prevé un Gobierno de Transición de 18 meses.
- Se incrementó la internacionalización del conflicto con Boko Haram tras el despliegue de la Fuerza Multinacional (MNJTF).
- Libia se vio afectada por elevados niveles de violencia, fragmentación institucional e inestabilidad política que tuvieron un grave impacto en la población y favorecieron el avance de ISIS en el país.
- El conflicto armado en Colombia presentó una reducción de las dinámicas de violencia en medio de un escenario marcado por las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.
- En Afganistán el nivel de violencia fue el más elevado desde 2001, a pesar de que se dieron pasos significativos en el proceso de diálogo entre los talibán y el Gobierno afgano.
- Se incrementaron sustancialmente los enfrentamientos en Mindanao entre las Fuerzas Armadas filipinas y el BIFF, una escisión del MILF que se opone al proceso de paz.
- Se reinició la guerra abierta entre el Estado turco y la guerrilla kurda PKK, con un grave impacto sobre la población civil kurda de núcleos urbanos del sudeste del país.
- El conflicto armado en Siria se caracterizó por su alto nivel de complejidad, una creciente implicación de actores foráneos y un devastador impacto en la población civil.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2015. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2015, incluyendo las tendencias globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional, como el impacto de los conflictos en la población civil y los embargos de armas. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los conflictos activos y finalizados en 2015.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2015

Conflicto ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
África			
Argelia -1992-	Interno internacionalizado	Gobierno, AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), gobiernos del norte de África y Sahel	1
	Sistema		=
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, facciones de antiguos grupos armados	2
	Gobierno		↑
Etiopía (Ogadén) -2007-	Interno internacionalizado	Gobierno, ONLF, OLF, milicias progubernamentales	1
	Autogobierno, Identidad		=
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno con sede en Tobruk, Gobierno con sede en Trípoli, facciones armadas vinculadas a la Operación Dignidad, grupos armados vinculados con la Operación Amanecer, ISIS, entre otros actores armados; Egipto, entre otros países	3
	Gobierno, Recursos, Sistema		↑
Malí (norte) -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, MLF, MISMA, MINUSMA, ECOWAS, Francia (Operación Barkhane)	2
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Nigeria (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, Boko Haram (BH), Ansaru, Civilian Joint Task Force (milicia progubernamental), Fuerza regional MNJTF (Níger, Benín, Camerún y Chad)	3
	Sistema		=
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, miembros desmovilizados de la ex coalición rebelde Séléka (escisiones de los antiguos grupos CPJP, UFDR y CPSK), milicias antibalaka, Francia (operación Sangaris), MICOPAX/FOMAC (transformada en la misión de la UA, MISCA, actualmente misión de la ONU MINUSCA), EUFOR, grupos vinculados al antiguo Gobierno de François Bozizé, otros remanentes de grupos armados (antiguas Fuerzas Armadas), grupo armado ugandés LRA	2
	Gobierno		=

1. En esta columna se señalan los Estados en los que se desarrollan conflictos armados, especificando entre paréntesis la región dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto. Esta última opción se utiliza en los casos en que existe más de un conflicto armado en un mismo Estado o en un mismo territorio dentro de un Estado, con el fin de diferenciarlos.
2. Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
3. En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
4. La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
5. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2015 con la del 2014, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2015 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias Mai-Mai, FDLR, M23 (ex CNDP), APCLS, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, Rwanda, MONUSCO	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	2
	Sistema, Recursos		=
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, milicias y señores de la guerra progubernamentales, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab, Eritrea	3
	Gobierno, Sistema		=
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, unidades paramilitares RSF, <i>janjaweed</i> , coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), otros grupos	2
	Autogobierno, Recursos, Identidad		=
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	2
	Autogobierno, Recursos, Identidad		=
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLM/A-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLM/A-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SSLA, SSDM/A, SSNLM, REMNASA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		↓
América			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, FARC-EP, ELN, nuevos grupos paramilitares	1
	Sistema		↓
Asia			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, Estado Islámico del Jurasán	3
	Sistema		↑
China (Turquestán Oriental) -2014-	Interno	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	1
	Autogobierno, Sistema, Identidad		↓
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		=
Filipinas (Mindanao- Abu Sayyaf) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
Filipinas (Mindanao-BIFF) -2015-	Interno	Gobierno, BIFF	1
	Autogobierno, Identidad		↑
India (Assam) -1983-	Interno internacionalizado	Gobierno, ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(S) KPLT, KLO, MULTA, HUM	1
	Autogobierno, Identidad		Fin
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobierno, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, United Jihad Council, All Parties Hurriyat Conference	1
	Autogobierno, Identidad		=
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		↓
Myanmar -1948-	Interno	Gobierno, grupos armados (KNU, SSA-S, KNPP, UWSA, CNF, ALP, DKBA, KNU/KNLA, SSNPLO, KIO)	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU	3
	Sistema		=

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT; sociedad civil, LeJ, TTP, talibán afganos (Shura de Quetta)	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		=
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Europa			
Rusia (Daguestán) -2010-	Interno	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)	1
	Sistema		↓
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Ucrania -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia	3
	Gobierno, Identidad, Autogobierno		=
Oriente Medio			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados con base en el Sinaí –entre ellos Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya–, Israel	3
	Sistema		↑
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes y kurdas (peshmergas), milicias chiíes, grupos armados sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Israel-Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias PYD/YPJ del PYD), Frente al-Nusra, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados	3
	Gobierno, Sistema		↑
Yemen (al-houthistas) -2004-	Interno internacionalizado	Gobierno, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Yemen (AQPA) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, AQPA/Ansar Sharia, ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, milicias tribales, milicias al-houthistas	2
	Sistema		↑

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2015

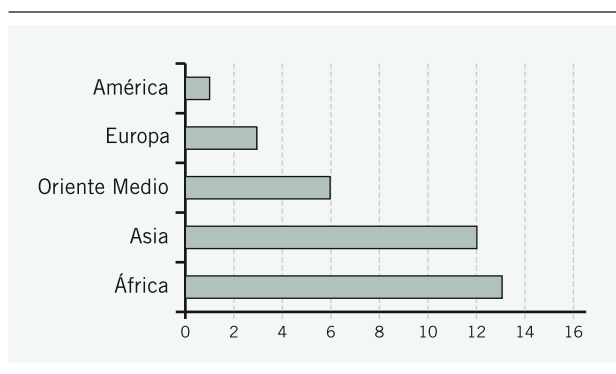
En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados durante el año 2015, así como otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional, como el impacto de los conflictos en la población civil y los embargos de armas.

1.2.1. Tendencias globales

Durante el año 2015 la cifra de conflictos armados siguió la tendencia de años anteriores, con un total de 35 casos (36 en 2014, 35 en 2013, 38 en 2012). A lo largo del año se contabilizaron dos nuevos casos:

Burundi, a causa de la escalada de la inestabilidad y la violencia política en el país, en un clima marcado por las movilizaciones populares, represión a la disidencia y un intento de golpe de Estado; y Filipinas (Mindanao-BIFF), como consecuencia de una intensificación de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado BIFF, que en los últimos años ha sido muy activo en la oposición al proceso de paz entre el Gobierno filipino y el MILF. Al finalizar 2015 solo estaban activos 34 de los 35 casos, ya que la situación en India (Assam) dejó de ser considerada como un conflicto armado activo ante el descenso de la violencia, siguiendo un patrón de reducción de las hostilidades en los últimos años. Respecto al balance del año anterior, cabe destacar que dos casos que fueron considerados conflictos armados en 2014, Rusia (Kabardino-Balkaria) y África (LRA),

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2015



dejaron de ser considerados como contextos activos y a lo largo de 2015 fueron analizados como casos de tensión.⁶ En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, **la mayor parte se concentraron en África (13) y Asia (12), en línea con años anteriores. Del resto de casos seis tuvieron lugar en Oriente Medio, tres en Europa y uno en América (Colombia).**

En lo referente al escenario del conflicto y los actores involucrados, cabe destacar que en 2015 solo uno de los contextos fue catalogado como un conflicto armado internacional –Israel-Palestina–, otros ocho tuvieron un carácter eminentemente interno, y **la gran mayoría fueron internos internacionalizados (26 de los 35 casos, equivalentes a un 74%).** En estos casos alguna de las partes en disputa era foránea y/o los enfrentamientos se extendieron hacia otros países, entre otros factores. Durante 2015, esta dimensión de “internacionalización” quedó patente en diversas dinámicas. Por un lado, en la intervención armada de terceros actores en un determinado conflicto, incluyendo la implicación de Estados –como por ejemplo, de Egipto contra el grupo armado Estado Islámico (ISIS) en Libia; el apoyo de Rusia a los actores armados en el este de Ucrania; o la intervención militar rusa en respaldo al régimen de Damasco en Siria–; la acción de coaliciones armadas *ad-hoc* –como en el caso de la alianza anti-ISIS liderada por EEUU, la coalición militar encabezada por Arabia Saudita que intervino en el conflicto armado en Yemen o la que lidera Washington en Afganistán–, y en el despliegue de misiones internacionales de Naciones Unidas o de organizaciones regionales –como por ejemplo las misiones de la ONU en Malí (MINUSMA), RCA (MINUSCA) o RD Congo (este) (MONUSCO); la de la UA en Somalia (AMISOM) o la de la OTAN en Afganistán (Resolute Support)–.

Por otra parte, el factor de internacionalización también estuvo determinado por la acción de diversos grupos armados más allá de las fronteras estatales de sus países de origen. Este aspecto fue especialmente

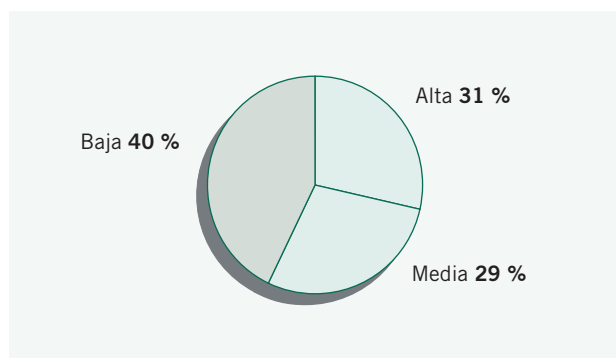
paradigmático en el caso de grupos como Boko Haram –que traspasó las fronteras de Nigeria para actuar en Chad, Níger y Camerún, en respuesta a la participación de estos países en una fuerza multinacional regional destinada a combatir al grupo armado–, o de ISIS, que continuó operando y controlando territorios en Siria e Iraq y reivindicando acciones más allá de estos países, en su mayoría perpetradas por filiales que en los últimos años han declarado su lealtad a la organización, sin que exista claridad sobre el nivel de cooperación entre la organización liderada por Abu Bakr al Baghdadi y estas facciones. En todo caso, cabe tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una dimensión internacional o influencia regional vinculada a factores como los flujos de personas refugiadas,⁷ al comercio de armas, la participación de combatientes extranjeros, el apoyo logístico o militar proporcionado por otros Estados a alguno de los bandos en pugna o a los intereses políticos o económicos de países vecinos al conflicto armado, por ejemplo, en lo referido a la explotación legal e ilegal de recursos.

Respecto a las causas de los conflictos armados, el panorama de conflictividad en 2015 ratifica su naturaleza multidimensional, ya que en la mayoría de los casos confluyeron varios factores. Pese a ello, a partir del análisis de los diferentes contextos es posible identificar tendencias que siguen la línea de años anteriores. **Los dos tercios de los conflictos armados en 2015 (24 casos, equivalentes a un 69%) tuvieron entre sus causas principales la oposición al Gobierno –ya sea a sus políticas internas o internacionales– y la lucha por acceder o erosionar el poder, o bien la oposición al sistema político, social o ideológico del Estado.** De este subtotal, el factor de oposición al Gobierno estuvo presente en 10 casos y fue una motivación especialmente destacada en conflictos armados que tuvieron lugar en África, como por ejemplo en casos como Libia –donde persistió la fragmentación, tras la conformación de dos gobiernos paralelos en 2014–, Sudán del Sur –país en el que se observaron algunos avances después de meses de guerra civil, tras la firma de un acuerdo de paz entre las partes en agosto de 2015–, o más recientemente en Burundi, donde las ambiciones del presidente por presentarse a un nuevo mandato agudizaron el conflicto, en medio de una agresiva campaña de represión a la disidencia. Esta motivación también fue un elemento relevante en los conflictos armados en RCA, RDC (este) y Somalia, y fuera de África en contextos como Siria o Yemen (al-houthistas). En este último caso, la pugna por el poder en el marco de una accidentada transición acabó motivando una escalada de violencia que se agravó tras la intervención de la coalición internacional liderada por Arabia Saudita. Del subtotal de casos previamente mencionado (24), un total de 19 estuvieron relacionados con la búsqueda de

6. Véase el resumen de Rusia (Kabardino-Balkaria) y África (LRA) en el capítulo 2 (Tensiones).

7. Véase el siguiente apartado de este capítulo dedicado al impacto de los conflictos armados en la población civil.

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados

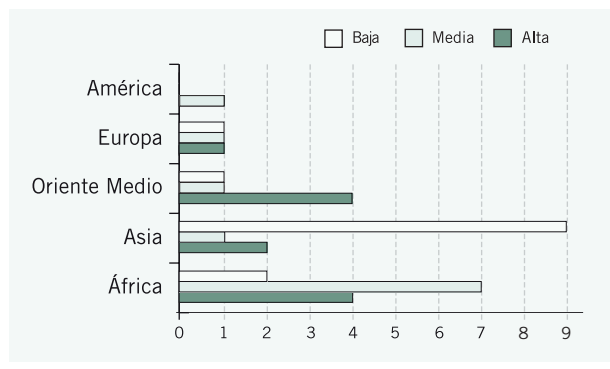


un cambio de sistema político, ideológico o económico del Estado. Entre ellos, cabe distinguir los casos que implican a actores armados movilizados por una agenda ideológica de inspiración socialista –como por ejemplo las FARC-EP y el ELN en Colombia, el CPI-M en India, o el NPA en Filipinas, que han librado una lucha armada de varias décadas contra las fuerzas gubernamentales– y aquellos en los que participan grupos insurgentes con una agenda que pretende aplicar su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos últimos se cuentan organizaciones armadas como AQMI en Argelia, Abu Sayyaf en Filipinas, al-Shabaab en Somalia, las milicias talibán en Afganistán y Pakistán, la insurgencia en la república rusa de Daguestán en la Federación de Rusia, o ISIS en Iraq, Siria y los distintos grupos armados que le han declarado fidelidad, aunque no es posible determinar con precisión en qué medida esta aproximación se debe a cuestiones ideológicas, a la búsqueda de apoyo económico y/o logístico o a motivaciones propagandísticas. Cabe destacar que muchas de estas formaciones se enfrentan no solo a las fuerzas gubernamentales, sino también a grupos armados no estatales de oposición –como por ejemplo en Siria o en Yemen– y que paralelamente se han producido tensiones entre grupos con diferentes interpretaciones del proyecto yihadista.⁸

Los dos tercios de los conflictos armados en 2015 tuvieron entre sus causas principales la oposición a un determinado gobierno o las demandas de cambio del sistema político, ideológico o económico de un Estado

Del total de 35 conflictos armados en 2015, más de la mitad (19 casos, que representan un 54%) tuvieron entre sus motivaciones de fondo demandas de autodeterminación o autogobierno y aspiraciones identitarias. Como en años previos, este tipo de contextos tuvieron una especial prevalencia en Asia y en Europa, aunque también estuvieron presentes en otras regiones del mundo, como por ejemplo en Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul), Sudán del Sur, Malí (norte), Iraq, Israel-Palestina o Yemen (al-houthistas). Entre los casos de Asia, este tipo de conflictos armados estuvieron focalizados en las regiones de Turquestán Oriental, en China; Mindanao,

Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos por regiones



en Filipinas; Assam y Jammu y Cachemira, en India; Baluchistán, en Pakistán; y la zona sur de Tailandia. En el caso de Myanmar, el conflicto armado enfrenta a las fuerzas gubernamentales y a decenas de grupos armados de origen étnico en distintos puntos del país y en 2015 las hostilidades se mantuvieron pese a la firma de un acuerdo de alto el fuego a nivel nacional. En Europa, los conflictos armados con dinámicas identitarias y de autogobierno tuvieron lugar en el este de Ucrania –con graves escaladas y períodos de distensión entre las fuerzas armadas estatales y milicias pro-rusas– y principalmente en la región sudeste de Turquía, donde se observó un incremento de las dinámicas bélicas entre las fuerzas de seguridad turcas y el grupo armado kurdo PKK en un contexto de colapso del proceso de paz, impactos de la guerra en Siria y graves ataques presuntamente perpetrados por ISIS.⁹ Cabe destacar que, en algunos casos, actores con agendas identitarias o de autogobierno convivían con otras organizaciones con demandas más enfocadas hacia un cambio de sistema –como en el caso de Malí (norte)– o ambas motivaciones estaban presentes en las aspiraciones de los actores armados no estatales implicados en la disputa, como en el caso de Abu Sayyaf en la región de Mindanao, en Filipinas, o en el de las organizaciones que operan en el Turquestán Oriental, en China.

Adicionalmente, la lucha por el control de territorios y recursos también estuvo entre las motivaciones de los conflictos armados. En lo que respecta a las causas vinculadas al control de territorios, el conflicto palestino-israelí siguió siendo un ejemplo paradigmático de este tipo de disputa. Por otra parte, y como en años previos, **la cuestión de los recursos fue especialmente relevante en contextos de conflicto en África, particularmente en Libia, RDC (este), RDC (este-ADF), Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) y Sudán del Sur.** En este ámbito, el caso de RDC (este) tuvo una especial notoriedad, ya que en 2015 diversos informes subrayaron la magnitud del expolio de los

8. Véase “La amenaza yihadista y sus efectos desestabilizadores a nivel internacional” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2016).

9. Véase “El conflicto Turquía-PKK: los riesgos de una deriva mayor” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2016).

recursos naturales del país por parte de grupos armados y criminales –1.300 millones anuales según cálculos de la UNEP– y advirtieron sobre los mecanismos utilizados por las organizaciones insurgentes para traficar con estos recursos y beneficiarse de su explotación (por ejemplo, a través del cobro de impuestos o el uso de etiquetas de trazabilidad falsas que, en la práctica, facilitan la venta de minerales procedentes de zonas de conflicto). Fuera de África, la búsqueda del control de recursos continuó siendo una de las causas relevantes del conflicto armado en la región de Baluchistán, en Pakistán, ya que los grupos armados que operan en la zona acusan a las autoridades pakistaníes de aprovecharse de las riquezas de la provincia sin que ello revierta en la población local. Cabe destacar que la intención de controlar territorios o recursos alimentó las dinámicas de numerosos conflictos armados, aunque no necesariamente como una motivación principal. En muchos casos estuvo presente más bien bajo una lógica instrumental, como por ejemplo en los enfrentamientos entre diversos grupos armados en Iraq o Siria en torno a áreas con pozos petrolíferos, con la finalidad de asegurarse la obtención de recursos económicos y/o bloquear los suministros del adversario.

En lo que respecta a la evolución de los conflictos armados en 2015, una gran parte de los casos (15 contextos, equivalentes a un 43%) registraron dinámicas y niveles de violencia similares a los del año anterior, mientras que en casi un tercio de los contextos (nueve, que representan un 26%) se observó un descenso en los niveles de confrontación, incluyendo el caso de India (Assam) que dejó de ser considerado conflicto armado. En otra tercera parte de los casos (11, que suponen 31% del total) se observó un agravamiento de la situación, fruto de la intensificación de las hostilidades y los niveles de violencia. Cabe destacar que esta evolución negativa fue menor a la registrada en 2014, año en que la mayoría de los casos de conflictos armados a nivel global (55%) presentaron un deterioro. Sin embargo, esta afirmación general no es válida para todas las regiones. En 2015, en Oriente Medio la gran mayoría de los casos empeoraron respecto al año anterior y algunos de los casos que se agravaron en otras regiones lo hicieron de manera significativa, como Burundi en África; Afganistán en Asia –que durante 2015 presentó los peores niveles de violencia desde 2001–; o Turquía (sudeste) en Europa –con una reactivación de las dinámicas de guerra entre el Gobierno turco y el PKK con graves impactos en la población–.

En materia de intensidad de los conflictos armados, la mayor parte fueron considerados de baja intensidad (14 o 40%) y casi un tercio de los casos (diez contextos o 29%) presentaron una intensidad media, mientras que el balance de contextos graves fue similar al de 2014 –11 casos, equivalentes a un 31% en 2015

(33% en 2014)–. **Los conflictos de intensidad elevada de 2015 fueron Libia, Nigeria (Boko Haram), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Pakistán, Ucrania, Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).** En muchos de ellos persistieron niveles de letalidad muy por sobre del umbral de mil víctimas mortales anuales, además de elevados niveles de destrucción y severos impactos en la población civil. Si bien los recuentos de víctimas mortales en conflictos armados suelen ser relativos y difíciles de contrastar –más aún en contextos de elevada intensidad–, balances parciales a partir de informaciones

Casi un tercio de los conflictos de 2015 fueron de alta intensidad y en muchos casos presentaron niveles de letalidad muy por sobre las mil víctimas mortales anuales

oficiales, datos recopilados por ONG y/o agencias de la ONU son indicativos de los niveles de violencia registrados en algunos de estos casos en 2015. Se estima que durante el año 2015 cerca de 7.500 personas fallecieron a causa del conflicto protagonizado por Boko Haram y las fuerzas de seguridad en el norte de Nigeria; más de 3.400 insurgentes habrían perdido la vida en el marco de las operaciones antiterroristas de las fuerzas militares de Pakistán; unas 4.400 personas fallecieron en Ucrania (más de

9.000 desde el inicio de la guerra en 2014); unos 3.000 insurgentes habrían muerto en operaciones del Ejército egipcio en el Sinaí; se contabilizaron al menos 16.200 víctimas mortales entre la población civil como consecuencia del conflicto armado en Iraq; y se calcula que otras 55.000 personas perdieron la vida en Siria, más de 260.000 en total desde el inicio de la guerra en 2011, según algunas estimaciones. De acuerdo a nuevos balances dados a conocer a principios de 2016, la cifra de víctimas mortales directas e indirectas de los cinco años de conflicto armado en Siria podría ser muy superior y ascender a las 470.000 personas.

Cabe destacar que en los últimos años el informe *Alerta!* ha identificado un aumento en los niveles de letalidad de los conflictos armados. Este diagnóstico es coincidente con el de otros centros de investigación como el Uppsala Conflict Data Program de la Universidad de Uppsala (Suecia), que en su análisis sobre los conflictos armados en 2014 advertía que la escalada de diversos conflictos y la extrema violencia en Siria habían provocado el mayor número de víctimas mortales en enfrentamientos armados desde 1989.¹⁰ El más reciente informe de Geneva Declaration on Armed Violence and Development también apunta a un incremento en las cifras de letalidad vinculadas a conflictos armados. Según su estudio, titulado *Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts*, el número total de muertes violentas en el mundo habría disminuido del período 2004-2009 al período 2007-2012 –pasando de 526.000 a 508.000–, sin embargo, el promedio anual de muertes como consecuencia de conflictos armados habría aumentado de 55.000 a 70.000.¹¹ Previsiblemente, esta tendencia se acentuará

10. Therése Pettersson y Peter Wallensteen, "Armed Conflicts: 1946 – 2014", *Journal of Peace Research*, julio de 2015, vol. 52, no. 4, pp. 536-550.

11. Geneva Declaration on Armed Violence and Development, *Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts*, Ginebra, 8 de mayo de 2015.

en futuras ediciones del informe, ya que el estudio atribuye parte del incremento de la letalidad al impacto de los conflictos en Libia y Siria en un período –2007 a 2012– en el cual los niveles de violencia no eran tan graves como lo han sido en años posteriores en estos y otros países. Aun así, cabe destacar que las víctimas mortales en contextos de conflicto armado representan solo una parte de las muertes violentas a nivel global –un 14% según los datos de *Global Burden of Armed Violence 2015*– y que siguen estando muy por debajo de los niveles de letalidad registrados en algunas de las peores guerras del siglo XX.¹²

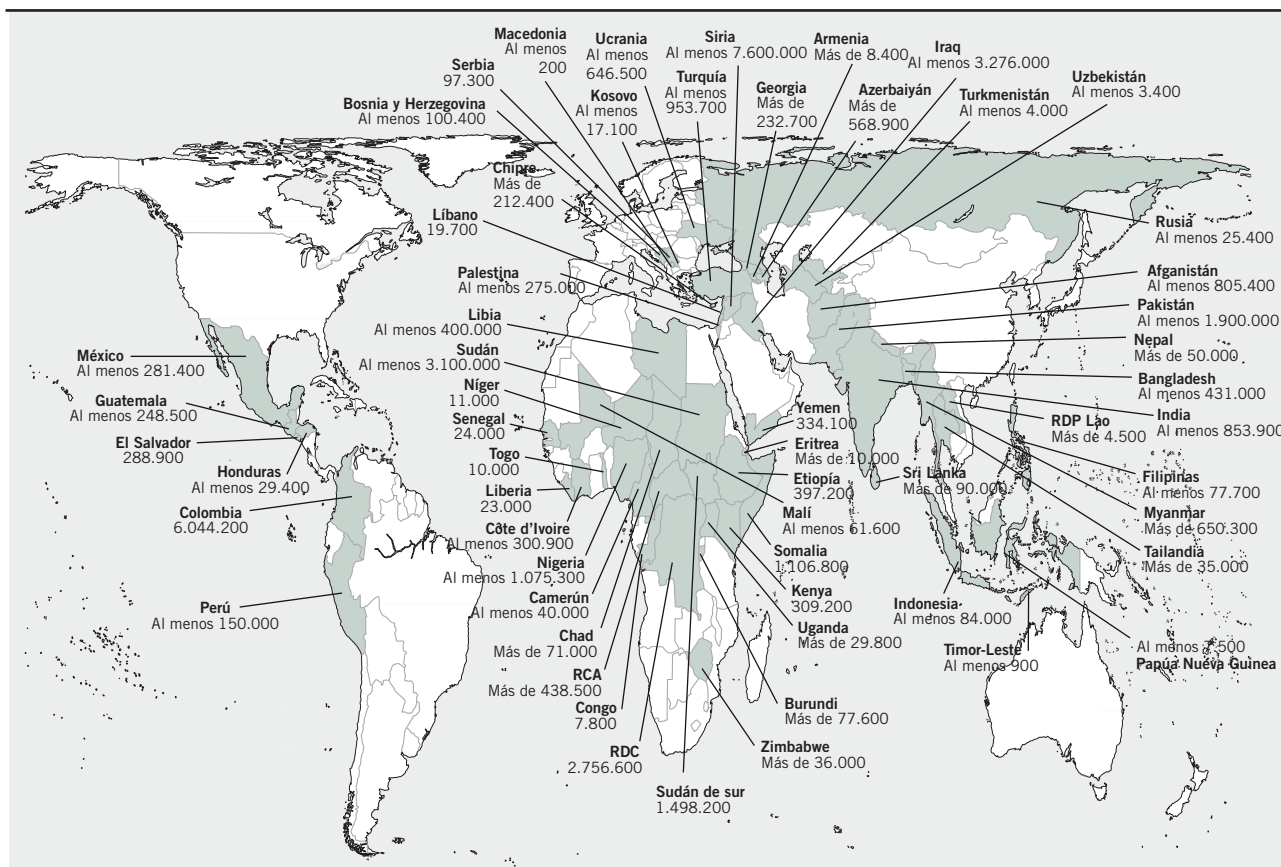
Impacto de los conflictos en la población civil

Durante 2015, los conflictos armados a nivel global continuaron provocando destrucción, sufrimiento y un gravísimo impacto en la población civil. Tal y como se detalla en el análisis de casos de cada uno de los contextos, las consecuencias de esta conflictividad armada no se limitan a las víctimas mortales en el marco de los combates entre fuerzas armadas estatales y grupos armados insurgentes o producto de actos de violencia indiscriminados, que han tenido impactos devastadores en los civiles en numerosos conflictos. Las consecuencias también incluyen masacres y ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, torturas y otros múltiples abusos físicos y psicológicos, desplazamientos forzados de población, uso de la violencia sexual,

reclutamientos de menores y otros múltiples abusos contra niños y niñas, entre otras dinámicas. En conjunto, hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En algunos contextos, como en Siria, se sometió a la población a asedios y bloqueos e incluso se utilizó el hambre o el acceso a agua como arma de guerra. Los elevados niveles de destrucción de las infraestructuras en muchos de los países que son escenario de conflictos armados también tuvieron un impacto relevante en la falta de acceso a atención a personas heridas e incluso favoreció la expansión de enfermedades en medio de la contienda –como en el caso de Yemen, donde se extendió el dengue y la malaria o de Ucrania, donde se declaró un brote de poliomielitis 19 años después de que el país fuera declarado libre de esta enfermedad–. Estos hechos confirman que los conflictos armados provocan un número de muertes indirectas en sus respectivos países difícil de estimar en toda su magnitud.

Respecto al uso de la violencia sexual en contextos de conflicto armado, durante 2015 se constató su utilización deliberada como arma de guerra por parte de actores armados en países como Iraq, Malí, RCA, RDC, Siria, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Grupos armados como Boko Haram o ISIS continuaron con sus prácticas de esclavitud sexual. La violencia sexual también fue un abuso perpetrado por miembros del Ejército y/o de las fuerzas de seguridad del Estado –como en el caso de las fuerzas sudanesas en las regiones de Darfur y Nilo Azul–

Mapa 1.2. Número de personas desplazadas internas en 2014



12. Pettersson y Wallensteen, *ibid.*

y por parte de Ejércitos foráneos o personal de Naciones Unidas, como ilustró dramáticamente en 2015 el caso de RCA, donde las denuncias de abusos por parte de integrantes de la misión de la ONU (MINUSCA) se sumaron a las acusaciones contra soldados franceses de la operación Sangaris. En otros países, como la RDC, también se produjeron denuncias sobre los abusos cometidos por cascos azules.¹³

En cuanto al impacto de los conflictos armados en las y los menores de edad, cabe destacar que esta dimensión continuó siendo motivo de gran preocupación. Durante 2015 el secretario general de la ONU publicó un nuevo informe sobre los niños y las niñas en contextos de conflicto –que abarca el periodo entre enero y diciembre de 2014–.¹⁴ Como tendencias, señala las **dificultades sin precedentes para la protección de menores en contextos de conflicto** y subraya las gravísimas violaciones a las que se vieron expuestos niños y niñas en grandes crisis como Iraq, Israel-Palestina, Nigeria, Siria, RCA y Sudán del Sur, así como en conflictos prolongados como Afganistán, RDC y Somalia, y otros conflictos más recientes como Yemen. El informe alerta sobre la tendencia al alza de los secuestros, señalando que el secuestro en masa de población civil, incluyendo menores, se ha convertido en un elemento cada vez más frecuente en los conflictos y que a menudo es un paso previo a otras graves violaciones de derechos humanos, como el asesinato, la mutilación, el reclutamiento y la violencia sexual. También se enfatiza el uso sin precedentes de violencia extrema en 2014, lo que supuso un incremento “espectacular” de violaciones graves contra población menor de edad. Así, niños y niñas sufrieron violencia extrema de manera desproporcionada y fueron objetivo directo de actos de violencia que pretendían generar el mayor número posible de víctimas mortales y aterrorizar a las comunidades. Entre las tácticas para ello, el informe señala los ataques a las escuelas. También alerta sobre las preocupaciones en torno a la protección de menores que generan actividades militares de respuesta a la violencia extrema, incluyendo la privación de libertad de menores por su supuesta asociación con grupos extremistas. El informe del secretario general también destaca los enormes desafíos relativos a la reintegración de menores reclutados y utilizados en actos de violencia extrema, dados los trastornos emocionales graves y duraderos que causará la exposición a violencia tan extrema como la del periodo analizado.

En lo que respecta a 2015, el análisis de los hechos ocurridos en algunos conflictos armados confirma la situación de vulnerabilidad a la que se exponen niños y niñas en muchos contextos, como ilustra el caso

Las previsiones de ACNUR indicaban que en 2015 se superaría la cifra de 60 millones de personas desplazadas de manera forzosa a causa de conflictos, violencia y persecución

de Boko Haram en Nigeria, que intensificó el uso de menores en ataques suicidas. Durante 2015 también surgieron otras informaciones sobre las consecuencias indirectas de los conflictos en los y las menores – como el aumento de la tasa de mortalidad infantil en Gaza por primera vez en 53 años– y su impacto a largo plazo. Según datos conocidos durante el año, la mitad de los niños y niñas en países como Siria y Sudán del Sur estaban fuera del sistema educativo producto de situaciones de conflicto y violencia.

El desplazamiento forzado de población fue una de las consecuencias más notorias de los conflictos armados en 2015, período en que se confirmó la tendencia observada en años previos respecto a un significativo aumento en el número de personas refugiadas y desplazadas internas a nivel global. Según los datos publicados por ACNUR a finales de año –que arrojan un balance parcial de la situación basándose en los datos correspondientes al primer semestre del año–, en 2015 la cifra total de personas desplazadas dentro y fuera de las fronteras de sus países a causa de conflictos armados, situaciones de violencia y persecución superaría, por primera vez desde que se registran datos, los 60 millones de personas.¹⁵ Esto implica que una de cada 122 personas en el mundo ha tenido que abandonar sus hogares a causa de situaciones de conflicto y violencia. Si a finales de 2014 se contabilizaban 59,5 millones de personas en esta situación, durante los primeros seis meses de 2015 la agencia de Naciones Unidas había identificado nuevos desplazamientos forzados de casi cinco millones de personas, la mayor parte de carácter interno. **El número total de personas refugiadas en el mundo, que a finales de 2014 ascendía a 19,5 millones de personas, a mediados de 2015 había superado el umbral de los 20 millones por primera vez desde 1992.**

Excluyendo la población refugiada palestina que se encuentra bajo el mandato de la UNRWA, y que se estima en 5,1 millones de personas, las cifras de ACNUR indican que se ha pasado de 10,4 millones de personas refugiadas a finales de 2011 a cerca de 15,1 millones a mediados de 2015. Es decir, en tres años y medio se ha registrado un aumento del 45%. Más allá de estas cifras, el informe de ACNUR también identifica otras tendencias preocupantes, entre ellas el descenso de las tasas de retorno voluntario de personas refugiadas, que está en su nivel más bajo en tres décadas y que se considera un indicador del estado de los conflictos en el mundo, ya que supone que las personas no confían en la posibilidad de un retorno seguro a sus países de origen.

El primer país emisor de población refugiada y principal causante del abrupto ascenso en las cifras de des-

13. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).

14. Asamblea General y Consejo de Seguridad de la ONU, *Los niños y los conflictos armados. Informe del Secretario General*, A/69/926-S/2015/409, 5 de julio de 2015.

15. UNHCR, *UNHCR Mid-Years Trends 2015*, 18 de diciembre de 2015.

plazamiento forzado a nivel global en los últimos años fue Siria, aunque el estallido o empeoramiento de otros conflictos armados como Afganistán, Burundi, RDC, Malí, Somalia, Sudán del Sur y Ucrania también contribuyeron al mantenimiento de esta tendencia. Según los datos provisionales de ACNUR, hasta mediados de 2015 el conflicto en Siria había generado 4,2 millones de personas refugiadas. Los otros países de origen con mayor número de población refugiada eran Afganistán –que ostentaba el primer lugar hasta mediados de 2014– con 2,6 millones; Somalia, con 1,1 millones; Sudán del Sur, con 744.100; y Sudán, con 640.900.

Cabe destacar que el drama de la población en busca de refugio se hizo especialmente visible en medios de comunicación occidentales a partir de mediados de 2015, cuando se intensificaron los flujos de personas refugiadas hacia Europa. Según estimaciones de ACNUR, más de un millón de personas cruzaron el Mediterráneo, en su mayoría de Siria, pero también procedentes de otros contextos marcados por la violencia. La situación, en especial los continuos naufragios con víctimas mortales y los diversos obstáculos que encontraron las personas refugiadas en su periplo hacia el centro de Europa, expuso las contradicciones y debilidades de la política europea, que en términos globales ofreció una respuesta tardía, extremadamente limitada e insuficiente a la crisis, en claro incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Los principales países de acogida de población refugiada continuaron siendo los Estados vecinos a los territorios en conflicto armado, en su mayoría países en desarrollo. Según el informe de ACNUR, **hasta mediados de 2015 el principal receptor de población refugiada a nivel mundial era Turquía, con 1,84 millones de personas refugiadas** –un 98% de ellas de origen sirio–, seguida de Pakistán –que albergaba 1,5 millones de personas refugiadas, casi en su totalidad procedentes de Afganistán–, Líbano –en tercer lugar, con 1,2 millones, un 99% de Siria–, Irán –982.000 personas refugiadas, principalmente de Afganistán e Iraq– y Etiopía –con 702.500 personas refugiadas a mediados de 2015, buena parte de ellas procedentes de Eritrea y Sudán del Sur. Cabe recordar que el balance final de 2015 será superior si se tiene en cuenta que las cifras de ACNUR son provisionales, que no todas las personas que huyen de sus países se registran como refugiadas y que a estas cifras falta sumar los desplazamientos forzados hacia otros países en el segundo semestre del año. Así, por ejemplo, estimaciones de la propia ACNUR indicaban que a finales de 2015 el número de personas refugiadas en Turquía ya superaba los 2,5 millones. También hay que considerar que en algunos

Según cifras provisionales, Siria continuaba siendo el país con mayor número de población desplazada interna a nivel mundial y países como Yemen, Ucrania o RDC destacaron por ser escenario de nuevos desplazamientos masivos en 2015

casos se ha apelado a otras fórmulas de estancia legal, como por ejemplo en Ucrania, donde se estima que hasta finales de 2015 un total de 1,07 millones de personas habían buscado asilo u otras formas de residencia legal en países vecinos a causa del conflicto del Donbás, según datos recopilados por ACNUR.

Adicionalmente, cabe destacar que la gran mayoría de las personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de conflictos y violencia en 2015 continuaron viviendo en sus respectivos países, ya sea porque intentaron buscar un refugio seguro dentro de las fronteras del propio Estado o porque no tuvieron la posibilidad de escapar atravesando las fronteras, entre otros factores. En muchos casos estos colectivos se vieron expuestos a una situación de gran vulnerabilidad, dadas las dificultades para acceder a ayuda y asistencia humanitaria. **Si bien no existían cifras globales sobre la dimensión de este fenómeno en 2015, los datos de International Displacement Monitoring Centre (IDMC) indicaban que a finales de 2014 había un total de 38,2 millones de personas en situación de**

desplazamiento forzado interno en el mundo.¹⁶ Según informaciones provisionales de ACNUR, hasta mediados de 2015 Yemen era uno de los países con mayores niveles de nuevos desplazamientos forzados internos, seguido de Ucrania, RDC, Nigeria, Iraq y Pakistán. En términos generales, Siria continuaba siendo el país con el mayor número de población desplazada interna a nivel mundial, con más de 7,6 millones de personas en esta situación. Otros países con elevadas cifras de desplazamiento forzado interno continuaron siendo Colombia (6,5 millones), Iraq (4 millones), Sudán (2,3 millones) y Pakistán (1,6 millones), entre otros países. El análisis de los diferentes casos de conflicto armado en 2015 en el informe *Alerta!* también destaca otros muchos contextos que fueron escenario de desplazamientos forzados masivos producto de la violencia en 2015, como por ejemplo Turquía (sudeste) o Myanmar –donde los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y el grupo armado opositor MNDAA causaron el desplazamiento de decenas de miles de personas, muchas de las cuales buscaron refugio en China–.

Embargos de armas

En virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU puede adoptar medidas coercitivas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, que van desde sanciones económicas o de otra índole hasta la intervención militar internacional.¹⁷ El empleo de sanciones obligatorias

16. Estaba previsto que tanto ACNUR como otras organizaciones internacionales como IDMC publiquen sus balances sobre 2015 durante el primer semestre de 2016.

17. Para este fin existe el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Tabla 1.2. Embargos de armas de la ONU, UE, OSCE y la Liga Árabe en 2015

País*	Entrada en vigor	País	Entrada en vigor
Embargos decretados por Naciones Unidas (14)		Embargos decretados por la UE (22)	
Al-Qaeda y entidades e individuos asociados, milicias talibán **	2002	Al-Qaeda y milicias talibán**	2002
Corea, RPD	2006	Belarús	2011
Côte d'Ivoire	2004	China	1989
Eritrea	2009	Corea, RPD	2006
Irán	2006	Côte d'Ivoire	2004
Iraq (FNG*** desde 2004)	1990	Egipto	2013
Líbano (FNG)	2006	Eritrea	2010
Liberia (FNG desde 2009)	1992	Irán	2007
Libia	2011	Iraq (FNG desde 2004)	1990
RCA	2013	Líbano (FNG)	2006
RDC (FNG desde 2008)	2003	Liberia (FNG desde 2008)	2001
Somalia (FNG desde 2007)	1992	Libia	2011
Sudán (Darfur) (FNG)	2004	Myanmar	1991
Yemen (FNG)	2015	RCA	2013
		RDC (FNG desde 2003)	1993
Embargos decretados por la Liga Árabe (1)		Rusia****	2014
Siria	2011	Siria	2011
		Somalia	2002
Embargos decretados por la OSCE (1)		Sudán	1994
Armenia - Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	1992	Sudán del Sur	2011
		Yemen (FNG)	2015
		Zimbabwe	2002

* En negrita, país o grupo en conflicto armado sujeto a embargo.

**Embargo no ligado a un país o territorio en concreto.

*** FNG: Fuerzas No Gubernamentales.

**** En el caso de Rusia el embargo es relativo a la cuestión de Crimea y no a los conflictos que afectan el Cáucaso Norte.

Fuente: Elaboración propia a partir de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), <http://www.sipri.org/databases/embargoes> y European Commission, http://eeas.europa.eu/cfsp/index_en.htm.

tiene por objeto ejercer presión sobre un Estado o entidad para que cumpla con los objetivos fijados por el Consejo de Seguridad sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza.¹⁸ Las sanciones pueden ser económicas y comerciales, en sentido amplio; o medidas más selectivas, como embargos de armas, prohibiciones de viajar, restricciones financieras o diplomáticas, o una combinación de ambas cosas, de tipo selectivo y de tipo general. Los embargos de armas de Naciones Unidas son impuestos por resoluciones adoptadas en virtud del artículo 41 del Capítulo VII de la Carta. Al menos nueve de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben apoyar la resolución y ninguno de los miembros permanentes del Consejo (EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido) debe vetarla. Hay dos tipos de embargos del Consejo de Seguridad: los voluntarios

y los obligatorios. Los Estados miembros de la ONU deben cumplir los embargos de armas obligatorios.

Este apartado solo hace referencia a los embargos de armas impuestos o vigentes por organizaciones internacionales, y no incluye los embargos y sanciones impuestos por Estados de forma unilateral. Además de la ONU, organizaciones como la Liga Árabe o la UE también establecen embargos de armas vinculantes para sus Estados miembros, que en unos casos responden a la implementación de los embargos de armas que impone Naciones Unidas (como por ejemplo, el embargo de armas a RCA impuesto en 2013, o el embargo de armas a algunos de los actores involucrados en el conflicto en Yemen impuesto en abril de 2015 por parte de la ONU e implementado por parte de la UE en junio) y, en otros casos, a iniciativas propias, como

18. Los mecanismos de sanciones, y en concreto los embargos de armas, han sido utilizados de forma desigual desde la creación de Naciones Unidas. Entre 1945 y 1989 solo fueron utilizados en dos contextos, vinculados al proceso de descolonización: en la antigua Rodhesia del Sur (actual Zimbabwe) entre 1968 y 1979 (debido a la inestabilidad interna); y en Sudáfrica entre 1977 y 1994 (por la intervención sudafricana en los países vecinos, la violencia e inestabilidad interna y el sistema de discriminación racial del Apartheid). El limitado uso de estos mecanismos durante la Guerra Fría se enmarcó, como otros instrumentos de Naciones Unidas, en la política de competencia entre bloques, por lo que el fin de este periodo supuso, como en otras áreas, un creciente activismo de la organización en este campo, facilitando la imposición de embargos de armas. Su uso también favoreció el fortalecimiento del papel de Naciones Unidas como garante de la paz y la seguridad internacionales. Además, los embargos de armas fueron progresivamente vistos como un tipo de sanciones más efectivas que las sanciones económicas, por centrarse en las élites de los Estados y en los grupos armados no estatales, limitando su impacto humanitario.

es el caso de las medidas adoptadas contra Rusia en 2014 por parte de la UE. Los embargos de la UE se imponen mediante Posiciones Comunes adoptadas de forma unánime por el Consejo de la UE en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. En el caso de la OSCE los embargos son voluntarios. Otras organizaciones regionales como la UA y ECOWAS disponen de mecanismos similares, aunque en la actualidad no existe ningún embargo de armas establecido por estas organizaciones.

En total, 13 países y la organización al-Qaeda (y las entidades e individuos vinculados a ella, como las milicias talibán) se vieron sometidos a embargos de armas del Consejo de Seguridad de la ONU en 2015, uno más respecto al año 2014, por la inclusión del embargo de armas a la insurgencia – Fuerzas No Gubernamentales (FNG)– en Yemen. En siete de estos países (RDC, Iraq, Líbano, Liberia, Somalia, Sudán y Yemen) los embargos solo afectaban a actores armados no estatales, y no al Gobierno. En lo concerniente a la UE, en junio de 2015 puso en marcha la implementación del embargo de la ONU sobre FNG de Yemen. En consecuencia, **al finalizar 2015 seguían vigentes 22 embargos de armas establecidos por la UE sobre 21 países y sobre al-Qaeda y las milicias talibán,** embargo este último no vinculado a un país o territorio. En cuatro de estos países (RDC, Iraq, Líbano y Liberia), además del que pesa sobre al-Qaeda y las milicias talibán, el embargo de la UE solo afectaba a actores no estatales. La **Liga Árabe** mantuvo su embargo de armas sobre **Siria** establecido en 2011 y la **OSCE** hizo lo propio respecto al embargo de armas de aplicación voluntaria que pesa sobre Armenia y Azerbaiyán en relación al contencioso de Nagorno-Karabaj.

En total, sumando los embargos establecidos por las diferentes organizaciones, al finalizar el año 2015 se contabilizaron **37 embargos de armas dirigidos contra un total de 24 Estados y grupos armados no estatales,**¹⁹ uno más que el año anterior por la inclusión de Yemen. Cabe señalar que 13 de los 22 embargos establecidos por la UE respondían a la implementación de los embargos del Consejo de Seguridad de la ONU.²⁰ Los nueve restantes correspondían a iniciativas europeas: Belarús, China, Egipto, Myanmar, Rusia, Siria, Sudán, Sudán del Sur y Zimbabwe.²¹

De los 24 Estados y grupos armados no estatales señalados por la ONU, la UE, la Liga Árabe y la OSCE,

12 hacían referencia a actores de conflictos armados activos a finales de 2015 (China, Egipto²², Libia, Myanmar, RCA, Siria, Sudán y Sudán del Sur y grupos armados en Iraq, Somalia, RDC y Yemen –en el caso de Sudán y RDC, afectan a los dos conflictos que padecen cada uno de estos países–), es decir, 12 embargos que afectan a 14 situaciones de conflicto armado. Cabría añadir **el embargo que pesa sobre al-Qaeda y las milicias talibán,** pero aunque gran parte de ambas organizaciones tienen sus bases y operan en Afganistán y Pakistán, el embargo de armas no corresponde a ningún territorio en concreto, según señala la resolución 1390.

De los otros 12 Estados sobre los que pesan embargos, 10 tenían como objetivo países que son escenario de tensión de intensidad variable (Armenia-Azerbaiyán, Côte d'Ivoire, Eritrea, Irán, Líbano, RPD Corea, Rusia, Sudán y Zimbabwe –la mayoría de estos países padecen diversos escenarios de tensión a la vez, que se ven afectados por un mismo embargo–). Los otros dos casos tuvieron un carácter especial. Por un lado, **Liberia** que pese a haber superado diversos conflictos armados (1989-1996, 1999-2003) y no sufrir una situación de tensión en la actualidad, se encuentra sometido a un embargo debido a la situación de fragilidad institucional. Por otro lado, **Belarús,** país que continúa siendo objeto de un embargo de armas de la UE desde 2011 con motivo de la grave situación de derechos humanos imperante, el deterioro de la democracia y el imperio de la ley. **Así, de los 35 conflictos armados activos a finales de 2015, existían 21 casos en los que ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni la UE, ni la Liga Árabe ni la OSCE plantearon el establecimiento de un embargo de armas** como medida sancionadora. Además, de las 83 situaciones de crisis sociopolíticas identificadas en el año 2015, **existían 52 situaciones de tensión que tampoco fueron objeto de embargos.** Ello, pese a que en muchos casos, el carácter preventivo de la medida podría incidir en una reducción de la violencia.

En este contexto, y en lo relativo a la circulación de armas a nivel global, cabe destacar que en el mundo se identifica una tendencia de incremento en las ventas de grandes armas (pesadas o de alto calibre), con un aumento del 14% entre el período 2006-2010 y 2011-2015, según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).²³ Los principales exportadores de armas a nivel mundial continuaban

19. Entre éstos, existe un embargo de armas voluntario, impuesto por la OSCE sobre Armenia y Azerbaiyán en 1992.

20. En el caso de Sudán, la UE estableció el embargo para el conjunto del país en 1994 y el Consejo de Seguridad de la ONU para la región de Darfur en 2004, al que se ha añadido el embargo de armas a Sudán del Sur en el año 2011. En el caso de Irán los embargos establecidos por ambas organizaciones responden a diferentes tipos de armamento.

21. No están incluidos los países sobre los que pesan otro tipo de sanciones como congelación de fondos y otros recursos económicos, ni restricciones de entrada y prohibición de viajar de algunos de sus ciudadanos, como son Burundi, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Moldova, Túnez y Ucrania. European Commission, *Restrictive measures in force (Article 215 TFEU)*, 15 de enero de 2016.

22. En el caso de Egipto existe embargo de armas de la UE vigente sobre el país, pero en contraste con el resto de medidas restrictivas y sanciones establecidas por la UE relativas a la exportación de armas, el Consejo de la UE no estableció una decisión o regulación específica, por lo que el embargo de armas no es legalmente vinculante sino que es un compromiso político de los Estados miembros. Véase *EU arms embargo on Egypt*, SIPRI Database, 10 de enero de 2016, y European Commission, *Restrictive measures in force (Article 215 TFEU)*, 15 de enero de 2016.

23. SIPRI, *Trends in International Arms Transfers, 2015*, SIPRI Fact Sheet, febrero 2016.

siendo EEUU y Rusia –que concentran el 58% de todas las exportaciones de armas en el período 2011-2015–, además de China, Francia y Alemania. En este mismo período, los principales importadores de armas fueron India, Arabia Saudita, China, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Australia.

1.2.2. Tendencias regionales

En lo relativo a las tendencias en materia de conflictividad por regiones, y tal como se mencionó en el apartado de tendencias globales, África concentró el mayor número de conflictos armados a nivel mundial, con un total de 13 casos. **Un rasgo distintivo de la conflictividad en el continente fue el nivel de internacionalización de los contextos: la totalidad de casos en la región fueron internos internacionalizados.** Las dinámicas de internacionalización fueron especialmente visibles en la acción de diversos grupos armados con capacidad de acción transfronteriza y que lanzaron ofensivas más allá de las fronteras de sus países de origen, en la presencia de numerosas misiones internacionales de la ONU y otras organizaciones regionales, en el despliegue de coaliciones militares ad-hoc, y en la acción directa de terceros países en algunos de los conflictos armados. Un ejemplo ilustrativo de esta internacionalización fue el caso del grupo armado de origen nigeriano Boko Haram, que continuó enfrentándose con las Fuerzas Armadas de Nigeria, pero extendió de manera significativa sus acciones a países vecinos como Chad, Camerún y Níger, en parte como respuesta a la participación de estos Estados en la Fuerza Multinacional Regional (MNJTF, por sus siglas en inglés) desplegada en 2015 para combatir al grupo insurgente.²⁴

Respecto a las causas de fondo de los conflictos armados en África, cabe destacar que en la mayor parte de los casos estaban presentes elementos de oposición al gobierno que derivaron en luchas por acceder o erosionar el poder o aspiraciones de transformación del sistema político, económico o ideológico de un Estado. En cuanto al primer factor, durante 2015 se registraron seis casos en los que la dinámica de conflicto estaba motivada por la oposición a las políticas domésticas o internacionales de un determinado gobierno –Burundi, Libia, RCA, RDC (este), Somalia, Sudán del Sur–; mientras que en seis casos se observaron elementos de oposición al sistema del Estado –Argelia, Libia, Malí (norte), Nigeria (Boko Haram), RDC (este-ADF), Somalia–. En todos estos casos la motivación estuvo vinculada a un cambio de sistema a partir de una agenda yihadista basada en una particular interpretación del Islam por parte de grupos armados como AQMI, Boko Haram, MUYAO, Ansar Dine, al-Mourabitoun,

al-Shabaab, ADF y las nuevas filiales de ISIS en el continente, entre otros. En este punto, cabe destacar que en el norte de África y Sahel grupos armados como Boko Haram o facciones de otros grupos insurgentes –en algunos casos hasta entonces alineados con al-Qaeda– manifestaron su lealtad a ISIS, comenzaron a reivindicar sus acciones como filiales de la organización con base en Iraq y Siria, e incluso declararon el establecimiento de “provincias” del califato en sus áreas de acción o influencia. Otras causas presentes en los conflictos en África estuvieron relacionadas con demandas de autodeterminación y/o autogobierno o cuestiones identitarias, presentes en seis casos en la región. Entre estos contextos se contabilizaron Etiopía (Ogadén), Malí (norte), RDC (este), Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) y Sudán del Sur. Adicionalmente, diversos conflictos armados en la región tuvieron entre sus causas profundas la lucha por el control de recursos, un elemento especialmente relevante en los casos de Libia, RDC (este), RDC (este-ADF), Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) y Sudán del Sur. Este factor también alimentó las dinámicas de conflictividad en otros casos del continente.

En cuanto a la evolución de los conflictos armados en África, la gran mayoría de contextos –nueve de 13– registraron niveles de violencia similares a los del año anterior, mientras que se observó un descenso de las hostilidades en un caso, Sudán del Sur, principalmente como consecuencia de la suscripción de un acuerdo de paz y la declaración de una tregua entre las partes enfrentadas, aunque la situación continuaba siendo extremadamente frágil. Se intensificaron los enfrentamientos en otros tres casos: Malí (norte) –donde se incrementaron las acciones de grupos armados de línea yihadista que fueron marginados del acuerdo de paz firmado a mediados de 2015–, Libia –con elevados niveles de confrontación entre numerosos actores armados, una persistente fragmentación política e institucional y un creciente impacto de la violencia en la población civil– y Burundi –que pasó a ser considerado conflicto armado después de que la situación en el país se agravara fruto de una confluencia de múltiples factores, entre ellos el fracaso del diálogo entre el Gobierno y la oposición, la persecución a la disidencia, un intento de golpe de Estado, la polémica reelección del mandatario, ataques armados a las fuerzas de seguridad y ejecuciones extrajudiciales. En lo referente a la intensidad, **cabe destacar que descendió el número de conflictos armados graves en el continente respecto al año anterior: cuatro casos en 2015 –Libia, Somalia, Nigeria (Boko Haram) y Sudán del Sur– frente a cinco casos en 2014.** África dejó de ser la zona con mayor prevalencia de casos graves a nivel global –42% en 2014– y pasó a estar al mismo nivel que Oriente Medio,

La internacionalización de los conflictos en África se evidenció en la acción transfronteriza de diversos grupos armados, en la presencia de misiones y coaliciones internacionales y en la intervención directa de terceros países

24. Véanse los resúmenes sobre Chad, Camerún y Níger en el capítulo 2 (Tensiones).

con un 33% de los casos en 2015. La mayor parte de los conflictos en África –siete de los 13– fueron de intensidad media, mientras que otros dos casos presentaron una baja intensidad.

En lo que respecta a los conflictos armados en Asia, la mayoría de casos (siete de 12) –China (Turquestán Oriental), Filipinas (NPA), Filipinas (BIFF), India (CPI-M), Myanmar, Pakistán (Baluchistán) y Tailandia (sur)– fueron de carácter interno. Esta cifra supone que **el 88% de los conflictos armados internos a nivel global tuvo lugar en Asia**. Otros cinco casos de la región fueron considerados como internos internacionalizados –Afganistán, Filipinas (Mindanao-Abu Sayyaf), India (Assam), India (Jammu y Cachemira) y Pakistán–. El elemento de internacionalización en estos casos estuvo dado por la presencia de misiones o coaliciones militares internacionales –por ejemplo, la operación Resolute Support bajo el mandato de la OTAN y la Freedom Sentinel liderada por EEUU, en Afganistán–, por las vinculaciones de algunos grupos armados locales con organizaciones o proyectos transfronterizos –como por ejemplo la relación del grupo armado filipino Abu Sayyaf con Jemaah Islamiya– y por los impactos de algunos de estos conflictos en zonas transfronterizas –como en el caso de la disputa en la región de Jammu y Cachemira entre India y Pakistán–.

En lo concerniente a las causas de la conflictividad en Asia, **uno de los rasgos característicos continuó siendo la amplia presencia de factores vinculados a aspiraciones de autodeterminación y/o autogobierno y a demandas de tipo identitario**. Este tipo de motivaciones estuvieron presentes en ocho de los 12 conflictos armados registrados en Asia en 2015 –China (Turquestán Oriental), Filipinas (Mindanao-BIFF), Filipinas (Mindanao-Abu Sayyaf), India (Assam), India (Jammu y Cachemira), Myanmar, Pakistán (Baluchistán) y Tailandia (sur)–. De esta lista cabe destacar el caso de Filipinas (Mindanao-BIFF), ya que este contexto pasó a ser considerado como un conflicto armado en 2015 dada la evolución de las dinámicas de violencia protagonizadas por las fuerzas militares filipinas y este grupo insurgente, crecientemente movilizado por su oposición al proceso de paz entre Manila y el MILF en la región de Mindanao. Otro factor relevante entre los elementos explicativos de la conflictividad en Asia fue la oposición al sistema político, económico o ideológico del Estado, presente en siete de los 12 casos en la región. Este elemento se materializó en la presencia de grupos armados que aspiran a un cambio de sistema de tipo comunista –como el CPI-M en India o el NPA en Filipinas– y organizaciones con proyectos de línea islamista/yihadista –como los talibanes en Afganistán y Pakistán o Abu Sayyaf en Filipinas–. Finalmente,

Asia concentró el mayor porcentaje de conflictos armados internos a nivel global y continuó siendo un importante escenario de disputas por aspiraciones de autodeterminación y demandas de tipo identitario

cabe destacar que la disputa por el control de recursos también fue un elemento relevante en el caso de Pakistán (Baluchistán).

Respecto a la intensidad de los contextos armados en Asia, la región albergó dos conflictos de alta intensidad –Afganistán y Pakistán–, mientras que la gran mayoría de situaciones de conflicto presentó una intensidad baja –nueve de los 12 conflictos armados en 2015– y solo uno –Pakistán (Baluchistán)– registró una intensidad media. Respecto a los casos graves, Pakistán fue escenario de niveles de violencia similares a los del año anterior, mientras que **la situación en Afganistán enfrentó un deterioro significativo, llegando a los peores niveles de violencia desde la invasión del país por tropas internacionales en 2001, tras los atentados**

del 11-S en EEUU. Junto a Afganistán, el caso de Filipinas (Mindanao-BIFF) también registró un deterioro en los niveles de violencia que, como se mencionó previamente, motivó que este caso pasara a ser considerado conflicto armado en 2015. Del total de casos en Asia, otros cinco presentaron un descenso en los niveles de violencia y confrontación respecto a 2014: China (Turquestán Oriental), India (CPI-M), Myanmar, Tailandia (sur) e India (Assam). Las hostilidades bajaron de manera significativa en este último caso, siguiendo una tendencia de varios años, y paralelamente se constató una reducción

de las capacidades operativas de los grupos armados NDFB(S) y ULFA (I), éste último contrario a las negociaciones de paz. Estos factores determinaron que el caso dejara de ser considerado como un conflicto armado activo a finales de 2015. Adicionalmente, cabe mencionar que Asia albergó a seis de los diez principales países importadores de armas a nivel global, teniendo como referencia el período 2011-2015. Entre ellos se incluyen tres países que son escenario de conflictos armados: India, que se ubicó en primer lugar, con 14% de las importaciones de armas a nivel global; China, en el tercer lugar, con el 4,7%; y Pakistán, en el séptimo puesto, con 3,3%. Cabe recordar que China también se ubicó en el tercer lugar entre los principales países exportadores de armamento, con un 5,9% del total de transferencias a nivel mundial (lo que representa un incremento de 88% al comparar el período 2006-2010 con el 2011-2015).²⁵

En lo que concierne a América, Colombia –el único caso de conflicto armado activo en la región–, continuó con la tendencia de descenso de los niveles de conflictividad.

Este contexto estuvo marcado por la positiva evolución del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. Considerado como uno de los conflictos armados más longevos a nivel global, durante 2015 el conflicto armado colombiano presentó una intensidad baja.

En lo referente a Europa, el continente albergó tres

25. SIPRI, *ibid.*

casos de conflicto armado: Rusia (Daguestán), Turquía (sudeste) y Ucrania, el primero de carácter interno y los dos últimos internos internacionalizados. El elemento de internacionalización en el caso del conflicto de Ucrania estuvo dado principalmente por la implicación rusa en la disputa en apoyo a las fuerzas separatistas en el este del país. En el caso de Turquía (sudeste) estuvo relacionado con el carácter transfronterizo de las hostilidades, que incluyeron ataques de las fuerzas turcas contra posiciones del PKK en Iraq y Siria; con el impacto de la guerra de Siria en las dinámicas del conflicto entre el Gobierno turco y el PKK; y con las acciones de ISIS en Turquía, entre otros elementos. De los tres conflictos armados registrados en 2015 en la región, el de Rusia (Daguestán) tuvo una baja intensidad y registró un marcado descenso en los niveles de violencia respecto a años anteriores; el de Ucrania tuvo una intensidad alta e impactos en letalidad similares a los del año anterior pese a la reducción en el uso de bombardeos indiscriminados y la reducción de hostilidades en el último periodo del año; mientras que el de Turquía (sudeste) tuvo una intensidad media, pero enfrentó un severo deterioro vinculado al colapso del proceso de paz entre Ankara y el PKK y la reanudación de la guerra, con nuevos elementos como la extensión del conflicto armado a núcleos urbanos y graves impactos en civiles.

Los factores que motivaron **los conflictos armados en Europa fueron multicausales, como en otras zonas del mundo, aunque en línea con años anteriores fue predominante la presencia de elementos vinculados a reivindicaciones identitarias o de autogobierno y/o autodeterminación.** Estas motivaciones estuvieron presentes en los conflictos en Turquía y Ucrania, mientras que en el caso de Rusia (Daguestán) el factor prevalente fue la aspiración de un cambio de sistema por parte de grupos insurgentes de línea islamista radical. Al igual que en otras regiones del mundo, algunas de estas facciones expresaron su adhesión a ISIS y a su proyecto de califato, provocando fracturas.

Por último, **Oriente Medio continuó caracterizándose por ser una región afectada por conflictos de alta intensidad. En 2015, la zona albergó un 33% de los casos graves a nivel mundial, al igual que África, pero proporcionalmente concentró un mayor número de casos.** De los seis contextos registrados en Oriente Medio en 2015, cuatro (67%) fueron conflictos armados de alta intensidad: Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). Como se mencionó previamente en el apartado de tendencias globales, los conflictos

armados de alta intensidad en esta zona superaron con creces el umbral del millar de víctimas mortales e incluso alcanzaron decenas de miles de fallecidos, como en el caso de Siria. El conflicto armado que protagoniza AQPA –y más recientemente también filiales de ISIS– en Yemen presentó una intensidad media, en un escenario de superposición de las dinámicas de violencia en el país. Por último, el caso de Israel-Palestina, registró una intensidad baja y un descenso en los niveles de violencia respecto a 2014, un año marcado por las consecuencias de la escalada en Gaza que dejó más de 2.000 víctimas mortales. En contraste, el resto de conflictos armados en Oriente Medio

registraron un aumento de la violencia y de los niveles de confrontación, con profundos impactos en la población civil de la región. Especialmente notorios fueron los casos de Iraq y Siria, donde los enfrentamientos entre los numerosos actores armados implicados en la contienda provocaron masivos desplazamientos forzados de población y en los que se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos. Cabe destacar que la región ha registrado un importante incremento del gasto militar y de las importaciones de armas en los últimos años. Según los datos de SIPRI, las exportaciones de armas a países de Oriente Medio se incrementaron en un 61% entre el período 2006-2010 y 2011-2015.²⁶ Arabia Saudita se ubicó en el segundo lugar entre los diez principales países importadores de armas a nivel global, con un 7% del total –sus adquisiciones se incrementaron en un 275% en el período estudiado– y EAU en el cuarto lugar, con un 4,6%. Otros países de la región registraron un incremento en las importaciones de armas, como en el caso de Iraq donde aumentaron un 83% entre el período 2006-2010 y 2011-2015. El análisis de SIPRI subraya que la intervención militar de la coalición árabe en Yemen en 2015 se vio facilitada por los altos niveles de exportaciones de armas a países de la región.²⁷

Oriente Medio albergó el único conflicto armado de carácter internacional a nivel global –Israel-Palestina–, mientras que el resto de casos fueron considerados internos internacionalizados. El componente de internacionalización en los conflictos de esta zona fue visible, entre otros elementos, en la implicación de terceros Estados en los conflictos –como Rusia o Irán en apoyo al régimen de Damasco; de EEUU e Irán en Iraq– y de coaliciones militares internacionales –como la alianza anti-ISIS liderada por EEUU, que continuó actuando en Iraq y Siria; o la coalición de países liderados por Arabia Saudita que decidió intervenir en el conflicto armado entre los al-houthistas y el Gobierno yemení–.

Entre los conflictos armados en Europa destacó el caso de Ucrania, que continuó siendo de alta intensidad, y el de Turquía (sudeste), que registró una importante escalada durante la segunda mitad del año

Más de la mitad (67%) de los conflictos armados en Oriente Medio fueron de alta intensidad y provocaron la muerte a decenas de miles de personas durante 2015

26. Cabe destacar que SIPRI incluye a Turquía entre los países de Oriente Medio.

27. SIPRI, *ibid*.

Adicionalmente, la internacionalización se materializó en la acción transfronteriza de diversos grupos armados no estatales, como por ejemplo Hezbollah, en apoyo al régimen sirio; ISIS, que continuó operando principalmente en Siria e Iraq pero que también reivindicó ataques en Líbano, Francia y otras zonas a través de sus filiales; AQPA, que a principios de 2015 reivindicó el atentado contra el semanario Charlie Hebdo en París; o el grupo Provincia del Sinaí –ex Ansar Beit al-Maqdis, filial de ISIS en Egipto– que reclamó la autoría del ataque contra un avión ruso. Respecto a las causas de los conflictos armados en Oriente Medio también se observa la confluencia de una multiplicidad de factores. Entre ellos destacan las aspiraciones de cambio de sistema ideológico, político o económico del Estado, presentes en cinco de los seis casos de la región, dado el elemento de oposición al gobierno, presente en los casos de Siria, Iraq y Yemen (al-houthistas) y la destacada presencia de grupos armados con agendas yihadistas, como Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), ISIS, AQPA, entre otros.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Occidental

Malí (norte)	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, MLF, MISMA, MINUSMA, ECOWAS, Francia (Operación Barkhane)
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuareg designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona

aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país.

El conflicto armado en el norte de Malí estuvo marcado por la firma del Acuerdo de Paz²⁸ entre los movimientos árabe/tuareg (Coordinadora de Movimientos de Azawad [CMA] y la Plataforma) y el Gobierno maliense, así como por el incremento de las acciones de los grupos yihadistas que quedaron excluidos de las conversaciones de paz y pusieron en el centro de sus objetivos militares a las fuerzas de seguridad malienses y a las tropas extranjeras –la misión francesa y la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSMA)– desplegadas en el territorio. El año se inició con una situación altamente inestable, debido a la persistencia de la violencia entre grupos rebeldes (CMA) y pro-gubernamentales (Plataforma), a las acciones armadas de los movimientos yihadistas, a los continuos incidentes que involucraron a la misión MINUSMA y al bloqueo de las negociaciones entre el Gobierno y los actores armados de la zona septentrional. Los diversos episodios de violencia ocurridos durante el primer trimestre del año provocaron la muerte de cerca de 60 personas, algunas de ellas miembros de la MINUSMA, que pasó a convertirse en la misión de la ONU más peligrosa del mundo con más de 40 bajas desde su inicio en 2013. Los periódicos enfrentamientos entre fuerzas pro-gubernamentales y pro-Azawad hicieron peligrar las conversaciones de paz aunque la mediación internacional liderada por Argelia logró un primer acuerdo de paz entre el Gobierno y algunas facciones menores de los grupos árabe/tuareg a principios de marzo. La CMA –integrada por grupos tuaregs y árabes que aspiran a una mayor autonomía en el norte de Malí, y que incluye al MNLA, el HCUA, el MAA y la CPA– rechazó inicialmente la propuesta por considerar que no abordaba las causas del conflicto ni cumplía con sus expectativas al ignorar el estatus político de Azawad. Por su parte, los grupos armados pro-gubernamentales, coordinados bajo el paraguas de la Plataforma –conformado por GATIA, CMPFPR, MAA facción–, aceptaron la propuesta, lo cual dio paso a que el **15 de mayo se firmase en Bamako el primer acuerdo de paz y reconciliación para la resolución de la crisis en el norte del país. La CMA inició un proceso de consultas internas para discutir el texto, adhiriéndose finalmente el 20 de junio**, hecho que fue valorado por diferentes actores y mediadores como un gran paso hacia la consolidación de la paz y la estabilidad en el norte. La firma de la paz conllevó que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase la ampliación del mandato de la MINUSMA por un año, hasta junio de 2016, autorizando la inclusión de 40 observadores militares para vigilar y supervisar el alto el fuego. Tras la

28. Véase el resumen sobre Malí en el capítulo 3 (Procesos de paz).

firma, la situación de seguridad en el norte siguió siendo extremadamente volátil, debido a las violaciones al alto el fuego cometidas por parte de los grupos armados signatarios del acuerdo (la CMA y la Plataforma), así como debido a los ataques perpetrados por grupos de carácter yihadista excluidos del acuerdo de paz. El episodio más grave se registró el **15 de agosto** cuando **miembros de la CMA y las milicias progubernamentales GATIA, se enfrentaron durante tres días por el control de la ciudad de Anéfis**, al norte de la región de Kidal, reportándose al menos 20 muertos. GATIA se hizo con el control de la ciudad en lo que representó una grave violación del acuerdo, debido a que Anéfis había quedado bajo control de la CMA en el momento de la firma del pacto. Este hecho simbolizó la primera crisis en el proceso de paz y fue duramente condenado por el Gobierno de Malí, así como por la ONU y Argelia. La CMA se retiró del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Paz, lo cual planteó serias dudas sobre el posible recorrido del pacto. Tras diferentes mediaciones, el 7 de septiembre GATIA abandonó la ciudad de Anéfis, permitiendo el regreso de la CMA. Este episodio obligó a la MINUSMA a empezar a desplegar a 13 de los 40 observadores militares aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU para velar por el cumplimiento del acuerdo. En este clima de violencia e inseguridad, el Gobierno de Malí anunció el 21 de septiembre el retraso de las elecciones regionales y municipales que estaban previstas para el 25 de octubre. El episodio de Anéfis, que puso en situación límite la frágil paz, dio pie al inicio de conversaciones entre la CMA y la Plataforma, que acabó con acuerdo de cese de hostilidades entre ambos grupos.

Los grupos de corte yihadista, excluidos de las conversaciones de paz en Malí, aumentaron sus ataques y atentados contras las fuerzas e intereses extranjeros

El acuerdo entre los movimientos rebeldes seculares fue considerado por el Gobierno como un gran paso para la implementación de la paz, a la par que fue cuestionado y leído como una traición a la región por parte de los grupos yihadistas, que los acusaron de colaboración con el Gobierno y las fuerzas extranjeras francesas, incrementando la tensión y las hostilidades entre grupos yihadistas y organizaciones armadas árabe-tuareg. El 16 de octubre, Iyad Ag Ghaly, líder del grupo Ansar Dine denunció el proceso de paz y amenazó con intensificar los ataques contra las fuerzas extranjeras y sus aliados. **El 20 de noviembre se producía en Bamako el ataque al hotel Radisson Blu, donde un comando armado retuvo durante horas a cerca de 170 personas, requiriendo la intervención de tropas francesas de élite.** La acción, que fue reivindicada primero por el grupo al-Mourabitoun en colaboración con AQMI y después por el movimiento Macina Liberation Front, se saldó con un balance de al menos 19 personas fallecidas, y puso de manifiesto la creciente capacidad de las organizaciones yihadistas para desarrollar alianzas entre ellas, lo cual representa un nuevo escenario que supone un mayor potencial de desestabilización. El líder de AQMI, Abdelmalek Droukdel, confirmó el 2 de diciembre la alianza con el grupo al-Mourabitoun, liderado por el argelino Mokhtar

Belmokhtar, reivindicando el ataque al hotel como un símbolo de esa unidad. Tras el atentado, el Gobierno maliense se vió obligado a declarar diez días de estado de emergencia, que posteriormente se amplió hasta el 31 de marzo de 2016, debido a amenazas de nuevos atentados.

Por otro lado, y entre las acciones llevadas a cabo en el país contra grupos yihadistas, cabe recalcar que durante el segundo trimestre el Ministerio de Defensa francés informó que fuerzas especiales francesas abatieron, en una operación desarrollada en el norte de Malí, a cuatro presuntos milicianos, entre ellos a Amada Ag Hama, alias “Abdelkrim el Tuareg”, e Ibrahim Ag Inawalen, “Bana”, dos de los principales jefes de AQMI y Ansar Dine, respectivamente; a principios de julio, fuerzas especiales francesas anunciaron la muerte de uno de los líderes de AQMI, Mohammed Ali Ag Wadoussene, en una operación cercana a la ciudad de Kidal; el Gobierno francés también anunció el 20 de diciembre, en el marco de la operación Barkhane, la “neutralización” de diez supuestos yihadistas del grupo al-Mourabitoun en la región de Menaka. En clave humanitaria, según datos de la OCHA, hasta octubre de 2015 se había registrado el retorno a sus comunidades de 477.392 personas, sobre todo a las regiones de Tombuctú y Gao, manteniéndose a 30 de noviembre un número estimado de personas refugiadas malienses en los Estados vecinos de alrededor de 139.502, siendo en Níger y Mauritania donde se concentran la mayoría. Además, cerca de 62.000 personas se encontraban desplazadas internamente y existían 2.011.661 de personas en riesgo de inseguridad alimentaria.

Nigeria (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Boko Haram (BH), Ansaru, Civilian Joint Task Force (milicia progubernamental), Fuerza regional MNJTF (Níger, Benín, Camerún y Chad)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el

país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo.

El conflicto protagonizado por Boko Haram (BH) –que declaró su lealtad a ISIS en marzo del 2015– continuó agravándose durante el año, manteniendo la escalada de la violencia a través de atentados suicidas mientras la disputa se internacionalizó aún más. Como en períodos anteriores, el grupo armado mantuvo sus cruentas ofensivas, atentados, ataques suicidas contra mercados y estaciones de autobuses, ofensivas contra mezquitas, asesinatos indiscriminados y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad nigerianas y de los Estados vecinos. Algunas de sus acciones causaron especial consternación, como por ejemplo el uso de menores para perpetrar ataques suicidas, que se produjeron durante todo el año, principalmente en los estados de Borno, Adamawa, Yobe y Gombe, así como en los países vecinos. Los datos del conflicto en 2014, tal y como presentó el informe del Institute for Economics and Peace, *2015 Global Terrorism Index*, señalaron a la insurgencia dirigida por Abubakar Sekau como el grupo más letal en 2014, con un total de 6.644 muertes que superaron las 6.073 registradas por parte de ISIS.²⁹ Durante el 2015, el programa del Council on Foreign Relations, *The Nigeria Security Tracker*,³⁰ documentó un total de 7.492 muertes producidas por el conflicto en los cuatro estados norteros citados anteriormente, siendo el estado de Borno, con 6.162 muertes reportadas, el epicentro de la violencia del conflicto desatado por BH. La violencia de BH también provocó el desplazamiento forzado interno de 1.491.706 personas en Nigeria, mientras que otras 150.000 buscaron refugio en Chad, Níger y Camerún, según datos del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).³¹ A su vez, datos proporcionados por la agencia de noticias IRIN, estimaron en 66.000 las personas desplazadas internamente en Níger, 68.162 en Chad y 92.658 en Camerún a causa del conflicto con BH. A finales de año, UNICEF denunció el impacto que el conflicto está teniendo en los menores, dejando a cerca de un millón de niños y niñas de Nigeria y los países vecinos sin educación, debido a la imposibilidad de asistir a la escuela, ya que alrededor de 2.000 de ellas permanecen cerradas por el conflicto, habiendo sido cientos saqueadas, quemadas o destruidas. Además, UNICEF denunció que muchas familias no quieren enviar a sus hijos e hijas a las escuelas debido al miedo de que sean atacadas, como ocurrió en 2014 con el

Se incrementó la internacionalización del conflicto con Boko Haram tras el despliegue de la Fuerza Multinacional (MNJTF) con tropas de Níger, Chad, Camerún, Benín y Nigeria

secuestro de 200 niñas de una escuela en Chibok, que siguen aún desaparecidas (en septiembre de 2015 el Gobierno nigeriano confirmó que hubo infructuosos intentos de negociaciones con un ala de BH para lograr su liberación). UNICEF alertó a su vez del incremento de los ataques suicidas como estrategia de guerra por parte de BH, tres cuartas partes de los cuales fueron realizados por medio de mujeres y, en ocasiones, también por niñas. Analistas consideraron que el cambio en el *modus operandi* del grupo se debía al impacto que había tenido la pérdida de territorio por la intervención conjunta de la Fuerza Multinacional Regional (MNJTF), que arrebató a principios de año importantes franjas de territorio a la milicia.

Durante el primer trimestre las acciones de BH destacaron por tratar de boicotear las elecciones presidenciales, así como en reacción a la creación y despliegue de la MNJTF para luchar contra la milicia. **A principios de enero, BH perpetró el que ha sido considerado como una de sus peores acciones, atacando durante días la localidad de Baga** –que había sido declarada como base de la fuerza regional–, en una operación que según organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, causó alrededor de 2.000 víctimas mortales. Durante el segundo trimestre la escalada de violencia por parte de BH continuó en aumento, incrementándose después de la toma de posesión el 29 de mayo del nuevo presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, y extendiéndose a los países vecinos, debido al impulso en la creación de la Fuerza Multinacional Regional. Buhari impulsó la puesta en marcha de la coalición internacional, formada por 8.700 tropas de varios países (Níger, Nigeria, Chad, Camerún y Benín), y modificó su estrategia militar, recolocando el centro de operaciones militares del

Ejército nigeriano de Abuja a Maiduguri, la ciudad más grande del norte y capital del estado de Borno, región en la que BH tiene sus raíces. El 31 de julio los presidentes de Nigeria y Camerún anunciaron el despliegue completo de la MNJTF, notificando que ésta pondría fin a la insurgencia antes de acabar el año. El inicio del segundo semestre del año vino acompañado de nuevos atentados suicidas cometidos por mujeres o menores, enmarcados en la campaña impulsada por ISIS para incrementar la violencia durante el mes del Ramadán, produciéndose ataques periódicos en los estados de Yobe, Benue, Gombe, Adamawa y Borno. Sin embargo, las acciones conjuntas de la MNJTF habían logrado aislar significativamente a BH, arrebatándole una gran parte de su territorio, reduciéndolo a Sambisa Forest, y limitando su capacidad de ataque. Según los datos presentados por el **Armed Conflict Location &**

29. The Institute for Economics and Peace, *2015 Global Terrorism Index*, noviembre de 2015.

30. Council on Foreign Relations, *The Nigeria Security Tracker*.

31. Internal Displacement Monitoring Centre, *Nigeria IDP Figures Analysis*, abril de 2015.

Event Data Project, en noviembre de 2015 las muertes causadas por el conflicto, 230 muertes, representaron los datos más bajos registrados desde febrero de 2013, si bien se cerró el año con una diferencia sustancial después de los alrededor de 3.000 muertos registrados durante el mes de enero de 2015.³² Por otro lado, durante el año, además de los atentados y ataques producidos en el interior de Nigeria, los vecinos Chad, Camerún y Níger también sufrieron diferentes atentados que generaron respuestas por parte de sus Gobiernos.³³

A lo largo del año, la ONG **Amnistía Internacional** hizo públicos dos informes sobre Nigeria. En el primero de ellos, dado a conocer en abril, la ONG denunció que más de 2.000 mujeres y niñas habían sido capturadas por BH desde principios de 2014, siendo sometidas a situaciones de esclavitud sexual y a entrenamiento para participar en ofensivas armadas.³⁴ De acuerdo al informe, BH habría cometido crímenes de guerra y contra la humanidad, incluyendo el asesinato de 5.500 civiles durante 2014 y principios de 2015. En el segundo informe de junio, AI denunció a su vez los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por el Ejército nigeriano en su estrategia de guerra contra BH, instando a que nueve comandantes de alto rango de las Fuerzas Armadas nigerianas sean investigados por la Corte Penal Internacional por su papel en el asesinato, ejecuciones extrajudiciales y torturas a miles de personas en la lucha contra BH.³⁵

Cuerno de África

Etiopía (Ogadén)	
Inicio:	2007
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ONLF, OLF, milicias progubernamentales
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de resistencia al poder central desde los años setenta. El grupo armado ONLF surgió en 1984 y opera en la región etíope de Ogadén, en el sureste del país, exigiendo un mayor grado de autonomía para la comunidad somalí que habita esta zona. En diversas ocasiones el ONLF ha llevado a cabo actividades insurgentes más allá de Ogadén, en colaboración con el grupo armado OLF, que exige al Gobierno una mayor autonomía de la región de Oromiya desde 1973. El Gobierno somalí ha apoyado al ONLF contra Etiopía, con quien se enfrentó por el control de la región entre 1977 y

1978, guerra en la que Etiopía derrotó a Somalia. El fin de la guerra entre Eritrea y Etiopía en el 2000 comportó el incremento de las operaciones del Gobierno para poner fin a la insurgencia en Ogadén y explotar sus recursos naturales. Tras las elecciones celebradas en el año 2005, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el ONLF se incrementaron, aunque en los últimos años la intensidad del conflicto ha disminuido.

No se produjeron grandes cambios en la evolución de la situación de violencia e inseguridad y de ausencia de respeto por los derechos humanos en Ogadén. No se pudieron contrastar las informaciones y actos de violencia que reivindicó la rebelión. **En febrero se reiniciaron las conversaciones de paz entre el Gobierno y el ONLF coincidiendo con versiones de diversos medios que constataron una escalada de los enfrentamientos, aunque no hubo informaciones de nuevos contactos durante todo el año.**³⁶ A principios de junio el ONLF informó en un comunicado de la liberación de dos representantes del grupo, Sulub Ahmed y Ali Hussein, en la localidad fronteriza de Moyale entre Etiopía y Kenya, que habían sido secuestrados en enero de 2014 en Nairobi por parte del Gobierno etíope y trasladados a Etiopía. El Gobierno etíope liberó, según las fuentes independentistas, a ambos delegados tras numerosos esfuerzos diplomáticos llevados a cabo por el Gobierno de Kenya y miembros de la comunidad internacional, lo que fue celebrado por el grupo. Por otra parte, en marzo el primer ministro declaró que el Gobierno planeaba empezar a exportar y utilizar gas natural de la región de Ogadén, lo que fue rechazado por el ONLF, que responsabilizó al Gobierno y a sus socios chinos de estar cometiendo violaciones de los derechos humanos que podrían ser calificadas de genocidio al castigar colectivamente a una parte de la población civil a la inanición, perpetrar ejecuciones sumarias, violaciones en grupo y desplazamiento forzoso.

Uno de los hechos más relevantes del año sucedió entre finales de mayo y principios de junio, cuando **grupos paramilitares de la Administración Regional Etíope en Ogadén, conocidos como la Policía Liyu, llevaron a cabo una operación militar en diversas localidades cerca del distrito ogadeni de Shilaabo, junto a la frontera somalí, ejecutando a centenares de civiles** e incendiando diversas localidades, según destacaron fuentes del grupo armado. Las localidades afectadas fueron Lababaar, Xaadh Xaadh, Xindhowreed y otras cercanas a Barmagoog y a la región fronteriza somalí de Galmudug. En esta ocasión el Gobierno etíope no fue capaz de silenciar los hechos debido a que el gobernador de la vecina región somalí de Galmudug y las autoridades gubernamentales somalíes confirmaron la muerte de al

32. Armed Conflict Location & Event Data Project, Conflict Trends (No.44), *Real-Time Analysis of African Political Violence*, diciembre de 2015.

33. Véase el resumen de Camerún, Chad y Níger en el capítulo 2 (Tensiones).

34. Amnesty International, *Our job is to shoot, slaughter and kill! Boko haram's reign of terror in north-east Nigeria*, AFR44/1360/2015, 14 de abril de 2015.

35. Amnesty International, *Stars on their shoulders. Blood on their hands. War crimes committed by the Nigerian military*, AFR44/1657/2015, junio de 2015.

36. Véase el resumen sobre Etiopía (Ogadén) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

menos 50 personas –11 mujeres entre ellas, así como menores y ancianos– y admitieron que otras decenas habrían resultado heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre una milicia clánica somalí y la Policía Liyu, en territorio somalí, cerca de la frontera. En septiembre trascendió que el grupo armado somalí al-Shabaab había capturado y ejecutado a dos oficiales del ONLF en mayo cuando viajaban de la localidad somalí de Baidoa, controlada por el Gobierno Federal somalí, hacia Ogadén. No es la primera vez que la insurgencia yihadista ejecuta a miembros del ONLF, ya que previamente ocho miembros del grupo, entre los que se encontraba su secretario de Defensa, habían sido ejecutados. El ONLF condenó los hechos y señaló que el grupo no participa en el conflicto y que siempre se ha distanciado de la guerra en Somalia. Según diversas fuentes, algunas milicias somalíes y administraciones locales corruptas obtienen favores por parte de Etiopía a cambio de informar o incluso detener miembros del ONLF o población refugiada ogadeni, que puede ser sometida a torturas o incluso ser ejecutada por el Ejército etíope. Por último, cabe destacar el encuentro celebrado en Oslo por parte de cinco movimientos político-militares opuestos al Gobierno etíope el 24 de octubre, que anunciaron la formación de la People's Alliance for Freedom and Democracy (PAFD), que incluye el ONLF.

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, milicias y señores de la guerra progubernamentales, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab, Eritrea
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU, y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía (para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de

los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y kenyanas presentes en el país) y las tropas gubernamentales se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

A pesar de la persistencia del clima de guerra e inseguridad en distintas partes del sur en Somalia, se produjeron progresos en el ámbito político.

En el ámbito de la seguridad continuaron los ataques y emboscadas por parte de al-Shabaab, que infligió severas derrotas a la misión de la UA en Somalia (AMISOM) y al Ejército somalí. El cambio de estrategia desde 2011 hacia la guerra de guerrillas llevada a cabo por parte de al-Shabaab ante las diferentes ofensivas combinadas por parte de AMISOM y las Fuerzas Armadas somalíes provocaron graves pérdidas en vidas humanas para la misión de la UA. Durante el Ramadán, al-Shabaab, como en los últimos años, incrementó sus acciones armadas. El centro de investigación Armed Conflict Location & Event Data Project atribuyó a al-Shabaab 2.496 víctimas mortales durante el año 2015. La misión sufrió los dos peores ataques desde el inicio de su presencia en el país en 2007. En junio murieron 50 soldados burundeses de los 100 de la base de la localidad de Lego, a 62 km de Mogadishu, que cayó bajo su control y fue saqueada por completo. A principios de julio AMISOM anunció el lanzamiento de una nueva acción militar, la Operación Jubba Corridor, la tercera de forma conjunta con el Ejército somalí desde 2010, implicando a las fuerzas de Kenya y Etiopía en las regiones de Bay, Bakool y Gedo, con fronteras con ambos países, al oeste y al sur de Mogadiscio. Aunque la operación consiguió expulsar a la insurgencia de dos de los últimos feudos urbanos que controlaba, Bardhere (Gedo) y Dinsoor (Bay), bajo su mando desde hace ocho años, no debilitó al grupo y puso de manifiesto las debilidades estratégicas (toma de ciudades rodeadas por territorio en manos de al-Shabaab), logísticas (dificultades para mantener los suministros de sus bases ante la escasez de recursos), de coordinación de mando (tensiones entre las tropas de Djibouti y las de Etiopía)³⁷ y de capacidad ofensiva de la AMISOM, lo que supuso incluso el cuestionamiento de su estrategia general en Somalia.³⁸ Algunas de estas cuestiones se pusieron de manifiesto el 1 de septiembre en el ataque a la base del distrito de Jannale, a unos 80 km al suroeste de Mogadishu, en la que murieron al menos 70 soldados ugandeses de la AMISOM. **A principios de septiembre se hizo público que la AMISOM habría podido sufrir más de 1.100 víctimas mortales desde 2009 a raíz**

37. Somali Current, "‘Ethiopians forces are not in the country to help Somalia regain peace and security’ Djibouti commander", *Somali Current*, 17 de agosto de 2015; Africa Review, "Djibouti denies Ethiopian troops in Somalia don't answer to Amisom", *Africa Review*, 26 de agosto de 2015.

38. Muhyadin Ahmed Roble, "Al-Shabaab has changed its tactics. AMISOM must do so too", *African Arguments*, 9 de septiembre de 2015.

de informaciones que la misión habría facilitado al centro de investigación SIPRI. Ya en 2013 el secretario general adjunto de la ONU, Jan Eliasson, afirmó que más de 3.000 soldados habrían muerto desde el inicio de la intervención en 2007, pero al no disponer de pruebas, la ONU tuvo que retractarse. Al-Shabaab llevó a cabo retiradas estratégicas que no le supusieron pérdidas humanas y materiales. Persistieron los atentados suicidas, ataques a instituciones, bases y convoyes, asesinatos de políticos y trabajadores humanitarios. No obstante, cabe destacar las divisiones en el seno de al-Shabaab, aliado de al-Qaeda, por las aproximaciones de algunos sectores al grupo armado Estado Islámico (ISIS) debido a la pérdida de fuentes de recursos y a los éxitos militares de ISIS, sobre todo entre los combatientes extranjeros,³⁹ lo que provocó purgas y ejecuciones. Boko Haram (Nigeria) e ISIS (Siria e Iraq) hicieron llamamientos al grupo a unirse a ISIS.⁴⁰ Presionado, al-Shabaab siguió extendiendo progresivamente sus actividades hacia el norte del país, lo que provocó que Puntlandia continuara sufriendo un aumento de los ataques durante el año. La pérdida de fuentes de recursos de al-Shabaab provocó también un incremento de secuestros. Cabe destacar un informe de Journalists for Justice publicado en noviembre, que señaló la implicación de altos cargos de las Fuerzas Armadas de Kenya en el comercio ilegal de azúcar y carbón vegetal en el país y cómo este negocio proporcionaba un fuente vital de ingresos a al-Shabaab, lo que generó numerosas críticas.⁴¹

Sin embargo, **hubo un avance general del proceso de formación de estados federales en el país, no exento de dificultades en cuanto a la apropiación del proceso por parte de los actores locales y disputas en torno al liderazgo y a fronteras.** Solo quedó pendiente para 2016 la formación del estado federal de Hiiraan y Middle Shabelle. Entre el 29 y el 30 de julio se celebró la segunda reunión del High Level Partnership Forum, espacio copresidido por el presidente federal Mohamud y el representante especial del secretario general de la ONU, Nicolas Kay, que supone la principal plataforma de diálogo de alto nivel sobre la implementación del proceso de Somalia conocido como New Deal Somali Compact. Ésta fue la mayor conferencia internacional celebrada en Mogadishu en al menos 25 años, en la que participaron representantes y delegados internacionales de más de 30 países, líderes gubernamentales y de las administraciones regionales. Los participantes reconocieron que una elección basada en el principio de un voto por persona no sería posible en 2016, por lo que acordaron la celebración de un proceso consultivo

La estrategia general de la AMISOM en Somalia fue cuestionada debido a los numerosos ataques sufridos, sus debilidades estratégicas, logísticas y de coordinación

con los diferentes actores políticos para determinar los pasos a seguir. Entre el 19 y el 20 de octubre se celebró la National Consultative Forum (NCF) en Mogadishu para determinar el proceso para que el Parlamento y el Gobierno sean renovados en agosto y septiembre de 2016, tal y como estableció la Constitución Federal Provisional de 2012. El 16 de diciembre el NCF hizo públicas las consultas sobre cómo constituir el Gobierno, que se concretaron en un acuerdo el 10 de enero de 2016.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, facciones de antiguos grupos armados
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país.

La violencia política y la inestabilidad escalaron dramáticamente durante todo el año situando al país en un clima de guerra, en paralelo al bloqueo y fracaso de las diferentes iniciativas de diálogo entre el Gobierno y la oposición.⁴² La oleada de creciente represión de la oposición que había afectado el país durante 2014 continuó en 2015 con la detención y juicio de líderes opositores, amenazas a periodistas y defensores de los

39. The Guardian, "Tensions rise as al-Shabaab foreign fighters consider supporting Isis", *The Guardian*, 8 de diciembre de 2015.

40. Hiraan Online, "Come and join the caliphate, ISIS urges Al-Shabab" y "Join ISIS - Nigeria's Boko Haram tells Al-Shabab", *Hiraan Online*, 4 y 15 de octubre de 2015, respectivamente.

41. Journalists for Justice, *Black and White. Kenya's Criminal Racket in Somalia*, International Commission of Jurists, Nairobi, noviembre de 2015.

42. Véase "Al borde de la guerra civil en Burundi" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2016).

derechos humanos, y una acción bélica en Cibitoke en la que murieron al menos 100 combatientes burundeses que procedían de RDC, muchos de ellos tras haber sido apresados por los cuerpos de seguridad. Esta situación se agravó ante la calculada ambigüedad con que el presidente Pierre Nkurunziza y el CNDD-FDD fueron respondiendo a la posibilidad de presentarse a un tercer mandato. En abril de 2015 el mandatario anunció su candidatura, ratificada por la Corte Constitucional en mayo. Nkurunziza argumentó que su primer mandato post transición no debía ser contabilizado porque fue escogido por las Cámaras alta y baja, tal y como admitía de forma excepcional el artículo 302 de la Constitución para dar encaje al presidente saliente de la transición en 2005. Sectores de su propio partido se opusieron a su candidatura, y se desencadenaron amplias movilizaciones en abril y mayo y un clima de violencia política que provocó entre abril y noviembre alrededor de 240 víctimas mortales, según ACNUR, cifra que se habría incrementado en diciembre con entre 100 y 250 víctimas mortales, de acuerdo a otras fuentes.

Esta movilización social vino acompañada de un intento de golpe de Estado el 13 de mayo capitaneado por el antiguo jefe de los servicios secretos, el general Godefroid Nyombare, que en un primer momento anunció la destitución del presidente mientras éste se encontraba en Dar es Salaam (Tanzania) en una reunión de la Comunidad de África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés) sobre la crisis que vivía el país centroafricano. Nyombare había sido destituido en febrero tras desaconsejar a Nkurunziza presentarse a un tercer mandato, considerado inconstitucional por sus adversarios políticos. El Gobierno consiguió desarticular la intentona, a pesar de que en un primer momento Nkurunziza no pudo regresar a Burundi porque los golpistas habían bloqueado el aeropuerto. Las fuerzas especiales burundesas y las Imbonerakure (juventudes radicales del partido gubernamental CNDD-FDD) permanecieron fieles a Nkurunziza lo que desencadenó duros combates en la capital, de los que se desconoce el número de víctimas mortales. El Gobierno de Nkurunziza fue restituido y los tres generales que lideraban la intentona se entregaron a las autoridades. Tras el golpe, y a pesar de la movilización social y los tibios esfuerzos de la comunidad internacional para intervenir, las elecciones legislativas y comunales se celebraron el 29 de junio, a pesar del boicot de la oposición, y fueron ganadas por el CNDD-FDD en un clima de miedo. Posteriormente, el 21 de julio tuvieron lugar las elecciones presidenciales, nuevamente boicoteadas por la oposición. El proceso fue criticado de forma unánime por la oposición política, social y religiosa del país y calificado como no creíble por la comunidad internacional debido al clima de violencia, intimidación, restricciones a los medios de comunicación y a la falta de legitimidad del tercer mandato de Nkurunziza. **Tras las elecciones persistió el clima de represión y**

Las movilizaciones contra el tercer mandato del presidente burundés no consiguieron frenar su candidatura y posterior victoria en las elecciones de julio, boicoteadas por la oposición

purga de la oposición y la presión sobre los medios de comunicación en un marco de creciente violencia por el continuo goteo de noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, atentados y hostigamiento a la oposición política y a altos cargos del Gobierno. Los esfuerzos mediadores llevados a cabo a mediados de julio por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, que inició conversaciones con el Gobierno burundés y la oposición, no dieron resultado. Las presiones de la organización regional EAC y la UA para fomentar el diálogo entre las partes enfrentadas se vieron debilitadas por sus propios líderes vecinos, que han seguido estrategias similares a Nkurunziza para permanecer en el poder, como Yoweri Museveni, Robert Mugabe o Paul Kagame, entre otros, por lo que su capacidad de influencia en Nkurunziza fue baja. La UA y la ONU alertaron en agosto de las consecuencias potencialmente catastróficas para el país y el conjunto de la región si la clase política burundesa no resolvía sus diferencias de forma pacífica y dialogada. El Ejército anunció a mediados de julio la muerte de 15 posibles insurgentes y la captura de otros 170 en diversos combates en el norte del país, aunque el liderazgo de la rebelión era confuso.

A principios de septiembre se produjeron diversas movilizaciones en algunos barrios de Bujumbura como consecuencia de operaciones de desarme forzoso llevadas a cabo por la Policía. El Departamento de Estado de EEUU hizo un llamamiento al desarme de las milicias, tanto las opositoras como las progubernamentales (en referencia a las Imbonerakure) para evitar una escalada de la violencia. A finales de septiembre el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció el alarmante incremento de asesinatos y arrestos en el país desde que el presidente renovara su cargo en las elecciones de julio, y el reconocido defensor de los derechos humanos en el país, Pierre Claver Mbonimpa, hizo un llamamiento a la UE a que suspendiera la ayuda al Gobierno como mecanismo de presión para frenar la espiral de violencia. A principios de octubre se creó la Commission Nationale du Dialogue Inter Burundais (CNDI) para promover el diálogo entre el Gobierno y la oposición, aunque esto no significó una reducción de la violencia. Al contrario, fueron proliferando las escaramuzas entre milicias y grupos insurgentes contra los cuerpos de seguridad, el lanzamiento de granadas y acciones bélicas en barrios de la capital, Bujumbura, y en la provincia de Bujumbura Rural, que la rodea. Esta situación sufrió un nuevo deterioro a finales de año. El día 11 de diciembre se produjeron ataques coordinados contra tres campos militares por grupos insurgentes no identificados que recibieron una contundente respuesta por parte de las Fuerzas Armadas, que anunciaron la muerte de al menos 87 personas, entre las cuales se encontraban ocho miembros de los cuerpos de seguridad y el resto eran supuestos miembros de la insurgencia. Diversas fuentes locales elevaron la cifra a 200 víctimas mortales, muchas de las cuales producto de ejecuciones extrajudiciales, lo que desencadenó una respuesta del Consejo de Paz

y Seguridad de la UA que el 17 de diciembre anunció el despliegue de una misión de intervención robusta con unos 5.000 militares. El presidente amenazó que consideraría una agresión una intervención de tropas extranjeras. Posteriormente, el 23 de diciembre diversos grupos armados anunciaron la creación de las Forces Républicaines du Burundi (FOREBU). Diversas iniciativas abiertas a finales de 2015 por los líderes regionales y la comunidad internacional combinaron propuestas de diálogo con sanciones focalizadas a actores gubernamentales.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, miembros desmovilizados de la ex coalición rebelde Séléka (escisiones de los antiguos grupos CPJP, UFDR y CPSK), milicias antibalaka, Francia (operación Sangaris), MICOPAX/ FOMAC (transformada en la misión de la UA, MISCA, actualmente misión de la ONU MINUSCA), EUFOR, grupos vinculados al antiguo Gobierno de François Bozizé, otros remanentes de grupos armados (antiguas Fuerzas Armadas), grupo armado ugandés LRA
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Djotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana (“anti-balaka”). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada.

La transición política avanzó en el país a pesar de los retrasos en el proceso electoral y la inestabilidad y violencia permanente. Persistió la violencia y la inseguridad durante todo el año, a pesar de los esfuerzos de las misiones internacionales por garantizar la seguridad. El país siguió dividido en dos grandes zonas de influencia: en el norte, los grupos que formaban la antigua coalición Séléka; en la zona centro-oeste, las milicias anti-balaka; y en el sureste, el grupo armado de origen ugandés LRA. Un ejemplo de esta fragmentación fue el anuncio del rebelde Nourredine Adam, líder de una facción de Séléka, que proclamó la autonomía de la República de Logone, en el norte, en diciembre. El epicentro de las confrontaciones entre las milicias anti-balaka y elementos de la antigua coalición Séléka se situó en la zona de contacto entre las respectivas áreas de influencia, entre Batangafo, Kaga Bandoro y Bambari, tal y como destacó el International Crisis Group, y los enfrentamientos entre las milicias estuvieron acompañados de tensiones intercomunitarias.⁴³ Además, **se mantuvo un elevado clima de inestabilidad y delincuencia en la zona fronteriza con Camerún y parte de la frontera con Chad, en manos de los zaraguinas (asaltadores de caminos).** Amnistía Internacional realizó un llamamiento al Gobierno para controlar el comercio ilícito de diamantes porque podría estar financiando a los grupos armados. En julio Global Witness señaló que empresas europeas estaban haciendo negocios con la explotación de la madera con firmas que estarían financiando a las milicias de ambos bandos. Uno de los hechos más destacados del año fue la escalada de la violencia que tuvo lugar a finales de septiembre cuando se desencadenaron duros combates en Bangui entre **milicias rivales, provocando el desplazamiento forzado de alrededor de 30.000 personas y al menos unas 60 víctimas mortales mientras que más de 300 personas resultaron heridas,** según diversas fuentes. Las milicias atacaron la prisión de Bangui, liberando a unos 500 presos. La MINUSCA y la misión francesa Sangaris intervinieron para frenar las movilizaciones que se desencadenaron en la capital y que pretendían la dimisión de la presidenta y criticaban el papel de las fuerzas internacionales. Se produjeron otras movilizaciones en Bambari y Kaga Bandoro. Bangui había estado relativamente en calma desde hacía meses y los nuevos enfrentamientos coincidieron con la ausencia de la presidenta, Catherine Samba-Panza, que se encontraba en Nueva York participando en la Asamblea General de la ONU y que acortó su viaje para regresar de inmediato. A su llegada el 30 de septiembre la presidenta denunció un intento de golpe de Estado, cuyo objetivo sería afectar el proceso electoral y romper el diálogo político.

Nuevos escándalos sobre **abusos y violencia sexual por parte del personal civil y/o militar de la MINUSCA sumados a los cometidos por los soldados franceses de la Operación Sangaris socavaron la credibilidad de la**

43. International Crisis Group, *The Roots of Violence*, Africa Report no. 230, 21 de septiembre de 2015.

comunidad internacional en el país.⁴⁴ Un informe de un grupo de expertos independientes creado en junio por el propio secretario general de la ONU y hecho público en diciembre puso de manifiesto el fracaso y la mala gestión por parte de la ONU, la poca atención y la ausencia de la sensibilidad requerida. Ban Ki-moon intentó hacer frente a esta situación forzando la dimisión de su representante en el país en agosto. La ONU incrementó la misión en 1.140 cascos azules, en el marco del periodo electoral, y desplegó aviones no tripulados en Bangui. En noviembre, Senegal, Egipto y Mauritania se comprometieron a enviar nuevos contingentes militares y policiales para reforzar los 12.000 miembros de la MINUSCA, en paralelo a la reducción de efectivos por parte de Francia, que pasó de tener más de 2.000 efectivos a alrededor de 900. Otro de los hechos más destacados del año fue la visita del Papa Francisco al país a finales de noviembre al término de su viaje a África, que le llevó también a Kenya y a Uganda. El Pontífice recibió un baño de multitudes y se reunió con los líderes religiosos, las autoridades políticas y el cuerpo diplomático, a pesar de la situación de inseguridad y violencia, razón por la cual estuvo envuelto en fuertes medidas de seguridad. Especialmente relevante y simbólica fue la visita a la mezquita de Koudoukou, en el PK5, barrio sometido a bloqueo donde viven alrededor de 15.000 musulmanes rodeados de milicias anti-balaka, en una ciudad donde antes del último periodo de guerra iniciado en 2013 vivían más de 122.000 personas de esta confesión.

La Autoridad Electoral pospuso el calendario propuesto en junio para celebrar las elecciones presidenciales en octubre al 27 de diciembre ante la parálisis en la aplicación de las recomendaciones derivadas de los acuerdos del Foro de Bangui, el deterioro de seguridad y la lentitud en la puesta en marcha de los preparativos de cara a los comicios y en el registro de la población refugiada. Finalmente el 30 de diciembre se celebraron las elecciones legislativas y presidenciales en medio de un clima de calma y con una alta participación. Sus resultados dieron la victoria a Anicet-Georges Dologué y a Faustin Archange Touadéra, ambos con el apoyo del partido del ex presidente François Bozizé, el KNK. Aunque la comunidad internacional valoró positivamente las elecciones, el recuento de votos fue lento y problemático. Previamente, 30 candidaturas, incluida la de Bozizé, fueron invalidadas por el Tribunal Constitucional. Una decena de candidatos lanzó un comunicado cuestionando el proceso y calificándolo de mascarada electoral, e interpusieron recursos ante el Tribunal denunciando el fraude, intimidaciones y otras irregularidades. En paralelo, el 13 de diciembre se celebró el referéndum constitucional, que ratificó la Constitución con un apoyo superior al 90%, según la ONU, lo que

fue celebrado por la comunidad internacional, en medio de importantes déficits logísticos y técnicos. La segunda vuelta estaba prevista para el 31 de enero de 2016. El plazo para la transición se prolongó hasta el 31 de marzo de 2016, decisión aprobada por la cumbre de los jefes de Estado de la CEEAC.

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias Mai-Mai, FDLR, M23 (ex CNDP), APCLS, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, Rwanda, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de éste en 1997. Posteriormente, en 1998, Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio rwandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Rwanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada.

Durante el año persistió la inestabilidad y las operaciones militares en el este del país por parte de las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC), así como acciones esporádicas de los grupos armados y las milicias Mai Mai en las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri. En enero finalizó el plazo que el Consejo de Seguridad de la ONU había establecido para que el grupo armado de origen rwandés FDLR llevara a cabo su desarme voluntario, lo que dio luz verde a una operación militar contra esta insurgencia. Al vencimiento del plazo, de un total de 1.500 combatientes de las FDLR solo se habían desmovilizado 339. En febrero el Gobierno puso en marcha la operación militar Sukola II, sin el apoyo

El balance anual de la ofensiva contra las FDLR en RDC (este) fue un fracaso ya que su capacidad militar y estructura de mando siguieron intactas, según la ONU

44. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).

de la MONUSCO tras la negativa del Gobierno a sustituir a dos generales implicados en la operación acusados de graves violaciones de los derechos humanos. El balance anual de la ofensiva fue considerado un fracaso ya que, tal y como señalan los diferentes informes de la ONU sobre la cuestión, la capacidad militar de las FDLR, el número de efectivos, sus dirigentes y la estructura de mando seguían intactas a finales de 2015. Además, la ofensiva gubernamental provocó vacíos de seguridad en otras zonas de las provincias como consecuencia del repliegue para poder llevar a cabo las acciones militares, y se incrementaron los saqueos contra la población civil para subsanar las pérdidas por las fuentes de ingresos tradicionales del grupo (explotación del carbón vegetal, minería, madera, cobro de impuestos y extorsiones). El mismo Grupo de Expertos señaló en octubre de 2015 que las posteriores operaciones de las FARDC obligaron a las FDLR a retirarse de algunas de sus posiciones, además de causar problemas temporales en algunos de sus flujos de ingresos.

Un informe del UNEP destacó que los grupos armados y vinculados a la criminalidad en RDC expolían 1.300 millones de dólares en recursos naturales al año

En paralelo, la aplicación de las Declaraciones de Nairobi relativas a la rendición del grupo armado M23 (vinculado a los sectores pro rwandeses y de la comunidad tutsi banyamulenge, grupo enfrentado a las FARDC y a diversas milicias Mai Mai y las FDLR), amnistía y retorno de los ex combatientes del grupo también fue negativa, ya que solo 180 miembros del grupo regresaron a RDC de los 2.000 combatientes que tendría oficialmente el grupo. El Gobierno y el M23 se acusaron mutuamente de incumplir el acuerdo, e incluso el Gobierno congolés denunció filtraciones de ex combatientes del M23 en el este de RDC. La proliferación y fragmentación de grupos y milicias en el este, alrededor de 70, una menor implicación a nivel regional y la persistencia de la instrumentalización de esta situación, tal y como señaló en noviembre Congo Research Group pusieron de manifiesto la persistencia del conflicto e incluso la volatilidad de la situación,⁴⁵ lo que vinculado a la situación política en el país, podría provocar una deriva autoritaria y una escalada del conflicto armado para 2016.⁴⁶ En lo concerniente al grupo armado FRPI que opera en la región de Ituri, en la provincia de Orientale, hubo dos fracasados intentos de negociación a finales de 2014 y en junio de 2015 y, posteriormente, las FARDC llevaron a cabo operaciones militares contra el grupo armado, en las que la MONUSCO colaboró. Los efectivos de las FRPI se dispersaron como consecuencia de estas operaciones, pero siguieron cometiendo abusos contra la población civil. En este

sentido, el Grupo de Expertos de la ONU en su informe publicado en octubre certificó que continuó el tráfico de recursos naturales y que los grupos armados y algunos oficiales de las FARDC todavía se benefician de su explotación y de los impuestos que se cobran por ellos.⁴⁷

En Rwanda se siguen vendiendo en el mercado negro las etiquetas destinadas a localizar los minerales concebidas para garantizar su trazabilidad, lo que puede dar lugar a que minerales procedentes de zonas de conflicto del este de la RDC ingresen al mercado internacional. En este sentido, un informe del UNEP en abril destacó que los grupos armados y vinculados a la criminalidad expolían 1.300 millones de dólares en recursos naturales cada año del país.⁴⁸ Los beneficios derivados del tráfico de oro, maderas nobles, carbón vegetal y marfil financian al menos a 25 grupos armados. Por otra parte, según OCHA, la situación humanitaria en RDC siguió siendo grave, ya que más de 7,5 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria, en particular en el este, como resultado de la actividad de los grupos armados y de las operaciones militares contra esos grupos, los enfrentamientos entre comunidades y la afluencia de población refugiada. Un total de 1,6 millones de personas continuaban desplazadas dentro del país a finales de 2015. La ONU registró a más de 248.000 personas refugiadas en RDC, de las que 21.560 procedían de Burundi, 104.956 de RCA y una cifra estimada en 11.699 de Rwanda, lo que pone de manifiesto la situación de inestabilidad en estos tres países vecinos.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	=
Síntesis:	La Alianza de Fuerzas Democráticas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congolese que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenya y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF)

45. Jason K. Stearns y Christoph Vogel, *The Landscape of Armed Groups in the Eastern Congo*, Congo Research Group – Center on International Cooperation, diciembre de 2015.
 46. Véase “RDC ante el riesgo de una escalada de la inestabilidad política y del conflicto armado en 2016” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2016).
 47. Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo, *Informe de mitad de período del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, Consejo de Seguridad de la ONU, 2015/797, 16 de octubre de 2015.
 48. UNEP-MONUSCO-OSESG, *Experts’ background report on illegal exploitation and trade in natural resources benefitting organized criminal groups and recommendations on MONUSCO’s role in fostering stability and peace in eastern DR Congo*, UNEP-MONUSCO-OSESG, 15 de abril de 2015.

y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenya y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congoleesa, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil.

Continuó por segundo año la ofensiva militar Sukola I contra el grupo armado ADF en la provincia de Kivu Norte.

Las ADF continuaron siendo móviles y operando en pequeños grupos, y persistieron los ataques contra la población civil durante todo el año sobre todo en el eje Beni-Eringeti y sus cercanías, que se convirtió en su zona de operaciones. Las Fuerzas Armadas congoleesas (FARDC) tuvieron el apoyo ocasional de la MONUSCO, en particular mediante acciones de reconocimiento conjuntas, intercambios de información y apoyo en alguna operación de combate. Aunque las operaciones contra las ADF se prolongaron durante un segundo año, muy pocos efectivos dejaron ese grupo durante el período. Desde la muerte en 2014 del general congolés Lucien Bahuma, que dirigía la ofensiva contra el grupo, las operaciones Sukola I de las FARDC contra las ADF lograron pocos avances, según el Grupo de Expertos de la ONU. Este grupo señaló que estos magros resultados podrían deberse también a que oficiales de las FARDC se dedicaron durante este periodo a hacer negocios con la explotación y el comercio de madera. Su sustituto, el general Muhindo Akili Mundos, fue relevado en junio de 2015 ante el estancamiento de la situación. El general Marcel Mbangi Mashita le relevó y desde entonces se informó de una nueva ofensiva de las FARDC contra las ADF. Aunque debilitadas por las operaciones, las ADF mantuvieron la capacidad de lanzar ataques y lograron renovar su capacidad operacional al absorber en sus filas a grupos escindidos de milicias. **Entre octubre de 2014 y junio de 2015, murieron entre 350 y 450 civiles en la zona de Beni**, en la provincia de Kivu Norte, en al menos 50 incidentes distintos, de los que se responsabiliza en buena parte a las ADF. Tanto las FARDC como el Mecanismo Conjunto de Verificación estimaron que el grupo estaba compuesto por unos 150 combatientes, cifra ampliada hasta los 260 combatientes, según la MONUSCO. El dirigente del grupo, Jamil Mukulu, fue detenido en abril en Tanzania, pero el resto de la jerarquía del grupo se mantuvo prácticamente intacta, según el informe del Grupo de Expertos en octubre. Mukulu fue extraditado de Tanzania a Uganda a principios de julio, acusado por un tribunal ugandés de ser responsable de crímenes contra la humanidad. A raíz de la detención de su líder, el grupo –que está

sometido a sanciones– incrementó los ataques contra la población civil. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en RDC llevó a cabo una investigación entre octubre y diciembre de 2014 que se hizo pública en mayo en la que se señaló que los ataques que estuvo llevando a cabo el grupo armado podrían calificarse de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en lo concerniente al derecho internacional. Por otra parte, cabe destacar que el Grupo de Expertos intentó corroborar las informaciones según las cuales podía existir una relación entre las ADF y grupos armados islamistas extranjeros como el grupo somalí al-Shabaab, pero no encontró pruebas que sustentaran estas sospechas. Altos cargos gubernamentales de RDC y de Uganda señalaron que no había pruebas que vincularan a las ADF con estos grupos armados extranjeros.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, unidades paramilitares RSF, <i>janjaweed</i> , coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), otros grupos
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes *janjaweed*. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia recrudesció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario.

2015 representó un año marcado por el estancamiento de las conversaciones de paz en el país, inclusive cuando el Gobierno de Sudán había decretado un alto el fuego con el objeto de facilitar la adhesión y participación de todas las partes.⁴⁹ Si bien las conversaciones de paz no produjeron avances significativos, sí se registró

49. Véase el resumen sobre Sudán (Darfur) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

una disminución del número de eventos violentos en la región de Darfur, así como en los conflictos ubicados en las regiones del Kordofán Sur y Nilo Azul, durante el segundo semestre del año. El centro de investigación Armed Conflict Location & Event Data Project's (ACLED) registró al respecto hasta un 83% menos de actividad armada –datos comparativos entre enero y noviembre de 2015–.⁵⁰ En esta tendencia, el mes de agosto presentó los niveles más bajos de violencia política padecidos en Sudán en todo el año, tanto en términos de actividad como en número de víctimas mortales reportadas, sin llegar a registrarse ataques provenientes de las dos principales milicias progubernamentales, las Rapid Support Forces (RSF) y las Popular Defence Forces (PDF), produciéndose un descenso igualmente significativo en cuanto a la actividad rebelde se refiere. Este hecho tuvo una relación directa con la propuesta de retomar el Diálogo Nacional por parte del Gobierno de Omar al-Bashir para buscar una solución conjunta de los conflictos sudaneses. **Si bien en términos generales Darfur logró reducir las cifras de violencia durante el año, continuó siendo la región más conflictiva de todo el país. ACLED registró 1.197 diferentes incidentes relacionados con la seguridad en todo el país (ataques, asesinatos, disturbios, violencia contra civiles, etc.), de los cuales, el 68% se registraron en la región de Darfur.** Una parte importante de la responsabilidad de estas cifras la tuvieron los enfrentamientos intercomunitarios registrados durante el año, donde se vieron inmersas principalmente comunidades rizeigat, ma'aliya y habaniya. Al respecto, dos de los peores enfrentamientos intercomunitarios del año se produjeron el 12 de mayo, cuando miembros del grupo rizeigat atacaron la ciudad de Abu Karinga, Darfur Este, con un balance de alrededor de 84 muertos de la tribu ma'aliya; y el 14 de julio, con un enfrentamiento entre miembros de los grupos rizeigat y habaniya en la localidad de Sunta, Darfur Sur, que dejaron un balance de 176 personas muertas y decenas heridas. Este tipo de enfrentamientos, junto a las acciones bélicas de las milicias janjaweed y RSF, mantuvieron unas cifras de desplazamiento interno forzado en Darfur de alrededor de 2,5 millones de personas, de las cuales el 60% –1,5 millones– eran menores (según datos proporcionados por OCHA en noviembre).⁵¹ Además, a finales de junio se contabilizaban 367.229 personas refugiadas en campos de ACNUR en Chad, y 1.883 en la RCA. Durante el año, el conflicto de Darfur también generó diferentes denuncias relativas a las **graves violaciones de los derechos humanos** producidos en la región, sobre todo en lo concerniente a la **violencia sexual contra mujeres y niñas**.⁵²

Los tres principales grupos rebeldes de Darfur (JEM, SLM-AW y SLM-MM) se comprometieron a impulsar la protección y los derechos de los menores

Como nota positiva, resaltó durante el mes de mayo el anuncio realizado por los tres principales grupos rebeldes de Darfur –el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM), el Movimiento de Liberación de Sudán dirigido por Abdel Wahid El Nur (SLM-AW) y el SLM bajo el mando de Minni Minnawi (SLM-MM)–, **comprometiéndose a impulsar la protección y los derechos de los menores a través de la adhesión a las normas internacionales vigentes**, compromiso que fue ratificado en una reunión consultiva mantenida los días 27 y 28 de mayo en Stadtschlaining, Austria, en el Centro Austríaco de Estudios para la Paz y la Resolución de Conflictos.

Por otro lado, y en lo concerniente al papel y despliegue de la fuerza híbrida de paz en Darfur, **la UNAMID** (conformada por tropas de la UA y de la ONU) el Gobierno de al-Bashir y la ONU mantuvieron durante el año disputas sobre la continuidad de la misión internacional. El Secretario General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, Edmond Mulet, defendió frente al Consejo de Seguridad de la ONU, reunido el 10 de junio, la necesidad de mantener la misión debido a los esfuerzos insignificantes del Gobierno de Sudán para la construcción de la paz en Darfur. Señaló que la segunda fase de la operación gubernamental “Decisive Dry Season”, apoyada por fuerzas paramilitares, tiene como objetivo poner fin a la rebelión por medios militares, lo cual está provocando graves daños y desplazamientos a la población civil. El Gobierno de Sudán negó que el Ejecutivo estuviese detrás de la violencia y los desplazamientos, afirmando que estos se debían a enfrentamientos tribales y ataques de los rebeldes y que, por lo tanto, Sudán reiteraba que la misión de la UNAMID había concluido. Sin embargo, el 29 de junio, el Consejo de Seguridad decidió ampliar el mandato de la UNAMID un año más. A finales de septiembre, la UNAMID tenía registradas 218 bajas desde el momento de su despliegue el 31 de julio de 2007. Finalmente, cabe reseñar el anuncio realizado por el presidente al-Bashir en sesión parlamentaria del 19 de octubre, de la previsión de celebración del **referéndum sobre el estatus de la región de Darfur** para el mes de abril de 2016, según estaba previsto en el Doha Document for Peace in Darfur (DDPD). El anuncio suscitó críticas por parte de grupos parlamentarios de la oposición, así como por organizaciones de la sociedad civil, como la Darfur Civil Society Organisation, quienes han demandado su retraso debido a que no se dan las condiciones actualmente, ya que su celebración podría incidir en enfrentamientos y en una mayor polarización social.

50. Armed Conflict Location & Event Data Project's, *South Sudan and Sudan 2015 update*, December ACLED-Africa Conflict Trends Report.

51. OCHA, *Humanitarian Bulletin Sudan*, no.47, 16 – 22 de noviembre de 2015.

52. Véase el resumen sobre Sudán (Darfur) en el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	
Inicio:	2011
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

La reconfiguración nacional de Sudán tras la secesión del sur, en julio de 2011, agravó las tensiones del Gobierno sudanés con las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul, que durante el conflicto armado sudanés apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. La necesidad de introducir reformas democráticas y de llevar a cabo una descentralización efectiva, que permita el desarrollo económico de todas las regiones que constituyen el nuevo Sudán, se encuentra en la base del resurgimiento de la violencia. La falta de reconocimiento de la pluralidad étnica y política, en la que se incluyen las formaciones políticas ligadas al SPLM sureño, sería también otra de las raíces de la violencia. La contraposición entre las élites de Jartum y los estados del Alto Nilo, que controlan la riqueza económica sudanesa, y el resto de los estados que conforman el país se sitúa en el eje de las tensiones que amenazan la paz.

La situación de violencia en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul osciló a lo largo del año entre un primer semestre marcado por los enfrentamientos y un final de año menos violento debido al cese al fuego decretado por el Gobierno de Sudán para facilitar las negociaciones de paz. Durante los primeros seis meses, la situación estuvo marcada por el boicot del SPLM-N a las elecciones presidenciales y los diferentes enfrentamientos producidos entre los rebeldes y las Fuerzas Armadas, sobre todo en las localidades de al-Jineziya y Um Turuq-Turuq, durante el mes de febrero; en Kalogi, al norte de la capital del estado de Kordofán Sur, en el mes de marzo; y a mediados de abril en la ciudad de Dilling, en el estado de Kordofán Sur, coincidiendo con el inicio de los comicios electorales. Durante el mes de mayo prosiguieron los enfrentamientos entre las autoridades y los rebeldes, anunciando las fuerzas paramilitares, RSF, la recuperación del control de dos zonas en la provincia de Kordofán Sur. Durante el mes de junio destacaron dos enfrentamientos violentos. Por un lado, la emboscada de milicianos del SPLM-N a un convoy militar, causando seis bajas militares y más de 25 soldados heridos en la localidad de Rashad, en Kordofán Sur; y por otro lado, el 12 de junio, la Fuerza Aérea de Sudán bombardeó la localidad de Wed Abuk, en el estado de Nilo Azul, causando numerosas bajas civiles, según denunció el SPLM-N. De acuerdo a datos presentados por OCHA, el conflicto, durante el mes de junio, había provocado un deterioro de las condiciones de vida en la región, incidiendo en la crisis humanitaria que afecta al país y que tiene a más de 749.000 personas en situación de emergencia. La agencia de la ONU también estimó que la violencia había provocado hasta finales de

junio cerca de 378.000 personas desplazadas en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul, 20.000 en la zona de Abyei, así como 238.936 refugiados que se encontraban en la vecina Sudán del Sur. En julio, el SPLM-N denunció el uso de bombas racimo por parte del Ejército en el condado de Thabo, Kordofán Sur. La denuncia fue ratificada por un informe de la organización Landmine and Cluster Munition Monitor, donde se evidenciaba el uso de este armamento por parte del Ejército sudanés. La situación de violencia se modificó durante el tercer trimestre del año, debido en gran parte al inicio de la temporada de lluvias en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul, así como a los preparativos para el Diálogo Nacional. **En septiembre el Gobierno de Omar al-Bashir, anunció un cese al fuego así como una amnistía para permitir a los movimientos armados su participación en el Diálogo Nacional.** El inicio de las negociaciones y el cese al fuego decretado redujeron los enfrentamientos en la región hasta el mes de diciembre, momento en el cual, y debido a la coincidencia con el inicio de la temporada seca y el bloqueo de las conversaciones de paz, se reanudaron los enfrentamientos en estas regiones.⁵³

Finalmente destacar el hecho que el SPLM-N se convirtió en el primer actor africano no estatal en firmar un compromiso para la **protección de menores en contextos de conflicto armado.** El 29 de junio el grupo rebelde firmó en Ginebra el texto de Compromiso para la Protección de los Niños y las Niñas contra los efectos de los Conflictos Armados. El texto es una iniciativa promovida por la organización Geneva Call, desarrollada para permitir que los grupos armados que no son reconocidos como partes en los tratados internacionales puedan ratificar acuerdos sobre protección de menores. El SPLM-N destacó su compromiso con la protección de los civiles, afirmando que el grupo estaba abierto a recibir a una comisión de verificación de la ONU. Este no ha sido el primer acuerdo que el SPLM-N ha firmado en base a las normas humanitarias y la Convención de Ginebra, ya que en el año 2013 el grupo también ratificó la prohibición de minas anti-personas.

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SSLA, SSDM/A, SSNLM, REMNASA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Síntesis:	El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur

53. Véase el resumen sobre Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar, quien cuenta con el apoyo de algunos de estos militares y milicias desafectas.

Después de 20 meses de guerra, en agosto de 2015 las partes enfrentadas firmaron la paz bajo la mediación y presión de la IGAD-Plus.⁵⁴ Durante los meses de agosto y septiembre, el Gobierno encabezado por Salva Kiir y el principal grupo opositor rebelde SPLA-IO dirigido por Riek Machar, acordaron poner fin a un conflicto que ha provocado decenas de miles de víctimas mortales y una grave crisis humanitaria con más de 2,3 millones de personas desplazadas de sus hogares (de las cuales 768.725 son personas refugiadas según datos de ACNUR de enero de 2016) y 4,6 millones en situación de emergencia por riesgo elevado de padecer hambruna. La consecución de la firma y adhesión de las partes para lograr la paz no fue sencilla y ya desde el inicio del año a las presiones de la comunidad internacional para poner fin a los combates se unieron las amenazas de sanciones. En el mes de marzo el Consejo de Seguridad de la ONU anunció la aprobación de una resolución que permitiría establecer sanciones al país en caso de que las fuerzas en conflicto no llegaran a un acuerdo de paz, después de las reiteradas violaciones de los acuerdos alcanzados con anterioridad. Posteriormente, y a raíz del incremento de la violencia en los estados del Alto Nilo y Unidad durante los meses de abril y mayo –que acentuaron la grave crisis humanitaria, convirtiéndose en los mayores enfrentamientos registrados desde agosto de 2014–, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA reaccionó instando al Consejo de Seguridad de la ONU a la designación de las personas y entidades para ser sancionadas y solicitando de manera inmediata la imposición de un embargo de armas sobre las partes beligerantes.

Tras 20 meses de guerra las partes enfrentadas en Sudán del Sur firmaron bajo presiones internacionales un acuerdo paz que preveía un Gobierno de Transición de 18 meses

Sudán respondió que esas medidas solo incentivarían la guerra, y la IGAD-Plus también defendió una oportunidad al diálogo antes de imponer las sanciones. El deterioro de la situación humanitaria llevó a su firme condena por parte de diferentes actores internacionales (ONU, IGAD, ICGLR, WCC, EEUU, UE, China) quienes reprobaron la intensificación de la violencia y reclamaron el cese inmediato de hostilidades. Los enfrentamientos en los estados de Alto Nilo y Unidad dejaron más de 300.000 personas en una grave situación de emergencia alimentaria y sanitaria, generando el desplazamiento de 60.000 personas en Bentiu y otras 25.000 en Malakal, según informaron OCHA y UNMISS. La dureza de los combates forzó la interrupción de la ayuda de emergencia a 650.000 personas ante las dificultades de acceso. En junio los enfrentamientos persistieron aunque con menor intensidad. El 30 de junio la ONU presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país donde denunciaba la práctica generalizada de violaciones como arma de guerra, detallando acciones como quemar a las mujeres vivas. En las mismas fechas, un informe de la OCHA incidía en la grave situación humanitaria en la que se encontraba el país, con 4,6 millones de personas en severa situación de inseguridad alimentaria, equivalente a un 40% de la población total del país.

Con el conflicto y la crisis de fondo, las partes enfrentadas mantuvieron diferentes rondas de negociaciones bajo mediación de la IGAD Plus, que presentó el 24 de julio un borrador de acuerdo de paz para que las partes lo valorasen, dando como fecha límite el día 17 de agosto para lograr el fin de la violencia. La presentación de la propuesta coincidió con la visita del presidente estadounidense Barack Obama a la región. Obama se reunió el 27 de julio en Addis Abeba –sede central de la UA y de la IGAD–, con los líderes africanos para buscar soluciones a la crisis sur sudanesa, discutiendo las posibles sanciones y penalizaciones si las partes no se comprometían con el acuerdo de paz en la fecha propuesta. Finalmente el Gobierno de Sudán del Sur, el opositor movimiento rebelde SPLM-IO, el grupo de ex detenidos del SPLM encabezado por Pagan Amum y otros partidos políticos y representantes de la sociedad civil sursudanesa firmaron el acuerdo de paz propuesto por la IGAD-Plus. El acuerdo fue ratificado en dos momentos: primero por Machar y Amum el 17 de agosto y después por Salva Kiir el 26 de agosto, quien se adhirió a la firma del documento no sin antes manifestar que lo hacía bajo presión e incluyendo una lista de 16 reservas al mismo que no fueron aceptadas por la IGAD-Plus.⁵⁵

54. IGAD-Plus integra a los países miembros de la IGAD y a la UA, la UE, Reino Unido, EEUU, Noruega y China.

55. Véase el resumen sobre Sudán del Sur en el capítulo 3 (Procesos de paz).

El acuerdo fue presentado por la IGAD-Plus como el texto definitivo para lograr la paz y la reconstrucción nacional. Sin embargo, los hechos que marcaron la adhesión por las partes –relativos a las amenazas y presiones externas– así como la evolución del contexto durante los últimos meses del año, levantaron las alarmas sobre su posible recorrido. A pesar de la firma del acuerdo, los enfrentamientos y las violaciones al cese al fuego –que debía ser permanente desde el 30 de agosto– se mantuvieron en el país y se fueron ampliando a finales de año después de diversas decisiones tomadas por el Gobierno de Salva Kiir de manera unilateral, como la destitución de tres gobernadores de la región de Ecuatoria; la disolución de las estructuras de liderazgo del partido SPLM –ignorando la Declaración de Arusha firmada en 2015–, y sobre todo el anuncio de modificación administrativa según la cual Sudán del Sur pasaría a adoptar una fórmula de Estado federal con 28 estados. Las medidas dieron pie al surgimiento de nuevos actores armados: el South Sudan People's Patriotic Front (SSPPF) –surgido en la región de Ecuatoria– o el Tiger Faction New Forces (TFNF), creado por la comunidad shilluk en oposición a la nueva forma federal y la división de sus tierras. En este clima de tensión y de enfrentamientos sostenidos en los últimos meses del año, las partes siguieron manteniendo negociaciones, avanzando progresivamente en las cláusulas previstas en el acuerdo de paz. Se anunció un gran paso a finales de año: la creación del **Gobierno de Transición de Unidad Nacional para el 22 de enero de 2016** –que en principio debía de haberse creado en un plazo máximo de 90 días desde la firma del acuerdo de paz–, **lo cual significó nuevas esperanzas para reavivar el proceso y consolidar la hoja de ruta hacia la paz en 2016.**

Magreb - Norte de África

Argelia ⁵⁶	
Inicio:	1992
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), gobiernos del norte de África y Sahel
Intensidad:	1
Evolución:	=
Síntesis:	El conflicto armado ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a distintos grupos islamistas desde comienzos de los noventa, tras un ascenso del movimiento islamista en Argelia que respondió al descontento de la población, la crisis económica y la falta de espacios de participación política. La confrontación se inició después de la ilegalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1992 tras su triunfo electoral frente al partido histórico que había liderado la independencia del país, el Frente de Liberación Nacional.

La lucha armada enfrentó a varios grupos (EIS, GIA y el GSPC, escindido del GIA y convertido en Al Qaeda en el Magreb Islámico en 2007) con el Ejército, apoyado por milicias de autodefensa. El conflicto provocó unas 150.000 muertes durante los noventa y continúa cobrándose víctimas, aunque los niveles de violencia han descendido desde 2002, después de que algunos grupos renunciaran a la lucha armada. En los últimos años el conflicto ha estado protagonizado principalmente por AQMI, que se convirtió en una organización transnacional, ampliando sus operaciones más allá del territorio argelino y afectando a países del Sahel. Argelia, junto a Malí, Libia, Mauritania y Níger, entre otros, se han enfrentado a AQMI y otros grupos armados que han comenzado a operar en la zona, entre ellos el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y las organizaciones al-Mourabitoun (Firmantes de Sangre) y Jund al-Khilafa (filial de ISIS).

El conflicto armado en Argelia continuó caracterizándose por hechos de violencia periódicos entre las fuerzas de seguridad y combatientes de grupos armados de línea yihadista, con un balance superior al centenar de víctimas mortales. De acuerdo a datos del Ministerio de Defensa, 109 milicianos murieron y otros 36 fueron arrestados en diferentes operaciones y enfrentamientos en 2015. Durante el año las fuerzas de seguridad informaron de detenciones de sospechosos de pertenencia a diversos grupos armados, a redes de reclutamiento de combatientes, o al tráfico de armas; así como de la destrucción de artefactos explosivos y decomisos de armas. Las autoridades argelinas aseveraron haber frustrado un intento de atentado contra aeropuertos de dos ciudades argelinas preparado por el grupo Jund al-Khilafa, filial de ISIS en el país y, junto a otros países del Sahel, publicaron una lista de 21 potenciales atacantes suicidas entrenados en Libia dispuestos a atacar en Argelia y Túnez, parte de un grupo denominado Kawkabat al-Shuhada (Constelación de Mártires), según la prensa local. **Argelia también mantuvo la preocupación por sus fronteras y las reforzó militarmente, creando una nueva zona militar en el sureste (frontera con Libia) y duplicando el número de tropas desplegadas en las áreas limítrofes**, que a finales de 2015 ascendía a más de 100.000. Entre los hechos de violencia más destacados del año en el país cabe mencionar la emboscada perpetrada por milicianos de AQMI que causó la muerte a 11 soldados en la zona de Ain Defla (norte), en julio, y el desmantelamiento de una célula yihadista por parte de varias unidades militares, que causó la muerte a 25 presuntos combatientes, en mayo, entre ellos Bachir Kharza, el líder de Jund al-Khilafa que había asumido el cargo tras la muerte de su predecesor, en diciembre de 2014. Respecto a este último episodio, trascendió que 17 de los milicianos fallecidos pertenecían a la filial de ISIS en el país y otros ocho a AQMI, y que **la operación militar se produjo durante un encuentro en el cual los miembros de Jund al-Khilafa pretendían convencer a los combatientes de**

56. En ediciones anteriores del informe *Alerta!* este caso había sido identificado como "Argelia (AQMI)" por la preeminencia de esta organización en las dinámicas de violencia. A partir de este año el caso pasa a denominarse "Argelia" dada la implicación de otros grupos armados en el conflicto.

la filial de al-Qaeda de sumarse a sus filas. Este hecho ilustra las divisiones que ha enfrentado el bando yihadista en Argelia en los últimos años, una tendencia que se enmarca en el pulso a nivel global entre ISIS y al-Qaeda.⁵⁷ Durante 2015, algunos análisis apuntaron que AQMI enfrentaba una situación de debilitamiento por diversos factores, entre ellos el asesinato de alguno de sus altos cargos, el refuerzo a los controles de seguridad en las zonas fronterizas –que limitan sus actividades y los flujos de armas– y las divisiones internas motivadas por el ascenso de ISIS en la región. Según medios de prensa argelinos, esta fractura incluso habría llegado a las cárceles, donde algunos prisioneros habrían decidido abandonar AQMI en favor de ISIS. Ante este panorama, AQMI habría decidido apostar por la unificación de fuerzas para contrapesar a ISIS y promover una “reconciliación” entre su líder, Abdelmalek Droukdel, y el del grupo armado al-Mourabitoun, Mokhtar Belmokhtar, que se habría concretado durante el segundo semestre, según fuentes locales. Previamente Belmokhtar negó haber declarado lealtad a ISIS, como se había rumoreado, y ratificó su lealtad a la central de al-Qaeda. Durante 2015, Droukdel también emitió un mensaje de lealtad hacia el líder de la red, Ayman al-Zawahiri, e hizo un llamamiento a vengar la muerte del máximo dirigente de al-Qaeda en Yemen por un ataque de EEUU.⁵⁸

Ante el avance de grupos próximos a ISIS en el norte de África, AQMI habría promovido una reconciliación con el grupo armado de Mokhtar Belmokhtar

La situación en el país también se vio afectada por tensiones políticas internas, en medio de reclamos de la oposición para declarar la presidencia vacante, poner en marcha una transición y adelantar elecciones ante las dudas sobre la capacidad real de Abdelaziz Bouteflika de gobernar el país considerando su frágil estado de salud. El Gobierno insistió en desmentir estas sospechas y en anunciar reformas constitucionales. A finales de año, el primer ministro argelino, Abdelmalek Sellal, aseguraba que el presidente estaba en total control del país, en medio del escepticismo de diversos sectores políticos y de las sospechas en algunos círculos respecto al destacado rol que estaría desempeñando su hermano, Said Bouteflika. En este contexto, durante 2015 también se anunciaron importantes cambios en la cúpula de seguridad del país, en lo que fue considerado como una purga interna y un reflejo de las luchas de poder en el seno del régimen, en particular entre el círculo más cercano a Bouteflika y el Departamento de Seguridad e Inteligencia (conocido por las siglas DRS). El DRS es considerado por diversos observadores como el ente más poderoso en la política doméstica y, según análisis como el de International Crisis Group (ICG), desde 2013 Bouteflika viene adoptando medidas para reducir su influencia.⁵⁹ En este ámbito, el anuncio más importante de 2015 fue la salida en septiembre del jefe

del DRS, Mohamed “Tewfik” Mediene, que llevaba 25 años en el cargo, era el último general de la época de los oficiales que lideraron la represión contra el FIS y era considerado como un símbolo del poder en la sombra que opera en Argelia. Finalmente, cabe mencionar que se cumplió el décimo aniversario de la Carta por la Paz y Reconciliación Nacional. El balance sobre la implementación de esta ley de amnistía indica que unos 15.000 militantes se habrían beneficiado de las disposiciones de la carta (frente a unos 17.000 que fueron abatidos durante la guerra). Familiares de las víctimas continúan exigiendo juicios que conduzcan a la condena de los responsables. Adicionalmente, sigue pendiente el tema de las desapariciones forzadas, que afecta a 7.144 personas según los datos oficiales, pero que asociaciones elevan a unas 20.000.

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno con sede en Tobruk, Gobierno con sede en Trípoli, facciones armadas vinculadas a la Operación Dignidad, grupos armados vinculados con la Operación Amanecer, ISIS, entre otros actores armados; Egipto, entre otros países
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y la conformación de dos parlamentos y dos gobiernos, en Tobruk y Trípoli, que cuentan con el apoyo de sendas coaliciones armadas. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto dificultados por este panorama de fragmentación y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de ISIS en el país norteafricano.

57. Véase “La amenaza yihadista y sus efectos desestabilizadores a nivel internacional” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2016).

58. Véase el resumen sobre Yemen (AQPA) en este capítulo.

59. International Crisis Group, *Algeria and Its Neighbours*, Middle East and North Africa Report no.164, 12 de octubre de 2015.

Tras el severo deterioro de la situación registrado en Libia a partir de mediados de 2014, el panorama en el país en 2015 continuó caracterizándose por **elevados niveles de violencia, fragmentación institucional e inestabilidad política. A lo largo del año se registraron continuos enfrentamientos entre los múltiples actores armados que operan en el país y se observó un creciente protagonismo de facciones armadas leales a ISIS, así como episodios de intervención armada de terceros países.**

Estas y otras dinámicas de violencia tuvieron lugar en distintos puntos del país –en especial en localidades como Trípoli, Bengazi, Sirte y Derna– y provocaron la muerte de centenares de personas durante el año, según un informe de la ONU.⁶⁰ No existen cifras totales de letalidad del conflicto, pero algunos recuentos parciales, como el balance de 750 víctimas mortales solo en la ciudad de Bengazi entre enero y junio de 2015, permiten dimensionar el impacto de la violencia en el país. Durante el año los combates enfrentaron a facciones armadas próximas a los gobiernos rivales establecidos desde mediados de 2014 en Trípoli y Tobruk –este último con reconocimiento internacional–, pero también a grupos que pertenecían a la misma coalición de milicias, revelando fracturas internas. Así, se produjeron enfrentamientos entre grupos armados de la coalición Amanecer de Libia (próxima a Trípoli) y divisiones por la adopción de algunas treguas locales y por el apoyo a las negociaciones políticas. Entre los grupos armados próximos al gobierno rival también se produjeron divisiones y organizaciones como el Petroleum Facilities Guard se negaron a reconocer el liderazgo de Khalifa Hifter, líder de la Operación Dignidad y nombrado en marzo por las autoridades de Tobruk como comandante del Ejército libio. Durante el año las fuerzas de la Operación Dignidad libraron duros combates con el Benghazi Revolutionaries Shura Council (BRSC), coalición de milicias islamistas entre las que destaca el grupo armado Ansar al-Sharia. A lo largo de 2015, en el sur del país también se produjeron enfrentamientos entre comunidades tuareg y tebu, en un contexto de agravios históricos y competencia por el control de recursos y rutas de contrabando.

Paralelamente, **ISIS amplió su presencia en Libia en 2015, especialmente en localidades como Sirte y Derna, donde encontró resistencia de residentes y grupos locales**, incluyendo milicias islamistas que en julio lograron forzar la salida de ISIS de esta última ciudad. En agosto, tras el asesinato de un influyente imam de una tribu local por parte de ISIS, se intensificaron las hostilidades en Sirte. Las filiales de ISIS en Libia –que a finales de 2014 proclamaron la Provincia de Cirenaica (“Wilayat Barqa”) y en junio de 2015 la Provincia de Trípoli (“Wilayat

A finales de 2015 la ONU estimaba que había más de 435.000 personas desplazadas en Libia y que 2,4 millones (casi 40% de la población) requerían ayuda humanitaria

Tarablus”)– también protagonizaron otras sonadas acciones, como el ataque contra un hotel en Trípoli en enero; la decapitación de una veintena de egipcios de religión copta secuestrados en Sirte en febrero; la ejecución de 28 eritreos y etíopes en abril; y otras ejecuciones públicas en áreas bajo su influencia. Tras la divulgación del vídeo de la decapitación de ciudadanos egipcios, el Gobierno de El Cairo lanzó una serie de ataques aéreos sobre posiciones de ISIS en Derna, que también provocaron víctimas civiles según algunas fuentes, involucrándose así de manera abierta en el conflicto en el vecino país. Esta ofensiva del régimen de Abdel Fattah al-Sisi subrayó la internacionalización del conflicto en Libia, en el que algunos analistas han identificado un escenario de confrontación indirecta de Egipto y EAU –que apoyan al Gobierno de Tobruk– con Turquía y Qatar –que respaldan a sectores islamistas que predominan en el Gobierno con sede en Trípoli. Egipto llamó al levantamiento del embargo de armas al Gobierno de Tobruk y éste pidió ayuda a la Liga Árabe, aunque esta demanda no se tradujo en una intervención de la organización regional. A lo largo de 2015 la violencia en Libia también se materializó en ataques con coches bomba, asesinatos –el primer ministro del Gobierno de Tobruk, Abdullah al-Thinni sobrevivió a un intento en mayo–, ofensivas contra embajadas e instalaciones petroleras, ataques a manifestantes, además de acoso e intimidación a trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos.

A finales de año la ONU denunció que todas las partes en conflicto habían cometido múltiples violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, incluyendo ataques indiscriminados y desproporcionados, ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios, torturas y malos tratos. El clima de violencia también motivó masivos desplazamientos forzados de población, duplicando las cifras vigentes en el país hace un año. En diciembre de 2015 la ONU estimaba que había más de 435.000 personas desplazadas en el país y que 2,4 millones de personas –equivalentes a casi 40% de la población– requerían ayuda humanitaria. El colectivo integrado por la población refugiada, solicitantes de asilo y migrantes en el país fue identificado como uno de los más vulnerables. **Se calcula que en 2015 unas 2.430 personas procedentes de Libia perdieron la vida intentando cruzar el Mediterráneo rumbo a Europa.** Las condiciones de vida de la población se vieron afectadas también por el colapso de las infraestructuras de salud, el cierre de numerosas escuelas y universidades, la presencia de minas y explosivos y los altos niveles de criminalidad y de secuestros en un escenario de ausencia del estado de derecho. Las posibilidades de frenar la

60. La misión de la ONU en Libia y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (UNSMIL y OHCHR, respectivamente, por sus siglas en inglés) publicaron a mediados de noviembre un informe conjunto sobre la situación en Libia en 2015. En el texto reconocen las limitaciones para obtener datos exhaustivos sobre el impacto del conflicto armado en Libia debido a los problemas de seguridad y las limitaciones de acceso al país. Pese a estas restricciones, el informe ofrece un panorama de los principales patrones de abusos a los derechos humanos y al derecho humanitario en Libia. Cabe destacar que la UNSMIL ha continuado operando fuera de Libia desde la escalada de violencia de mediados de 2014 que llevó a la evacuación de todo el personal diplomático de la misión.

deriva de violencia en Libia se vieron limitadas por la persistente división política, ya que a lo largo de 2015 se mantuvo el pulso entre las autoridades de Trípoli y las de Tobruk. Los Gobiernos y Parlamentos con sede en ambas ciudades, **el Congreso Nacional General (CNG) en Trípoli y la Cámara de Representantes (CdR o HoR, por sus siglas en inglés) en Tobruk, continuaron su disputa por la legitimidad de la representación del pueblo libio y participaron de manera accidentada en las negociaciones auspiciadas por la ONU.**⁶¹ A finales de año, en un contexto internacional marcado por una mayor preocupación por la actividad de ISIS y por los flujos de personas refugiadas, se intensificaron las presiones para avanzar en un acuerdo político en Libia. Así, a mediados de diciembre, integrantes de los parlamentos rivales –50 de los 136 del CNG y 80 de los 188 de la CdR– firmaron el acuerdo que establece un gobierno de unidad nacional, una Cámara de Representantes, un Consejo de Estado y Consejo Presidencial. El pacto no contó con el apoyo de los líderes de los dos gobiernos operativos en Libia y fue denunciado como ilegítimo por algunos sectores, pero validado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Ante este escenario, a finales de 2015 analistas advertían sobre los riesgos de que el acuerdo genere una tercera institución que ni siquiera sea capaz de operar en territorio libio y destacaron que diversos países occidentales parecían interesados en acelerar la formación de un gobierno legítimo en Libia para que, eventualmente, autorice una intervención militar foránea en el país contra ISIS.

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FARC-EP, ELN, nuevos grupos paramilitares
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del *statu quo* mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia.

El avance en las negociaciones de paz celebradas en La Habana, entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, junto al cese al fuego unilateral decretado por esta guerrilla en dos ocasiones durante el año, tuvieron como consecuencia una notable disminución de los enfrentamientos a lo largo del año.⁶² En diciembre, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) publicó su último informe de monitoreo de acciones violatorias del cese unilateral al fuego decretado por las FARC-EP. Este informe afirmó que desde el 20 de julio de 2015 hasta el 20 de diciembre de 2015 fueron registradas seis acciones ofensivas. El informe también señaló que las acciones ofensivas de las FARC-EP se redujeron de 21 a seis; una reducción del 71%. De semejante forma hubo una reducción del 69% en la frecuencia de combates entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, pasando de 52 a 16 combates. Ambas partes trabajaron intensamente, a través de grupos de trabajo mixtos, para lograr un alto el fuego bilateral y detallar los mecanismos de verificación. El acuerdo se alcanzó en enero de 2016. Respecto al grupo armado ELN, durante el año prosiguieron los contactos exploratorios con el Gobierno, con notables dificultades para alcanzar un primer acuerdo en cuanto a la agenda. En los últimos meses del año, y como estrategia de presión, el ELN acentuó el número de sus ataques, aunque el número de víctimas fue reducido.

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, Estado Islámico del Jurasán
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama bin Laden y otros líderes de Al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU ataca al país ayudado por

61. Véase el resumen sobre Libia en el capítulo 3 (Procesos de paz).

62. Véase el resumen sobre Colombia en el capítulo 3 (Procesos de paz).

un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instaura un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014. Un contingente de unos 12.905 soldados permanecerá hasta diciembre de 2017 para formar y entrenar a las fuerzas afganas (bajo la misión “Resolute Support”, mandato de la OTAN) y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo (3.000 soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”).

El nivel de violencia registrado en Afganistán en el año 2015 fue el más grave desde que se expulsó a los talibán del poder en 2001. Solo en el primer semestre, el número de bajas civiles igualó la cifra registrada en 2014. Naciones Unidas estimó que más de la mitad de los distritos afganos estaban bajo riesgo de violencia alta y extrema. Los talibán hicieron avances territoriales. Entre éstos, el más significativo tuvo lugar en agosto, cuando tomaron la capital de la provincia de Kunduz.

Los talibán no controlaban una ciudad desde 2001. Las Fuerzas Armadas afganas se mostraron incapaces de contrarrestar una insurgencia bien entrenada y armada, y más motivada que los soldados y policías, cuyas filas registraron un número elevado de desertiones. Las fuerzas internacionales ayudaron en repetidas ocasiones a las afganas, especialmente con bombardeos aéreos. De hecho, el presidente de EEUU, Barack Obama, decidió retrasar un año la retirada completa de las tropas, que permanecerán hasta finales de 2017. En años anteriores, el invierno suponía un descanso de la campaña insurgente, que retomaba la actividad en primavera, pero este año la violencia no paró. Por otra parte, a la insurgencia local se le ha sumado un buen número de combatientes extranjeros. Según el Ministerio del Interior, más de 7.000, en su mayoría, uzbekos y pakistaníes. El grupo armado Estado Islámico en la provincia del Jurasán, (ISIS-K) se estableció en varios puntos, en especial, en Nangarhar, pero también Zabul, Kunduz, Helmand y Logar. En buena parte, las filas del ISIS-K aumentaron por el cruce de insurgentes desde las áreas tribales de Pakistán, tras la operación militar Zarb-e Azb, y por otro, por las divisiones internas que se produjeron en las filas talibán ante el desacuerdo de sus líderes frente al proceso de diálogo con el Gobierno. No obstante, los avances territoriales de los talibán y el ascenso de ISIS fueron también resultado de la debilidad institucional.

La crisis política aumentó como consecuencia de la división creada al formarse el Gobierno de Unidad

En Afganistán el nivel de violencia fue el más elevado desde 2001, a pesar de que se dieron pasos significativos en el proceso de diálogo entre los talibán y el Gobierno

Nacional, con dos líderes opuestos, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá. La incapacidad para llegar a un acuerdo en buena parte de los asuntos del Estado, llevó a que no se consiguiera acordar la reforma electoral y por tanto, que se aplazaran las elecciones parlamentarias previstas para mayo. El presidente Ghani, además, se ganó la oposición del Parlamento y de varias instituciones (entre las que estaba la agencia de inteligencia, National Directorate of Security, cuyo director dimitió en diciembre) al tender la mano a Pakistán y hacerle partícipe del proceso de paz con los talibán. Entre otros acuerdos bilaterales, se firmó un memorando de entendimiento entre ambas agencias de inteligencia y Afganistán acordó enviar a Pakistán cadetes para su formación. Tras varias rondas de contactos de representantes del Alto Consejo de Paz y los talibán en diferentes países, la primera cita oficial de diálogo entre el Gobierno afgano y la insurgencia tuvo lugar en Murree

(Pakistán) a principios de julio. Pero el anuncio el 30 de julio de la muerte del líder Mulá Omar (oficialmente ocurrido en abril 2013) dividió a los talibán entre quienes estaban de acuerdo con que su sucesor fuera el líder en funciones, Mulá Akhtar Mansoor, y quienes se oponían a éste y al diálogo. Como consecuencia, la segunda ronda, prevista para el 31 de julio, fue cancelada. El proceso permaneció en suspenso hasta que

Ashraf Ghani y Nawaz Sharif se reunieron en la cumbre sobre el clima de la ONU en París, con la mediación del primer ministro británico, David Cameron. Tras la conferencia Heart of Asia (Proceso de Estambul) en Islamabad en diciembre, Ghani y Sharif acordaron retomar el diálogo, sin los talibán, y junto a China y EEUU.⁶³

India (Assam)	
Inicio:	1983
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(S) KPLT, KLO, MULTA, HUM
Intensidad:	1
Evolución:	Fin

Síntesis:

El grupo armado de oposición ULFA surge en 1979 con el objetivo de liberar el estado de Assam de la colonización india y establecer un Estado soberano. Las transformaciones demográficas en el estado tras la partición del subcontinente indio, con la llegada de dos millones de personas procedentes de Bangladesh, están en el origen de la reclamación de la población de origen étnico asamés de un reconocimiento de sus derechos culturales, civiles y de creación de un Estado independiente. Durante las décadas de los ochenta y noventa se producen varias escaladas de violencia, así como intentos de negociación que fracasan. En el año 2005 se inicia un proceso de paz que tiene como consecuencia una reducción de la violencia y que se interrumpirá en el año

63. Véase el resumen sobre Afganistán en el Capítulo 3 (Procesos de Paz).

2006 dando lugar a una nueva escalada del conflicto. Por otra parte, en los ochenta surgen grupos armados de origen bodo, como el NDFB, que reivindican el reconocimiento de su identidad frente a la población mayoritaria asamesa. Desde 2011 se ha producido una reducción significativa de la violencia y numerosos grupos armados han entregado las armas o iniciado conversaciones con el Gobierno.

La violencia en el estado indio de Assam se redujo de manera considerable con respecto del año anterior, lo que llevó a dejar de considerarlo como un conflicto armado.

Se registraron 59 muertes como consecuencia del conflicto armado que afecta al estado desde el año 1983. De acuerdo con el registro de víctimas mortales que lleva el South Asia Terrorism Portal, 2015 sería el año en el que se habría registrado un menor número de víctimas mortales desde 1992, seguido por 2012 cuando se produjeron 91 fallecimientos fruto del conflicto armado. Los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad indias y los diferentes grupos insurgentes que operan en el estado tuvieron un carácter esporádico a lo largo de todo el año. Una de las principales causas de la reducción de la violencia en el estado habría sido el que, como consecuencia de la operación de seguridad que se inició tras la masacre contra población adivasi perpetrada en diciembre de 2014 por la organización armada NDFB(S), este grupo quedara notablemente reducido. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo decenas de detenciones que impactaron seriamente en su capacidad operativa y también murieron varios insurgentes como consecuencia de las redadas y enfrentamientos. La operación contra este grupo se extendió durante todo el año, aunque se concentró fundamentalmente en el primer trimestre, cuando las fuerzas de seguridad detuvieron a 70 de sus 190 integrantes y varios insurgentes murieron en enfrentamientos con éstas. Otro de los grupos armados activos en el estado, ULFA(I) –facción contraria a las negociaciones de paz– también vio debilitada su capacidad de actuación ante la pérdida de apoyo por parte del NSCN-K, después de que se rompiera el acuerdo de alto el fuego entre este último y el Gobierno en el mes de marzo. El grupo naga había prestado un importante apoyo al grupo asamés en la obtención de suministros aprovechando la situación de alto el fuego. También se redujeron considerablemente los atentados con explosivos en el estado. Todo esto, unido a los avances en las negociaciones de paz con la facción pro-negociaciones del ULFA provocaron la reducción de la violencia en el estado. No obstante, a pesar de la reducción de la violencia, la población civil continuó padeciendo las consecuencias del conflicto. Informes policiales revelaron que en los últimos tres años cerca de 5.000 menores han desaparecido en el estado víctimas de las redes de trata de personas. Gran parte de ellos eran desplazados internos como consecuencia de la violencia y de los desastres naturales que han afectado al estado y en su mayoría

El conflicto en Cachemira se mantuvo al mismo nivel de años anteriores, mientras los Gobiernos de India y Pakistán contribuyeron con sus declaraciones a enrarecer más el ambiente

eran niñas. La violencia tuvo un importante impacto en términos de desplazamiento forzado. Como consecuencia de la violencia intercomunitaria que se produjo en diciembre de 2014, 300.000 personas se desplazaron de manera forzada, de las cuales 90.000 permanecían sin poder retornar a sus hogares, residiendo en campos de acogida provisionales. Según Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), en el estado de Assam había un total de 113.000 personas desplazadas internas, siendo el segundo estado indio con mayor número de población desplazada después de Jammu y Cachemira.

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, United Jihad Council, All Parties Hurriyat Conference
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

Según el South Asia Terrorism Portal, la violencia en Cachemira en 2015 causó la muerte de 174 personas, de las cuales 20 eran civiles, 41 miembros de las Fuerzas de Seguridad y 113 eran insurgentes.

Uno de los episodios más graves ocurrió en agosto, cuando un intercambio de fuego entre miembros de las fuerzas fronterizas en el puesto de Sialkot se saldó con tres personas muertas y 16 heridas en el lado indio, y ocho fallecidos y 47 heridos en el pakistaní. El clima de violencia vivido empeoró con las declaraciones de algunos políticos indios del partido del Gobierno, BJP, provocando protestas y la convocatoria de varias huelgas. Por una parte, tras la toma de poder del Mufti Mohammed Sayeed (PDP, que gobernaba en alianza con el BJP) como ministro de Cachemira, el Gobierno decidió liberar a los presos políticos que no estuvieran

involucrados en actividades criminales. Sin embargo, tras la liberación en marzo de Masarat Alam Bhat (All Parties Hurriyat Conference, APHC), el rechazo del BJP llevó a la revocación de la decisión. En abril, el ministro Rajnath Singh especuló con la abrogación del artículo 370, que concede un estatus especial a Cachemira. Un mes después, el ministro de Defensa indio, Manohar Parrikar, declaró que era una lástima que los soldados indios murieran luchando contra la insurgencia, y que para luchar contra los terroristas había que usar terroristas. El ministro hacía referencia a la milicia paramilitar progubernamental Ikhwan, cuya impunidad sembró el terror entre la población en la década de 1990.⁶⁴ Más de una decena de ex insurgentes murieron en asesinatos selectivos, especialmente en Sopore. La autoría de estos crímenes no se aclaró, aunque las víctimas eran en su mayoría ex miembros del Hizb-ul-Muyahidín. En septiembre, la Corte Superior de Jammu ordenó a la Policía que impusiera la ley que prohíbe sacrificar reses, vender y consumir su carne (que no se aplica desde hace décadas en Cachemira) poco antes de la celebración de la fiesta musulmana del sacrificio ('Eid ul-Adha). Aunque el Supremo suspendió la orden, el 'Eid se celebró entre protestas multitudinarias. Como respuesta, el Gobierno bloqueó internet durante tres días y detuvo a varios líderes separatistas.

Pakistán también contribuyó a enrarecer el ambiente con declaraciones que el Gobierno indio consideró provocaciones. En febrero, el primer ministro Nawaz Sharif reiteró su apoyo al derecho de autodeterminación de los cachemires en un encuentro con líderes de la APHC en Azad Kashmir. En marzo, los ministros de Exteriores se reunieron y acordaron trabajar en común, pero el jefe del Ejército pakistaní, Raheel Sharif, amenazó con represalias si la India abría fuego en la frontera y declaró Cachemira parte indivisible de Pakistán. El encuentro entre los asesores de Defensa se suspendió debido a la insistencia del pakistaní, Sartaj Aziz, de aprovechar la visita para reunirse con líderes de la APHC. En la 70ª sesión de la Asamblea de la ONU en Nueva York, ambos países se acusaron mutuamente de la escalada de violencia en torno a la frontera. Sharif propuso a la India un plan bilateral de cuatro puntos para retomar el diálogo: respetar el alto el fuego, no recurrir a la fuerza, desmilitarizar Cachemira y retirar las tropas de Siachen. El ministro de Exteriores indio respondió con varios mensajes en los que rechazaba desmilitarizar Cachemira y llamaba a “desterrorizar” Pakistán. A finales de año se produjo el acercamiento, en buena parte motivado por la insistencia de EEUU de que ambos países debían dialogar. Los dos primeros ministros coincidieron en la cumbre sobre el cambio climático en París, donde mantuvieron un encuentro informal. Posteriormente, la ministra de Exteriores india, Sushma Swaraj, cuya asistencia no estaba confirmada, participó en la conferencia Heart of Asia en Islamabad, donde intercambió propuestas para retomar el diálogo.

También en diciembre, tras meses de cancelaciones, se celebró en Bangkok el encuentro entre los asesores de seguridad. Pero el paso definitivo lo dio Narendra Modi al llamar por teléfono a Nawaz Sharif para felicitarle el cumpleaños el día de Navidad. Modi decidió hacer una visita inesperada a Lahore, desde donde Sharif le llevó a su residencia de Raiwind. Aunque el encuentro duró unas horas, hacía 11 años que un primer ministro indio no visitaba Pakistán.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad indias con la insurgencia naxalita en diferentes estados del país se mantuvo activo todo el año, aunque se constató una leve reducción en el número de víctimas mortales con respecto al año anterior. De acuerdo con las cifras recogidas por el South Asia Terrorism Portal, se registraron 251 muertes como consecuencia del conflicto armado. Esto iría en consonancia con la tendencia registrada en los últimos años en los que se ha producido una paulatina reducción en el número de víctimas, que desde 2010 –año en el que se registró el mayor número de fallecidos de la última década con 1.180 muertos fruto del conflicto– se ha reducido a casi una quinta parte. El estado más afectado por la violencia fue Chhattisgarh, en el que murieron 120 personas como consecuencia del conflicto, seguido por Jharkhand con 58, Odisha con 35 y Maharashtra con 17. De hecho, si bien en el conjunto del país se registró un descenso en la violencia, en el estado de Chhattisgarh se constató un aumento en el número de incidentes y una cifra de fallecidos ligeramente superior a la del año interior, lo que indicaría que el conflicto armado podría estar en una fase de concentración geográfica. Los enfrentamientos

64. La milicia Ikhwan estaba formada por ex insurgentes. En principio, se habían unido a la fuerza como informantes del Ejército a cambio de una compensación económica y protección. Hacia 1994 empezaron a tomar las armas junto al Ejército.

entre insurgentes y fuerzas de seguridad se produjeron de manera constante durante todo el año, ocasionando muertes tanto militares como civiles. En Chhattisgarh se concentraron algunos de los episodios más graves de violencia que tuvieron lugar en diferentes momentos del año. En abril una emboscada maoísta en el distrito de Sukma causó la muerte de siete policías. En mayo la insurgencia secuestró a 250 personas poco antes de que se produjera la visita del primer ministro, Narendra Modi, al distrito de Dantewada –uno de los epicentros del conflicto armado–, para firmar importantes acuerdos económicos con empresas. Uno de los secuestrados fue asesinado y el resto fue puesto en libertad, después de que acusaran al posteriormente ejecutado de fomentar infraestructuras a las que se opone la insurgencia.

Otro incidente de importancia tuvo lugar en septiembre cuando el comandante naxalita Sonadhar murió como consecuencia de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el estado de Odisha. Sonadhar estaba acusado de ser el responsable del atentado que tuvo lugar en 2013, cuando un convoy del partido del Congreso en Chhattisgarh fue atacado por los naxalitas y murieron 28 personas, entre ellas uno de los principales líderes del partido en el estado, Mahendra Karma. Éste había sido uno de los fundadores de Salwa Judum, milicia civil contrainsurgente acusada de graves violaciones de los derechos humanos y desmantelada en 2011 tras ser declarada ilegal e inconstitucional por el Tribunal Supremo. La organización paramilitar había sido acusada también de haber armado a cientos de jóvenes procedentes de las zonas más empobrecidas del estado para llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia. No obstante, coincidiendo con la visita de Modi a Dantewada en mayo, un hijo de Mahendra Karma anunció la reorganización de Salwa Judum. Diferentes organizaciones de derechos humanos denunciaron que la reconstitución de la organización estaba relacionada con los acuerdos que el Gobierno había firmado de manera reciente con grandes empresas para poner en marcha proyectos económicos en el estado de Chhattisgarh, tal y como sucedió cuando se creó una década antes.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Jyber-Pajtunjwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno

y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos Al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de Al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación Zarb-e Azb para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

El Ejército de Pakistán continuó con la operación Zarb-e Azb, que se lanzó en junio de 2014. Según la oficina de relaciones públicas de los Servicios de Inteligencia (Inter-Services Public Relations, ISPR), el balance de la operación fue de 3.400 insurgentes muertos (de los cuales, 183 eran líderes) y 21.193 detenidos, además de 837 escondites destruidos, 488 soldados muertos y 1.914 heridos en combate. En los datos aportados, no se mencionó ni el número de civiles fallecidos como consecuencia de las operaciones, ni el número de familias desplazadas. En marzo, el Ejército anunció que había terminado la campaña militar en la agencia de Jyber (FATA), aunque inició una segunda operación de tres meses para retomar el control de varias áreas bajo influencia insurgente (valles de Bara y Tirah). Sin embargo, la ISPR fue la única fuente de información, por lo que no se pudo comprobar la veracidad de esos datos. El acceso a observadores o periodistas a las áreas de las operaciones no estuvo permitido. Desde el inicio de la operación, y especialmente, tras el atentado contra una escuela en Peshawar en diciembre de 2014, el Ejército adquirió total libertad de acción para perseguir a la insurgencia. Paralelamente, el Parlamento aprobó en enero una enmienda a la Constitución denominada la Ley del Ejército de Pakistán en la que se revocaban varios derechos fundamentales y donde concedía a los tribunales militares la potestad para juzgar a presos civiles en todo el territorio nacional, incluyendo las FATA. A pesar de los datos del ISPR, el TTP consiguió atentar contra diversos objetivos. En mayo, el grupo acabó con la vida de un responsable policial de contraterrorismo en Peshawar. En septiembre, un atentado en la base aérea de Badaber, cerca de Peshawar, acabó con la vida de 40 personas (incluidos 13 insurgentes). El TTP también atentó contra varios políticos, en especial, un grupo escindido del mismo, el Jama'at-ul Ahrar (JuA). En junio, un diputado de la Liga Musulmana de Nawaz Sharif (LMP-N), Chaudhry Shamshad, fue asesinado en Gujranwala. En agosto, el JuA mató al ministro del Punjab, Shuja Khanzada (LMP-N). El ataque, que se produjo cuando recibía a sus seguidores en su residencia, acabó con la vida de otras 18 personas. Khanzada era considerado responsable de la muerte de Malik Ishaq, el líder del Lashkar-e Jhangvi,

un grupo terrorista de corte sectario aliado del TTP. Ishaq murió en julio junto a dos de sus hijos y 13 de sus militantes en un tiroteo con la Policía. En octubre, el JuA acabó con la vida del diputado Sardar Amjad Farooq Khosa, en Dera Ghazi Khan, junto a otras siete personas e hiriendo a otras 13.

A pesar de los datos optimistas del Gobierno de Pakistán, los grupos insurgentes siguieron actuando en el Estado

En un intento por mejorar las condiciones de la población de las FATA, la Conferencia de Todos los Partidos organizada en Islamabad en noviembre acordó por unanimidad aprobar una 22ª enmienda a la Constitución que uniera administrativamente las áreas tribales con la provincia Jyber-Pajtunjwa. Las reformas presentadas por los partidos políticos otorgaban derechos de ciudadanía a los residentes de FATA y extendían la jurisdicción del Tribunal Supremo, lo que implicaba la abolición del artículo 247 y las leyes criminales fronterizas (que datan de la época colonial). En lo que se consideró una táctica para dilatar el proceso, Nawaz Sharif presentó una propuesta para organizar un comité que considerara la opción de hacer de las agencias tribales otra provincia o unir las a Jyber-Pajtunjwa. Algunos analistas estimaron que los militares, que ya se mostraron en el pasado contrarios a un cambio de estatus de las FATA, presionaron al Primer Ministro para no implementar las reformas, al menos mientras durase la operación militar.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT; sociedad civil, LeJ, TTP, talibán afganos (Shura de Quetta)
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, si no miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

La violencia no cesó en 2015, con un elevado número de muertes entre la población civil y la insurgencia.

Según South Asia Terrorism Portal, 247 civiles murieron, así como 90 miembros de las Fuerzas de Seguridad, y 298 insurgentes. En abril, se extendió la operación militar (según el Plan de Acción Nacional) a esta provincia y poco después, el Gobierno anunció una amnistía para aquellos insurgentes que decidieran dejar las armas. Asimismo, se solicitó la repatriación de algunos líderes nacionalistas y de la insurgencia, como

Hyrbyair Marri (BLA, en Londres) o Brahamdagh Bugti (BRP, en Ginebra). Según el Gobierno, se identificaron 161 campos de entrenamiento de los cuales 24 estaban en Afganistán y dos en Irán. Nawaz Sharif entregó pruebas de la supuesta implicación de la India en la financiación de la insurgencia baluchí en su visita a Nueva York, durante la 70ª sesión de la Asamblea General de la ONU. En septiembre, el secretario de Estado para Baluchistán, Akbar Durrani, afirmó que cerca de 8.000 insurgentes habían sido detenidos y 204 murieron en diferentes operaciones. En Baluchistán, como en las áreas tribales, el vacío informativo impidió verificar estas afirmaciones. Es más, el día de la celebración de la independencia (14 de agosto), el Gobierno anunció en una ceremonia oficial que 400 insurgentes habían entregado las armas. Según datos oficiales, serían más de 500 los milicianos arrepentidos. Sin embargo, la actividad insurgente no cesó en todo el año. En abril, el grupo separatista Frente de Liberación de Baluchistán (BLF) reivindicó un atentado que acabó con la vida de 20 trabajadores sindíes y punyabíes que viajaban en autobús en el distrito de Kech. Los Cuerpos Paramilitares de Frontera (FC) anunciaron al día siguiente que habían acabado con la vida de 13 miembros del BLF en Turbat. A finales de mayo, otro autobús fue atacado, muriendo más de 20 pastunes que viajaban en él y la Fuerza de Fronteras anunció que había matado a un comandante del Ejército de Liberación Baluchí junto a 12 de sus insurgentes. Los ataques contra la comunidad chií también continuaron. En octubre, en el mes de Muharram, hubo varios ataques contra mezquitas chiíes y contra procesiones de conmemoración de la 'Ashura. En uno de ellos en Quetta, más de 10 personas murieron en un ataque suicida en una mezquita. En Bolan, otro suicida acabó con la vida de 10 personas, seis de ellas, menores. En Jacobabad, un suicida causó la muerte a 16 personas en una procesión.

El Gobierno expresó su voluntad de dialogar con varios líderes insurgentes y nacionalistas, para intentar resolver el conflicto. En el pasado, estas declaraciones eran habituales, aunque los nacionalistas baluchíes denunciaban que nunca se daba ningún paso real para resolver los problemas de los baluchíes (retirada del Ejército y paramilitares; inversión en la provincia; investigación de las desapariciones forzadas; liberación de presos políticos). La situación en la provincia empeoró en 2015, debido a la operación militar y también a la oposición de los nacionalistas al Corredor Económico

China-Pakistán, que consideraban que se llevaría los recursos de la provincia sin que ésta se beneficiase. Aunque este año se dieron pasos concretos (el Khan de Kalat y Bahamdagh Bugti se mostraron dispuestos a negociar), la situación no mejoró. El asesinato de Sabeen Mahmud en Karachi en abril fue una muestra de hasta qué punto hablar de la violación de derechos humanos en Baluchistán es tabú. Tras la cancelación de un evento en la universidad de Lahore en el que se esperaba la presencia de líderes de la asociación Voice of Baloch Missing Persons, entre los que estaba el activista Mama Qadeer, Mahmud decidió organizarlo en su librería. En el regreso a casa, Mahmud fue tiroteada en su coche junto a su madre. En septiembre, el testigo principal del caso también murió tiroteado. El Gobierno no presentó ningún plan para mejorar las condiciones de vida de los baluchíes, de los que más de la mitad vive bajo el umbral de la pobreza.

Asia Oriental

China (Turquestán Oriental)	
Inicio:	2014
Tipología:	Autogobierno, Sistema, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

Xinjiang, también conocida como Turquestán Oriental o Uiguristán, es la región más occidental de China, alberga importantes yacimientos de hidrocarburos y ha estado habitada históricamente por la población uigur, mayoritariamente musulmana y con importantes vínculos culturales con países de Asia Central. Tras varias décadas de políticas de aculturación, explotación de los recursos naturales e intensa colonización demográfica, que ha alterado sustancialmente la estructura de la población y ha provocado tensiones comunitarias desde los años cincuenta, varios grupos armados secesionistas iniciaron acciones armadas contra el Gobierno chino, especialmente en los años noventa. Beijing considera terroristas a tales grupos, como ETIM o ETLO, y ha tratado de vincular su estrategia contrainsurgente a la llamada lucha global contra el terrorismo. En 2008, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en Beijing, se registró un incremento de las acciones armadas de los grupos insurgentes, mientras que en 2009 se produjeron los enfrentamientos comunitarios más intensos de las últimas décadas. En los años siguientes la violencia se hizo más intensa, frecuente y compleja, por lo que el caso pasó a ser considerado conflicto armado.

El Gobierno declaró en varias ocasiones que **tanto la violencia como el clima de radicalización religiosa e ideológica habían disminuido significativamente durante el año, especialmente gracias al desarrollo económico de la región y a su estrategia contrainsurgente en Xinjiang**. A pesar de que existen enormes diferencias entre los datos oficiales de víctimas mortales y los

ofrecidos por organizaciones uigures en el exilio, a partir de los hechos de violencia recogidos en medios de comunicación y centros especializados se estima que unas 200 personas murieron durante el año, una cifra claramente inferior a las más de 340 víctimas mortales del año 2014. De hecho, durante el primer trimestre se hizo público un informe del Uyghur Human Rights Project, centro con sede en EEUU, que señalaba que entre 656 y 715 personas fallecieron en Xinjiang por episodios de violencia política en los años 2013 y 2014 y que el número de víctimas mortales en 2014 fue aproximadamente el doble que el del año anterior. En dicho informe también se constataba que el número de personas uigures fallecidas era el triple que el de personas de etnia han, y que la prensa controlada por el Estado solamente se había hecho eco de un tercio de los enfrentamientos ocurridos en la región. Entre los principales hechos de violencia de 2015 cabe destacar la muerte de 17 personas en la región de Aksu en el marco de una redada policial llevada a cabo a finales de febrero; la muerte de 18 personas a finales de junio en un ataque a un puesto policial de Kashgar; o un ataque en un mina de carbón en la prefectura de Aksu a mediados de septiembre en el que 16 personas murieron –entre 50 y 60 según varios medios de comunicación, y más de 100 según grupos en el exilio– y otras 50 resultaron heridas. Dicho ataque propició un operativo policial y militar que se prolongó durante dos meses y que culminó con el fallecimiento de otras 28 personas y la detención de otras 1.000 personas. También cabe destacar que algunos medios de comunicación especularon con la posibilidad de que el estallido de un artefacto explosivo en Bangkok en el mes de julio, considerado uno de los peores atentados de la historia de Tailandia, estuviera relacionado con la repatriación de un centenar de personas uigures que se hallaban en su territorio. En varias ocasiones Beijing expresó su alarma por los vínculos que grupos uigures mantendrían con organizaciones yihadistas, por su presencia estable en países como Siria, Iraq, Afganistán o Pakistán o por el creciente retorno a Xinjiang de personas que habrían recibido formación militar en el extranjero con el objetivo de atentar en China. Según algunos medios de comunicación, la mayor preocupación de Beijing por los flujos migratorios a y desde Xinjiang comportó un incremento sustancial del número de detenciones en puestos fronterizos.

A pesar de la disminución de los niveles de violencia, el Gobierno reconoció que los grupos armados que operan en Xinjiang siguen suponiendo una de las principales amenazas al Estado. Para hacer frente a dicha amenaza, **Beijing aprobó una nueva legislación antiterrorista a finales de año, intensificó sus esfuerzos contrainsurgentes en Xinjiang e incrementó su actividad diplomática para tratar de involucrar a países como EEUU en la lucha contra organizaciones armadas uigures** como ETIM por considerar que no solamente constituyen un riesgo para China, sino también para la comunidad internacional en su conjunto. A finales de mayo el Gobierno declaró que desde el inicio de la

campaña antiterrorista en mayo de 2014 –tras la muerte de 43 personas en un mercado de la ciudad de Urumqi– se habían desarticulado 181 células islamistas, el 96% de las cuales estaba planeando atentados. Durante esta campaña, que debería haber finalizado en mayo pero que finalmente se prorrogó hasta finales de año, se desplegaron miles de efectivos militares y policiales adicionales en la región y se incrementaron notablemente el número de detenciones y de juicios. En este sentido, más de 20 personas de etnia uigur habrían sido ejecutadas durante este periodo y muchas más habrían sido sentenciadas a muerte. Además, la Corte Suprema declaró en marzo que durante el 2014 más de 700 personas fueron condenadas por crímenes relacionados con terrorismo y separatismo, lo cual supone un incremento de un 13% respecto del año anterior. Durante el año, organizaciones de derechos humanos, Gobiernos (como Turquía o Malasia) y organismos internacionales criticaron tanto la nueva legislación antiterrorista como la campaña contrainsurgente del Gobierno por considerar que vulneran los derechos humanos de la población y alientan la inestabilidad y el conflicto. Varias voces advirtieron reiteradamente sobre las crecientes restricciones religiosas a la comunidad musulmana. Así, en junio, el Gobierno ordenó a los restaurantes que permanecieran abiertos durante su horario habitual y prohibió que estudiantes y personal funcional y docente practicaran el ayuno durante el Ramadán. Algunas informaciones de prensa también señalaron que en algunas zonas de Xinjiang los escolares tenían prohibida cualquier práctica religiosa y su entrada en las mezquitas. Cabe destacar las críticas del relator especial sobre libertad religiosa y de expresión, Heiner Bielefeldt, a las políticas en materia de religión del Gobierno hacia la comunidad uigur (citando como ejemplo las restricciones al ayuno impuestas a los menores en las escuelas durante el mes del Ramadán), aunque Beijing negó tales acusaciones y señaló que en los últimos 30 años el número de mezquitas se ha multiplicado por 10, alcanzando actualmente las 20.000.

Sudeste asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados

del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

A pesar de los tímidos intentos por reanudar las conversaciones de paz entre el NDF y el Gobierno, durante el año se registraron varios enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el NPA, especialmente en Mindanao, región que en los últimos tiempos se ha erigido en el principal bastión del grupo armado. No trascendió la cifra de víctimas mortales provocada por el conflicto armado, pero **las Fuerzas Armadas declararon que más de 3.000 personas habían muerto en los últimos ocho años, que durante el 2015 el número de miembros del NPA había pasado de 4.443 a 3.926, que 269 combatientes se habían rendido o habían sido capturados en este mismo periodo y que el número de incidentes de violencia iniciados por el NPA había pasado de 168 en 2011 a 119 en 2015.** Las cifras sobre el número de combatientes del NPA ofrecidas a finales de año son contradictorias con las que había publicado el Gobierno anteriormente (3.200 combatientes a finales de 2014 y menos de 2.900 al finalizar el primer trimestre de 2015) e implicarían que la capacidad militar del NPA se ha mantenido relativamente estable en alrededor de los 4.000 combatientes desde el año 2010. Respecto de la presencia del NPA en Mindanao, su principal área de influencia en los últimos años, el Ejército declaró a finales de año que el número de combatientes del NPA había disminuido en un 17% (de 2.035 a 1.691), su presencia en municipios había decrecido en un 25% (de 547 a 413) y que el número de frentes se había reducido de 29 a 24. El Gobierno también declaró que entre 2011 y marzo de 2015, 79 líderes y cuadros dirigentes del NPA habían sido neutralizados, nueve de ellos en 2015, y que ello estaba debilitando enormemente al grupo. Cabe destacar especialmente la detención en Bacoor a mediados de junio de Adelberto Silva –que según informaciones de prensa era el secretario general del Partido Comunista de Filipinas (PCF), sucesor de Wilma Austria (detenida en marzo de 2014) y segunda máxima autoridad del PCF y el NPA, solamente por detrás del fundador del grupo, Jose Maria Sison–, así como la muerte días más tarde en Davao del comandante Leoncio Pitao, alias Ka Parago, considerado por muchos analistas como una de las figuras con mayor experiencia y ascendencia dentro del NPA. En este sentido, las Fuerzas Armadas declararon que estos acontecimientos podrían comportar la completa desestructuración del NPA en la región. El NDF denunció que Pitao fue ejecutado extrajudicialmente y que las Fuerzas Armadas podrían haber cometido crímenes de guerra. En julio el nuevo jefe del Ejército

reiteró el creciente debilitamiento del NPA, hizo público su objetivo de haberlo convertido en una organización militarmente intrascendente (con menos de un millar de combatientes) para finales de 2016 y también anunció su intención de concentrar la mayor parte de los esfuerzos de contrainsurgencia en Mindanao.

Por su parte, **el NPA no solamente negó el debilitamiento del grupo, sino que a finales de marzo, con motivo de la conmemoración del 46° aniversario de su fundación, declaró tener más de 10.000 combatientes y 110 frentes activos en 71 provincias**, con una presencia estable en 800 municipios del país. Respecto de la situación en Mindanao, el NPA declaró haber incrementado sustancialmente su influencia en la región desde el inicio del mandato de Benigno Aquino en 2010, pasando de tener 42 frentes a 47 e incrementando el número de ofensivas tácticas de las 250 en 2010 a las 400 en 2014. Por otra parte, el NPA protestó contra la decisión del Gobierno de EEUU de seguir incluyendo al grupo y al Partido Comunista de Filipinas en su lista de organizaciones terroristas y también negó las acusaciones del Gobierno acerca de la utilización de minas antipersonas o de la extorsión, del reclutamiento de menores o de los ataques contra poblaciones indígenas. Respecto de este último punto, uno de los episodios que generó mayor controversia fue el asesinato de tres indígenas (conocidos como lumad en Filipinas) a principios de septiembre en la localidad de Lianga (provincia de Surigao del Sur), que provocó el desplazamiento forzoso de unas 2.000 personas. Varias organizaciones de derechos humanos responsabilizaron del ataque al grupo paramilitar Magahat Bagani Force, que según estas organizaciones estaría entrenado y financiado por las Fuerzas Armadas para utilizarlo en tareas de contrainsurgencia. El propio gobernador de Surigao del Sur declaró haber solicitado en varias ocasiones a las Fuerzas Armadas el desmantelamiento de la milicia anticomunista, aunque sin éxito, mientras que otra organización de derechos humanos acusó al Ejército de cometer violaciones de derechos humanos contra población indígena y campesina. Las Fuerzas Armadas negaron las acusaciones e incluso el presidente declaró públicamente que no existía ninguna campaña de persecución u hostigamiento contra población lumad. En este sentido, algunas organizaciones lumad negaron la responsabilidad del Estado en el mencionado ataque y a la vez acusaron al NPA de reclutar masivamente a personas lumad, que según varias fuentes supondrían un porcentaje importante de los combatientes del NPA en Mindanao y otras regiones. Finalmente, cabe destacar que ambas partes se acusaron mutuamente de violar los ceses de hostilidades acordados del 15 al 19 de enero –con motivo de una visita del papa Francisco– y del 23 de diciembre al 3 de enero de 2016, fechas en las que históricamente se han decretado treguas.

Filipinas (Mindanao-Abu Sayyaf)

Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. El Gobierno considera que su estrategia contrainsurgente de los últimos años ha debilitado enormemente el liderazgo y la capacidad militar del grupo, pero a la vez advierte que Abu Sayyaf sigue suponiendo una amenaza para el Estado por los cuantiosos recursos que obtiene de los secuestros y por su presunta alianza con organizaciones consideradas terroristas como al-Qaeda o Yemaah Islamiyah.

Las Fuerzas Armadas incrementaron su presión militar sobre Abu Sayyaf en la región de Sulu para neutralizar a sus principales líderes, detener a personas de la organización transnacional Yemaah Islamiyah presuntamente vinculadas a Abu Sayyaf y liberar a personas secuestradas por el grupo. El Gobierno declaró que **durante el 2015 murieron 133 miembros de Abu Sayyaf y 18 soldados y que otros 164 combatientes y más de 80 soldados resultaron heridos en Sulu**. Estos datos no incluyen a las personas civiles fallecidas a causa del conflicto ni los combatientes o militares que han muerto fuera de la región de Sulu, el principal bastión del grupo armado. Además, según el Gobierno, en 2015 fueron liberadas, rescatadas o escaparon 16 personas secuestradas por Abu Sayyaf. A finales de 2015 se estimaba que el grupo tenía a cuatro personas en su haber, entre ellas un ciudadano holandés. En cuanto a los principales hechos de violencia que se registraron durante el año cabe destacar el operativo con apoyo aéreo que llevó a cabo el Ejército a finales de enero para tomar cuatro campamentos del grupo en la región de Sumisip, que provocó la muerte de un número indeterminado de combatientes de Abu Sayyaf, o los enfrentamientos que se produjeron a finales de febrero en la región selvática de Patikul (Sulu), en los que 24 combatientes de Abu Sayyaf y dos soldados murieron y en los que otras 50 personas resultaron heridas. Después de estos enfrentamientos, de los que habría salido con vida el principal líder del grupo, Radulan Sahiron, las Fuerzas Armadas anunciaron el inicio de una ofensiva contrainsurgente contra Abu Sayyaf y el BIFF con el objetivo de derrotar

militarmente a ambos grupos. Más adelante, en el mes de abril, 14 personas murieron y como mínimo otras 25 resultaron heridas en un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y Abu Sayyaf en la región de Patikul (provincia de Sulu), mientras que en el mes de mayo alrededor de 20 personas murieron en el marco de las operaciones del Ejército para retomar el control sobre dos localidades de la isla de Basilán que habían sido ocupadas por Abu Sayyaf. A finales de agosto las Fuerzas Armadas declararon que más de 40 miembros de Abu Sayyaf murieron y varias decenas más resultaron heridas durante una operación contrainsurgente que, según el Gobierno, habría comportado al grupo uno de los reveses más importantes de los últimos tiempos.

Las informaciones indican que el momento del año en el que se produjeron los mayores niveles de violencia fue durante la segunda mitad del mes de diciembre. Según datos oficiales, como mínimo 44 personas murieron (la mayoría combatientes) y cerca de 60 personas resultaron heridas durante varios enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y Abu Sayyaf en el archipiélago de Sulu, especialmente en las regiones de Al-Barka y Buhanginan. En diciembre, el presidente, Benigno Aquino, había ordenado intensificar las operaciones contra el grupo, poco después de que el primer ministro malasio hubiera instado al Gobierno filipino a incrementar las acciones contra Abu Sayyaf tras el secuestro y decapitación de un ciudadano malasio en Sulu. En este sentido, cabe destacar que la decisión de un tribunal regional de Basilan, a instancias del Gobierno, de declarar oficialmente como grupo terrorista a Abu Sayyaf –grupo que ya constaba en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE– permitió, según Manila, fortalecer y hacer más efectiva la lucha contra Abu Sayyaf y facilitar los operativos de rescate de personas secuestradas. En varias ocasiones durante el año el Gobierno había advertido sobre la amenaza que suponen para el Estado las prácticas en las que incurre a menudo Abu Sayyaf, como el secuestro o los atentados con artefactos explosivos, que según el Gobierno se incrementaron durante el año. A modo de ejemplo, en la ciudad de Zamboanga se registraron varios ataques con artefactos explosivos en locales de ocio o incluso en autobuses. Respecto del secuestro, una de las principales fuentes de financiación del grupo, cabe señalar que durante el año Abu Sayyaf secuestró a varias personas extranjeras, logrando una mayor atención mediática, y que algunas voces advirtieron que es común que grupos de crimen organizado entreguen a personas secuestradas a Abu Sayyaf para maximizar el rescate obtenido.

Unas 200 personas murieron durante la ofensiva que las Fuerzas Armadas filipinas llevaron a cabo en Mindanao contra el BIFF a principios de año

Filipinas (Mindanao-BIFF)	
Inicio:	2015
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, BIFF
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

Los orígenes del BIFF se remontan al año 2008, cuando su líder y fundador, Ameril Umbra Kato, por entonces comandante del MILF, llevó a cabo una campaña de ataques en varias provincias de Mindanao después de que la Corte Suprema declarara ilegal la firma del Acuerdo sobre Dominios Ancestrales prevista para agosto de ese mismo año. Desde entonces, la oposición pública y explícita de Ameril Umbra Kato a las conversaciones de paz entre el Gobierno y el MILF fue provocando un mayor distanciamiento entre la cúpula del MILF, partidaria de reanudar el diálogo y mantener la vigencia del acuerdo de alto fuego entre ambas partes, y Kato, que formalmente fundó el BIFF en 2010. El BIFF, sobre el que existen informaciones muy dispares acerca de su membresía, capacidad militar y alianzas con otros grupos que también operan en Mindanao, incrementó su actividad armada a medida que avanzaban las negociaciones de paz y que ambas partes firmaban sucesivos acuerdos, como el Acuerdo Marco sobre Bangsamoro (2012) o el Acuerdo Global sobre Bangsamoro (2014). En 2015 el Gobierno declaró que el incremento de las campañas de contrainsurgencia contra el BIFF y la muerte de Ameril Umbra Kato habrían debilitado enormemente al grupo.

A pesar de que en los últimos años el BIFF ya había sido muy activo en su oposición al proceso de paz entre Manila y el MILF, la intensidad de los hechos de violencia ocurridos en 2015 explica la consideración de este caso como de conflicto armado. Según cifras oficiales y noticias aparecidas en prensa, se estima que **como mínimo unas 300 personas murieron durante el 2015 y que muchas otras resultaron heridas por los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el BIFF** o bien por episodios de violencia en los que participó decisivamente el BIFF. La mayor parte de estas víctimas se produjeron en el marco de la operación contrainsurgente contra el grupo que iniciaron las Fuerzas Armadas a principios de enero y culminaron a finales de marzo. El Gobierno declaró que en el transcurso de la misma habían fallecido 139 combatientes, 10 soldados y 59 otras personas; varias decenas habían resultado heridas y más de 120.000 personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares, principalmente en las provincias de Cotobato Norte y Maguindanao. A pesar de los operativos puestos en marcha por ACNUR

y la Región Autónoma del Mindanao Musulmán para prestar ayuda humanitaria a la población desplazada, varias organizaciones alertaron sobre las precarias condiciones de los campamentos de evacuación. Según las Fuerzas Armadas, dicha ofensiva habría cumplido con sus objetivos de neutralizar el 50% de los efectivos del BIFF –entre ellos algunos de los líderes del grupo–, desarticular algunas de sus instalaciones para fabricar explosivos y cerrar el cerco sobre Abdul Basit Usman, un experto en explosivos con presuntos vínculos con organizaciones como Abu Sayyaf, Yemaah Islamiyah o BIFF y muy buscado por los Gobiernos de Filipinas y EEUU. Poco después del fin de la operación de contrainsurgencia, en el mes de abril murió el líder y fundador del BIFF, Ameril Umbra Kato, cuya salud era muy precaria desde que sufriera un ataque de corazón a finales de 2011. El jefe de las Fuerzas Armadas declaró que la muerte de Kato debilitaba enormemente al BIFF por cuanto era el líder político, militar y espiritual del grupo y señaló que el BIFF se había fragmentado en pequeñas unidades por disputas entre varios de sus comandantes. Por su parte, el MILF hizo un llamamiento a aquellos miembros del BIFF que no tuvieran causas criminales pendientes con la justicia a volver a unirse al MILF y a apoyar las negociaciones de paz.

Tras la muerte de Kato, el portavoz del grupo anunció el nombramiento como nuevo jefe del BIFF de Sheik Ismail Abubakar, también conocido como Comandante Bungos, que tenía lazos familiares con Kato y que hasta el momento era segundo máximo responsable de asuntos políticos dentro del BIFF. En los meses siguientes, el BIFF llevó a cabo una serie de ataques en la provincia de Maguindanao, pero en julio el propio grupo reconoció no poder confrontar al Estado en una guerra abierta y, por tanto, haber cambiado su estrategia hacia una guerra de guerrillas. A finales de año, concretamente los días 24 y 25 de diciembre y la noche de fin de año, el BIFF llevó a cabo una serie de ataques coordinados en las provincias de Sultan Kudarat, Maguindanao y Cotobato Norte, que provocaron la muerte de 13 personas (nueve civiles y cuatro combatientes) y el desplazamiento forzado de unas 6.000 personas. A pesar de que las Fuerzas Armadas desplegaron efectivos adicionales en la región e instaron a la población civil a sentirse tranquila y segura y a retornar a sus lugares de origen, algunos medios de comunicación destacaron que población civil estaba comprando armamento para tareas de vigilancia y autodefensa. Además, el Gobierno advirtió sobre la posibilidad de nuevos ataques por parte del BIFF para incrementar la inestabilidad en la región y como represalia por las bajas sufridas en los últimos tiempos. En diciembre el Comité Nacional de Inteligencia ya había advertido sobre posibles ataques durante las fechas navideñas en Mindanao. Por su parte, el BIFF declaró que las personas fallecidas estaban armadas y que entraron en combate, pero residentes de las comunidades atacadas contradijeron esta versión y negaron formar parte de la milicia cristiana Pulahan. Finalmente, cabe

destacar la implicación de varios miembros del MILF en un enfrentamiento a finales de enero entre un cuerpo especial de la Policía y efectivos del MILF, el BIFF y otros grupos armados en la localidad de Mamasapano, en el que murieron alrededor de 70 personas, 44 de ellas policías⁶⁵.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados (KNU/KNLA, SSA-S, KNPP, UWSA, CNF, ALP, DKBA, KNPLAC, SSNPLO, KIO)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados.

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad de Myanmar con diferentes grupos armados insurgentes de adscripción étnica continuó activo durante todo el año. La firma de un acuerdo de alto el fuego nacional en el mes de octubre no logró poner fin a dichos enfrentamientos, ya que los grupos que quedaron excluidos de la firma fueron precisamente aquellos que mantenían su actividad armada. El acuerdo fue firmado por el Gobierno y ocho grupos armados: KNU, KNLA-PC, DKBA, Pa-O NLO, CNF, ALP, ABSDF y RCS/SSA-S, pero grupos que controlan amplios territorios y que poseen numeroso armamento, como UWSA, SSA o KIA, quedaron fuera del acuerdo.⁶⁶ El año 2015 comenzó con una importante escalada de violencia, que se intensificó sobre todo durante el mes de febrero en la región especial Kokang del estado Shan, donde se registraron continuos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición kokang MNDAA, que pudieron ocasionar la muerte a cerca de 60 soldados, 25 insurgentes y entre 50 y 100 civiles. Decenas de miles de personas se desplazaron a China huyendo de

65. Véase el resumen sobre Filipinas (Mindanao) en el capítulo 2 (Tensiones).

66. Véase “La transición a la democracia y la paz en Myanmar” en el capítulo 5 (Oportunidades de paz para 2016).

la violencia (la población kokang es étnicamente de origen chino). Los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el MNDAA se repitieron en diferentes momentos del año, y en abril el Ejército birmano señaló que 126 soldados y 74 rebeldes kokang habían muerto desde el comienzo de los enfrentamientos, mientras se desconocía el número de bajas civiles. Además, se acusó a otros grupos como el KIA, el SSA-S y el TNLA de haber participado en la confrontación armada dando apoyo al MNDAA, aunque éstos lo negaron. El Gobierno impuso y posteriormente prolongó el estado de emergencia y la ley marcial en la zona. En junio el MNDAA declaró un acuerdo de alto el fuego de carácter unilateral como consecuencia de las presiones recibidas por el Gobierno chino en ese sentido. Sin embargo los enfrentamientos continuaron y el Gobierno no secundó el alto el fuego, señalando que el grupo debía dejar las armas.

También se produjeron enfrentamientos importantes entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado KIA en la zona de Hpakant, una de las más afectadas por el conflicto armado, que forzaron el desplazamiento de miles de personas a lo largo del año. En algunos momentos de 2015 estos enfrentamientos alcanzaron una periodicidad casi diaria. Además, también se registraron enfrentamientos con carácter más esporádico con otros grupos armados como RCSS/SSA-S, SSA-N, DKBA y TNLA en zonas controladas por estos grupos en los estados de Shan y Kachin. Cabe destacar que a mediados de septiembre se produjo la suspensión de la campaña electoral en el sur del estado Shan a petición del RCSS, debido a, según el grupo, un recrudecimiento de los ataques gubernamentales contra el SSA-S (su brazo armado) en zonas controladas por éste. Sin embargo, el grupo finalmente decidió adherirse al acuerdo de alto el fuego. Esto incrementó las tensiones entre el SSA-S y el TNLA. También se alcanzó un acuerdo en noviembre entre el Gobierno y el SSA-N, lo que permitió una mejora en la situación de seguridad en el estado Shan. Según las cifras recogidas por el Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), más de 660.000 personas permanecían desplazadas en Myanmar como consecuencia del conflicto armado.

El Gobierno de Myanmar y ocho grupos armados firmaron un acuerdo de alto el fuego, aunque persistieron los enfrentamientos con los grupos insurgentes no incluidos en el acuerdo

potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Patani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

Tanto el Gobierno como algunos centros de investigación constataron que **los umbrales de violencia en el sur del país disminuyeron significativamente respecto del año pasado y se situaron en su nivel más bajo desde el inicio del conflicto armado en 2004**. En varias ocasiones durante el año el Gobierno señaló que la violencia en las provincias sureñas de mayoría musulmana se había reducido aproximadamente a la mitad respecto del año anterior. El centro de investigación Deep South Watch señaló que el número de víctimas mortales en 2015 había sido de 246, una cifra claramente inferior a las 341 del año anterior y a las 456 del 2013. El número de personas heridas a causa del conflicto armado también descendió de las 987 en 2013 a las 544 en 2015. Según este centro de investigación, **en los 12 años de conflicto armado, 6.543 personas han muerto (una media de 545 cada año) y 11.919 han resultado heridas (993 cada año) en los casi 15.400 episodios de violencia registrados** (una media de 1.281 al año, mientras que en 2015 se contabilizaron 674 episodios). En 2015, los meses de mayo y octubre fueron los más violentos. Por otra parte,

según cifras del Southernmost Provinces Research Database, el número de ataques con explosivos en el sur de Tailandia se redujo en un 50% respecto del 2014 y en un 65% respecto del 2007, el año con mayor prevalencia de este tipo de ataques. Algunos de los hechos de violencia del año que tuvieron mayor repercusión política fueron el estallido, a mediados de mayo, de una treintena de artefactos explosivos de manera simultánea o consecutiva durante tres días seguidos en varias localidades de la provincia de Yala; la explosión en abril de una bomba en la isla turística de Koh Samui, en la que siete personas resultaron heridas; la serie de ataques simultáneos a mediados de julio en varias localidades de Songkhla y Narathiwat en los que siete personas murieron y otras 12 resultaron heridas; o el ataque coordinado contra varios objetivos (áreas residenciales, un templo budista o edificios públicos) de Narathiwat, en el que tres personas murieron y otras 14 resultaron heridas. Según algunos analistas, varios

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la

de estos episodios de violencia estaban vinculados al desarrollo de las conversaciones de paz y tenían la intención por parte del BRN, principal grupo armado en la región, de demostrar al Gobierno el control sobre los combatientes en el terreno y también de marcar perfil propio ante MARA Patani, una plataforma que agrupa a seis organizaciones insurgentes: el BRN, tres facciones distintas de PULO, el BIPP y el GMIP.

El Gobierno atribuyó esta disminución de la violencia a las nuevas estrategias de contrainsurgencia y de gestión del conflicto puestas en marcha tras el golpe de Estado de 2014, como el inicio de la retirada parcial de los efectivos militares y policiales en el sur del país, el mayor reclutamiento de fuerzas de seguridad del Estado de las mencionadas tres provincias (en lugar de desplegar efectivos oriundos de otras partes del país), labores más sofisticadas de inteligencia, el incremento de puestos de control y redadas en áreas urbanas, el acercamiento a personas y organizaciones influyentes en el sur del país para reducir el margen de maniobra de los grupos insurgentes o el ofrecimiento de incentivos a algunos insurgentes, como la posibilidad de aceptar una inmunidad temporal durante el Ramadán para reunirse con sus familias. Además de estos factores, algunos analistas consideran que otro de los motivos que explican la reducción de la violencia es el compromiso de las organizaciones insurgentes de minimizar el número de víctimas mortales (especialmente entre la población civil) desde que se iniciaran las conversaciones de paz en 2013, posteriormente retomadas por la Junta Militar en 2015. Por su parte, durante el año algunas organizaciones insurgentes señalaron que la disminución en los niveles de violencia no responde tanto a una falta de capacidad como a un gesto de buena voluntad de cara al Gobierno y también declararon estar extendiendo su presencia e influencia a otras zonas (como la provincia de Songkhla). En este sentido, algunos analistas señalaron que, tras la constatación de que ataques como los de julio de 2013 en Bangkok o el de abril de 2015 en la isla de Koh Samui lograron mayor atención mediática internacional que los episodios diarios de violencia que ocurren en el sur de Tailandia, la insurgencia podría plantearse ampliar su radio de acción fuera de las provincias sureñas de mayoría musulmana, especialmente después de que tras más de una década de lucha armada en el sur del país la insurgencia no esté más cerca de sus objetivos. Finalmente, cabe constatar que a finales de junio el Gobierno de EEUU presentó un informe en el que señalaba que no existen evidencias sobre los vínculos entre los grupos que operan en el sur del país y la organización Estado Islámico (ISIS), así como de la presencia en el sur de organizaciones armadas foráneas.

El Gobierno tailandés declaró que los niveles de violencia en el sur del país se situaron en su nivel más bajo desde el inicio del conflicto armado en 2004

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Ucrania	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema , Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Ucrania, considerado un país en transición desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y territorio de gran importancia geoestratégica, afronta una crisis sociopolítica de gran envergadura y un conflicto armado en zonas del este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Precedido por un cúmulo de focos de tensión en el conjunto del país (protestas masivas pro-europeas y antigubernamentales; caída del presidente Víktor Yanukóvich y su régimen; anexión de Crimea por Rusia; protestas anti-Maidán y emergencia de actores armados en el este), la situación en el este de Ucrania derivó en conflicto armado en el segundo trimestre de 2014, enfrentando a milicias separatistas pro-rusas, apoyadas por Rusia, y a las fuerzas armadas estatales bajo las nuevas autoridades pro-europeas. A cuestiones como el estatus de esas provincias se añade de fondo la dimensión geoestratégica internacional (rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa; demostración de fuerza de Rusia ante su propia opinión pública; entre otros elementos). La guerra, que afecta a las provincias de Donetsk y Lugansk, ha tenido un grave impacto en la población civil, especialmente en términos de desplazamiento forzado. Las partes en conflicto participan en negociaciones, lideradas por el Grupo Trilateral de Contacto (OSCE, Rusia y Ucrania).

El conflicto en el este de Ucrania se mantuvo activo en 2015, con graves escaladas pero también periodos de distensión, especialmente en los últimos meses del año. **El balance de víctimas desde el inicio de la guerra (mediados de abril de 2014) hasta inicios de diciembre de 2015 era de 9.115 muertes y cerca de 21.000 personas heridas** –cifras ofrecidas por la ONU y calificadas de conservadoras–. En 2015 murieron unas 4.400 personas y en torno a 11.000 resultaron heridas de gravedad (en 2014 se produjeron en torno a 4.700 muertes y unos 10.000 heridos). Además, según los últimos datos disponibles de International Displacement Monitoring Centre (IDMC) sobre desplazamiento, de mediados de agosto de 2015, la guerra desplazó a 1.431.800 personas dentro de Ucrania. Otras se desplazaron fuera del país a consecuencia del conflicto. Así, según el balance difundido por ACNUR a finales

de año, 1.103.212 pidieron asilo u otras formas de estancia legal en países vecinos, la mayoría en Rusia (858.363 personas) y Belarús (127.620 personas). Además, unas 2,9 millones de personas en la zona de conflicto (2,7 en áreas bajo control rebelde y 200.000 en áreas bajo control del Gobierno) continuaban afrontando graves dificultades a finales de año, especialmente en lo relativo a acceso a atención sanitaria, alojamiento, servicios sociales y subsidios, entre otros impactos, y muchos de ellos continuaban dependiendo de ayuda humanitaria, según la ONU. En lo relativo a la evolución durante 2015, **se asistió a una grave escalada hasta mediados de febrero**, que incluyó focos de violencia intensos en el aeropuerto y entorno de Donetsk, así como una extensión parcial de la violencia a la estratégica ciudad portuaria de Mariúpol y un cerco militar rebelde al nudo ferroviario de Debáltsevo –clave para la comunicación entre las áreas rebeldes Donetsk y Lugansk–. Entre los hechos más graves en esa fase, una treintena de civiles murieron y 112 resultaron heridos en un ataque el 24 de enero en Mariúpol; 12 civiles murieron y una treintena fueron heridos en un ataque con proyectil sobre un autobús en Volnovaja (Donetsk); y 13 civiles murieron en otro ataque sobre un tranvía y un automóvil. **La escalada llevó a la consecución *in extremis* del acuerdo de Minsk II el 12 de febrero, que incluía un alto el fuego a partir del 15 de febrero; retirada de armamento pesado y creación de una zona de seguridad; y retirada de armas y tropas extranjeras**, así como otros aspectos de seguridad y políticos.⁶⁷ Pese al acuerdo, las fuerzas rebeldes mantuvieron el cerco a Debáltsevo hasta la retirada de las tropas ucranias el 18 de febrero. Solo en las tres últimas semanas de enero murieron 224 civiles y más de medio millar resultaron heridos, en buena parte por los bombardeos indiscriminados sobre zonas residenciales tanto en áreas controladas por el Gobierno ucraniano (Avdiika, Debáltsevo, Popasna, Schastia, Stanychno-Luhanske) como ciudades en manos rebeldes, como Donetsk. Tras el alto el fuego de Minsk II se produjo una reducción significativa de la violencia, aunque continuaron las acusaciones mutuas de violaciones del acuerdo.

A mediados de año se asistió a una nueva escalada de la violencia, con un incremento sustantivo de violaciones del alto el fuego y despliegue de armamento pesado en la zona de seguridad. Así, entre mediados de mayo y mediados de agosto murieron 105 civiles y resultaron heridos otros 308, doblando la cifra de civiles del periodo

La guerra en Ucrania causó más de 4.400 víctimas mortales y 11.000 heridos en 2015, año en que se alcanzaron nuevos acuerdos que redujeron la violencia, incluyendo una disminución de bombardeos indiscriminados

de mitad de febrero a mitad de mayo. Asimismo, según la ONU, la retirada de armamento pesado de la línea de contacto fue parcial y continuaron usándose cañones, mortero, tanques y sistemas de lanzamiento múltiple de misiles en los enfrentamientos. Además, se siguió señalando presencia y flujo de combatientes extranjeros y armas y munición sofisticada desde Rusia. Ante esta nueva escalada y las presiones diplomáticas, el Gobierno y las autoridades rebeldes alcanzaron un nuevo alto el fuego, que se inició el 1 de septiembre y que dio paso a una nueva reducción de la violencia.

A finales de ese mismo mes **se alcanzó otro acuerdo sobre retirada de tanques, morteros y artillería de menos de 100 milímetros de calibre** a una distancia de 15 kilómetros de la línea de seguridad y bajo supervisión de la OSCE, lo que llevó a una situación de relativa calma y estabilidad, coincidiendo también con la implicación militar más activa y directa de Rusia en Siria. Tras un nuevo incremento de incidentes en noviembre y alertas de la OSCE sobre la implementación irregular del acuerdo, las partes acordaron una nueva tregua que entró en vigor la madrugada del 23 de diciembre, con el fin de facilitar la celebración del año nuevo y la navidad ortodoxa. Aun así siguieron produciéndose acusaciones de incumplimiento e incidentes de violencia. En todo caso, **la ONU constató en su informe de finales de año que entre mediados de agosto y mediados de noviembre se había asistido a una reducción de las hostilidades, siendo el periodo más largo sin bombardeos indiscriminados de zonas habitadas. No obstante, el informe alertó de que continuaban produciéndose víctimas mortales, especialmente por artefactos explosivos** improvisados. Por otra parte, durante el año hubo incidentes de baja intensidad fuera de la zona de guerra, como varios atentados en Jarkov (Odesa), incluyendo una bomba que mató a cuatro personas e hirió a una docena de personas el 22 de febrero, jornada de primer aniversario de la salida del presidente Yanukóvich. Se produjeron detenciones de decenas de personas acusadas de sabotajes. No obstante, esos incidentes no derivaron en nuevos frentes de violencia abierta. A su vez, movilizaciones en agosto convocadas por partidos nacionalistas ucranianos –contra una enmienda constitucional para dar luz verde a legislación sobre un estatus especial de las regiones bajo control rebelde– derivaron en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Una granada causó la muerte de tres miembros de la Guardia Nacional, mientras otras 120 personas resultaron heridas en los disturbios.

67. Véase el resumen sobre Ucrania en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Rusia y Cáucaso

Rusia (Daguestán)	
Inicio:	2010
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

Daguestán, la república más extensa, poblada y con mayor diversidad étnica del norte del Cáucaso, afronta desde finales de los años noventa un incremento de la conflictividad. La insurgencia armada de corte islamista, que defiende la creación de un Estado islámico en el norte del Cáucaso, se enfrenta a las autoridades locales y federales, en un contexto de atentados periódicos y operaciones de contrainsurgencia. La oposición armada está encabezada por una red de unidades armadas y de carácter islamista conocida como Sharia Jammát. La violencia armada en Daguestán es resultado de un cúmulo de factores, incluyendo la regionalización de la insurgencia islamista procedente de Chechenia así como el clima local en Daguestán de violaciones de derechos humanos, a menudo enmarcadas en la “lucha contra el terrorismo”. Todo ello en un contexto social y político frágil, de malestar social por los abusos de poder y los elevados índices de desempleo y pobreza, pese a la riqueza de recursos naturales. A ello se añaden las tensiones interétnicas, las rivalidades por el poder político y la violencia de corte criminal.

Daguestán continuó siendo la república norcaucásica más afectada por la violencia entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia islamista, si bien se produjo una reducción significativa de las víctimas mortales y, en paralelo, hubo cambios significativos en las filas rebeldes, por su progresiva adhesión al grupo armado Estado Islámico (ISIS). En un contexto en que desde 2014 comandantes rebeldes del norte del Cáucaso comenzaron a anunciar su afiliación a ISIS, abandonando las filas del Emirato Caucásico, las fracturas se agravaron en 2015. El máximo líder rebelde del Emirato Caucásico, Aliaskhab Kebekov, originario de Daguestán, denunció el cambio de lealtades. El máximo líder rebelde de la rama daguestaní, Said Abu Muhammad Arakansky (Kamil Saidov) – quien sucedió al anterior líder, Rustam Asilderov, que en diciembre de 2014 se adhirió a ISIS– se sumó en febrero a las críticas de Kebekov a los comandantes e insurgentes tránsfugas. No obstante, el paso a ISIS tomó fuerza entre las filas rebeldes y, en paralelo, el Emirato Caucásico sufrió bajas sustantivas en su liderazgo durante el año, en operaciones de las fuerzas de seguridad. Se difundió en junio una declaración que decía representar a todos los emires del Emirato Islámico y que afirmaba lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS. Un portavoz

Se produjeron fracturas internas en la insurgencia del norte del Cáucaso, incluyendo en Daguestán, sobre la lealtad a Emirato Caucásico o la adhesión a ISIS

de Estado Islámico anunció en junio la creación de la Provincia del Cáucaso (Wilayaat al-Qawqaz), que establece provincias en las repúblicas norcaucásicas (Daguestán, Chechenia, Ingushetia así como otra provincia conjunta en Kabardino-Balkaria y Karachaevo-Cherkesia). Además, el líder insurgente daguestaní adherido a ISIS Rustam Asilderov fue nombrado emir de la rama de ISIS en el norte del Cáucaso. Algunos analistas señalaron en la segunda mitad del año que la mayoría de insurgentes pasaron a operar bajo la bandera de ISIS, mientras otros plantearon dudas sobre el grado de desmantelamiento del Emirato Caucásico. Las autoridades rusas consideraban a finales de año como miembro de ISIS a cualquier insurgente asesinado en la república, incluyendo a combatientes aún leales al Emirato Caucásico, según investigadores.

En paralelo, continuó la violencia en Daguestán entre las fuerzas de seguridad y los grupos rebeldes. Según el balance anual del portal independiente Caucasian Knot, en 2015 murieron más de 120 personas, de las cuales la mayoría eran insurgentes (cerca de un centenar), y otras 30 resultaron heridas (la mitad civiles y otra mitad miembros de fuerzas de seguridad). Las cifras indicaban una reducción de la violencia en comparación con años anteriores (208 muertes y 85 heridos en 2014; 341 fallecidos y al menos 300 heridos de 2013). **Kebekov, máximo líder de la insurgencia regional desde 2014 y primer líder de Emirato Caucásico sin origen checheno, murió en una operación especial en abril en el distrito daguestaní de Buinaksk**, en la que fallecieron otras cuatro personas, incluyendo el líder insurgente del distrito de Untsukul de Daguestán, Shamil Gasanov, y el líder del sector central en Daguestán, Omar Magomedov. En agosto la insurgencia afrontó nuevos reveses, incluyendo la **muerte del sucesor de Kebekov en el liderazgo del Emirato Caucásico, Magomed Suleimanov, así como del líder de su rama daguestaní, Kamil Saidov**, junto a otros insurgentes, en el marco de otra operación especial en el distrito de Untsukul. Durante

el año se sucedieron los choques, ataques y operaciones especiales en diversas zonas de la república, con medidas de excepcionalidad. Entre los múltiples hechos de violencia, siete supuestos insurgentes murieron en una operación especial en la capital, Makhachkala, en marzo. Un líder rebelde del sector de Gimry murió en otras operaciones a finales de junio. A finales de diciembre ISIS reivindicó un ataque junto a la turística ciudadela de Derbent, segunda ciudad de Daguestán, que causó la muerte de un agente y heridas a 10 personas. Según la Policía daguestaní, había turistas entre los heridos. El ataque iba dirigido contra personal de inteligencia ruso, según el comunicado de ISIS. El conflicto armado que afecta a Daguestán tuvo de nuevo impactos graves sobre la población civil, incluyendo víctimas mortales y heridos, unido a un clima de abusos e impunidad por parte de las fuerzas de seguridad. En la segunda mitad del año aumentó el número de

mueres y heridos entre población civil como consecuencia del conflicto. Entre las víctimas, varios imanes fueron asesinados. Se produjeron también algunos secuestros así como algunas medidas de castigo colectivo contra familiares de supuestos insurgentes. Las operaciones antiterroristas también conllevaron restricciones de movimientos para la población civil así como redadas. Además, las autoridades mantuvieron su presión sobre sectores de población practicante de la corriente islamista salafista, incluyendo detenciones masivas.

Se reinició la guerra abierta entre el Estado turco y la guerrilla del PKK, extendiéndose a núcleos urbanos y con graves impactos en civiles, e ISIS irrumpió atacando objetivos pro-kurdos

221 combatientes del PKK y 151 civiles fallecidos de julio a mediados de diciembre, según International Crisis Group;⁶⁸ según la Presidencia, 3.100 miembros del PKK fallecieron; según el Ejército cerca 500 insurgentes murieron solo entre principios de diciembre e inicios de enero de 2016; según el PKK, murieron 220 combatientes kurdos y 1.544 miembros de las fuerzas seguridad en 2015; más de 160 civiles muertos entre agosto y diciembre, según ONG locales). El diálogo quedó cancelado

en el primer trimestre, desautorizado por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, y afectado por la pre-campaña electoral y la inestabilidad regional,⁶⁹ y se dio paso a un escenario más volátil, con algunos enfrentamientos entre Ejército y guerrilla. El PKK acusó en mayo al Ejército de poner fin al alto el fuego oficioso con el que mayoritariamente había respondido a la tregua unilateral del PKK de 2013. El grupo armado se comprometió a no llevar a cabo acciones ofensivas durante la campaña electoral. Ésta fue escenario de grave tensión política y social (polarización social por la agenda pro-régimen presidencial de Erdogan; rivalidad electoral entre el oficialista AKP y el partido pro-kurdo HDP, en la apuesta de este último por superar el umbral electoral del 10%; regresión democrática, agravada por la ley de seguridad aprobada en marzo, y el contexto regional de grave crisis). El HDP sufrió más de un centenar de ataques en 60 provincias en periodo electoral, incluyendo uno en un mitin electoral en Diyarbakir en junio (cuatro muertes y un centenar de heridos), atribuido a ISIS. El movimiento kurdo denunció la existencia de células de ISIS en Turquía. Hubo choques en esa misma ciudad poco después, entre actores kurdos islamistas y pro-PKK, con varios muertos y heridos. El AKP perdió su mayoría absoluta (40,87% del voto y 258 de los 550 escaños) y el HDP salió reforzado (13,12% del voto, 80 escaños). En los meses siguientes la clase política no logró acuerdo para una coalición electoral, lo que llevó a la convocatoria de elecciones anticipadas en noviembre.

La situación se desbordó en la segunda mitad del año. Un **grave atentado atribuido a ISIS en Suruç (frontera con Siria) el 20 de julio, contra jóvenes en apoyo a Kobane, con 33 muertos y un centenar de heridos**, y del que el movimiento kurdo responsabilizó en última instancia al Gobierno turco, fue seguido de varios asesinatos de miembros de fuerzas de seguridad por actores cercanos al PKK y por el propio PKK, dejando la tregua en papel mojado. A su vez, **el Gobierno lanzó a finales de ese mes una campaña militar y policial, presentada como una ofensiva contra ISIS y PKK, y en la práctica materializada en una reanudación de la guerra de gran escala contra el PKK y contra el movimiento kurdo en su conjunto**. Abarcó bombardeos contra el PKK en Turquía y norte de Iraq, detenciones masivas –incluyendo de civiles y cargos electos– y operaciones

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo. Las expectativas creadas a partir de 2009 se vieron truncadas por un aumento de la tensión política y social y el fin en 2011 de las llamadas conversaciones de Oslo entre Turquía y el PKK. A finales de 2012 el Gobierno anunció la vuelta al diálogo. La guerra en Siria, iniciada como revuelta en 2011, puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

La situación en Turquía dio un vuelco, con el colapso del proceso de paz, el reinicio de la guerra y su extensión a núcleos urbanos en el sudeste y graves atentados de ISIS. Los balances anuales fueron dispares según las fuentes, pero se superó el umbral de varios centenares (194 miembros de fuerzas de seguridad, al menos

68. International Crisis Group, *A Sisyphian Task? Resuming Turkey and PKK Peace Talks*, Crisis Group Europe Briefing no. 77, 17 de diciembre de 2015.

69. Véase el resumen sobre Turquía en el capítulo 3 (Procesos de paz).

militares especiales a modo de cercos y asedios contra núcleos urbanos kurdos, algunos de los cuales asistieron a un proceso de creación de milicias armadas kurdas, así como a declaraciones unilaterales de autonomía por parte de algunos ayuntamientos. **Defensores de derechos humanos alertaron de lo desproporcionado de las operaciones especiales de asedio y toques de queda y del grave impacto en los civiles** (víctimas mortales y heridos, incluyendo menores; restricciones de acceso a asistencia sanitaria, agua y alimentos; graves daños materiales en viviendas; bloqueos informativos y restricciones de movimiento, entre otros). En el asedio de septiembre a Cizre una veintena de civiles murieron, según fuentes locales de derechos humanos, mientras según el Gobierno murieron 40 miembros del PKK y 25 policías fueron heridos. **El PKK realizó acciones ofensivas de envergadura:** 16 soldados muertos en un ataque en Daglica (Hakkari) en septiembre y 14 policías fallecidos en otro ataque en Igdir ese mes, entre otros hechos.

La situación aún se deterioró más en los últimos meses del año. **Un atentado en Ankara el 10 de octubre contra una marcha pro-diálogo de paz, con amplia presencia kurda, mató a un centenar de personas e hirió a varios cientos.** Analistas, expertos y medios de comunicación lo atribuyeron a ISIS. El Gobierno responsabilizó conjuntamente a ISIS, al PKK y al Gobierno sirio, ahondando en la fractura que separa al Estado y a la población kurda, que acusó al Gobierno de negligencia y de responsabilidad por su apoyo directo o indirecto a ISIS durante los años de guerra en Siria. **El mismo día del atentado en Ankara el PKK anunció un alto el fuego para facilitar las elecciones anticipadas de noviembre. La tregua fue rechazada por el Estado, que continuó con la ofensiva militar y policial a gran escala.** En las urnas, el AKP recuperó apoyo social (317 escaños y 49,5% de votos), mientras el HDP se mantuvo por encima del umbral electoral aunque perdió votos (obtuvo 59 escaños y 10,7%). El Ejército desplegó 10.000 tropas apoyadas por tanques y artillería en localidades del sudeste en diciembre y medios periodísticos señalaron el uso de armas pesadas por ambas partes. Se vieron especialmente afectados núcleos como Cizre y Silopi (provincia de Sirtak), Sur (Diyarbakir). Según la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, 162 civiles (incluyendo 32 menores y 24 personas mayores de 60 años) murieron entre mediados de agosto y finales de año en el marco de 58 operaciones especiales con toques de queda en 19 distritos de siete ciudades, en los que residen 1.377.000 personas. Según informaciones de prensa, varios cientos de miles de civiles huyeron por la violencia –200.000 según algún diario local, “varios cientos de miles” según otros medios, 100.000 según la Policía–. En algunos llamamientos el PKK llamó a la población a permanecer en sus localidades. Todo ello fue en paralelo al clima general de persecución por parte del Estado de defensores de derechos humanos, activistas y periodistas discordantes con el Gobierno. En noviembre fue asesinado en Diyarbakir el reputado

presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir y defensor de derechos humanos Tahir Elçi mientras comparecía ante los medios llamando al fin de la violencia entre Turquía y el PKK. Además, irrumpió de nuevo en escena el grupo armado kurdo TAK – considerado por algunos expertos como un grupo bajo el paraguas del PKK–, con el anuncio en diciembre de inicio de una campaña ofensiva contra el Estado y “colaboradores” en represalia por las operaciones militares en el sudeste, advirtiendo a aerolíneas y turistas. TAK reivindicó ese mes un atentado en un aeropuerto internacional de Estambul, que mató a un trabajador e hirió a otro. En un congreso en diciembre, el movimiento kurdo legitimó la insurgencia urbana kurda y llamó a la creación de regiones autónomas.

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen (al-houthistas)	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Irán
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shíi, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se ha cobrado miles de víctimas mortales y ha provocado también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis han fracasado y las treguas suscritas en los últimos años se han roto sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita a principios de 2015. En un contexto de internacionalización, el conflicto ha ido adquiriendo tintes sectarios y una dimensión regional.

70. Véase “Violencia armada en Yemen: ¿una nueva Siria invisibilizada?” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2016).

La situación en Yemen experimentó un **severo deterioro durante 2015, como resultado de un agravamiento de la crisis política, una escalada de violencia agudizada por la implicación de actores foráneos, la intensificación de tensiones sectarias, un bloqueo en los esfuerzos por facilitar una salida negociada y una crisis humanitaria que empeoró producto de la deriva del conflicto armado.**⁷⁰

Según las estimaciones de la ONU, el conflicto causó más de 6.000 víctimas mortales en 2015. Durante el primer trimestre del año el foco estuvo en la lucha por el poder político. Los al-houthistas decidieron responder por la fuerza a la iniciativa gubernamental que pretendía consagrar un esquema federal de seis estados en la nueva Constitución yemení. El grupo armado –que en los últimos años había ampliado su área de influencia desde el norte del país– tomó el control de la capital, Sanaa, a principios de 2015, se enfrentó a las fuerzas de seguridad en el palacio presidencial y puso al mandatario yemení, Abdo Rabbo Mansour Hadi, en arresto domiciliario. Los al-houthistas y Hadi firmaron entonces un acuerdo que fue considerado como una capitulación del presidente, que presentó su renuncia. Su dimisión no llegó a ser ratificada por el Parlamento y quedó en entredicho después de que Hadi huyera a Adén (sur). Desde allí Hadi denunció un golpe de Estado, reivindicó su condición de presidente y declaró nulas e ilegítimas las medidas adoptadas por los al-houthistas, entre ellas la disolución del Parlamento y la creación de un consejo presidencial. Las acciones de los al-houthistas también fueron rechazadas por sectores de la población –hubo masivas manifestaciones en ciudades como Sanaa y Taiz– y por el Consejo de Seguridad de la ONU, que en febrero aprobó en forma unánime la resolución 2201 exigiendo la liberación de Hadi, el repliegue del grupo y una participación de buena fe en las iniciativas de diálogo para resolver la crisis. Los al-houthistas continuaron avanzando posiciones hacia el sur del país y ofrecieron una recompensa por Hadi, quien, a su vez, pidió una intervención internacional para confrontar al grupo armado.

En este contexto, **a finales de marzo se produjo un punto de inflexión y el conflicto adquirió una creciente dimensión de internacionalización. El 26 de marzo, un día después de que Hadi se exiliara en Arabia Saudita, Riad decidió ponerse al frente de una ofensiva internacional contra los al-houthistas** en el marco de una coalición integrada también por EAU, Bahréin, Kuwait, Qatar, Jordania, Marruecos, Sudán y Egipto, con respaldo de EEUU y Reino Unido. La coalición internacional liderada por Arabia Saudita lanzó la operación “Tormenta Decisiva” e inicialmente centró su estrategia en el fuego aéreo. Paralelamente, a mediados de abril el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó –con la abstención de Rusia– la resolución 2216, que impuso un embargo de armas a los al-houthistas,

exigió un repliegue del grupo y adoptó sanciones contra el entorno del ex presidente Alí Abdullah Saleh, adversario de Hadi, con ascendencia sobre diversas unidades militares y aliado de conveniencia de los al-houthistas, pese a los enfrentamientos protagonizados por los al-houthistas y las fuerzas armadas yemeníes en el pasado. La campaña aérea y los combates entre los al-houthistas y fuerzas leales a Hadi no cesaron en los meses siguientes en distintos puntos del país –con excepción de algunos períodos de tregua que duraron algunos días o unas horas antes de ser quebrantados– y se impuso un bloqueo naval y aéreo. Sin dejar de atacar el feudo del grupo armado en el norte, a mediados de año la coalición internacional apoyó una ofensiva de las fuerzas pro-Hadi bautizada como “Flecha Dorada” que les permitió recuperar el control de Adén. La implicación de la coalición internacional incluyó el suministro de armas y vehículos blindados, así como una creciente presencia en terreno, con tropas de EAU, Sudán y Arabia Saudita. El bando pro-Hadi también fue reforzado por mercenarios contratados por EAU. La internacionalización del conflicto armado yemení también se evidenció en el aumento de los incidentes

Más de 6.000 personas murieron por el conflicto en Yemen en 2015, más de la mitad civiles, desde el inicio de la ofensiva internacional liderada por Arabia Saudita en marzo

en la zona fronteriza con Arabia Saudita. Según recuentos de prensa, además de las bajas de tropas de la coalición en territorio yemení, otras 80 personas –en su mayoría militares y guardias fronterizos– fallecieron en Arabia Saudita producto de incidentes vinculados al conflicto. La contienda también adquirió un tinte sectario y fue considerada como un escenario de confrontación indirecta entre las dos potencias regionales, Riad y Teherán. El frente pro-Hadi y, en especial, Arabia Saudita, insistió en presentar a los al-houthistas como una amenaza por su presunta alianza con Irán, aunque observadores y expertos pusieron en duda el nivel de relación previa y el grado de cooperación real entre el grupo armado y la república islámica. A finales de año el bando pro-Hadi intentaba consolidar el control en Adén y los al-houthistas trataban de repeler la ofensiva sobre Taiz y responder a los ataques en la zona norte. Cabe destacar que el conflicto y el vacío de poder en el país favorecieron una intensa actividad de ISIS y AQPA en 2015, especialmente en el sur del país.⁷¹ Ambos grupos atacaron intereses al-houthistas, pero algunas de sus acciones también afectaron al bando pro-Hadi.

Los dos bandos en pugna en Yemen fueron acusados de llevar a cabo acciones constitutivas de crímenes de guerra. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU acusó a la coalición liderada por Arabia Saudita de ser responsable de un desmesurado número de ataques con víctimas civiles. La coalición internacional también fue denunciada por ofensivas contra hospitales de Médicos Sin Fronteras (MSF) y por el uso de bombas de racimo, mientras que los al-houthistas fueron

71. Véase el resumen sobre Yemen (AQPA) en este capítulo.

señalados por lanzar ofensivas en zonas residenciales y sembrar minas de manera indiscriminada. Al finalizar el año, la ONU alertaba que más de la mitad de las 6.000 víctimas mortales del conflicto eran civiles. La violencia armada también causó graves daños en las infraestructuras del país, lo que derivó en el colapso de las instalaciones hospitalarias, desbordadas a la atención a heridos y pacientes de enfermedades como dengue o malaria que se propagaron en medio del conflicto. En el que ya era el país más pobre del mundo árabe, **a finales de 2015 cerca de 21,1 millones de personas (82% de la población yemení) requería asistencia humanitaria, según datos de la ONU. Más de siete millones de personas enfrentaban una situación de inseguridad alimentaria severa.** El conflicto armado también propició masivos desplazamientos forzados de población. Según ACNUR, durante el primer semestre de 2015 Yemen fue el país que registró un mayor número de nuevos desplazamientos forzados, con más de 900.000, elevando a 2,3 millones la cifra total de personas desplazadas internamente en el país. Otros miles de yemeníes huyeron rumbo a países del cuerno de África, como Somalia, Djibouti y Etiopía. La violencia en el país también tuvo como trasfondo el bloqueo de los esfuerzos por propiciar una salida negociada.⁷² Una primera reunión entre las partes en junio en Ginebra –sin un encuentro directo– no dio resultados, mientras que una segunda ronda en diciembre consiguió un diálogo directo, pero se vio frustrada por constantes violaciones al cese el fuego decretado en los días previos y por diferencias de fondo sobre temas clave de la negociación. El bando pro-Hadi insistía en que se debían aceptar los términos de la resolución 2216 y los al-houthistas reiteraban la necesidad de un cambio de gobierno.

La filial de al-Qaeda en Yemen continuó con sus ataques a las fuerzas de seguridad y aprovechó el contexto de convulsión para avanzar posiciones en el sur del país

Yemen (AQPA)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, AQPA/Ansar Sharia, ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, milicias tribales, milicias al-houthistas
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Afectado por múltiples conflictos y desafíos internos, el Gobierno yemení enfrenta una fuerte presión internacional –sobre todo de EEUU y Arabia Saudita– para concentrar esfuerzos en la lucha contra al-Qaeda en el país, especialmente tras la fusión de la rama saudí y yemení de la organización que a comienzos de 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Si bien la presencia de al-Qaeda en Yemen se registra desde los noventa –con

episodios de alta repercusión como el atentado suicida contra el barco de guerra estadounidense USS Cole en 2000–, en los últimos años se ha observado una escalada en sus acciones. En diciembre de 2009 el fallido atentado contra un avión que se dirigía a Detroit centró la atención internacional en AQPA, considerado por EEUU como una de las principales amenazas a su seguridad. Aprovechando el vacío de poder en Yemen en el marco de la revuelta contra el presidente Alí Abdullah Saleh, AQPA amplió sus operaciones en el sur del país y las zonas bajo su control. A partir de 2011 el grupo comenzó a realizar algunas de sus acciones bajo la denominación Ansar Sharia (Partidarios de la Ley Islámica). Más recientemente, en particular desde mediados de 2014, AQPA se ha visto crecientemente involucrada en enfrentamientos con milicias al-houthistas que han avanzado posición desde el norte de Yemen.

A lo largo de 2015, y en un escenario de superposición de las dinámicas de violencia en Yemen, el conflicto armado protagonizado en los últimos años por AQPA se vio directamente influido por el clima general de inestabilidad en el país y por la evolución de la disputa entre los al-houthistas y las fuerzas leales al presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi, apoyadas por una coalición internacional liderada por Arabia Saudita.⁷³ **La filial de al-Qaeda en Yemen continuó con sus ataques a las fuerzas de seguridad, pero también aprovechó el contexto de convulsión para avanzar posiciones en el sur del país y se involucró de manera creciente en enfrentamientos con los al-houthistas, en un contexto en el que también ganó protagonismo una filial de ISIS de reciente creación en Yemen.** Así, a lo largo del año AQPA siguió reivindicando acciones contra las fuerzas armadas yemeníes e instituciones gubernamentales, entre ellas ataques a bases o academias militares y a tropas, con un saldo de decenas de fallecidos; el asalto al banco central de Mukallah (en la provincia de Hadramawt); y ofensivas que le permitieron liberar a más de 300 prisioneros. Paralelamente, y también en línea con los años anteriores, **las posiciones de AQPA continuaron siendo objetivo de los ataques de aviones no tripulados de EEUU, que provocaron decenas de fallecidos entre presuntos combatientes del grupo. Uno de estos ataques aéreos causó la muerte, a mediados de mayo, del líder de AQPA, Nasir al-Wuhayshi,** ex secretario de Osama bin Laden y que había sido designado por el líder de la red, Ayman al-Zawahiri, como jefe de operaciones del grupo a nivel global. Al-Wuhayshi fue sucedido por el hasta entonces jefe militar de AQPA, Qassim al-Rimi, quien en sus mensajes posteriores insistió en identificar a EEUU como el principal objetivo de la organización y aseguró que el grupo no olvidaba a sus militantes presos en Guantánamo. En territorio yemení, sin embargo, los militantes de AQPA se enfrentaron de manera más intensa con las fuerzas al-houthistas. Si bien se habían registrado choques entre ambos grupos en el pasado, durante 2015 AQPA asumió una postura

72. Véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 3 (Procesos de paz).

73. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en este capítulo.

más activa para combatir el avance de los al-houthistas hacia el sur del país, aprovechando la resistencia al grupo de origen septentrional en zonas del centro y sur del país. En este contexto, AQPA consiguió ampliar las áreas bajo su control en la provincia de Hadramawt (en el sureste, representa casi un tercio del territorio de Yemen), reforzó los contactos con tribus de esta zona y durante el segundo semestre también lanzó incursiones en Adén, poniendo en entredicho el supuesto control de la ciudad por parte del bando pro-Hadi. A finales de año también intentaba retornar a la zona de Zinjibar, en la provincia de Abyan, que ya estuvo bajo control de AQPA durante unos meses entre 2011 y 2012.

Durante todo el año también se registró una creciente actividad de la filial de ISIS en Yemen (“Wilayat al-Yemen”) creada en noviembre de 2014, principalmente en el norte, pero también con incursiones en el sur del país, área de tradicional influencia de AQPA. ISIS reivindicó diversas ofensivas, entre ellas los ataques explosivos contra mezquitas en Sanaa frecuentadas por al-houthistas y otros edificios y sedes del grupo armado. Estas acciones dejaron 137 víctimas mortales en marzo, otra treintena en junio y casi 40 en septiembre, en su mayoría civiles. ISIS también ejecutó a soldados yemeníes en Shabwah (centro-sur) y asesinó a combatientes al-houthistas en Adén. En octubre la filial yemení de ISIS también reclamó la autoría de varios atentados suicidas contra tropas de la coalición internacional liderada por Arabia Saudita, y en diciembre, el atentado en el que murió el gobernador de Adén. En este contexto, diversos analistas destacaron la creciente competencia entre ISIS y AQPA en Yemen por sacar ventaja de la inestabilidad y el incremento de las tensiones sectarias en el país y subrayaron que ambas formaciones habían intentado presentar sus acciones contra los al-houthistas como una vía para ganar adeptos. Ambos grupos no se enfrentaron de manera directa, pero AQPA ha marcado distancia de algunas de las estrategias de la rama de ISIS, en particular de los atentados en mezquitas.⁷⁴ En el marco de un pulso global entre ISIS y Al Qaeda, el nuevo líder de AQPA reiteró en su primer mensaje público la lealtad de su grupo a la red liderada por Ayman al-Zawahiri. A finales de año, AQPA emitió un mensaje conjunto con AQMI en el que subrayaron que el califato declarado por el grupo de Abu Bakr al-Baghdadi es ilegítimo y en el que critican que ISIS combata a otros musulmanes en vez de centrarse en la lucha contra judíos y cristianos. Finalmente, cabe destacar que **a comienzos de 2015 AQPA reivindicó el ataque contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, que causó 12 víctimas mortales y causó consternación a nivel mundial**. La ofensiva fue perpetrada por dos atacantes que explicitaron su vinculación con esta rama de al-Qaeda y al menos uno de ellos había recibido entrenamiento y, presuntamente, apoyo de AQPA para acometer la acción. A finales de 2015, al-Zawahiri emitió un mensaje en el que felicitó a AQPA por este ataque.

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados con base en el Sinaí –entre ellos Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya–, Israel
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

El conflicto armado en el Sinaí se agravó en 2015, en especial durante el segundo semestre. **La violencia se intensificó, con hechos que evidenciaron las nuevas capacidades de la filial de ISIS en Egipto y que causaron una gran conmoción a nivel mundial –como el ataque explosivo contra un avión ruso poco después de que despegara de Sharm el-Sheik–**, revelando además las interconexiones regionales e internacionales que impregnan el conflicto. Siguiendo la tendencia del año anterior, a lo largo de 2015 el conflicto se materializó principalmente en ataques contra militares y policías egipcios por parte del grupo armado Provincia del Sinaí (PS) –ex Ansar Beit al-Maqdis (ABM), que cambió de nombre tras declarar su lealtad a ISIS a finales de 2014–, operaciones de las fuerzas de seguridad contra las organizaciones insurgentes –incluyendo ofensivas aéreas–, y enfrentamientos entre ambos. Las acciones de PS incluyeron tiroteos, ataques suicidas, atentados

74. Véase “La amenaza yihadista y sus efectos desestabilizadores a nivel internacional” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2016).

con coches bomba y detonación de artefactos explosivos en carreteras. A partir de 2015, PS también puso en la mira de sus ataques a miembros del Poder Judicial y ejecutó a personas sospechosas de colaborar con Israel. Los hechos de violencia se concentraron en el Sinaí, aunque también se produjeron algunos incidentes en El Cairo y en el Delta del Nilo, algunos de ellos sin autoría clara. Algunas acciones, principalmente en la capital egipcia, fueron reivindicadas por el grupo armado Ajnad Misr. También se produjeron acciones armadas en Giza y Karnak, dos puntos de interés turístico. El estricto bloqueo informativo impuesto por el régimen de Abdel Fatah al-Sisi dificultó un balance contrastado del impacto del conflicto armado en el Sinaí, que según estimaciones podría haber causado cientos e incluso varios miles de víctimas mortales. **De acuerdo al Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), con sede en Washington, durante el año los ataques de militantes en Sinaí se incrementaron por diez respecto a 2012, con más de 350 acciones, y las operaciones contrainsurgentes del Ejército habrían causado más de 3.000 fallecidos en 2015.**⁷⁵ Diversas ONG denunciaron la falta de información sobre el impacto del conflicto, en especial en lo referente a víctimas civiles y desde un punto de vista humanitario.⁷⁶ Durante el primer semestre los hechos de violencia siguieron el patrón de ataques de milicianos y contraofensivas de las fuerzas de seguridad. Entre los hechos destacados cabe mencionar la ofensiva en la zona de El-Arish a finales de enero en la que murieron una treintena de soldados y que tuvo una respuesta militar en los días siguientes donde murieron unos 45 insurgentes, según fuentes castrenses. Después de la ejecución, en mayo, de seis militantes de ABM/PS, el grupo armado hizo un llamamiento a atentar contra representantes judiciales, por considerarles cómplices de las políticas represivas del Gobierno. Poco después, tres jueces murieron tiroteados en El-Arish y, en junio, fue asesinado el fiscal general egipcio, la figura de más alto rango en ser objeto de un atentado desde un ataque fallido contra el ministro del Interior en 2013.

El segundo semestre se inició con una ofensiva que fue descrita por diversos analistas como un ataque sin precedentes de ISIS en Egipto tanto por su organización, como por el número de milicianos movilizados y el tipo de armamento utilizado. Unos 300 combatientes del grupo armado, según fuentes locales, atacaron una quincena de puestos de control y de instalaciones de las fuerzas de seguridad e intentaron tomar el control de la localidad de Sheik Zuweid, con el fin de anexionarla al califato proclamado por el líder de ISIS.⁷⁷ Los milicianos utilizaron misiles antiaéreos para disuadir a los helicópteros militares egipcios, además de morteros, misiles antitanques,

coches bomba y artefactos explosivos, en una ofensiva que se extendió por 12 horas. Balances iniciales indicaron que se habían producido 70 muertes, en su mayoría soldados, pero posteriormente fuentes militares indicaron que habían fallecido una veintena de soldados y 241 militantes. Tras la ofensiva en Sheik Zuweid se decretó una nueva ampliación del estado de emergencia en el Sinaí –vigente desde finales de 2014– y se aprobó una nueva ley antiterrorista, con una polémica cláusula que sanciona la difusión de informaciones que contravengan la versión oficial.⁷⁸ Posteriormente, en septiembre, también se puso en marcha una nueva operación militar, denominada Martyr Right, que según datos del Ejército hasta noviembre había causado la muerte a 500 insurgentes. Aunque al-Sisi insistió en que la situación en el Sinaí estaba totalmente bajo control –contradiendo a

su propio primer ministro, que había asegurado que Egipto se encontraba en “estado de guerra”⁷⁹–, diversos hechos confirmaron el volátil panorama en la región. Entre ellos, la decapitación de un ciudadano croata secuestrado por PS; el ataque a la misión que desde 1979 supervisa el alto el fuego entre Israel y Egipto, que dejó a varios efectivos heridos; o el ataque por error perpetrado

por las fuerzas de seguridad egipcias contra un convoy de turistas que dejó 12 personas muertas, ocho de ellas mexicanas. **A finales de octubre, la explosión de un avión ruso que despegaba de Sharm el-Sheikh rumbo a Moscú causó la muerte de 224 personas, en una acción que fue reivindicada por PS y que reforzó la proyección internacional del proyecto yihadista de ISIS.** Inicialmente, tanto Egipto como Rusia se negaron a admitir los indicios de un ataque. Moscú acabó reconociendo la autoría de ISIS después de que el grupo armado atentara en París, en noviembre. El Gobierno de al-Sisi, en cambio, hasta finales de diciembre seguía insistiendo en que no había indicios de atentado. Cabe destacar que a lo largo del año **la política del Gobierno de desalojos forzados, demoliciones de casas y cierre de túneles en la zona de Rafah, con el propósito de crear una zona tapón en el área fronteriza con Gaza, motivó diversas críticas de organizaciones de derechos humanos** –solo entre julio y agosto se destruyeron 3.255 viviendas y edificios, según denunció Human Rights Watch–. Esta aproximación fue cuestionada por su impacto en la población –notificada con poco tiempo y sin obtener las compensaciones adecuadas por su desalojo–, pero también por la falta de evidencias sobre la presunta colaboración entre grupos de Gaza y la filial de ISIS en Sinaí y porque los indicios apuntan a que PS habría obtenido sus armas fundamentalmente de los asaltos al Ejército egipcio y de Libia. Respecto a este último país,

A finales de octubre, la filial de ISIS en el Sinaí reivindicó el ataque explosivo contra un avión ruso que causó 224 víctimas mortales

75. The Economist, “The peninsular war: Egypt is losing control of the Sinai”, *The Economist*, 14 de noviembre de 2015.

76. IRIN, “Secrecy in Sinai – an unknown human toll”, *IRIN*, 10 de julio de 2015.

77. Véase “La amenaza yihadista y sus efectos desestabilizadores a nivel internacional” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2016).

78. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).

79. Omar Ashour, “The Sinai is far from stable”, *al-Jazeera*, 17 de julio de 2015.

cabe destacar que Egipto se involucró militarmente en una ofensiva aérea contra posiciones de ISIS en Libia, en febrero, después de que el grupo armado decapitara a una veintena de ciudadanos egipcios de religión copta.⁸⁰ Finalmente, cabe mencionar que durante el año EEUU levantó el embargo de armas contra Egipto vigente desde 2013 y que el gobierno de al-Sisi restableció las relaciones diplomáticas con Israel.

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes y kurdas (peshmergas), milicias chiíes, grupos armados sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Irán
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU.

El panorama en Iraq continuó deteriorándose durante 2015, con elevadísimos niveles de violencia que agravaron aún más la situación de la población después de más de una década de hostilidades. De acuerdo a los datos recabados por la organización Iraq Body Count (IBC), **en 2015 el conflicto armado en el país causó un mínimo de 16.200 víctimas mortales entre la población civil, aunque previsiblemente estas cifras serían corregidas corregidas al alza.** En 2014, las cifras preliminares de IBC apuntaron a 17.000 civiles fallecidos en Iraq, que acabaron siendo más de 20.000. Estos balances representan un aumento significativo respecto al período 2009-2012, en que

el número de muertes civiles oscilaban entre 4.000 y 5.000 al año. Según estimaciones más conservadoras de la misión de la ONU en el país, UNAMI, y de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, OHCHR, en un período de casi dos años –del 1 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2015– el conflicto en Iraq había provocado la muerte a 18.802 civiles y dejado heridas a otras 36.245 personas. No obstante, la ONU reconoció las dificultades para recopilar información por problemas de seguridad, admitió que la cifra real puede ser mucho mayor y subrayó que se desconoce el número de personas fallecidas por los efectos secundarios del conflicto, como la falta de acceso a alimentos, agua o atención médica. Según los datos de la ONU, las cifras de desplazamiento por el conflicto desde principios de 2014 ascendían a más de 3,2 millones de personas. La violencia en Iraq se manifestó principalmente en enfrentamientos del grupo armado ISIS con tropas iraquíes y otros actores armados, incluyendo milicias chiíes, unidades de movilización popular (UMPs), fuerzas tribales sunníes, y combatientes kurdos (peshmergas). Adicionalmente se produjeron ataques explosivos y atentados suicidas a lo largo del año –reivindicados por ISIS, muchos de ellos en Bagdad–, ataques aéreos y otros numerosos abusos. ISIS fue acusado de masacres, de asesinar a personas percibidas como detractores o informantes, a ex miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios, líderes tribales, profesionales y activistas, y minorías étnicas y religiosas. Los crímenes de ISIS también incluyeron esclavitud sexual, destrucción de patrimonio y se denunció el uso de armas químicas por parte del grupo, aunque la ONU no pudo confirmarlo. Las fuerzas iraquíes y sus afiliados fueron denunciados por otras prácticas, incluyendo acciones de represalia contra personas acusadas de ser colaboradoras de ISIS, restricciones de movimiento a personas desplazadas, arrestos arbitrarios y operaciones militares sin la adopción de medidas necesarias para proteger a la población civil.

El conflicto afectó distintos puntos del país, especialmente a las provincias de Bagdad, Anbar y Diyala, y durante el año se produjeron avances y retrocesos en distintos frentes. A principios de 2015, el Gobierno lanzó una operación para intentar recuperar Tikrit, una ciudad en la que ISIS perpetró una masacre en 2014 (según un informe dado a conocer en 2015, 1.700 cadetes fueron asesinados en el campo militar Speicher). Junto a las fuerzas iraquíes, milicias chiíes apoyadas por Irán tuvieron un rol protagónico en Tikrit. La implicación de EEUU –que lidera la coalición internacional contra ISIS– a través de ataques aéreos generó algunos roces con las fuerzas chiíes y fue valorada como un intento de Washington por recuperar influencia en la lucha contra ISIS en Iraq. Tras varias semanas de asedio, ISIS fue expulsado de Tikrit en abril. Paralelamente, se produjeron duros combates en torno a la ciudad de Baiji, sede de la mayor refinería de petróleo de Iraq.

80. Véase el resumen sobre Libia en este capítulo.

ISIS consiguió una importante victoria en mayo, al tomar el control de Ramadi, capital de la provincia de Anbar y ubicada a un centenar de kilómetros de Bagdad. En tan solo un mes, los enfrentamientos en esta zona provocaron la muerte de más de 500 personas y obligaron a huir a 25.000. La caída de Ramadi fue considerada como una prueba de las limitaciones de la ofensiva aérea liderada por EEUU y como un duro revés para las fuerzas iraquíes, que fueron objeto de duras críticas, incluso de sus aliados. El secretario de Defensa de EEUU las acusó de falta de esfuerzo y disposición a combatir y el presidente Barack Obama reconoció dificultades para definir una estrategia en Iraq y para entrenar a las tropas locales. Las fuerzas iraquíes quedaron aún más en entredicho después de que un informe parlamentario evidenciara los múltiples errores que permitieron la toma de Mosul por ISIS en 2014, incluyendo el abandono de grandes cantidades de material militar. Durante el segundo semestre Bagdad puso en marcha una ofensiva para intentar expulsar a ISIS de la provincia de Anbar y las hostilidades se centraron en Fallujah y Ramadi. La campaña, también con el apoyo de EEUU, enfrentó diversos obstáculos, entre ellos el intenso calor y las fortificaciones y bombas trampa instaladas por ISIS. A finales de diciembre, el Gobierno anunció la recuperación de Ramadi. Paralelamente, hacia finales de año, las fuerzas kurdas también lanzaron una operación con apoyo de la coalición internacional anti-ISIS y de fuerzas del PKK/YPG que permitió la expulsión del grupo de Sinjar, donde había perpetrado múltiples atrocidades contra la comunidad yazidí y donde se encontraron fosas comunes. Las fuerzas kurdas también se enfrentaron con combatientes de ISIS en los alrededores de Mosul.

El conflicto armado en Iraq causó al menos 16.200 víctimas mortales entre la población civil durante el año, según estimaciones provisionales a finales de 2015

Cabe destacar que además del conflicto armado, durante 2015 **el país también se vio afectado por tensiones políticas internas que amenazaron con desestabilizar aún más el país.** Uno de los temas de polémica fue el papel de las milicias chiíes –y, en particular, la decisión de otorgarles el control de la seguridad en ciertas zonas de Bagdad–, lo que derivó en acusaciones al primer ministro Haider al-Abadi por una supuesta incapacidad para imponer su autoridad y llevó a acciones de boicot de algunos parlamentarios. En este contexto diversas voces alertaron sobre el riesgo de actos de venganza en medio de las tensiones sectarias en el país, en especial después de que informes de organizaciones de derechos humanos acusaran a milicias chiíes de secuestrar y asesinar a sunníes acusados de colaborar con ISIS. Durante el segundo semestre, la tensión política se evidenció en numerosas protestas, principalmente

en Bagdad y el sur del país, contra la corrupción y la falta de servicios. El clima de inestabilidad motivó la intervención del ayatollah Ali al-Sistani, que intentó rebajar la tensión, y en los meses siguientes el Gobierno de al-Abadi anunció una serie de reformas con el fin de abordar el problema de la corrupción, racionalizar el gasto público y aplacar las tensiones sectarias. Estas medidas incluyeron la reducción del número de ministerios, altos cargos, asesores y guardaespaldas o la introducción de una cuota para independientes en puestos de gobierno. Pese a ello, durante el último trimestre parlamentarios chiíes amenazaron con retirar el apoyo a al-Abadi si no profundizaba las reformas. Algunos análisis advirtieron que en el trasfondo de la crisis había una lucha de poder entre sectores próximos al primer ministro y comandantes de las milicias chiíes apoyadas por Irán que han visto reforzadas sus posiciones en el marco de la lucha contra ISIS.⁸¹ Finalmente, cabe mencionar que durante el segundo semestre se registró un pulso entre las autoridades de Iraq y Turquía, por las acciones turcas contra posiciones del PKK en el norte de Iraq.

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ⁸²
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinicia en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU divide el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclama el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexiona Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasan a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupa Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

81. International Crisis Group, *Iraq: Conflict Alert*, ICG, 24 de agosto de 2015.

82. A pesar de que “Palestina” (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como “internacional” y no como “interno” por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

A lo largo de 2015, el conflicto palestino-israelí continuó motivando periódicos episodios de violencia directa, que se incrementaron durante el último trimestre y provocaron la muerte de entre 150 y 200 personas durante el año. **En términos comparativos, los niveles de letalidad fueron menores respecto a 2014, año que registró un balance de más de 2.000 víctimas mortales principalmente por la escalada de violencia entre junio y agosto en Gaza.** Las dinámicas de violencia durante 2015 fueron de una naturaleza diferente y tuvieron como escenario Cisjordania, con graves incidentes en Jerusalén, y también Gaza. En los primeros nueve meses del año se registraron incidentes de manera más esporádica, incluyendo enfrentamientos entre jóvenes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes durante manifestaciones en los territorios ocupados – por ejemplo, con motivo de un nuevo aniversario de la Nakba–, muertes de palestinos tiroteados por militares israelíes durante intentos de ataques a israelíes o en puestos de control, o fallecimientos en Gaza por la detonación de explosivos que quedaron en la Franja tras las hostilidades del año anterior. Entre los hechos ocurridos en este período cabe destacar el atentado incendiario perpetrado en julio por colonos israelíes contra una familia palestina, en el que murió un bebé y, posteriormente, sus padres. La agresión, que causó consternación internacional, se enmarcó en la política de venganza o “price tag” promovida por colonos radicales que actúan contra la población palestina, muchas veces en represalia por medidas que limitan la expansión de asentamientos en los territorios ocupados. El ataque alentó masivas protestas en los territorios palestinos, provocando nuevas muertes de jóvenes palestinos en Cisjordania y Gaza a manos de las fuerzas de seguridad israelíes. En septiembre Jerusalén se convirtió en epicentro de las tensiones entre israelíes y palestinos, después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu impusiera restricciones a los palestinos en el acceso a la Explanada de las Mezquitas para facilitar las visitas de israelíes a la zona con motivo de la celebración del año nuevo judío. En este contexto, el rey de Jordania advirtió a Israel que no se planteara ningún cambio en el *statu quo* vigente durante décadas en la Explanada, según el cual los judíos pueden visitar pero no rezar en esta zona. Aunque las presiones internacionales y de países árabes llevaron a Israel a levantar las restricciones a los palestinos a mediados de septiembre, la oleada de violencia no cesó y a partir de octubre tuvieron lugar incidentes de manera regular. **La violencia se concretó en ataques con cuchillos de población palestina**

El conflicto palestino-israelí registró una escalada a finales de 2015, pero en términos comparativos los niveles de letalidad fueron menores que en 2014

contra ciudadanos israelíes, de manera aleatoria en espacios públicos o autobuses; atropellos deliberados de israelíes; tiroteos a jóvenes palestinos durante operaciones de rastreo, en puestos de control, en manifestaciones y enfrentamientos, y durante ataques o presuntos intentos de agresión a militares o civiles israelíes. De acuerdo a balances estimativos, desde el 1 de octubre y hasta finales de año más de una veintena de israelíes, un estadounidense, un eritreo y más de 130 palestinos habían muerto a causa de estos hechos.

Según Israel, más de la mitad de los palestinos fallecidos en este período eran agresores. La respuesta israelí a este fenómeno motivó numerosas críticas palestinas, pero también de ONG israelíes e internacionales, que acusaron a Israel de ejecutar a presuntos sospechosos sin contar con pruebas y sin que supusieran una amenaza inminente. EEUU advirtió al Gobierno de Netanyahu por los indicios de un excesivo uso de la fuerza. La reacción israelí también incluyó la imposición de medidas de seguridad sin precedentes en Jerusalén, un despliegue adicional de soldados en diversas ciudades y una intensificación en el uso de medidas de castigo colectivo, como demoliciones de viviendas de los presuntos atacantes y el no retorno de los cadáveres a sus familias. Según la ONG israelí B'Tselem, hasta finales de diciembre Israel había destruido una treintena de viviendas palestinas y no había retornado los restos de 55 palestinos, incluidos 11 menores de edad. Aunque los palestinos

y palestinas parecen perpetrar estos ataques de manera independiente y no coordinada, Israel acusó a las autoridades palestinas de incitar esta violencia. Éstas, a su vez, atribuyeron el fenómeno a la frustración de la juventud palestina ante la ocupación y la falta de expectativas sobre una salida política. La escalada de violencia de finales de 2015 se produjo en un contexto de crónico bloqueo en las negociaciones, con escasas perspectivas de reactivación tras el triunfo electoral de Netanyahu en las elecciones de marzo.⁸³ En plena campaña electoral, el primer ministro aseguró que no habría Estado palestino mientras él estuviera en el poder. Su posición en este tema y en lo relativo al dossier nuclear iraní⁸⁴ supuso un distanciamiento de EEUU. Paralelamente, la AP mantuvo su estrategia de internacionalización de la cuestión palestina y, tras su adhesión al Tratado de Roma a finales de 2014, presentó a la Corte Penal Internacional antecedentes sobre los abusos cometidos por Israel durante la última década en Gaza, sobre los asentamientos en los territorios ocupados y sobre el trato a los prisioneros en las cárceles israelíes.

83. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en el capítulo 3 (Procesos de paz)

84. Véase el resumen sobre Irán – EEUU, Israel en el capítulo 2 (Tensiones).

A finales de año, sectores palestinos reconocían su preocupación por el clima de bloqueo y la sensación de vacío de poder, ante una próxima retirada de Abbas y la persistencia de las divisiones entre Hamas y Fatah.⁸⁵ Finalmente, cabe destacar que durante 2015 se dio a conocer el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el conflicto en Gaza entre junio y agosto de 2014. La investigación confirmó que la mayoría de las víctimas de la contienda fueron palestinas –2.251, de las cuales 1.462 civiles (551 menores)–, mientras que las bajas israelíes fueron 67 soldados y seis civiles. El informe concluyó que ambas partes cometieron violaciones que podrían constituir crímenes de guerra y subrayó la destrucción sin precedentes provocada por el conflicto. Hamas valoró aspectos del informe, aunque criticó que se equiparara a “víctima y victimario”, mientras que Israel descalificó la investigación calificándola de sesgada. Durante el año la UNRWA también llamó la atención sobre el incremento de la tasa de mortalidad infantil en la Franja –que aumentó por primera vez en 53 años– y diversas voces denunciaron el desafío pendiente en lo relativo a la reconstrucción de Gaza.

Las dinámicas de internacionalización del conflicto en Siria se intensificaron durante el año, con una implicación más explícita de terceros países en la contienda

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias PYD/YPJ del PYD), Frente al-Nusra, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio, a nivel internacional el régimen se ha caracterizado por sus políticas hostiles hacia Israel, y en el plano interno por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del *establishment*, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil.

La situación en Siria continuó deteriorándose a lo largo de 2015. **El conflicto armado siguió caracterizándose por su alto nivel de complejidad, la multiplicidad de grupos armados involucrados, los elevados niveles de violencia y destrucción, y la intervención de actores foráneos.** Las dinámicas de internacionalización del conflicto se intensificaron durante el año, en especial durante el último trimestre, con una implicación más explícita de terceros países en la contienda y una escalada de las hostilidades que agudizó aún más los gravísimos impactos en la población civil, en el marco de un conflicto que sólo en 2015 habría causado más de 55.000 víctimas mortales, según el observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Algunas estimaciones indican que, en total, el conflicto armado se ha cobrado la vida de más de 250.000 personas desde 2011. Según cifras dadas

a conocer a principios de 2016 por el Syrian Centre for Policy Research (SCPR), el total de víctimas mortales de la guerra podría ascender a las 470.000 personas (entre muertes directas e indirectas), mientras que 1,9 millones de personas habrían resultado heridas. De acuerdo a este balance, por tanto, la cifra total de personas fallecidas o heridas por la guerra en Siria representaría el 11,4% de la población del país. La violencia afectó distintos puntos del país, incluyendo Damasco, Idlib, Aleppo, Homs, Deirat-Zour, Ghouta, Hama y Sumayda, con enfrentamientos de grupos rebeldes con las fuerzas del gobierno y sus aliados, y choques entre grupos de la oposición. Entre los diversos hechos, cabe destacar la expulsión de ISIS de Kobane a principios de año por las milicias kurdas (YPG), con apoyo aéreo de la coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, y los continuos enfrentamientos entre ambos grupos en torno a las rutas de suministro de Raqqa (bastión de ISIS). También cabe destacar la toma de ISIS de Palmira; los cruentos enfrentamientos armados en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk (afueras de Damasco); y los duros combates de las fuerzas de al-Assad con apoyo de Hezbollah contra grupos opositores en Zabadani, en la zona fronteriza con Líbano.

La situación en los diversos frentes fue variando a lo largo del año, pero a principios del segundo semestre el régimen de al-Assad reconoció que sus tropas se habían visto obligadas a concentrarse en algunas zonas del país. El Gobierno aprobó una amnistía para los desertores, en un intento por captar nuevas fuerzas para el contingente gubernamental. En este contexto, **se intensificó significativamente el apoyo de Rusia a Damasco, lo que se tradujo primero en un aumento de la ayuda militar –aviones de combate, misiles, tanques y helicópteros–, en el envío de fuerzas especiales y en la ampliación de una base aérea en Latakia. A**

85. Véase el resumen sobre Palestina en el capítulo 2 (Tensiones).

partir del 30 de septiembre, las fuerzas rusas se implicaron directamente e iniciaron ataques aéreos en el país. El Gobierno de Vladimir Putin argumentó que la intervención respondía a una petición de Damasco y pretendía combatir a ISIS y otros grupos “terroristas”. No obstante, hasta finales de año la mayor parte de las ofensivas rusas habían afectado a grupos rebeldes diferentes a ISIS. El apoyo abierto de Rusia se sumó así al de Hezbollah e Irán. EEUU, por su parte, desistió de su programa de entrenamiento de fuerzas rebeldes moderadas, pero mantuvo su campaña aérea en Siria en el marco de la coalición anti-ISIS, a la que se sumaron Francia (septiembre), Reino Unido y Alemania (diciembre). Adicionalmente, EEUU brindó apoyo a una nueva coalición disidente, las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) en la que participan grupos armados árabes suníes y milicias cristianas y en la que juegan un papel destacado las facciones armadas YPG/YPJ del partido kurdo sirio PYD (filial del PKK).⁸⁶

Las ofensivas internacionales contra ISIS en Siria se intensificaron después de los ataques reivindicados por el grupo en París y contra un avión ruso en Egipto.⁸⁷ La implicación de terceros países en Siria también se concretó en ataques de Jordania contra posiciones de ISIS a comienzos de año, después de que el grupo asesinara a un piloto jordano; y en acciones de Turquía para desalojar un mausoleo otomano y ataques contra fuerzas kurdas en territorio sirio. A finales de año, el derribo de un avión ruso por Turquía añadió un elemento de tensión entre los actores foráneos involucrados en la crisis siria.

La violencia continuó teniendo un impacto devastador en la población. Distintos informes de la ONU y de ONG coincidieron en acusar a todas las partes de ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados en áreas con presencia de civiles. El Gobierno de al-Assad fue denunciado sistemáticamente por el uso de barriles bomba; ISIS continuó perpetrando secuestros, ejecuciones y destruyendo patrimonio; grupos armados de la oposición fueron acusados de disparar contra zonas civiles y de tácticas como el bloqueo deliberado del suministro de agua como vía de presión. Diversas organizaciones –entre ellas grupos de defensa civil, la Syrian American Medical Society y HRW– denunciaron el uso de armas químicas en acciones atribuidas al Gobierno, lo que llevó a la ONU a poner en marcha una investigación. Además de muertes civiles en ataques, asesinatos o producto de torturas, se produjeron numerosos fallecimientos por falta de alimentos o

asistencia médica y se denunció el uso de prisioneros como escudos humanos. Un informe sobre los impactos del conflicto del Syria Centre for Policy Research, con el apoyo de ACNUR y PNUD, concluyó en marzo que el 64,7% de la población estaba viviendo en condiciones de extrema pobreza, que la esperanza de vida había caído de 75,9 años en 2010 a 55,7 en 2014, y que la mitad de los niños y niñas estaba fuera del sistema educativo, relegando a Siria a una de las últimas posiciones en el ranking global de escolarización. A fines de 2015 más de 12,2 millones de personas se encontraban necesitadas de asistencia en Siria, pero la ayuda se veía dificultada por la situación de seguridad y por la imposición de restricciones por las partes. Ante ello, el secretario general de la ONU denunció reiteradamente la falta de implementación de las resoluciones que pretendían garantizar el acceso de ayuda humanitaria al país y exigió que el caso de

Siria fuera presentado ante la Corte Penal Internacional. ACNUR también subrayó que el conflicto armado en Siria es el principal factor tras el vertiginoso aumento en las cifras de desplazamiento forzado desde 2011. Según cifras dadas a conocer a finales de 2015, correspondientes al primer semestre del año, **Siria continuaba siendo el principal país emisor de personas refugiadas, con 4,2 millones –ubicadas principalmente en los países vecinos–; y el país con mayor número de personas desplazadas internas, con más de 7,6 millones.**⁸⁸ La crisis de refugio tuvo especial visibilidad mediática durante el año debido al incremento de los flujos de personas hacia Europa, en

especial a partir de mediados de 2015.

La deriva de la crisis de refugio y una creciente preocupación por el alcance del fenómeno ISIS⁸⁹ influyeron en una reactivación de los esfuerzos diplomáticos internacionales por buscar una salida a finales de 2015. El llamado Grupo Internacional de Apoyo a Siria⁹⁰ mantuvo reuniones en Viena y acordó apoyar la implementación de un cese el fuego en todo el país –no aplicable a ISIS y el Frente al-Nusra (filial de al-Qaeda)– e instar al diálogo al Gobierno sirio y a la oposición, con el fin de avanzar hacia la creación de un gobierno de unidad “inclusivo, creíble y no sectario”, la elaboración de una nueva Constitución en un plazo de 18 meses seguido de la celebración de elecciones. A mediados de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU dio su apoyo unánime a este plan, con la aprobación en diciembre

86. Aron Lund, *Syria's Kurds at the Center of America's Anti-Jihadi Strategy*, Carnegie Endowment for International Peace, 2 de diciembre de 2015.

87. Véase Egipto (Sinaí) en este capítulo.

88. UNHCR, *UNHCR: Mid-Year Trends 2015*, UNHCR: Ginebra, 18 de diciembre de 2015. <http://www.unhcr.org/56701b969.html>

89. Véase “La amenaza yihadista y sus efectos desestabilizadores a nivel internacional” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2016).

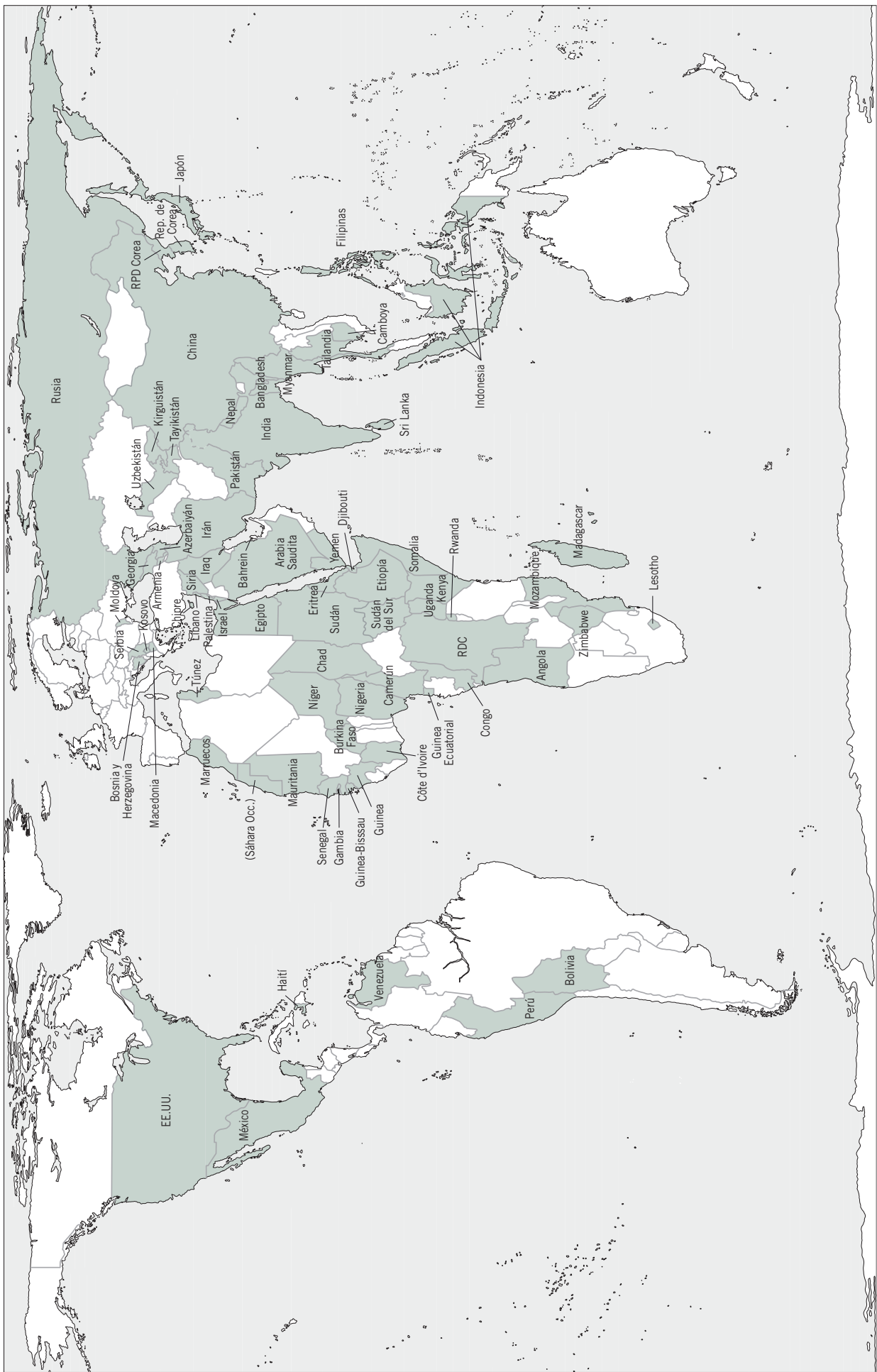
90. El llamado Grupo Internacional de Apoyo a Siria está integrado por la ONU, la UE, la Liga Árabe, China, Egipto, Francia, Alemania, Iraq, Italia, Jordania, Líbano, Omán, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Turquía, EAU, Reino Unido, EEUU e Irán, cuya participación se aceptó por primera vez en los esfuerzos internacionales para poner fin al conflicto sirio.

de la resolución 2254. Grupos de la oposición mantuvieron reuniones en Turquía y Arabia Saudita y manifestaron su disposición, aunque condicionada, a participar en el proceso político impulsado en el marco del proceso de Viena. Sin embargo, tanto entre

los actores locales como entre los internacionales persistían las diferencias sobre a quiénes reconocer como representantes de la oposición –con desacuerdo sobre la aplicación de la etiqueta de “terroristas” a unos u otros– y sobre el futuro de Bashar al-Assad.⁹¹

91. Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Mapa 2.1. Tensiones



■ Países con situaciones de tensión en 2015

2. Tensiones

- Durante 2015 se registraron 83 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (36) y Asia (20), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron en Europa (11), Oriente Medio (11) y América (cinco).
- Prosiguieron las tensiones en Mozambique entre la opositora RENAMO y el Gobierno del FRELIMO marcadas por la demanda de RENAMO de autogobierno en las provincias donde obtuvo mayoría en las elecciones presidenciales.
- Burkina Faso celebró con éxito las elecciones, dejando atrás la fase de transición y el golpe de Estado fallido de la Guardia Presidencial.
- Más de un centenar de personas murieron en Túnez a causa de diversos ataques y de enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con facciones armadas.
- En Venezuela el triunfo de la oposición en las elecciones celebradas en diciembre de 2015 abrió un nuevo e incierto escenario político en el país.
- Se agravó el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj, con un mayor impacto en civiles y el uso de armas pesadas por primera vez desde el acuerdo de alto el fuego de 1994.
- La situación en Nepal se deterioró notablemente tras la aprobación de la primera Constitución después del fin del conflicto armado y se repitieron las protestas de organizaciones madhesi y tharu.
- La tensión entre India y Pakistán creció de tal manera, que se hizo necesaria la mediación de otros Estados para que llegaran a un acercamiento a finales de año.
- En agosto la relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur vivieron uno de los momentos de mayor tensión de los últimos tiempos y se situaron en un escenario casi prebélico.
- En Egipto, a lo largo de 2015 se denunciaron múltiples abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo uso de la violencia sexual contra personas detenidas y muertes bajo custodia policial.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2015. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2015. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan las situaciones de tensión durante 2015.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2015

Tensión ¹	Tipología ²	Actores principales	Intensidad ³
			Evolución ⁴
África			
África Central (LRA)	Internacional	Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas ugandesas, congoleesas y sursudanesas), Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka	3
	Recursos		↓
Angola (Cabinda)	Interna	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo	1
	Autogobierno, Recursos		=
Burkina Faso	Interna Internacionalizada	Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil, grupos armados que operan en la región del Sahel	2
	Gobierno		↓
Camerún	Internacional	Gobierno, Fuerza Regional (MNJTF), grupo armado islamista nigeriano Boko Haram, grupos asaltantes de RCA	3
	Gobierno, Sistema, Recursos		↑
Chad	Internacional	Gobierno, oposición política y social, grupo armado islamista nigeriano Boko Haram, Fuerza Regional (MNJTF)	3
	Gobierno, Sistema		↑
Congo	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Côte d'Ivoire	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		↓
Djibouti	Interna	Gobierno, grupo armado FRUD, oposición política y social (coalición UAD/USN)	1
	Gobierno		↑
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social interna, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFD, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		=
Eritrea – Etiopía	Internacional	Eritrea, Etiopía	1
	Territorio		=
Etiopía	Interna	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, diversos grupos armados	2
	Gobierno		↑
Etiopía (Oromiya)	Interna	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Gambia	Interna	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política	1
	Gobierno		=
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	1
	Gobierno		↑
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, redes internacionales de narcotráfico	1
	Gobierno		↑

1. En esta columna se señalan los Estados en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la región dentro de ese Estado a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto. Esta última opción se utiliza en los casos en que existe más de una tensión en un mismo Estado o en un mismo territorio dentro de un Estado, con el fin de diferenciarlos.
2. Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
3. La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
4. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2015 con la del año 2014 apareciendo el símbolo ↑ si la situación general durante 2015 es más grave que la del año anterior, ↓ si es mejor y = si no ha experimentado cambios significativos.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=
Kenya	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↑
Lesotho	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición	2
	Gobierno		↑
Madagascar	Interna	Alta Autoridad para la Transición, líderes de la oposición, fuerzas de seguridad del Estado, dahalos (ladrones de ganado), milicias de autodefensa, empresas de seguridad privadas	1
	Gobierno, Recursos		↓
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional ⁵	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Mauritania	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados AQMI, MUYAO	1
	Gobierno, Sistema		=
Mozambique	Interna	Gobierno, antiguo grupo armado RENAMO	2
	Gobierno		↑
Níger	Internacional	Gobierno, oposición política (Coordinadora de Fuerzas para la Democracia y la República) y social, grupo armado MUYAO, grupo armado Firmantes de Sangre, grupo armado islamista nigeriano Boko Haram, Fuerza Regional (MNJTF)	3
	Gobierno, Sistema		↑
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias	3
	Identidad, Recursos, Gobierno		↓
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados MEND, MOSOP, NDPVF y NDV, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	1
	Identidad, Recursos		↑
RDC	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
RDC – Rwanda ⁶	Internacional	Gobiernos de RDC, Rwanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)	1
	Identidad, Gobierno, Recursos		=
RDC – Uganda	Internacional	Gobiernos de RDC y Uganda, grupos armados ADF, M23 (ex CNDP), LRA, grupos armados que operan en Ituri	1
	Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio		=
Rwanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente	1
	Gobierno, Identidad		=
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, grupo armado MFDC y sus diferentes facciones	1
	Autogobierno		=
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	1
	Territorio		=
Sudán	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Sudán, Sudán del Sur	2
	Recursos, Identidad		↓

5. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

6. Esta denominación hace referencia a la tensión internacional RDC-Rwanda-Uganda aparecida en ediciones anteriores del informe *Alerta!* Aunque comparten características similares, en el *Alerta 2016* se analizan de forma separada RDC-Rwanda y RDC-Uganda.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Okba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS)	3
	Gobierno, Sistema		↑
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
América			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los departamentos orientales)	1
	Gobierno, Autogobierno, Recursos		=
Haití	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, MINUSTAH, ex milita-res	2
	Gobierno		=
México	Interna	Gobierno, oposición política y social (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, estudiantes) y grupos armados de oposición (EZLN, EPR, ERPI, FAR-LP)	1
	Sistema, Gobierno		↑
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	2
	Gobierno, Recursos		↓
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↓
Asia			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), Oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales	3
	Gobierno		↑
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet y en provincias y países limítrofes	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓
China – Japón	Internacional	China, Japón	2
	Territorio, Recursos		↓
Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁷	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	2
	Gobierno		=
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	3
	Sistema		↑
Filipinas (Mindanao)	Interna	Gobierno, facciones de los grupos armados MILF y MNLF	3
	Autogobierno, Identidad		=
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados PLA, UNLF, PREPAK, PREPAK (Pro), KNF, KNA, KYKL, RPF, UPPK, PCP	3
	Autogobierno, Identidad		↑
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	2
	Identidad, Autogobierno		↑
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		=
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social (organizaciones autonomistas o secesionistas, indigenistas y de derechos humanos), grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↓

7. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
Indonesia (Aceh)	Interna	Gobierno indonesio, Gobierno regional de Aceh, oposición política	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		=
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Myanmar	Interna	Gobierno, oposición política y social (partido opositor NLD), grupo 969	2
	Sistema		↓
Nepal ⁸	Interna	Gobierno, partidos políticos –Nepali Congress, UCPN(M), CPN(UML)–, United Democratic Madhesi Front (UDMF), Tharuhat-Tharuwan Joint Struggle Committee	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (mili-cias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos	3
	Gobierno, Sistema		↑
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social tamil	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↓
Tailandia – Camboya	Internacional	Tailandia, Camboya	1
	Territorio		↓
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		↑
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema		=
Europa			
Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Armenia	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	1
	Autogobierno Identidad, Gobierno		↑
Chipre	Interna internacionalizada	Gobierno de Chipre, Gobierno de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Grecia, Turquía	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↓
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Macedonia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Moldova, Rep. de (Transnistria)	Interna internacionalizada	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transnistria, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Rusia (Chechenia)	Interna	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Chechenia, grupos armados de oposición	2
	Sistema, Gobierno, Identidad		↓

8. En la edición 2016 de *Alerta!* las tensiones Nepal y Nepal (Terai) se han unido bajo la denominación Nepal, por la interrelación de las dinámicas entre ambas durante el año 2015.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Europa			
Rusia (Ingushetia)	Interna	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Ingushetia, grupos armados de oposición	2
	Sistema, Gobierno, Identidad		=
Rusia (Kabardino-Balkaria)	Interna	Gobierno ruso, Gobierno de la república de Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↓
Serbia – Kosovo	Internacional ⁹	Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Oriente Medio			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	2
	Gobierno, Identidad		↑
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		=
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado PJAK, Gobierno Regional del Kurdistan iraquí (KRG), Iraq	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	2
	Autogobierno, Identidad		=
Irán – EEUU, Israel¹⁰	Internacional	Irán, EEUU, Israel	1
	Sistema, Gobierno		↓
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG), Turquía, Irán	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Israel – Siria – Líbano	Internacional	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia)	3
	Sistema, Recursos, Territorio		=
Líbano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupos armados ISIS y Frente al-Nusra	3
	Gobierno, Sistema		=
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=
Yemen (sur)	Interna	Gobierno, grupos de oposición secesionistas y autonomistas del sur (entre ellos el Movimiento del Sur /Al-Hiraak al-Janoubi)	2
	Autogobierno, Recursos, Territorio		↑

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.

↑: escalada de la tensión; ↓: reducción de la tensión; =: sin cambios.

Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

9. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está definido, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

10. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2015

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2015, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

Durante 2015 se identificaron 83 escenarios de tensión a nivel mundial. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas tuvo lugar en África, con 36 casos (44%), seguida de Asia, donde se registraron 20 casos (24%). Oriente Medio y Europa fueron escenario de 11 casos de tensión cada una (13% en ambos casos), mientras que en América se identificaron cinco (6%). Cabe destacar la identificación de seis nuevos escenarios de tensión. Entre ellos, Camerún, por las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram en suelo camerunés, con más de dos centenares de víctimas mortales, incluyendo numerosos civiles; Lesotho, por la crisis política en 2015 y las pugnas entre sectores del Ejército tras las elecciones generales de febrero; y México, por el incremento en los últimos años de la crisis en seguridad humana y violencias múltiples, incluyendo la represión contra sectores opositores políticos y sociales (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos y estudiantes, entre otros). Además, los casos de África Central (LRA), India (Manipur) y Rusia (Kabardino-Balkaria), que en años anteriores habían sido considerados conflictos armados, pasaron a considerarse situaciones de tensión por presentar umbrales más reducidos de violencia. Pese a la desescalada, se trata de tres casos que involucran a insurgencias armadas activas.

A su vez, varias situaciones de tensión sociopolítica dejaron de considerarse como tales, ante la reducción de la tensión en los últimos años. Por otra parte, dos casos considerados en años anteriores tensiones pasaron a ser calificados como conflictos armados en 2015 debido al incremento de violencia: Burundi y el conflicto entre el Gobierno de Filipinas y el grupo armado BIFF.¹¹

Las situaciones de tensión tuvieron causas múltiples, con más de un factor principal en gran parte de los casos. El análisis del panorama de crisis en 2015 permite identificar tendencias en lo referido a sus principales causas o motivaciones. En línea con los datos observados en años precedentes, **el 67% de las tensiones tuvieron entre sus diversas causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos –lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder– o la oposición al**

sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados. Este factor de oposición al gobierno o sistema fue especialmente predominante en América (presente en todos los casos de tensión) y en África (70% de sus tensiones). En segundo lugar, cerca de la mitad de las tensiones (49%) tuvieron como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias. En el continente europeo se superó ampliamente esa media (91% de casos). En tercer lugar, cabe destacar que en más de una tercera parte de las tensiones en el mundo (34% o 28 casos) el elemento de disputa por el control de territorio y/o recursos fue un factor especialmente relevante entre las causas principales, con mayor presencia en el continente americano y africano (40% y 39%, respectivamente), si bien se trata de un elemento que alimenta de manera directa o indirecta, y en grados diversos, numerosas situaciones de tensión.

En consonancia con años anteriores, algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron carácter interno (43 casos o un 52%), más de una cuarta parte fueron tensiones internas internacionalizadas (22 casos o 26%) y una quinta parte fueron internacionales (18 casos o 22%). En cuanto a la evolución de las tensiones, dos quintas partes (34 casos) registraron un deterioro de la situación respecto a 2014, mientras un tercio (29 casos) no experimentaron cambios significativos y en cerca de una cuarta parte se produjo una cierta mejoría (20 casos).

En términos de intensidad de las tensiones, durante 2015 cerca de la mitad de las tensiones presentaron una intensidad baja (48% o 40 casos), mientras que casi una tercera parte registró una intensidad media (30% o 25 casos) y algo más de una quinta parte se caracterizó por niveles elevados de inestabilidad y/o violencia (22% o 18 casos). Por tanto, conjuntamente, las tensiones de media y alta intensidad supusieron algo más de la mitad de las crisis sociopolíticas. África y Asia fueron los continentes con mayor número de tensiones de alta intensidad, con siete y seis casos cada una. Otros tres casos se ubicaron en Oriente Medio y dos casos en Europa.

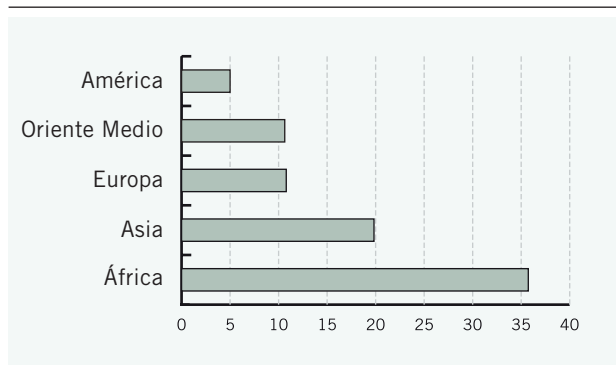
Las tensiones de mayor gravedad en 2015 fueron África Central (LRA), Camerún, Chad, Kenya, Níger, Nigeria, Túnez, Bangladesh, Corea RPD-Rep. de Corea, Filipinas (Mindanao), India (Manipur), India-Pakistán, Pakistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Rusia (Kabardino-Balkaria), Egipto, Israel-Siria-Líbano, y Líbano. Cabe señalar que algunos de los países afectados por tensiones de alta intensidad se encontraban entre los diez principales importadores de grandes armas (India, Pakistán, Corea del Sur) o entre los diez países con mayor gasto militar (Rusia, India, Corea del Sur) según datos de SIPRI.¹²

África fue el continente con mayor número de crisis sociopolíticas, si bien Asia y Oriente Medio registraron mayores porcentajes de tensiones de alta intensidad

11. Véase los resúmenes sobre Burundi y Filipinas (BIFF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

12. Stockholm International Peace Research Institute, *Trends in International Arms Transfers, 2015*, SIPRI Fact Sheet, febrero de 2016; Stockholm International Peace Research Institute, *Trends in World Military Expenditure, 2014*, SIPRI Fact Sheet, abril de 2015.

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2015



Algunas de estas tensiones de alta intensidad fueron escenario de hechos de violencia con unos umbrales de letalidad superiores al centenar de víctimas, como fue el caso –entre otros– de la violencia intercomunitaria en Nigeria en torno al acceso de recursos, con varios centenares de fallecidos en 2015 (más de 1.200 en 2014); la violencia perpetrada por el grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en Camerún, Chad y Níger y las políticas de militarización de dichos Estados, con balances de varios centenares de víctimas mortales, incluyendo numerosos civiles; el deterioro de la situación en Túnez, con más de cien víctimas y un aumento de ataques de grupos armados de línea yihadista; el aumento de la confrontación política en Bangladesh, con 150 víctimas mortales solo en el primer trimestre ante la prolongación de la grave crisis política electoral de 2014, entre otros factores; más de 170 fallecidos en enfrentamientos en la Línea de Control entre Pakistán e India; y las prácticas violentas derivadas del nuevo instrumento antiterrorista en Pakistán, el Plan de Acción Nacional, incluyendo ejecuciones de unas 300 personas, la mayoría de ellas sin condena por terrorismo.

Durante 2015 se registraron 18 casos de tensiones de alta intensidad, algunas de las cuales superaron ampliamente el centenar de víctimas mortales anuales

Asimismo, en el marco de tensiones de alta intensidad se registró el uso de atentados suicidas y ataques a gran escala contra objetivos civiles, como en Kenya (entre otros, el ataque del grupo armado somalí al-Shabaab contra la universidad keniana de Garissa, con 148 fallecidos) y Líbano (entre otros hechos un doble atentado en un barrio chií, reivindicado por ISIS, con más de 43 fallecidos y 200 heridos en noviembre). En esos escenarios de elevada letalidad tuvieron un papel significativo grupos armados con proyección regional o internacional y enorme capacidad desestabilizadora en Estados distintos a sus zonas de origen, como Boko Haram, al-Shabaab e ISIS, así como el uso de estrategias de guerra especialmente letales en núcleos habitados y contra civiles. Ante ese desafío las respuestas centradas en la militarización y represión con efectos indiscriminados también contribuyeron a aumentar los niveles de conflictividad.

Además de la letalidad, **las situaciones de tensión tuvieron otros impactos graves en seguridad humana. Entre ellos, se produjeron nuevos desplazamientos forzados de población** (con casos como Eritrea, de donde huyeron unas 400.000 personas en los últimos años, según la ONU, en un contexto de represión y pobreza; Níger, con cifras de 66.000 personas desplazadas internamente por la violencia de Boko Haram en suelo nigerino; la huida forzada de más de 10.000 personas de la comunidad rohingya, en Myanmar, solo en el primer trimestre de 2015 debido a la violencia contra este grupo). Otros impactos incluyeron secuestros (ej. más de 400 raptos por parte del grupo armado de origen ugandés LRA en los ocho primeros meses de 2015, un aumento del 60% con respecto a ese periodo en 2014), desapariciones (Kenya, México, entre otros), ejecuciones (unas 300 en Pakistán a raíz del nuevo plan antiterrorista; una veintena en Kenya) y violencia sexual (como en Haití, uno de los cinco países con más denuncias de abusos y explotación sexual contra personal de misiones de la ONU, según datos de 2015).¹³ Hubo también impactos cotidianos como restricciones de libertad de movimientos y militarización del territorio (como en Nagorno-Karabaj, con el uso de morteros y armas

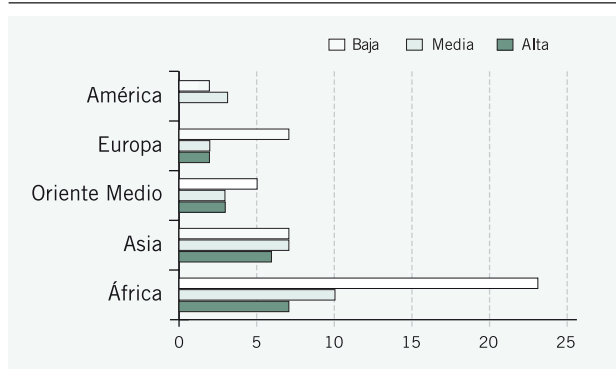
pesadas en torno a la línea de separación y cerca de zonas civiles por primera vez en 2015 desde el alto el fuego de 1994), restricciones o negación del derecho al retorno de población desplazada (como en las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia), represión de derechos humanos y libertades (como en Eritrea, donde según señaló la comisión de investigación de la ONU se siguen cometiendo violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos por parte del Gobierno; o en Etiopía, donde diversas organizaciones denunciaron el hostigamiento contra sectores opositores y medios de comunicación). Resultó especialmente preocupante el impacto de leyes y medidas antiterroristas con efectos indiscriminados, así como la persecución del islam en el espacio público en parte al amparo de la llamada lucha global contra el terrorismo, con riesgos de agravar conflictos con dimensión sectaria. Sectores de población civil local o extranjera en países como Kenya, Chad, Camerún, Pakistán y Egipto, entre otros, se vieron afectados por medidas de represión desproporcionada.

2.2.2. Tendencias regionales

Como en años previos, **en 2015 el continente africano continuó siendo el principal escenario de crisis socio-políticas a nivel global**. Un 43% del total de contextos de tensión se produjeron en África (36 de los 83 casos). En términos de intensidad, la mitad de las tensiones en África fueron de intensidad baja (53% o 19 casos), algo más de una cuarta parte presentaron niveles de

13. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones



intensidad medios (10 casos o 28%) y casi una quinta parte tuvieron niveles de violencia elevados (siete casos o un 19%). En el cómputo global **la mayor parte de tensiones de alta intensidad en el mundo trascurrieron en África** (39%). No obstante, en términos comparativos regionales, otros continentes presentaron mayores porcentajes de tensiones elevadas que África (ej. en Asia las tensiones elevadas constituyeron un 30% del total en el continente y en Oriente Medio ascendieron a un 27%). África Central (LRA), Camerún, Chad, Kenya, Níger, Nigeria y Túnez fueron los siete escenarios de mayor intensidad en el continente en 2015. Por otra parte, cabe señalar que cerca de la mitad de las tensiones en África sufrieron un deterioro con respecto al año anterior (17 casos o un 47%), mientras un 36% (13 casos) no experimentaron cambios significativos y apenas un 17% (seis casos) vieron mejorar su situación.

El 75% de las tensiones en África tenía entre sus causas principales la oposición a los respectivos gobiernos o Estados

Por otra parte, la mayoría de las tensiones en África fueron de carácter interno (20 casos o 56%). Una quinta parte fueron consideradas internas internacionalizadas (siete casos o 19%). Elementos de internacionalización en tensiones locales incluyeron la implicación de actores foráneos estatales o no estatales en las disputas, la participación en misiones militares regionales, la presencia de misiones internacionales con mandato robusto, entre otros. A su vez una cuarta parte eran internacionales (nueve casos): África central (LRA), Eritrea-Etiopía, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC-Rwanda, RDC-Uganda y Sudán-Sudán del Sur, y los enfrentamientos entre el grupo de origen nigeriano Boko Haram y las fuerzas de Chad, Camerún y Níger. Además, estos tres últimos países y Benín se involucraron en la fuerza regional MNJTF (8.700 tropas) para combatir a Boko Haram.

En cuanto a las causas de fondo de las tensiones, en el continente africano se observa la prevalencia de disputas en torno a la oposición a las políticas de los respectivos gobiernos y/o sistemas. Este elemento estuvo presente en un 75% de los casos (27 contextos), porcentaje similar al año anterior. Durante el año, esa incompatibilidad se materializó de diversas maneras, incluyendo tensiones en torno a procesos electorales y/o intentos de perpetuación

de líderes en el poder (Uganda, RDC, Rwanda, Sudán, Níger, entre otros); el incremento de represión contra la oposición política y social en países como Etiopía, Eritrea, RDC; las pugnas entre sectores del sistema político (entre Parlamento y Presidencia en Madagascar; entre Ejecutivo y secciones del Ejército en Lesotho; entre Gobierno y el cuerpo de seguridad presidencial, con golpe de Estado fallido, en Burkina Faso; entre Presidencia y Gobierno, en Guinea-Bissau); violencia electoral (Nigeria) y amenazas de antiguos grupos armados (RENAMO en Mozambique), entre otros aspectos.

Asimismo, otra causa significativa fue **la lucha por el control de los recursos o el territorio, presente en un 39% de los casos (14 tensiones)**. Entre las crisis, durante 2015 continuó la violencia intercomunitaria de intensidad elevada en Nigeria en torno al acceso a los recursos, aunque con una desescalada de las víctimas mortales (más de 1.200 en 2014 y varios centenares en 2015); y se alertó sobre el incremento significativo de la práctica del secuestro en África Central por el grupo armado LRA. Adicionalmente, **las demandas identitarias y/o de autogobierno fueron una de las causas más relevantes en un 36% de las tensiones (13 casos)**. Al respecto, cabe destacar durante 2015 la escalada de acciones violentas del grupo armado OLF—que reclama la independencia para la comunidad oromo en la región de Oromiya, en Etiopía—y el incremento de la represión de los cuerpos de seguridad etíopes contra esta comunidad. También se incrementaron las alertas en la región del Delta del Níger ante la celebración de elecciones.

En relación a las tensiones en **Asia**, el continente se caracterizó por una gran heterogeneidad en cuanto a la tipología de las tensiones. En términos de intensidad, **un tercio de las situaciones de tensión graves a nivel global tuvieron lugar en el continente asiático** (seis de las 18). Respecto al total de tensiones en Asia, éstas representaron algo menos de una tercera parte. Los contextos de alta intensidad fueron Bangladesh, Corea del Norte-Corea del Sur, Filipinas (Mindanao), India (Manipur), India-Pakistán y Pakistán. Respecto a las tensiones de alta intensidad de 2014, Tailandia registró un descenso de la tensión en 2015. En términos generales, e independientemente de su intensidad, algo más de un tercio de las tensiones registró un deterioro de la situación (siete casos o 35%), mientras el resto no presentaron cambios significativos (seis casos) o asistieron a una cierta mejoría (siete casos). Destacó el deterioro de la situación de tensión política en Bangladesh, donde tuvo lugar una intensa persecución contra la oposición política y periodistas; el agravamiento de los múltiples ejes de tensión en Tayikistán, incluyendo ataques armados y crecientes temores por el deterioro de la situación en la vecina Afganistán; el aumento de la violencia en Nagalandia (India) y la ruptura del alto el fuego con el grupo armado NSCN-K; el incremento de disputas y agravios en Nepal

en el marco de la aprobación de la nueva Constitución, la primera del periodo posbélico; el grave incremento de la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, con intercambio de fuego de artillería y estado de alerta hasta niveles casi prebélicos. A su vez, otras tensiones que no experimentaron cambios significativos en 2015 continuaron pese a ello generando alarmas, como las constantes violaciones del alto el fuego de 2003 entre India y Pakistán, o la situación interna en Pakistán. Entre los casos de desescalada, destacó la reducción de la tensión entre China y Japón en su contencioso en torno a las islas de Senkaku/Diaoyu; y la mejora de la situación en Myanmar tras las primeras elecciones consideradas creíbles, justas y transparentes, aunque continuó activo el grave foco de tensión en torno a la violencia contra la población rohingya.

Por otra parte, es relevante señalar que de los 10 principales importadores de grandes armas en el periodo 2011-2015 –según datos de SIPRI–, cinco de ellos eran países asiáticos (India, China, Pakistán, Vietnam y Corea del Sur), de los cuales cuatro (todos excepto Vietnam) albergaban una o varias situaciones de tensión (además de conflicto armado en el caso de India, China y Pakistán). El conjunto de la región de Asia y Oceanía representó un 46% de las importaciones globales entre 2011 y 2015, un 26% más que entre 2006-2010. India fue el mayor importador en la región, representando un 14% de las importaciones globales y con un 90% de incremento con respecto a las importaciones del periodo 2006-2010.

En lo referente a las causas de los conflictos, las demandas identitarias y de autogobierno y/o la oposición a las políticas o sistema de los Estados estuvieron presentes en la mitad de las tensiones. Además, en algo más de un tercio de las crisis sociopolíticas (siete casos), el elemento de disputa por el control del territorio o de los recursos fue una de las causas principales de la disputa. Cabe destacar también que más de la mitad de las tensiones en Asia fueron de carácter interno (55% u 11 casos), varios puntos por encima de la media global (52%), una quinta parte fueron internas internacionalizadas y una cuarta parte fueron internacionales: China-Japón; RPD Corea-EEUU, Japón, Rep. de Corea (y otros actores); RPD Corea-Rep. de Corea; India-Pakistán; y Tailandia-Camboya.

América concentró el menor número de tensiones a nivel mundial, con un total de cinco casos en 2015, en línea con años anteriores.¹⁴ De ellas, todas fueron de intensidad media (tres casos: Haití, Perú y Venezuela) o baja (dos casos: Bolivia y México), y no se registraron tensiones de alta intensidad, a diferencia de 2014, año en que se había asistido a una grave escalada en Venezuela (40 víctimas mortales y más de 800

heridos). Las cinco tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a políticas gubernamentales, que se materializó en protestas de diversa intensidad y carácter, así como en persecución de sectores opositores. Cabe destacar la reducción de la tensión en casos de intensidad media como Perú y Venezuela, pese a la incertidumbre en que se sumió este último tras las elecciones legislativas de finales de 2015, con la victoria de la oposición y un nuevo escenario de Gobierno chavista y Parlamento antichavista. En cambio, se incrementó la tensión en México, con un aumento de diversos ejes de conflictividad en los últimos años, incluyendo persecución contra sectores opositores políticos y sociales, que se suman al peso de la criminalidad y la violencia vinculada al narcotráfico.

Por otra parte, las tensiones en América fueron internas en su mayoría (80% de los casos), mientras en Haití continuó caracterizándose por su dimensión interna internacionalizada, por el papel de la MINUSTAH. Ante la persistencia de la tensión en año electoral, la misión revocó su intención inicial de reducir su presencia en 2015. Su papel continuó siendo controvertido, en un año en que la ONU informó de la extendida presencia de prácticas de relaciones sexuales por parte de miembros de la MINUSTAH con personas haitianas a cambio de ayuda material. Por otra parte, cabe mencionar que aunque no se identificaron contextos de tensión dentro de su territorio, EEUU se vio involucrado en tensiones internacionales fuera del continente americano, tanto en Asia como en Oriente Medio. Así, entre otras, EEUU fue un actor relevante en la tensión internacional en torno al programa nuclear norcoreano y en la disputa sobre el programa atómico iraní –en esta última se logró la consecución de un acuerdo histórico en julio entre las partes en conflicto–. EEUU continuó siendo el país con mayor gasto militar (datos de 2014, difundidos en 2015) y el principal exportador de armas a nivel mundial (datos de SIPRI referidos al periodo 2011-2015), representando un 33% de las exportaciones globales, seguido por Rusia (25%).

En cuanto a Europa, la región se caracterizó por la preeminencia de situaciones de baja intensidad, que representaron un 63% de los casos (siete de las 11), si bien en un porcentaje inferior respecto al año anterior (85% de los casos en 2014). El continente registró dos situaciones de tensión de alta intensidad: la disputa entre Armenia y Azerbaiyán en torno al enclave de Nagorno-Karabaj, que asistió a un deterioro grave, con el uso de armamento pesado por primera vez desde el alto el fuego de 1994; y el conflicto en la república de Kabardino-Balkaria (Rusia) entre insurgencia islamista y fuerzas de seguridad, que en años anteriores era

Cinco de los 10 principales países importadores de armas eran países asiáticos, cuatro de ellos con situaciones de tensión y/o conflicto armado

14. Este informe no incluye como casos de tensión aquellas situaciones generadas por la violencia criminal, redes de narcotráfico, cárteles o pandillas. Para más información, véase la definición de tensiones al inicio del capítulo.

considerado conflicto armado. A su vez, las dos tensiones de intensidad media transcurrieron también en el norte del Cáucaso –en Chechenia e Ingushetia–, e involucraron también a grupos armados, entre otros actores. Cabe destacar que durante 2015 la insurgencia armada de esa región asistió a fracturas internas en torno a la lealtad a su liderazgo, agenda y estructuras anteriores (Emirato Caucásico) y las numerosas adhesiones al grupo armado Estado Islámico (ISIS), de consecuencias aún inciertas para el conjunto de Rusia y sus repúblicas norcaucásicas. Es relevante señalar que cerca de la mitad de las tensiones en Europa afrontaron un deterioro de su situación (45% o cinco casos).

En relación a las causas de fondo de las tensiones en Europa, cabe destacar que la mayoría de las disputas tenían entre sus causas principales **demandas identitarias y/o de autogobierno (10 de los 11 casos)**. Cabe destacar el agravamiento de las tensiones en torno a Bosnia y Herzgovina en 2015, con amenazas de referéndum y de salida de todas las instituciones estatales por parte de la entidad serbobosnia, la República Srpska. **La oposición a las políticas de los gobiernos también fue un factor destacado, presente en cerca de dos tercios de los casos (siete casos)**. En 2015 esa dimensión cobró relevancia en los Balcanes, con el desarrollo de crisis políticas en Kosovo y en Macedonia; así como en Europa del Este, con el agravamiento de la situación en Moldova. Por otra parte, cabe destacar que cerca de la mitad de las tensiones en Europa fueron de carácter interno internacionalizado (cinco de los 11 casos), mientras algo más de un tercio fueron internas (cuatro casos) y cerca de una quinta parte fueron internacionales (dos casos). En lo relativo a la internacionalización de las disputas, destaca el papel predominante de Rusia en conflictos no resueltos militarizados y regulados por acuerdos de alto el fuego, como Georgia (Abjasia), Georgia (Osetia del Sur), Moldova (Transdniestria) y Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj). En ese sentido, en 2015 el continente continuó afectado por el antagonismo entre Rusia y actores euroatlánticos (UE, Gobiernos europeos, OTAN), que se proyectó en tensiones como la de Moldova.

Por último, en lo que respecta a la situación **en Oriente Medio, donde se registraron 11 casos de tensión, cabe destacar que la región albergó un 17% de las tensiones globales de intensidad elevada, frente al 39% de África o el 33% de Asia**. No obstante, fue la segunda región con mayor porcentaje de tensiones elevadas con respecto al cómputo total de tensiones por región. Así, algo más de una cuarta parte de sus tensiones (tres casos o un

La mayoría de las tensiones en Europa en 2015 tenían entre sus causas principales demandas identitarias y/o de autogobierno

Oriente Medio albergó el 17% de las tensiones globales de intensidad elevada en 2015 y fue escenario de casos de deterioro como los de Arabia Saudita, Iraq (Kurdistán) y Yemen (sur)

27%) fueron de gran intensidad: Egipto, Israel-Siria-Líbano, y Líbano. En Egipto continuó la persecución contra la oposición islamista y secular, con graves enfrentamientos especialmente en el marco del cuarto aniversario de la caída del presidente Mubarak y un elevado número de muertes bajo custodia policial. En relación a Egipto-Israel-Siria, a comienzos de 2015 se produjo la mayor escalada de violencia entre Israel y la milicia chií Hezbollah desde la guerra entre ambos en 2006. A su vez, Líbano continuó afectado por la seria crisis en que coexisten dinámicas de la guerra en la vecina Siria y que conllevaron graves hechos de violencia en territorio libanés, y la situación de bloqueo político interno. Otros tres casos de tensión tuvieron en 2015 intensidad media: Arabia Saudita, Irán (Sistán Baluchistán) y Yemen (sur).

En términos de la evolución de las tensiones, la mayor parte de los casos en Oriente Medio (55%) mantuvieron niveles de violencia e inestabilidad similares a los de 2014 y en otro 36% la situación se agravó (cuatro de los 11 casos). Solo una de las tensiones en Oriente Medio mejoró, si bien se trata de un caso de especial importancia por su proyección en las relaciones internacionales: la disputa relativa al programa nuclear iraní, en torno al cual se alcanzó un acuerdo histórico en julio. **Los contextos que vieron agravar sus dinámicas de conflicto fueron Arabia Saudita, Irán (noroeste), Iraq (Kurdistán) y Yemen (sur)**. Entre los elementos de deterioro destacan el papel de presuntas células de ISIS en Arabia Saudita, así como el impacto e interconexiones que los respectivos conflictos en Iraq (papel de ISIS) y Yemen (avance militar al-houthista) tuvieron en las regiones de Kurdistán y sur del Yemen, respectivamente, unido a factores locales. En esas y otras tensiones de la región de Oriente Medio se evidenciaron la multicausalidad de las disputas, los procesos de regionalización y los crecientes desafíos que plantea ISIS (a través de supuestas células locales o grupos adheridos, como en Arabia Saudita y Líbano) y otros grupos extremistas en tensiones en la zona. A nivel general, en Oriente Medio la gran mayoría de las tensiones fueron internas internacionalizadas (cinco casos o un 46%), si bien siguieron teniendo peso las tensiones internas (cuatro casos, un 36%), con una menor presencia de tensiones internacionales (dos casos, un 18%). El factor con mayor presencia en el origen de las disputas en esta región fue la oposición a las políticas internas o internacionales de los respectivos gobiernos o a sus Estados, en un 64% (siete casos). Las demandas identitarias y/o de autogobierno también fueron un elemento relevante entre las causas principales, presente en la mitad de los casos (55%).

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Austral

Lesotho	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición

Síntesis:

Lesotho es una de las tres monarquías existentes en el continente africano, junto con Swazilandia y Marruecos. Desde su independencia en 1966, luego de ser un protectorado británico, Lesotho –antes llamado Basutolandia– ha estado inmerso en continuas disputas entre su monarquía, su democracia parlamentaria y sus Fuerzas Armadas, que se ha saldado con diferentes golpes de Estado y cambios de sistema. Actualmente su monarquía constitucional convive con una democracia parlamentaria basada en un sistema de representación proporcional que ha buscado garantizar la representación de la oposición desde 1999. Sin embargo, ello no ha logrado evitar las históricas disputas y la inestabilidad política. En febrero de 2015 Pakalitha Mosisili se convirtió en primer ministro de Lesotho tras unas disputadas elecciones nacionales donde se impuso al entonces primer ministro, Tom Thabane. Una de las primeras medidas tomadas por Mosisili fue la de expulsar a Maaparankoe Mahao de la comandancia de las Fuerzas Armadas, debido a sus nexos y relación con el anterior Ejecutivo. Tlali Kamoli fue nombrado nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Kamoli ya había sido jefe del Ejército hasta agosto del 2014, momento en el cual fue apartado de las Fuerzas Armadas por el intento de golpe de Estado contra Thabane, quien lo expulsó y puso en el cargo a Mahao. Desde ese momento, el reino de Lesotho ha estado envuelto en una crisis política que ha afectado la estabilidad del país.

Se incrementó la tensión durante el año en Lesotho, con tensiones que involucraron al Gobierno y el Ejército. El reino de Lesotho celebró el 28 de febrero de 2015 elecciones generales que dieron la victoria de manera muy ajustada al partido del ex primer ministro Pakalitha Mosisili, el Congreso Democrático, quien se impuso al entonces primer ministro Tom Thabane. Los comicios fueron declarados válidos por la misión de observación electoral desplegada en el país por parte de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC). La ajustada victoria electoral obligó a Mosisili a formar un Gobierno de coalición con otros seis partidos menores. Una de las primeras medidas tomadas por el nuevo Ejecutivo fue la de retirar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Maaparankoe Mahao, y sustituirlo por Tlali Kamoli, quien ya había sido comandante del Ejército hasta que fue expulsado del cargo por el intento de golpe de Estado perpetrado en agosto del 2014 contra el entonces Gobierno presidido por Thabane. **Esta situación incrementó la tensión política en el país, que llegó a su momento más delicado del año con el**

asesinato el 28 de junio del ex comandante Mahao a manos del propio Ejército nacional, en una operación orquestada supuestamente para detener a presuntos colaboradores golpistas, según informó el Ejército. El Gobierno de Pakalitha Mosisili había iniciado una persecución política contra miembros del Ejército considerados cercanos a Mahao, arrojando a 45 soldados bajo sospecha de planear un motín contra el Gobierno. El clima de tensión generado tras el asesinato de Mahao se saldó con la huida del país de tres líderes de la oposición, entre ellos, el anterior primer ministro Thabane, quien se refugió en Sudáfrica. Diversos países de la región y otros actores, como EEUU, condenaron estos hechos, mostrando su preocupación por la situación y solicitando medidas urgentes para reformar el sector de seguridad. La SADC envió a Lesotho al presidente adjunto y facilitador de la organización, Cyril Ramaphosa, además del ministro de Defensa sudafricano, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, para mediar y consultar con el primer ministro Mosisili. Tras diferentes reuniones bilaterales con los presidentes de Lesotho, Zimbabwe y Bostwana, la organización realizó una sesión extraordinaria de la conocida como SADC Double Troika (Órgano de Política, Defensa y Cooperación en Seguridad) para analizar la situación. A dicha reunión, celebrada en Pretoria el 3 de julio, asistieron los presidentes de Sudáfrica, Zimbabwe, Bostwana, así como representantes de Malawi y Namibia, y el propio primer ministro de Lesotho, Pakalitha Mosisili. En el encuentro llegaron a una serie de acuerdos, entre los que destacó la creación de una comisión independiente para investigar las circunstancias de la muerte de Mahao, que sería presidida por el juez de Botswana, Mpaphi Phumaphi. La sesión también sirvió para realizar un llamamiento para que Lesotho realice reformas en su sector de seguridad, así como para que introdujera medidas constitucionales que restaurasen la estabilidad política en el país. El Gobierno presidido por Mosisili aceptó la realización de las reformas propuestas por la SADC. El informe de la comisión de investigación fue presentado finalmente a la SADC en diciembre, que preveía hacer entrega del mismo a Lesotho durante el mes de enero de 2016. Algunas fuentes han filtrado que el informe contiene algunas recomendaciones que no serán bien recibidas por el Gobierno de Mosisili, como pueden ser el cese del ministro de Defensa Tseliso Mokhosi, así como también del comandante del Ejército, el teniente general Tlali Kamoli.

Madagascar	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Alta Autoridad para la Transición, Líderes de la oposición, fuerzas de seguridad del Estado, dahalos (ladrones de ganado), milicias de autodefensa, empresas de seguridad privadas

Síntesis:

Desde el fin del régimen comunista en los años noventa la isla ha vivido procesos de inestabilidad política intermitentes. La toma inconstitucional del poder por parte del antiguo alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina, contando con el apoyo del Ejército, generó una nueva crisis política en marzo de 2009. Las dificultades para lograr un acuerdo de reparto del poder entre los principales líderes políticos llevaron a la parálisis institucional, produciéndose brotes de violencia esporádicos. Por otra parte, en el marco de la crisis económica que afecta al país en los últimos años, en el sur de Madagascar desde mediados de 2012 se desencadenó una espiral de violencia derivada de los robos y saqueos de los dahalos (ladrones en malgache) contra la población civil, que provocó una desmesurada intervención de los cuerpos de seguridad, la creación de milicias de autodefensa y la contratación de empresas de seguridad privadas para sofocar la crisis.

Durante el año Madagascar estuvo inmersa en un clima de inestabilidad política generada por las tensiones entre la cámara parlamentaria y la Presidencia del país, ostentada por Henry Rajaonarimampianina. Durante el mes de mayo parlamentarios malgaches trataron de impugnar al presidente Rajaonarimampianina, acusándolo de incumplir sus promesas electorales así como de ignorar la separación tradicional entre Iglesia y Estado, al ceder a la influencia de las instituciones eclesásticas a la hora de hacer política. El Parlamento votó una moción de censura contra el presidente, que fue respaldada por 121 de los 125 legisladores que estaban presentes en la cámara. A principios de junio, el presidente Rajaonarimampianina había lanzado su defensa contra la mencionada reprobación parlamentaria que amenazaba su cargo, acusando a la institución de traer la inestabilidad a la isla. Posteriormente, la moción se remitió al Tribunal Constitucional, quien decidió finalmente impugnar la medida parlamentaria. El ministro de Defensa demandó a las fuerzas políticas, tras conocer la resolución del Tribunal Constitucional, que su dictamen fuese aceptado, y pidió que no se reclamara la intervención del Ejército. El ex presidente Marc Ravalomanana apoyó la llamada al diálogo y sugirió un pacto entre la Presidencia y el Parlamento para asegurar la estabilidad. El 1 de julio el primer ministro, Jean Ravelonarivo, también tuvo que enfrentar otra moción del Parlamento acusándolo de no resolver los problemas socioeconómicos del país, iniciativa que fue rechazada dos días después. A principios de septiembre, y en base a un acuerdo de búsqueda de estabilidad nacional, la Presidencia firmó un **Pacto de Responsabilidad con la Asamblea Nacional de Diputados**, donde el presidente se comprometió a no disolver el Parlamento, mientras que éste acordó no seguir atacando al Ejecutivo.

Durante el año también se desarrollaron dos procesos electorales. El 31 de julio se llevaron a cabo elecciones municipales en la isla, donde el partido gobernante, Fuerzas Nuevas para Madagascar (HVM), se alzó como ganador en la mayoría de los municipios de las zonas rurales. Por otro lado, el 29 de diciembre se celebraron los comicios de elección de senadores, en un clima pacífico y con una alta participación

electoral. El Pacto de estabilidad entre la Presidencia y el Parlamento facilitó a finales de año la aprobación de los presupuestos generales de 2016 por la cámara parlamentaria, garantizando la estabilidad en el país.

En paralelo, durante el año también se avanzó en el proceso de reconciliación nacional iniciado en diciembre de 2014 facilitado por la Malagasy Christian Council of Churches (FFKM), entre el actual presidente Rajaonarimampianina y sus predecesores, los antiguos presidentes Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, Albert Zafy y Didier Ratsiraka. Durante el segundo trimestre el Gobierno anunció el fin de arresto domiciliario del ex presidente Ravalomanana como parte del proceso de reconciliación y paz. El ex presidente Ravalomanana había sido detenido en octubre del 2014, unos días después de regresar al país desde su destitución en el golpe de Estado de 2009. Su detención derivó entonces en disturbios y protestas y dio pie a la actual crisis política en el país. Rajaonarimampianina hizo el anuncio después de informar que Ravalomanana había reconocido la legitimidad del actual Gobierno. La reconciliación nacional es uno de los puntos principales de la mediación de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), grupo regional al que pertenece esta nación insular.

Mozambique	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, antiguo grupo armado RENAMO

Síntesis:

El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista FRELIMO condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado RENAMO, apoyado por las minorías blancas gobernantes en Rhodesia (hoy Zimbabwe) y la Sudáfrica del *apartheid*, en el contexto de la Guerra Fría. Además, el país se vio afectado por una grave hambruna y una pésima gestión económica. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egidio, que puso fin a 16 años de guerra, un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados, dando paso a una etapa de estabilidad política y un desarrollo económico aunque con elevados niveles de desigualdad en el país. El líder de RENAMO, Afonso Dhlakama, ha sido incapaz de convertir su partido en una plataforma organizada y estructurada con aspiraciones de alcanzar el poder y desde las primeras elecciones en 1994 hasta la actualidad, ha ido perdiendo cuota de poder político en detrimento de FRELIMO y otros partidos, como el MDM (escisión de RENAMO). En paralelo, las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas por un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO.

RENAMO condicionó en 2013 la continuidad de su participación en la vida política a una serie de reformas, principalmente la reforma de la comisión electoral nacional y un reparto equitativo de la riqueza del país, amenazando con la retirada de su firma del acuerdo de paz de 1992.

Durante el año se incrementó la tensión política entre el partido político opositor RENAMO y el nuevo Ejecutivo del FRELIMO, debido a los resultados electorales y la demanda de la oposición de gobernar en aquellas provincias en las cuales había obtenido mayoría en las elecciones presidenciales.

El 15 de enero, Mozambique inauguró el nuevo Gobierno surgido tras los comicios del 15 octubre de 2014, que volvieron a dar el triunfo al partido FRELIMO. Filipe Nyusi se convirtió en el nuevo presidente del país frente al rechazo del principal grupo opositor y antiguo grupo armado, RENAMO, presidido por el histórico líder Afonso Dhlakama, cuyos miembros boicotearon los trabajos parlamentarios, amenazando con crear una república independiente en las seis provincias (Manica, Sofala, Tete, Zambezia, Nampula y Niassa) donde obtuvo mayoría, ubicadas en el centro y norte del país. Durante el mes de febrero, y a raíz de conversaciones entre Dhlakama y el presidente Nyusi, los parlamentarios de RENAMO pusieron fin al boicot del Parlamento y presentaron una propuesta a la cámara para crear una provincia autónoma en la que Dhlakama sería el presidente provincial, amenazando con derrocar al Gobierno si su propuesta no era aceptada. Durante el mes de abril el Parlamento nacional rechazó el proyecto de ley de autonomía provincial por considerarlo inconstitucional, lo cual generó que Dhlakama volviera a amenazar al Gobierno otorgando un plazo de dos meses para su aprobación o, de lo contrario, tomaría por la fuerza las provincias demandadas. El Consejo Nacional de RENAMO, luego de una reunión mantenida durante el mes de junio en Beira, capital de la provincia de Sofala, para discutir la situación del proyecto de ley de “las municipalidades provinciales”, volvió a reiterar las amenazas al ejecutivo de Nyusi.

En este escenario de disputas, **los diálogos de paz** acordados durante el mes de septiembre del 2014, permanecieron durante el primer semestre estancados. Después de más de 100 rondas de reuniones, la hoja de ruta acordada en lo concerniente a la desmilitarización, desmovilización y reintegración (DDR) de combatientes de la milicia de la RENAMO siguió sin producir resultados durante el año, principalmente debido a que RENAMO exige una distribución paritaria en los mandos

de seguridad (Policía y Ejército) antes de entregar la lista de combatientes de su milicia para la integración en las fuerzas de seguridad. Los nulos avances en el programa de DDR llevaron al Gobierno mozambiqueño a no extender el mandato de la Misión Militar de Observación Internacional (EMOCHM), encargada de supervisar el acuerdo de cese de hostilidades. Si bien las negociaciones de paz siguieron avanzando en otras mesas de diálogo durante el tercer trimestre del año, la suspensión de la misión de la EMOCHM, sumada a las discrepancias por la autonomía provincial y al aumento de los incidentes y violaciones del alto el fuego, llevó a que en agosto Dhlakama anunciase la suspensión del diálogo de paz. Si bien el Gobierno de Nyusi trató posteriormente de reconducir las negociaciones de paz, el año se cerró sin que el diálogo se hubiese retomado entre las partes.¹⁵

Durante el año se produjeron diferentes incidentes violentos que supusieron una violación del cese de hostilidades. Entre ellos destacó por un lado la emboscada producida contra fuerzas gubernamentales por parte de la milicia de RENAMO en la provincia de Tete, al oeste del país, el 14 de junio, que se saldó – según informó RENAMO– con la muerte de más de 35 miembros de las fuerzas de seguridad, aunque el Gobierno negó estas cifras y elevó a tan solo dos las bajas. Por otro lado, durante el mes de septiembre se reportaron varios incidentes entre las fuerzas policiales y RENAMO en la provincia central de Manica, en uno de los cuales el convoy donde viajaba el líder opositor Dhlakama fue atacado. El 9 de octubre las fuerzas de seguridad detuvieron a Dhlakama en su domicilio durante varias horas, desarmando y arrestando a su cuerpo de guardaespaldas, lo cual hizo que el líder opositor se escondiera. Estos hechos provocaron el incremento de la tensión en el país. Como nota positiva del año, el 15 de septiembre **el Gobierno de Mozambique declaró oficialmente al país libre de minas terrestres**. La ONG británica The Halo Trust, encargada del trabajo de desminado, comunicó que había retirado más de 171.000 minas terrestres de un total de 1.100 campos minados desde que comenzara el programa en 1993. Los datos presentados por el Gobierno mozambiqueño establecieron en 17 millones de metros cuadrados el terreno limpiado de minas, área que ahora se pretende destinar al uso agrícola. El país se ha convertido en el primero de los cinco más minados del mundo en cumplir con las obligaciones de desminado previstas en la Convención de Ottawa (los otros cuatro son Afganistán, Camboya, Angola y Sudán del Sur), aunque ha necesitado más de los diez años previstos en la Convención para su erradicación.

En Mozambique persistió la tensión entre el Gobierno del FRELIMO y el principal grupo opositor, RENAMO, lo que provocó el bloqueo de las conversaciones de paz

15. Véase el resumen sobre Mozambique en el capítulo 3 (Procesos de paz).

África Occidental

Burkina Faso	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil, grupos armados que operan en la región del Sahel

Síntesis:

Burkina Faso, antigua colonia francesa, se ha enfrentado desde su independencia en 1960 a diversos golpes militares y numerosos retos socioeconómicos, en un país sin salida al mar y vulnerable a la volatilidad de los precios globales de materias como el algodón. La etapa bajo la presidencia de Blaise Compaoré, quien tomó el poder mediante golpe militar en 1987 y que ganó sucesivas elecciones, afrontó progresivamente numerosos ejes de tensión, vinculados al déficit de derechos humanos, a las alegaciones de participación del país en conflictos de países vecinos, al alza de precios y deterioro del nivel de vida de la población y a las críticas a los intentos del presidente por perpetuarse en el poder. En 2011 se incrementaron las protestas y se produjeron diversos motines militares, generándose una grave crisis de desconfianza entre el Gobierno y sectores diversos. A finales de 2014 Compaoré abandonó el poder tras amplias protestas ciudadanas contra los planes del presidente de eliminar los límites a su mandato presidencial y tras la toma de poder del Ejército. Ante el rechazo social al golpe militar, se dio paso a un proceso de transición bajo liderazgos compartidos, incluyendo las Fuerzas Armadas.

Burkina Faso vivió un año marcado por el Gobierno de transición luego de la caída del régimen de Blaise Compaoré en 2014; el golpe de Estado fallido realizado por el Regimiento de Seguridad Presidencial (RSP); y la celebración pacífica de elecciones que devolvieron las instituciones a la ciudadanía.

A principios de año, la política nacional estuvo marcada por las tensiones que se manifestaron entre el cuerpo de élite presidencial, el RSP, y el Gobierno presidido por Michel Kafando. Durante el mes de febrero el primer ministro, Yacouba Isaac Zida, exigió la disolución del cuerpo de seguridad, debido a sus estrechos vínculos con el antiguo régimen de Blaise Compaoré. La guardia presidencial reclamó la dimisión de Zida y el mantenimiento del cuerpo, generando una situación de tensión que se resolvió mediante la aceptación de algunas demandas del cuerpo militar –relativas al nombramiento de ciertos cargos– así como al mantenimiento de Zida en su cargo. El acuerdo generó movilizaciones sociales en contra del pacto, exigiendo la disolución de la guardia presidencial. Pese a ese foco de tensión, el proceso de transición continuó sin incidentes. Posteriormente el presidente Kafando anunció la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas para el 11 de octubre, consultas que debían completar el periodo transitorio. A su vez,

El golpe de Estado del 16 de septiembre en Burkina Faso no logró desestabilizar el proceso de transición que finalizó con la celebración exitosa de las elecciones presidenciales

durante el primer trimestre se iniciaron los trabajos de la Comisión para la Reconciliación Nacional y la Reforma, con el arzobispo Paul Ouédraogo como presidente. Asimismo, el Gobierno ordenó en marzo la exhumación de los restos del ex presidente Thomas Sankara. En abril, se anunció la modificación del código electoral para evitar que los aliados del ex presidente Compaoré pudieran presentarse a cargos públicos en las elecciones. Kafando justificó la medida como una exclusión temporal, únicamente aplicable para las siguientes elecciones. La decisión trajo como respuesta el aumento de la tensión política y la suspensión de la participación de los aliados de Compaoré en las instituciones de transición del país. El 10 de septiembre, el Consejo Constitucional aprobó la lista final de candidaturas para concurrir a las elecciones, eliminando aquellas vinculadas al régimen anterior, entre ellas, las de dos ex ministros de Compaoré: el ex ministro de Asuntos Exteriores Djibril Basolé y el ex ministro de Deportes Yacouba Ouédraogo.

Paralelamente, durante el mes de junio se volvieron a manifestar las tensiones con el RSP, cuando el primer ministro Zida acusó al cuerpo militar de planear un golpe de Estado. La acusación volvió a abrir la crisis entre las autoridades de transición y el RSP, que exigía la dimisión del primer ministro. El presidente Kafando mantuvo a Zida en el cargo, pero le retiró la cartera de Defensa, la cual pasó el 27 de julio a manos del coronel Sidi Paré. Posteriormente, **el 16 de septiembre miembros del RSP irrumpieron en una reunión del Consejo de Ministros deteniendo al presidente Kafando y al primer ministro Zida, proclamando un golpe de Estado** bajo el autodenominado Consejo General para la Democracia. Los golpistas disolvieron las instituciones y el Gobierno de transición, y nombraron como nuevo presidente al general Gilbert Diendéré, quien había sido la mano derecha de Compaoré. En un comunicado, los militares sublevados justificaron su acción debido a la exclusión de los candidatos próximos a Compaoré a poder concurrir en

las elecciones presidenciales y legislativas, y anunciaron el establecimiento de medidas para evitar la disolución del cuerpo, ya que el 14 de septiembre la Comisión Nacional de Reconciliación y Reforma (NRRC) había presentado un informe recomendando su desmantelamiento. Frente al golpe militar, la sociedad civil encabezada por el movimiento ciudadano Balai Citoyen (“escoba ciudadana”) tomó las calles de las principales ciudades del país para defender la transición. Diferentes organismos y Estados de la comunidad internacional, como la ONU, UA, ECOWAS, Francia o

EEUU, entre otros, condenaron sin paliativos la nueva desestabilización del país. La presión interna y externa obligó a los golpistas a negociar bajo la mediación de la ECOWAS, logrando un acuerdo para la vuelta a la normalidad. Finalmente el Gobierno fue restaurado el día 23 de septiembre, un día después de que el Ejército nacional entrase en Ouagadougou para presionar al RSP a deponer las armas. Durante la primera reunión del Consejo

de Ministros, celebrada el 25 de septiembre, se firmó un decreto de disolución y desarme del RSP, así como se retiró del cargo al ministro de Seguridad, Sidi Paré, y se creó una comisión para depurar responsabilidades por los hechos. El golpe coincidió con el día en el cual se tenían que hacer públicos los resultados de la autopsia del ex presidente Sankara, lo cual generó rumores sobre la vinculación entre ambos hechos. Tras el golpe fallido, Diendéré, quien se había refugiado provisionalmente en la embajada del Vaticano, fue detenido e imputado junto al ex ministro de Exteriores, Djibrill Bassolé, y otras 21 personas, por atentar contra la seguridad del Estado. El líder golpista también fue acusado de otros diez cargos, entre los que se encuentra el de delitos de lesa humanidad, que podría acarrear la pena de muerte. Por otro lado, a finales de año, el ex presidente Blaise Compaoré fue acusado en el caso que investiga la muerte del ex presidente Thomas Sankara –conjuntamente con el general Gilbert Diendéré– enviándose una orden de arresto internacional contra él.

Tras el golpe fallido, el Gobierno anunció nueva fecha para la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas que debían producirse el 11 de octubre, pospuestas por el golpe, y que finalmente se realizaron el 29 de noviembre. Las elecciones, que contaron con una participación del 60% del censo, se celebraron en un clima pacífico donde no se constataron incidentes destacados, siendo validadas por los diferentes organismos nacionales e internacionales de observación, y reconocidos sus resultados por parte de todas las fuerzas políticas. Las presidenciales dieron como vencedor a Roch Marc Christian Kaboré, candidato del partido Movimiento Popular para el Progreso (MPP), quien se impuso en primera vuelta con el 53,49% de los votos a Zéphirin Diabré, candidato de Unión para el Progreso y el Cambio (UPC), que obtuvo el 29,65%. Por su parte, en las legislativas los resultados estuvieron más repartidos, no obteniendo ningún partido político la mayoría absoluta lo cual obligó a los partidos a dialogar para formar Gobierno. El nuevo Ejecutivo presidido por Kaboré juró el cargo el 29 de diciembre, cerrando la etapa transicional y abriendo un nuevo escenario político en el país.

Camerún	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos Internacional
Actores:	Gobierno, Fuerza Regional (MNJTF), grupo armado islamista nigeriano Boko Haram, grupos asaltantes de RCA

Síntesis:

Camerún ha visto cómo la inestabilidad que ha azotado a sus vecinos ha afectado su propia estabilidad interna. Los conflictos presentes en el norte de Nigeria y en la República Centroafricana, con los cuales Camerún comparte una parte fundamental de sus fronteras nacionales, han ido incidiendo cada vez más en territorio

camerunés, desarrollándose en 2015 un incremento de la conflictividad armada del grupo islamista Boko Haram en la provincia camerunesa de Extremo Norte. La inclusión del país en la alianza regional para combatir a Boko Haram – Multinational Joint Task Force (MNJTF)– donde Camerún comparte misión de combate con tropas de Nigeria, Chad, Níger y Benín, ha tenido como respuesta el aumento de ataques y atentados en territorio camerunés por parte de Boko Haram. Paralelamente, los efectos de la crisis en la República Centroafricana también inciden en el ámbito doméstico camerunés, acogiendo importantes flujos de personas refugiadas y sufriendo los ataques y asaltos de bandas criminales en las provincias fronterizas.

La estabilidad de Camerún se vio severamente afectada debido al impacto de actores externos en el país: por un lado, en la frontera con Nigeria, debido a las acciones del grupo islamista radical Boko Haram (BH) y, por otro, en la frontera con República Centroafricana, por las incursiones de bandas de asaltantes del país vecino.

Durante el 2014 Camerún había sido objetivo de ataques perpetrados por el grupo armado de origen nigeriano BH, lo que llevó al Ejecutivo a proponer una ley antiterrorista que fue respaldada por el Parlamento el 4 de diciembre de 2014, generando críticas por parte de la oposición que la consideraron represiva. La aprobación de la nueva legislación fue respondida con nuevos ataques por parte de BH en las provincias fronterizas, concentrándose principalmente en Norte Extremo, que causaron un número indeterminado de muertes en la población civil, así como también bajas a la organización yihadista, contabilizándose 41 en el mes de diciembre y 50 en un solo ataque en el mes de enero de 2015 a un cuartel militar en Kolofata. A su vez, también se denunciaron numerosos secuestros, contabilizándose al menos 80 civiles en la provincia de Mayo Sava. La ola de incidentes se enmarcó en medio de las amenazas realizadas por parte del líder de BH, Abubakar Shekau, hacia Camerún, Níger y Chad por anunciar la creación de la fuerza regional Multinational Joint Task Force (MNJTF), conjuntamente con Nigeria, para combatir a la insurgencia de BH. Entre los diferentes ataques producidos durante el mes de febrero, resaltaron los 86 civiles y siete soldados muertos en Fotokol el día 4, y los 21 insurgentes fallecidos en un enfrentamiento con tropas camerunesas el día 21 en Tolkomari. Estas amenazas y el deterioro de la situación hicieron que el Gobierno presidido por Paul Biya solicitase ayuda internacional, a lo cual Rusia, EEUU y Francia respondieron. Los métodos de guerra de BH, a la par que lo que estaba sucediendo en toda la región, se vieron modificados debido al impacto de la MNJTF en la lucha contrainsurgente, arrebatando grandes franjas de terreno al grupo armado, lo que obligó a BH a modificar sus tácticas de guerra, pasando de la confrontación directa y el control del territorio, a perpetrar asiduamente atentados suicidas utilizando a mujeres y niñas. A mediados de julio se produjeron cuatro ataques de estas características en Fotokol y Maroua, que causaron la muerte a cerca de 40 personas. El Gobierno camerunés respondió prohibiendo el uso del burka, expulsando a cientos de personas nigerianas sin documentación, así como enviando 2.000 soldados más a la zona. El

presidente estadounidense Barack Obama confirmó el 14 de octubre el envío de 300 soldados y material militar para ayudar al Gobierno de Paul Biya en su lucha contra la insurgencia islamista. Las tropas estadounidenses, las cuales oficialmente no tienen asignadas misiones de combate, sino de asesoría, se desplegaron en la ciudad de Garoua, en la provincia del Norte. En los últimos meses del año se siguieron registrando docenas de atentados y enfrentamientos entre BH y el Ejército camerunés, los cuales, según informó el Gobierno de Camerún, causaron numerosas bajas a la organización armada.

De manera paralela a los incidentes con el grupo armado BH en el extremo norte del país, otras tres provincias fronterizas con la RCA, **las provincias Norte, Adamaoua y Este, se mantuvieron en un elevado clima de inestabilidad debido a los asaltos y la delincuencia por parte de bandas de asaltadores de caminos de la RCA, conocidos como los zaraguinas.** A lo largo del año fueron constantes los incidentes en diferentes puntos fronterizos, conllevando asaltos, secuestros y enfrentamientos armados con víctimas mortales, entre otros hechos, lo que llevó a las comunidades locales a crear sus propios grupos de autodefensa debido al deterioro de la situación de seguridad en el área. Según los datos proporcionados por la agencia humanitaria de las Naciones Unidas, OCHA, la situación de inestabilidad generada por el conflicto de BH y la crisis en la RCA había generado a finales de 2015 **un total de 158.000 personas desplazadas internas en la provincia de Extremo Norte, así como la llegada de 323.000 personas refugiadas provenientes en su mayoría de la RCA, siendo 62.861 las personas refugiadas de Nigeria.** A su vez, también 18.000 personas lograron retornar a sus hogares en 2015, en lo que representó la nota más positiva del año.¹⁶

Boko Haram amplió sus ataques y atentados en Camerún como respuesta a la entrada del país en la Fuerza Regional para combatir al grupo insurgente

del sector de seguridad, son algunos de los grandes retos que enfrenta el país. La presencia de gran número de armas ligeras, la persistencia de la violencia en el oeste y la inestable frontera con Liberia, donde permanecen grupos de mercenarios, ponen en peligro una paz frágil.

La situación nacional estuvo marcada por las tensiones y movimientos políticos generados por la carrera

presidencial –en las que han sido las primeras elecciones presidenciales desde la crisis desatada en el 2010–, así como **por los avances en los diferentes procesos judiciales** en curso desde la citada crisis. La celebración de comicios presidenciales en octubre selló un año de disputas políticas y algunos incidentes violentos. En el plano de la carrera presidencial, durante el primer trimestre las divisiones políticas se manifestaron en el seno de los dos grandes partidos. Por un lado, en marzo, **sectores pro-Gbagbo** del Frente Patriótico Marfileño (FPI)

forzaron la expulsión del presidente del partido Pascal Affi N'Guessan, nombrando en su lugar a Aboudramane Sangaré, lo que desató disputas internas y llevó el caso a los tribunales. Por otro lado, dentro de la coalición gobernante se produjeron fisuras, ya que sectores del PDCI contrarios al presidente Ouattara crearon en marzo una alianza propia –la Coalición Nacional para el Cambio (CNP)– mientras que Ouattara fue ratificado como candidato para las elecciones presidenciales. El CNP trató de movilizar a la ciudadanía para evitar la posibilidad de reelección de Ouattara generándose diferentes incidentes en los que perdieron la vida cuatro personas en el marco de las manifestaciones convocadas el 9 de junio en Abidjan, Gagnoa, Guiglo y Daloa. En medio de este clima de tensión, el 10 de septiembre, el Tribunal Constitucional hizo pública la lista definitiva de candidaturas aprobadas para concurrir a los comicios. De las 33 candidaturas presentadas, 10 fueron aprobadas, incluyendo Ouattara y Affi N'Guessan, este último representando al FPI luego de la crisis interna del partido, aunque el ala encabezada por Aboudramane Sangaré se negó a reconocerlo como candidato presidencial. La posibilidad de reelección de Ouattara volvió a generar manifestaciones de rechazo por parte de la oposición, registrándose algunas víctimas mortales y decenas de personas heridas en diferentes puntos del país. Finalmente, el 25 de octubre se celebraron las elecciones presidenciales, las cuales, según informó el equipo de observadores internacionales de la ECOWAS, se desarrollaron en un clima de paz y transparencia. Participó el 54,63% del censo. Alassane Ouattara consiguió la victoria con una amplia mayoría, un 83,66% (2.118.229 votos), obteniendo su rival Affi N'Guessan tan solo el 9,3%, según datos facilitados por la Comisión Electoral Independiente (CEI), por lo que se descartó una segunda vuelta. El 2 de noviembre el Tribunal Constitucional validó los resultados y confirmó la reelección de Ouattara.

Por otra parte, y en relación a los diferentes procesos judiciales abiertos tras la crisis postelectoral de 2010

Côte d'Ivoire	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI

Síntesis:
La discriminación política, económica y social hacia los marfileños originarios del norte del país se encuentra en la base de la grave crisis iniciada en el país en los años ochenta. Con un primer conflicto en 2002 y la reactivación de la violencia armada en 2010 tras las elecciones presidenciales, la estabilidad en el país continúa en ciernes. La conclusión de los en abril de 2011 y la creación de un nuevo Gobierno, con el presidente Alassane Ouattara (de origen norteño) al frente del país, abrieron las expectativas para el cambio. La justicia y reparación a las víctimas, la transformación de leyes discriminatorias, la resolución de las disputas en torno a la propiedad de tierras y la reforma

16. OCHA, *Cameroon Humanitarian Overview*, 4 de enero de 2016.

durante el primer trimestre un tribunal nacional sentenció a **20 años de cárcel a Simone Gbagbo, esposa del ex presidente Laurent Gbagbo, considerada culpable de amenazar la seguridad del país, responsable de alterar el orden público y de organizar a grupos armados.** El juicio contra su marido y ex presidente se iniciará en la Corte Penal Internacional (CPI) el 28 de enero de 2016, conjuntamente con el del ex ministro de Cultura y ex líder de los Jóvenes Patriotas, Charles Blé Goudé, acusados ambos de crímenes contra la humanidad. En paralelo, algunos activistas locales alertaron sobre los riesgos de percepción de parcialidad del proceso de justicia transicional, al centrarse en responsables de uno de los bandos, los partidarios de Gbagbo, y no en todos. La organización Human Rights Watch (HRW) publicó en agosto un informe en el que solicitaba a la CPI que ampliase el número de investigaciones sobre la violencia post-electoral, no solamente a aquellos casos de violencia cometidos en la capital, Abidjan, sino también que se investiguen casos producidos en las provincias, así como también solicitó al organismo que ampliase sus investigaciones hacia el otro bando participante en la violencia. Por último, y en el caso abierto en Francia contra Michel Gbagbo, hijo del ex presidente, por detención ilegal y malos tratos en 2011, un juez galo emitió el 5 de diciembre una orden de arresto contra el presidente de la Asamblea Nacional de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, tras su reiterada negativa a responder a las diferentes citaciones del juzgado, lo que generó una protesta de las autoridades marfileñas debido a que Soro tiene inmunidad diplomática. Finalmente, y en el plano de seguridad, durante el año se produjeron algunos incidentes violentos que se concentraron en el oeste del país, en la zona fronteriza con Liberia. A comienzos de año, dos soldados perdieron la vida en un ataque contra fuerzas de seguridad en la localidad de Dahyoke. El 2 de diciembre otro ataque a dos campamentos militares en Olodio, se saldaron con siete soldados y cuatro asaltantes muertos, así como la detención posterior de tres ciudadanos marfileños en un campo de refugiados de Liberia. Al respecto de la situación de inestabilidad y violencia, **el Consejo de Seguridad de la ONU extendió el 24 de junio, y por el período de un año, el mandato de la misión de la ONU en el país, la ONUCI.**

Un tribunal de Côte d'Ivoire sentenció a 20 años de cárcel a Simone Gbagbo, esposa del ex presidente Laurent Gbagbo, considerada culpable de amenazar la seguridad del país tras la crisis postelectoral de 2010

conformar una Junta Militar. En 2010 la celebración de elecciones permitió el retorno al sistema democrático, con la presidencia del opositor Alpha Condé. Sin embargo, los comicios se vieron empañados por la violencia y por el auge de los sentimientos identitarios enfrentados entre las principales comunidades étnicas del país. La ausencia de una estrategia para la reconciliación nacional y los obstáculos a la reforma del sector de seguridad, con un Ejército omnipresente en la actividad política guineana, mantienen al país en una situación de inestabilidad.

La tensión política en el país se incrementó en torno al período electoral, con diferentes movilizaciones opositoras que generaron varias decenas de heridos.

La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) anunció en marzo las fechas del proceso electoral, fijando los comicios presidenciales para el 11 octubre y los locales para el primer trimestre de 2016. En un contexto en el cual el diálogo entre Gobierno y oposición permanecía ya estancado, la oposición criticó fuertemente el calendario, anunciando medidas de presión, entre las que destacaron

el boicot al Parlamento, el no reconocimiento de la comisión electoral y de las autoridades locales, así como el llamamiento a manifestaciones en las calles. Previamente durante el primer trimestre del año se habían organizado diversas protestas opositoras, incluyendo movilizaciones a comienzos de febrero en la localidad de Labé contra reformas que afectaban al funcionariado y que resultaron en una cincuentena de heridos. Tras meses de tensiones, manifestaciones y enfrentamientos, en los cuales el Gobierno y la oposición habían abierto una mesa de diálogo para discutir sobre aspectos relativos

a la ley electoral, el 20 de agosto se logró la firma de un acuerdo para garantizar una mayor representación de la oposición en los gobiernos locales, así como para reformar la CENI y actualizar el censo. El acuerdo entre Gobierno y oposición permitió reducir las tensiones y garantizar la celebración de los comicios presidenciales en un clima de mayor estabilidad. El Tribunal Constitucional publicó el 1 de septiembre la lista definitiva de ocho candidatos a las elecciones, entre ellos el actual presidente Alpha Condé, del partido Reagrupamiento del Pueblo Guineano (RPG); los opositores Cellou Dalein Diallo, de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), Sidya Touré, de la Unión de Fuerzas Republicanas (UFR), o Lansana Kouyaté, candidato del Partido de la Esperanza para el Desarrollo Nacional (PEDN). Después de una campaña electoral marcada por las acusaciones entre los diferentes partidos y la violencia preelectoral, que reportó un balance de más de diez personas muertas, el 11 de octubre seis millones de guineanos y guineanas fueron llamados a las urnas para elegir en primera vuelta al nuevo presidente. En medio de un clima de tensión, con las fronteras nacionales cerradas y la restricción del tráfico, las elecciones se desarrollaron sin incidentes destacados. La UA y la UE enviaron sendas misiones de observación para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de la jornada, que contó con el despliegue de 19.000 unidades de seguridad. El 17 de octubre, Bakary Fofana, presidente de la CENI, dio a

Guinea	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos

Síntesis:

La muerte del presidente Lansana Conté en diciembre de 2008, tras más de dos décadas en el poder, fue aprovechada por el Ejército para dar un nuevo golpe de Estado y

conocer los resultados de las elecciones que contaron con una participación del 68% del censo, y que dieron la victoria por mayoría absoluta a Alpha Condé, con un 57,84% de los votos, frente al 31,45% obtenido por su rival directo Cellou Dalein Diallo. La oposición no reconoció los resultados alegando fraude y demandó la repetición de los comicios, haciendo un llamamiento a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente. La misión de observación de la UE afirmó sin embargo que la elección fue libre, transparente y válida, y que las irregularidades encontradas y las dificultades de la organización no invalidaban los resultados. El Tribunal Constitucional confirmó el 1 de noviembre la victoria de Condé, ratificando los resultados de la CENI. El año se cerró con movilizaciones populares y el rechazo de la oposición a los resultados electorales que no impidió que el nuevo Ejecutivo tomase posesión entre el 14 y el 21 de diciembre, nombrando Condé a Mamady Youla como nuevo primer ministro.

Guinea-Bissau	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, redes internacionales de narcotráfico

Síntesis:

La historia de Guinea-Bissau desde su independencia de Portugal en 1974 incluye una sucesión de guerras civiles y golpes de Estado que han impedido al país alcanzar la estabilidad política además de abortar cualquier intento de funcionamiento democrático. La gran influencia de las Fuerzas Armadas sobre la realidad política del país y los enfrentamientos entre partidos que representan a diferentes grupos étnicos suponen un gran obstáculo para el logro de la paz. La ruptura del pacto de estabilidad firmado en 2007 entre los principales partidos políticos fue, una vez más, una oportunidad perdida para poner fin a la dinámica violenta que domina la vida política. El impacto cada vez mayor de las redes del narcotráfico internacional en África Occidental se había convertido en un factor añadido a la crisis. El asesinato del presidente, Joao Bernardo Vieira, en marzo de 2009 supuso el inicio de una nueva época de inestabilidad. En abril de 2012 el Ejército perpetró un nuevo golpe de Estado tras una primera ronda en las elecciones legislativas en las que ganó el candidato del PAIGC, que ocupaba el poder, y que fue cuestionada por parte de la oposición, pese al respaldo de los observadores internacionales. Tras el golpe se inició un nuevo proceso de transición.

Guinea-Bissau vivió un año marcado por las tensiones políticas entre la presidencia y el primer ministro. El primer semestre del año se caracterizó por la crisis permanente entre el presidente, José Mario Vaz, y el primer ministro, Domingos Simões Pereira, que conllevó al cese de Pereira por el presidente en el mes de agosto. La destitución de Pereira abrió nuevas tensiones y una fuerte crisis política de Gobierno. El presidente nombró el 20 de agosto a Baciro Djá como nuevo primer ministro. Sin embargo, el Parlamento, con los votos de parte del partido de Gobierno, el Partido Africano para la Independencia de

Guinea y Cabo Verde (PAIGC), se opuso al nombramiento y aprobó una resolución en la que exigía la dimisión de Djá y la vuelta de Pereira y acusaba al presidente de haber dado un golpe constitucional. El 8 de septiembre, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el nombramiento de Djá. Ese mismo día el presidente Vaz acató la sentencia de la Corte y revocó del cargo a Djá. El PAIGC propuso a Carlos Correia, quien fuera anteriormente vicepresidente, siendo nombrado el 17 de septiembre nuevo primer ministro gracias a la mediación de la ECOWAS. El nuevo nombramiento fue aplaudido por el Consejo de Seguridad de la ONU, quien congratuló al país por la elección de Correia, entendiéndola como un gran paso para lograr la estabilidad política del país. A su vez, alabó al Gobierno por el respeto mostrado a la Constitución y a las normas internas del país, así como por evitar la injerencia del poder militar, cuyo comandante en jefe, el general Biague na Ntan, había anunciado el 10 de agosto, justo después de iniciarse la crisis, que los militares se abstendrían de intervenir en los asuntos políticos. La ECOWAS recomendó a las autoridades de Guinea-Bissau la necesidad de revisar la Constitución y su sistema semi-presidencial, debido a que éste sigue generando mucha inestabilidad entre presidentes y primeros ministros. La llegada de Correia no significó acabar con la tensión política, ya que el presidente Vaz rechazó la propuesta del nuevo gabinete de Gobierno propuesto por Correia, lo cual conllevó nuevas mediaciones de la ECOWAS. Finalmente la tensión fue resuelta mediante el nombramiento por decreto del nuevo gabinete el 12 de octubre. El 23 de diciembre, el nuevo Gobierno presentó su programa al Parlamento, pero éste fue rechazado por la oposición y por parte del partido PAIGC, lo que obligó al Ejecutivo a tener que volver a presentarlo a principios de enero para poder empezar a gobernar.

Níger	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Internacional
Actores:	Gobierno, oposición política (Coordinadora de Fuerzas para la Democracia y la República) y social, grupo armado MUYAO, grupo armado Firmantes de Sangre, grupo armado islamista nigeriano Boko Haram, Fuerza Regional (MNJTF)

Síntesis:

Las elecciones de enero y marzo de 2011 restauraron el sistema democrático en el país después de que la Junta Militar cumpliera con el calendario establecido para el retorno del poder a la sociedad civil. En el año 2009 un golpe de Estado había acabado con el Gobierno de Mamadou Tandja, después de que éste iniciara una serie de reformas constitucionales para mantenerse en el poder. Pese a la normalización de la situación en el país persiste la inestabilidad generada en el norte por la presencia de células del grupo armado argelino AQMI, y sobre todo en la frontera con Nigeria debido al impacto de las acciones armadas del grupo Boko Haram, el cual incrementó sus ataques en territorio de Níger luego de que el Gobierno se sumase a la fuerza regional (MNTF) para combatir a la insurgencia.

La situación política nacional estuvo marcada por el incremento del impacto del conflicto de Boko Haram (BH) en el país, sobre todo en la región de Diffa, así como por las tensiones políticas y sociales derivadas de la convocatoria de las elecciones previstas para febrero de 2016. Níger inició el año envuelto en la crisis humanitaria generada por los ataques de BH en la región de Diffa, ubicada al sureste del país, que obligó al Gobierno a solicitar ayuda internacional debido a la llegada de alrededor de 150.000 personas refugiadas de Nigeria, así como a declarar el estado de emergencia en la zona. A los ataques a principios de año de la insurgencia, principalmente en las ciudades de Bosso y Diffa, el Ejército respondió con la fuerza el 6 de febrero, dejando un balance de al menos 100 insurgentes muertos. Níger se unió a la Multinational Joint Task Force (MNJTF) para combatir a BH entre todos los países de la región –Chad, Nigeria, Benín, Níger y Camerún–, aprobando en febrero el Parlamento nacional el envío de 750 soldados. La respuesta de BH fue incrementar los ataques en los países integrantes de la MNJTF, y el 25 de abril el grupo atacó la base militar nigerina en Karamga Island, Lago Chad, dejando un balance de 50 soldados nigerinos, 26 civiles y 156 insurgentes muertos, en lo que representó el primer gran ataque del año. En respuesta, el Gobierno de Níger anunció el 30 de abril un operativo militar en la región del Lago Chad, dando 72 horas a los residentes para evacuar la zona. La acción generó el desplazamiento de 25.000 civiles. A principios de mayo, el Gobierno informó de la detención, entre los meses de febrero y marzo, de 643 personas sospechosas de colaborar con BH. Durante los siguientes meses la situación prevaleció sin grandes cambios, acentuándose la crisis en Diffa. El año concluyó con una disminución de los ataques del grupo islamista BH, aunque persistió la inseguridad en las regiones fronterizas con los estados nigerianos de Yobe y Borno. Los datos proporcionados por OCHA sobre el impacto del conflicto en el **desplazamiento forzoso de personas** en 2015 estimaba en alrededor de 66.000 las personas que se vieron desplazadas internamente, y en cerca de 64.000 las personas refugiadas provenientes de Nigeria en territorio de Níger.

En cuanto a política doméstica, el 29 de julio la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) anunció las fechas para la celebración de las elecciones presidenciales de 2016 –1ª ronda el 21 de febrero y 2ª ronda 20 de marzo– así como las de carácter local –9 de mayo–. El anuncio generó críticas desde la oposición debido a la falta de consenso en las fechas propuestas. El partido Nigerien Democratic Movement (MODEN) nombró el 13 de septiembre como candidato presidencial a Hama Amadou, quien fuera el presidente de la Asamblea Nacional, que se hallaba exiliado en Francia debido a que sobre él pesaba una acusación de tráfico de menores en el país. Amadou regresó al país el 14 de noviembre para competir en la campaña presidencial, siendo detenido a su llegada a Niamey.

El final de año estuvo marcado por el incremento de las tensiones políticas entre el Gobierno y la oposición. En diciembre el presidente del Gobierno de Níger, Mahamadou Issoufou, anunció el arresto de nueve oficiales militares, así como de algunos civiles y periodistas, acusados de planificar un golpe de Estado, lo que generó duras críticas por parte de la oposición, quienes cuestionaron que el Gobierno estaba tratando de manipular el clima político antes de la celebración de los comicios.

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, milicias comunitarias

Síntesis:

Desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas.

Además de la situación de guerra en el norte del país entre las tropas nigerianas y de los países vecinos contra el grupo armado Boko Haram,¹⁷ **la situación política en Nigeria también estuvo marcada por la tensión vinculada a los diferentes comicios que se vivieron en el país durante el primer semestre del año, así como por la violencia intercomunitaria en diferentes regiones del país y el aumento de la escalada de tensión en las regiones sureñas (Ibo y Delta del Níger).** A principios de año la tensión y la violencia preelectoral se incrementó considerablemente, obligando al Gobierno a posponer las elecciones previstas para febrero al 28 de marzo –en el caso de las presidenciales y parlamentarias a nivel federal– y al 11 de abril –los comicios para gobernadores y parlamentos estatales–. La decisión fue anunciada el 7 de febrero por la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC), alegando motivos de seguridad, luego de que la intensificación de las operaciones de seguridad contra BH y el gran despliegue de recursos militares, hubiera reducido el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía en los comicios. Para entonces la violencia preelectoral ya

17. Véase el resumen sobre Nigeria (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

había implicado enfrentamientos entre simpatizantes de partidos rivales y diversos incidentes. **La Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) cifró en 58 las víctimas mortales entre diciembre de 2014 y mediados de febrero.** Finalmente, el 28 de marzo el país celebró las elecciones presidenciales que dieron como ganador al candidato del partido opositor All Progressives Congress (APC), el ex general Muhammadu Buhari, quien obtuvo cerca de 15 millones de votos (52,4% de los votos emitidos), mientras que el entonces presidente Goodluck Jonathan quedó segundo con alrededor de 13 millones (43,7% de los votos emitidos), recibiendo la tercera fuerza política en torno a 53.000 votos. El proceso electoral fue reconocido como transparente y válido desde los diferentes organismos de observación interiores y exteriores (INEC, ECOWAS, UE, Commonwealth, UA). Por su parte, la

Muhammadu Buhari se convirtió en el primer candidato de la oposición que logra vencer en unas elecciones presidenciales en Nigeria, acabando con 16 años de gobierno del PDP

NHRC reportó al menos 50 víctimas mortales registradas durante el proceso electoral y los días posteriores. La victoria de Buhari fue reconocida públicamente el 31 de marzo por el presidente saliente Jonathan y hecha oficial el 1 de abril, convirtiéndose Buhari en el primer candidato de la oposición que logra vencer en unas elecciones presidenciales, acabando con 16 años de Gobierno del People's Democratic Party (PDP). El traspaso de poder se realizó de forma pacífica, mediante un acuerdo de no violencia firmado el 26 de marzo entre Jonathan y Buhari, por el que ambos líderes se comprometieron a evitar repetir el escenario de violencia producido en las elecciones anteriores. El nuevo presidente también envió un mensaje de reconciliación nacional, instando a todas las fuerzas a trabajar en la misma dirección. Tras las elecciones nacionales, el país volvió a convocar comicios para elegir a gobernadores estatales y a la Asamblea Nacional los días 11 y 25 de abril respectivamente. Nuevamente el APC se impuso en 20 de los 29 estados donde se llevaron a cabo. Durante los comicios, el INEC contabilizó un total de 66 incidentes violentos registrados en todo el país, y la NHRC reportó 55 asesinatos, además de unos 200 muertos en la violencia pre y post electoral.

De forma paralela a la situación de tensión política generada por la carrera electoral, la **violencia comunitaria** continuó azotando algunas de las regiones del país. El informe anual producido por el Institute for Economics and Peace, *Global Terrorism Index 2015*,¹⁸ colocó a Nigeria en el puesto tercero en cuanto a nivel de violencia de entre los 162 Estados considerados, donde a la violencia de Boko Haram –considerado por el GTI como el grupo más mortífero de todo el 2014–, se unió además la violencia de las milicias y pastores de la comunidad fulani, que dejó un saldo de 1.229 muertes en 2014, frente a las 63 muertes en 2013. Durante el 2015 –aun sin datos globales– la violencia se redujo

en comparación al 2014, pero siguió presente en el país. Entre los diferentes hechos violentos registrados en Nigeria durante el año, e incluyendo otros episodios intercomunitarios no generados necesariamente por pastores fulanis, destacaron los siguientes hechos: una treintena de víctimas mortales entre mediados y

finales de enero en diversos ataques en el estado de Taraba que involucraron a pastores de la comunidad fulani; más de 80 personas murieron en otros ataques en el centro del estado de Benue a mediados de marzo; en el estado de Plateau, zona central de Nigeria, se registraron al menos seis ataques atribuidos a las disputas territoriales entre agricultores y ganaderos seminómadas entre el 25 de abril y el 11 de mayo, que se saldaron con un balance de 70 muertos; en el mes de julio se reportaron alrededor de 70 personas asesinadas debido a incidentes relativos

a la violencia política intercomunitaria en los estados de Benue, Plateau, Níger, Nasarawa, Zamfara y Rivers; el 15 de septiembre, un enfrentamiento entre pastores fulani y agricultores dejó diez personas muertas en el estado de Taraba; en el estado de Plateau, el 16 de septiembre 19 personas fueron asesinadas en la aldea de Kadunung; se registraron 35 muertos en un ataque realizado presuntamente por pastores fulani el 22 de septiembre en el estado de Níger. Por otro lado, y en lo que podría haber sido el ataque con víctimas mortales más elevado del año, el 12 y 13 de diciembre un choque entre el Ejército y miembros del Movimiento Islámico de Nigeria en Zaria, estado de Kaduna, dejó un balance de alrededor de 100 víctimas mortales y provocó airadas protestas en los estados del norte.

Finalmente, durante los últimos meses del año se volvieron a registrar **incidentes significativos en las regiones sureñas ibo, zona del movimiento pro independencia de Biafra**, debido al arresto el 19 de octubre de Nnamdi Nwannekaenyi Kanu, líder de la organización independentista Indigenous People of Biafra (IPOB), y director de Radio Biafra, quien fue acusado de sedición, incitar el odio étnico y traición, cargos que le podrían acarrear hasta la pena de muerte. Su detención, conjuntamente con la de otros seguidores producidas el 19-20 de octubre, generó numerosas movilizaciones en la región que fueron creciendo hasta desencadenar incidentes violentos el 2 de diciembre, donde perdieron la vida ocho manifestantes y dos policías en el bloqueo del puente Níger en Onitsha, estado de Anambra. En los incidentes, en los cuales se quemó la mezquita central, los manifestantes exigieron la libertad de Kanu y se reivindicó la independencia de Biafra. El Tribunal Supremo emitió el 17 de diciembre una orden de liberación inmediata de Kanu, pero el Gobierno de Buhari presentó un día después nuevas acusaciones de seis cargos contra él para impedir su liberación.

18. The Institute for Economics and Peace, *2015 Global Terrorism Index*, noviembre de 2015.

Nigeria (Delta Níger)	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, MEND, MOSOP, NDPVF y NDV, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada

Síntesis:

La inestabilidad en el Delta del Níger es fruto de la pérdida de los medios de vida de la población debido a la actividad petrolera en la zona. La falta de compensaciones económicas, desarrollo y la marginalización de las comunidades llevó a exigir una mayor participación en los beneficios obtenidos por la explotación del petróleo. Desde los años noventa, surgieron formaciones armadas que propiciaron ataques contra instalaciones petroleras y puestos militares, además del secuestro de trabajadores. La respuesta del Gobierno fue militar, con la presencia permanente de las fuerzas especiales en la región del Delta, acusadas de cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. En 2009 el Gobierno decretó una ley de amnistía para todos los grupos armados que decidieran dejar la lucha. El ofrecimiento de programas de reinserción animó a los líderes de muchas de estas formaciones a deponer las armas, lo que generó una reducción pronunciada de la violencia armada en la zona. Sin embargo, el estancamiento de los proyectos de reinserción y desarrollo prometidos por el Gobierno podría propiciar un retorno a la lucha armada.

La región del Delta del Níger, a la par que lo sucedido en el resto del país, se mantuvo en alerta debido a la celebración de las elecciones en el primer semestre del año. A principios de 2015, analistas y medios de comunicación locales apuntaron el riesgo de enfrentamientos violentos entre sectores simpatizantes de grupos políticos rivales en la región, incluyendo entre seguidores del presidente Goodluck Jonathan y del gobernador del estado de Rivers, Rotimi Amaechi. El propio gobernador de Rivers advirtió sobre un flujo de armas sin precedentes en el Delta en la etapa preelectoral y sobre los riesgos de una vuelta a los niveles de violencia de la primera década de los años 2000. En ese sentido, el líder del Movimiento Revolucionario Ifalibabou (IRV), el general Sese, afirmó que el programa de amnistía y reinserción no había incluido en su tercera fase apenas a ningún militante del IRV, lo que abrió las puertas a que fueran captados por sectores de la oposición para provocar tensiones sociales. En los meses previos a las elecciones se generaron diferentes episodios de violencia en la región del Delta, informando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) de diferentes asesinatos en los estados de Akwa Ibom, Edo y Rivers, así como se produjeron enfrentamientos entre sectores simpatizantes de grupos políticos rivales que causaron diferentes heridos en los estados del Delta, Edo e Imo, produciéndose a su vez denuncias relacionadas con el

robo de urnas y materiales electorales. Finalmente se celebraron los comicios presidenciales el 31 de marzo, con algunos incidentes menores que no invalidaron el ejercicio. El mapa electoral resultante dio al **partido opositor All Progressives Congress (APC)**, liderado por Muhammadu Buhari, **la victoria en 21 de los 37 estados nigerianos, perdiendo en ocho de los nueve estados que conforman la región del Delta del Níger, donde tan solo consiguió la victoria en el estado de Ondo, el más occidental de la región.** Posteriormente, los comicios para la elección de gobernadores y la Asamblea Nacional, que se llevaron a cabo entre los días 11 y 25 de abril, respectivamente, también pusieron el foco de violencia en la región del Delta, donde se tuvo que ampliar el periodo de votación debido a diferentes irregularidades y enfrentamientos. El estado de Rivers, que representó el principal foco de tensiones, dio la victoria final a Nyesom Wike, candidato del partido del ex presidente Jonathan, el People's Democratic Party (PDP), arrebatándole así el estado al APC, que gobernaba de la mano de Rotimi Amaechi. El nuevo presidente Buhari, en declaraciones realizadas durante la toma de posesión del cargo, el 29 de mayo, anunció que mantendría el programa de amnistía y reinserción para los combatientes de los grupos armados del Delta del Níger, instando a abrazar la paz y a permitir el desarrollo de la región. El Programa de Amnistía Presidencial (PAP) para el Delta del Níger anunció a principios del mes de agosto la aprobación por parte del presidente Buhari del comienzo de los pagos retrasados a los excombatientes beneficiados del programa, cuyo objetivo ha sido la rehabilitación y la reintegración de los ex combatientes en la sociedad, logrando que la producción petrolera del país aumentase de 900.000 barriles a más de dos millones por día como resultado de la reducción de la violencia en la región. Al respecto del anuncio realizado por el PAP, ex combatientes del Delta del Níger siguieron exigiendo al Gobierno federal inversiones para el desarrollo de la región como única salida para evitar nuevos episodios violentos.

Por otra parte, la **compañía petrolera anglo holandesa Shell** admitió su responsabilidad en dos graves derrames ocurridos en 2008 tras un **proceso judicial** de tres años, alcanzando en enero de 2015 un acuerdo por el cual su firma subsidiaria en Nigeria deberá pagar 70 millones de euros a las víctimas del vertido, así como hacerse cargo de las labores de limpieza. Organizaciones locales e internacionales, como Amnistía Internacional, expresaron satisfacción pero señalaron los efectos negativos en el tiempo transcurrido. Al respecto, el presidente nigeriano creó un fondo fiduciario, compuesto inicialmente de 10 millones de dólares, para acometer la limpieza de la región Ogoni, tal y como había recomendado el Programa Medioambiental de Naciones Unidas (UNEP).¹⁹ El Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) congratuló al Gobierno por el anuncio y solicitó aclarar la procedencia de los

19. United Nations Environment Programme, *Environmental Assessment of Ogoniland*, 2011.

fondos. Por otro lado, miembros de las comunidades productoras de petróleo de la región llevaron al Gobierno Federal nigeriano ante el Tribunal Comunitario de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS), con el objeto de que la corte declare ilegal y una violación a sus derechos fundamentales como comunidades del Delta, la asignación de petróleo a las empresas privadas nigerianas.

La Federación Internacional de los Derechos Humanos reclamó una comisión de investigación internacional para esclarecer las muertes en los incidentes ocurridos a finales de 2015 en Djibouti

generada en este país considerado estratégico en la llamada “lucha contra el terrorismo”. La oposición política tuvo que lamentar la muerte de uno de sus máximos exponentes, Ismaïl Guedi Hared, que falleció en septiembre en París. Hared había sido el jefe de gabinete del histórico presidente Hassan Gouled Aptidon y fue uno de los promotores del acuerdo de 2014, y se postulaba como el posible candidato a las elecciones de 2016, por lo que la coalición USN se encontraba dividida en torno a la estrategia a seguir de cara a las elecciones de 2016. La renovación de la comisión electoral es una de las cuestiones

que puede determinar la participación de la USN en las elecciones. Además, Daher Ahmed Farah, retornado de su exilio en Bélgica desde 2011, líder oficioso de la USN, no puede competir por conservar su nacionalidad belga, por lo que no se descartaba un boicot al proceso.²⁰

Cuerno de África

Djibouti	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado FRUD, oposición política y social (coalición UAD/USN)

Síntesis:

Djibouti es un pequeño país del Cuerno de África que logró la independencia de Francia en 1977. Creado artificialmente por el colonialismo, en base a razones estratégicas, el nuevo Estado depende de su puerto como principal recurso a través del cual Etiopía canaliza gran parte de su comercio exterior. Su situación es también estratégica para el control del tráfico marítimo en el Mar Rojo y su proximidad a Somalia es un acicate para el establecimiento de misiones militares para controlar desde Djibouti las acciones de piratería en las aguas somalíes, así como para disponer de una presencia militar en el continente africano. El sistema político está controlado por el Rassemblement Populaire pour le Progrès (RPP) y funciona como un sistema de partido único. La oposición política está permitida desde 2002, aunque boicoteó las elecciones de 2005 y 2008 por la ausencia de libertad de expresión y las presiones gubernamentales. Agrupada en la coalición Union pour l'Alternance Démocratique (UAD), se presentó a las elecciones de 2013 bajo la nueva etiqueta de Union pour la Salut National (USN) pero rechazó los resultados oficiales que le atribuían 10 de los 65 escaños del Parlamento –nunca se publicaron los resultados definitivos– lo que provocó una grave crisis política, resuelta con el acuerdo del 30 de diciembre de 2014 bajo presión de EEUU y la UE. Por otra parte, en los años noventa tuvo lugar una guerra civil liderada por el grupo armado Front pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie (FRUD), surgido de la comunidad afar, marginada de las instituciones políticas, controladas por sectores procedentes del subclan somalí issa. En 1994 el núcleo mayoritario del FRUD alcanzó un acuerdo de paz, pero algunos sectores minoritarios de la coalición armada han permanecido activos desde entonces.

En lo concerniente a **Djibouti, el año se vio marcado por la proximidad de las elecciones previstas para abril de 2016** y la puesta en marcha del acuerdo alcanzado en diciembre de 2014 entre el Gobierno y la oposición política tras meses de negociaciones con la presión de EEUU y la UE, preocupados ante la inestabilidad

El anuncio realizado el 3 de diciembre por el presidente, Ismaïl Omar Guelleh, de presentarse a un cuarto mandato en las elecciones presidenciales provocó el rechazo por parte de la oposición política y manifestaciones pacíficas el 14 de diciembre. Alrededor de 50 opositores fueron arrestados entre el 13 y el 16 de diciembre, y posteriormente la intervención policial en una concentración de carácter religioso y cultural de la comunidad Yonis Moussa del clan Issa, en Buldhoqo, en las afueras de la capital, tomó tintes políticos como consecuencia de la represión ejercida por el Gobierno que habría provocado siete víctimas mortales y 70 heridos, según fuentes oficiales, cifra que asciende a alrededor de 30 víctimas mortales según la Liga de Djibouti de los Derechos Humanos (LDDH), además de 150 personas heridas. Apoyados en las medidas excepcionales tomadas a raíz del atentado de Bamako (Mali) el 20 de noviembre, que suponen la prohibición de concentraciones en la vía pública, los cuerpos de seguridad decidieron intervenir para disolver el acto en contra de la voluntad de los fieles, lo que habría provocado el rechazo de los centenares de participantes nómadas llegados de la frontera con Etiopía. El Gobierno anunció la existencia de al menos 50 policías heridos como resultado de “la acción deliberada orquestada por fuerzas externas”. La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) reclamó el establecimiento de una comisión de investigación internacional. Por último, cabe destacar que China anunció el 26 de noviembre sus planes para establecer su primera base militar en el extranjero, tras un acuerdo alcanzado con Djibouti.²¹ En paralelo, ACNUR anunció el incremento de llegadas de población refugiada yemení al país. Se estima que la población refugiada en Djibouti asciende a 30.000 personas, país con una población total de 900.000, lo que supone que el 3,33% de la población que vive el país es refugiada.

20. Samy Ghorbal, “Djibouti: après la disparition d’Ismaïl Guedi Hared, l’opposition se divise”, *Jeune Afrique*, 28 de noviembre de 2015.

21. Perlez, Jane, Buckley, Chris, “China Retools Its Military With a First Overseas Outpost in Djibouti”, *New York Times*, 26 de noviembre de 2015.

Eritrea	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social interna, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFD, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EPDF, EIC, Nahda), otros grupos

Síntesis:

El régimen de partido único que gobierna Eritrea desde 1993, antigua insurgencia que contribuyó a la caída del régimen de Mengistu Haile Mariam en Etiopía en 1991, ha gobernado el país con un marcado autoritarismo y ha silenciado y reprimido a la oposición política. El Gobierno, liderado por la vieja guardia de la época de la independencia, se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, respeto por las minorías étnicas, un mayor grado de autogobierno, reivindican el árabe como lengua oficial, el fin de la marginación del islam en el país y el freno a la imposición cultural de la comunidad tigray, o tigrinización, que lleva a cabo el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ, por sus siglas en inglés), que controla todos los mecanismos de poder. Esta situación, además de la política de Eritrea en la región del Cuerno de África, ha llevado al país a un creciente aislacionismo. En diciembre de 2009 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas, restricción de vuelos y congelación de bienes a los principales altos cargos del país por su apoyo al grupo armado somalí al-Shabaab.

No se produjeron cambios en la situación de Eritrea durante el año. En lo concerniente al embargo de armas y otras sanciones que pesan sobre el país, el Consejo de Seguridad de la ONU acabó renovando las sanciones hasta noviembre de 2016 y también amplió el mandato del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea hasta diciembre de 2016, tras recibir el informe de este Grupo de Supervisión, en el que se destacó que no halló pruebas de que Eritrea estuviera prestando apoyo a al-Shabaab, principal motivación para sancionarla en 2009. No obstante, descubrió que Eritrea seguía apoyando y dando refugio a ciertos grupos armados regionales, entre los que figuraban un frente unificado de grupos armados de la oposición etíope que se había formado hacía poco, el Movimiento Democrático del Pueblo Tigrayán (TPDM), y el dirigente militar del grupo Ginbot Sebat. En paralelo, el informe remarca que de las nuevas relaciones estratégicas con Arabia Saudita y EAU el país está recibiendo unas compensaciones

Naciones Unidas señaló que un 9% de los 4,5 millones de habitantes de Eritrea han abandonado el país en los últimos años

que podrían ser desviadas a otros fines por el Gobierno, y que soldados eritreos están combatiendo en suelo yemení en el contingente de EAU. Además, el país sigue manteniendo una economía informal controlada por el PFDJ, una absoluta falta de transparencia financiera, en especial con respecto a los ingresos de la minería, y la imposición de tributación extraterritorial a la ciudadanía que vive en el extranjero.²² El Gobierno eritreo hizo un llamamiento a la retirada de las sanciones debido a que el Grupo no encontró evidencias de apoyo a al-Shabaab. El Consejo de Seguridad señaló que espera la colaboración de Eritrea con el Grupo para poder demostrar que Eritrea no está violando los términos de las resoluciones de la ONU.

Por otra parte, Naciones Unidas señaló que unas 400.000 personas, alrededor del 9% de la población, que asciende a 4,5 millones de personas, han huido del país en los últimos años. Más de una cuarta parte de las 132.000 personas que llegaron a Italia entre enero y septiembre eran eritreas, según ACNUR, y representan la mayoría de las más de 3.000 personas ahogadas en el Mar Mediterráneo este año. La cifra de población eritreas en busca de asilo en Europa se ha cuadruplicado desde 2011, alcanzando las 46.000 personas en 2014. La pobreza extrema, la falta de oportunidades y la represión y privación de libertades que ejerce el régimen de Isaias Afewerki estarían en la causa de esta huida masiva.

A principios de junio se hizo público el informe de la Comisión de investigación de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, en el que se constató **que se habían cometido y se siguen cometiendo violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos en el país bajo la autoridad del Gobierno. Algunas de estas violaciones pueden constituir crímenes contra la humanidad.** Detalla cómo el Gobierno ha creado y sostenido sistemas represivos para controlar, silenciar y aislar a la población civil, privándolos de sus libertades fundamentales de forma sistemática y arbitraria. La Comisión también describe cómo, con el pretexto de la defensa de la integridad del Estado y la garantía de su autosuficiencia, la población está sujeta a sistemas de servicio nacional y trabajo forzoso que suponen graves abusos, explotación e incluso esclavitud. Por último, a mediados de marzo, una comisión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que el Gobierno eritreo utilizaba su enfrentamiento con su enemiga Etiopía como un pretexto para cometer numerosas violaciones de los derechos humanos y la represión de la oposición.

22. Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, *Informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea presentado de conformidad con la resolución 2182 (2014) del Consejo de Seguridad: Eritrea*, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2015/802, 20 de octubre de 2015.

Etiopía	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, diversos grupos armados

Síntesis:

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que rige el país con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista.

Se incrementó la tensión vinculada al clima de represión y las limitaciones a la libertad de expresión en el país.

El 24 de mayo se celebraron las elecciones de los 547 diputados del Parlamento etíope y a las asambleas regionales del país, en las que el partido gobernante EPRDF obtuvo una amplia victoria. Éstos son los quintos comicios desde la caída de Mengistu Haile Mariam en 1991 y los primeros desde la muerte del histórico líder y primer ministro del país en 2012, Meles Zenawi. **El EPRDF y sus aliados obtuvieron todos los escaños del Parlamento, incluyendo el único escaño que obtuvo la oposición en 2010**, del partido Unidad por la Democracia y la Justicia (UJD), que en las actuales elecciones se integró en la coalición Medrek. 58 partidos se habían registrado para participar en estas elecciones, de los que realmente solo Medrek y Semawayi (Partido Azul) representaban la oposición real al Gobierno. Aunque la UA declaró que las elecciones habían transcurrido en calma y eran creíbles, fuentes de Medrek, Semayawi y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos constataron que decenas de políticos y simpatizantes de partidos opositores habrían sido amenazados, acosados, agredidos y detenidos por la Policía. Según la organización Committee to Protect Journalists (CPJ), Etiopía ocupó en 2014 el cuarto lugar a nivel mundial —el segundo país africano tras Eritrea— como país más represor de los medios de comunicación.

La organización Committee to Protect Journalists situó a Etiopía en el cuarto lugar a nivel mundial como país más represor de los medios de comunicación

Por otra parte, cabe destacar la visita del presidente estadounidense Barack Obama a la región y su presencia en la cumbre de la UA a finales de julio, que sirvió de espaldarazo a la política exterior de Etiopía y Kenya en relación a al-Shabaab y Somalia. En vísperas de esta visita, Etiopía liberó a cinco blogueros y periodistas encarcelados durante más de un año, como muestra de buena voluntad. Decenas de periodistas siguen encarcelados, según el CPJ, y tras las elecciones persistió la presión hacia los medios de comunicación independientes, la detención de periodistas y la persecución a la oposición. **Cabe destacar la formación de un nuevo grupo armado, el Arbegnoch Ginbot 7 for Unity and Democratic Movement (AGUDM), que a principios de julio cometió su primera acción bélica en el estado de Tigray, fronterizo con Eritrea, causando la muerte de 50 personas**, confirmadas por el propio Gobierno. El AGUDM tiene sus raíces en el partido político Ginbot 7, declarado grupo terrorista en junio de 2011 junto al ONLF y al OLF, en el marco de la cuestionada ley antiterrorista.

En paralelo, a mediados de septiembre fuentes gubernamentales confirmaron la rendición del líder rebelde Mola Asgedom, refugiado en Eritrea, junto con alrededor de 800 combatientes de su grupo armado, el Movimiento Democrático del Pueblo Tigrayán (TPDM). El TPDM representaba el brazo militar principal de la coalición opositora etíope en Eritrea. Esta desertión se produjo días después de la formación el 7 de septiembre de una coalición opositora llamada Salvación de Etiopía a través de la Democracia, compuesta por el TPDM, el AGUDM, el Afar Peoples Liberation Movement (APLM) y el Amhara Democratic Force Movement (ADFM), coalición de la que Mola había sido escogido vicepresidente. Una versión diferente de los hechos del medio ilegalizado Ethiopian Review señaló que existía un plan para atraer líderes opositores etíopes a Eritrea desde EEUU con la promesa de liderar una coalición opositora, y que Mola fue capturado por los servicios secretos etíopes infiltrados en el TPDM. Por último, cabe destacar el encuentro celebrado el 24 de octubre en Oslo (Noruega) de cinco movimientos político-militares opuestos

al Gobierno etíope, que anunciaron la formación de la People's Alliance for Freedom and Democracy (PAFD). Participaron delegados de las cinco organizaciones: el Gambella People Liberation Movement (GPLM), Ogaden National Liberation Front (ONLF), Oromo Liberation Front (OLF), Benshangul People Liberation Movement (BPLM) y el Sidama National Liberation Front (SNLF). El objetivo de estas fuerzas con presencia dentro y fuera de Etiopía era establecer una alianza que coordine sus actividades para poner fin al régimen opresivo en el país y garantizar el derecho a la autodeterminación. Por último, cabe destacar que en noviembre el Gobierno alertó que se había incrementado el número de personas dependientes de ayuda alimentaria a 10 millones como consecuencia de la sequía.

Etiopía (Oromiya)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada (OLF, IFLO)

Síntesis:

Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de rechazo del poder central desde los años setenta. El oromo OLF surge entre 1973 y 1974 en la región etíope de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista oromo participan junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, el OLF se desmarca en 1992 del Gobierno de transición liderado por el partido TPLF de Meles Zenawi, que controla la coalición en el poder, el Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF), y desde entonces inicia la lucha armada contra el Gobierno central y contra otros movimientos políticos oromos progubernamentales exigiendo la independencia de la comunidad oromo. En diversas ocasiones ha colaborado con el ONLF de Ogadén en acciones contra el Gobierno central.

Durante el año se produjo una escalada de las acciones del grupo armado OLF contra el Gobierno en paralelo al incremento de la represión contra la comunidad oromo por los cuerpos de seguridad. El OLF llevó a cabo diversas acciones armadas durante el año que causaron decenas de víctimas mortales entre miembros de los cuerpos de seguridad y del principal partido de la coalición gubernamental, TPLF, sobre todo en el tercer trimestre del año. El OLF también cuestionó en julio la visita a Etiopía del presidente estadounidense, Barack Obama, señalando que era incompatible con los principios democráticos del Gobierno de EEUU, ya que este apoyo al régimen etíope avalaba su política de represión, explotación económica y violaciones de los derechos humanos. En paralelo, al menos 5.000 personas oromo, según señaló Amnistía Internacional, fueron arrestadas entre 2011 y 2014 por su oposición política, por ejercer la libertad de expresión o por manifestar su opinión, lo que incluye a miles de personas en manifestaciones pacíficas, centenares de miembros de la oposición política, así como a centenares de personas que fueron arrestadas simplemente por expresar su opinión, acusadas de pertenecer al OLF. Por otro lado, aumentó la tensión derivada de la oposición estudiantil oromo y de otros sectores contra el proyecto gubernamental conocido como Master Plan, que pretende expandir la capital, Addis Abeba, en territorio oromo, y que va acompañado de expropiaciones masivas. En diciembre HRW denunció que al menos 75 personas habrían muerto como consecuencia de la represión y el uso de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad en manifestaciones contra el Gobierno en la región de Oromiya iniciadas en noviembre por parte de miles de

estudiantes de la comunidad oromo. Además, también habrían muerto cuatro policías, centenares de personas resultaron heridas y un número indeterminado de personas fueron arrestadas. El presidente adjunto del Congreso Federalista Oromo, Bekele Gerba, elevó las víctimas entre la sociedad civil a 80.

Kenya	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Gobierno, Recursos, Autogobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya

Síntesis:

La política y la economía de Kenya han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. En 2002 el sucesor del autoritario y cleptócrata Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) fue derrotado por Mwai Kibaki. Sin embargo, las promesas incumplidas de Kibaki fomentaron un clima de frustración, por lo que el opositor Raila Odinga, se convirtió en una amenaza a la hegemonía en el poder de Kibaki. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras esta situación se alcanzó un acuerdo entre ambos sectores a través de la creación de un frágil Gobierno de unidad nacional. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007 aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, las actividades ilegales de la secta Mungiki, la intervención militar de Kenya en Somalia que ha desencadenado ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenya y la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenya, suponen retos a la estabilidad del país. A esto se le ha sumado durante 2012 la presión gubernamental contra el movimiento secesionista Mombasa Republican Council (MRC), que pretende la independencia de la región costera del país.

Persistió la inestabilidad y las acciones violentas del grupo armado al-Shabaab durante todo el año así como las operaciones militares, abusos y detenciones de sospechosos por parte de los cuerpos de seguridad. En septiembre el Gobierno lanzó la operación Linda Boni para intentar desalojar a los sectores de al-Shabaab y simpatizantes del enclave forestal costero de Boni, en el condado de Lamu, uno de los epicentros de los combates en la zona noreste del país. A finales de noviembre el Gobierno anunció la destrucción de seis campos de al-Shabaab en Boni, aunque no se informó de víctimas mortales. El líder de al-Shabaab, Ahmed Diriye (también

conocido como Ahmed Umar Abu Ubaidah), en un mensaje lanzado el día del fin del Ramadán (17 de julio, Eid al-Fitr), anunció las intenciones del grupo de incrementar las operaciones fuera de Somalia, y en especial en Kenya. En este sentido, el hecho más destacado del año fue el **ataque reivindicado por al-Shabaab en la universidad de Garissa el 2 de abril en el que murieron 148 personas, el más grave que se ha producido en el país desde 1999**. La ofensiva militar de Kenya en Somalia fue duramente criticada por la oposición política y a raíz del atentado se desencadenaron duras protestas y manifestaciones de estudiantes exigiendo un incremento de la seguridad en el país y contra el Gobierno de Uhuru Kenyatta, cuya política en relación a al-Shabaab y Somalia hasta el momento no ha significado más que un agravamiento de la situación en Kenya, según diversos analistas. Kenya estableció el toque de queda tras los hechos en la zona noreste y en partes de la costa, medida que levantó a finales de junio. Tras el atentado continuaron produciéndose diversos ataques por parte de al-Shabaab en diversas localidades y mezquitas en zonas remotas de los condados de Mandera, Garissa y Lamu.

Por otra parte, un informe de la Comisión Nacional de Kenya sobre Derechos Humanos (KNCHR) de septiembre llamado “The Error of Fighting Terror with Terror” detalló los abusos que habrían cometido los cuerpos de seguridad gubernamentales durante las acciones de contrainsurgencia, entre los que destacarían 81 casos de desapariciones forzadas y 25 casos de ejecuciones extrajudiciales. El informe denunció también el uso de mecanismos de tortura y trato cruel, inhumano y degradante a detenidos en lo que se viene a denominar “la guerra contra el terror” por parte del Gobierno de Kenya. En marzo la CPI anunció la retirada de los cargos que pesaban contra el presidente del país, Uhuru Kenyatta, caso que ha sufrido numerosas trabas y la retirada de numerosos testigos lo que ha dificultado su avance y a la postre, se ha impedido que se llevara a cabo el juicio de más alto rango juzgado por la CPI. El Gobierno anunció a mediados de abril el inicio de la construcción de un muro de separación entre Kenya y Somalia que recibió duras críticas por parte de la oposición y de la comunidad internacional. Un informe de la Policía keniana afirmó en febrero que 312 personas habían muerto y 779 habrían resultado heridas como consecuencia de los ataques perpetrados por el grupo armado islamista somalí al-Shabaab o por grupos simpatizantes de la insurgencia entre 2013 y 2014, y con una tendencia ascendente que continuó en 2015. Los condados más afectados por la violencia son los que se encuentran junto a la frontera somalí. Cabe destacar un informe de Journalists for Justice publicado en noviembre, en el que se señaló **la implicación de altos cargos de las Fuerzas Armadas de Kenya en el comercio ilegal de azúcar y carbón vegetal en Somalia y cómo este negocio proporcionaba un fuente vital de ingresos a al-Shabaab**, que generó numerosas críticas y el cuestionamiento general de la presencia de Kenya en Somalia.²³ El azúcar

Al-Shabaab ejecutó a 148 personas en la universidad de Garissa, el atentado más grave en Kenya desde 1999

tiene una alta carga impositiva en Kenya, por lo que existen importantes márgenes de beneficios en las importaciones ilegales procedentes de Somalia que habrían engrosado los bolsillos de oficiales y altos cargos del Ejército.

Grandes Lagos y África Central

África Central (LRA)	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Recursos Internacional
Actores:	Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas ugandesas, congoleesas y sursudanesas), Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka

Síntesis:

El LRA nació en 1986, movido por el mesianismo religioso de su líder, Joseph Kony, con el objetivo de derrocar al Gobierno de Uganda, instaurar un régimen basado en los Diez Mandamientos de la Biblia y sacar de la marginación a la región norte de este país. La violencia y la inseguridad causada por los ataques del LRA contra la población civil, el secuestro de menores para engrosar sus filas (alrededor de 25.000 desde el inicio del conflicto) y los enfrentamientos entre el grupo armado y las Fuerzas Armadas (junto a las milicias de autodefensa) han provocado la muerte de unas 200.000 personas y el desplazamiento forzado de alrededor de dos millones en el momento más álgido del conflicto. La creciente presión militar ejercida por las Fuerzas Armadas ugandesas forzó al grupo a refugiarse primero en el sur de Sudán, posteriormente en RDC, y finalmente en RCA. Así, el LRA fue ampliando sus actividades a los países vecinos donde estableció sus bases, por la incapacidad para frenarle en RDC y RCA, y por la complicidad de Sudán. Entre 2006 y 2008 se celebró un proceso de paz que consiguió establecer un cese de hostilidades, aunque fracasó y en diciembre de 2008 los Ejércitos ugandés, congolés y sursudanesés llevaron a cabo una ofensiva contra el LRA, lo que provocó la disgregación del grupo hacia el noreste de RDC, el sureste de RCA y el suroeste de Sudán del Sur, donde continuó su ofensiva. En noviembre de 2011 la UA autorizó la creación de una fuerza regional transfronteriza compuesta por contingentes militares de estos tres países que se desplegó en septiembre de 2012 y que cuenta con el apoyo logístico de EEUU. La reducción sostenida de la violencia en los últimos años ha provocado que deje de ser considerado conflicto armado a principios de 2015.

Durante el año persistió la inseguridad y las acciones de criminalidad por parte del grupo armado de origen ugandés LRA en las provincias de Haut-Uélé y Bas-Uélé, en el noreste de RDC, así como en las prefecturas de Haute-Kotto y Mbomou, el sureste de la RCA, y en menor medida en la región sudanesa de Darfur. El grupo continuó representando una amenaza para la seguridad

23. Journalists for Justice, *Black and White. Kenya's Criminal Racket in Somalia*, International Commission of Jurists, Nairobi, noviembre de 2015.

regional, tal y como constató el informe del secretario general sobre la situación en África Central, aunque los niveles de violencia continuaron reduciéndose, en línea con la tendencia de los dos últimos años. El grupo sobrevivió gracias a la falta de coordinación interestatal, así como las alianzas oportunistas con otros grupos armados y el comercio ilícito de marfil, diamantes y oro. Según el LRA Crisis Tracker se produjeron alrededor de 200 incidentes violentos durante el año en los que murieron 13 civiles y fueron secuestrados temporalmente o permanentemente alrededor de 600 personas.²⁴ OCHA señaló que solo en el primer semestre de 2015 la cifra de víctimas mortales se elevó a 19 y destacó que si bien el número de ataques y muertes se mantuvo constante desde la puesta en marcha de la estrategia regional de la UA en 2012, el número de secuestros, generalmente de corta duración, siguió aumentando de forma gradual. En este sentido, en septiembre Enough Project e Invisible Children publicaron un informe en el que destacaron que se había producido un incremento significativo de secuestros en los ocho primeros meses de 2015 en comparación con el mismo período de 2014, pasando de 262 secuestros documentados a 417 secuestros, lo que supone un aumento del 60%. El 18 de mayo, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA renovó por otro año el mandato de la Iniciativa de Cooperación Regional para la Eliminación del LRA y EEUU autorizó en octubre la renovación de la Operación Observant Compass, que presta apoyo logístico a la misión regional. En este sentido, las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), apoyadas por la MONUSCO y la iniciativa regional y estadounidense, siguieron realizando operaciones contra el LRA en las zonas afectadas. Por otra parte, en septiembre The Washington Post reveló que estas fuerzas especiales de **AFRICOM estaban trabajando estrechamente con miembros de la ex coalición centroafricana Séléka, con el objetivo de capturar al líder del LRA y desarticular el grupo.** Estos sectores de Séléka fueron calificados como una mafia que pretendía ganarse el favor de los militares aun cuando los rebeldes extorsionaban a la población local y participaban en el comercio ilícito con el LRA.

Según otro informe de Enough Project de noviembre, el LRA estaría muy debilitado y solo contaría con unos 120 combatientes diseminados por los tres países en pequeñas unidades que continuarían sembrando un clima de inseguridad que mantendría lejos de sus lugares de origen a unas 200.000 personas a finales de 2015.²⁵ Joseph Kony mantendría su base en el enclave de Kafia Kingi en mayo de 2015, lugar que estaría ocupando desde 2011. El informe, basado en nuevas entrevistas a desertores del grupo, señala que las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) tienen conocimiento de la existencia del grupo en Kafia Kingi, aunque el Gobierno sudanés lo

En 2015 el alto mando del LRA Dominic Ongwen se entregó a EEUU y se esperaba su enjuiciamiento por la Corte Penal Internacional

niegue. Además, Kony habría perdido un cierto control de sus tropas, e incluso se afirma que, por primera vez, parte de su guardia personal habría intentado asesinarle a mediados de 2015. El grupo sigue comerciando con marfil, procedente de la caza de elefantes en el parque nacional de Garamba, transportado desde RDC e intercambiado en Kafia Kingi por comida, munición y uniformes con comerciantes y militares sudaneses, que trasladarían los colmillos a Nyala (Darfur Sur) y a Khartoum para ser exportados a Asia. A pesar de los esfuerzos de los guardas del parque, que se enfrentan al LRA, la población de elefantes se habría reducido de forma importante.

Asimismo, los grupos del LRA también se dedican al saqueo de minas de oro y diamantes en el este de RCA. Cabe destacar la rendición a las Fuerzas Armadas de EEUU en enero de Dominic Ongwen, alto mando del LRA, que fue trasladado a la Corte Penal Internacional de La Haya y que será juzgado en enero de 2016, lo que supone el primer juicio internacional de un líder del LRA.

Chad	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Internacional
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupo armado islamista nigeriano Boko Haram, Fuerza Regional

Síntesis:
El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por la oposición fueron el germen de una insurgencia que intensificó su actividad durante el año 2006, con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición estaba compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añadió el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales sudanesas *janjaweed*. Éstas atacaron las poblaciones y campos de refugiados de Darfur situados en el este del Chad, lo que contribuyó a una escalada de la tensión entre Sudán y Chad, que se acusaron de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de resistencia. En paralelo, Idriss Déby continuó controlando el país de forma autoritaria. Por último, cabe destacar la expansión de las actividades del grupo nigeriano Boko Haram en Chad, lo que supuso una amenaza para la seguridad.

Chad continuó inmerso en una grave crisis económica como consecuencia de la caída de los precios del

24. Véase Invisible Children – Resolve, *LRA Crisis Tracker*, <http://www.lracrisistracker.com>, 1 de octubre de 2015.

25. Ledio Cakaj, *Tusk Wars: Inside the LRA and the Bloody Business of Ivory*, Enough Project, 26 de octubre de 2015.

petróleo, que conllevó una crisis política y social y que derivó en movilizaciones durante el año, siguiendo la tónica de 2014, en paralelo a la **escalada de las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH)**. Según diversas fuentes, el presidente, Idriss Déby, dio muestras de cansancio y de progresivo deterioro físico como consecuencia de la enfermedad que le aqueja, por lo que su reelección en los comicios presidenciales de abril de 2016 se esperaba más disputada, a pesar de contar con todo el apoyo de la maquinaria del Estado y de su partido, el MPS. A nivel político, durante el año el Gobierno emprendió una serie de iniciativas encaminadas a fomentar el diálogo con los protagonistas políticos, en particular en el marco nacional de diálogo político. El 12 de septiembre, unos 30 partidos políticos emitieron una declaración conjunta para protestar contra el envío reiterado de citaciones policiales a los líderes de la oposición. El 26 de octubre empezó el registro biométrico de los votantes en Chad, como una medida para combatir el fraude electoral, que incluyó a casi 6 millones de votantes en 8.092 centros hasta el 9 de diciembre. La oposición, encabezada por Saleh Kebzabo, presidente de la Union Nationale pour la Démocratie et le Renouveau (UNDR), y por Ngarléjy Yorongar, líder de la Fédération Action pour la République (FAR), encaran estas elecciones con la esperanza de poder hacer frente a Idriss Déby, en el poder desde 1990. A finales de diciembre Kebzabo hizo un llamamiento para promover el diálogo político de cara al proceso electoral. La crisis económica derivada de la caída del precio del petróleo, del que depende en un 75% los presupuestos del país, hundió la economía, ya que el presupuesto de 2015 se había diseñado en base a un precio del barril en torno a los 102 dólares, precio que cayó a los 40 dólares, por lo que las arcas del Estado se han visto seriamente mermadas, lo que ha desatado el impago de salarios, la interrupción de inversiones y de construcción de infraestructuras.²⁶ Esta situación provocó numerosas movilizaciones durante el año de sindicatos, profesores y estudiantes, que en algunos casos fueron dispersadas haciendo un uso desproporcionado de la fuerza y causando diversas víctimas mortales.

Por otra parte, durante el año se produjo una escalada de las acciones de BH. A mediados de febrero BH lanzó su primer ataque en territorio chadiano y desde entonces no pararon de aumentar el número de acciones y las consecuencias en términos de vidas humanas. Idriss Déby se reunió en enero con el ministro de Defensa de

La caída de ingresos por los bajos precios del petróleo desencadenó movilizaciones en Chad que se sumaron a la escalada de los ataques del grupo nigeriano Boko Haram

Camerún y anunció su contribución a la lucha regional contra BH con 2.500 soldados.²⁷ En este sentido, durante el año se llevaron a cabo conversaciones entre diversos países de la región –Chad, Nigeria, Benín, Níger y Camerún– para trabajar conjuntamente en la lucha contra BH y reconfigurar la preexistente Multinational Joint Task Force (MNJTF). En agosto se le dio luz verde a la MNJTF, estableciendo su cuartel general en N'Djamena. Cabe destacar, entre otras operaciones, el ataque de BH el 27 de mayo contra una posición del Ejército en la isla de Choua, en el Lago Chad, en la que murieron cuatro soldados y 33 miembros de BH, y el 15 de junio se produjo el primer atentado suicida de BH en N'Djamena, contra una academia de Policía en la que murieron al menos 30 personas y otras 100 resultaron heridas. Este grave atentado provocó un incremento de las medidas de seguridad en la capital, la expulsión de unos 300 cameruneses a finales de junio y el cierre de la frontera de Chad con Camerún. A finales de junio se produjo la detención de al menos 60 sospechosos de pertenecer a BH en lo que sería una célula del grupo en la capital chadiana. A finales de julio el Ejército anunció la muerte de 117 combatientes de BH en varias operaciones. A raíz de estas acciones, el 3 de julio el Gobierno anunció el establecimiento de una nueva ley antiterrorista que fue duramente criticada porque utilizaba la excusa de la lucha contra el terrorismo para limitar derechos básicos, según la oposición y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos.

El 10 de octubre se produjo el atentado más grave de todo el año, con la muerte de 41 personas en diversos ataques suicidas coordinados en la localidad de Baga Sola, en la región del Lago Chad. A pesar del fuerte despliegue de efectivos, prosiguieron los atentados y ataques suicidas, lo que comportó que las autoridades declarasen el estado de emergencia en la región del Lago Chad el 9 de noviembre, en un primer momento durante 20 días y posteriormente ampliado a cuatro meses ante la persistencia de las acciones bélicas. Diversos países de la región –el conocido como G5, formado por Chad, Mauritania, Malí, Burkina Faso y Níger– se reunieron para discutir cómo hacer frente a BH desde una perspectiva regional con el apoyo de la ONU y la UE y en la segunda Cumbre del Sahel G5 celebrada en N'Djamena el 20 de noviembre acordaron la creación de una fuerza militar conjunta. Cabe destacar, en diciembre, que 27 personas murieron y otras 130 resultaron heridas en un atentado suicida cometido por cuatro mujeres en un mercado en la isla de Koufoua.

26. Vincent Duhem, "Tchad : Idriss Déby l'itno, une force moins tranquille", *Jeune Afrique*, 30 de diciembre de 2015.

27. Véase el resumen sobre Nigeria (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

RDC	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Entre 1998 y 2003 transcurrió en RDC la llamada “primera guerra mundial africana”.²⁸ La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política, los grupos armados RCD-Goma, RCD-K-ML, RCD-N, MLC y las milicias Mai Mai. A partir de junio de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia: Azarias Ruberwa del RCD-Goma y Jean-Pierre Bemba del MLC. El GNT elaboró la Constitución, refrendada en diciembre de 2005. Entre julio y octubre de 2006 se celebraron elecciones legislativas y presidenciales, en las que Kabila fue elegido presidente, y Jean-Pierre Bemba resultó segundo, en medio de un clima de alta tensión y acusaciones de fraude. La formación del nuevo Gobierno en el año 2007 no frenó la inestabilidad y las disputas en el ámbito político. Las elecciones de noviembre de 2011, en las que se cometieron numerosas irregularidades, contribuyeron a avivar la inestabilidad.

RDC estuvo inmersa en una creciente inestabilidad política derivada de la proximidad del fin del segundo mandato del presidente Joseph Kabila, lo que se puso de manifiesto en el aumento de la violencia política, la represión de la oposición y el uso excesivo de la fuerza en las movilizaciones. En febrero de 2015, con la publicación del calendario electoral y de la ley electoral, se dio inicio al proceso que debe conducir a la celebración de 11 elecciones directas e indirectas en los niveles locales, provinciales y nacionales antes de diciembre de 2016. Los numerosos retos y reformas pendientes y las dificultades en relación al cumplimiento del calendario hicieron temer que el actual presidente, Joseph Kabila, intentara posponer las elecciones presidenciales y así prolongar su mandato.²⁹ Ya en enero de 2015 el Parlamento adoptó un proyecto de ley que incluía una disposición que condicionaba la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales a la organización de un nuevo censo nacional, para cuya elaboración existen dificultades técnicas y financieras que provocaron que numerosos actores de la sociedad civil y de la oposición interpretaran esta disposición como una maniobra que comporta un retraso del calendario electoral. Esta decisión desencadenó importantes movilizaciones en Kinshasa apoyadas por la Iglesia Católica en contra de esta ley –las más importantes y graves desde el supuesto fraude detectado en las elecciones de 2011– en las que murieron al menos 42 personas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Finalmente el Gobierno retiró la controvertida disposición, aunque la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) condicionó la

puesta en marcha del calendario a la resolución de diversas cuestiones, que en parte siguen pendientes, por lo que el régimen creó las condiciones por las cuales cumplir el calendario electoral será prácticamente imposible.

Desde entonces persistió la escalada de la violencia política y el Gobierno buscó silenciar la disidencia con amenazas, violencia y arrestos arbitrarios, tal y como denunciaron diferentes movimientos sociales locales como LUCHA o Filimbi y organizaciones de defensa de los derechos humanos locales e internacionales. La presentación de Filimbi (silbido, en swahili) el 15 de marzo en Kinshasa, reunión en la que participaron movimientos senegaleses como Y'en a marre y burkineses como Balai Citoyen, supuso la detención de todos los participantes y la expulsión de los movimientos activistas senegaleses y burkineses. Los militantes Fred Bauma (LUCHA) y Yves Makwambala (Filimbi) siguen detenidos desde entonces, a pesar de las numerosas iniciativas locales e internacionales que exigen su liberación. Ante este clima político, desde abril Joseph Kabila intentó ganar adeptos para la celebración de un diálogo nacional entre la coalición mayoritaria en el poder, la oposición política y la sociedad civil, para abordar el calendario electoral, la inclusión en el censo de varios millones de votantes que habrían adquirido el derecho de voto desde 2011, la financiación del proceso y la seguridad en las elecciones. La oposición estuvo dividida entre participar o no en el proceso, lo que podría significar la legitimación de una reforma del calendario (el temido “glissement”, el aplazamiento del calendario electoral). Algunos de los actores políticos presentes exigieron una presencia internacional en este proceso. La Conferencia Episcopal (CENCO) celebró en un comunicado el 26 de junio la iniciativa de llevar a cabo un diálogo nacional en el que se respetase el marco institucional vigente, y propuso que se aplazaran las elecciones locales hasta después de las nacionales de 2016 debido, entre otros factores, a retrasos técnicos, logísticos y jurídicos. Las elecciones locales y provinciales que debían celebrarse el 25 de octubre fueron pospuestas por irregularidades jurídicas y falta de financiación, decisión ratificada por el Tribunal Constitucional. En septiembre un grupo de siete partidos políticos (el “G7”) de la coalición gobernante también solicitó a Kabila la celebración de las elecciones locales tras las elecciones nacionales y provinciales. A raíz de este posicionamiento, el G7 fue expulsado de la coalición gubernamental. El Gobierno inició la investigación por supuesta corrupción contra algunos de sus rivales y aspirantes a sucederle, lo que según diversos analistas podría ser una forma de suprimir posibles contendientes, entre ellos el ex gobernador de la poderosa región de Katanga, Moïse Katumbi. En diciembre, Filimbi y LUCHA organizaron una reunión con la oposición política y social en la isla de Gorée, en Senegal, facilitada y financiada por las fundaciones Konrad Adenauer (Alemania) y Brenthurst (Sudáfrica). En la reunión finalmente participaron los principales líderes opositores congoleños, como Félix Tshisekedi y Sami Badibanga

28. Véase la síntesis de RDC (este) y RDC (este - ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

29. Véase “RDC ante el riesgo de una escalada de la inestabilidad política y del conflicto armado en 2016”, en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2016).

(UDPS), Vital Kamerhe (UNC), Eve Bazaiba (MLC), Martin Fayulu (FAC), Olivier Kamitatu (G7) y el abad Léonard Santedi (Iglesia Católica). Moïse Katumbi no participó en el encuentro pero se había reunido previamente con algunos de los presentes, como Félix Tshisekedi en París el 10 de diciembre. Ningún representante del Gobierno fue invitado. El resultado fue la creación al cabo de unos días de una amplia coalición opositora bautizada con el nombre de Front Citoyen 2016, que exige la celebración de las elecciones presidenciales a finales de 2016 tal y como establece la Constitución.³⁰ Floribert Anzuluni, el coordinador de Filimbi, se convirtió en el coordinador de la plataforma. Esta reunión provocó el enfriamiento de las relaciones entre Senegal y RDC. Posteriormente, Katumbi anunció que se sumaba al Front Citoyen 2016, así como las organizaciones de derechos humanos ASADHO y AMIS de Nelson Mandela. La CENCO dio apoyo al Front Citoyen. También en diciembre un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU destacó un aumento de las violaciones de los derechos políticos y de las libertades cometidas por parte de los agentes del Estado y la prevalencia de un clima de impunidad. El informe señaló que desde julio se había observado un recrudecimiento de las amenazas, arrestos arbitrarios y la instrumentalización de la justicia contra activistas de la sociedad civil y de los medios de comunicación, lo que suponía una grave reducción del espacio político.

Rwanda	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente

Síntesis:

La llegada del colonialismo belga en 1916 exacerbó las diferencias étnicas entre la comunidad mayoritaria hutu y la minoría tutsi. Ésta última fue considerada superior y ocupó el poder político, económico y social en el país de la mano de Bélgica en detrimento de la mayoría de la población. Esta situación provocó un fuerte resentimiento y ya en 1959 se produjeron los primeros brotes de violencia etnopolítica contra la comunidad tutsi. Tras la independencia en 1962, la comunidad hutu tomó el poder. En 1990 se inició un conflicto armado entre el grupo armado RPF, liderado por la comunidad tutsi de Uganda, huidos en 1959, y el Gobierno hutu, que alcanzaron un acuerdo en 1993. Este acuerdo no fue respetado y sectores extremistas hutus llevaron a cabo un genocidio entre abril y junio de 1994 de cerca de un millón de personas en su mayoría tutsis pero también sectores hutus moderados, ante la inacción de la comunidad internacional, que retiró la misión de la ONU que debía supervisar el acuerdo. El RPF consiguió derrocar y expulsar al Gobierno genocida, cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. Incluso hay sectores que hablan de un segundo genocidio interno, además de los crímenes cometidos por el

RPF en suelo congolés en persecución de los responsables del genocidio de 1994 –las antiguas Fuerzas Armadas rwandesas y las milicias Interahamwe, rebautizadas como FDLR– y de los dos millones de refugiados rwandeses huidos a RDC. Desde entonces el presidente Paul Kagame ha gobernado de forma autoritaria, reprimiendo la disidencia política.

Persistió la asfixia de la oposición política y la ausencia de libertad de expresión. El año estuvo marcado por el proceso de reforma de la Constitución y el referéndum constitucional en diciembre que planteaba la posibilidad de que el actual presidente Paul Kagame pudiera presentarse a las elecciones de 2017 y sucesivas. El 18 de diciembre se celebró el referéndum constitucional –con una participación del 98%– en el que **la población rwandesa, con un 98,4%, aprobó la revisión de la Constitución en la que se da luz verde a que Kagame, de 58 años, pueda presentarse a las elecciones de 2017 y pueda dirigir potencialmente el país hasta 2034.** El Senado rwandés aprobó diversas enmiendas a mediados de noviembre que le permitían competir para un nuevo mandato de siete años, pero también reducían de siete a cinco años la duración de cada mandato y mantenía la posibilidad máxima de dos mandatos. No obstante, estos cambios solo entrarán en vigor a partir de 2024, después del tercer mandato de Kagame, por lo que posteriormente podría competir por dos periodos adicionales de cinco años. El partido gubernamental, RPF, señaló que estas reformas se realizaban en respuesta a una demanda general de la ciudadanía, ya que en agosto se revelaron en el Parlamento las conclusiones de las consultas nacionales en las que solo 10 personas de los 3,7 millones que firmaron la petición (el 60% del censo) se opusieron a un tercer mandato presidencial. En junio el Democratic Green Party presentó una enmienda al Tribunal Supremo para evitar la reforma de los mandatos presidenciales, que le fue denegada. EEUU y la UE denunciaron las enmiendas como un intento de socavar la democracia en el país y la UE criticó el poco tiempo que tuvieron los partidos para poder hacer campaña en contra en el referéndum. El 31 de diciembre Kagame anunció que aceptaba el mandato ciudadano del referéndum constitucional. Por otra parte, en agosto un tribunal británico rechazó la demanda de extradición del jefe de los servicios de espionaje rwandeses, Karenzi Karake, para comparecer ante un tribunal español por su supuesto rol en las masacres que tuvieron lugar tras el genocidio de 1994. Karake se encontraba en libertad bajo fianza en el Reino Unido tras su arresto en junio a petición de España, detención que enturbió las relaciones diplomáticas entre Reino Unido y Rwanda.

En marzo 11 personas fueron sentenciadas con penas que van desde los 10 años de prisión a penas de cadena perpetua por conspirar con el grupo armado rwandés FDLR para derrocar a Kagame. En lo concerniente a las FDLR, el Gobierno acusó a la ONU y a RDC de inacción

30. Trésor Kibangula, “RDC : comment le Front citoyen 2016 compte empêcher le ‘glissement’ du calendrier électoral”, *Jeune Afrique*, 22 de diciembre de 2015.

contra el grupo. En paralelo, RDC y Rwanda se reunieron en febrero para discutir la agenda de repatriación de los combatientes del grupo armado congolés pro-rwandeses M23 que se encuentran refugiados en Rwanda tras su derrota en diciembre de 2013 frente al Ejército congolés y la MONUSCO, aunque no se pactó un calendario. Las relaciones entre Rwanda y Burundi se tensaron como consecuencia de la grave crisis que padece Burundi, ya que Rwanda presionó a su vecino para que abriera el espacio político de cara a reducir la tensión en el país. Las informaciones filtradas en diciembre en torno a las denuncias de Refugees International, que señaló que en los campos de refugiados burundeses de Rwanda diversos grupos armados burundeses, como las FNL e Imbogoraburundi, estaban reclutando por la fuerza a combatientes, y que podría existir no solo la aquiescencia de las autoridades rwandesas sino su colaboración activa, contribuyó todavía más a agravar las relaciones entre ambos países.

**Refugees
International alertó
que en los campos
de refugiados
burundeses de
Rwanda diversos
grupos armados
burundeses reclutaron
combatientes con
la aquiescencia de
Rwanda**

Sudán	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Sudán vive inmerso en un conflicto crónico derivado de la concentración del poder y los recursos en el centro del país. Aparte de los conflictos en las regiones marginalizadas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, el resto del país sufre también problemas de gobernabilidad derivadas del régimen autoritario del presidente Omar al-Bashir que subió al poder con un golpe de estado en 1989 y que ejerce un duro control y represión de los disidentes a través de los aparatos de seguridad del Estado. La situación de tensión en el país se agravó con la separación de Sudán del Sur en 2011 ya que afectó gravemente la economía del país que dependía en un 70% de la venta de petróleo, situado mayoritariamente en el sur. Las arcas del Estado sudanés vieron disminuir drásticamente sus ingresos por la pérdida del control en la exportación del petróleo y, más tarde, por la falta de acuerdo con Sudán del Sur para su transporte por los oleoductos que pasan por Sudán. Una situación económica con una alta inflación y la devaluación de la moneda contribuyó al inicio de significantes protestas en verano de 2012 en varias ciudades del país que fueron acalladas por los aparatos de seguridad.

Paralelamente a los conflictos armados que se desarrollan en las regiones de Darfur, Nilo Azul y Kordofán Sur, el país está inmerso en una fuerte crisis política y social desde hace años, que ha obligado al Gobierno de Sudán a plantear un Diálogo Nacional con todos los actores que no acaba de arrancar. Desde enero de

2014, momento en el cual el presidente Omar al-Bashir hiciera el llamamiento a todos los partidos políticos y grupos insurgentes a iniciar el proceso de Diálogo Nacional para construir la paz en el país y discutir una posible reforma constitucional,³¹ el proceso de negociación ha avanzado poco: primero por su retraso debido a la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias durante el mes de abril y, posteriormente, debido al boicot de diferentes grupos de oposición y actores armados. Las elecciones de abril –las primeras elecciones desde que Sudán del Sur se separó de Sudán en 2011– significaron un incremento de las restricciones a las libertades políticas en el país en el periodo pre-electoral, hecho que llevó a los principales partidos de la oposición a boicotear los comicios, así como también generaron reacciones de los movimientos armados, incrementando algunos de ellos –como lo hizo el SPLM-N– sus acciones militares de cara a interferir y sabotear las elecciones. Finalmente las elecciones se celebraron entre los días 13 y 15 de abril en un clima marcado por el boicot por parte de los principales partidos de la oposición y la baja participación (46% oficialmente). Durante los comicios se produjeron algunos altercados en diferentes puntos del país. Se incrementó la violencia en las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul durante todo el periodo pre-electoral por parte del grupo rebelde SPLM-N. Finalmente, el 27 de abril se hicieron públicos los resultados que dieron la victoria nuevamente al presidente Omar al-Bashir con el 95,05% de los votos. Los líderes de los países de la región, así como aliados tradicionales, entre ellos Egipto, Etiopía, Arabia Saudita o China, felicitaron a al-Bashir por su victoria. Las misiones de observación de la UA, la Liga Árabe y el IGAD, dieron por buenos los comicios, mientras que la UE y la llamada troika (EEUU, Reino Unido y Noruega) denunciaron las elecciones como no creíbles, hecho que fue criticado por el Gobierno de Sudán, quien paralelamente convocó al representante de la UE en la capital.

Tras los comicios, a inicios de julio el presidente al-Bashir volvió a anunciar la intención del Gobierno de impulsar nuevamente el proceso de Diálogo Nacional, bajo la mediación del African Union High Level Implementation Panel (AUHIP) para Sudán, que encabeza el ex presidente sudafricano Thabo Mbeki. Tras el anuncio realizado por el Gobierno, algunos partidos políticos de la oposición manifestaron su intención de unirse al mismo, como el Islamist Just Peace Forum, mientras que otros mostraron su disposición al diálogo pero mediante cambios significativos en sus contenidos y mediación, como lo hicieron el National Umma Party (NUP) y el Reform Now Movement. Otros grupos opositores como el Islamist Reform Now anunciaron que no participarían. Thabo Mbeki se desplazó en agosto al país para tratar de

31. Véase “El diálogo nacional sudanés, la penúltima esperanza de paz en Sudán”, en el capítulo 5 (Oportunidades de paz para 2015) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2015: Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Icaria Editorial, enero 2015.

impulsar las negociaciones. El Consejo de Paz y Seguridad de la UA (AUPSC), en la reunión de trabajo sobre las actividades del AUHIP celebrada en Addis Abeba el 25 de agosto, se comprometió con el proceso de diálogo sudanés y solicitó una conferencia preparatoria en la sede de la UA en Addis, para crear las condiciones propicias para iniciar el proceso y discutir sobre las cuestiones de procedimiento, misma que fue rechazada inicialmente por el Gobierno sudanés. Paralelamente, el Gobierno de Sudán, en un intento por lograr la adhesión de los grupos rebeldes al proceso, ofreció el 20 de agosto un cese al fuego de dos meses de duración en las áreas de conflicto, así como una amnistía general para los líderes de los movimientos rebeldes que formasen parte del Diálogo Nacional. El 22 de septiembre, el Gobierno firmó dos decretos que garantizaban ambos ofrecimientos a los rebeldes. La coalición de movimientos armados Sudan Revolutionary Front (SRF), que integra a grupos provenientes de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, tras una reunión mantenida con la llamada troika (EEUU, Reino Unido y Noruega), avanzó que participaría en el Diálogo Nacional, afirmando su intención de firmar una tregua de cese de hostilidades de seis meses en sus regiones de operación. **El 10 de octubre dio inicio la apertura del Diálogo Nacional, la cual fue boicoteada por la mayoría de la oposición política y los grupos armados al no haber consenso sobre su contenido.** Con la intención de desencallar la situación, el Gobierno aceptó reunirse con los grupos rebeldes de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul en Addis Abeba, acto que se produjo del 19 al 22 de noviembre. En las conversaciones no se logró un acuerdo en aspectos relativos al alto el fuego, la solicitud de los rebeldes de permitir la entrada de ayuda humanitaria así como en la creación de mesas de negociación diferentes para las crisis de Kordofán Sur y Nilo Azul, aspecto en el cual el SPLM-N exigía una mesa global. Como reacción al fracaso en las negociaciones, el 24 de noviembre el Gobierno de Sudán anunció una ofensiva en las tres regiones rebeldes, lo que llevó al SPLM-N a movilizar a sus tropas. En diciembre se dieron algunas negociaciones enmarcadas en el Diálogo Nacional con diferentes partidos de la oposición, mientras que otros grupos seguían boicoteando la negociación si no se incluía en las mismas al partido “Sudan Call”, excluido por el Gobierno de las mesas de diálogo. El 31 de diciembre el Ejecutivo sudanés informó de la extensión del Diálogo Nacional hasta el 10 de febrero de 2016, así como de un alto el fuego hasta el 31 de enero, mientras que los rebeldes del SPLM-N volvieron a insistir que sobre esas bases no se sentarían a negociar.

En otro orden de asuntos, y en lo relativo al caso abierto por la **Corte Penal Internacional (CPI) contra Omar Hassan al-Bashir**, sobre quien pesa una orden de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Darfur remitida en 2009, la CPI instó en marzo al Con-

El Diálogo Nacional en Sudán se inició a mediados de octubre generando pocos avances y acuerdos, lo que llevó al Gobierno a extenderlo hasta febrero de 2016

sejo de Seguridad de la ONU a adoptar las medidas necesarias dado el fracaso de Sudán a la hora de cooperar en la investigación contra su presidente. Sudán siguió rechazando las peticiones de la CPI reiterando que las decisiones de la corte supranacional no son vinculantes para el Gobierno sudanés. El episodio más trascendente del año en este aspecto se dio a mediados de junio cuando el presidente al-Bashir viajó a Sudáfrica para asistir a la 25ª cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana (UA), celebrada en Johannesburgo. La **presencia de al-Bashir en Sudáfrica motivó que los fiscales de la CPI solicitaran al Gobierno sudafricano su detención.** El Tribunal Superior de Pretoria giró una orden provisional el 14 de junio para prevenir la salida del presidente sudanés del país. Sin embargo, el Gobierno sudafricano ignoró la solicitud de la CPI y del propio tribunal de Pretoria y permitió al presidente sudanés dejar suelo sudafricano. Tanto la UE como la ONU y organizaciones como Human Right Watch o Amnistía Internacional, entre otros muchos actores, se habían sumado a la petición al Gobierno de Jacob Zuma, instándole a que cumpliera con sus obligaciones y compromisos adquiridos y evitase la salida del país del presidente sudanés, presiones que no surtieron efecto y que generaron fuertes críticas al Gobierno sudafricano, que posteriormente revelaría a través del partido de Gobierno, el African National Congress (ANC), su intención de abandonar la CPI debido a lo que consideran el desvío de sus objetivos y mandato.

Sudán – Sudán del Sur	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Identidad, Recursos Internacional
Actores:	Sudán, Sudán del Sur

Síntesis:

El 9 de julio de 2011 Sudán del Sur declaró su independencia como colofón del proceso de paz iniciado con la firma del Acuerdo de Paz Global en 2005. Sin embargo, la creación del nuevo Estado no puso fin a las desavenencias entre Khartoum y Juba debido a la multiplicidad de asuntos pendientes de resolución entre ambos Gobiernos. Entre los principales obstáculos para la estabilidad se encuentra la disputa por el enclave petrolero de Abyei y la delimitación final de la frontera entre ambos Estados así como la falta de acuerdo en torno a la explotación de los recursos petroleros (con yacimientos en Sudán del Sur pero con oleoductos para su exportación en Sudán). Las acusaciones mutuas respecto al apoyo de movimientos insurgentes en el país vecino han contribuido a desestabilizar más la situación y amenazar la convivencia pacífica de ambos países.

Durante el año, las tensiones entre Sudán y Sudán del Sur se visibilizaron en las guerras internas que padece cada Estado, generándose unas dinámicas de guerra por delegación, donde cada país siguió acusando al otro de

apoyar y mantener sus rebeliones domésticas³². A su vez, durante al año también se volvieron a abordar las diferentes **situaciones fronterizas aún por resolver entre los dos Estados, relativas a Abyei, 14-Mile área, Joudat Al-Fakhar, Jebel al-Migainais, Kaka y el enclave de Kafia Kingi** –lo cual equivale a un 20% de la frontera compartida entre ambos países, aún sin delimitar–. La Comisión de Fronteras Conjunta (JBC) entre Sudán y Sudán del Sur se reunió a principios de octubre en Addis Abeba bajo los auspicios del Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP). En la reunión mantenida, la JBC anunció avances en la aplicación de las acciones planificadas en el Acuerdo sobre Asuntos Fronterizos firmado el 27 de septiembre de 2012 entre los dos países. La JBC también confirmó que durante el mes de enero de 2016 se volverán a retomar las negociaciones. Al respecto, y en lo concerniente a la situación en el **enclave de Abyei**, durante el año se generaron algunos incidentes, como el ataque el 26 de noviembre a la residencia del jefe tradicional ngok dinka en la ciudad de Abyei, que le costó la vida a un miembro de la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei, la UNISFA, así como a un menor. Durante el año, el Consejo de Seguridad de la ONU **extendió por unanimidad el mandato de la UNISFA** en dos ocasiones: del 14 de julio al 15 de diciembre de 2015 y, nuevamente, hasta el 15 de mayo de 2016.

Uganda	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

El presidente Yoweri Museveni ocupa el poder desde 1986, cuando al mando de un movimiento insurgente consiguió derrocar al Gobierno de Milton Obote. Desde entonces ha gobernado Uganda de forma autoritaria mediante un sistema insólito en el continente, una fórmula de “democracia sin partidos”, en la que todo el poder estaba concentrado en manos de Museveni y el NRM (el Movimiento). En las elecciones presidenciales de 2001, Museveni venció a su principal opositor, Kizza Besigye, ex coronel del NRM, en medio de acusaciones de fraude. En un referéndum celebrado en julio de 2005, los ugandeses votaron en favor de un regreso al sistema pluripartidista. Tras una enmienda a la Constitución en 2005, para aumentar el límite existente de dos mandatos consecutivos a tres, Museveni finalmente ganó las elecciones de 2006, en medio de serias acusaciones de fraude. Fueron las primeras elecciones multipartidistas desde la llegada de Museveni al poder en 1986. En las elecciones presidenciales de febrero de 2011 Museveni volvió a imponerse a su eterno contrincante y antiguo aliado, Kizza Besigye, en medio de nuevas acusaciones de fraude, lo que generó una escalada de la tensión social y de la represión gubernamental a las demandas de cambio democrático y a las protestas contra el incremento del coste de la vida. En paralelo, la intervención militar de Uganda en Somalia incrementó las amenazas del grupo armado somalí al-Shabaab hacia Uganda. Finalmente, diversas zonas del país se ven afectadas por periódicas disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra.

El país vivió inmerso en una precampaña electoral permanente de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 18 de febrero de 2016.

En el poder desde 1986, el presidente Yoweri Museveni pretendía competir por otro mandato de cinco años. La oposición política intentó ponerse de acuerdo durante el año para presentar un único candidato, como una manera de mantener la esperanza de derrotar a Museveni. No obstante, tal y como señalaron diversos analistas, el hecho de que los principales líderes opositores sean ancianas figuras del partido en el poder supone un lastre al diseño de una alternativa convincente que pueda tener la legitimidad de criticar un sistema del que durante tanto tiempo se vieron beneficiados.³³ Por un lado, Kizza Besigye pasó de ser su médico personal a ser derrotado por Museveni en las tres últimas elecciones (2001, 2006 y 2011), mientras que la novedad la representa Amama Mbabazi, su antiguo primer ministro (2011-2014) y mano derecha en cuestiones de seguridad –ha dirigido el Ministerio de Defensa entre 2001 y 2006 y el Ministerio de Seguridad entre 2006 y 2011– que cayó en desgracia en 2014 por sus ambiciones presidenciales. Mbabazi ha sido una de las personalidades más influyentes en el partido gubernamental durante 28 años, e intentó previamente, sin éxito, que el NRM le eligiera como candidato en las primarias internas, pero en julio el NRM cerró filas en torno a Museveni. Tras esto, Mbabazi se unió a la principal coalición opositora, la Alianza Democrática (TDA, por sus siglas en inglés). La TDA se había creado en junio con el objetivo de llevar a cabo un Gobierno de Unidad Nacional y presentar una candidatura conjunta a las elecciones presidenciales. Aunque los principales partidos políticos parecían estar de acuerdo en presentar un solo candidato a las elecciones, a finales de septiembre las discusiones entre las ocho formaciones que componen la coalición de partidos opositores estallaron sin que se lograra acordar una candidatura conjunta, ya que todos pretendían liderar la coalición, aunque los dos principales líderes, Besigye y Mbabazi, podían en cualquier momento unir sus candidaturas. El 4 de noviembre se cerró el plazo para registrarse en la comisión electoral, lo que significó el inicio de la campaña electoral, confirmándose ocho candidaturas: las candidaturas de Museveni, Mbabazi y Besigye, así como las de otros cuatro candidatos y una candidata. A las dificultades para presentar una candidatura conjunta se le unió el clima de presión y los límites a la libertad de expresión en el país, ya que hubo numerosos casos de abusos y presiones sobre los medios de comunicación y activistas de la sociedad civil. Los cuerpos de seguridad bloquearon o dificultaron las movilizaciones y mítines públicos de ambos candidatos opositores, les sometieron a arrestos y otros abusos, lo que provocó numerosas confrontaciones entre los cuerpos de seguridad y los partidarios de ambos, en las que se hizo uso excesivo de la fuerza. Murieron varios simpatizantes de Mbabazi y Besigye durante el año, además de ocasionar decenas de heridos. También se produjeron confrontaciones

32. Véase el resumen sobre Sudán-Sudán del Sur en el capítulo 3 (Procesos de paz).

33. Jeune Afrique, “Présidentielle en Ouganda: qui pour défier Museveni?”, *Jeune Afrique*, 5 de noviembre de 2015.

entre partidarios de Museveni y de otros candidatos, como Mbabazi, como en diciembre, cuando resultaron heridas al menos 17 personas en Ntungamo. Besigye en octubre acusó de brutalidad a la Policía ugandesa, mientras que la Policía argumentó que se dedicaba exclusivamente a cumplir el mandato de la Comisión Electoral relativa a prevenir situaciones que pudieran derivar en altercados entre simpatizantes de diferentes partidos o amenazar la estabilidad. En octubre una mujer miembro del equipo de Besigye, responsable de las políticas de medio ambiente de la formación, fue desnudada en público y maltratada como parte de la política de la Policía en el país para desalentar a las mujeres a que se conviertan en activistas y se impliquen en política, según diferentes análisis. Por otra parte, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo registros en mezquitas y detenciones y juicios de decenas de personas de confesión musulmana sospechosas de tener vínculos con el grupo armado de origen ugandés ADF, que se encuentra en territorio congolés y mantiene una guerra abierta contra los cuerpos de seguridad congoleños.³⁴

Norte de África - Magreb

Marruecos – Sáhara Occidental	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ³⁵
Actores:	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO
Síntesis:	Las raíces del conflicto se encuentran en el fin del dominio colonial español en el Sáhara Occidental a mediados de los setenta. La distribución del territorio entre Marruecos y Mauritania, sin que se tuvieran en cuenta el derecho a la autodeterminación de los saharauis ni los compromisos sobre un referéndum de independencia en la zona, derivó en la anexión de gran parte del territorio por parte de Rabat y en el desplazamiento de miles de saharauis, que se refugiaron en Argelia. En 1976, el movimiento nacionalista Frente POLISARIO declaró un Gobierno en el exilio –la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)– y lanzó una campaña armada contra Marruecos. Las partes aceptaron un plan de paz en 1988 y desde 1991 la misión de la ONU en el Sáhara, MINURSO, supervisa el cese el fuego y se encarga de la organización de una consulta de autodeterminación en el territorio. En 2007, Marruecos presentó a la ONU un plan para la autonomía del Sáhara Occidental, pero el Frente POLISARIO reclama la celebración de un referéndum que incluya la opción de la independencia.

La tensión en torno al Sáhara Occidental evolucionó de manera similar a años anteriores, en un contexto de bloqueo de las negociaciones entre Marruecos y

el Frente POLISARIO. En su informe anual, en abril, y coincidiendo con el 40º aniversario del conflicto, el secretario general de la ONU subrayó que las partes debían comprometerse seriamente con una salida negociada que ponga fin al statu quo. En este sentido, la evaluación de la situación en terreno por parte de la ONU confirmó que si bien el alto el fuego se mantiene, **el clima general sigue caracterizándose por periódicas manifestaciones saharauis en el territorio controlado por Marruecos y por un deterioro en las condiciones de vida de la población saharauí que habita los campos de refugiados en Argelia**, a causa del desempleo, la reducción de remesas y la disminución de la ayuda internacional. Ban Ki-moon alertó, como en informes anteriores, sobre el riesgo de que la frustración ante la falta de perspectivas de solución al conflicto favorezca un aumento de la inestabilidad o la aproximación a redes extremistas y delictivas crecientemente activas en la zona del Sáhara-Sahel. Cabe destacar que el proceso diplomático liderado por la ONU se vio complicado por los reparos de Marruecos al anterior informe del secretario general (2014) y al enfoque adoptado en el proceso negociador, lo que derivó a principios de 2015 en una negativa de Rabat al despliegue de la nueva jefa de la MINURSO. Kim Bolduc solo pudo viajar a Al Aaiún tras una conversación entre el rey de Marruecos y Ban Ki-moon. Argelia y el Frente POLISARIO criticaron que, en este contexto, Rabat ejerciera presiones sobre la aproximación de la ONU a la cuestión saharauí. En los meses siguientes el enviado especial del secretario general para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, realizó tres viajes a la región –en febrero, septiembre y noviembre–, pero no se informó de avances ni de la posibilidad de retomar las negociaciones directas entre Marruecos y el Frente POLISARIO.³⁶ Según trascendió a finales de año, **Marruecos pretendía que Argelia se implicara formalmente en una negociación sobre la cuestión saharauí, pero el Gobierno de Argel no estaría dispuesto a “bilateralizar” la disputa.**

Cabe mencionar también que a lo largo de 2015 volvieron a surgir informaciones relativas a las políticas marroquíes en el Sáhara Occidental relativas a asuntos de derechos humanos y a la gestión de los recursos del territorio, entre otros temas. En mayo, Amnistía Internacional presentó un informe en el que denunció 173 casos de tortura en Marruecos y el Sáhara Occidental, incluyendo palizas, simulacros de ahogamiento y uso de la violencia psicológica y sexual, en acciones tendientes a acallar a la disidencia y que no son investigadas con diligencia por el sistema judicial. El informe, fruto de una investigación desarrollada en 2013 y 2014, incluye testimonios de personas detenidas durante manifestaciones en El Aaiún. En lo relativo a los recursos, en diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE emitió un dictamen que anula el acuerdo comercial de

34. Véase el resumen sobre RDC (este-ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

35. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

36. Véase el resumen sobre el Sáhara Occidental en el capítulo 3 (Procesos de paz).

la UE y Marruecos de 2012 por la inclusión del territorio del Sáhara Occidental. Previamente, en una visita a El Aaiún con motivo del 40º aniversario de la Marcha Verde –en su tercer viaje a la zona desde que accedió al trono en 1999–, el rey Mohamed VI había subrayado que las ganancias obtenidas por los recursos minerales de la zona se invertirían localmente y que se harían grandes inversiones en infraestructuras en la región, e insistió en que no habría concesiones en materia de soberanía.

Túnez	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Okba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS).

Síntesis:

Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por solo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de una mayor actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS.

La situación en Túnez registró un deterioro durante 2015, principalmente como consecuencia de una serie de ataques perpetrados por grupos armados de línea yihadista en distintos momentos del año y también, en parte, por un incremento de las tensiones a nivel político.

El balance total de personas fallecidas en los distintos hechos de violencia ocurridos en el país durante el período ascendió a más de 120, según recuentos no oficiales a partir de informaciones de prensa. Los tres ataques más desestabilizadores, que en total se cobraron 72 vidas, tuvieron lugar en marzo, junio y noviembre y fueron reivindicados por ISIS. El primer atentado transcurrió en la capital y afectó a la zona del Museo del Bardo, vecino al edificio del Parlamento donde se

El grupo armado ISIS reivindicó tres ataques en Túnez a lo largo de 2015 que causaron más de 70 víctimas mortales

discutía una reforma a la ley antiterrorista. La ofensiva, perpetrada por tres hombres armados, causó la muerte a 23 personas –entre ellas dos de los atacantes–, en su mayoría turistas extranjeros. El segundo ataque afectó a un complejo turístico ubicado en la localidad costera de Soussa a finales del primer semestre y dejó 39 personas fallecidas. La acción fue llevada a cabo por un joven que tiroteó a decenas de personas en la playa y los alrededores del hotel y su principal objetivo fueron ciudadanos extranjeros. Según se informó, tanto el atacante de Soussa como los del Museo del Bardo habían pasado por un campo de entrenamiento yihadista en la vecina Libia. El tercer atentado sacudió al país hacia finales de año y tuvo como objetivo un autobús de la guardia presidencial en la capital tunecina. El atacante hizo detonar su carga explosiva con un saldo de 12 personas fallecidas. Adicionalmente, a lo largo del año se produjeron periódicos hechos de violencia que dejaron otras decenas de víctimas mortales y heridas y que estuvieron vinculados a operaciones de las fuerzas de seguridad contra presuntas células insurgentes o a acciones de militantes de distintos grupos armados, entre ellos el denominado Batallón Uqba bin Nafi (o Brigadas Okba Ibn Nafaa), considerado filial de AQMI en Túnez, o Jund al-Khilafa, declarada filial de ISIS en el país. Algunos de estos incidentes se produjeron en zonas como Monte Chaambi o Bouchebka (fronterizas con Argelia), en Sbeitia (noroeste) o Jebel Semmama (centro). Entre ellos cabe destacar los enfrentamientos que causaron la muerte a dos militares y diez combatientes en la zona de Kasserine (centro) en abril.

Tras el ataque en el Museo del Bardo, las autoridades tunecinas adoptaron una serie de medidas para intentar responder a las amenazas de seguridad. En julio se declaró el estado de emergencia, que otorga prerrogativas a las autoridades para prohibir actos públicos e imponer mayores controles. La medida se extendió hasta principios de octubre, semanas antes del ataque a la guardia presidencial, tras el cual fue reinstaurado. A finales de diciembre de 2015 fue renovado por otros dos meses. Además, el Gobierno puso en marcha otras medidas que causaron polémica, como una nueva ley antiterrorista, la reinstauración de la pena de muerte –después de una moratoria de facto de 25 años–, o la clausura de mezquitas que operaban fuera del control estatal. Sectores críticos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos denunciaron que muchas de estas y otras disposiciones –como la posibilidad de que sospechosos sean detenidos durante 15 días sin asistencia legal o una definición vaga de “terrorismo”– podían ser utilizadas para restringir libertades, favorecer situaciones de impunidad o perseguir a la disidencia. Después de cada uno de los grandes ataques ocurridos en 2015 el Gobierno destituyó a diversos

altos cargos –tras el ataque de Soussa las autoridades reconocieron fallos de seguridad y una respuesta tardía– e intensificaron su campaña de detenciones masivas. **A lo largo del año se llevaron a cabo arrestos de miles de personas sospechosas de vínculos con actividades insurgentes, en medio de la preocupación por las dinámicas de radicalización y por el retorno de algunos de los numerosos tunecinos que en los últimos años han estado combatiendo en las filas de ISIS en Iraq y Siria** (Túnez es el principal país de procedencia de los combatientes extranjeros que integran ISIS). Paralelamente, el Gobierno tunecino también intentó reforzar los controles fronterizos, en especial las zonas limítrofes con Libia, dada la acusada inestabilidad en el vecino país. En este contexto, Túnez anunció la construcción de una barrera en la frontera con Libia, movilizó varias unidades militares terrestres a la frontera sur e incautó arsenales con armas de diverso calibre.

Los ataques en Túnez fueron valorados como un intento de desestabilizar a un país que, pese a enfrentar múltiples dificultades, se ha erigido como un referente por su capacidad de avanzar en la senda democrática tras las revueltas que sacudieron al mundo árabe a partir de 2011. Sin embargo, en este camino Túnez también enfrentó numerosos problemas en 2015. A principios de año el nuevo Gobierno de coalición, integrado por diversas fuerzas políticas –entre ellas el partido Nidaa Tounes, del presidente Beji Caid Essebsi, y los islamistas de Ennahda–, asumió el poder tras sortear algunos disensos. Pero a lo largo del año se evidenciaron dificultades por la incapacidad de mejorar la situación económica, un creciente clima de descontento social –que motivó protestas, que en algunos casos derivaron en choques con la Policía en el sur del país–, informaciones sobre intentos de asesinatos políticos y duras fricciones en el seno de Nidaa Tounes, incluyendo amenazas de legisladores de que abandonarían la formación acabando con su mayoría parlamentaria y dejando a Ennahda como primera fuerza en el Legislativo.³⁷ El pulso en Nidaa Tounes estuvo liderado por el hijo del mandatario, Hafedh Caid Essebsi –acusado por sus detractores de maniobrar para escalar posiciones y suceder a su padre y de orquestar la agresión a unos diputados–, y por el secretario general, Mohsen Marzouk, quien acabó renunciando al partido a mediados de diciembre. Ennahda también padeció divisiones internas. A finales de año, el ex presidente Moncef Marzouki consideró que la situación del país era catastrófica y anunció la creación de un nuevo partido político, Al Irada (La Voluntad). **Esta deriva del país ensombreció en parte el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz otorgado al Cuarteto de Diálogo Nacional** –integrado por la Unión General de Trabajadores de Túnez, la Confederación de Comercio e Industria, la Liga Tunecina de Derechos Humanos y la Orden de Abogados de Túnez– por el papel que desempeñó para evitar que la transición tunecina descarrilara en 2013.

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

Haití	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, MINUSTAH, ex militares

Síntesis:

Tras la salida del país del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país, fueron desplegadas consecutivamente una Fuerza Multinacional Provisional y una misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH) para auxiliar al Gobierno provisional a restablecer el orden y la seguridad. Aunque se han registrado avances hacia una mayor estabilidad política, social y económica, todavía persisten varios problemas, como las acusaciones de violaciones de derechos humanos contra la MINUSTAH, las altas tasas de delincuencia, el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas, las exigencias de grupos de antiguos militares para reinstaurar las Fuerzas Armadas o los altos niveles de corrupción, pobreza y exclusión social.

El año comenzó con importantes movilizaciones antigubernamentales debido a la crisis política desatada a finales de 2014, aunque progresivamente la situación se fue estabilizando con la nominación de un nuevo primer ministro y la conformación de un nuevo Gobierno, un nuevo Consejo Electoral Provisional y un calendario electoral para la celebración de comicios legislativos, presidenciales y locales, uno de los factores clave en la crisis sociopolítica que ha atravesado Haití en los últimos años. 2015 se inició con la expiración del mandato y posterior disolución del Parlamento después de que la prolongada disputa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo hubiera impedido aprobar la ley electoral necesaria para celebrar comicios. Ante esta situación, tal y como estipula la Constitución, el presidente, Michel Martelly, empezó a gobernar por decreto y el nuevo primer ministro, Evans Paul, pudo ser confirmado en el cargo automáticamente sin ser ratificado por ambas cámaras del Parlamento. Poco antes de la disolución del Parlamento, producida el 13 de enero de 2015, Martelly había anunciado un acuerdo con la oposición para celebrar los comicios antes de finalizar el 2015 y, a la vez, conformar un Gobierno de coalición a finales de enero, el cual estableció un Consejo Electoral Provisional (CEP) cuyo principal cometido sería la organización de los comicios. A mediados de marzo el CEP dio a conocer el calendario electoral: elecciones legislativas el 9 de agosto; elecciones presidenciales el 25 de octubre; y elecciones locales (y segunda ronda de elecciones

37. Esta situación, de hecho, se produjo a principios de 2016 y Nidaa Tounes perdió su condición de partido mayoritario en el Parlamento tunecino.

presidenciales y legislativas) el 27 de diciembre. La Organización de los Estados Americanos (OEA) mostró su disposición a desplegar una misión de observación electoral en el país. El 9 de agosto Haití celebró la primera vuelta de las elecciones parlamentarias para elegir dos tercios de los 30 escaños del Senado, así como la totalidad de escaños del Congreso. En los comicios estaban llamados a las urnas un total 5,8 millones de electores para elegir entre más de 1.800 candidatos de 128 partidos. Participaron un 18% de los electores. La OEA, que había enviado a 28 observadores electorales, informó que si bien se produjeron algunos problemas y hechos violentos, estos no fueron lo suficientemente graves como para deslegitimar el proceso, dándolo por válido. En cuanto a los incidentes registrados durante la jornada electoral, Pierre-Louis Opont, director del CEP, dio cuenta de 54 centros de votación (5% del total) que tuvieron que ser cerrados durante la jornada electoral por cuestiones de seguridad. Debido a irregularidades masivas detectadas en 25 colegios electorales, el CEP optó por repetir la votación en estos colegios, que se realizó el 25 de octubre coincidiendo con la segunda vuelta electoral, con las elecciones locales y la primera ronda de las presidenciales. Ese día, el país celebró los tres comicios en un clima de tranquilidad y con una mayor participación popular. El CEP recibió 162 quejas que llevaron al organismo a retrasar la publicación de los resultados en un clima marcado por las numerosas protestas ciudadanas que exigían una evaluación independiente. El CEP publicó el 24 de noviembre los resultados finales de la elección presidencial –a la cual el actual presidente Martelly no podía volver a postularse– y donde el candidato del partido de Gobierno, Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), Jovenel Moise, obtuvo el 32,76% de los votos y Jude Celestin, de la Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación Haitiana (Lapeh), logró un 25,29%. Ambos debían enfrentarse en la segunda vuelta presidencial, prevista inicialmente para el 27 de diciembre. Sin embargo, las acusaciones de fraude masivo presentadas por la oposición, a las que se sumó la renuncia de Jude Celestin a concurrir a la segunda vuelta, desataron una fuerte crisis política en el país que obligó al Gobierno a aplazar en dos ocasiones la fecha de la segunda vuelta, hasta el 24 de enero, así como a nombrar una Comisión de Evaluación Electoral Independiente (CEEI) –en sustitución del cuestionado CEP– para buscar una salida a la crisis electoral. El 7 de febrero de 2016 es la fecha marcada en el calendario haitiano, en la cual el país debería contar con un nuevo presidente, con los 119 legisladores y con las 140 autoridades municipales encargadas de manejar el nuevo rumbo.

En otro orden de cosas, la misión de la MINUSTAH, cuya presencia de tropas en el país se había previsto reducir considerablemente, retirándose de seis de las

Las acusaciones de fraude masivo en Haití en la primera vuelta de las elecciones presidenciales desataron una crisis política en el país y obligaron a retrasar la segunda vuelta

diez regiones del país y reduciéndose aproximadamente a la mitad el número de efectivos de cara al verano, finalmente acordó mantener una presencia importante debido a la persistencia de la tensión al ser un año electoral, pero anunció la reducción de su presupuesto en un 22%. Durante el segundo trimestre del año, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU hizo público un informe en el que se constataba que el organismo había recibido 480 denuncias de explotación y abusos sexuales por parte de personal integrante de las misiones de mantenimiento de paz, entre 2008 y 2013, donde la mayoría de los casos reportados provenían de Haití, Liberia, República Democrática del Congo y Sudán del Sur³⁸.

En Haití los informes del último año recogen 231 casos de personas que han denunciado haber sido forzadas a mantener relaciones sexuales con miembros de la misión MINUSTAH a cambio de material de ayuda. Esta situación, que fue condenada por el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, aumentó las críticas y las desafecciones de la población haitiana hacia la misión.

México	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, estudiantes) y grupos armados de oposición (EZLN, EPR, ERPI, FAR-LP)

Síntesis:

El régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México durante más de 70 años (1929-2000) consolidando un Estado basado en la corrupción, la impunidad y la represión hacia los movimientos opositores. El 1 de enero de 1994 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá, que simbolizaba el éxito de las políticas neoliberales impulsadas bajo el Gobierno presidido por Carlos Salinas de Gortari. Ese mismo día, desde el sureño estado de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se dio a conocer como movimiento social y armado denunciando la pobreza y exclusión del Estado mexicano hacia a los pueblos indígenas. Tras 12 días de combates, se iniciaron conversaciones de paz bajo mediación del obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, que concluyeron con la firma de los Acuerdos de San Andrés el 16 de febrero de 1996. El acuerdo de paz quedó sin embargo en papel mojado y desde ese momento se ha mantenido un conflicto de baja intensidad en la zona contra las comunidades zapatistas en resistencia. Posteriormente otros movimientos insurgentes surgieron en los estados vecinos de Guerrero y Oaxaca, entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. A la par, la situación de tensión política y social en México también ha estado acompañada por luchas y movilizaciones

38. Office of Internal Oversight Services, *Evaluation of enforcement and remedial assistance efforts for sexual exploitation and abuse by the United Nations and related personnel in Peacekeeping Operations*, 15 de mayo de 2015.

de diferentes sectores, como organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, sindicatos de maestros y maestras, trabajadores del sector eléctrico, entre otros. En el año 2000 el PRI perdió el poder a manos del Partido de Acción Nacional (PAN), quien en el 2006, y bajo la presidencia de Felipe Calderón, declara la guerra al narcotráfico, iniciándose un conflicto cuya violencia ha salpicado a toda la sociedad. Durante el Gobierno posterior de Enrique Peña Nieto (PRI), quien logró la presidencia en el año 2012, las denuncias de violaciones de derechos humanos—ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o torturas— han sido recurrentes en el marco de las acciones de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado que sacude el país.

El año estuvo marcado por las movilizaciones sociales motivadas por el primer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en Iguala, estado de Guerrero, el 27 de septiembre de 2014, donde también fueron asesinadas seis personas y más de 20 resultaron heridas. Ante la falta de avances en la investigación y la presión de organismos de derechos humanos y familiares de los desaparecidos, el Gobierno mexicano presidido por Enrique Peña Nieto, dio el visto bueno a la realización de una investigación independiente sobre el caso. Un equipo conformado por cinco expertos internacionales, denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para desarrollar una nueva investigación sobre lo acontecido con los estudiantes. Después de seis meses de investigación, el GIEI presentó el informe sobre el caso Ayotzinapa el 6 de septiembre, concluyendo que la versión oficial sobre la desaparición de los estudiantes mexicanos no era correcta, invalidando la tesis defendida por la Fiscalía mexicana (Procuraduría General de la República [PGR]) que sostenía que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula a una gran temperatura y que por ello no se podían encontrar los cuerpos.³⁹ Asimismo, el grupo de especialistas demostró que en diferentes momentos del operativo estuvieron presentes distintos cuerpos policiales (municipales de Iguala y Cocula, ministeriales, federales) así como soldados y agentes de inteligencia militar, involucrando al Ejército mexicano en los hechos. El GIEI instó a las autoridades de México a replantear la investigación y reorientar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos en base a los nuevos hallazgos. A finalizar el año, aún no se tenían resultados sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. La directora de Amnistía Internacional para las Américas valoró al respecto el caso Ayotzinapa como una de las más graves tragedias de derechos humanos de la historia reciente de México, a la par que denunció la magnitud de la crisis de las **desapariciones forzadas en el país**, a raíz del descubrimiento de diferentes

En los últimos ocho años se han contabilizado más de 26.000 casos de desapariciones forzadas en México, según datos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro

fosas comunes encontradas durante la búsqueda de los 43 estudiantes. La PGR cifró al respecto en 60 el número de fosas halladas desde octubre de 2014, con los restos de al menos 129 personas en el sur del estado de Guerrero. **El reconocido Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro señaló que en los pasados ocho años han contabilizado más de 26.000 casos de desapariciones forzadas en el país**, casi la mitad durante la actual administración del presidente Peña Nieto, iniciada en diciembre de 2012. La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), corroboró las cifras estableciendo una horquilla de desaparecidos que oscila entre los 22.000 y 25.500 personas según datos proporcionados por el Registro Nacional de Desaparecidos.⁴⁰ Al respecto, el 6 de agosto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó de la orden dada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para buscar y entregar información estadística sobre las desapariciones forzadas registradas en el país desde 1960 hasta febrero de 2015. El Gobierno mexicano reconoció ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas que el país no cuenta con un registro exclusivo de desapariciones forzadas, sin

embargo, informó que durante la presente legislatura se prevé aprobar la Ley General de Desapariciones Forzadas para dar cumplimiento a la reforma constitucional al artículo 73, aprobada por el Congreso en septiembre de 2013.

Las violaciones a los derechos humanos y el clima de impunidad que se vive en el país se volvieron a poner de manifiesto con el asesinato el 31 de julio en la capital mexicana, del reportero gráfico Rubén Espinosa, colaborador de la agencia de noticias Cuartoscuro y la revista Proceso, así como de cuatro mujeres que se encontraban con él, entre ellas, Nadia Vera, activista estudiantil y defensora de los derechos humanos. El fotógrafo había recibido amenazas de muerte debido a su trabajo periodístico en el estado de Veracruz, lo que le llevó a huir a la Ciudad de México a comienzos de junio. Según las estadísticas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Veracruz es el estado con mayor cantidad de periodistas asesinados (11) y desaparecidos, junto con Chihuahua, según datos del grupo internacional de protección de periodistas Article 19. El múltiple asesinato conllevó una gran indignación en el país volviendo a poner en entredicho a México como garante de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el defensor del pueblo mexicano condenaron el múltiple homicidio e hicieron un llamado al Gobierno mexicano para fortalecer los mecanismos de protección a comunicadores.

39. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, *Informe Ayotzinapa*, septiembre de 2015.

40. Human Right Watch, *World report 2016. Mexico: events 2015*, pp. 400-407.

América del Sur

Bolivia	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los departamentos orientales, colectivos indígenas)

Síntesis:

A finales de 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se exilió en EEUU después de que la represión de varias protestas antigubernamentales provocara, en los meses de febrero y octubre, más de 100 muertes. Tras un periodo de incertidumbre en el que dos presidentes asumieron el poder de forma interina, Evo Morales ganó las elecciones en diciembre de 2005, convirtiéndose en el primer mandatario indígena del país. Sin embargo, su acción de Gobierno, especialmente la reforma agraria, la nacionalización de los hidrocarburos o la aprobación de una nueva Constitución, se vio obstaculizada por la férrea oposición por parte de varios partidos políticos y de las regiones orientales del país que, lideradas por el departamento de Santa Cruz, exigen mayor autonomía. En paralelo a la lucha política entre el Gobierno y la oposición, en los últimos años Bolivia ha enfrentado uno de los mayores índices de conflictividad social de todo el continente, con movilizaciones de distinto signo vinculadas a demandas laborales sectoriales, a la actividad de las empresas extractivas o a los derechos de los pueblos indígenas.

La decisión del partido del Gobierno de modificar la Constitución para permitir la reelección de Evo Morales, los conflictos mineros y las disputas bilaterales entre Bolivia y Chile por la situación de sus fronteras y el acceso al mar, marcaron las tensiones políticas producidas en el país andino durante el año. El partido del Gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), anunció su **intención de modificar la Constitución para posibilitar la reelección de Evo Morales en las próximas elecciones previstas para 2019**, lo que supondría un cuarto mandato después de su elección en 2005, 2009 y 2014. El anuncio produjo fuertes críticas desde la oposición, aumentando las tensiones existentes en el país. El 26 de septiembre, el Parlamento nacional, controlado por el partido de Gobierno, aprobó definitivamente la ley de reforma del artículo 168 de la Constitución, con el objeto de permitir la posibilidad de dos reelecciones consecutivas, en lugar de una que marca actualmente. El texto sería revisado por el Tribunal Constitucional antes de someterse a referéndum, previsto para el 21 de febrero de 2016.

Paralelamente al debate político sobre la reforma constitucional, y en lo relativo a los diferentes conflictos mineros que sacuden el país, **la presentación de una nueva ley sobre minería, debatida en marzo, y posteriormente revisada y aprobada en junio, desató diferentes conflictos violentos en el país.** Las movilizaciones

más fuertes se produjeron el 31 de marzo, cuando se bloquearon las principales carreteras del país, dando pie a diferentes enfrentamientos que se saldaron con un balance de 30 detenciones, 43 policías tomados como rehenes, 85 mineros y 20 policías heridos y dos mineros muertos. A su vez, las protestas conllevaron la caída del ministro de Minería. Posteriormente, el Gobierno de Morales se enfrentó a **una huelga minera de 27 días, del 6 de julio al 2 de agosto, en la ciudad minera de Potosí.** Los huelguistas demandaban al Gobierno apoyo a la región ante la caída de los precios de los minerales, así como el cumplimiento de las promesas gubernamentales de construcción de infraestructuras y equipamientos públicos. Tras 21 días de huelga, el 27 de julio el Gobierno de Bolivia inició conversaciones con los líderes regionales, aunque tres días después las conversaciones se rompieron al no aceptar el Gobierno algunas demandas. Finalmente, el 2 de agosto los huelguistas suspendieron definitivamente la protesta que había paralizado por completo la ciudad de Potosí y avisaron al Ejecutivo de Morales de que el conflicto seguía sin resolverse. En otro orden de asuntos, durante el año aumentó la tensión territorial entre Bolivia y Chile debido a la histórica **disputa fronteriza entre ambos países, por las reclamaciones bolivianas sobre el acceso al mar**—debido en parte a los efectos de una huelga de ocho días en el servicio de aduanas de Chile, que tuvo su impacto en la economía boliviana—. La disputa, que había sido presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el 2013, estaba a la espera del pronunciamiento del tribunal, que finalmente se declaró competente para dirimir el asunto entre ambos Estados, en una resolución adoptada el 24 de septiembre, con 14 votos a favor y dos en contra.

Perú	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)

Síntesis:

En 1980, precisamente el año en que el país recuperaba la democracia, se inició un conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso que se prolongó durante dos décadas y que costó la vida a más de 60.000 personas. Al amparo de la política contrainsurgente, en los años noventa el Estado sufrió una deriva autoritaria de la mano de Alberto Fujimori, que en el año 2000 se exilió en Japón tras ser depuesto por el Congreso y acusado de numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde el año 2008 las acciones de facciones remanentes de Sendero Luminoso se han incrementado significativamente en las regiones del Alto Huallaga y, especialmente, del Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Gobierno, que vincula a Sendero Luminoso con el narcotráfico, ha intensificado notablemente sus operaciones militares en ambas regiones, se ha negado

a mantener ningún tipo de diálogo con la organización y ha intensificado la lucha política y legal contra su brazo político, Movadef. Por otra parte, varios colectivos, especialmente los pueblos indígenas, han mantenido movilizaciones periódicas para protestar contra la política económica de los sucesivos gobiernos y contra la actividad de empresas extractivas.

Durante el año no se registraron incidentes de violencia significativos entre las Fuerzas Armadas y las facciones remanentes de Sendero Luminoso (SL), aunque sí se produjeron algunas acciones militares contra la guerrilla que debilitaron aún más a la organización armada. Paralelamente, persistieron las protestas contra las actividades de las empresas extractivas, generando diferentes episodios de violencia en varias regiones del país. Entre las acciones enmarcadas en el conflicto que el Estado peruano mantiene como la guerrilla maoísta SL, durante el primer semestre del año se llevaron a cabo algunas detenciones de presuntos miembros de la organización senderista, destacando la captura de uno de los presuntos cabecillas de la organización, apodado “Edwin”, acusado de ser el autor de la muerte de la capitana Nancy Flores Páucar, producida en abril del 2013. El Gobierno de Perú anunció la desarticulación de la columna del grupo armado en el sur de la zona de La Convención en la región Cuzco, con la captura el 10 de agosto de sus dos principales mandos operativos en el VRAEM – Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro–, Alexander Alarcón Soto, “camarada Renán”, y Dionisio Ramos, “camarada Yuri”, en lo que significó el golpe más importante a la organización armada en el año. En otra operación militar contra otra columna de SL en el VRAEM, el 4 de septiembre medios locales informaron que perdieron la vida cinco guerrilleros, entre ellos el supuesto número cuatro del Comité Central, “Camarada Antonio”.

Informaciones oficiales señalaron que Sendero aún contaba con unos 60 combatientes en una zona del VRAEM entre el norte del Cuzco y la selva central del país, comandados por los hermanos José y Raúl Quispe Palomino, que según las autoridades peruanas representan la última columna activa del grupo. Estos supuestos dirigentes de la organización, conjuntamente con Florindo Eleutorio Flores, alias “Artemio”, fueron incluidos en el mes de junio por el Departamento del Tesoro de EEUU, en la llamada lista Kingpin (considerada como la lista negra de las organizaciones y narcotraficantes internacionales), donde también se incluyó a SL como una organización criminal narcoterrorista. En reacción a esta acción, Alfredo Crespo, abogado defensor de la organización armada y de su líder, Abimael Guzmán, rechazó el calificativo de narcoterrorista, y aseguró que estos líderes no forman parte de la organización, sino de una facción disidente que opera en el VRAEM, opuesta a Guzmán. Por otro lado, el 28 de julio la Policía y las Fuerzas Armadas peruanas informaron del rescate de 39 personas, 26 niños y 13 mujeres, que supuestamente se encontraban secuestradas por el grupo en la zona del VRAEM, según informó el viceministro peruano de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa (Mindef), Iván Vega, quien además reportó que la orga-

nización armada mantenía todavía cautivas entre 170 y 200 personas, de las que se estima que entre 70 y 80 son menores.

En lo referente a las protestas contra las actividades de las empresas extractivas, a inicios de año la empresa estadounidense-mexicana Southern Copper Corporation informó de la cancelación de un proyecto de extracción de cobre en el sur del país, debido a la oposición de buena parte de la población local y a los enfrentamientos generados entre la Policía y decenas de manifestantes en la localidad de Pichanaki (provincia de Junín) contra las prospecciones en la región realizadas por la empresa argentina Pluspetrol, en los que una persona murió y otras 40 resultaron heridas por disparos. Posteriormente el ministro del Interior fue cesado en el cargo después de haber negado que la Policía utilizara armas de fuego para sofocar la protesta. A principios de abril, pobladores del sector El Triunfo, en el distrito de la Joya, realizaron un bloqueo de la carretera Panamericana Sur, en solidaridad con los agricultores del Valle de Tambo, provincia de Islay, opuestos al proyecto minero Tía María de la Southern Copper Corporation. El bloqueo se saldó con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad peruanas, donde hubo al menos un herido. Paralelamente **se incrementaron la tensión y las protestas en Arequipa, provincia de Islay, con un saldo de tres personas fallecidas y más de doscientos heridos, lo que llevó al Gobierno de Ollanta Humala a decretar el 15 de mayo el estado de emergencia en la zona, suspendiendo durante 60 días el derecho de movilización, transporte y reunión.** La población de la región respondió insistiendo en que no cesarán las movilizaciones hasta que no se cancele definitivamente el proyecto minero Tía María. El Gobierno levantó el estado de emergencia el 22 de julio, sin embargo, tuvo que prorrogar hasta el 20 de septiembre la intervención de las Fuerzas Armadas, manteniendo la tensión en la zona.

En otro conflicto minero, el 12 de agosto el Gobierno autorizó a los militares a intervenir en la provincia de Yauli, región andina de Junín, donde cientos de trabajadores del paralizado complejo metalúrgico de Doe Run habían bloqueado la principal carretera del centro del país, produciéndose enfrentamientos entre la Policía y trabajadores mineros que se saldaron con un muerto y más de 50 heridos. Por otro lado, a finales de septiembre se produjeron nuevos enfrentamientos en la región sureña de Apurímac, donde pobladores realizaron un paro de protesta en las provincias de Cotabambas y Grau contra el proyecto minero Las Bambas, dejando un saldo de cuatro muertos y la declaración de estado de excepción por parte de las autoridades. El Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas justificó las protestas debido a que la empresa minera chino-australiana MMG modificó el estudio de impacto ambiental por lo que temen que sus tierras sean afectadas. El proyecto Las Bambas podría convertirse en una de las minas de cobre más grandes del mundo en producción plena, con reservas estimadas de 6,9 millones de toneladas de cobre y 10,5 millones de toneladas de recursos minerales,

por lo que el Gobierno peruano ha asegurado que no tendrá el proyecto y que estará operativo el próximo año.

Venezuela	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Tras la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 se produjeron numerosas movilizaciones y enfrentamientos entre partidarios y detractores del Gobierno y de la llamada Revolución Bolivariana, especialmente durante periodos electorales y durante el intento golpe de Estado del año 2002. Sin embargo, la actual crisis política y social que atraviesa el país se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 por cáncer. Tras hacer pública su enfermedad en 2011, Chávez tuvo que abandonar sus funciones en varias ocasiones para recibir tratamiento médico, provocando según algunos analistas un claro debilitamiento del Gobierno. A pesar de ello, Chávez ganó las elecciones presidenciales de 2012. Tras la muerte de Chávez, la oposición calificó de fraude constitucional la toma de posesión del cargo del hasta entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, por considerar que el puesto correspondía al presidente del Parlamento. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios Gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. Tras la validación de resultados por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la oposición impugnó las elecciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante la segunda mitad del 2013 se produjeron numerosas movilizaciones de partidarios y detractores del Gobierno y se produjeron varios episodios de violencia. La dinámica de polarización social continuó a principios de 2014 y la violencia se incrementó tras unas protestas estudiantiles iniciadas en el mes de febrero.

Las elecciones legislativas celebradas en diciembre de 2015 pusieron fin a un año marcado por las tensiones entre el Gobierno y la oposición, abriendo un nuevo escenario político en el país tras la aplastante victoria opositora que pasó a controlar el Parlamento⁴¹. El año se inició con nuevas protestas ciudadanas debido a la conmemoración del primer aniversario de las movilizaciones masivas del 2014, en las cuales, y según datos facilitados por la fiscal general a mediados de febrero, murieron 43 personas (33 de ellas civiles), 878 personas resultaron heridas (600 de ellas civiles) y 3.351 fueron detenidas. Tras el anuncio de la Fiscalía, el 19 de febrero se procedió a **la detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteli-**

La oposición se impuso en las elecciones legislativas en Venezuela con una amplia mayoría

gencia del alcalde de Caracas y líder opositor, Antonio Ledezma, lo que provocó la condena de varios Gobiernos, la OEA y organizaciones de derechos humanos, así como nuevas movilizaciones de la oposición. La detención del líder opositor generó importantes tensiones diplomáticas del Gobierno de Nicolás Maduro con diferentes países, donde destacaron especialmente los enfrentamientos con EEUU y España. El ex presidente español Felipe González, que participó en la defensa de los líderes opositores encarcelados, Leopoldo López y Antonio Ledezma, se desplazó al país el 7 de junio, reuniéndose con los miembros del opositor grupo Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con el fin de analizar la situación política de Venezuela con vistas a las futuras elecciones del 2015. Los ex presidentes de Colombia, Andrés Pastrana y de Bolivia, Jorge Quiroga, también se desplazaron a Venezuela el 28 de mayo para brindar apoyo a los opositores presos, así como para demandar la fijación de la fecha de los comicios parlamentarios y el cese de la censura, pero su solicitud de entrevistarse con los detenidos fue negada por parte de las autoridades venezolanas.

Al calor de esta situación, a principios de marzo el presidente estadounidense, Barack Obama, aprobó una declaración de “emergencia nacional” y sanciones contra siete altos cargos de seguridad y justicia del Ejecutivo venezolano por considerar que la situación de los derechos humanos, la intimidación contra la oposición y la corrupción en Venezuela suponen una amenaza a la seguridad nacional y política exterior estadounidense. El Gobierno venezolano criticó duramente la medida por considerar que violaba el derecho internacional, los principios de la Carta de Naciones Unidas y la Constitución venezolana y por estimar que podría anteceder una invasión militar o bien el establecimiento de un bloqueo económico. Caracas llamó a consultas a su más alto representante en Washington, realizó ejercicios militares y elevó el caso a la OEA. Organizaciones como UNASUR y ALBA aprobaron declaraciones en las que demandaron a EEUU que retirase la orden ejecutiva de Obama por considerar que suponía una amenaza a la soberanía y una intervención en los asuntos internos. La OEA por su parte, no aprobó ninguna resolución de apoyo a Venezuela. Este escenario marcó la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá del 8 al 11 de abril. En medio de las demandas internas y las presiones externas que exigían la convocatoria de elecciones legislativas, en junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció **la fecha para las elecciones parlamentarias, fijándola para el 6 de diciembre**. Un día después del anuncio realizado por la CNE, el dirigente opositor encarcelado, Leopoldo López, puso fin a la huelga de hambre que había iniciado un mes atrás, ya que ésta era una

41. Véase “Venezuela, nuevo escenario político marcado por la polarización de poderes” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2016)

de sus exigencias al comenzar la protesta. El ex alcalde venezolano de San Cristóbal, Daniel Ceballos, ya había levantado la huelga de hambre previamente el 14 de junio. En relación a estos hechos, el 11 de septiembre, el Tribunal de Justicia hizo pública la sentencia a Leopoldo López, quien fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión. El líder del opositor partido Voluntad Popular había sido acusado, entre otros cargos, de instigación política y responsabilidad en la muerte de tres personas sucedidas en la manifestación antichavista del 12 de febrero de 2014. La sentencia fue criticada por la oposición venezolana, que convocó manifestaciones de rechazo, así como por diferentes organismos internacionales. **El 6 de diciembre el país celebró las elecciones legislativas, las cuales dieron una amplia victoria a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), logrando 112 de los 167 diputados que componen la Asamblea Nacional (AN), frente a los 55 escaños conseguidos por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).** Según los datos facilitados por el CNE, el MUD obtuvo el 67,07% de los votos (7.707.422), mientras que el PSUV logró el 32,93% de respaldo popular (5.599.025), en unas elecciones que contaron con una participación del 74,25% del censo. Los resultados electorales dieron a la oposición la mayoría calificada de 2/3 partes de la Cámara, lo que le otorga un control absoluto de la misma, hecho que no ocurría desde hace 15 años. El Gobierno de Maduro reconoció la derrota, pero reaccionó aprovechando las últimas semanas de control parlamentario para tratar de blindar su poder, anunciando el nombramiento de 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como la designación de la jueza que condenó al opositor Leopoldo López, Susana Barreiros, como defensora pública general de Venezuela. A su vez, el Ejecutivo impugnó la elección de nueve diputados electos de la oposición, de los cuales, el Tribunal Supremo suspendió a tres diputados del MUD y a uno del PSUV, lo cual quitó provisionalmente a la oposición la mayoría calificada en la AN que debería de empezar a funcionar el 5 de enero. El Gobierno puso en marcha lo que ha llamado el Parlamento Nacional Comunal, como un cuerpo legislativo paralelo para tratar de contrarrestar la pérdida del poder Legislativo, hecho que fue condenado y no reconocido por la oposición.

En otro orden de aspectos, el 2015 también estuvo marcado por diferentes escenarios de tensión provocados por episodios de crisis fronterizas. Por un lado, en agosto se desató una **crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia**, que hizo que el Gobierno de Maduro decretase el cierre de la frontera entre ambos países el día 19, bajo alegaciones venezolanas de ataques paramilitares y por el control del contrabando proveniente de Colombia. Por otro lado, durante el año también se mantuvieron las **tensiones entre los Gobiernos venezolano y el Gobierno de Guyana por el conflicto limítrofe por el área de Esequibo** (Guyana).

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

Kirguistán	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán

Síntesis:

Desde su emergencia como Estado independiente en agosto de 1991, la ex república soviética de Kirguistán ha atravesado diversos periodos de inestabilidad y conflicto sociopolítico. La etapa presidencial de Askar Akayev (1991-2005), que comenzó con un impulso reformador, derivó progresivamente en autoritarismo y corrupción. En marzo de 2005, una serie de manifestaciones que denunciaban fraude en las elecciones de ese año derivaron en una revuelta social que forzó la caída del régimen. Las promesas de cambio del nuevo presidente, Kurmanbek Bakiyev, fueron rápidamente diluidas, dando paso a un modelo de presidencialismo autoritario, corrupto y nepotista, especialmente a partir de finales de 2007. Todo ello en un contexto de dificultades económicas para la población, tensiones latentes entre el norte y sur del país y exclusión de las minorías étnicas de los ámbitos de decisión política. Cinco años después, en abril de 2010, una nueva revuelta popular desembocó en el derrocamiento del régimen, con enfrentamientos que causaron 85 muertos y cientos de heridos, a la que siguió en junio una ola de violencia con dimensión interétnica, con más de 400 víctimas mortales. Otros ejes de tensión en Kirguistán están vinculados a la presencia de grupos armados regionales de corte islamista en el Valle de Fergana (área entre Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán) y a las disputas fronterizas con países vecinos.

Se incrementó la tensión en el país, con un mayor desafío de actores armados y diversos hechos de violencia durante el año, regresión en materia de derechos humanos y episodios de tensión fronteriza, entre otros elementos. Aumentaron las llamadas de alerta sobre los riesgos de un mayor radicalismo islamista en la región de Asia Central y de las amenazas de organizaciones extremistas, incluyendo de tipo armado. Al mismo tiempo, algunos análisis alertaron del riesgo de que las autoridades estigmatizasen a la población musulmana residente en el sur del país –región donde se produjeron buena parte de las detenciones y operaciones antiterroristas– asociándola a las amenazas de violencia armada, incrementando así las fracturas comunitarias, aún no reparadas desde los hechos de violencia de 2010 en el sur del país. **Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación especial en la capital, Bishkek, y junto a la localidad de Lebedinovka, en julio, con seis muertos y varios detenidos, contra supuestos miembros del grupo armado Estado Islámico (ISIS) que –según las autoridades– preparaban ataques en la capital y contra la**

base militar rusa de Kant. No obstante, algunos análisis señalaron la falta de evidencias suficientes sobre su pertenencia a ISIS. Ese mismo mes, circuló el primer video de propaganda de ISIS dirigido específicamente a población musulmana de Kirguistán, llamándola a unirse al califato. La Fiscalía cifró en medio millar los ciudadanos de Kirguistán que combaten con ISIS en Oriente Medio. Varios de los detenidos en julio en la operación antiterrorista se escaparon en octubre de prisión, matando a varios guardias. Cinco de ellos fueron detenidos de manera inmediata –de los cuales tres murieron bajo custodia policial–, y otros dos murieron a manos de la Policía en un tiroteo a finales de octubre en el que también murieron dos civiles y un policía en las afueras de la capital. En otro episodio, otros dos supuestos miembros de la organización Jaishul Mahdi murieron abatidos por fuerzas de seguridad en una operación en la capital. Durante el año se produjeron también detenciones de supuestos integrantes de otras organizaciones, como Hizb ut-Tahir, a la que el Gobierno acusa de dar apoyo a al-Qaeda y a ISIS. Gran parte de las detenciones y registros se llevaron a cabo en Osh (sur) y otras zonas meridionales. Además, fue detenido en febrero Rashot Kamalov, un conocido imam de la localidad de Kara-Suu (región de Osh, Valle de Ferghana), de 20.000 habitantes. El clérigo fue acusado de animar a la población a unirse a ISIS, mientras sectores críticos denunciaron motivos políticos, dados sus sermones en denuncia de prácticas de corrupción y violencia institucional.

Por otra parte, **el país continuó haciendo frente a tensiones de tipo transfronterizo, vinculadas a la falta de delimitación limítrofe y disputas intercomunitarias en torno al acceso a recursos.** Así, un guardia fronterizo murió y varios resultaron heridos en un incidente en un puesto fronterizo cerca de la frontera con Tayikistán a principios de año. Por otra parte, se produjeron enfrentamientos entre población de Tayikistán y de Kirguistán en una zona colindante durante varios días de agosto, con diversos heridos y daños materiales, tras una escalada de tensión en torno a una zona de paso. Por otra parte, Kirguistán celebró elecciones parlamentarias en octubre, sin incidentes. Se dio paso a un Gobierno de coalición con el Partido Social Democrático (28% de los votos), el Partido Kirguistán (13%), Onuguu-Progreso (9%) y el Partido Socialista Ata Meken (7%). El bloque República-Ata-Zhurt obtuvo un 20,26% de los votos. El primer ministro en funciones Temir Sariev fue designado de nuevo para el cargo de jefe de Gobierno tras los comicios. Sariev había sustituido a Joomart Otorbayev tras la dimisión de éste en abril en medio de críticas a su papel por las dificultades para alcanzar un acuerdo con la compañía canadiense Centerra Gold sobre la controvertida mina de oro de Kumtor. En clave internacional, Kirguistán entró a formar parte en mayo del bloque económico pro-

La ilegalización en Tayikistán del Partido del Renacimiento Islamista, única formación política islamista legal en Asia central, generó alertas, en un contexto general de represión de la disidencia política y de persecución del islam en el espacio público

ruso Unión Económica Euroasiática y en julio puso fin a su acuerdo de cooperación con EEUU.

Tayikistán	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán

Síntesis:

La tensión que afecta a Tayikistán está vinculada en gran parte al conflicto armado de 1992-1997, que enfrentó a dos bloques marcados por fuertes divisiones regionales: la alianza opositora de fuerzas islamistas y sectores liberales anticomunistas (centro y este del país) contra las fuerzas gubernamentales heredadas del régimen soviético (norte y sur). El acuerdo de paz de 1997 resultó en un compromiso de reparto de poder, con la incorporación de la oposición al Gobierno. En su etapa de rehabilitación posbélica, los problemas a los que hace frente el país incluyen tensiones regionales (con descontento de la población leninabadi en el norte del país hacia sus antiguos aliados del sur, los kulyabis, grupo de población predominante en el poder tras el fin de la guerra), la presencia de algunos señores de la guerra y ex combatientes opositores no desmovilizados en algunas zonas del país, el autoritarismo del régimen, la corrupción, los altos niveles de pobreza y desempleo, las tensiones con sus vecinas Uzbekistán y Kirguistán, la inestabilidad asociada a su frontera con Afganistán y la amenaza potencial de grupos armados islamistas.

Se incrementó de manera significativa la tensión en el país centroasiático en torno a varios ejes. En el plano político, aumentó la represión contra la oposición política. **Fue ilegalizado en agosto el opositor Partido del Renacimiento Islámico (PRI), el único partido islamista autorizado en Asia central** ex soviética y partícipe de la firma de los acuerdos de paz de 1997. El Gobierno alegó que el PRI violaba la ley de partidos al no tener representación suficiente en todo el territorio. La medida fue precedida de una intensa campaña de presión y deslegitimación del partido, incluyendo la exclusión del partido del Parlamento tras las elecciones legislativas de marzo consideradas fraudulentas por la oposición y que según la misión de observación electoral de la OSCE no cumplieron los estándares de elecciones libres y justas. Además, imanes oficialistas de todo el país se pronunciaron en marzo exigiendo su ilegalización alegando que el PRI fomentaba conflictos. En un contexto de hostigamiento, el líder del PRI, Muhiddin Kabiri, abandonó el país tras las elecciones. Poco después de la suspensión del partido por el Gobierno en agosto, y tras unos hechos de violencia en septiembre

de los cuales el Gobierno acusó al PRI, el Tribunal Supremo sentenció en septiembre que el PRI debía ser incluido en las listas terroristas del país. Una docena de miembros relevantes del PRI fueron detenidos a mediados de septiembre. Pese a las medidas, el PRI anunció que continuaría con sus actividades sin pasar a la clandestinidad y descartando estrategias armadas. No obstante, algunos expertos alertaron del escenario incierto que se abría. Su ilegalización se produjo en un contexto general de represión estatal del islam en el espacio público. Además de las presiones contra el PRI, continuó el hostigamiento contra seguidores del grupo político opositor G24, ilegalizado en 2014. Su líder y empresario Umarali Quvatov, murió asesinado en Estambul en marzo. La eliminación de la oposición política dentro y fuera del Parlamento –en los comicios de marzo ningún partido opositor logró entrar al Congreso–, fue acompañada durante el año de nuevas medidas de regresión democrática. Entre ellas, el Parlamento aprobó y concedió en diciembre el título de Líder de la Nación al presidente tayiko, Emomali Rahmon, lo que le otorga inmunidad vitalicia y competencias ejecutivas cuando se retire, incluyendo poder de veto sobre decisiones de Estado, entre otros privilegios.

Los hechos de violencia de septiembre de los que se acusó al PRI fueron otro de los focos de conflictividad del año. **Un grupo de hombres armados vinculados al ex viceministro de Defensa, Abduhalim Nazarzoda, atacaron en septiembre un puesto de Policía, un depósito de armas y un puesto de seguridad junto a la capital, Dushanbe y otra localidad cercana, con una veintena de víctimas mortales.** En respuesta, las autoridades pusieron en marcha una operación especial, que se extendió al valle de Romit, en la que se dio muerte a Nazarzoda, y que concluyó con otras 20 víctimas mortales y en torno a 130 detenidos. Según el Gobierno, Nazarzoda había actuado bajo las órdenes del PRI, acusaciones que el partido negó. En octubre, 23 altos cargos del PRI fueron detenidos, con acusaciones de terrorismo, incitación al odio religioso y racial e intento de toma de poder por la fuerza, vinculándoles con el ataque de septiembre. Algunos analistas señalaron factores económicos y luchas de poder en los hechos de violencia de septiembre. Por otra parte, otro eje de tensión estuvo ligado a la actividad de organizaciones islamistas locales y regionales, incluyendo grupos armados. Las autoridades detuvieron a decenas de personas supuestos miembros de grupos no legales, incluyendo Jamaat Ansarallah, Movimiento Islámico de Uzbekistán, Jabhat al-Nusra y Hizb ut-Tahrir. Generó alerta la **defección en abril del comandante de las fuerzas especiales OMON Gulmurod Khalimov y su reaparición en dos videos en que anunciaba su incorporación a ISIS, instaba a la lucha contra los Gobiernos de Tayikistán, EEUU y Rusia, y acusaba al Gobierno tayiko de reprimir la práctica del islam.** El Ministerio de Interior tayiko cifró a finales de año en 500 los ciudadanos tayikos que combaten con ISIS en Siria e Iraq. Por otra parte, **se incrementaron las alertas gubernamentales en el país por el deterioro de la situación en la zona norte de Afganistán fronteriza con Tayikistán.**

Rusia anunció que desplegaría helicópteros de ataque y de transporte militar en la base rusa en Tayikistán.

Asia Meridional

Bangladesh	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales

Síntesis:

Desde la creación de Bangladesh como Estado independiente en 1971 tras su secesión de Pakistán en un conflicto armado que ocasionó tres millones de muertes, el país ha vivido una complicada situación política. Las elecciones de 1991 dieron paso a la democracia tras una sucesión de gobiernos militares autoritarios que dominaron el país desde la independencia. Los dos principales partidos, BNP y AL, se han sucedido desde entonces en el poder después de diferentes elecciones, siempre contestadas por la formación perdedora, dando lugar a gobiernos que no han dado respuesta a los principales retos del país como la pobreza, la corrupción o la baja calidad de la democracia, y que han respondido a intereses partidistas. En 2008, la AL accedió al poder después de un periodo de dos años dominado por un Gobierno interino militar que trató de poner fin sin éxito a la crisis política que había sumido al país en una situación de violencia en los meses previos y que llevó incluso al encarcelamiento de las líderes de los dos partidos. La convocatoria de elecciones para 2014 en un contexto político muy frágil y con una fuerte oposición del BNP a las reformas emprendidas por la AL, como la eliminación del Gobierno interino para supervisar los procesos electorales, derivaron en una grave y violenta crisis política durante el año 2013. En paralelo, el establecimiento en 2010 de un Tribunal para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de 1971, instrumentalizado por el Ejecutivo para acabar con la oposición islamista, en particular el partido Jamaat-e-Islami, agravó la situación en el país.

La situación de tensión política en Bangladesh continuó activa durante todo el año, con algunos episodios graves de violencia y una intensa persecución de la oposición política y de profesionales de la información. La violencia fue especialmente grave durante el primer trimestre del año, en el que las protestas convocadas por la oposición, el partido BNP, un año después de las elecciones parlamentarias de 2014 –epicentro de una gravísima crisis política–, derivaron en disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y Policía. 150 personas murieron como consecuencia de esta violencia en los tres primeros meses del año, en los que además se llevó a cabo una huelga general, así como un bloqueo del transporte terrestre, ferroviario y fluvial en todo el país y se repitieron ataques y quema de camiones, autobuses y vehículos privados. Begum Khaleda Zia, líder del BNP, se negó a desconvocar las protestas lo que llevó al Gobierno bangladés

a someterla a confinamiento domiciliario durante 17 días. Además, se le acusó de manera formal de asesinato como la instigadora de un ataque contra un autobús de pasajeros a consecuencia del cual 27 personas murieron. Esto representó un salto cualitativo con respecto a las acusaciones formuladas contra ella, puesto que hasta ese momento nunca se había formulado una acusación penal formal contra la líder del BNP, ya que los cargos que habían pesado sobre la dirigente con anterioridad eran por corrupción. A la acusación le siguió una orden en el mes de junio para que la líder opositora se entregara en el plazo de dos meses y en julio se anunció la formación de un tribunal especial bajo la Ley Antiterrorista para juzgar casos contra Beghum Khaleda Zia y otros miembros del BNP. Tras unos meses de intensa violencia, la crisis política persistió con la convocatoria de elecciones locales en Dhaka y Chittagong, también boicoteadas por el BNP. Un ataque a una comitiva en la que viajaba Khaleda Zia, motivó que el partido opositor retirara su apoyo a la celebración de los comicios, a los que sí se había mostrado favorable inicialmente. Ni el partido en el Gobierno, AL, ni el BNP concurrían directamente, pero sí habían dado apoyo explícito a candidatos concretos. Los comicios otorgaron la victoria nuevamente al partido oficialista y el BNP reiteró sus acusaciones de fraude electoral. Durante todo el año se repitieron las detenciones y juicios contra opositores políticos. Medios de comunicación señalaron que unos 17.000 trabajadores y activistas del BNP estaban detenidos y que había 22.000 casos judicializados.

En lo que respecta a la labor del **Tribunal para Crímenes Internacionales**, durante el año se llevó a cabo la ejecución de varias personas acusadas de crímenes de guerra cometidos durante la guerra de la independencia en 1971. En el mes de abril se produjo la ejecución del líder de Jamaat-e-Islami, Muhammad Kamaruzzaman, lo que derivó en protestas en las que dos personas murieron tiroteadas. Además, se registraron enfrentamientos entre la Policía y manifestantes. En los meses de mayo y junio se produjeron nuevas condenas a prisión y muerte por parte del Tribunal contra otros acusados de crímenes durante la guerra de 1971. En el mes de noviembre se llevaron a cabo otras dos ejecuciones, la del secretario general de Jamaat-e-Islami Ali Ahsan Mohammad Mujahid, y de un miembro del BNP, Salauddin Quader Chowdhury. Por otra parte, cabe destacar que durante el año se produjeron al menos cinco asesinatos de blogueros activistas contra el extremismo religioso. Los asesinatos fueron reivindicados por el grupo afiliado a al-Qaeda, Ansar al-Islam. Además, se produjeron varios asesinatos de extranjeros que fueron reivindicados por el grupo armado ISIS, aunque el Gobierno negó que este grupo estuviera detrás de los atentados, acusando por el contrario a una alianza entre el BNP y Jammát-e-Islami.

India (Manipur)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados PLA, UNLF, PREPAK, PREPAK (Pro), KNF, KNA, KYKL, RPF, UPPK, PCP

Síntesis:

La tensión que enfrenta al Gobierno con los diferentes grupos armados que operan en el estado de Manipur y varios de éstos entre sí tiene su origen en las demandas de independencia de varios de estos grupos, así como en las tensiones existentes entre los diferentes grupos étnicos que conviven en el estado. En las décadas de los sesenta y setenta surgen varios grupos armados, algunos de inspiración comunista y otros de adscripción étnica, que permanecerán activos a lo largo de las décadas posteriores. Por otro lado, el contexto regional, en un estado fronterizo con Nagalandia, Assam y Myanmar, también marcará el desarrollo de la conflictividad en Manipur, y serán constantes las tensiones entre grupos étnicos manipuris con población naga. El empobrecimiento económico del estado y el aislamiento con respecto al resto del país han contribuido decisivamente a consolidar un sentimiento de agravio en la población de Manipur. En los últimos años se ha producido una progresiva reducción de la violencia armada.

La tensión en Manipur se mantuvo activa todo el año con diferentes episodios de violencia y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición que operan en el estado. Un total de 96 personas murieron como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia, frente a las 54 que murieron en 2014 y las 55 de 2013, de acuerdo con los datos recopilados por el South Asia Terrorism Portal. Se registraron ataques con carácter esporádico, y las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad causaron la muerte de integrantes de diferentes grupos armados. Además, la población civil también sufrió las consecuencias de la violencia. En enero, dos civiles fueron ejecutados por el grupo armado de oposición KNA(I) en el distrito de Churachandpur. En el mes de junio se registraron los hechos más graves de todo el año cuando tres grupos armados activos en la región del nordeste indio, agrupados bajo la denominación “Ejército naga” –NSCN-K (que opera normalmente en el estado de Nagalandia), KYKL y KCP (ambos operan en Manipur)–, reivindicaron un ataque conjunto que causó la muerte de 18 miembros de las fuerzas de seguridad. Los autores materiales del ataque fueron integrantes del KYKL. El ataque derivó en un operativo de las fuerzas de seguridad en el que podrían haber muerto entre 50 y 70 insurgentes y que llevó al desmantelamiento de diferentes campamentos insurgentes en territorio de Myanmar. Esto llevó a un desencuentro entre los Gobiernos de ambos países, ya que, aunque el Gobierno birmano negó que fuerzas de seguridad indias hubieran operado en su

territorio, el Gobierno indio sí reconoció que las fuerzas indias habían actuado en el país vecino, aunque en comunicación permanente con las fuerzas de Myanmar.

A finales de año el Gobierno indio renovó por un año más la legislación antiterrorista vigente en el estado de Manipur, la AFSPA, que otorga amplios poderes especiales a las fuerzas de seguridad indias, lo que contó con el rechazo de numerosas organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos. La activista Irom Sharmila anunció también que prolongaba la huelga de hambre que ha mantenido durante 16 años para protestar contra esta legislación. Por otra parte, se registraron numerosas protestas sociales en el estado con grandes movilizaciones que derivaron en disturbios en los que al menos nueve personas murieron. Organizaciones kukis se movilizaron contra la aprobación de varias leyes que facilitarían la desposesión de tierras y que erosionarían la protección sobre las tierras de determinados grupos tribales. También se produjeron protestas exigiendo la aplicación del sistema de Inner Line Permit, que restringe el acceso de ciudadanos indios a zonas protegidas para preservar derechos ancestrales de ciertos pueblos. Organizaciones en representación de estos pueblos señalaron que la migración desde el resto de la India a Manipur estaría alterando tanto la estructura demográfica del estado, como debilitando la capacidad de influencia de la población meitei, principal grupo étnico del estado. Unas 300 personas resultaron heridas en el marco de estas protestas.

India (Nagalandia)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (Khole-Kitovi), NNC, ZUF

Síntesis:

El conflicto que afecta al estado de Nagalandia se originó tras el proceso de descolonización británico de la India (1947), cuando surgió un movimiento naga que reclama el reconocimiento de derechos colectivos para esta población, mayoritariamente cristiana, frente a la mayoría hindú india. La creación de la organización naga NCC en 1946 marcó el inicio de las reclamaciones políticas de independencia para el pueblo naga, que a lo largo de las décadas posteriores evolucionaron tanto en contenido (independencia de Nagalandia o creación de la Gran Nagalandia, incorporando territorios de los estados vecinos habitados por nagas) como en formas de oposición, iniciándose la lucha armada en 1955. En 1980 se formó el grupo armado de oposición NSCN como resultado de desacuerdos con sectores políticos más moderados, que a su vez ocho años después se dividirá en dos facciones, Isaac-Muivah y Khaplang. Desde 1997 el NSCN-IM mantiene un acuerdo de alto el fuego y negociaciones con el Gobierno indio, y el NSCN-K alcanzó un acuerdo de alto el fuego en el año 2000. Desde entonces los enfrentamientos entre las dos facciones se han producido en paralelo a los esfuerzos de acercamiento y reconciliación entre toda la insurgencia naga. En los últimos años se ha constatado una notable reducción de la violencia.

La situación de tensión continuó activa en Nagalandia durante todo el año, con diferentes acontecimientos relevantes, algunos de ellos en sentido opuesto, ya que por un lado se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno y el grupo armado de oposición NSCN-IM, pero por otro se rompió el acuerdo de alto el fuego con el NSCN-K. La violencia experimentó un repunte con respecto al año anterior, ya que según los datos recogidos por el South Asia Terrorism Portal se registraron 46 muertes como consecuencia de los enfrentamientos entre algunos grupos insurgentes y las fuerzas de seguridad indias, frente a las 15 muertes de 2014. La ruptura del acuerdo de alto el fuego por el grupo armado de oposición NSCN-K fue el motivo principal de este incremento de la violencia. En marzo el grupo armado anunció que no prolongaría el acuerdo de alto el fuego que alcanzó con el Gobierno en el año 2001. En abril, mes en el que el acuerdo debía renovarse oficialmente, el Ejecutivo también renunció a seguir manteniéndolo vigente. Los motivos aducidos por la oposición armada para romper el pacto fueron la negativa del Gobierno a negociar sobre el asunto de la soberanía. La situación se complicó todavía más, ya que a la ruptura del acuerdo de alto el fuego se añadió la expulsión del grupo de dos dirigentes contrarios a poner fin al acuerdo. Los expulsados, que crearon la nueva facción NSCN-R, habrían tratado de bloquear la ruptura del acuerdo convocando una reunión del mecanismo conjunto de supervisión del alto el fuego, que había sido desmantelado por Khaplang, dirigente del NSCN-K y promotor de la suspensión del acuerdo. Como consecuencia de esta ruptura se registraron varios episodios de violencia, entre los que cabe destacar el atentado reivindicado por la recién establecida plataforma de grupos armados NSCN-K, ULFA-I, NDFB-S y KLO, aunque los autores materiales habrían sido el NSCN-K. El ataque tuvo especial relevancia ya que en los últimos años apenas se habían registrado enfrentamientos directos entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad indias. Como consecuencia, se inició una operación de las Fuerzas Armadas en la que murieron al menos ocho insurgentes. Además, se impuso el toque de queda nocturno en el distrito Mon, donde había tenido lugar el atentado. Posteriormente se registraron otros enfrentamientos y ataques con participación del NSCN-K, incluso en otros estados como en Manipur. Además, varios insurgentes murieron fruto de las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, en las que también fallecieron integrantes de otros grupos armados como el NSCN-KK. La ruptura del acuerdo de alto el fuego conllevó también que el Gobierno indio ilegalizara nuevamente al NSCN-K por un periodo de cinco años, decisión criticada por numerosas organizaciones nagas por el impacto que podría tener en la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Por otra parte, el Gobierno indio solicitó a Myanmar la extradición de SS Khaplang y de otros miembros de la cúpula del grupo.

Con respecto al grupo armado NSCN-IM, cabe destacar que el mes de agosto, Gobierno e insurgencia alcanzaron un acuerdo marco de paz que debería servir de preámbulo

para la consecución de un acuerdo definitivo. Tras la firma del acuerdo una delegación de representantes nagas convidó en Myanmar al líder del NSCN-K, Khaplang, a unirse, oferta que fue declinada. Khaplang rehusó reunirse con los representantes nagas, delegando el encuentro en el vicepresidente Khango Konyak y el alto mando militar Nikki Sumi. Esta negativa impulsó también la decisión gubernamental de ilegalizar al grupo armado. En paralelo a los enfrentamientos entre insurgencia y fuerzas de seguridad, se produjeron otros episodios de violencia durante el año, entre los que cabe destacar los disturbios que tuvieron lugar en la ciudad de Dimapur en marzo, cuando un joven acusado de violación fue linchado. Varias decenas de personas sacaron de la cárcel al joven de origen bangladeshí agrediendo hasta causarle la muerte y posteriormente atacando también varios establecimientos pertenecientes a personas también de origen bangladeshí. Se impuso el toque de queda y más de 50 personas resultaron detenidas como consecuencia de la violencia, que puso de manifiesto de nuevo la fragilidad de la convivencia entre las diferentes comunidades en el estado.

El cruce de declaraciones y gestos hostiles contribuyeron a mantener un elevado grado de tensión entre la India y Pakistán, aunque se produjo un acercamiento al final del año

El año destacó por las constantes violaciones del alto el fuego (firmado en 2003) por ambos países que causaron la muerte a 174 personas, 20 de ellos civiles. A pesar de

que era un año en el que se acordaron citas bilaterales importantes, el clima de enfrentamiento llevó a la cancelación de varias de ellas. Los desencuentros comenzaron en marzo, cuando el Alto Comisario de Pakistán en Delhi, Abdul Basit, se reunió con el líder separatista del Tehrik-e Hurriyat (Movimiento para la Libertad), Syed Ali Shah Guilani. Poco después, el ministro de Exteriores de la India, Suleman Khurshid, declaraba que Cachemira era parte indivisible e íntegra de la India. El jefe en funciones del Ejército de Pakistán, el General Raheel Sharif, respondió en junio declarando que Cachemira y Pakistán son inseparables y en

octubre, en un congreso de defensa en Londres, reiteró que Cachemira era un asunto pendiente de la Partición. En junio, ambos países se enfrentaron por las elecciones de la Asamblea Legislativa de Gilgit-Baltistán. Pakistán convocó los comicios por segunda vez desde que se formó la Asamblea en 2009, algo que la India consideró una maniobra para integrar una región en disputa. Gilgit-Baltistán es otra región que la India considera ocupada por Pakistán, ya que formaba parte de Cachemira antes de la Partición. Como muestra de que la India no renunció a este territorio, el asesor de seguridad Ajit Doval, durante un encuentro con las Fuerzas de Seguridad de Fronteras en el que se trataban las amenazas terroristas, mencionó que su país tenía 106 kilómetros de frontera con Afganistán. El portavoz de Exteriores de la India además se quejó de que el trazado de la carretera que unirá China con el puerto de Gwadar (Corredor Económico China-Pakistán), pasara por Gilgit-Baltistán. La India ya tuvo en el pasado un conflicto bélico con China en torno a parte del territorio de Cachemira (1962, Aksai Chin), por lo que considera que sus proyectos macroeconómicos en Pakistán contribuyen a que éste consolide su poder en Gilgit-Baltistán.

India – Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Territorio Internacional
Actores:	India, Pakistán

Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971, 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera *de facto* entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera *de facto* que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que éstos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

El enfrentamiento verbal pasó de la hostilidad a la belicosidad en mayo. El ex general Pervez Musharraf –ideólogo del conflicto de Kargil en 1999, el mismo año que dio el golpe de Estado derrocando a Nawaz Sharif–, se jactó en un discurso del daño infligido por Pakistán a la India en Kargil. Un mes después, el primer ministro indio Narendra Modi, visitaba Bangladesh, donde participó en una ceremonia para honrar la muerte de los mártires de la guerra de 1971 (Pakistán Oriental se separó de la Occidental, lo que hoy día son Bangladesh y Pakistán respectivamente) que lucharon contra el Ejército pakistaní. Allí, Modi reconoció públicamente el papel de la India en la ruptura de Pakistán. A la vez, la India llevó a cabo operaciones militares en territorio de Myanmar con el objetivo de apresar a un grupo de insurgentes que había atentado en Manipur. La publicación de la noticia llevó al ministro del Interior Chaudhry Nisar Ali Khan a amenazar a la India con represalias si tal operación tuviera lugar en su territorio.

Ante esta escalada el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, intervino llamando a los dos dirigentes, que consiguieron rebajar la tensión y recurrieron a un gesto de buena voluntad liberando a pescadores apresados por ambos países. En la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shangai en Ufa (Rusia) en julio, Modi y Sharif acordaron que sus asesores de defensa se reunieran en Nueva Delhi en agosto. Pero la insistencia del asesor pakistaní, Sartaj Aziz, de reunirse con líderes del All Parties Hurriyat Conference, condujo a la cancelación del encuentro. Las acusaciones mutuas de promoción del terrorismo tampoco contribuyeron a crear un clima de diálogo. Modi había pedido a Sharif mano dura contra el terrorismo y la condena de acusados del atentado de Mumbai (noviembre 2008), como Zaki-ur-Rehman Lakhvi, cuya liberación en abril dio pie a la India a acusar a Pakistán de que no se tomaba en serio la lucha contra el terrorismo. La división se hizo patente una vez más en la 70ª sesión de la Asamblea General de la ONU, cuando ambos países intercambiaron acusaciones de promoción del terrorismo en sus respectivos territorios. Nawaz Sharif de hecho, aportó un dossier en el que incluía lo que consideraba pruebas fehacientes de la incriminación de la India en la insurgencia de Baluchistán y del TTP, así como otro informe en el que se detallaban las violaciones de derechos humanos de India en Cachemira. **EEUU intervino en varias ocasiones, preocupado por el deterioro de la situación en un momento de escalada de la violencia en Afganistán y cuando necesitaba que Pakistán jugara un papel decisivo en las negociaciones del Gobierno afgano con los talibán.** Si en Nueva York las posiciones parecían ser irreconciliables, dado que ni Sharif ni Modi se dirigieron la palabra, en la cumbre de París contra el cambio climático, ambos sorprendieron al sentarse juntos e intercambiar unas palabras. En diciembre, en Bangkok, los asesores de defensa finalmente se reunieron. Sushma Swaraj, la ministra india de Defensa, acudió a la conferencia “Heart of Asia” del Proceso de Estambul, que se celebró en Islamabad, donde ambos Estados acordaron relanzar un nuevo proceso de diálogo. El acercamiento final lo personificó Modi, cuando telefoneó a Sharif el día de su cumpleaños (25 de diciembre) e hizo escala en Lahore. Un primer ministro indio no visitaba Pakistán desde 2004.

Nepal ⁴²	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, partidos políticos –Nepali Congress, UCPN(M), CPN(UML)–, United Democratic Madhesi Front (UDMF), Tharuhat-Tharuwan Joint Struggle Committee
Síntesis:	En 1996 se inició un conflicto armado que durante una década enfrentó al Gobierno nepalí con el brazo armado

del partido maoísta CPN-M, el People's Liberation Army (PLA), que buscaba derrocar la monarquía e instaurar una república maoísta, en un país afectado por la ausencia de democracia, la pobreza, el feudalismo y la desigualdad. Tras diez años de conflicto armado y un autogolpe de Estado por el que el rey asumió todos los poderes del Estado en 2005, a finales de abril de 2006 el rey Gyanendra decretó la reapertura del Parlamento después de varias semanas de intensas protestas sociales que costaron la vida a una veintena de personas. Las protestas, que llevaron al derrocamiento del rey, fueron organizadas por una coalición de los siete principales partidos democráticos de oposición y los maoístas. Tras la caída de la monarquía éstos declararon unilateralmente un alto el fuego secundado por el Gobierno provisional. En noviembre de 2006 se firmó un acuerdo de paz que ponía fin al conflicto armado y posteriormente se proclamó la república. En el año 2008 se estableció una Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Carta Magna nepalí, aunque las sucesivas crisis políticas y la falta de acuerdo sobre aspectos clave del proceso de paz como la descentralización territorial han desembocado en un estancamiento de este proceso.

La situación de tensión se agravó en Nepal tras la aprobación en el mes de agosto de una nueva Constitución para el país y su promulgación en septiembre. La Constitución contó con el respaldo de dos tercios de la Asamblea Constituyente y su aprobación fue el resultado de un largo proceso tras la firma del acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado en 2006, la elección de una Asamblea Constituyente en 2008 y su reelección en 2013, ante el fracaso del primer periodo constituyente posbélico. La Constitución aprobada estableció un sistema republicano, federal y secular con siete estados. **La reorganización territorial del país fue la principal causa del agravamiento de la crisis política, ya que grupos tharu y madhesi mostraron su descontento con la delimitación de los nuevos estados mediante protestas y bloqueos, que en varias ocasiones derivaron en disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Como consecuencia, al menos 50 personas murieron** en el país desde el mes de agosto fruto de los tiroteos por parte de la Policía y de los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y quienes participaban en las protestas. Diez policías murieron tras ser atacados por manifestantes. Los nuevos estados configurados por la Constitución estarán integrados por distritos de las tres zonas geográficas del país –planicie (o Terai), las colinas y la alta montaña–, lo que conlleva que los distritos habitados por población tharu y madhesi quedarán divididos entre varios estados. También se expresó descontento con el sistema electoral acordado, y las organizaciones de mujeres denunciaron que la Constitución institucionaliza la discriminación por motivos de género, al establecer desigualdades en el acceso a la ciudadanía nepalí para hombres y mujeres. Desde la promulgación de la nueva Constitución se inició también un bloqueo de las carreteras, y las comunicaciones terrestres con la India quedaron prácticamente suspendidas. Esto derivó en un importante desabastecimiento del

42. Las tensiones Nepal y Nepal (Terai) se han unido bajo la denominación Nepal, por la mayor interrelación de las dinámicas entre ambas durante el año 2015.

país de bienes esenciales como medicamentos y combustible, e incrementó la tala ilegal de bosques, así como la paralización de la reconstrucción de las viviendas que se vieron afectadas por el terremoto de abril. Organizaciones como UNICEF advirtieron de las consecuencias sobre la población infantil. La situación humanitaria en el país ya era muy grave antes del bloqueo como consecuencia de varios terremotos que tuvieron lugar en el mes de abril en el valle de Katmandú y que causaron más de 8.500 muertes, 18.000 personas heridas y dejaron a 1,4 millones de personas dependientes de la ayuda alimentaria.

A finales de septiembre el Ejecutivo decidió retirar a los soldados desplegados en las zonas conflictivas como medida para incrementar la confianza de la población. El primer ministro canceló su presencia en la Asamblea General de la ONU para hacer frente a la crisis y el secretario de Exteriores indio viajó a Nepal para llevar a cabo consultas con el Gobierno nepalí sobre la situación generada por la promulgación de la Constitución e instó a fortalecer el diálogo. En diciembre el Gobierno llevó a cabo un nuevo intento de solución de la crisis política y presentó una nueva propuesta para incluir algunas reformas en el texto constitucional aprobado en septiembre, incluyendo cuestiones como una representación proporcional de la población madhesi en diferentes órganos estatales así como una delimitación de las circunscripciones electorales a partir de la población. No obstante, esta enmienda fue rechazada por los líderes madhesis, que señalaron que se trataba de propuestas abstractas que no incluían soluciones concretas para las reivindicaciones madhesis.

La aprobación de una nueva Constitución en Nepal derivó en intensas protestas que causaron 50 muertes

Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos

Síntesis:

En 1999 un golpe de Estado perpetrado por el General Pervez Musharraf puso fin al Gobierno del entonces primer ministro Nawaz Sharif, que evitó una convicción exiliándose a Arabia Saudí. El golpe de Estado le valió al nuevo régimen militar el aislamiento internacional, que acabó tras los atentados de septiembre de 2001, cuando Musharraf se convirtió en el principal aliado de EEUU en la región en la persecución de al-Qaeda. La perpetuación de Musharraf en el poder, la ostentación simultánea de la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas, los ataques al poder judicial, la impopularidad de la alianza con EEUU en un periodo de aumento del antiamericanismo, la crisis económica

y medioambiental, o la creciente presencia de grupos terroristas en otras zonas del país (más allá de las áreas tribales), con el consecuente aumento de la inseguridad, son algunos de los elementos que han explicado durante años la frágil situación política del país. En 2008 Musharraf dimitió como presidente tras las elecciones legislativas, con gran parte del Parlamento en su contra. Asif Ali Zardari del PPP fue votado para sucederle en la presidencia. A pesar del retorno de la democracia al país, y de vivir hitos históricos como el primer traspaso de un Gobierno (PPP) que finaliza su legislatura de cinco años de forma pacífica al siguiente Gobierno electo (Liga Musulmana de Nawaz), Pakistán sigue siendo un país inestable.

Tras el atentado en la escuela de Peshawar (diciembre de 2014) en el que murieron 132 menores, la sociedad y el Gobierno se mostraron más decididos que nunca a actuar contra la insurgencia. Si desde la perspectiva militar la operación Zarb-e Azb (iniciada en junio 2013) era lanzada para acabar con los santuarios insurgentes en algunas agencias tribales (Waziristán y Jyber fundamentalmente), el Gobierno civil diseñó un instrumento para luchar contra el terrorismo denominado Plan de Acción Nacional (NAP en sus siglas en inglés). **Según las cifras oficiales, hubo un descenso significativo de la violencia, pero el secretismo con el que el Ejército llevó a cabo las operaciones militares, imposibilitó contrastar los datos.** El

Pakistan Institute for Peace Studies (PIPS) cifró una reducción de un 48% de atentados terroristas y un 34% de la violencia en general. Según el PIPS, la violencia causó la muerte a 3.503 personas y 2.167 resultaron heridas (1.069 muertas y 1.443 heridas por atentados de la insurgencia). El South Asia Terrorism Portal (SATP) calculó el total de bajas en 3.682. Por su parte, la oficina de relaciones públicas de los Servicios de Inteligencia (ISPR), publicó otras cifras: 3.400 milicianos y 488 militares muertos solo como resultado de la operación Zarb-e Azb.⁴³ Si bien la operación militar fue definitiva para mermar la capacidad operativa del movimiento talibán pakistaní (TTP), éste continuó activo y consiguió perpetrar atentados como el que acabó con la vida de 40 personas en la base aérea de Badaber (Jyber-Pajtunjuwa) en septiembre. El NAP se desarrolló en base a 20 puntos clave para acabar con la insurgencia. El primero de ellos consistía en levantar la moratoria de la pena de muerte. A finales de noviembre, Pakistán había superado la marca de 300 ejecuciones. Sin embargo, según el PIPS, a finales de julio, de las 195 personas ejecutadas, solo 22 pertenecían a grupos insurgentes. Además, Pakistán ejecutó a dos presos que habían sido condenados cuando eran menores de edad, contradiciendo así su propia ley, que prohíbe la condena a la pena de muerte de menores. Otro paso dado por el Gobierno que alertó a las organizaciones de derechos humanos fue la aprobación de una ley que permitía a tribunales militares juzgar a presos civiles por delitos relacionados con la actividad insurgente.

43. Véase el resumen sobre Pakistán en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Otro punto del programa era extender la operación militar a otras áreas de las agencias tribales, a Baluchistán y Karachi. El gran poder de los militares (Ejército en áreas tribales, el Cuerpo Fronterizo en Baluchistán y los Rangers en Karachi), a los que además se les otorgó poderes policiales, fue considerado un paso atrás en el afianzamiento de la democracia.

A pesar de una leve mejora de la seguridad, la violencia siguió golpeando Pakistán

El NAP es claro en su persecución de los grupos insurgentes, su financiación, su ideología y el discurso del odio.⁴⁴ Sin embargo, **Pakistán siguió dando muestras contradictorias, especialmente en lo concerniente a la selectividad en la persecución de los grupos armados.** Zaki ur-Rehman Lakhvi (LeT) fue liberado en abril, a pesar de que las pruebas apuntaban a su implicación como ideólogo del atentado en Mumbai en noviembre de 2008. En Islamabad, estudiantes de la conocida mezquita roja, (la mezquita tiene adyacentes una madraza para chicos y otra para chicas) posaron en un vídeo apelando al líder del grupo armado Estado Islámico (ISIS) para vengar a sus mártires, incluido Osama bin Laden. Abdul Aziz, el líder de la mezquita, no dejó de apoyar al TTP y al ISIS. El líder del LeT, Hafiz Saeed o el del JuM, Masood Azhar, siguieron libres y en activo, a pesar de que sus grupos estaban ilegalizados. En la convocatoria de elecciones locales, el grupo sectario Ahl-e Sunna wa-l-Yama'at (ASWJ, anteriormente conocido como Sipah-e Sahaba) se presentó junto a diferentes partidos. En Malir (Sind), el ASWJ se presentó con el PPP, en Mirpur, el PTI venció junto a este grupo y en Jhang concurreó junto a la LMP-N. El ASWJ, la organización madre del Lashkar-e Jhangvi (LeJ) y aliado del TTP y al-Qaeda (y según fuentes de inteligencia, potencialmente aliado del ISIS), fue responsable de la mayoría de los ataques sectarios contra minorías chiíes que según SATP, dejaron 276 personas muertas y 327 heridas en 2015. Sin embargo, Malik Ishaq, el líder del LeJ, murió junto a sus dos hijos y 13 de sus seguidores en un tiroteo con la Policía.⁴⁵ En noviembre, Haroon Bhatti, otro líder del LeJ, murió en similares circunstancias junto a otros tres miembros del grupo. El Gobierno del Punjab fue el único en prohibir la cobertura mediática de las actividades de las ramas caritativas de los grupos armados tras el terremoto que afectó Afganistán y Pakistán en octubre, que dejó centenares de personas muertas y miles de heridos. Asimismo, Pakistán acusó a Afganistán de promover la insurgencia en su territorio. Tras la detención de cinco hombres en Afganistán implicados en el atentado de Peshawar (diciembre 2014), el Gobierno anunció que no renovarían los permisos de residencia a los refugiados afganos (cerca de 1,5 millones registrados, aunque hay en torno a un millón sin registrar) que caducaban el 31 de diciembre (dejándoles en situación de ilegalidad y mayor vulnerabilidad) y que procedería a expatriarlos

escalonadamente a lo largo de dos años. Desde el atentado, miles de refugiados fueron expulsados ilegalmente como represalia (a pesar de contar con permisos de residencia). Por otra parte, Baluchistán sufrió un repunte de violencia, en buena parte provocado por la operación militar, al igual que Karachi, donde PPP y el MQM denunciaron un sesgo político en la actuación de los Rangers.

Sri Lanka	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social tamil

Síntesis:

En 1983 el grupo armado de oposición independentista tamil LTTE inició el conflicto armado que asoló Sri Lanka durante casi tres décadas. El proceso de creciente marginación de la población tamil por parte del Gobierno, integrado fundamentalmente por las elites cingalesas, tras la descolonización de la isla en 1948 llevó al grupo armado a reclamar la creación de un Estado tamil independiente por la vía armada. Desde 1983, cada una de las fases en las que se desarrolló el conflicto finalizó con un proceso de paz fallido. En 2002 se iniciaron negociaciones de paz con mediación noruega, después de la firma de un acuerdo de alto el fuego, el fracaso de las cuales llevó a la reanudación con gran virulencia del conflicto armado en 2006. En mayo de 2009 las Fuerzas Armadas vencieron militarmente al LTTE y recuperaron todo el territorio del país tras dar muerte al líder del grupo armado, Velupillai Prabhakaran. Desde entonces miles de tamiles han permanecido desplazados y no se han adoptado medidas para avanzar en la reconciliación. Además, el Gobierno se ha negado a investigar los crímenes de guerra del conflicto armado, negando la comisión de este tipo de delitos.

Sri Lanka atravesó una importante transformación política durante el año fruto del cambio político como consecuencia de las elecciones presidenciales en enero y parlamentarias en agosto, que dieron un vuelco al Ejecutivo del país. En enero, Maithripala Sirisena venció al entonces presidente Mahinda Rajapakse en unas elecciones que estuvieron precedidas por un clima de violencia e intimidación, aunque su celebración transcurrió con cierta tranquilidad. Pese a que Sirisena había formado parte del Gobierno de Rajapakse hasta el mes de noviembre, logró concitar los apoyos de la oposición política, incluyendo al partido tamil TNA. El nuevo Gobierno anunció un cambio de rumbo en la política del país y se convocaron elecciones parlamentarias con dos años de adelanto. Las elecciones, otorgaron la victoria también a la oposición integrada en la coalición United National Front for Good

44. Hubo varias sentencias condenatorias y detenciones (más de 3.900 personas) para impedir la difusión de discursos en mezquitas que incitaran a la violencia a través de los altavoces. Sin embargo, en varios programas televisivos se promovió el odio (en general a India, pero también a políticos, periodistas y académicos) y todo tipo de teorías conspirativas.

45. En Pakistán un "encounter" (un tiroteo) es un eufemismo para referirse a ejecuciones extrajudiciales de presos orquestadas por la Policía o los Servicios de Inteligencia.

Governance (UNFGG), liderada por el principal partido de la oposición, UNP, que obtuvo 106 de 225 escaños. Como consecuencia de este resultado, el presidente Maithripala Sirisena nombró primer ministro al líder de la coalición opositora, Ranil Wickremesinghe, que ya había detentado este cargo entre 1993 y 1994 y entre 2001 y 2004. En ese último mandato el Ejecutivo de Wickremesinghe llevó a cabo negociaciones de paz con el entonces grupo armado de oposición tamil LTTE. La candidatura liderada por Mahinda Rajapakse, United People's Freedom Alliance (UPFA), encabezada por el partido Sri Lanka Freedom Party (SLFP) obtuvo 96 escaños, y el principal partido tamil del país, Tamil National Alliance (TNA) logró 16 escaños. Con este nuevo escenario político se iniciaron diferentes procesos de transformación política y legislativa, entre los que cabe destacar la reforma de la Constitución para la reducción de poderes presidenciales, imponiendo un límite de dos mandatos, restringiendo su inmunidad y su capacidad para disolver el Parlamento.

Con respecto a la investigación sobre los crímenes de guerra cometidos durante la última etapa del conflicto armado que finalizó en 2009, cabe destacar que tras la elección de Sirisena se anunció que se retiraba la prohibición de viajar al norte del país a las personas extranjeras, medida adoptada por el anterior Gobierno con el objetivo de impedir la investigación sobre dichos crímenes de guerra. También se anunció una nueva investigación nacional sobre los crímenes de guerra en la que Naciones Unidas solo tendría un papel asesor. Tras las elecciones parlamentarias, el Gobierno anunció en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el establecimiento de varios mecanismos de justicia transicional: la creación de una comisión de verdad y reconciliación, independiente y creíble, para investigar las atrocidades cometidas durante la guerra civil (1983-2009); la creación de una oficina sobre personas desaparecidas y reparaciones; y el establecimiento de un tribunal especial para crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos, donde habría participación internacional. Estas medidas se anunciaron coincidiendo con la presentación del informe por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que recoge las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar entre febrero de 2002, cuando se produjo la ruptura del acuerdo de alto el fuego y mayo de 2009, cuando se dio por finalizado el conflicto armado tras la victoria de las Fuerzas Armadas sobre el grupo armado de oposición tamil LTTE. El informe documenta crímenes de guerra como ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y de género y desapariciones forzadas, entre otros actos ilícitos, y recomienda la creación de un tribunal especial híbrido para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por todas las partes. La presentación de este informe se había retrasado de marzo a septiembre para que el nuevo Gobierno tuviera la oportunidad de colaborar. En octubre el Consejo de Derechos Humanos aprobó

una resolución que compromete al Gobierno con los mecanismos de justicia transicional mencionados y reformas políticas. No obstante, en el mes de noviembre activistas tameses convocaron una huelga en el norte y el este del país para protestar por la detención continuada de personas como consecuencia de la legislación antiterrorista vigente en el país.

Asia Oriental

China (Tíbet)	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Sistema, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet y en provincias y países limítrofes

Síntesis:

En 1950, un año después de haber vencido en la guerra civil china, el Gobierno comunista de Mao Tse-tung invade el Tíbet y durante la década siguiente incrementa su presión militar, cultural y demográfica sobre la región y sofoca varios intentos de rebelión en los que murieron miles de personas. Ante la brutalidad de la ocupación, en 1959 el Dalai Lama y decenas de miles de personas huyeron del Tíbet y se exiliaron en varios países, especialmente en Nepal o el norte de India, donde tiene sede el Gobierno en el exilio. En las últimas décadas, tanto el Dalai Lama como numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado la represión, la colonización demográfica y los intentos de aculturación que sufre la población tibetana, una parte de cuyo territorio tiene el estatus de región autónoma. El diálogo entre el Dalai Lama y Beijing se ha visto interrumpido en varias ocasiones por las acusaciones del Gobierno chino sobre los presuntos objetivos secesionistas del Dalai Lama. El estallido de violencia que se produjo en 2008, el más virulento de las últimas décadas, interrumpió el diálogo nuevamente y erosionó significativamente la confianza entre las partes. La oleada de autoimmolaciones con fuego que se inició en 2009 en varias provincias chinas con presencia tibetana provocó una contundente reacción por parte de Beijing, así como un alejamiento entre el Gobierno chino y las autoridades tibetanas en el exilio, a las que se acusa de auspiciar las protestas.

Durante el año siguieron registrándose denuncias de violaciones de los derechos humanos en regiones chinas habitadas por la comunidad tibetana, críticas cruzadas entre Beijing y el Gobierno tibetano en el exilio, especialmente intensas a raíz de la celebración del 50º aniversario de la creación de la Región Autónoma del Tíbet, y protestas de distinto tipo contra el Gobierno chino, incluyendo inmolaciones con fuego. A pesar de que en algunos momentos del año pareció reavivarse la posibilidad de reanudar el diálogo entre el Gobierno chino y el Gobierno tibetano en el exilio,⁴⁶ en varias ocasiones Beijing criticó la denominada Vía Intermedia que propone el Dalai Lama, consistente en renunciar explícitamente a la independencia del

46. Véase el resumen sobre China (Tíbet) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Tíbet pero garantizando unas mayores competencias en aquellos asuntos relevantes para la supervivencia y promoción de la identidad tibetana. Beijing considera que esta propuesta contraviene la Constitución y la Ley sobre Autonomía Nacional y Regional y que bajo este concepto se esconde la intención de establecer un régimen semi-independiente, con escaso control por parte del Gobierno central, sobre aproximadamente una cuarta parte del territorio chino (las provincias de la Región Autónoma del Tíbet y de Qinghai, dos prefecturas de Sichuan y una prefectura de las provincias de Yunnan y Gansu respectivamente). Además de pedir explícitamente la renuncia a la Vía Intermedia, **Beijing criticó con contundencia las declaraciones del Dalai Lama en las que señalaba que deseaba no tener un sucesor y que la tradición budista de la reencarnación debería llegar a su fin.** El Gobierno consideró tales declaraciones una doble traición del Dalai Lama a su tierra natal y a su fe y a la vez declaró que debe ser el Ejecutivo quien apruebe y ratifique la reencarnación del actual Dalai Lama, que en 2015 cumplió 80 años. Algunos analistas habían señalado que el Gobierno quiere controlar el proceso de reencarnación con objetivos políticos. En 1989, tras la muerte del 10º Panchen Lama –la segunda máxima autoridad religiosa tibetana–, se produjo una disputa entre el Dalai Lama y el Gobierno chino acerca del procedimiento y la legitimidad de elección del nuevo Panchen Lama. Finalmente, la persona elegida por el Dalai Lama según la tradición tibetana (Gedhun Choekyi Nyima) y su familia fueron detenidos –desde entonces no se han tenido noticias sobre su paradero– y Beijing eligió en su lugar a Gyaltzen Norbu, que en varias ocasiones ha recibido un trato indiferente e incluso hostil por parte de determinados sectores de la comunidad tibetana que consideran que es instrumentalizado por el Gobierno. De hecho, en junio Gyaltzen Norbu hizo un llamamiento a la unidad nacional y la estabilidad social e instó a la comunidad tibetana a fortalecer su aprecio por China.

Durante el año se registraron numerosas denuncias por la situación de los derechos humanos. En el mes de marzo, una coalición de 175 organizaciones tibetanas instó al Comité Olímpico Internacional a no designar a Beijing como la sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 2022 por considerar que desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 2008 tanto la represión como las violaciones de derechos humanos se han agudizado. Más tarde, con motivo de una visita a EEUU del presidente chino, Xi Jinping, una alianza de varias ONG envió una carta al presidente de EEUU, Barack Obama, para denunciar el deterioro de la situación de los derechos humanos y hacer público que solamente entre mediados de julio y mediados de agosto más de 250 abogados activistas de derechos humanos habían sido detenidos, aunque la mayor parte de ellos fueron liberados posteriormente. En septiembre, durante la 30ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que se celebró en Ginebra, el Gobierno de EEUU y otros países europeos condenaron la situación de los derechos humanos

en China, especialmente en Tíbet y Xinjiang. En este sentido, cabe destacar que durante el año las relaciones entre China y EEUU vivieron momentos de cierta tensión por los elogios que Obama dedicó al Dalai Lama durante una visita de éste a EEUU a principios de año o por la visita de una delegación del Congreso en noviembre al Tíbet, durante la que reiteraron la importancia de los derechos humanos y la libertad de expresión y de religión. Durante el 2015 siguieron produciéndose autoinmolaciones con fuego y otras formas de protestas contra el Gobierno, que se intensificaron en fechas señaladas (como el aniversario del levantamiento tibetano de 1959, el cumpleaños del Dalai Lama o el 50º aniversario de la creación de la Región Autónoma del Tíbet). Finalmente, cabe destacar la **celebración en octubre de la primera vuelta de los comicios para elegir al primer ministro y al Parlamento tibetano (45 años) en el exilio**, en los que solamente pueden ejercer su voto las aproximadamente 150.000 personas tibetanas que residen fuera de China. Esta es la segunda vez que se celebran elecciones después de que en 2011 el Dalai Lama abandonara el cargo de jefe de Gobierno para concentrarse en sus responsabilidades espirituales. Según los resultados hechos públicos a principios de diciembre, más de 45.000 personas participaron en los comicios, en los que el actual primer ministro, Lobsang Sangay, obtuvo más del 66% de los votos. La segunda vuelta se celebrará el 20 de marzo de 2016.

China – Japón

Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Territorio, Recursos Internacional
Actores:	China, Japón

Síntesis:

La disputa entre China y Japón (y, en menor medida, Taiwán) por la soberanía y la administración de las islas Senkaku/Diaoyu (en japonés y chino, respectivamente) en el Mar de China Oriental se remonta a principios de los años setenta, cuando EEUU, que había administrado las islas desde 1945, cedió el control de éstas a Japón. La disputa por las islas Senkaku/Diaoyu, que tienen un alto valor geoestratégico y que se estima podrían albergar enormes reservas de hidrocarburos, se enmarca en las conflictivas relaciones históricas que han mantenido China y Japón desde el primer tercio del siglo XX a raíz de la invasión japonesa de China en los años treinta y durante la Segunda Guerra Mundial. La declaración unilateral en 2013 por parte de China de una nueva Zona de Identificación de Defensa Aérea que incluía a las islas en disputa, así como las acciones unilaterales de ambas partes que antecedieron y siguieron a dicha declaración por parte de Beijing, incrementaron significativamente la tensión bilateral y regional en torno a un contencioso histórico que se había gestionado de manera relativamente pacífica desde principios de los años setenta pero que, según varios analistas, contiene el potencial para provocar algún incidente militar entre ambos países e incluso para desestabilizar la región.

Se redujo sustancialmente la tensión militar y diplomática entre China y Japón por su contencioso

acerca de las islas Senkaku/Diaoyu (en japonés y chino, respectivamente) y se produjeron numerosas medidas de fomento de la confianza para mejorar las relaciones bilaterales, pero siguieron existiendo varios focos de tensión entre ambos países. En el mes de diciembre, **fuentes gubernamentales japonesas confirmaron su intención de desplegar baterías antiáereas y antibuque en la cadena de unas 200 islas del Mar de la China Oriental que van de Japón a Taiwán, así como de incrementar la presencia militar en la zona en los siguientes cinco años en un 20%, hasta los casi 10.000 efectivos.** Según algunos analistas, estos planes por parte del Gobierno japonés responden parcialmente a la presión de EEUU a algunos países para contrarrestar la creciente influencia de China en la región y ejercer un mayor control sobre su acceso al Pacífico Oriental. Además del control sobre el acceso al Pacífico Oriental y la definición de las áreas de influencia entre EEUU, Japón y China en la zona, la instalación de baterías militares y el despliegue de militares adicionales en el archipiélago también responde a la disputa acerca de las islas Senkaku/Diaoyu y, especialmente, a la creciente actividad de exploración y explotación de las reservas de gas y petróleo por parte de China en el Mar de la China Oriental. Así, en julio el Gobierno japonés declaró que la instalación de plataformas petrolíferas en la región suponía una amenaza para los intereses de su país –en parte por la posibilidad de que China instalara radares militares en dichas plataformas o las utilizara como base para helicópteros o *drones*– y una violación de un acuerdo del año 2008 por el que ambos países se comprometían a explotar conjuntamente las reservas de hidrocarburos en la región. Por su parte, China señaló que tenía el pleno de derecho de hacer prospecciones petrolíferas bajo sus aguas jurisdiccionales, pero Tokio sostiene que Japón y China no han delimitado su frontera marítima en la zona, de modo que actualmente lo que existe es una línea equidistante entre ambos países que hace las funciones de demarcación de facto. Respecto de la situación regional en su conjunto, cabe destacar las críticas contundentes de Beijing por la nuevas directrices de cooperación en materia de defensa anunciadas por Japón y EEUU en abril –que prevén una mayor implicación de Japón en asuntos de carácter global y una asistencia más explícita a EEUU ante determinadas amenazas–, por la declaración conjunta entre Japón, EEUU y Australia en la que denunciaban la política agresiva de Beijing en el Mar de la China Meridional en materia de nuevas construcciones y reclamaciones territoriales; así como por la creciente cercanía de Japón con países con los que China mantiene disputas territoriales en dicho mar, como Filipinas o Vietnam.

Japón anunció su intención de desplegar baterías antiáereas y antibuque en unas 200 islas del Mar de la China Oriental y de incrementar la presencia militar en la zona en los siguientes cinco años hasta los casi 10.000 efectivos

Las relaciones entre ambos países también se vieron afectadas por cuestiones de carácter histórico y simbólico, por las críticas a la nueva estrategia militar que está desarrollando el Gobierno de Shinzo Abe, además de por el contencioso sobre las islas Senkaku/Diaoyu. Respecto del primer punto, cabe destacar las visitas de algunos ministros (y de la mujer de Abe) y las ofrendas del propio Abe al templo Yasukuni –en el que yacen algunos de los principales responsables de los crímenes de guerra cometidos por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, calificados de mártires por algunos altos cargos del Gobierno nipón– o bien el discurso de Abe durante la conmemoración del 70º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que expresó un profundo remordimiento por el daño causado pero no pidió, tal y como exigía China, disculpas o perdón por los crímenes cometidos durante dicho período. En cuanto a la nueva estrategia de seguridad japonesa, cabe destacar las críticas por parte de China y las protestas internas que provocó la aprobación en el mes de septiembre de dos leyes que permitirán a fuerzas militares participar, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, en tareas de autodefensa colectiva en el extranjero. El Gobierno declaró que tanto estas leyes como la reinterpretación de la Constitución propuesta por su Administración no agudizarían el conflicto con China. Respecto del contencioso acerca de las islas Senkaku/Diaoyu, la tensión se redujo ostensiblemente respecto de los años anteriores, aunque el Gobierno japonés denunció que durante 2015 se habían producido incursiones de barcos guardacostas chinos en aguas japonesas en unas cuarenta ocasiones y que ambos países llevaron a cabo ejercicios y maniobras cerca de la zona en disputa. Sin embargo, durante el año se registraron importantes avances en la aproximación de posturas y en la gestión pacífica y dialogada de sus conflictos. Cabe destacar los **encuentros directos que mantuvieron los máximos dirigentes de ambos países, Shinzo Abe y Xi Jinping, en Indonesia a finales de abril y principios de mayo para mejorar las relaciones bilaterales**, así como la reunión en enero entre los ministerios de Defensa en la que acordaron la creación de mecanismos de gestión de crisis aéreas y marítimas; la reunión oficial, la primera desde 2013, entre el ministro de Exteriores japonés y el embajador chino en Japón; la celebración de la 13ª reunión del Diálogo sobre Seguridad entre China y Japón en marzo en Tokio –la primera en los últimos cuatro años– para mejorar y fortalecer las relaciones bilaterales; o la reunión de los ministros de Exteriores de China, Japón y Corea del Sur en Seúl por vez primera desde 2012 en la que se comprometieron a celebrar una cumbre trilateral.

Corea, RPD – Rep. de Corea	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema Internacional
Actores:	RPD Corea, Rep. de Corea

Síntesis:

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera *de facto* en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental. Aunque en el año 2000 los líderes de ambos países mantuvieron una reunión histórica en la que acordaron el establecimiento de medidas de confianza, tras la llegada a la presidencia surcoreana de Lee Myung-bak en el año 2007 la tensión volvió a incrementarse significativamente y volvieron a producirse algunos enfrentamientos bélicos en la frontera. Posteriormente, la muerte de Kim Jong-il a finales de 2011, sucedido en el cargo por su hijo Kim Jong-un, así como la elección de Park Geun-hye como nueva presidenta surcoreana a finales de 2012, abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

A pesar de que durante el año ambas partes llevaron a cabo algunas medidas de fomento de la confianza y mostraron su disposición a mejorar las relaciones bilaterales, **durante el mes de agosto se vivió uno de los momentos de mayor tensión de los últimos tiempos, después de que las Fuerzas Armadas de los dos países intercambiaron fuego de artillería e incrementaran su nivel de alerta hasta un escenario casi prebélico.** A mediados de julio dos soldados de Corea del Norte habían cruzado la frontera entre ambos países y regresaron a su país después de que soldados surcoreanos lanzaran disparos de advertencia, pero el hecho que provocó la crisis entre ambos países fue el estallido, a principios de agosto, de tres minas antipersonas en la zona sur de la frontera militar (denominada Zona Desmilitarizada) en el que dos soldados surcoreanos resultaron heridos. Una investigación conjunta por parte del Gobierno de Corea del Sur y de Naciones Unidas determinó que las minas habían sido instaladas por las Fuerzas Armadas norcoreanas con el objetivo de provocar bajas entre el Ejército surcoreano. A pesar de que Corea del Norte negó estas acusaciones, Seúl decidió reanudar, por primera vez en los últimos 11 años, la propaganda antigubernamental con altavoces desde la frontera. La tensión se incrementó en los días siguientes hasta que el día 20 de agosto hubo un intercambio de fuego en la frontera, aunque no se registraron víctimas mortales. Corea del Norte puso una fecha límite para el fin de la propaganda por parte de Corea del Sur y puso a sus

tropas en estado de alerta prebélica, duplicó el número de efectivos militares en la frontera y desplegó unos 50 submarinos. Por su parte, Corea del Sur también declaró estar preparada para cualquier confrontación armada y evacuó a unas 10.000 personas residentes cerca de la frontera. Finalmente, el 25 de agosto, tras unas largas conversaciones en la región fronteriza de Panmunjon (en la Zona Desmilitarizada), ambos países alcanzaron un acuerdo para mejorar las relaciones bilaterales, Corea del Sur puso fin a la mencionada propaganda y Corea del Norte lamentó el incidente con las minas antipersona. Naciones Unidas y varios Gobiernos, entre ellos el de EEUU, celebraron el acuerdo y reconocieron que en los días anteriores había estado en riesgo la estabilidad en la península coreana. A pesar de este acuerdo, en los días siguientes ambos países volvieron a intercambiar acusaciones y, a principios de septiembre, los Gobiernos de Corea del Sur y de EEUU llevaron a cabo conjuntamente ejercicios militares y maniobras navales para hacer frente a eventuales ataques norcoreanos con armas biológicas. El diálogo entre ambos países no se reanudó hasta finales de año, cuando en noviembre firmaron un acuerdo marco para llevar a cabo conversaciones a alto nivel y, ya en diciembre, llevaron a cabo una reunión a nivel viceministerial, la primera tras la escalada bélica del mes de agosto.

Además del aumento de la tensión del mes de agosto, durante el año hubo otros focos de tensión, como las severas críticas por parte de Pyongyang a los ejercicios militares que Corea del Sur y EEUU llevaron a cabo conjuntamente en varios momentos del año; la condena por parte de Corea del Sur a los distintos ensayos con misiles de corto alcance llevados a cabo por Corea del Norte y a la prueba sobre lanzamiento de misiles balísticos desde submarinos supuestamente realizada en noviembre; las críticas de Pyongyang a las previsiones de incremento de gasto militar por parte de Corea del Sur hechas públicas en abril; la alarma provocada por las presuntas declaraciones de Kim Jong-un sobre la finalización de la fabricación de una bomba de hidrógeno y los rumores sobre los ensayos de la misma que estaría preparando Pyongyang; o el **incremento de la tensión militar en la frontera marítima entre ambos países, también en disputa.** Respecto de este último aspecto, a principios de mayo Corea del Norte amenazó con disparar con fuego real y sin previo aviso a embarcaciones surcoreanas después de que 17 patrulleras de Corea del Sur sobrepasaran la demarcación fronteriza marítima reivindicada por Corea del Norte, que está situada algo más al sur que la Northern Limit Line (NLL), que hace las funciones de frontera marítima de facto entre ambos países. A mediados de mayo, Corea del Norte llevó a cabo ejercicios militares con fuego real cerca de la NLL, y a finales de mes Corea del Sur acusó a Pyongyang de construir instalaciones militares de artillería cerca de esta misma región fronteriza. También en esta zona, a finales de junio y nuevamente en octubre Seúl llevó a cabo varios disparos de advertencia a embarcaciones norcoreanas por considerar que se habían adentrado en sus aguas territoriales. Por su parte, en mayo Corea

del Sur también llevó a cabo ejercicios militares con fuego real en el Mar de Japón. Por otra parte, Corea del Sur criticó en varias ocasiones la situación de los derechos humanos en su país vecino. En este sentido, a mediados de año, algunos medios de comunicación surcoreanos se hicieron eco de informes de inteligencia acerca de la ejecución pública del ministro de Defensa norcoreano por haber desoído en varias ocasiones directrices directas de Kim Jong-un y publicaron que unos 15 altos cargos habían sido ejecutados en 2015 por orden de Kim Jong-un, informaciones desmentidas tajantemente por el Gobierno norcoreano. En diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que condenaba la situación de los derechos humanos en Corea del Norte y en la que instaba al Consejo de Seguridad, que días antes había abordado este mismo tema, a remitir el asunto a la Corte Penal Internacional.

En agosto la relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur vivieron uno de los momentos de mayor tensión de los últimos tiempos y se situaron en un escenario casi prebélico

A pesar de todos estos ejes de tensión, durante el año ambas partes reiteraron su disposición a acercar posiciones y llevaron a cabo varias medidas de fomento de la confianza, como la liberación por parte de Corea del Norte de dos personas surcoreanas que en abril se habían adentrado en territorio norcoreano a través de la frontera con China; el envío de fertilizante de Seúl a Corea del Norte por primera vez en cinco años; una marcha internacional a la zona desmilitarizada para exigir el fin formal de la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, la reunificación de las familias separadas por dicha guerra y una mayor participación de las mujeres en las conversaciones que mantienen ambos países; el inicio de las conversaciones sobre el posible canje a cambio de dinero de los aproximadamente 500 prisioneros de la Guerra de Corea que permanecen en Corea del Norte –algunos llevando a cabo trabajos forzados, según organizaciones de derechos humanos– y de las más de 500 personas que Seúl considera que han sido abducidas por el Gobierno norcoreano (por ejemplo, miembros de embarcaciones surcoreanas retenidos en el país vecino). Además, a finales de octubre, **cientos de personas (400 solamente en Corea del Sur) participaron durante varios días en la localidad norcoreana de Mount Kumgang en una serie de reuniones de familias separadas por la Guerra de Corea (1950-53)**. Se estima que hay un millón de familias afectadas y solamente en Corea del Sur hay 70.000 personas en lista de espera para participar en alguna de estas reuniones familiares, la última de las cuales tuvo lugar a principios de 2014. Desde el inicio de este tipo de encuentros poco después del año 2000 –probablemente el momento en el que las relaciones bilaterales han sido más cercanas y en el que más se ha avanzado en aras de la reconciliación y la reunificación de ambos países– casi 19.000 personas han participado en 19 encuentros presenciales y otras casi 4.000 personas han contactado a través de videoconferencia. Por otra parte, en varios momentos del año ambas partes declararon su disposición a

acercar posiciones. Cabe destacar el discurso pronunciado a principios del 2015 por el líder norcoreano Kim Jong-un, en el que, a pesar de criticar los ejercicios militares conjuntos que cada año realizan Corea del Sur y EEUU, no descartó la celebración de una cumbre de alto nivel y a la vez sugirió su disposición a decretar una moratoria temporal sobre los ensayos nucleares a cambio de que EEUU declinara participar en los mencionados ejercicios militares. Sin embargo, EEUU rechazó dicha propuesta alegando que no se puede equiparar unos ejercicios militares rutinarios con un programa nuclear que viola varias resoluciones de Naciones Unidas. En junio, coincidiendo con el 15º aniversario de la mencionada cumbre intercoreana, Pyongyang mostró su disposición al diálogo si se cumplían tres condiciones: el fin de los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y EEUU, la retirada de las sanciones por parte de Corea del Sur y el fin de cualquier forma de propaganda desde Corea del Sur, como los panfletos lanzados desde globos aerostáticos.

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea

Intensidad: 2

Evolución: =

Tipología: Gobierno
Internacional

Actores: RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

Síntesis:

La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea del Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

Como en años anteriores, siguió registrándose una intensa actividad diplomática para lograr la reanudación de las conversaciones multilaterales sobre la desnuclearización de la península coreana, pero durante el año se incrementó sustancialmente la preocupación entre la comunidad internacional por los avances en el programa nuclear norcoreano. En varios momentos del año, el propio Gobierno norcoreano hizo declaraciones públicas sobre

los avances cualitativos y cuantitativos de su programa nuclear, así como sobre su disposición a utilizarlo ante determinadas circunstancias. En mayo, por ejemplo, **Pyongyang advirtió sobre mejoras importantes en la precisión de sus cohetes –no solamente de los de corto y medio alcance, sino también de los intercontinentales– y en su capacidad de miniaturizar cabezas nucleares para adosarlas a misiles balísticos intercontinentales.** Este último hecho, uno de los principales temores por parte de la comunidad internacional, ya había sido avanzado en enero en un informe de dos especialistas sobre Corea del Norte. Este mismo informe advertía sobre la posibilidad de que hacia el año 2020 Pyongyang dispusiera de entre 20 y 100 bombas nucleares (se estima que desde el año 2003 se pueden haber producido entre 13 y 16). La parte superior de la horquilla presentada en el mencionado informe supone un incremento sustancial respecto de estimaciones anteriores, pero coincidiría, según fuentes periodísticas, con los cálculos realizados por el Gobierno chino. El informe también mencionaba que tanto el programa nuclear como el de misiles tenían prevista una notable inversión de cara a los siguientes cinco años y sostenía que actualmente el Gobierno norcoreano dispondría de unos 1.000 misiles balísticos (incluyendo algunos de largo alcance). Respecto de esta última cuestión, cabe destacar los informes de inteligencia que apuntaban a una notable mejora de las instalaciones y plataformas de lanzamiento de misiles, cohetes y satélites, así como la preocupación internacional que provocó el lanzamiento, a principios de mayo, de un misil balístico desde un submarino. Varios analistas cuestionaron la veracidad de las imágenes con las que el Gobierno norcoreano quería demostrar su ensayo y señalaron que Corea del Norte estaba muy lejos de poder llevar a cabo tal ensayo, pero lo cierto es que varios Gobiernos condenaron la acción por considerarla una clara violación de varias resoluciones de Naciones Unidas. Pocos días después de la mencionada prueba, los Gobiernos de EEUU, Corea del Sur y Japón se reunieron y acordaron incrementar la presión política y militar e implementar las sanciones ya existentes contra Corea del Norte con el fin de frenar la expansión de su programa nuclear.

En septiembre, el Gobierno norcoreano declaró estar ultimando la tecnología balística necesaria para poner en órbita satélites meteorológicos. A pesar de que oficialmente Corea del Norte defendió su derecho a desarrollar un programa pacífico de satélites, varios gobiernos declararon que la intención de Pyongyang era, coincidiendo con el 70º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores el 10 de octubre, llevar a cabo un ensayo con misiles balísticos de largo alcance, algo que según EEUU y Corea del Sur violaría varias resoluciones de Naciones Unidas. Aunque finalmente no se produjo el mencionado ensayo, la tensión se incrementó notablemente en la región por las advertencias del Gobierno de EEUU sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Corea del Norte, por sus declaraciones favorables a la instalación de un sistema antimisiles en territorio surcoreano o por el despliegue por parte de Seúl de un barco destructor equipado

con tecnología de combate Aegis en el Mar de Japón. Por su parte, Pyongyang anunció la reapertura a pleno rendimiento del principal reactor nuclear del país (en Yongbyon) tras varios años inactivo. Dicho reactor, sobre cuya actividad ya había advertido en enero el centro académico US-Korean Institute, de la John Hopkins University a través de imágenes por satélite, se considera una de las principales fuentes de producción de plutonio y enriquecimiento de uranio, ambos necesarios para el desarrollo de armamento nuclear. En los últimos meses del año, volvió a incrementarse la tensión regional por los informes de inteligencia que sugerían que Corea del Norte estaría preparando nuevos ensayos nucleares; por una nueva prueba, fallida, de lanzamiento de un misil balístico desde un submarino en noviembre; por la publicación de imágenes por satélite que sugerirían una mejora significativa en la mayor instalación de lanzamiento de satélites de Corea del Norte (en Sohae) y nueva actividad en las instalaciones de ensayos nucleares subterráneos de Punggye-ri –en las que se han llevado a cabo los tres ensayos registrados hasta el momento–; o por la declaraciones que realizó en diciembre Kim Jong-un señalando que su Gobierno había desarrollado una bomba de hidrógeno y que ésta sería testada en un futuro cercano. En clave positiva, cabe destacar las numerosas gestiones diplomáticas para reanudar las conversaciones multilaterales. Así, en marzo el Gobierno surcoreano declaró que China, Rusia, Corea del Sur, Japón y EEUU habían alcanzado (y puesto en conocimiento de Corea del Norte) un consenso mínimo sobre las condiciones para reanudar dicho diálogo. Por otra parte, **la presidenta surcoreana, Park Geun-hye, con motivo de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, instó a la comunidad internacional a seguir el ejemplo del acuerdo con Irán y a resolver el conflicto acerca del programa nuclear de Corea del Norte, a su parecer el último reto importante en términos de no proliferación nuclear de la comunidad internacional.** Park Geun-hye declaró que si Corea del Norte optara por la senda del diálogo y no de la confrontación, su Gobierno y la comunidad internacional se implicarían activamente en la reconstrucción económica del país.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (Mindanao)	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, facciones de los grupos armados MILF y MNLF
Síntesis:	El conflicto armado en Mindanao se remonta a finales de los años sesenta, fecha en la que Nur Misuari fundó el MNLF para exigir a Manila la autodeterminación del pueblo moro, un conjunto de grupos etnolingüísticos islamizados y organizados políticamente en sultanatos independientes desde el siglo XV. El MILF, por razones estratégicas, ideológicas y de liderazgo, se escindió del MNLF a finales

de los años setenta. Mientras que el MNLF firmó un acuerdo de paz en 1996 en el que se preveía cierta autonomía para las áreas de Mindanao de mayoría musulmana (Región Autónoma del Mindanao Musulmán), el MILF prosiguió la lucha armada, a pesar de que en 1997 ambas partes iniciaron conversaciones de paz, facilitadas por Malasia, y de que en el año 2003 firmaron un acuerdo de alto el fuego supervisado por una misión internacional. La firma de un acuerdo de paz preliminar en octubre de 2012 y la reducción sustancial y sostenida de los enfrentamientos entre el MILF y las Fuerzas Armadas hasta niveles prácticamente irrelevantes hizo que el conflicto armado dejara de ser considerado como tal en el año 2012. Sin embargo, los niveles de violencia en Mindanao continuaron siendo elevados por los enfrentamientos entre el Gobierno y el BIFF (una escisión del MILF que se opone al proceso de paz), así como por los incidentes armados esporádicos entre el MILF y otros grupos armados que operan en la región.

A pesar de que el proceso de paz entre el Gobierno y el MILF siguió su curso, la tensión entre ambas partes se incrementó notablemente por dos motivos. En primer lugar, por las dificultades en la implementación del mencionado acuerdo de paz, principalmente por la aprobación de la denominada Bangsamoro Basic Law (BBL).⁴⁷ En este sentido, **el MILF advirtió sobre la posibilidad de poner fin al proceso de desarme y desmovilización si finalmente se aprobaba una versión de la BBL que se aleje de la letra y espíritu del acuerdo de paz de 2014 y de las expectativas del MILF.** Dicho proceso se inició en junio con una ceremonia de entrega simbólica de armamento y debería continuar con la entrega del 30% del arsenal del MILF tras la ratificación de la mencionada BBL; otro 35% una vez haya tomado posesión el gobierno de la nueva entidad de la Región Autónoma de Bangsamoro; y el 35% final una vez ambas partes hayan firmado el acuerdo conforme se han implementado todos los contenidos del acuerdo de paz. El segundo factor que erosionó la confianza entre las partes y que tuvo una enorme repercusión política y social fue el enfrentamiento a finales de enero entre un cuerpo especial de la Policía y efectivos del MILF, el BIFF y otros grupos armados en la localidad de Mamasapano, en el que murieron alrededor de 70 personas, 44 de ellas policías. Este fue el mayor (y prácticamente el único) episodio de violencia de gravedad que se registró en los últimos tres años entre el Gobierno y el MILF, que en paralelo a las negociaciones de paz mantenían un acuerdo de alto el fuego. El principal objetivo del operativo especial de la Policía era la captura de dos expertos en explosivos, Zulkifli bin Hir, alias Marwan, de origen malasio, y Abdul Basit Usman. El primero falleció durante el operativo y el segundo consiguió huir, pero en mayo falleció en Maguindanao durante una operación que contó con la activa participación del MILF. Ante las acusaciones que se vertieron contra el MILF por connivencia con organizaciones terroristas o bien por la brutalidad con la que habría actuado durante el enfrentamiento contra la Policía, en marzo

el MILF hizo público un informe sobre los hechos en el que acusaba al Gobierno de no haber comunicado ni coordinado previamente un operativo policial que se llevó a cabo en áreas de su influencia, y además acusó al comando de la Policía de disparar primero y romper así el acuerdo de alto el fuego. Por su parte, numerosas voces pidieron la dimisión del presidente por haber autorizado el mencionado operativo policial y a la vez presionaron al presidente Benigno Aquino para que pusiera fin al proceso de paz con el MILF. Tras varios meses de investigación, a finales de septiembre el Departamento de Justicia recomendó la presentación de cargos criminales contra 90 personas (26 del MILF, 12 del BIFF y 52 de otros grupos armados y de personas sin ninguna afiliación) por su presunta participación en el mencionado episodio de violencia, en el que algunas fuentes sostienen que podrían haber participado alrededor de un millar de personas.

Por su parte, el MNLF no protagonizó episodios de violencia significativos, pero sí participó en algunos enfrentamientos esporádicos con otros grupos como el MILF o el BIFF. A mediados de febrero, por ejemplo, la Policía declaró que el BIFF había prendido fuego contra varias casas de miembros del MNLF durante la ocupación temporal de varias localidades del municipio de Pikit (provincia de Cotabato). En estas mismas fechas, algunas fuentes periodísticas señalaron que el fundador del grupo, Nur Misuari (en paradero desconocido desde el sitio a la ciudad de Zamboanga a finales de 2013), habría ordenado a sus simpatizantes su reorganización y rearme en las regiones de Sulu y en Mindanao ante la ofensiva por parte del Gobierno contra grupos que no apoyan el actual proceso de paz entre el Gobierno y el MILF. A pesar de que algunas facciones del MNLF siguieron criticando el proceso de paz entre el Gobierno y el MILF –por temor a que acabe eclipsando o invalidando el acuerdo de paz de 1996 entre Manila y el MNLF–, a mediados de noviembre representantes del MILF se reunieron con Nur Misuari en Sulu. Aunque no trascendieron los detalles del encuentro, ambas partes reconocieron que se discutieron algunas iniciativas de paz en la región y que se acordó la celebración de una segunda reunión. El Gobierno valoró positivamente este encuentro por considerar que contribuye al acercamiento de posiciones entre el MILF y el MNLF y que da continuidad y sentido al Foro de Coordinación Bangsamoro, creado en 2010 bajo los auspicios de la Organización de la Conferencia Islámica para discutir las diferencias entre ambos grupos y lograr una mejor coordinación y convergencia entre las negociaciones que Manila sostiene en paralelo con el MILF y con el MNLF. Finalmente, cabe destacar que la facción del MNLF liderada por Misuari declaró haber enviado formalmente al Comité de Descolonización de Naciones Unidas sus peticiones de reconocimiento de autodeterminación para el pueblo moro y su opción por la independencia de la región.

47. Véase el resumen sobre Filipinas (MILF) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Indonesia (Papúa Occidental)	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social (organizaciones autonomistas o secesionistas, indigenistas y de derechos humanos), grupos indígenas papús, empresa minera Freeport

Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papúa y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport (una de las mayores del mundo) o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

No se registraron enfrentamientos de envergadura entre las Fuerzas Armadas y el OPM, aunque siguieron produciéndose movilizaciones a favor de la autodeterminación de Papúa y actos de protesta contra la precaria situación de los derechos humanos en la región y las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegados en Papúa. En cuanto a los hechos esporádicos de violencia, además de algunos ataques puntuales del OPM, cabe destacar la detención de un centenar de personas y la quema de decenas de casas en la localidad de Utikini (cerca de Timika) en enero a manos del Ejército, según la organización United Liberation Movement for West Papua (ULMWP); el asesinato en enero de dos funcionarios y un guardia de seguridad privada de la empresa extractiva Freeport, una de las mayores del mundo; los incidentes en febrero durante las protestas contra los hechos acontecidos en diciembre de 2014, cuando según Human Rights Watch cinco personas murieron y otras 17 resultaron heridas después de que la Policía disparara contra una movilización de unas 800 personas; el asesinato de tres policías en la región de Puncak en diciembre; las denuncias sobre asesinatos y varios abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado durante las movilizaciones para celebrar el día de la Independencia de Papúa (1 de diciembre); o bien el incendio de una pequeña mezquita y varias casas en la región de Tolkiara a finales de julio, coincidiendo con la celebración de la festividad musulmana Eid al-Fitr. Respecto de este último incidente, autoridades estatales provinciales y

locales instaron a la calma, iniciaron una investigación de los hechos –algunos medios señalaron que los responsables de este ataque fueron miembros de una iglesia cristiana denominada Gereja Injili di Indonesia– y advirtieron sobre el peligro que entrañan estos incidentes entre distintas confesiones, poniendo como ejemplo la situación que se vivió en Molucas o Sulawesi a finales de la década de los noventa.

A pesar de estas dinámicas de violencia, durante el año el presidente, Joko Widodo, viajó en algunas ocasiones a Papúa y anunció varias medidas conciliadoras hacia la región. En mayo, **Joko Widodo declaró su intención de abrir una nueva etapa en las relaciones entre el Gobierno y Papúa Occidental, de prestar especial atención a la región y de mejorar la situación de los derechos humanos y el bienestar de la población.** Poco antes del inicio de la visita, la cuarta en un año, el Gobierno anunció la liberación de cinco presos políticos (en 10 años de mandato del anterior presidente solamente uno fue liberado) y el levantamiento de las restricciones de acceso a los periodistas. Días antes se habían producido movilizaciones simultáneas en 10 países y 22 ciudades y se habían recogido unas 47.000 firmas para exigir el libre acceso de la prensa a Papúa. Posteriormente, en el mes de junio, el Gobierno anunció su intención de liberar a decenas de presos políticos, lanzar proyectos de infraestructuras y abordar el problema de desempleo en Papúa. Además, algunos medios informaron sobre la intención del presidente de poner fin a las políticas de migración hacia Papúa por considerar que éstas provocan serios problemas en la región –desde la anexión de Papúa a Indonesia en 1969, cientos de miles de personas han llegado a Papúa al amparo de estos programas–. Sin embargo, pocos días más tarde, el ministro de Transmigración declaró que estos programas habían sido exitosos y, por tanto, se incrementarían en el futuro. En el plano internacional, cabe destacar que **el grupo regional Melanesian Spearhead Group (MSG), durante la cumbre celebrada a mediados de junio en Islas Salomón, decidió conceder el estatus de observador a la ULMWP, así como otorgar el estatus de miembro asociado a Indonesia,** país en el que viven unos 11 millones personas melanesias. A pesar de que la ULMWP había presentado una solicitud para ser miembro de pleno derecho, su secretario general declaró que esta decisión permitiría llamar la atención de la comunidad internacional acerca de la situación de los derechos humanos en la región. Por otra parte, el Gobierno de Indonesia expresó su malestar y recordó la importancia del principio de no interferencia durante la cumbre del Foro de las Islas del Pacífico que se celebró a mediados de septiembre en Papúa Nueva Guinea, en la que el Gobierno de Islas Salomón planteó la concesión del estatus de observador a la ULMWP en representación del pueblo papúa, la conformación de una misión de alto nivel para conocer de primera mano la situación en Papúa, y la inclusión de dicha región en el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, conocido como el Comité de los 24.

Myanmar	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social (partido opositor NLD), grupo 969

Síntesis:

Un golpe de Estado en 1962 dio comienzo al Gobierno de la Junta Militar que desde entonces se ha mantenido en el poder. El Gobierno militar abolió el sistema federal e impuso una férrea dictadura, conocida como “vía birmana al socialismo”. En 1988, la crisis económica llevó a miles de personas a manifestar su descontento en la calle, protestas que fueron duramente reprimidas por el régimen militar dejando un saldo de 3.000 muertos. No obstante, el Gobierno convocó unas elecciones cuyo resultado nunca reconoció, tras haber resultado vencedora la líder de la oposición democrática Aung San Suu Kyi, quien posteriormente fue arrestada, situación en la que permaneció hasta 2010. En el año 2004, el Gobierno dio inicio a un proceso de reforma de la Constitución en un intento de ofrecer una imagen aperturista del régimen, proceso desacreditado por la oposición política a la dictadura. En el año 2007 la oposición política y numerosos monjes budistas lideraron intensas protestas sociales contra el régimen militar que fueron duramente reprimidas. En el año 2010 se celebraron elecciones generales que fueron calificadas de fraudulentas por la comunidad internacional y la oposición interna pero el Gobierno inició un proceso de reformas encaminadas a la democratización del país.

La situación política de Myanmar experimentó una mejora importante como consecuencia de la celebración de las primeras elecciones generales consideradas creíbles, justas y transparentes tanto por la oposición política como por observadores internacionales. No obstante, en algunas zonas afectadas por el conflicto armado las elecciones no pudieron celebrarse. Los comicios, que se llevaron a cabo en el mes de noviembre, **fueron ganados de forma abrumadora por la NLD de Aung San Suu Kyi, principal partido de la oposición, que obtuvo el 79% de los escaños sometidos a escrutinio electoral y que logró garantizar también la mayoría incluso teniendo en cuenta el 25% de los escaños que se reservan al Ejército.** Esta victoria permitirá no solo legislar, sino también la designación de dos de los tres candidatos presidenciales y garantizar la elección del futuro presidente del país una vez finalizado el periodo de transición establecido de 130 días hasta la formación de un nuevo Gobierno.⁴⁸ No obstante, la formación vencedora deberá hacer frente a diferentes obstáculos puesto que el régimen birmano seguirá manteniendo importantes cotas de poder. A pesar del resultado electoral, la Constitución del país impide que Aung San Suu Kyi pueda ser la próxima presidenta de Myanmar debido a la cláusula que veta para el cargo

El partido de la líder opositora, Aung San Suu Kyi, ganó las elecciones generales en Myanmar, obteniendo el 79% de los escaños electos

a las personas con hijos extranjeros. Por otra parte, la Constitución también reserva para el Ejército los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos, de enorme importancia en Myanmar. Aung San Suu Kyi invitó al jefe de las Fuerzas Armadas, al presidente Thein Sein y al portavoz del Parlamento a llevar a cabo un diálogo para la formación de un Gobierno de reconciliación nacional. En diciembre tanto el Gobierno como la NLD formaron sendos comités para gestionar la transferencia de poderes entre gobiernos y el Presidente Thein Sein señaló que el Gobierno saliente facilitaría la transición. A pesar del reconocimiento generalizado de que las elecciones han sido las más limpias de las celebradas en el país, cabe destacar que un millón de personas rohingyas no pudieron ejercer su derecho al voto dada su condición de apátridas tras haber sido excluidas del censo y habérseles impedido la posibilidad de identificarse como rohingyas.

De hecho, **uno de los grandes focos de tensión en el país fue la situación de la población rohingya y la grave crisis humanitaria que atravesó este colectivo durante el año.** Solo durante el primer trimestre del año 10.000 personas rohingyas huyeron de Myanmar como consecuencia de la violencia y la persecución que sufren, además de las precarias condiciones de vida fruto de la exclusión. Desde que en 2012 se produjo el inicio de la violencia comunitaria en el estado de Rakhine, 140.000 personas rohingyas han tenido que desplazarse de manera forzada. Especialmente grave fue la situación de miles de personas que quedaron a la deriva en el mar de Andaman cuando en el mes de mayo el Gobierno de Tailandia llevó a cabo una operación contra el tráfico de personas que impidió la llegada de la población desplazada a este país. Amnistía Internacional denunció que cientos o miles de personas podrían haber muerto en su huida de Myanmar como consecuencia de la persecución por Tailandia y las condiciones a las que someten a la población desplazada las redes de tráfico de personas. Naciones Unidas destacó la necesidad urgente de asistencia humanitaria de 400.000 personas rohingya en Myanmar.

Tailandia	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Aunque ya desde la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 numerosos sectores denunciaron su estilo autoritario, su campaña contra el narcotráfico (en la que

48. Véase “La transición a la democracia y la paz en Myanmar” en el capítulo 5 (Oportunidades de paz para 2016).

murieron más de 2.000 personas) o su aproximación militarista al conflicto en el sur, la crisis sociopolítica que ha padecido Tailandia en los últimos años escaló en 2006. Ese año, tras hacerse público un caso de corrupción, se registraron masivas movilizaciones para exigir la renuncia de Thaksin Shinawatra hasta que, en el mes de septiembre, una junta militar llevó a cabo un golpe de Estado que le obligó a exiliarse. A pesar de que en agosto de 2007 fue aprobada en referéndum una nueva Constitución, el nuevo Gobierno no logró disminuir la polarización política y social en el país. Así, un partido leal a Thaksin Shinawatra ganó los comicios de diciembre de 2007. Sin embargo, durante el año 2008 los numerosos actos de violencia y las movilizaciones masivas en contra del Gobierno convocadas por la Alianza Popular para la Democracias (movimiento conocido como “camisas amarillas”) provocaron la renuncia de dos primeros ministros y la llegada al poder en diciembre de 2008 de Abhisit Vejjajiva, opositor a Thaksin Shinawatra. Desde entonces, se producen de forma periódica manifestaciones multitudinarias del Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura (movimiento conocido como “camisas rojas”, que apoya el retorno del ex primer ministro Thaksin Shinawatra) para exigir la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Siguieron produciéndose protestas y críticas contra la Junta Militar por su progresiva institucionalización y, según algunas voces, voluntad de perpetuación en el poder, pero el hecho que generó mayor atención política y mediática fue el estallido el 17 de agosto de un artefacto explosivo en el santuario hindú de Erawan, en Bangkok, frecuentado habitualmente por turistas, en el que murieron 20 personas –dos terceras partes extranjeras– y más de 120 resultaron heridas. **El Gobierno y varios medios de comunicación consideraron este ataque como el peor atentado de la historia del país.** Al día siguiente, otro artefacto explosivo estalló en un embarcadero de un ferry público en Bangkok, aunque sin provocar víctimas mortales. Ninguna persona u organización reivindicó la autoría del atentado, lo cual generó informaciones y teorías contradictorias y confusas sobre las circunstancias del estallido. En los días posteriores al atentado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado iniciaron una operación de gran escala en la que 139 personas fueron arrestadas y más de 4.600 viviendas fueron registradas. A finales de septiembre, la Policía dio la investigación por cerrada, declarando que dos personas detenidas habían confesado haber llevado a cabo el atentado como respuesta a la ofensiva del Estado contra organizaciones de tráfico de personas. Anteriormente el hecho de que uno de los dos principales responsables del atentado fuera uigur y que más de un tercio de las víctimas mortales fueran chinas había sustentado la tesis de un posible vínculo entre el atentado y la deportación a China de más de 100 personas de etnia uigur en julio, pero la Policía descartó tanto esta posibilidad como la de que el atentado estuviera vinculado al terrorismo internacional. Sin embargo, el Gobierno no descartó la vinculación entre el atentado y la crisis política que vive el país desde hace años, y que motivó el golpe de Estado de 2014.

Numerosas voces criticaron a la Junta Militar tailandesa por intentar garantizar su perpetuación en el poder e impedir la normalización democrática del país

Durante el año se produjeron numerosas críticas (por parte de ONG, gobiernos e incluso organismos internacionales) por la precaria situación de los derechos humanos, por los presuntos intentos de la Junta Militar de perpetuarse en el poder y por las políticas de control y represión de la oposición por parte del Ejecutivo. Respecto de este último punto, en abril el primer ministro, el general Prayuth Chan-ocha, anunció la retirada de la ley marcial y la entrada en vigor del artículo 44 de la Constitución interina, que entre otras cuestiones faculta al primer ministro a adoptar medidas sin la autorización del poder legislativo cuando considere que así lo requiere la seguridad nacional del país. En este sentido, algunas voces críticas, incluyendo Naciones Unidas, declararon que el artículo 44 podría ser aún más autoritario que la ley marcial mientras que otras, como la organización de derechos humanos Human Rights Watch, instaron a los países cercanos a Tailandia a ejercer una presión concertada sobre la actual Junta Militar para detener lo que consideran una deriva hacia un régimen dictatorial. Otro de los factores que provocó mayores protestas fue la **aprobación de un proceso de *impeachment* en enero por parte de la Asamblea Nacional Legislativa contra la ex primera ministra Yingluck Shinawatra –que le comporta una inhabilitación de cinco años para ejercer la política– y el posterior inicio del juicio por negligencia en relación a unos subsidios gubernamentales a campesinos del sector del arroz**, en el que ella se ha declarado inocente y que podría comportarle una pena de hasta diez años de cárcel. Por otra parte, pocos días después de que la Fiscalía presentara cargos contra la ex primera ministra, la Comisión Nacional Anticorrupción procesó a 250 antiguos parlamentarios por su papel en la aprobación de una enmienda a la Constitución de 2007, lo que les puede comportar una inhabilitación de cinco años de actividad política. En la última década se ha prohibido cualquier actividad política a unos 150 miembros de los partidos políticos cercanos a la familia Shinawatra, incluidos cuatro personas que han ejercido la jefatura de gobierno. También cabe destacar el ingreso en prisión en marzo de tres hermanos de la antigua princesa Srirasmee Suwadee –divorciada del príncipe Maha Vajiralongkorn y a la que se le retiró el título real en diciembre de 2014 –tras ser condenados a penas de cinco años y medio por insultar a la monarquía o el arresto de tres líderes opositores de la organización conocida como “camisas rojas”, tradicional simpatizante de los Gobiernos de Yingluck y Thaksin Shinawatra.

El Gobierno militar también recibió numerosas críticas por llevar a cabo varias medidas que algunas voces consideraban estar destinadas a garantizar la perpetuación en el poder de la Junta Militar y a impedir la normalización democrática del país. A principios de septiembre el Consejo de Reforma Nacional (CRN) rechazó la propuesta de nueva Constitución elaborada durante meses por el Comité de Redacción de la

Constitución, obligando a la Junta a tener que volver a nombrar un nuevo organismo encargado de redactar un nuevo borrador de Constitución y postergando en varios meses la celebración de nuevas elecciones generales. Si la propuesta de Constitución hubiera sido aprobada, se habría celebrado un referéndum para su ratificación en enero. Algunos analistas consideran que, si bien había varias provisiones en el borrador de Constitución que suscitaban polémica, el rechazo del mismo habría sido orquestado por la propia Junta, como así lo atestiguaría el hecho de que numerosos militares miembros del CRN se hubieran opuesto al texto. En octubre, el Gobierno nombró a los 200 miembros de un nuevo organismo en sustitución del extinto Consejo de Reforma Nacional y a la vez conformó un comité encargado de redactar un borrador de nueva Constitución que debería estar listo para el 1 de abril de 2016. Ante las críticas recibidas por esta cuestión, el propio primer ministro, el general Prayuth Chan-ocha, tuvo que reiterar públicamente su compromiso de volver a instituir una democracia en Tailandia, pero a la vez rechazó dismantelar el Consejo Nacional para la Paz y el Orden hasta que no haya culminado todo el proceso de reformas que considera necesario.

2.3.4. Europa

Europa Oriental

Moldova (Transdniestria)	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transdniestria, Rusia

Síntesis:

Transdniestria, un territorio de 4.000 km² y medio millón de habitantes, de mayoría de población eslava, legalmente bajo soberanía de Moldova y en la práctica independiente, es escenario desde los años noventa de un conflicto no resuelto en torno a su estatus. El conflicto emergió en la etapa final de la URSS, cuando se incrementaron los temores en Transdniestria sobre una posible unificación entre una Moldova independiente y Rumanía. La región se declaró independiente de Moldova, que a su vez proclamó su independencia en 1991. Hubo escalada de incidentes que derivaron en un conflicto armado en 1992. Se alcanzó un acuerdo de alto el fuego ese mismo año, que puso fin a la guerra de varios meses. Las tropas rusas presentes en Transdniestria desde la etapa soviética pasaron a ser tropas de mantenimiento de la paz, mientras Moldova reclamó en años sucesivos su salida. Desde el fin de la guerra las partes negocian con facilitación de la OSCE de manera intermitente para resolver el conflicto. El conflicto armado iniciado en Ucrania en 2014, país fronterizo con Transdniestria, aumentó las alarmas por los posibles impactos en Moldova y su conflicto no resuelto.

Se deterioró la situación de conflicto no resuelto entre Moldova y la región de Transdniestria, en parte por

contagio de la guerra en Ucrania, todo ello en un contexto general de incremento de la tensión política y social en Moldova y la caída de su Gobierno a finales de año. Las autoridades de Transdniestria y **Rusia denunciaron un bloqueo a las fuerzas rusas presentes desde el fin de la guerra de los noventa en Transdniestria, denunciando medidas por parte de Ucrania y de Moldova** al respecto (revocación de Ucrania en el segundo trimestre de cinco acuerdos de cooperación militar, incluyendo el que permitía el paso de tropas rusas por territorio ucraniano hasta Transdniestria, y medidas prácticas de Moldova de restricción a la entrada de soldados rusos). Las autoridades de Transdniestria denunciaron la militarización de la frontera ucraniana, mientras Kiev negó tales afirmaciones. A su vez, Rusia llevó a cabo ejercicios militares en abril en Transdniestria, con varios cientos de soldados. Asimismo, organizaciones de Transdniestria se pronunciaron conjuntamente expresando alarma por la situación en la región e instando a Rusia a actuar de garante. De fondo se proyectaba también la crisis internacional de Ucrania y los riesgos señalados por algunos medios y expertos en torno a la frontera de Transdniestria con la región de Odesa en Ucrania. En contraste, el proceso de diálogo de paz se mantuvo activo y se produjo en marzo la primera reunión bilateral de alto nivel entre Moldova y Transdniestria, entre el primer ministro moldavo, Chiril Gaburici, y el líder de la entidad secesionista, Yevgeny Shevchuk. Ambas partes acordaron darle impulso al diálogo. No obstante, no se lograron pasos significativos el resto del año y el proceso se vio afectado por la incertidumbre política en Moldova. Así, en noviembre **las autoridades de Transdniestria afirmaban que las relaciones con Moldova se habían deteriorado** y denunciaron que Moldova evadía los contactos con Transdniestria alegando la interinidad del Gobierno moldavo. El Gobierno secesionista señaló que existían muchos problemas entre las partes en conflicto, incluyendo la decisión de Moldova y Ucrania de instalar puestos de control conjuntos en la frontera con Transdniestria y los procesos penales contra cargos de Transdniestria.

Como parte de la crisis interna en Moldova, el primer ministro moldavo, Chiril Gaburici, dimitió en junio tras un escándalo, y su Gobierno lo hizo poco después, en un contexto de fuertes polémicas por corrupción con denuncias de fraude masivo en tres bancos moldavos antes de las elecciones parlamentarias de noviembre de 2014. **La situación en Moldova se agravó en septiembre, con protestas antigubernamentales contra la corrupción y la mala praxis política, lideradas por la plataforma ciudadana Dignidad y Verdad, que reclamó la dimisión del presidente y de varios responsables de agencias estatales, así como elecciones anticipadas.** La marcha del 6 de septiembre, con 60.000 personas, fue calificada como la más masiva desde la independencia del país, si bien la participación fue disminuyendo en meses sucesivos. El presidente rechazó toda posibilidad de dimisión, mientras el ex primer ministro Vlad Filat —en ese cargo entre 2009 y 2013 y abanderado de la coalición pro-UE— fue detenido en octubre en relación

con el caso de corrupción investigado. A finales de septiembre se iniciaron movilizaciones lideradas por partidos pro-rusos, en paralelo a las organizadas por la plataforma cívica. Las protestas antigubernamentales de unos y otros se prolongaron en meses siguientes, con algunos choques violentos esporádicos, en la capital y en otras ciudades. Finalmente, el Parlamento moldavo aprobó a finales de octubre una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro Valeriu Strelet (65 votos a favor de los 101 escaños), con el apoyo del Partido Democrático –miembro de la coalición gubernamental– que se unió en su voto al partido pro-ruso Partido Socialista así como al Partido Comunista. No obstante, el Partido Democrático descartó buscar nuevo gobierno con el Partido Socialista o el Partido Comunista. Tras la moción de censura, el Parlamento pasaba a tener un plazo de tres meses para aprobar un nuevo gobierno o, si no, convocar elecciones anticipadas. A finales de diciembre aún no había sido posible alcanzar acuerdo. Según algunos análisis, nuevas elecciones podrían a su vez suponer una subida de los partidos pro-rusos Partido Socialista y Nuestro Partido. Durante el año, algunos expertos alertaron ya de la pauta de fragmentación política territorial tras las elecciones locales de junio. Todo ello añadía incertidumbre al conflicto con Transdniestria. Asimismo, la tensión aumentó también con el anuncio de **detención en noviembre de 13 supuestos miembros de un grupo paramilitar que supuestamente planeaban un ataque en la capital y en la segunda ciudad del país, Balti (norte, de mayoría ruso-hablante)**, con el fin de crear una república independiente. La Policía afirmó que uno de los sospechosos procedía del este de Ucrania y que el grupo pretendía liberar a presos para reclutarlos para atacar compañías privadas y residencias de cargos oficiales en Balti.

Se deterioraron las relaciones entre el Gobierno moldavo y las autoridades de Transdniestria, mientras Moldova afrontó una crisis política y social interna

Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transdniestria, Rusia
Síntesis:	La tensión entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente <i>de facto</i> – está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991

y 1994. Éste comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre ésta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego.

Se incrementó notablemente la tensión asociada al conflicto no resuelto entre Azerbaiyán y las fuerzas armadas de Armenia y Nagorno-Karabaj, en torno al estatus y control de este último y de los distritos bajo control armenio que lo rodean, con varias decenas de víctimas mortales. **La escalada se produjo por el incremento de violaciones del alto el fuego y, especialmente, el uso de morteros y otras armas pesadas, lo que supuso un mayor impacto en civiles, incluyendo víctimas mortales. Según diversos análisis, era la primera vez desde el alto el fuego de 1994 que las partes en conflicto usaban artillería pesada.** Actores internacionales como los co-mediadores del Grupo de Minsk calificaron la situación de inaceptable e insostenible así como de grave peligro para la población civil, mientras a finales de año también el secretario general de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva calificó la situación de muy preocupante. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la UE emitieron alertas sobre la situación y llamaron a las partes a reducir la tensión y avanzar hacia un acuerdo. En línea con años anteriores, ambos países continuaron embarcados en su carrera armamentística, en buena parte suministrada por Rusia; y se acusaron mutuamente de múltiples –miles– de violaciones de alto el fuego. Todo en ello en un contexto de falta de avances en el proceso de diálogo, como se constató en la reunión de diciembre en Suiza entre los presidentes de Armenia y Azerbaiyán.⁴⁹

Enero fue el primer mes del año con más víctimas desde el alto el fuego de los años noventa, con más de una decena de muertes y una veintena de heridos. Y a finales del primer trimestre, el balance se situaba entre una veintena y una treintena de víctimas mortales. El Gobierno de Azerbaiyán se atribuyó haber causado una veintena de víctimas de soldados armenios en enfrentamientos en marzo en la línea de contacto. A su vez, Nagorno-Karabaj denunció incursiones azerbaiyanas en el territorio bajo su control. Algunos análisis interpretaron como una crítica inusualmente directa a Azerbaiyán un comunicado del Grupo de Minsk de la OSCE en enero, instándole a cumplir con el alto el fuego. En diversos momentos del año, como enero, julio y septiembre, Azerbaiyán afirmó haber derribado *drones*

49. Véase el resumen sobre Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en el capítulo 3 (Proceso de paz).

armenios, alegaciones que Armenia negó. El presidente de turno de la OSCE y ministro de Exteriores de Serbia, Ivica Dačić, expresó preocupación a principios de junio por el número sin precedentes de personas fallecidas, entre soldados y civiles, en los cuatro primeros meses de 2015. En la segunda mitad de año la situación escaló de nuevo, por el uso de artillería pesada. Incidentes en torno a la línea de contacto causaron decenas de víctimas mortales, incluyendo civiles. Armenia acusó a Azerbaiyán de la muerte de tres civiles en localidades de la región de Tavush en septiembre, mientras Azerbaiyán acusó a Armenia de estacionar de manera deliberada sus posiciones de tiro junto a zonas civiles. Las autoridades de Nagorno-Karabaj denunciaron bombardeos por tanques de Azerbaiyán por primera vez desde 1994. En diversos momentos del año la OSCE instó a ambas partes a acordar mecanismos de investigación de las violaciones del alto el fuego. Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) actualizó la lista de personas desaparecidas, con 4.496 nombres (3.719 registradas por el ICRC en Azerbaiyán, 405 en Armenia y 372 en Nagorno-Karabaj). Finalmente, Nagorno-Karabaj celebró elecciones parlamentarias en mayo, sin reconocimiento internacional. Según el órgano local electoral, participó el 70% de la población y el partido del primer ministro Ara Harutyunya (Partido Patria Libre) obtuvo el 47,5% de los votos.

El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj se agravó por el aumento de violaciones de alto el fuego y el uso de armas pesadas por primera vez desde el acuerdo de 1994

Se redujo la tensión con respecto al 2014, año en que una crisis interna social y política en Abjasia derivó en protestas y en un cambio de gobierno calificado por el presidente saliente como de golpe de Estado. En paralelo, la situación de seguridad vinculada al conflicto no resuelto entre Georgia y Abjasia se mantuvo estable. En el plano político interno de Abjasia, no se reeditaron las amplias movilizaciones de 2014 ni el grado de confrontación de ese año, aunque se asistió a una nueva pugna política que mantuvo cierto nivel de tensión e incertidumbre sobre su futura evolución. Así, el presidente Raul Khajimba hubo de enfrentarse en el último tercio del año a las demandas de dimisión inmediata por parte Amsakhara, el partido que le encumbró en las movilizaciones de 2014 que forzaron la salida de Alexander Ankvab y la consiguiente convocatoria de elecciones anticipadas. Amsakhara y organizaciones sociales acusaron a Khajimba de incumplimiento de promesas y uso indebido del apoyo económico que Abjasia recibe de Rusia. En el congreso de finales de octubre del partido se aprobó exigir su dimisión. No obstante, Khajimba advirtió que no dejaría el cargo antes de tiempo. Varios miles de personas se manifestaron en apoyo de Khajimba ese mismo mes. Algunos analistas señalaron los riesgos de una escalada de tensión, aunque desde Amsakhara se aseguró que no habría un golpe de Estado.

Georgia (Abjasia)	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Abjasia, Rusia

Síntesis:

La precaria situación de seguridad en la región responde a la no resolución de las cuestiones de fondo por las que se enfrentaron en conflicto armado (1992-1994) los líderes locales abjasios, apoyados por Rusia, con el Gobierno georgiano, defendiendo, respectivamente, la independencia de la región y la integridad territorial del país, en el contexto de descomposición de la URSS. Tras el fin de esa guerra, que desplazó a unos 200.000 georgianos, el territorio de Abjasia ha funcionado como un Estado *de facto*. Pese a la existencia de un acuerdo de alto el fuego, un proceso negociador y presencia internacional en esos años (observadores de la ONU y fuerzas de paz rusas), la tensión se mantuvo, alimentada por las tensiones geoestratégicas y de balance de poderes en el Cáucaso entre Georgia y Rusia. Éstas escalaron hasta devenir en una guerra internacional en agosto de 2008, iniciada en Osetia del Sur, tras la cual las fuerzas abjasias consolidaron su control sobre Abjasia y vieron formalmente reconocida su independencia por parte de Rusia. Los incidentes frecuentes de seguridad, el estatus incierto del territorio, el papel de Rusia y el impacto acumulado de ambas guerras son fuente continua de tensión.

Por otra parte, en relación al conflicto no resuelto por el estatus de Abjasia, Rusia y la entidad independentista continuaron profundizando en sus relaciones. Así, el presidente ruso, Vladimir Putin, convirtió en ley el tratado sobre alianza y partenariado estratégico entre Rusia y Abjasia firmado a finales del año anterior y fuertemente criticado por Georgia. Como medidas posteriores, ambas partes firmaron en febrero un acuerdo fronterizo y rubricaron en marzo un memorándum de mecanismos para una política exterior coordinada. Asimismo, el general ruso Anatoly Khrulev, ex comandante de una sección del Ejército ruso partícipe en la guerra ruso-georgiana de 2008, fue nombrado nuevo jefe del Estado mayor de Abjasia. Algunos analistas apuntaron durante el año a los riesgos de futuros ataques de Rusia contra Georgia beneficiándose de las condiciones de los tratados de partenariado con Abjasia y con Osetia del Sur, que dan paso a la integración de unidades de fuerzas armadas de esos territorios. El Gobierno georgiano condenó en agosto el despliegue de medio millar de tropas de la sección ferroviaria del Ejército ruso en Abjasia, especialmente con el antecedente del despliegue de unidades ferroviarias en 2008 previo a la guerra. Georgia lo denunció como acción provocativa y agresiva y Rusia afirmó que el objetivo eran trabajos de reparación. En el marco de la mayor tensión internacional entre Rusia y las instituciones y países euroatlánticos, expertos alertaron a mediados de año sobre el marcado proceso de militarización del distrito sur de Rusia, que controla las tropas presentes en Osetia del Sur y Abjasia

(así como otras del Cáucaso y Crimea). En todo caso, **la situación de seguridad se mantuvo estable y en calma durante el año, según destacaron los co-mediadores del proceso de paz** de Ginebra. Además, Rusia y Georgia mantuvieron activo su proceso de diálogo para la normalización de sus relaciones en el marco del llamado diálogo de Praga, con algunos avances durante el año pese a la tensión crónica. No obstante, no hubo avances significativos en el proceso de paz sobre el estatus de Abjasia y la vecina Osetia del Sur.⁵⁰

Georgia (Osetia del Sur)	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia

Síntesis:

La tensión en la región está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo por las que las fuerzas osetias y Georgia se enfrentaron en una guerra entre 1991 y 1992. Desde entonces, las partes mantuvieron sus posiciones respectivas de defensa de independencia o unificación con Rusia y de la integridad territorial de Georgia, sin lograr resolver por la vía de la negociación el *impasse* de la región, independiente *de facto*. A su vez, el conflicto interno se ha visto alimentado por las tensiones entre Georgia y Rusia –vinculadas a cuestiones de geoestrategia y balance de poderes en la región del sur del Cáucaso–, que en 2008 escalaron hasta derivar en una breve guerra iniciada en Osetia del Sur y extendida después a Abjasia y zonas bajo control georgiano. Tras esa última guerra y el desplazamiento forzado de la mayoría de población georgiana de Osetia del Sur, la posición osetia quedó reforzada. Rusia reconoció su independencia y mantuvo presencia militar en la región. La cuestión de los desplazados de los años noventa y de la segunda guerra, el estatus del territorio y las violaciones periódicas del alto el fuego siguen siendo fuente de tensión.

Se mantuvo la situación de tensión entre Georgia y Osetia del Sur, que involucra también a Rusia, con algunos incidentes en torno a la línea fronteriza y sin avances en el proceso de diálogo. A lo largo del año, los co-mediadores del proceso de paz⁵¹ así como los facilitadores del mecanismo de prevención y gestión de incidentes (IPRM, por sus siglas en inglés) destacaron la situación de estabilidad que predominaba en la zona de conflicto, si bien **hubo episodios de tensión en torno a la instalación de vallas y otros obstáculos en el lado osetio de la línea fronteriza,**

Osetia del Sur anunció su intención de realizar un referéndum sobre la unión a Rusia, mientras el Gobierno ruso rebajó expectativas al respecto

como en periodos anteriores. Fue motivo de conflicto la instalación en julio de señales fronterizas por parte de tropas rusas en Osetia del Sur enmarcando un tramo del oleoducto Bakú-Supsa en territorio osetio, lo que fue denunciado por Georgia y provocó algunas protestas georgianas junto a la zona fronteriza así como en la capital en demanda de respuestas más contundentes contra Rusia. La situación fue abordada en una reunión de emergencia del IPRM. **Otros incidentes durante el año incluyeron detenciones y otros obstáculos a la libertad de movimiento, como en lo relativo a acceso a tierras de labranza; diversos tiroteos en torno a la frontera administrativa; y violaciones del espacio aéreo.** Por su parte, EEUU y Georgia llevaron a cabo ejercicios militares en mayo, criticados por Rusia, mientras Georgia criticó a su vez los ejercicios de junio de Rusia en Osetia del Sur, que involucraron 1.500 tropas y el uso de drones.

Por otra parte, en el plano político Osetia del Sur y Rusia firmaron un tratado de alianza e integración en marzo, que fue muy criticado por el Gobierno georgiano y que iba en línea con el firmado entre Rusia y Abjasia,⁵² aunque profundizaba más en algunos aspectos de las relaciones ruso-osetias. Abarcaba ámbitos económicos, comerciales, de seguridad y defensa, entre otros, y contemplaba la integración de los servicios aduaneros de Osetia del Sur en los de la Federación de Rusia. Además, unidades de las fuerzas de seguridad de Osetia del Sur pasarán a formar parte de las fuerzas de seguridad y defensa rusas. Actores internacionales como la OTAN también criticaron el tratado, denunciando comportamiento desestabilizador por parte de Rusia. También **generó tensión el anuncio en octubre por la oficina de Presidencia de Osetia del Sur relativo a la intención de realizar un referéndum sobre la unión del territorio a Rusia.** El anuncio se hizo tras una reunión ese mes del presidente osetio, Leonid Tibilov, y el representante del presidente ruso para las relaciones entre Rusia y los territorios de Abjasia y Osetia del Sur, Vladislav Surkov. No obstante, Rusia desmintió que se hubiera abordado el tema del referéndum en la reunión y afirmó que Rusia reconocía a Osetia del Sur como un Estado independiente, implícitamente descartando el impulso a una consulta. En su campaña electoral para las presidenciales de 2014 Leonid Tibilov prometió realizar un referéndum. Por otra parte, dentro de Osetia del Sur aumentaron las trabas para las ONG, incluyendo para entidades internacionales como International Alert.

50. Véase el resumen sobre Georgia (Abjasia) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

51. Véase el resumen sobre Georgia (Osetia del Sur) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

52. Véase el resumen sobre Georgia (Abjasia) en este capítulo.

Rusia (Chechenia)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema, Identidad, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Chechenia, grupos armados de oposición

Síntesis:

Tras la llamada primera guerra de Chechenia (1994-1996), que enfrentó a la Federación de Rusia con la república chechena principalmente por la independencia de esta última (autoproclamada en 1991 en el contexto de descomposición de la URSS) y que terminó en un tratado de paz que no resolvió el estatus de Chechenia, el conflicto se reabre en 1999, en la llamada segunda guerra chechena, con el detonante de unas incursiones en Daguestán por rebeldes chechenos y atentados en ciudades rusas. En un contexto preelectoral y con un discurso antiterrorista, el Ejército ruso entró de nuevo en Chechenia para combatir al régimen independentista moderado surgido tras la primera guerra y asolado a su vez por disputas internas y creciente criminalidad. Rusia dio por acabada la guerra en 2001, sin acuerdo ni victoria definitiva, y propició un estatuto de autonomía y una administración chechena pro-rusa, pero los enfrentamientos persisten, en paralelo a la islamización de las filas rebeldes chechenas y una regionalización de la lucha armada. Asimismo, la población civil hace frente a graves violaciones de derechos humanos, en gran parte cometidas por las fuerzas de seguridad locales.

Se redujo la letalidad asociada al conflicto en la república, frente al incremento en el año anterior, mientras continuó la pauta reciente de cambio de lealtades de la insurgencia de Emirato Caucásico al grupo armado prevalente en Siria e Iraq, Estado Islámico (ISIS). Con el precedente del giro de adhesiones de algunos comandantes norcaucásicos, incluyendo chechenos, a finales de 2014 y principios de 2015, **el máximo líder de la insurgencia de Chechenia, Aslan Byutukayev (alias Khamzat) anunció en junio su adhesión a ISIS. El giro iba en línea con buena parte de las filas rebeldes, mientras que el máximo liderazgo del Emirato Caucásico se mantuvo contrario a ISIS.** Ese mismo mes, un portavoz de Estado Islámico anunció la creación de la rama del grupo armado en el norte del Cáucaso y la creación de la Provincia del Cáucaso (Wilayat al-Qawqaz), dividida en áreas (Daguestán, Chechenia, Ingushetia así como otra provincia conjunta en Kabardino-Balkaria y Karachaevo-Cherkesia). El líder rebelde daguestaní Abu Mohammed al-Kadari (Rustam Asilderov) fue nombrado máximo líder de toda la insurgencia del Cáucaso leal a ISIS. El presidente checheno, Ramzan Kadyrov, advirtió en julio que no permitirá bases ni militancia de ISIS en el territorio checheno. Durante el año hubo detenciones contra personas que supuestamente iban a unirse al grupo armado Estado Islámico. En diciembre, un video de ese grupo aparentemente filmado en

Una parte de la insurgencia del norte del Cáucaso pasó a adherirse a ISIS, incluyendo al máximo líder rebelde de Chechenia

la ciudad siria de Raqqa mostró la decapitación de un hombre de origen ruso-checheno acusado de ser un espía de Rusia. En el video, ISIS amenazaba a Rusia con cometer ataques en suelo ruso. Kadyrov amenazó de muerte a los autores del asesinato.

En paralelo a los cambios de lealtad de la insurgencia, **continuaron produciéndose incidentes violentos de baja intensidad en la república. Se registraron ataques con bomba, operaciones especiales antiterroristas y detenciones de supuestos combatientes, así como algunas desapariciones forzadas.** Aun así disminuyó el número de víctimas mortales y heridos vinculados al conflicto, con al menos una quincena de víctimas mortales y otra quincena de personas heridas, frente a balances anuales anteriores (al menos 52 muertes y 65 heridos en 2014, 39 fallecidos y 69 heridos en 2013, 82 muertes y 92 heridos en 2012, 95 muertes y 106 heridos en 2011 y 127 muertes y 123 heridos en 2011, según cifras del portal independiente Caucasian Knot). Entre los hechos destacados de 2015, tres personas murieron por una explosión junto a una presa cerca de Grozny en febrero, tras lo cual un centenar de personas fueron detenidas e interrogadas. A principios de octubre, tres combatientes murieron y tres agentes resultaron heridos en una operación especial en un distrito de Grozny. El presidente checheno afirmó que los fallecidos habían sido entrenados en Siria y preparaban atentados graves. Por otra parte, continuó la presión de las autoridades contra población musulmana salafista, incluyendo detenciones y redadas en mezquitas. A su vez, dos mausoleos suffs fueron incendiados en noviembre, ataques interpretados por algunos activistas locales como respuesta de sectores salafistas a la represión contra su comunidad. Por otra parte, aumentó la tensión entre las autoridades chechenas y las federales. El

presidente checheno autorizó a sus fuerzas de seguridad a disparar y matar a agentes de seguridad no chechenos que actuaran en Chechenia sin autorización local. El anuncio se produjo poco después de la muerte en abril de un hombre checheno en la capital, Grozny, a manos de la Policía federal. Asimismo, un ex alto cargo de las fuerzas de seguridad chechenas, Zaur Dadayev –número dos del batallón Server, del Ministerio de Interior de Chechenia–, fue detenido en marzo en Ingushetia junto a otros ciudadanos chechenos en relación al asesinato en febrero en Moscú del opositor político ruso Boris Nemtsov. Kadyrov, a su vez, defendió a Dadayev calificándolo de “patriota”. **A su vez, continuó el clima de graves violaciones de derechos humanos por parte del régimen del presidente Kadyrov, como denuncian de manera persistente desde hace años organizaciones y defensores de derechos humanos locales e internacionales.** Entre otros hechos, la sede del Comité Local Contra la Tortura, en la capital, sufrió ataques. Además, una defensora de los derechos de las mujeres fue secuestrada cerca de Grozny en octubre y posteriormente liberada. Las ONG Iniciativa Pro-Justicia

de Rusia y la Red de Apoyo a Chechenia denunciaron en octubre en un informe sombra para el Comité de la CEDAW las violaciones de derechos de las mujeres en el norte del Cáucaso, incluyendo Chechenia.⁵³

Rusia (Kabardino-Balkaria)	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema, Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición

Síntesis:

La violencia e inestabilidad que caracteriza a la república federal de Kabardino-Balkaria está vinculada a los grupos armados que desde los primeros años del siglo XXI combaten la presencia rusa y defienden la creación de un Emirato islámico, en sintonía con otros movimientos armados del norte del Cáucaso y en reflejo de la regionalización de la violencia que afectó a Chechenia en los noventa. La red de grupos que opera en Kabardino-Balkaria, Yarmuk, comenzó a ser operativa en 2004, si bien fue en 2005 cuando se puso de relieve su capacidad ofensiva, con varios ataques simultáneos en la capital que causaron decenas de muertes y que conllevaron una intensificación de la lucha contrainsurgente por parte de las autoridades rusas y locales. En 2011 la situación de violencia armada se agravó de manera significativa. Periódicamente se registran ataques insurgentes y contrainsurgentes, extorsión de los grupos rebeldes a la población civil y violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. De fondo existen además tensiones vinculadas a la influencia de corrientes religiosas ajenas a la república; problemas de corrupción y violaciones de derechos humanos; y desafección de la población local con respecto a las autoridades.

Disminuyó la violencia de baja intensidad que afecta a la república por el conflicto entre la insurgencia islamista y las fuerzas de seguridad, si bien continuaron produciéndose ataques y operaciones especiales, con decenas de víctimas mortales, mientras se produjeron fracturas dentro de la insurgencia. Parte de las filas rebeldes del Emirato Caucásico activas en Kabardino-Balkaria así como en las repúblicas vecinas pasaron a profesar lealtad al grupo armado Estado Islámico (ISIS), que combate en Siria e Iraq. No obstante, en línea con el máximo líder rebelde de la insurgencia norcaucásica Aliaskhab Kebekov, muy crítico con ISIS, también **el líder de la rama del Emirato Caucásico en Kabardino-Balkaria, Zalim Shebzukhov, se mantuvo leal a Kebekov y al Emirato y contrario a ISIS.** Mientras, ISIS anunció en junio la creación de una Provincia del Cáucaso (Wilayat al-Qawqaz), dividida en áreas (Daguestán, Chechenia, Ingushetia así como otra provincia conjunta en Kabardino-Balkaria y Karachaevo-Cherkesia). **Entre los hechos de violencia, en una operación especial de las fuerzas de seguridad en la capital, Nalchik, en noviembre, murió el supuesto líder de ISIS en la**

república, Robert Zankishiev, y resultaron heridos su esposa y un agente de Policía. **14 insurgentes murieron en dos operaciones especiales en los alrededores de la capital** a finales de noviembre. El Comité Nacional Antiterrorista señaló que se trataba de insurgentes de ISIS, mientras medios de comunicación pro-Emirato Caucásico negaron que se tratase de miembros de esta organización. Se produjeron ataques y choques violentos durante el año. Según el balance del portal independiente Caucasian Knot, al menos 47 personas murieron en 2015, cifras similares al año anterior (al menos 49 víctimas mortales), si bien disminuyeron significativamente los impactos en términos de heridos. Los balances marcan una pauta de descenso con respecto a años anteriores de conflicto armado (92 víctimas mortales y 31 heridos en 2013, 107 muertes y 49 heridos en 2012 y 129 muertes y 44 heridos en 2011, en una república con algo más de 800.000 habitantes). No obstante, se incrementó la conflictividad en los últimos meses del año, con diversos incidentes violentos, lo que supuso cierta llamada de alerta por los riesgos de potenciales escaladas a corto o medio plazo.

Sudeste de Europa

Bosnia y Herzegovina	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional

Síntesis:

La ex república yugoslava Bosnia y Herzegovina, habitada por bosnios, serbios y croatas, se vio afectada entre 1992 y 1995 y en el marco del proceso de descomposición de la Federación de Yugoslavia por una guerra en la que la élite política serbia del país, con apoyo de Serbia, así como personalidades políticas bosniacas y croatas, movilizaron a sus respectivas poblaciones y fuerzas en torno a la cuestión étnica a partir de proyectos políticos de autodeterminación de difícil equilibrio entre ellos. Los acuerdos de paz de Dayton dieron paso a un Estado frágil, dividido en dos entidades: la república Srpska (de mayoría serbia y con el 49% del territorio); y la Federación de Bosnia y Herzegovina (con población bosniaca y croata y el 51% del territorio), ambas con amplios poderes, incluyendo el militar. Las tensiones políticas entre las élites nacionalistas de las tres comunidades y entre éstas y la presencia internacional que supervisa la implementación de los acuerdos, así como el legado del impacto del conflicto en la población y el país, son ejes aún activos de conflicto.

Se incrementó la tensión entre las autoridades centrales y las de la entidad serbobosnia, la República Srpska, y entre éstas últimas y las instituciones euroatlánticas. El

53. Russian Justice Initiative y Chechnya Advocacy Network, *Submission from Russian Justice Initiative and Chechnya Advocacy Network Concerning the Russian Federation's Compliance with the CEDAW Convention in the North Caucasus*. CEDAW 62th Session, 26 de octubre a 20 de noviembre de 2015.

partido oficialista serbobosnio SNSD inició un boicot a principios de año en el Parlamento en protesta contra el nuevo Gobierno estatal –del que quedó fuera tras el acuerdo de después de las elecciones de octubre de 2014 entre los partidos bosniacos y croatas junto a partidos serbobosnios opositores–. Uno de los ejes de tensión giró en torno a las amenazas de secesión del SNSD. Así, el partido adoptó una resolución en abril que instaba a la celebración de un referéndum sobre la independencia de la República Srpska en 2018 si la región no recibe mayor autonomía. El Parlamento serbobosnio aprobó a su vez en julio celebrar un referéndum sobre la competencia en el territorio de la República Srpska de la Oficina del Alto Representante, así como de los tribunales estatales. El anuncio generó críticas estatales e internacionales, y el Gobierno de Serbia instó a la República Srpska a repensarse la decisión. Representantes bosniacos en el Parlamento de la entidad serbobosnia invocaron en julio la cláusula sobre protección de intereses nacionales vitales para intentar vetar el referéndum, sin embargo el Tribunal Constitucional rechazó sus alegaciones. Aun así, el Alto Consejo Judicial y de la Fiscalía afirmó en septiembre que los planes para un referéndum podían poner en peligro el estado de derecho en el país y el Alto Representante internacional, Valentin Inzko, afirmó que el referéndum supondría una violación de los acuerdos de paz de Dayton de 1995. En un contexto de aumento de la tensión política, representantes políticos estatales y de la entidad serbobosnia iniciaron conversaciones en septiembre facilitadas por la UE y alcanzaron acuerdo para un paquete de reformas judiciales, si bien las autoridades serbobosnias afirmaron que seguirían adelante con sus planes de referéndum. Además, **el presidente serbobosnio, Milorad Dodik, amenazó en diciembre con que si no se aprobaba la legislación estatal para reformar el Tribunal Constitucional, todos los representantes políticos de la República Srpska se retirarían de todas las instituciones estatales.** La advertencia llegó poco después de un dictamen del tribunal sobre la inconstitucionalidad de la festividad conmemorativa del día de creación de la República Srpska. Asimismo, durante el año hubo también desavenencias y tensión en el seno de la entidad bosnio-croata, incluyendo la salida del Gobierno de coalición con el bosnio SDA y el croata HDZ por parte del socialdemócrata Frente Democrático a principios de junio.

Por otra parte, **hubo algunos incidentes de violencia durante el año. Entre ellos, un policía murió y otro resultó herido en un ataque en abril contra una comisaría de Policía en la localidad de Zvornik (República Srpska),** supuestamente por un militante islamista. La detención de una treintena de personas bosniacas en la entidad serbobosnia en mayo generó alertas entre la clase política bosniaca que alertó contra los riesgos de instrumentalización de supuestas amenazas terroristas en forma de hostigamiento contra población bosniaca. El Gobierno serbobosnio amenazó con desarrollar su propio servicio de inteligencia. En el plano de seguridad,

los ministros de Interior de Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro afirmaron en julio que ISIS suponía una amenaza real para la región de los Balcanes, lo que requería de cooperación regional de los servicios de seguridad. A su vez, la Policía de la República Srpska anunció en octubre el desmantelamiento de un plan de ataque terrorista en un hotel en una localidad del noreste de Bosnia. En noviembre dos soldados murieron tiroteados en un suburbio de Sarajevo, en un incidente de motivos desconocidos. A finales de año fueron detenidas una docena de personas sospechosas de conexiones con ISIS y otros grupos armados y a las que se les atribuyen planes de ataque en el país. En relación a otros ejes de tensión, durante el año se produjeron algunos incidentes de tipo intercomunitario. Entre ellos, el primer ministro de Serbia, Aleskandar Vucic, fue atacado con piedras y objetos al participar en la ceremonia del 20º aniversario del genocidio de Srebrenica, incidente que fue criticado por el presidente bosniaco, Bakir Izetbegovic. Varios cientos de personas rindieron homenaje a las víctimas bosniacas de Srebrenica también en la capital serbia, Belgrado. Vucic visitó de nuevo Srebrenica en noviembre. Por otra parte, la localidad de Prijedor, en la República Srpska, fue escenario de un incremento de incidentes violentos intercomunitarios en varios meses del año, lo que llevó a reunirse a representantes de diferentes comunidades con el gobierno local con el objetivo de buscar soluciones y rebajar la tensión.

Macedonia	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Macedonia se independizó de Yugoslavia en 1991 por la vía pacífica, en contraste con las guerras que afectaron a la ex Yugoslavia en los años 90. No obstante, el proceso de secesión y la nueva constitución generaron agravios entre la minoría albanesa (23% de la población), considerada ciudadana de segunda. En 2001 estalló un breve conflicto armado protagonizado por la guerrilla albanesa de Macedonia del ELN –compuesta en parte por albaneses de Macedonia que combatieron junto al grupo albanokosovar ELK en la guerra en Kosovo en 1998-99–, en demanda de mayores derechos y de una reforma constitucional. El conflicto duró unos meses y causó un centenar de víctimas mortales. El Acuerdo de Paz de Ohrid de 2001, con facilitación internacional, dio paso a una reforma constitucional y leyes de descentralización. Pese al fin del conflicto, en años posteriores ha habido brotes de tensión intercomunitaria y elementos de tensión latente vinculados a las relaciones entre el Estado y la minoría albanesa de Macedonia. Asimismo, el país afronta otros retos, incluyendo problemas de corrupción y gobernabilidad. A partir de 2014 y 2015 se incrementó la tensión entre el Gobierno y la oposición, con denuncias de fraude electoral, excesivo control de los medios de comunicación y del poder judicial y abusos policiales, lo que desencadenó numerosas movilizaciones sociales.

Se incrementó la situación de tensión política y social en el país, con numerosas movilizaciones antigubernamentales, en paralelo a otro foco de tensión por hechos de violencia protagonizados por sectores de ex combatientes. En el plano político y social, estalló en febrero un escándalo cuando la oposición política encabezada por el partido socialdemócrata SDSM comenzó a mostrar pruebas de supuesto espionaje ilegal masivo por parte de las autoridades. La oposición denunció también interferencias gubernamentales en el sector judicial, medios de comunicación y en los procesos electorales en el país, así como brutalidad policial y corrupción. Además, **mantuvo su boicot al Parlamento iniciado ya en 2014 en denuncia de fraude electoral. Se incrementaron las protestas antigubernamentales en el segundo trimestre. Al menos 15 policías y otras cuatro personas resultaron heridas a mediados de mayo en una de las protestas.** Sectores pro-gubernamentales organizaron también movilizaciones de apoyo al primer ministro. El aumento de la tensión llevó a la dimisión de los ministros de Interior y Transporte y del jefe de los servicios de Inteligencia. Se activaron negociaciones con facilitación del comisario de la UE para la ampliación, Johannes Hahn, y la participación de los líderes de los cuatro principales partidos: el primer ministro y líder del VMRO DPMNE, Nikola Gruevski; el líder del SDSM, Zoran Zaev; el líder del partido albanés y socio gubernamental Unión Democrática para la Integración, Ali Ahmeti; y el líder del partido albanés opositor DPA, Mendul Thaci. **Se alcanzaron acuerdos en junio para un periodo de transición política, creación de un gobierno interino, salida del primer ministro de enero de 2016 y elecciones anticipadas en abril de 2016.** No obstante, siguieron meses de desacuerdos sobre la concreción del pacto y su implementación y la oposición puso como ultimátum el 15 de septiembre, amenazando con difundir nuevas grabaciones incriminatorias para el Gobierno. La tensión se redujo parcialmente en septiembre, con avances en las negociaciones como la designación en septiembre de la fiscal especial que debía investigar el supuesto caso de espionaje masivo, así como la decisión de la oposición de acabar con su boicot y volver al Parlamento. No obstante, el escenario en los últimos meses continuó siendo frágil. La oposición canceló temporalmente su participación en el diálogo a mediados de octubre ante la falta de acuerdos y obstáculos en la implementación, si bien lograron algunos avances posteriores como pactos sobre reforma electoral y la comisión electoral, la participación de la oposición en el gobierno interino, entre otros. En todo caso, dadas las fracturas de fondo, el escenario para los primeros meses de 2016 se preveía frágil.

Se deterioró la situación en Macedonia en medio de una fuerte crisis política que forzó un acuerdo para un gobierno interino, la salida del primer ministro y elecciones anticipadas en 2016

Por otra parte, además de la crisis política, se produjeron diversos hechos de violencia que generaron alertas e hicieron recordar el conflicto de 2001 entre fuerzas estatales e insurgencia albanesa. **En abril una cuarentena de hombres armados atacaron un puesto policial junto a la localidad de Goshince (municipalidad de Lipkovo, de mayoría albanesa), cerca de la frontera con Kosovo, y tomaron a cuatro policías macedonios, que lograron escapar. Los atacantes afirmaron ser del grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN), que combatió en el breve conflicto armado de Macedonia de inicios de siglo XXI y que tras el Acuerdo de Ohrid se desarmó y disolvió. El partido albanés macedonio socio gubernamental DUI calificó el ataque de provocación, mientras un ex comandante del ELN afirmó que se trataba de un ataque falso orquestado por el Gobierno, en el que podría haber hecho uso de criminales albaneses con el fin de instigar conflicto entre la población macedonia y albanesa, coincidiendo con el texto de crisis política interna en Macedonia. Tras ese incidente, en mayo la Policía lanzó una operación especial en la localidad de Kumanovo, calificada por las autoridades como una operación en prevención de un supuesto plan de ataque terrorista y como respuesta a la acción violenta de abril. La operación derivó en choques violentos en dos jornadas sucesivas, que causaron la muerte de ocho policías y 10 supuestos militantes, así como una treintena de heridos y la destrucción de numerosas casas. Entre los fallecidos había varias personas originarias de Kosovo y ex combatientes del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y del ELN. Unas treinta personas fueron acusadas con cargos de terrorismo, entre las que había personas originarias de Kosovo y de Macedonia. La oposición política alertó contra posibles manipulaciones de la operación en medio de la crisis política.**

Serbia – Kosovo	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Internacional ⁵⁴
Actores:	Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX

Síntesis:

La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN

54. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

contra éste último, tras años de represión del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo aislacionismo fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden los problemas internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta del enviado especial de la ONU. En 2008, el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población serbia de Kosovo y por Serbia.

Se incrementó la tensión política y social, tanto entre la clase política albanesa y serbia dentro de Kosovo como entre Gobierno y oposición albanokosovar, con hechos de violencia política así como incidentes intercomunitarios, mientras avanzó el proceso de diálogo entre Serbia y Kosovo.⁵⁵ En relación a las tensiones políticas e intercomunitarias,

más de un centenar de personas resultaron heridas en choques entre manifestantes albanokosovares y Policía en enero en el marco de protestas contra unas polémicas declaraciones del ministro kosovar para las Comunidades y el Retorno, Aleksandar Jablanovic –de la Lista Serbia, socia minoritaria en el Gobierno de Kosovo– tras unos piquetes y ataques contra peregrinos serbios en Gjakova/Djakovica. **Jablanovic fue retirado de su cargo en febrero, lo que generó fuertes críticas de Lista Serbia, que inició un boicot parlamentario.** Serbia se sumó a las críticas al despido del ministro. La organización serbia puso fin a su boicot en abril tras recibir garantías de que no habría pasos unilaterales contra los intereses serbios en Kosovo. No obstante, se mantuvo la tensión en torno a diversos temas de la agenda política. La Lista Serbia bloqueó en julio el borrador de enmiendas constitucionales para la transformación de la Fuerza de Seguridad de Kosovo (fuerza de respuesta a emergencias) en Ejército, reiterando la exigencia de cuatro condiciones planteadas en la formación del gobierno de coalición: creación de la asociación de municipalidades serbias en Kosovo, competencias a la comunidad serbokosovar para designar a un subdirector del servicio de inteligencia kosovar, que el número dos de la fuerza de seguridad de Kosovo proceda de la comunidad serbia y la paralización de privatizaciones en municipalidades serbias, como Brezovica y Trepca.

La creación de la asociación de municipalidades serbias fue una de los principales cuestiones del

La oposición albanokosovar exigió la retirada del acuerdo sobre descentralización y asociación de municipios serbios de Kosovo, con protestas y actos de violencia en el Parlamento

año, objeto de avances en el proceso de diálogo y de tensión y retrocesos dentro de Kosovo. El acuerdo de agosto entre Serbia y Kosovo para el establecimiento de esa asociación, que garantizaría ciertos niveles de descentralización, desencadenó meses de protestas de la oposición política albanokosovar, que exigió la retirada de ese y otro acuerdo sobre delimitación fronteriza con Montenegro. Tras incidentes en septiembre, la tensión escaló a partir de octubre, con la obstaculización de la actividad parlamentaria por los partidos opositores Autodeterminación (Vetevendosje), Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK) e Iniciativa para Kosovo (Nisma). Su campaña de protesta incluyó incidentes violentos, con el lanzamiento reiterado de gases lacrimógenos por parte de parlamentarios dentro de la cámara legislativa. También hubo choques entre manifestantes y Policía. A mediados de diciembre más de un tercio de los parlamentarios habían sido arrestados por incidentes violentos. Tras la detención de uno de los líderes opositores, una comisaría de Policía fue atacada en octubre. Para reducir la tensión, en

noviembre la presidenta kosovar presentó el acuerdo ante el Tribunal Constitucional, que decretó una suspensión transitoria, hasta que a finales de diciembre dictaminó que el pacto era constitucional a excepción de unos principios sobre los que requirió cambios. Por otra parte, el Tribunal Constitucional también desestimó las apelaciones de la oposición contra el futuro tribunal sobre crímenes cometidos por el grupo armado albanés ELK, órgano requerido por la comunidad internacional, aceptado con recelos por el Gobierno y rechazado por la oposición. Mientras,

durante el año se produjeron también algunos incidentes intercomunitarios, como ataques con varios heridos en Mitrovica norte y Zubin Potok tras el apuñalamiento de un joven serbio en abril en Mitrovica. Los alcaldes de la parte norte y sur de la ciudad dividida alertaron en un comunicado conjunto sobre la elevada inestabilidad.

2.3.5. Oriente Medio

Golfo

Arabia Saudita	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)

55. Véase el resumen sobre Serbia–Kosovo en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Síntesis:

Gobernada desde el siglo XVIII por la familia al-Saud y establecida como Estado en 1932, Arabia Saudita se caracteriza por su conservadurismo religioso y su riqueza, sustentada en las reservas de petróleo. Potencia regional, a nivel interno la monarquía sunní concentra el poder político y lidera las instituciones de gobierno, dejando escaso margen para la disidencia. Los partidos políticos no están permitidos, la libertad de expresión constreñida y muchos derechos básicos limitados. La minoría chií, concentrada en la zona este del país, ha denunciado marginación y exclusión de las estructuras del Estado. Las autoridades han sido acusadas de emprender acciones represivas en nombre de la seguridad del país y en el marco de campañas antiterroristas, que tienen entre sus objetivos militantes de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). En el contexto de la denominada Primavera Árabe de 2011, las protestas pro-reformas y democracia suscitaron una respuesta represiva del Gobierno –en especial en las zonas de mayoría chií del país–, y las autoridades han denunciado la existencia de intentos de desestabilización desde el exterior, señalando a Irán. El país es escenario de acciones armadas esporádicas de AQPA y, más recientemente, de células presuntamente vinculadas a ISIS.

Durante 2015 Arabia Saudita vivió cambios a nivel de política interna –el rey Salman bin Abdul-Aziz al Saud asumió el poder en enero tras la muerte de su hermano el rey Abdullah– y el país se implicó de manera más activa en conflictos en la región, liderando una intervención militar en Yemen a partir de marzo. Según estimaciones citadas por la prensa, más de 80 personas, en su mayoría militares y guardias fronterizos, habrían muerto en territorio saudita, en la zona limítrofe con Yemen, producto de este conflicto armado.⁵⁶ Asimismo, Arabia Saudita fue escenario de múltiples hechos de violencia que causaron la muerte de más de 40 personas, con diversos ataques explosivos que en su mayoría fueron reivindicados por presuntas células de ISIS. **La ofensiva más grave se produjo en mayo en una mezquita en la zona de Qatif, en el este del país, donde se concentra la mayoría chií del país. El ataque suicida provocó la muerte de 21 personas y dejó heridas a un**

centenar. Una semana más tarde, otro atentado suicida en una mezquita chií en la localidad de Damman, capital de la Provincia Oriental, dejó otras cuatro víctimas mortales. Ambas acciones fueron reclamadas por una supuesta filial de ISIS autodenominada “Provincia de Najd”. Otro ataque de este tipo contra una mezquita frecuentada por las fuerzas de seguridad en la zona de Abha, en el sur de Arabia Saudita, dejó otras 15 personas fallecidas en agosto, en una ofensiva reivindicada por otro grupo vinculado a ISIS bautizado como “Provincia de al-Hijaz”. Otras tres personas murieron durante el último trimestre, una en un nuevo ataque suicida contra una mezquita en Najran (suroeste) y dos policías tiroteados en Qatif. En este contexto, a finales de 2015 Riad anunció la conformación de una Coalición Antiterrorista Islámica conformada por

34 países de mayoría musulmana, con sede en Arabia Saudita y con el objetivo de coordinar operaciones. La alianza, que excluye a países como Irán, Iraq o Argelia, fue valorada por algunos analistas como un intento del hijo del rey y ministro de Defensa, Mohamed bin Salman, por reforzar su liderazgo militar, especialmente en un contexto en que se había hecho evidente que la aventura saudita en Yemen no tendría un final rápido como se auguraba.⁵⁷ A lo largo del año las autoridades sauditas también lanzaron una campaña de detenciones de cientos de personas acusadas de pertenencia o presunta vinculación con ISIS. Solo en julio se informó del arresto de más de 400 personas. Paralelamente, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, llamaron la atención sobre el significativo incremento en la aplicación de la pena de muerte en el país, en su nivel más alto en las últimas dos décadas. Durante 2015 Arabia Saudita perpetró al menos 157 ejecuciones, incluyendo algunas por delitos como tráfico de drogas (63 personas fueron sometidas a la pena capital bajo este supuesto en 2015, según datos de Amnistía Internacional).

Graves incidentes ocurridos durante septiembre en el marco de la peregrinación a la Meca que causaron más de un millar de víctimas mortales tuvieron una gran repercusión, teniendo en cuenta que la monarquía saudita asienta buena parte de su legitimidad política en la gestión de los sitios sagrados para los musulmanes. **En**

medio de cuestionamientos por la gestión de la crisis de la Meca –y de otros temas, como la caída de los precios del petróleo, la situación de seguridad y la guerra en Yemen–, se hicieron públicas críticas de miembros de la familia real al rey Salman y los reclamos por un cambio de liderazgo.

En dos cartas, un alto príncipe saudita exigió la remoción del monarca, subrayando que no estaba en condiciones de gobernar y que tras bambalinas es en realidad su hijo Mohamed bin Salman quien está liderando el país. Las misivas hacen un llamamiento a 13 de los hijos de Abdulaziz bin Saud, el fundador del Estado saudita, a unirse para retirar al monarca e instaurar un nuevo liderazgo. Los hechos de La Meca también intensificaron la tensión entre Arabia Saudita e Irán. Teherán exigió responsabilidades y pidió una investigación de los hechos, en los que murieron más de 400 peregrinos iraníes. Los dos países ya estaban enfrentados por sus aspiraciones de influencia regional y por su apoyo a bandos opuestos en conflictos armados como los de Siria y Yemen. La tensa relación entre Riad y Teherán también estuvo condicionada por la suerte del clérigo chií Sheikh Nimr al-Nimr, influyente líder de la minoría chií en Arabia Saudita. La Corte Suprema saudita ratificó en octubre la condena a muerte contra el clérigo y su ejecución, a principios de 2016, generó un incremento de la tensión bilateral y entre chiíes y sunníes en toda la

Arabia Saudita fue escenario de múltiples hechos de violencia que causaron la muerte de más de 40 personas en 2015, con diversos ataques explosivos reivindicados por presuntas células de ISIS

56. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

57. Bruce Riedel, “Saudi Arabia’s mounting security challenges”, *Al-Monitor*, 28 de diciembre 2015.

región. Finalmente, cabe mencionar que Arabia Saudita observó con recelo la aproximación entre EEUU e Irán, en el marco de las conversaciones que condujeron a la firma del acuerdo nuclear a mediados de año.⁵⁸

Bahrein	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Las revueltas populares que se propagaron por países del Magreb y Oriente Medio durante 2011 repercutieron también en Bahrein. Gobernado desde el siglo XVIII por la monarquía de los al-Khalifah y protectorado británico entre 1861 y 1971, en 2002 el país se constituyó formalmente en una monarquía constitucional. La familia en el poder es sunní, a diferencia de la mayoría de la población del país que es de confesión chií y que denuncia políticas sistemáticas de discriminación. Las tensiones internas, que se habían incrementado en los últimos años, se convirtieron en una contestación abierta a partir de febrero de 2011. Las demandas de reformas políticas y sociales fueron respondidas por el Gobierno con incentivos económicos y ofertas de diálogo político, pero también con represión y persecución a los detractores del Gobierno. La amenaza a la estabilidad del régimen motivó una intervención del Consejo de Cooperación del Golfo, que envió tropas al país. La situación en Bahrein ha alimentado la confrontación entre Irán y los países del Golfo –en especial con Arabia Saudita–, y preocupa a EEUU, que tiene a su V Flota estacionada en el archipiélago.

La situación en Bahrein a lo largo de 2015 siguió caracterizándose por **protestas de la oposición, ataques contra las fuerzas de seguridad, detenciones y condenas a disidentes y sectores críticos por una multiplicidad de cargos, desmantelamiento de presuntas células insurgentes que pretendían atentar en el país y una creciente tensión con Irán**. Como en años previos, las movilizaciones de sectores críticos coincidieron con efemérides como el cuarto aniversario de la revuelta contra el régimen de Manama, en febrero, o con una nueva edición de la Fórmula 1, en abril. En algunos casos estas protestas derivaron en hechos de violencia. Paralelamente, tuvieron lugar acciones contra las fuerzas de seguridad, como el ataque explosivo que causó la muerte a dos policías y dejó a varias personas heridas a finales de julio en la localidad de Sitra, o el atentado explosivo en la ciudad de Karaba, en agosto, que también dejó a un policía muerto y provocó heridas a otras siete personas. Una ofensiva similar contra una estación de Policía en septiembre en la localidad de Khamis no provocó víctimas, mientras que otra ocurrida en Manama, en marzo, dejó dos policías heridos. A lo largo del año, las autoridades de Bahrein anunciaron la detención de numerosas personas acusadas de

poner en riesgo la seguridad del país o presuntamente involucradas en la preparación de atentados –a muchas de las cuales se les retiró la nacionalidad como medida de castigo– e informaron del decomiso de explosivos. En este contexto, especialmente durante el segundo trimestre, el Gobierno de Manama aseguró que muchas de las personas arrestadas por conspiración e intentos de desestabilización del país tenían vínculos con Irán. Las autoridades bahreiníes denunciaron que la república islámica pretendía interferir en sus asuntos internos y algunos altos funcionarios, como el ministro de Exteriores, acusaron a Teherán de patrocinar actividades terroristas. La escalada de tensión bilateral motivó quejas y recriminaciones que se mantuvieron en el plano diplomático. Esta deriva se dio en un contexto de intensificación de las tensiones a nivel regional, que se evidenció, entre otras cuestiones, en la alineación con bandos opuestos en el conflicto armado en Yemen. Bahrein pasó a integrar la coalición internacional liderada por Arabia Saudita para combatir a los al-houthistas, considerados aliados de Irán.⁵⁹ Cabe destacar que las autoridades bahreiníes también anunciaron el desmantelamiento de una presunta célula que pretendía conformar una filial de ISIS en el país.

La tensión interna en Bahrein también tuvo un reflejo en los numerosos arrestos y condenas a representantes de la oposición política, en especial del partido chií al-Wefaq, y activistas de derechos humanos, detenidos y enjuiciados por delitos como insultar a las instituciones, incitar al derrocamiento del régimen, desacreditar a las autoridades, insultar al rey o difundir noticias falsas. **Entre los detenidos cabe destacar figuras como el activista por los derechos humanos Nabeel Rajab, algunos ex parlamentarios, altos cargos de al-Wefaq y el máximo líder de esta última organización, el Sheikh Ali Salman. Su detención a finales de 2014 motivó movilizaciones en los meses siguientes y algunos enfrentamientos con la Policía que derivaron en decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.** El líder de al-Wefaq fue acusado de promover la desobediencia, incitar al odio e insultar a las autoridades y fue sentenciado en junio a cuatro años de cárcel. Ali Salman fue catalogado como preso de conciencia por ONG internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW) y diversos expertos de la ONU expresaron reparos por el juicio en su contra. A finales de año, HRW también publicó un informe en el que denunció abusos y torturas a detenidos en Bahrein. La situación en este país del Golfo motivó muestras de preocupación del Parlamento Europeo, que en julio aprobó una declaración que insta a prohibir la exportación de gases lacrimógenos y otros equipamientos para las fuerzas de seguridad de Bahrein. EEUU, en cambio, decidió en junio reanudar las exportaciones de armas al país, suspendidas desde 2011, en medio de las críticas de diversas ONG.

58. Véase el resumen sobre Irán – EEUU, Israel en este capítulo.

59. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Irán (noroeste)	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, grupo armado PJAK, Gobierno Regional del Kurdistan iraquí (KRG), Iraq

Síntesis:

A pesar de la naturaleza heterogénea y multiétnica de Irán, las minorías que habitan el país, entre ellas los kurdos, han sido sometidas a décadas de políticas centralistas y de homogeneización y han denunciado discriminación por parte de las autoridades de la República Islámica. En este contexto, desde 1946 distintos grupos políticos y armados de origen kurdo se han enfrentado a Teherán en un intento por obtener una mayor autonomía para la población kurda, que se concentra en las provincias del noroeste del país. Grupos como el Partido Democrático Kurdo (KDPI) y Komala encabezaron esta lucha durante décadas. Desde 2004 es el Partido por la Vida Libre en Kurdistan (PJAK), vinculado al PKK de Turquía, el que protagoniza el conflicto con Teherán, y su brazo armado, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, se enfrenta periódicamente con las fuerzas iraníes, en particular miembros de la Guardia Revolucionaria.

La tensión que enfrenta al Gobierno iraní con el grupo armado kurdo PJAK se intensificó en 2015 respecto al año anterior, en especial durante el segundo semestre, con **incidentes esporádicos que habrían causado la muerte de más de una veintena de personas, aunque las informaciones sobre el balance de víctimas mortales fueron contradictorias**. Los hechos de violencia pusieron en entredicho la tregua vigente entre Irán y el PJAK desde 2011. El incidente de mayor gravedad durante el año se produjo en agosto, en la localidad de Mariwan, donde un ataque de milicianos del PJAK contra un puesto militar habría causado la muerte de veinte militares iraníes, según la versión del grupo armado. Las autoridades iraníes reconocieron la existencia del ataque, pero desmintieron el número de fallecidos. Según algunas informaciones de prensa, el balance de víctimas mortales habría oscilado entre cinco y 12. A principios de septiembre, las fuerzas de seguridad iraníes aseguraron haber atacado posiciones del PJAK en la localidad de Jwanro, en la provincia de Kermanshah, con un resultado de varios milicianos fallecidos. Las autoridades no ofrecieron un balance preciso de bajas en las filas insurgentes. Informaciones de prensa indicaron que al menos un efectivo militar iraní había muerto en las hostilidades. Días más tarde, los enfrentamientos entre combatientes del PJAK y miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en la provincia de Azerbaiyán Occidental causaron la muerte de dos milicianos y de otros dos militares iraníes, mientras que otras cinco personas resultaron heridas. Durante el primer semestre del año se habían producido algunos incidentes en esta provincia, concretamente en la localidad de Mahabad, después de la muerte de una joven kurda a la que presuntamente un soldado iraní había intentado

agredir sexualmente. Los hechos provocaron manifestaciones antigubernamentales en mayo. Cabe destacar que tras los hechos de Mariwan, en agosto, el PJAK fue objeto de críticas por parte de otros grupos kurdos como el KDPI y Komala, que consideraron que la acción podría alentar un conflicto armado y afectar la seguridad en la región. A lo largo del año también se informó de ejecuciones de presos kurdos acusados de pertenencia a grupos disidentes y/o de tener vínculos con el PJAK. Uno de ellos, Behrouz Alkhani, estaba acusado de implicación en el asesinato de un fiscal en 2010. Amnistía Internacional calificó el proceso de injusto, destacando que la ejecución de Alkhani se produjo mientras esperaba el resultado de la apelación a la sentencia. Cabe destacar que después de suscribir el acuerdo sobre el programa nuclear iraní,⁶⁰ el presidente Hassan Rohani realizó su primera visita a la región kurda del país. No obstante, algunos análisis subrayaron que en lo referente a la cuestión kurda en Irán seguía prevaleciendo la ascendencia de los sectores más duros del régimen tanto a nivel judicial como en la Guardia Revolucionaria. En este contexto, cabe mencionar que a finales de año autoridades iraníes del Comité Parlamentario de Seguridad Nacional aseguraron que los ataques esporádicos del PJAK no eran considerados una amenaza seria a la seguridad del país.

Irán (Sistán Baluchistán)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Guardia Revolucionaria (Pasdaran), grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán

Síntesis:

Sistán Baluchistán es una provincia iraní limítrofe con Afganistán y Pakistán –la población baluchi vive a ambos lados de la frontera– y de mayoría sunní, en contraste con el resto del país, donde predomina la rama chií del Islam. La zona se caracteriza por altos índices de pobreza y es escenario de rutas de contrabando y de tráfico de drogas. Desde 2005 el grupo Jundollah (Soldados de Dios) ha llevado a cabo una campaña insurgente en esta región. La organización, que también se autodenomina Movimiento de Resistencia del Pueblo, fue creada en 2002 y denuncia una persecución sectaria por parte de Teherán. Jundollah asegura que su objetivo es la defensa de los derechos, la cultura y la religión de los baluchis y niega tener una agenda separatista y vínculos con el exterior, como le acusa el Gobierno iraní, que le atribuye conexiones con EEUU, Reino Unido, Pakistán, Arabia Saudita y con la red al-Qaeda. Ante la posibilidad de desestabilización de esta zona, Teherán ha reforzado sus dispositivos de control y ha condenado a muerte a decenas de militantes de Jundollah. Las acciones del grupo insurgente se han reducido desde 2010, tras la captura y ejecución de su líder, pero nuevos grupos armados con una agenda similar a la de Jundollah han continuado operando en la zona, protagonizando esporádicos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

60. Véase el resumen sobre Irán – EEUU, Israel en este capítulo.

La tensión en la provincia iraní de Sistán Baluchistán continuó caracterizándose en 2015 por algunas acciones armadas reivindicadas por el grupo Jaish al-Adl (Ejército de la Justicia). **La ofensiva más destacada del año tuvo lugar en abril, cuando milicianos de este grupo insurgente lanzaron un ataque que causó la muerte a ocho guardias fronterizos en la localidad de Negur.** El incidente fue considerado como la acción más cruenta perpetrada por el grupo desde octubre de 2013, cuando un hecho similar provocó la muerte a 14 efectivos de seguridad. Las autoridades locales aseguraron que los insurgentes utilizaron lanzagranadas y otras armas en su ataque, tras el cual se replegaron hacia la zona baluchi de Pakistán. La prensa iraní se hizo eco de declaraciones de funcionarios pakistaníes que supuestamente reconocían que no eran capaces de controlar el posible flujo de milicianos en la porosa zona fronteriza con territorio iraní. En este contexto, Irán manifestó su disposición a lanzar operaciones antiterroristas conjuntas con Islamabad. Irán y Pakistán suscribieron un acuerdo de seguridad en 2013 que los compromete a cooperar en el combate contra el terrorismo, el crimen organizado y las actividades que pongan en riesgo la seguridad nacional de ambos países. En los meses siguientes se informó del lanzamiento de fuego de mortero por parte de las fuerzas de seguridad iraníes desde Baluchistán que impactaron en el vecino distrito pakistaní de Pangjur sin que se reportaran daños o víctimas. Funcionarios locales denunciaron estos hechos como una violación de la frontera, pero las autoridades iraníes respondieron insistiendo en que proseguirían con los ataques contra militantes que amenacen a la república islámica, ya sea en Irán o en Pakistán.

A lo largo del año también se informó de la muerte de un alto cargo de Jaish al-Adl en Pakistán –según la agencia oficial de noticias iraní, Mohammad Saeed Torkaman Zehi murió tras ser atacado por hombres armados en la ciudad pakistaní de Karachi, en abril– y de la detención en marzo de Abdul Salam Rigi, dirigente del también grupo armado sunní Jundollah y familiar de Abdolmalek Rigi, el antiguo líder de esta organización que fue ejecutado por las autoridades iraníes en 2010. Abdul Salam Rigi fue detenido cuando intentaba viajar de la ciudad iraní de Taftan, en la frontera, a la localidad pakistaní de Quetta. Durante el año, Irán también desmintió las informaciones que apuntaban a la captura de 18 miembros de la Guardia Republicana por parte de insurgentes baluchis. En 2015 algunos análisis destacaron que en la medida que la república islámica se ha involucrado más activamente en conflictos armados a nivel regional, algunos grupos armados que operan en Irán, como Jaish al-Adl en Sistán Baluchistán –pero también militantes árabes ahwazi en Khuzestan– han intentado enmarcar sus narrativas separatistas en el pulso regional entre Teherán y Riad y en la dinámica de tensión sunní-chií, dando a entender su disposición a recibir apoyo externo. Según algunos expertos, las cuentas del grupo en las redes sociales estaban dirigiéndose de una manera más activa a público árabe

con mensajes y vídeos, presuntamente con la intención de obtener ayuda económica de países del Golfo.

Irán – EEUU, Israel ⁶¹	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema, Gobierno Internacional
Actores:	Irán, EEUU, Israel

Síntesis:
Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Khomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del “eje del mal” y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, ha despertado expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015.

La tensión en torno al programa nuclear iraní se redujo de manera significativa durante el año, ya que **las partes involucradas en el diálogo internacional sobre el dossier atómico de la república islámica lograron sortear las dificultades y alcanzaron un acuerdo histórico a mediados de julio, en el marco de un proceso iniciado en noviembre de 2013.** A lo largo de 2015 el proceso se desarrolló según el calendario previsto, con tan solo algunos retrasos. Durante el primer semestre se sucedieron las rondas de negociaciones entre representantes iraníes y del grupo de países del G5+1 (EEUU, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Alemania, también conocido como grupo EU3+3) en ciudades como Ginebra, Zurich, Estambul, Munich y Motreaux. Además de los encuentros en formato multilateral, a lo largo del período hubo reuniones a nivel bilateral, entre delegados estadounidenses e iraníes. Las partes participantes en el diálogo tenían hasta el 31 de marzo para llegar a un consenso sobre el acuerdo marco para la negociación, que finalmente acabó anunciándose el 2 de abril, después de ocho días de maratónicas reuniones en Suiza. En este momento y en los meses siguientes, quedó patente que uno de los principales escollos en la negociación era el ritmo del calendario de levantamiento de medidas de castigo, ya que Irán era partidario de una suspensión total una vez suscrito el

61. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

acuerdo, mientras que EEUU y otros actores defendían un levantamiento gradual. La fecha clave para alcanzar un consenso era el 30 de junio, plazo para la adopción de un pacto definitivo entre las partes. Las negociaciones se extendieron por dos semanas más y finalmente el 14 de julio se anunció el acuerdo en Viena (Joint Comprehensive Plan of Action, en su nombre en inglés). El texto establece una reducción del 98% de las reservas de uranio enriquecido de Irán y el desmantelamiento de dos tercios de las centrifugadoras destinadas al enriquecimiento de este material, medidas que suponen que el eventual desarrollo de una bomba nuclear por parte de Teherán –una ambición que la república islámica niega poseer– tardaría como mínimo una década. El pacto incluye mecanismos de verificación más rigurosos, incluyendo la posibilidad de que inspectores de la ONU accedan a las instalaciones militares iraníes, aunque su acceso no sería inmediato sino que estaría sujeto a la aprobación por parte de una comisión conjunta. A cambio, Teherán obtiene un levantamiento de las sanciones. Adicionalmente, se otorga luz verde al levantamiento del embargo de armas, lo que permitirá a Irán acceder a armas convencionales en un plazo de cinco años. El acuerdo fue refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU en votación unánime el 20 de julio.

Durante el transcurso de las negociaciones y tras el anuncio de acuerdo se hicieron patentes las reticencias y escepticismo de sectores, tanto en Irán como en EEUU, reacios a un pacto sobre el *dossier* nuclear, y dispuestos a boicotearlo. En el primer semestre, parlamentarios críticos en Washington amenazaron con impulsar nuevas sanciones contra Irán. El presidente de EEUU, Barack Obama, tuvo que recurrir a la amenaza de veto en esta ocasión y en otras similares en los meses siguientes. Congresistas estadounidenses también escribieron una carta abierta al líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, advirtiéndole que cualquier acuerdo suscrito por el Gobierno de Obama podría ser revertido por la nueva administración, tras las elecciones presidenciales. Paralelamente, en Teherán, un grupo de legisladores promovió un proyecto de ley para exigir que Irán incrementara el enriquecimiento de uranio en caso de que el Congreso de EEUU impusiera nuevas medidas de castigo. A medida que se acercaba la fecha de firma del acuerdo, Irán prohibió las manifestaciones a favor y en contra del acuerdo. Las posiciones críticas al acuerdo también incluyeron a Israel, que insistió en el desmantelamiento total del programa nuclear iraní. **En marzo Benjamin Netanyahu viajó a EEUU y mantuvo un encuentro con congresistas, en su mayoría republicanos, a quienes pidió explícitamente bloquear un acuerdo con Irán. Los países árabes vecinos a Irán también expresaron sus reticencias.** En un intento por despejar estas desconfianzas, el Gobierno de Obama

En 2015 se alcanzó un acuerdo histórico sobre el programa nuclear iraní, que limita significativamente las capacidades atómicas de Teherán a cambio de un levantamiento de sanciones

citó a los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) a una reunión en Camp David con el fin de ofrecerles garantías de que EEUU velará por la seguridad de las monarquías del Golfo y acuerdos de cooperación militar. La tensión generada por este tema se evidenció en el hecho de que solo dos monarcas acudieron a la cita de Camp David y el rey saudí canceló el viaje a última hora. Pese a todas las objeciones, el acuerdo continuó su evolución y el 18 de octubre fue adoptado formalmente por las partes (en el llamado “Adoption Day”). A partir de esta fecha comenzó el período en que Irán debía cumplir sus obligaciones según el pacto. En este contexto, en las semanas siguientes Teherán anunció que planeaba enviar sus reservas de uranio enriquecido a Rusia y Kazajistán. Paralelamente, a finales de año la AIEA concluyó su investigación sobre la presunta dimensión militar del programa nuclear iraní, identificando actividad relevante para el desarrollo de un artefacto nuclear explosivo antes de 2003, con ciertas actividades que continuaron entre 2003 y 2009. Cabe destacar que diversos análisis subrayaron el posible impacto del acuerdo nuclear en la política interna iraní, dada la proximidad de las elecciones parlamentarias y de la Asamblea de Expertos, previstas para febrero de 2016. Finalmente, cabe mencionar que la suscripción del acuerdo facilitó la incorporación de Irán a la iniciativa diplomática internacional que se activó a finales de año para intentar promover una salida política a la crisis en Siria.⁶²

Yemen (sur)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Territorio Interna
Actores:	Gobierno, grupos de oposición autonomistas y secesionistas del sur (entre ellos el Movimiento del Sur/Al-Hiraak al-Janoubi)

Síntesis:

El Yemen actual es resultado de un problemático proceso de unificación que en 1990 fusionó la República Árabe de Yemen (RAY), en el norte, con la República Democrática Popular de Yemen (RPDY), en el sur. Desde entonces, la balanza de poder se inclinó hacia el norte y el presidente Ali Abdullah Saleh (mandatario de la ex RAY desde 1978 y del Yemen unificado desde 1990) gobernó sin alternancia hasta su salida forzada del poder en 2012. El frágil equilibrio político definido tras la instauración del nuevo Estado derivó en el estallido de una guerra civil en 1994, que culminó con la victoria de las fuerzas septentrionales. Las tensiones persisten desde entonces y en los últimos años se han intensificado las manifestaciones que denuncian una discriminación hacia el sur –en especial en lo que se refiere al control de los recursos–, así como los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El movimiento de contestación

62. Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados) y en el capítulo 3 (Procesos de paz).

del sur no está articulado en una sola organización y reúne a grupos con diversas agendas, que exigen desde una mayor autonomía hasta la secesión y que presionan por una nueva relación norte-sur en el marco del proceso de transición iniciado en Yemen en 2011.

A lo largo de 2015, las dinámicas de tensión en el sur de Yemen se vieron directamente influidas por la evolución de los acontecimientos en el resto del país –que derivaron en una crisis institucional y en una significativa escalada de violencia, además de la intervención armada de una coalición internacional liderada por Arabia Saudita a partir de finales de marzo–.⁶³ Durante los primeros meses del año, ante los avances de las fuerzas al-houthistas desde su feudo en el norte hacia el centro y sur del país y ante la crisis política que derivó en la salida forzada del poder del presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi, sectores del sur proclives a la independencia del territorio decidieron no reconocer la autoridad del poder central. Así, tras la renuncia no formalizada de Hadi –que luego reivindicó su condición de presidente y denunció a los al-houthistas por perpetrar un golpe de Estado–, el denominado Consejo de Seguridad de Adén anunció que ya no reconocería las órdenes de Sanaa. Hadi logró escapar en febrero del arresto domiciliario al que le tenían sometido los al-houthistas y buscó refugio en Adén (sur). Desde allí intentó aglutinar a fuerzas leales para hacer frente a la milicia del norte, que ha actuado en connivencia con sectores del entorno del ex presidente y adversario de Hadi, Alí Abdullah Saleh. No obstante, algunos observadores y analistas subrayaron que no estaba claro el nivel de apoyo que Hadi podía obtener en el sur del país, ya que si bien el dirigente es originario de la zona meridional, se le considera como un político estrechamente vinculado con las élites del norte. Ante los avances al-houthistas, y tras un ataque al palacio presidencial en Adén, Hadi acabó refugiándose en Arabia Saudita y demandando una intervención internacional que pasó a ser liderada por Riad. En los meses siguientes, diversos sectores del sur se organizaron para ofrecer resistencia a las milicias al-houthistas y Adén se convirtió en uno de los escenarios clave de las hostilidades. Con la ayuda de los ataques aéreos de la coalición y el apoyo de tropas terrestres, fuerzas armadas leales a Hadi y milicias del sur consiguieron a mediados de año expulsar a los al-houthistas y recuperar el control del estratégico puerto de Adén, aunque durante el segundo semestre este dominio se vio contestado por diversas acciones de milicianos yihadistas de grupos como ISIS o AQPA.⁶⁴ Este último grupo aprovechó la situación de inestabilidad en el país para expandir su control en Hadramawt (sureste) y lanzar ofensivas en otras provincias del sur, como Abyan y Bayda.

En este contexto, informaciones de prensa destacaron que los combates con las fuerzas al-houthistas estaban dotando de experiencia militar a jóvenes del sur,

muchos de los cuales se presentan como miembros de la Resistencia del Sur y ostentan emblemas meridionales de la época previa a la unificación de Yemen en 1990. Otros análisis subrayaron los cambios en los apoyos externos a ciertos sectores del sur, y los intentos tanto de Riad como de Teherán de contar con el respaldo de algunos de ellos en el marco de la contienda entre los al-houthistas y Hadi. A este respecto, algunos de los grupos del sur que hasta la fecha habían recibido un cierto apoyo de Irán, como al-Beidh –uno de los grupos más organizados del Movimiento del Sur–, oscilaron de Teherán hacia los países del Golfo en busca de apoyos. Arabia Saudita, que tradicionalmente ha forjado alianzas con sectores del norte, también buscó ampliar su influencia en el sur de Yemen, sobre todo después de que los al-houthistas tomaron el control de Sanaa.⁶⁵ No obstante, tras la recuperación de territorios en el sur se produjeron algunas tensiones entre sectores del Movimiento del Sur reclutados por Riad y el entorno de Hadi por la designación de autoridades en las áreas liberadas de la presencia al-houthista. Cabe destacar que como cada año, en octubre, volvieron a producirse masivas manifestaciones coincidiendo con el aniversario de la independencia del sur del dominio británico en 1967. Las movilizaciones constituyeron el primer reclamo masivo por la independencia de la zona meridional tras el retroceso de los al-houthistas de Adén y otras provincias del sur y en ellas quedó patente que sectores del sur no pretenden continuar combatiendo a la insurgencia del norte, ya que su aspiración se focaliza en la independencia del sur.

Mashreq

Egipto	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En el marco de las llamadas “revueltas árabes”, las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas, Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban una nueva posición de poder y el

63. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

64. Véase el resumen sobre Yemen (AQPA) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

65. Farea al-Muslimi, *The Southern Question: Yemen's War Inside the War*, Carnegie Endowment for International Peace, 8 de julio de 2015.

estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

Durante 2015 Egipto continuó siendo escenario de tensiones internas, persecución a sectores disidentes islamistas y de la oposición secular, abusos a los derechos humanos y hechos de violencia que causaron la muerte de decenas de personas. **Como en años previos, algunos de los incidentes más graves se produjeron en enero durante la conmemoración de un nuevo aniversario – el cuarto– del derrocamiento del régimen de Hosni Mubarak.** Una veintena de personas perdió la vida en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad o tras ser tiroteadas por la Policía mientras participaban en protestas. La muerte de una joven de 17 años en una manifestación pro-islamista en Alejandría y de la activista y poeta Shaimaa al-Sabbagh, en una marcha pacífica en El Cairo, ambas por disparos de la Policía, causaron especial consternación. A mediados de año también se informó de la muerte de entre nueve y 13 dirigentes de los Hermanos Musulmanes (HM) –organización declarada ilegal y terrorista por el régimen– durante una operación de registro en El Cairo destinada, según las autoridades, a desbaratar un intento de complot. Otras seis personas fallecieron a mediados de año durante enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con partidarios de los HM y del depuesto presidente Mohamed Mursi. La campaña contra los HM continuó también en el plano judicial, con nuevas sentencias contra miembros de la organización, incluyendo su máximo dirigente, Mohamed Badie, y el ex presidente Mursi, que fue condenado a muerte en mayo. La condena contra el ex mandatario –por espionaje y colaboración con milicias extranjeras en el asalto a cárceles durante la revuelta contra Mubarak en 2011– motivó expresiones de preocupación y críticas por parte de la ONU, la alta representante de Exteriores de la UE y países como Turquía. En este contexto, los HM reiteraron su llamamiento a la población a rebelarse contra el Gobierno de al-Sisi. Según algunos expertos, los HM enfrentan un debate interno sobre el uso de la violencia –de la que reniegan oficialmente– ante la campaña represiva del Gobierno, con sectores que reivindicarían su utilización de manera limitada. Otros analistas han subrayado que, en este contexto, simpatizantes de los HM pueden estar viéndose atraídos por grupos armados que operan en el país.⁶⁶

Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos denunciaron abusos de las fuerzas de seguridad egipcias, muertes en custodia policial y uso de la violencia sexual contra personas detenidas

A lo largo del año, diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron también múltiples y graves abusos. ONG locales e internacionales alertaron sobre el gran número de personas fallecidas en custodia policial, o desaparecidas después de haber sido arrestadas. Según la ONG egipcia Nadeem Center, 272 personas murieron bajo custodia policial durante el primer año de gobierno del general Abdel Fattah al-Sisi y otras 119 permanecían desaparecidas. A finales de año, varios policías fueron sentenciados por torturas y golpear hasta la muerte a personas presuntamente vinculadas a los HM, en diversos episodios. Paralelamente, Amnistía Internacional advirtió del incremento de las condenas a muerte en el país –solo en 2014 se dictaron 507– y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) alertó sobre el incremento en el uso de la violencia sexual contra personas detenidas. Asociaciones de prensa también denunciaron un aumento significativo en el número de periodistas arrestados en 2015. **Asociaciones de derechos humanos y ONG locales también llamaron la atención sobre las nuevas leyes antiterroristas, aprobadas en el país durante el segundo semestre tras una escalada de violencia en el Sinaí en julio y consideradas como una nueva herramienta del régimen para reprimir a las voces críticas.** La normativa amplía los poderes de detención y vigilancia de la Policía, incrementa las penas de prisión perpetua y de muerte por delitos vinculados a actividades terroristas y consagra un concepto de “terrorismo” considerado ambiguo que puede ser utilizado con fines políticos. La norma también incluye una polémica disposición que sanciona la difusión de informaciones sobre operaciones antiterroristas que contradigan la versión oficial, por ejemplo en lo relativo al balance de víctimas. En este contexto, a finales de año se celebraron las elecciones parlamentarias, inicialmente previstas para marzo pero postergadas por problemas con la ley electoral. Las rondas de votación en octubre y noviembre contaron con una baja participación –28% según fuentes oficiales– y fueron celebradas en medio del boicot de las fuerzas de oposición. La coalición pro-Sisi, “Por amor a Egipto”, consiguió todos los escaños asignados a las listas de partidos. El resto se repartió entre candidatos independientes. Por tanto, se esperaba que el nuevo Parlamento (de 596 escaños) sea ampliamente favorable a al-Sisi. Al menos 80 ex miembros del Partido Nacional Democrático (PND) de Mubarak obtuvieron representación en el nuevo Legislativo. Finalmente, cabe mencionar que EEUU decidió reanudar la ayuda militar a Egipto y privilegiar la cooperación ante amenazas regionales, a pesar de que un informe del departamento de Estado constató que en el país se han puesto en marcha leyes y acciones judiciales que restringen la libertad de asociación y expresión y que abusos cometidos por las fuerzas de seguridad permanecen impunes.

66. Véase resumen sobre Egipto (Sinaí) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Iraq (Kurdistán)	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Territorio, Recursos, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Turquía, Irán

Síntesis:

Concentrada en la zona norte de Iraq, la población kurda representa entre un 15 y un 20% del total de habitantes del país. Desde la creación del Estado iraquí, y tras el incumplimiento de las promesas sobre un Estado kurdo independiente en la región, la población kurda ha vivido un difícil encaje con el Estado iraquí y ha padecido severos casos de represión. En 1992, tras el fin de la Guerra del Golfo, el establecimiento de la zona de exclusión aérea en el norte de Iraq sentó las bases para la creación del Gobierno de la Región del Kurdistán (KRG). Esta experiencia de autogobierno kurdo se vio reforzada después del derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en 2003 y ganó reconocimiento en el esquema federal consagrado en la Constitución iraquí de 2005. Desde entonces, las divergentes interpretaciones sobre los derechos y competencias de cada una de las partes han alimentado las tensiones entre Erbil y Bagdad. La disputa se ha focalizado principalmente en el estatus de los llamados “territorios en disputa” y el control de los recursos energéticos. En el período más reciente, la guerra siria y la evolución del conflicto armado en Iraq han repercutido en las dinámicas de esta disputa, reavivando los debates sobre las perspectivas de un eventual Estado kurdo independiente.

La tensión en el Kurdistán iraquí tuvo múltiples dimensiones en 2015 y estuvo vinculada a los enfrentamientos de fuerzas kurdas con milicianos de ISIS en el marco del conflicto armado en Iraq⁶⁷, al pulso entre el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG, por sus siglas en inglés) y el Gobierno central iraquí por cuestiones de poder y la gestión de recursos energéticos, y a pugnas internas entre diferentes fuerzas políticas del Kurdistán iraquí. Las fuerzas kurdas jugaron un papel destacado en la lucha contra el grupo armado ISIS a lo largo de todo el año en la zona norte de Iraq. No obstante, algunos análisis destacaron que la respuesta a la amenaza del grupo armado se dio de manera fragmentada, evidenciando las divisiones intra-kurdas entre distintas fuerzas del Kurdistán iraquí, ya que en la práctica combatientes vinculados al PDK y al PUK se repartieron áreas de influencia y enfrentaron problemas de coordinación.⁶⁸ En este contexto, diversas voces alertaron sobre las consecuencias del suministro internacional de armas a las fuerzas kurdas iraquíes y su potencial de inestabilidad, ya que la falta de control y seguimiento en la entrega de estos arsenales amenazaba con graves consecuencias a la hora de alentar los faccionalismos y divisiones entre milicias kurdas.⁶⁹ **En el marco de la**

lucha contra ISIS también quedaron patentes las tensiones de grupos kurdos iraquíes, en especial del PDK de Masoud Barzani, presidente del KRG, con otros grupos kurdos que operan en Turquía y Siria, como el PKK o el YPG. Estas fricciones fueron visibles en áreas como Sinjar –las fuerzas kurdas expulsaron a ISIS de esta localidad a finales de año–, donde el PDK y el PKK se disputaron la influencia sobre la población local yazidí. Según se informó, fuerzas de seguridad del PDK también realizaron algunas detenciones de dirigentes locales vinculados al YPG, filial del PKK en Siria. Paralelamente, la gestión de la crisis de seguridad generó tensiones entre el KRG y el Gobierno iraquí, en parte vinculadas a las informaciones sobre una eventual provisión de armas directamente a Erbil sin una autorización de Bagdad. EEUU tramitó una ley con la intención de autorizar estas transferencias, pero finalmente fue desestimada y se acordó que las provisiones de arsenales se coordinarían con el Gobierno central iraquí. Como en años previos, el pulso entre Erbil y Bagdad también tuvo como eje la gestión de los recursos del petróleo. A partir de junio, el KRG decidió exportar petróleo de las áreas bajo su control, incluyendo Kirkuk, de manera unilateral, sin autorización del Gobierno central iraquí, argumentando falta de liquidez. En diciembre de 2014 Erbil y Bagdad habían llegado a un acuerdo para la gestión de los ingresos del petróleo y la asignación de presupuestos al KRG, pero a lo largo de 2015 ambas partes se acusaron mutuamente de no cumplir con los términos de implementación del pacto.⁷⁰ Durante el segundo semestre, el factor Turquía también introdujo nuevos elementos de tensión tanto en la relación del KRG con otros grupos kurdos de la región como en las dinámicas con Bagdad. Por un lado, desde mediados de año las fuerzas turcas lanzaron diversas ofensivas contra posiciones del PKK en el territorio kurdo iraquí, evidenciando los dilemas del KRG en su relación con Ankara.⁷¹ Por otro lado, a finales de 2015 la entrada de fuerzas turcas en el norte de Iraq –entre 150 y 200 soldados y unos 25 tanques en la provincia de Ninewa– que habría contado con la aprobación tácita del PDK generó una nueva polémica con las autoridades de Bagdad, que denunciaron una violación de soberanía y exigieron un inmediato retiro de las tropas turcas de territorio iraquí.

Adicionalmente, a estos focos de tensión se sumó la **pugna interna entre diversas fuerzas políticas kurdas iraquíes, especialmente en torno a la figura de Barzani y su permanencia en el poder.** El mandato de Barzani, que ya había sido extendido por dos años en 2013, venció en agosto de 2015 sin que se llegara a acuerdo sobre cómo resolver el futuro de la presidencia, creando una situación de ambigüedad institucional. Los partidos Gorran y PUK se mostraron reticentes a que el mandatario sirviera un tercer mandato. La disputa política llevó al primer ministro Nerchivan Barzani –sobrino del presidente– a

67. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

68. Joost Hiltermann, *Clearing the Landmines from Iraqi Kurdistan's Future*, International Crisis Group, 24 de marzo de 2015.

69. Maria Fantappie, “The Peshmerga Regression”, *Foreign Affairs*, 14 de junio de 2015.

70. Mohamed A.Salih, “Erbil-Baghdad oil relations swing between deal, no deal”, *Al-Monitor*, 27 de julio de 2015.

71. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

anunciar una reformulación del gobierno, que llevó a la exclusión de las posiciones ministeriales que hasta entonces ostentaba el partido Gorran (Cambio). En paralelo se produjeron manifestaciones contra el Gobierno kurdo, inicialmente por problemas vinculados al pago a funcionarios públicos, pero luego las demandas se extendieron y pasaron a exigir la dimisión de Barzani. En este contexto las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de personas y al menos dos personas fallecieron en incidentes producidos durante las movilizaciones. En medio de este conjunto de dinámicas de tensión en el Kurdistán iraquí, Barzani –quien en la práctica ha seguido oficiando como presidente del KRG– insistió en su proyecto político de promover un referéndum por la independencia, tal como anunció en 2014. En declaraciones a la prensa durante 2015 el dirigente aseguró que este objetivo había sido postergado por la necesidad de concentrarse en cuestiones de seguridad y en la lucha contra ISIS, pero que este propósito continuaba estando en la agenda. En esta línea, en diciembre Barzani instruyó al PDK a trabajar con otros partidos del Kurdistán iraquí para encontrar los mecanismos que permitan llevar a cabo la consulta.

A principios de año los incidentes en la zona fronteriza entre Israel, Líbano y Siria causaron una decena de víctimas mortales, en la mayor escalada de violencia entre Israel y Hezbollah desde 2006

Israel – Siria, Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia)

Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en el Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

Durante 2015 la tensión internacional protagonizada por Israel, Siria y Líbano motivó varios hechos de violencia, principalmente en las zonas fronterizas, que causaron la muerte a más de una decena de personas. **Los incidentes de mayor gravedad se produjeron a principios de año y fueron catalogados como la mayor escalada de violencia entre Israel y la milicia chií Hezbollah desde la guerra entre ambos en 2006.** Las hostilidades comenzaron cuando un ataque aéreo israelí provocó la muerte a seis milicia-

nos de Hezbollah y a un general iraní en el área de los Altos del Golán controlada por Siria, en la provincia de Quneitra. El militar iraní era miembro de la Guardia Republicana y, según la versión oficial iraní, se encontraba en Siria para dar asistencia a las fuerzas del régimen de Damasco. Entre los fallecidos de Hezbollah se encontraban un alto cargo de la organización y el hijo de un dirigente de la milicia chií asesinado en 2008, presuntamente en una acción israelí. Según fuentes israelíes, el grupo planeaba ataques contra Israel. Previamente, el líder de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, había advertido de que sus fuerzas estaban preparadas para responder a los continuos ataques israelíes sobre territorio sirio ocurridos en los meses previos y que, según Israel, habían tenido como propósito frenar las transferencias de armas al grupo libanés. Hezbollah respondió al ataque israelí en los días siguientes, lo que derivó en intercambios de fuego en la zona fronteriza que resultaron en la muerte de dos soldados israelíes a finales de enero. Otros siete efectivos resultaron heridos en esta ofensiva reivindicada por Hezbollah. Las represalias israelíes a este último ataque derivaron posteriormente en la muerte de un soldado de nacionalidad española de la misión de la ONU en Líbano, UNIFIL, en el área de las Granjas de Shebaa. Pese a este incremento de la violencia, en las semanas siguientes se hizo evidente que ni Israel ni Hezbollah estaban interesados en alentar una escalada de confrontación.

A lo largo del año se registraron otros incidentes, entre ellos un ataque israelí contra un presunto convoy de armas de Hezbollah en la zona limítrofe entre Siria y Líbano; el ataque de un grupo de drusos israelíes a una ambulancia israelí que transportaba a sirios heridos causando la muerte de uno de ellos –la tensión en la zona se había intensificado tras el cerco a un poblado druso en la vecina Siria por parte del Frente al-Nusra–; o la ofensiva israelí en la zona de los Altos del Golán de Siria, en agosto, en respuesta al lanzamiento de cohetes contra un poblado israelí próximo a esta zona. **Hacia finales de año, la tensión entre las partes volvió a escalar después de que un ataque aéreo en Damasco causara la muerte de Samir Qantar, un alto cargo de Hezbollah, en un incidente que fue atribuido a Israel.** El Gobierno israelí no confirmó ni desmintió la responsabilidad de la ofensiva, que tuvo lugar a finales de diciembre y acabó con la vida de otras ocho personas. No obstante, altos funcionarios israelíes celebraron la muerte del dirigente de Hezbollah. Qantar había pasado 30 años en una cárcel israelí tras ser condenado a tres cadenas perpetuas por el asesinato de dos hombres y una niña israelíes en 1979 –entonces tenía 16 años y era miembro del Frente de Liberación Palestina– y había sido liberado como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hezbollah en 2008. Dirigentes de Hezbollah prometieron vengar la muerte de Qantar. Poco después de su muerte tres cohetes lanzados desde Líbano impactaron en el norte de Israel, sin que se informara de daños o víctimas.

Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupos armados ISIS y Frente al-Nusra

Síntesis:

El asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada “Revolución del Cedro” que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses y ha favorecido un significativo incremento de la violencia en el país.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, durante 2015 Líbano se vio afectado por la interconexión con las dinámicas del conflicto armado en la vecina Siria, que supusieron diversos hechos de violencia en el país, así como por una situación de bloqueo político que alentó crecientes movilizaciones de la población. **La violencia se manifestó en múltiples incidentes a lo largo del año, pero entre ellos destacó el doble atentado suicida perpetrado en noviembre en el barrio de Burj al-Barajneh de Beirut, un suburbio de mayoría chií considerado feudo de Hezbollah. Al menos 43 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en esta ofensiva, que fue reivindicada por el grupo armado ISIS** –un día antes de acometer los ataques en París– y que fue interpretada como un castigo al grupo chií por su implicación en la guerra en Siria en apoyo al régimen de Bashar al-Assad. A comienzos de año, en enero, otro doble ataque suicida contra una zona de Trípoli predominantemente alaúí –favorable al régimen de Damasco– había provocado la muerte a otras nueve personas, en una acción llevada a cabo por el Frente al-Nusra, filial de al-Qaeda en Siria. En diciembre, otro ataque suicida durante una operación de rastreo en esta misma ciudad causó la muerte a tres personas. Además de atentados de este tipo, a lo largo del año se produjeron múltiples hechos de violencia en zonas fronterizas, entre ellas Arsal o Raas Baalbek, que dejaron numerosas víctimas mortales. Cabe destacar que las fuerzas militares libanesas desempeñaron un creciente papel en los enfrentamientos con facciones armadas sirias y reforzaron su despliegue en la zona limítrofe para, entre otras cosas, bloquear la penetración de ISIS. Paralelamente, Hezbollah continuó jugando un rol destacado en los combates a lo largo de la

frontera nororiental y en zonas como el Valle de Bekaa –una de sus principales áreas de influencia–, combatió a ISIS y el Frente al-Nusra, y siguió luchando del lado de Bashar al-Assad en territorio sirio en zonas como la montaña de Qalamoun, considerada como una vía clave para los suministros de grupos armados de la oposición siria. Los combates en Zabadani, en esta área, fueron uno de los principales frentes del conflicto armado en Siria durante 2015.⁷² Cabe destacar que en medio de las hostilidades, a finales de año, se produjo un intercambio de prisioneros con el Frente al-Nusra, mediado por Qatar, que permitió la liberación de 16 soldados libaneses que permanecían retenidos desde agosto de 2014 tras ser capturados en Arsal. A cambio, Líbano excarceló a 13 personas, entre ellas la ex esposa del líder de ISIS.

A nivel político, la situación en Líbano siguió caracterizándose por el vacío institucional en la figura de la presidencia, puesto vacante desde la renuncia de Michel Suleimán en mayo de 2014. A lo largo del año, los diferentes intentos por llegar a una figura de consenso fracasaron y las votaciones para la elección del cargo fueron declaradas nulas por falta de quórum. Si bien se mantuvo abierto un canal de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas –la iniciativa de diálogo nacional celebró numerosas reuniones a lo largo del año– y facciones antagónicas como Hezbollah y el Movimiento Futuro retomaron las conversaciones después de tres años de bloqueo, no se consiguieron avances en temas clave y la población libanesa se movilizó para expresar su creciente preocupación y hartazgo por el inmovilismo de la clase política. **Uno de los catalizadores de las manifestaciones populares fue la crisis en la gestión de las basuras en Beirut, que motivó masivas protestas por los problemas en la provisión de servicios, primero, para luego denunciar la inacción, el nepotismo y la corrupción de la clase política.** Las protestas pacíficas derivaron en agosto en hechos de violencia que resultaron en manifestantes y policías heridos, así como en diversas detenciones. Las autoridades libanesas adoptaron algunas medidas pero no consiguieron frenar las protestas, que reunieron a miles de personas de todo el arco político, y en las que tuvo un papel clave el movimiento You Stink (“Apestáis”), creado en agosto. Este movimiento puso en entredicho la legitimidad de algunos de los participantes en el diálogo político y demandó nuevas elecciones, cuestionando así la decisión del Parlamento de extender su mandato hasta 2017.

Palestina	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	AP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedine al-Qassam, grupos salafistas

72. Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Síntesis:

La oposición entre los distintos sectores palestinos en las últimas décadas ha estado protagonizada principalmente por grupos nacionalistas laicos por una parte (Fatah y su brazo armado –las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa–, FPLP, FDLP) y grupos confesionales por otra (Hamás y su brazo armado –Brigadas Ezzedine-al-Qassam–, Yihad Islámica). El enfrentamiento responde a la voluntad de controlar el poder dentro de los territorios palestinos y se ha traducido, a su vez, en diferentes aproximaciones respecto a las relaciones con Israel. Tras años de dominio de Fatah en la política palestina, las acusaciones de corrupción y de no defender los intereses palestinos en el proceso de paz desencadenaron el triunfo de Hamás en las elecciones de enero de 2006. Este hecho precipitó una batalla dialéctica y armada entre ambas formaciones por el control de las instituciones políticas y, sobre todo, de las fuerzas de seguridad. En 2011 Hamás y Fatah anunciaron un acuerdo de reconciliación. Sin embargo, las discrepancias entre ambas formaciones han persistido, dificultando la formación de un gobierno de unidad nacional. Los cambios en la región en el marco de las revueltas árabes también han tenido una influencia relevante en los avances y retrocesos del proceso de reconciliación, al que Israel se opone abiertamente.

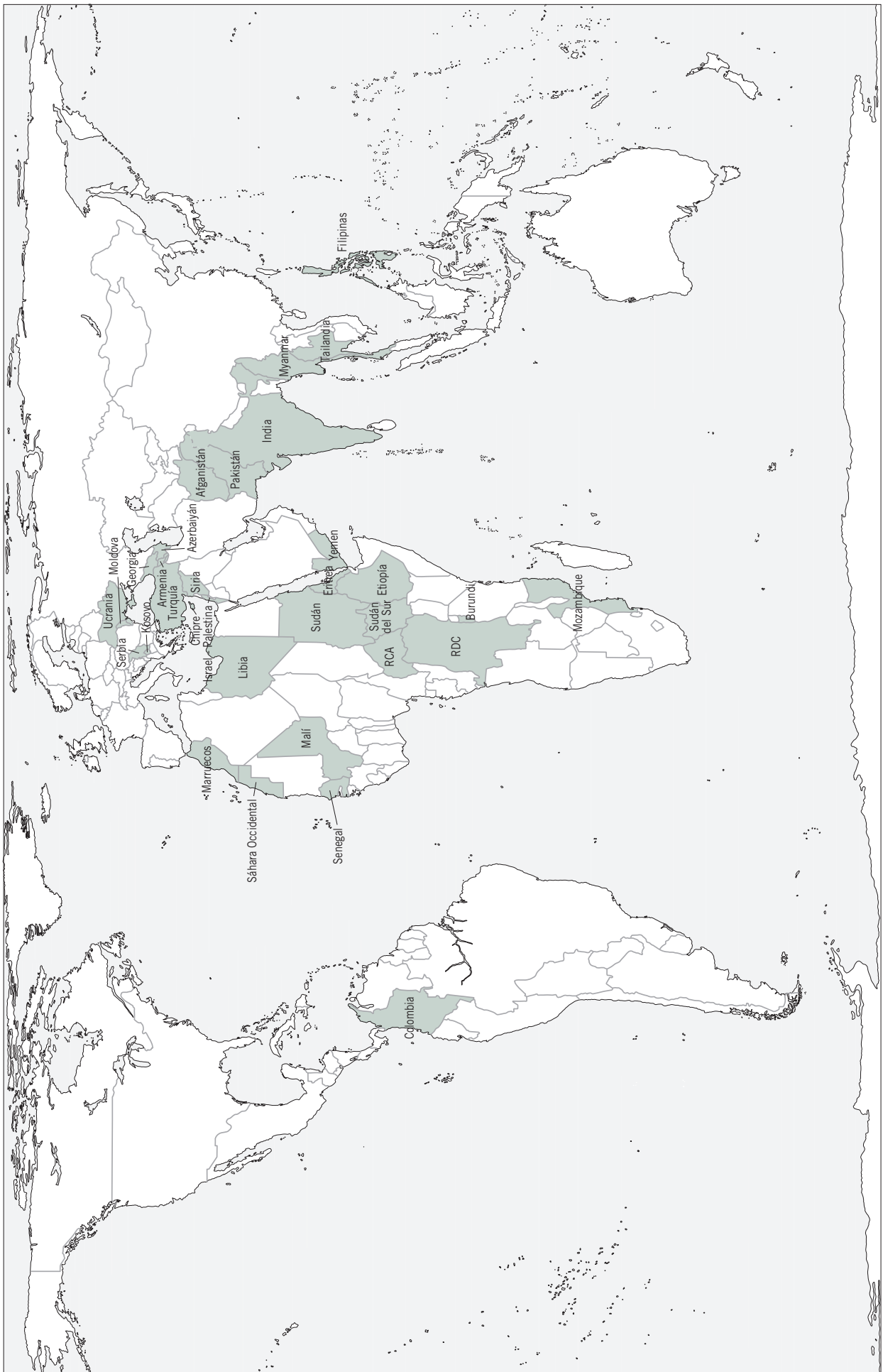
A lo largo del año, continuaron las tensiones entre los grupos palestinos Fatah y Hamás, sin que se presentaran indicios de una reconciliación efectiva entre ambas facciones. En la práctica, y pese a la conformación de un gobierno de unidad en 2014, persistieron las divisiones y no se avanzó en la organización de elecciones presidenciales y legislativas como preveía el acuerdo de reconciliación (conocido como Beach Refugee Camp Agreement). En mayo de 2015, además, **Amnistía Internacional dio a conocer un informe sobre la guerra en Gaza en 2014 en el que denunció a Hamás por aprovechar el contexto bélico para cometer abusos contra opositores políticos. La ONG denunció que el grupo islamista palestino había ejecutado sumariamente a al menos 23 personas – al menos seis de ellos en una acción pública– y había arrestado y torturado a decenas, incluyendo miembros de Fatah.** Amnistía Internacional aseguró que Hamás había utilizado la excusa del conflicto para llevar a cabo estas ejecuciones, pese a que algunos de los prisioneros tenían pendiente apelaciones a condenas de pena de muerte. Posteriormente, a principios de julio, Hamás denunció que en un período de varios días más de 200 de sus militantes habían sido arrestados por la Autoridad Palestina (AP) y alertó sobre casos de torturas. Fuentes de la AP citadas por la prensa aseguraron que la campaña de detenciones había afectado a un centenar de personas presuntamente involucradas en planes para atacar a la AP. En septiembre, Fatah acusó a Hamás de detener a más de 40 simpatizantes de la organización en Gaza. A lo largo del año persistió el bloqueo en temas clave, como el pago a funcionarios próximos a Fatah y a Hamás, lo que derivó en algunos incidentes en Gaza –entre ellos, ataques contra instalaciones bancarias– y en amenazas a los ministros de la AP. Pese a la condena de Hamás a estos hechos, Fatah consideró al grupo responsable de estos incidentes debido a que la organización continuó manteniendo una estructura de seguridad en la Franja.

Adicionalmente, durante el año se produjeron diversos ataques de milicias salafistas –algunas simpatizantes de ISIS– contra Hamás y la Jihad Islámica, lo que llevó a las fuerzas de seguridad de Hamás a realizar diversas detenciones. En este contexto, el Gobierno con sede en Ramallah, también criticó acciones del grupo islamista, como la ejecución de un miembro de una milicia salafista en Gaza, por considerar que trascendían las competencias de Hamás. En términos generales, los cuestionamientos a Hamás subrayaron su insistencia en mantener estructuras similares a un gobierno paralelo en Gaza a pesar del acuerdo de reconciliación que llevó a la conformación del gobierno de unidad. Fatah y la AP, en tanto, fueron acusadas de marginar a Gaza en sus políticas y asignaciones presupuestarias, e incluso de retrasar deliberadamente la reconstrucción de la Franja con el objetivo de obligar al grupo islamista a hacer concesiones políticas.

En este contexto, **a mediados de año circularon confusas informaciones sobre la presunta dimisión del gobierno de unidad encabezado por el primer ministro Rami Hamdalah.** Posteriormente, sin embargo, se desmintió este anuncio, que había motivado críticas de Hamás ante lo que consideró como una decisión unilateral y, por tanto, contraria al espíritu del acuerdo de 2014. Los rumores sobre la renuncia del Gobierno palestino coincidieron con algunas informaciones de prensa sobre contactos indirectos entre Israel y Hamás –mediados por Qatar y diplomáticos europeos– con el fin de ir más allá de la tregua alcanzada en agosto de 2014, tras la escalada de violencia en Gaza, y pactar un alto el fuego de mayor duración. No obstante, durante el último trimestre de 2015 se incrementó la violencia en el marco del conflicto palestino-israelí, afectando tanto a Gaza como a Cisjordania.⁷³ Esta oleada de violencia fue interpretada por algunos analistas como un síntoma de la frustración de palestinos y palestinas también con sus dirigentes, en un contexto en que se intuye que la era del presidente Mahmoud Abbas está en la fase final. Cabe destacar que durante la segunda mitad del año, las fricciones entre Hamás y Fatah volvieron a hacerse evidentes en el marco de los preparativos para la conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de Yasser Arafat, en noviembre. A finales de año la decisión de Hamás de realizar nombramientos que afectaban a posiciones del Ministerio del Interior en Gaza alentaron nuevas críticas de Fatah, que objetó la legitimidad del grupo islamista para realizar estas designaciones. Funcionarios de Hamás aseguraron que el gobierno de consenso no estaba cumpliendo sus funciones en la Franja y cuestionaron también la decisión del presidente palestino, Mahmoud Abbas, de hacer otros cambios ministeriales en lo que también calificaron como una acción unilateral. Cabe destacar que las diferencias entre ambos grupos persistieron pese a algunas iniciativas de mediación internacionales que se activaron durante el año, entre ellas la que involucró al ex presidente de EEUU Jimmy Carter, en su calidad de miembro del grupo “The Elders”.

73. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Mapa 3.1. Procesos de paz



Países con negociaciones formalizadas o en fase de exploración 2015

3. Procesos de paz

- Durante el año se resolvieron satisfactoriamente cuatro negociaciones de paz: RCA, Sudán (Darfur) SLM-MM, Malí (CMA-Plataforma) y Sudán del Sur.
- Tres conflictos tuvieron exploraciones para abrir un proceso de negociación formal: Colombia (ELN), Pakistán (Baluchistán) y Siria.
- Un 17,9% de las negociaciones funcionaron bien o fueron resueltas (siete casos), un 30,7% tuvieron dificultades significativas (12 casos) y un 43,6% fracasaron (17).
- El Gobierno de Malí suscribió una propuesta de acuerdo de paz preliminar elaborada en el marco de un proceso de mediación liderado por Argelia. El 15 de mayo se logró el primer Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional.
- Respecto al conflicto en la R. Centroafricana, se celebró con éxito el Foro para la Reconciliación Nacional, y al finalizar el año se celebraron las elecciones presidenciales, aunque el país siguió inmerso en un clima de fragilidad.
- En Sudán del Sur, el acuerdo de paz propuesto por la IGAD-Plus, fue ratificado por todas las partes implicadas en el conflicto. Las partes acordaron un alto el fuego permanente y firmaron un acuerdo transicional de seguridad, por el que el Gobierno y los rebeldes del SPLA-IO acordaron los términos de la desmilitarización parcial de la capital Juba. A finales del año, sin embargo, ambos bandos siguieron acusándose mutuamente de violar el alto el fuego.
- En Colombia, prosiguieron las negociaciones con las FARC. El 15 de diciembre, se hizo público el contenido íntegro del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, cuyas líneas generales ya fueron avanzadas en septiembre. El presidente y “Timochenko” se comprometieron, además, a finalizar las negociaciones antes del 23 de marzo de 2016. Por su parte, la guerrilla del ELN finalizó su fase exploratoria, acordando con el Gobierno una agenda de negociación para los inicios de 2016.
- En la India, se produjo una primera ronda de conversaciones entre el Gobierno indio y la facción favorable a las negociaciones del grupo armado de oposición de Assam, ULFA. El líder del ULFA-Pro Negociaciones, Anup Kumar Chetia, fue puesto en libertad.
- En Tailandia (sur), se celebraron conversaciones entre el Gobierno y una plataforma, conocida como Majlis Syura Patani (Mara Patani, Consejo Consultivo de Patani), que agrupa a seis organizaciones insurgentes. Se inició una serie de encuentros informales entre ambas partes en Kuala Lumpur, con la facilitación del Gobierno de Malasia.
- En Chipre se reanudó el proceso de paz en mayo tras siete meses de estancamiento y se pusieron en marcha medidas de confianza y comisiones técnicas.

En este capítulo se analiza la situación de 39 contextos de negociación o exploración, incluyendo un seguimiento de los acuerdos con el MILF y el MNLF (Filipinas), por haber sufrido serias dificultades en su implementación.

Un 17,9% de las negociaciones analizadas (un total de siete casos) funcionaron bien, incluidas las que finalizaron satisfactoriamente; **otro 30,7% de las negociaciones se encontraron con dificultades significativas** (12 casos); y **el 43,6% no tuvieron éxito (17 casos)**, con lo que el balance es muy negativo, a pesar de que en varios países se preveía reanudar las negociaciones en el año 2016. En los casos de Baluchistán (Pakistán), el grupo armado ELN de Colombia y en Siria se produjeron conversaciones y contactos exploratorios que podrían consolidarse durante el año 2016. En el sexenio 2008-2013, la media de las negociaciones que acabaron mal al terminar el año fue solo del 17,3%.

Tabla 3.1. Situación de las negociaciones al finalizar 2015

Bien (3)	Con dificultades (12)	Mal (17)	En exploración (3)	Finalizadas ¹ (4)
Chipre India ([Nagalandia] [NSCN-IMJ]) India – Pakistán	Birmania Colombia (FARC) Filipinas (MILF) India (Assam) (ULFA) Moldova (Transdniestria) Senegal (MFDC) Serbia – Kosovo Sudán (Diálogo Nacional) Sudán (Darfur) Sudán (Kordofán y Nilo Azul [SPLM-N]) Tailandia (sur) Ucrania (Donbás)	Afganistán (talibán) Armenia – Azerbaiyán (Nagorno Karabaj) Burundi Etiopía (ONLF) Etiopía – Eritrea Filipinas (NDF) Filipinas (MNLF) Georgia (Abjasia y Osetia del Sur) India (Nagalandia)(NSCN-K) Israel – Palestina Libia Marruecos – Sáhara Occidental Mozambique (RENAMO) RD Congo (FDLR) Sudán – Sudán del Sur Turquía (PKK) Yemen (al-houthistas)	Colombia (ELN) Pakistán (Baluchistán) Siria	Malí (CMA-Plataforma) RCA Sudán ([Darfur] disidencia SLM-MM) Sudán del Sur

3.1. Procesos de paz: definiciones y tipologías

Se entiende por **procesos de paz** todos aquellos esfuerzos, especialmente políticos y diplomáticos, destinados a resolver los conflictos armados o los conflictos que actualmente no están en fase armada, pero que en el pasado sí lo fueron y todavía necesitan negociaciones para llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes. En algunos casos, los procesos de paz intentan transformar las causas de fondo del conflicto a través de las negociaciones. Se consideran **negociaciones** en los procesos de paz, las etapas de diálogo entre al menos dos partes enfrentadas en el conflicto, en las cuales las partes abordan sus diferencias en un marco concertado para poner fin a la violencia y encontrar una solución satisfactoria a sus demandas. Suelen ir precedidas de fases previas o exploratorias, que permiten definir el formato y la metodología de la futura negociación formal. Las negociaciones pueden estar facilitadas o no por terceras partes. Cuando éstas intervienen en las negociaciones, es para contribuir al diálogo entre los actores enfrentados y favorecer una salida negociada del conflicto, pero no para imponer soluciones. En los procesos de paz, las negociaciones pueden resultar en acuerdos globales, parciales, o vinculados a las causas o consecuencias del conflicto, pudiéndose combinar elementos de los diversos tipos en un mismo acuerdo. Por «**alto al fuego**» se considera la decisión militar de paralizar cualquier combate o uso de las armas durante un período especificado, mientras que el «**cese de hostilidades**» incluye, además del alto al fuego, el compromiso de no secuestrar, hostigar a la población civil, amenazar, etc.

En función de los objetivos finales buscados y de la dinámica seguida en las diferentes fases de la negociación, la mayoría de los procesos de paz pueden catalogarse en alguna de estas cinco **categorías o**

modelos, aunque alguna vez se pueda dar el caso de un proceso que combine dos categorías:

- Desmovilización y reinserción;
- Reparto del poder político, militar o económico;
- Intercambio (paz por democracia, paz por territorios, paz por desocupación, paz por reconocimiento de derechos, etc.);
- Fórmulas de autogobierno o «arquitecturas políticas intermedias»;
- Disputas territoriales.

El modelo de proceso normalmente tiene que ver con el tipo de demandas presentadas y con la capacidad de sus actores para presionar o exigir (nivel de simetrías en lo militar, político y social), aunque también influyen los acompañamientos y facilitaciones, el cansancio de los actores, los apoyos que reciben y otros factores menos racionales, como podrían ser patologías de los líderes, imaginarios colectivos o inercias históricas. En algunas ocasiones, aunque no en muchas, y especialmente si el proceso es largo en el tiempo, puede ocurrir que se empiece desde el planteamiento de una de las categorías señaladas (la categoría a, por ejemplo) y luego se incrementen las demandas para situar el proceso en otra categoría más compleja. También es importante recordar que no todos los procesos o sus fases previas de exploración, diálogo y negociación se hacen con una real sinceridad, pues es frecuente que formen parte de la misma estrategia de guerra, sea para ganar tiempo, internacionalizarse y darse a conocer, sea para rearmarse u otros motivos.

Finalmente, quisiéramos señalar que lo que vulgarmente denominamos «proceso de paz», en realidad, no es otra cosa que un «proceso para finalizar con la violencia y la lucha armada». La firma de un cese de hostilidades y la posterior firma de un acuerdo de paz no es más que el inicio del verdadero «proceso de paz», vinculado a una etapa denominada «rehabilitación posbélica», siempre

1. En las negociaciones formalmente finalizadas pueden surgir problemas en la implementación de los acuerdos, e incluso se pueden romper posteriormente, aunque en principio implica que se han resuelto satisfactoriamente las negociaciones de paz.

difícil, pero que es donde verdaderamente se tomarán las decisiones y se realizarán las políticas que, si tienen éxito, lograrán la superación de las otras violencias (estructurales y culturales) que luego permitirán hablar con propiedad del «logro de la paz».

3.2. Evolución de las negociaciones

3.3.1. África

África Austral

El proceso de paz abierto en **Mozambique** el 21 de diciembre de 2014, tras la crisis iniciada durante el 2012 entre el partido gobernante FRELIMO y el partido opositor y antiguo grupo armado RENAMO –que tuvo como punto álgido el 21 de octubre de 2013, momento en el que RENAMO anunció su retirada definitiva del acuerdo de paz de Roma firmado en 1992– fue de más a menos durante el año, llegando a la ruptura del proceso negociador en el mes de agosto debido a las dudas y tensiones sobre la implementación de diversos puntos del acuerdo. El inicio del año estuvo marcado por la tensión generada tras la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales de octubre de 2014, que marcó las negociaciones de paz. El FRELIMO se impuso en unos comicios que RENAMO no reconoció sus resultados, amenazando con el retorno a la violencia y con crear una república independiente en las zonas donde obtuvo mayoría, relativas a las provincias del centro y norte del país: Manica, Sofala, Tete, Zambezia, Mampula y Niassa. Esta situación bloqueó las conversaciones de paz durante el primer trimestre del año, manteniendo congeladas las negociaciones sobre el programa de desmilitarización, desmovilización y reintegración (DDR) de combatientes de la milicia de RENAMO, cuestión que forma parte del punto dos de las negociaciones de paz relativo a defensa y seguridad. Al respecto, durante todo el año no se logró ningún avance en este apartado. RENAMO exigió una distribución paritaria en los mandos de seguridad (Policía y Ejército), antes de entregar la lista de combatientes de su milicia para la integración en las fuerzas de seguridad. El Gobierno por su parte, se negó a la distribución del poder en los altos mandos de las fuerzas de seguridad, exigiendo el desarme de la milicia y su integración en las fuerzas de seguridad nacionales. El presidente Filipe Nyusi manifestó su preocupación por la falta de resultados en las negociaciones en este apartado, las cuales, tras más de 100 rondas de diálogo, no habían generado avances significados en la hoja de ruta acordada en lo concerniente al programa de DDR. Este hecho motivó que si bien el Gobierno había ampliado el mandato de la Misión Militar de Observación Internacional (EMOCHM) –encargada de supervisar el acuerdo de cese de hostilidades– dos meses más de lo inicialmente acordado, se replanteó su futuro, no renovándola posteriormente y dándola por concluida en el mes de mayo de 2015. Su cierre se justificó debido a su elevado coste de mantenimiento, así como por

haber fracasado en sus objetivos, ya que no consiguió reintegrar ni un solo miliciano de la RENAMO. En el momento en el cual el Gobierno decidió no volver a renovar el mandato de la EMOCHM, únicamente estaba compuesta por observadores militares del contingente africano, ya que tanto Italia, Portugal como Reino Unido habían retirado a sus oficiales al finalizar la primera etapa debido al nulo impacto de la misma.

El segundo semestre del año empezó mejor en cuanto a avances en las negociaciones de paz, aunque poco a poco las tensiones y desacuerdos sobre diferentes puntos llevaron a la ruptura del proceso negociador. En el punto tres, relativo a la separación de los partidos políticos del Estado, se alcanzó un acuerdo inicial el 23 de junio de 2015, en la que fue la 108 ronda de diálogo, lográndose una primera declaración de principios, que quedó a la espera de convertirse en ley con la aprobación parlamentaria. En julio se inició la ronda de negociación sobre el cuarto y último punto de los diálogos de paz, centrado en aspectos económicos y distribución de recursos en el país. Dinis Sengulane, obispo anglicano retirado que funge como portavoz del equipo mediador, afirmó que el inicio de la negociación en su cuarto punto significaba que el proceso estaba dando resultados. Sin embargo, la tensión generada por la exigencia de RENAMO en cuanto a la política de municipalización que les permitiera el control de las seis provincias que el partido reclamaba haber ganado en las elecciones de 2014, aunado a una dinámica de acusaciones mutuas de violación del cese al fuego, llevó durante el mes de agosto al líder de RENAMO, Afonso Dhlakama, a suspender las conversaciones de paz. Filipe Nyusi, el presidente mozambiqueño, ofreció una reunión bilateral a Dhlakama para tratar de reconducir las negociaciones de paz. Sin embargo, RENAMO desestimó inicialmente esta posibilidad arguyendo que no era una prioridad, a la vez que acusó al Gobierno de haber debilitado el acuerdo de paz con la decisión de cancelar la misión de observación internacional, la EMOCHM. Al finalizar el año, y ante lo que consideró el fracaso de las cinco personas mozambiqueñas que actuaban de mediadoras, a las que acusó de no tener experiencia, RENAMO reclamó una mediación externa, sugiriendo al presidente sudafricano, Jacob Zuma, o a alguien vinculado con la Iglesia Católica.

África Occidental

El Gobierno de **Malí** suscribió a principios de marzo una propuesta de acuerdo de paz preliminar elaborada en el marco de un proceso de mediación liderado por Argelia y en el que también participaron la ONU, la UA, Francia, China y Rusia. Diferentes grupos armados de corte yihadista, sin embargo, quedaron fuera de las negociaciones. Según trascendió en informaciones de prensa, el llamado “documento de Argel” proponía dar mayores poderes al norte, crear una fuerza de seguridad regional y poner en marcha un plan especial de desarrollo. Otras fuentes aseguraron que el acuerdo propuesto

incluía la constitución de asambleas regionales y una transferencia del 30% del presupuesto del Estado a los Gobiernos locales a partir de 2018. El **15 de mayo se logró el primer Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional**, aunque la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) no ratificó el acuerdo a la espera de informar y tener la aprobación de sus bases. La firma del acuerdo derivó en otra convocatoria, que tuvo lugar en Argel el 25 de mayo, donde se establecieron los mecanismos para posibilitar el alto el fuego en el norte de Malí, así como los procedimientos de seguimiento del mismo. Ramtane Lamamra, ministro de Estado, Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional argelino, informó de que por lo menos se habían alcanzado tres acuerdos sobre el cese de hostilidades y destacó la importancia del compromiso de las partes de respetar las condiciones acordadas y contribuir a aislar a los grupos armados de corte yihadista que operaban en el norte. Finalmente, el **20 de junio se logró la adhesión y firma definitiva de la CMA**, hecho que fue valorado por diferentes actores y mediadores en el proceso de paz como un gran paso hacia la consolidación de la paz y la estabilidad en el norte. La firma de la paz conllevó que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase la ampliación del mandato de la MINUSMA por un año, hasta junio de 2016, autorizando la inclusión de 40 observadores militares para vigilar y supervisar el alto el fuego. El acuerdo fue aplaudido por Alemania y Canadá, países que tuvieron un rol activo en el equipo de mediación internacional.

En aplicación del acuerdo de paz, se incluyó como medida la mejora de las relaciones entre la CMA y la coalición de grupos armados pro gubernamentales denominada Plataforma, que tras un serio incidente producido entre ambas partes el 15 de agosto en la ciudad de Anéfis (región de Kidal),² iniciaron conversaciones bilaterales en la misma ciudad. Este episodio, que puso en situación límite el proceso de paz, dio pie al inicio de conversaciones con el objetivo de poner fin a las hostilidades, así como retomar la implementación de la hoja de ruta pactada. Desde el 27 de septiembre hasta el 14 de octubre, ambos grupos estuvieron reunidos en Anéfis, logrando finalmente un acuerdo que puso fin a las hostilidades armadas entre sus grupos así como impedía atacar a las fuerzas gubernamentales; delimitaba las zonas de influencia de cada parte; y se comprometía a promover la reconciliación entre las comunidades enfrentadas y a garantizar la libre circulación y la seguridad de manera conjunta en las regiones de Kidal, Gao y Tombuctú con la puesta en marcha de patrullas mixtas. También se celebraron varios diálogos de reconciliación dentro de las comunidades y entre ellas, y se nombró a los miembros de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación. El Comité de Seguimiento del Acuerdo de Paz se puso en marcha el 20 de junio y estuvo presidido por Argelia. El Comité tenía por objetivo definir las reglas de procedimiento, así como establecer los plazos de las disposiciones del acuerdo de paz. Los días

21 y 22 de julio, en su tercera reunión, el comité adoptó su reglamento interno (mandato, funciones y órganos del comité) e incluyó a Francia, Nigeria y los EEUU como miembros oficiales de la mediación. A su vez, el 21 de julio, se aprobó que Argelia también copresidiese los otros cuatro subcomités temáticos previstos en el acuerdo de paz: Defensa y Seguridad (junto con la MINUSMA); Instituciones Políticas (con la UA); Justicia, Reconciliación y Cuestiones Humanitarias (junto con la ECOWAS), y el subcomité de Desarrollo Económico y Cultura (de la mano de la UE). La reunión del Comité de Seguimiento del Acuerdo celebrada los días 19 y 20 de noviembre, y suspendida producto del atentado terrorista perpetrado el 20 de noviembre contra el Hotel Radisson Blu en Bamako, estuvo marcada por la frustración expresada por la CMA y la Plataforma debido a la lentitud de los progresos en la aplicación del acuerdo de paz por parte del Gobierno.

En relación a **Senegal (Casamance)**, en el segundo trimestre del año, el MFDC se dirigió al presidente Macky Sall para demandar un retorno duradero de la paz en la región y denunció a los interlocutores que el Estado había escogido, así como la ausencia de una hoja de ruta clara en las negociaciones. Abdoulayé Baldé, alcalde de Ziguinchor, cuestionó la necesidad de nombrar al embajador de EEUU dentro del proceso de paz. Cabe recordar que el embajador de EEUU en Senegal, Mark Boulware, tenía como encargo alentar y ayudar a los diferentes actores a perseguir las negociaciones de paz. En un comunicado emitido por la embajada estadounidense, se aclaró que el embajador, que ostentaba el rol de consejero especial para Casamance, había sido reintegrado recientemente en el seno de la embajada tras la finalización de su misión en noviembre, pero que en ningún caso fungiría como mediador en el proceso.

Cuerno de África

Se reanudaron en febrero, por primera vez, desde octubre de 2012, las negociaciones entre el Gobierno de **Etiopía** y el grupo armado ONLF, en Nairobi (Kenya), aunque tras esta reunión no se tuvo constancia de nuevos contactos durante el resto del año. El presidente turco, Recep Tayib Erdogan, visitó Etiopía en febrero y comprometió importantes inversiones en el país. Recientemente, Etiopía y Djibouti firmaron un acuerdo en torno a la construcción de un gasoducto que comunicará Ogadén, región rica en hidrocarburos, con el puerto de Djibouti, por un importe total de 4.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 se invertirán en Djibouti. Además, a principios de junio, el ONLF informó, en un comunicado de prensa, de la liberación de dos de sus representantes, Sulub Ahmed y Ali Hussein, en la localidad fronteriza de Moyale, que habían sido secuestrados en enero de 2014 en Nairobi, supuestamente por parte del Gobierno etíope y trasladados a Etiopía. El Gobierno etíope liberó,

2. Véase el resumen de Malí (norte) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

según las fuentes independentistas, a ambos delegados tras numerosos esfuerzos diplomáticos llevados a cabo por parte del Gobierno de Kenya y miembros de la comunidad internacional. El ONLF celebró su liberación y el retorno de ambos delegados a Nairobi como un paso positivo que podía contribuir a desbloquear el avance de las conversaciones de paz, aunque no se produjeron nuevos contactos durante el año.

El Gobierno de **Etiopía** confirmó a mediados de septiembre que el líder rebelde Mola Asgedom, refugiado en Eritrea, junto con alrededor de 800 combatientes de su grupo armado, el Movimiento Democrático del Pueblo Tigrayán (TPDM), se habían rendido a las autoridades etíopes. Esta deserción se produjo tras la noticia de la formación el 7 de septiembre de una coalición opositora llamada "Salvation of Ethiopia through Democracy", compuesta por el TPDM, Arbegnoch Ginbot 7 for Unity and Democratic Movement (AGUDM), el Afar Peoples Liberation Movement (APLM) y el Amhara Democratic Force Movement (ADFM), coalición de la que Mola había sido escogido vicepresidente.

En la vecina **Sudán**, el presidente Omar al-Bashir, manifestó su intención de acelerar la puesta en marcha del conocido como Diálogo Nacional entre el Gobierno y las fuerzas políticas opositoras, incluyendo en las conversaciones a todos los movimientos armados de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, para lo cual el Gobierno aprobó el 22 de septiembre dos decretos presidenciales que incluyeron un cese al fuego de dos meses de duración en las áreas de conflicto, así como el ofrecimiento de una amnistía general para los líderes de los movimientos rebeldes que formarían parte de las conversaciones de paz. El día previo de la presentación de ambos decretos, el presidente sudanés remarcó su intención de que los conflictos en las tres regiones llegaran a su fin antes de finalizar el año, y concluir así con un conflicto iniciado en el año 2003 en Darfur y en 2011 en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul con los rebeldes del Sudan People's Liberation Movement-North (SPLM-N). La coalición de fuerzas rebeldes que aglutina a diferentes movimientos armados de las tres regiones, conocida como el Sudan Revolutionary Front (SRF), en una reunión mantenida con la llamada troika (EE UU, Reino Unido y Noruega), avanzó que participaría en el Diálogo Nacional, y afirmó su intención de firmar una tregua de cese de hostilidades de seis meses en las regiones de Nilo Azul, Kordofán Sur y Darfur. A principios de octubre, el presidente chadiano se reunió en París con los líderes de los tres grupos armados de Darfur (Jibril Ibrahim –Justice and Equality Movement [JEM]–, Abdel Wahid El Nur y Minni Minawi –dos facciones del Sudan Liberation Movement [SLM]–), y les instó a participar en el Diálogo Nacional. Posteriormente, el Gobierno sudanés anunció durante el mes de octubre que aceptaba la invitación para el inicio de conversaciones de paz en Addis Abeba, Etiopía, con los grupos rebeldes de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, bajo la mediación de la African Union High Level Implementation Panel (AUHIP). Las negociaciones se iniciaron el 18 de

noviembre y contaron con la participación de Ibrahim Ghandour, Ministro de Asuntos Exteriores de Sudán y jefe del grupo negociador, así como de los líderes de los movimientos armados JEM, SLM-MM y SPLM-N. Las conversaciones de paz, que abrían la 10ª ronda de negociaciones, pusieron en el centro el fin de las hostilidades y se negoció en mesas separadas, por un lado la región de Darfur y por otro las dos áreas (Kordofán Sur y Nilo Azul). El 23 de noviembre las conversaciones entre el Gobierno y el SPLM-N quedaron bloqueadas, debido a que el Gobierno exigía al grupo rebelde el cese al fuego, mientras que los rebeldes exigían la llegada de ayuda humanitaria desde Sudán y Etiopía. La negativa del Gobierno de permitir la llegada de ayuda externa a la región, debido a que consideraba que perdería su control y facilitaría su uso por los rebeldes para el transporte de armas a sus tropas, acabó por bloquear y suspender las negociaciones.

En otros aspectos, en la región sudanesa de **Darfur**, a finales de marzo, el Gobierno y un grupo de 400 disidentes del SLM-MM, bajo la dirección de Mohamedian Ismail Bashar, firmaron en N'Djamena (Chad) un acuerdo de paz con el Gobierno sudanés. Por otro lado, los tres principales grupos rebeldes de Darfur anunciaron un acuerdo en el que se comprometían a impulsar sus esfuerzos para proteger los derechos de los menores y adherirse a las normas internacionales vigentes. Durante el segundo trimestre, también se dio a conocer el proceso de acercamiento y reconciliación entre Musa Hilal, exlíder janjaweed y jefe del Consejo del Despertar Revolucionario (RAC) y el Gobierno sudanés. Hilal, que asistió el 30 de mayo a la ceremonia de toma de posesión del presidente Omar al-Bashir, avanzó que iniciaría conversaciones con el Gobierno para lograr la paz en Darfur, éstas incluirían el registro del RAC como partido político, así como medidas de seguridad, reconciliación y reformas políticas en Darfur. También cabe reseñar el anuncio realizado por el presidente al-Bashir en sesión parlamentaria del 19 de octubre, sobre la previsión de la celebración del **referéndum sobre el estatus quo de la región de Darfur** para el mes de abril de 2016, según estaba previsto en el Doha Document for Peace in Darfur (DDPD). El anuncio suscitó críticas por parte de grupos parlamentarios de la oposición, así como por organizaciones de la sociedad civil, como la Darfur Civil Society Organisation, quienes han demandado su retraso debido a que actualmente no se dan las condiciones, ya que su celebración podría incidir en enfrentamientos y en una mayor polarización social. Por otro lado, en las regiones sudanesas de **Kordofán y Nilo Azul**, el grupo armado SPLM-N se convirtió en el primer actor africano no estatal en firmar el texto de Compromiso para la Protección de los Niños y las Niñas contra los efectos de los Conflictos Armados. El 29 de junio el grupo rebelde firmó en Ginebra el texto que representa una iniciativa promovida por la organización Geneva Call, desarrollada para permitir que los grupos armados que no son reconocidos como partes en los tratados internacionales puedan ratificar acuerdos sobre protección de menores.

En **Sudán del Sur**, en el primer trimestre del año estuvieron activos múltiples procesos de mediación que condujeron a generar acuerdos y procesos no coordinados. China se implicó en el proceso de paz y celebró una reunión en Khartoum entre Sudán, Sudán del Sur, Etiopía y China. El país asiático presentó una iniciativa en la que exhortaba a las partes en conflicto a tomar en cuenta los intereses del pueblo sur sudanés salvaguardando la paz y la estabilidad en la región. De hecho, China ya había tomado la decisión de desplegar tropas de mantenimiento de la paz en Sudán del Sur para apoyar los esfuerzos de mediación de la organización regional IGAD y poner fin al conflicto armado que atravesaba el país. A este propósito, cabe destacar las relaciones bilaterales existentes entre China y Sudán, que reforzaban el interés del país asiático por estabilizar la región. Por su parte, las distintas facciones que integran el SPLM (Gobierno, SPLM-IO y la facción del SPLM conocida como SPLM 7) firmaron un acuerdo de paz en Tanzania el 21 de enero, con la facilitación de los presidentes tanzano y keniano, para allanar el camino hacia el fin de las hostilidades en Sudán del Sur y con el objetivo de reconciliar a las tres facciones del SPLM, cuyas disputas internas estaban dificultando las conversaciones de paz a nivel nacional, aunque dicho acuerdo se quedó en una iniciativa simbólica. En marzo, se retomaron los contactos mediados por la IGAD sin obtener un acuerdo, por lo que la IGAD hizo un llamamiento a que cualquier iniciativa de mediación futura se ampliara a la UA, China, UE y la troika (formada por EEUU, Reino Unido y Noruega). El 29 de mayo, el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, anunció que tanto el proceso de paz bajo mediación de la IGAD como el proceso de reconciliación y reunificación del SPLM se fusionarían en el mismo proceso de mediación para lograr una mejor coordinación y resultados.

Con el conflicto y la crisis de fondo, las partes enfrentadas mantuvieron diferentes rondas de negociaciones bajo mediación de la IGAD-Plus,³ que presentó el 24 de julio un borrador de acuerdo de paz para que las partes lo valorasen, dando como fecha límite el día 17 de agosto para lograr el fin de la violencia. La presentación de la propuesta coincidió con la visita del presidente estadounidense Barack Obama a la región. El acuerdo de paz propuesto por la IGAD-Plus fue ratificado por todas las partes implicadas en el conflicto durante el mes de agosto. Las partes acordaron un alto el fuego permanente y firmaron un acuerdo transicional de seguridad, por el que el Gobierno y los rebeldes del SPLM-IO acordaron los términos de la desmilitarización parcial de la capital, Juba. De esta forma, tanto el Gobierno sur sudanés, presidido por Salva Kiir, el opositor movimiento rebelde SPLM-IO, encabezado por Riek Machar, el grupo de ex detenidos del SPLM, encabezado por Pagan Amum, y representantes de otros partidos políticos, así como de la sociedad civil sur sudanesa firmaron el acuerdo de paz que sentaba las bases para la reconstrucción nacional. El acuerdo fue

ratificado en dos momentos: primero por Machar y Amum el 17 de agosto y después por Salva Kiir el 26 de agosto, quien se adhirió a la firma del documento no sin antes manifestar que lo hacía bajo presión e incluyendo una lista de 16 reservas al mismo que no fueron aceptadas por la IGAD-Plus. La lista de reservas del Gobierno de Sudán del Sur al acuerdo de paz incluía importantes aspectos que cuestionaban el reparto del poder con los rebeldes, calificaba la propuesta, en algunos de sus puntos, como de «humillación», «recompensas para la rebelión» e incluso como «neocolonialista», lo que ponía en entredicho el valor y posible recorrido de la paz alcanzada. El 2 de octubre, el presidente Kiir anunció un decreto unilateral de expansión de los actuales 10 estados que conforman el país a una fragmentación de 28 estados federales. Riek Machar afirmó que la medida representaba una grave violación del acuerdo de paz firmado en agosto y ponía en riesgo su continuidad. En otro movimiento imprevisto, el partido de Gobierno anunció la disolución de todas las estructuras de liderazgo del SPLM, a excepción del puesto de presidente que ostentaba Kiir, quien propondrá nuevos candidatos. Entre los avances más significativos destaca el acuerdo alcanzado por todas las partes relativo al capítulo II sobre seguridad, donde el Gobierno y los rebeldes del SPLM-IO acordaron los términos de la desmilitarización parcial de la capital, Juba, limitando la capacidad militar del cuerpo del Servicio de Seguridad Nacional a solo 170 unidades, de las cuales 50 serían miembros del SPLM-IO. A su vez, durante el mes se informó de la anexión de diferentes fuerzas rebeldes presentes en el estado de Ecuatoria Occidental no firmantes del acuerdo de paz, a algunos de los bandos, lo cual implicó su anexión al proceso de pacificación. Por otro lado, el Gobierno también comunicó la firma de un acuerdo de paz con la milicia South Sudan National Liberation Movement (SSNLM). El acuerdo se logró mediante la mediación del obispo Edward Hiboro, de la diócesis local, y generó un alto el fuego por parte de la milicia. A finales del año, sin embargo, ambos bandos siguieron acusándose mutuamente de violar el alto el fuego.

En el acuerdo de paz firmado en agosto en Sudán del Sur, se explicitaron las tensiones que los Gobiernos de **Sudán y Sudán del Sur** seguían manteniendo, donde cada Estado siguió acusando al otro de apoyar y mantener sus rebeliones domésticas, en el mantenimiento de unas dinámicas de guerra por delegación. En el acuerdo de paz (donde la firma del Gobierno de Sudán estuvo presente como garante y miembro de la IGAD) el texto incorporó, en su capítulo II, el cese al fuego permanente y mecanismos de seguridad, algunos puntos que hacían relación directa a esta dinámica. Por un lado, el llamamiento al cese al fuego fue extensivo a todas las partes implicadas en el conflicto, incluyendo los aliados de cada parte (fuerzas y milicias), que en el caso del Gobierno de Salva Kiir hacían alusión indirectamente, entre otros, a las Fuerzas Armadas ugandesas y a los movimientos armados rebeldes que combatían en la

vecina Sudán; y en el caso de las fuerzas rebeldes sur sudanesas del SPLA-IO, a su alianza con el Gobierno de al-Bashir. Por otro lado, en su artículo 1.6, cap. II, el texto era completamente explícito al respecto de la participación de las fuerzas rebeldes sudanesas en la guerra del sur, donde literalmente se expresaba: «Las partes en conflicto están de acuerdo en que todos los actores de seguridad no estatales, incluyendo, pero no limitado a las Fuerzas Revolucionarias de Sudán (SPLM-N, JEM, SLA-MM, SLA-Abdulwahid) deberán ser desarmados, desmovilizados y repatriados (...)». Este punto fue contestado por el Gobierno de Sudán del Sur en el documento anexo al acuerdo de paz, exponiendo al respecto que esa afirmación incriminaba a su Gobierno y que los grupos armados rebeldes sudaneses no estaban presentes en territorio de Sudán del Sur.

Grandes Lagos y África Central

Respecto a la crisis de **Burundi**, el mes de junio transcurrió en medio de contactos para intentar desatascar la crisis que padecía el país. Desde entonces se produjeron contactos y esfuerzos mediadores por parte de la ONU, apoyada por la UA y por las organizaciones regionales EAC y CIRGL. El Gobierno, que no quería participar en la nueva ronda de negociaciones, finalmente anunció el 24 de junio que se sumaría a la nueva ronda de diálogo promovida por la ONU junto a los representantes de la oposición, Agathon Rwaswa y Charles Nditije, al representante de la sociedad civil y defensor de los derechos humanos, Pierre-Claver Mbonimpa, y a los líderes de las diferentes religiones. La ONU celebró el anuncio del Gobierno y lamentó que no participara por el momento el partido en el poder, el CNDD-FDD. No obstante, posteriormente se suspendieron las conversaciones y el presidente Pierre Nkurunziza renovó su mandato. Ante la gravedad de la evolución de la situación –con diversas acciones insurgentes de envergadura a principios de diciembre–, el 17 de diciembre la UA dio luz verde a la creación de una misión de mantenimiento de la paz, la AU Prevention and Protection Mission (MAPROBU), y el presidente amenazó con atacar a los integrantes de la misión en caso de que se violara la integridad territorial del país. En paralelo, el 28 de diciembre se iniciaron conversaciones de paz en Entebbe (Uganda) mediadas por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, a petición de la organización regional EAC, en las que participaron representantes del Gobierno y del partido gubernamental, el CNDD-FDD, de la oposición política y la sociedad civil, del CNARED (Consejo Nacional por el Respeto de los Acuerdos de Arusha, principal plataforma opositora) y representantes de los países de la región y de organizaciones internacionales con el objetivo de promover un diálogo político.

Respecto al conflicto en la **R. Centroafricana**, se produjeron importantes avances en el proceso de paz que atraviesa el país. El 5 de abril se alcanzó un acuerdo entre los ex presidentes François Bozizé y

Michel Djetodia para promover la reconciliación en el país. Posteriormente, se celebró con éxito el **Foro para la Reconciliación Nacional entre el 4 y el 11 de mayo en Bangui**, que reunió a alrededor de 700 representantes y líderes de diversos grupos y actores de la sociedad civil centroafricana que alcanzaron un histórico acuerdo de paz conocido como **Pacto Republicano para la paz, la reconciliación nacional y la reconstrucción del país**. Entre los presentes estaba el Gobierno de transición, los diversos partidos políticos, los principales grupos armados del país (miembros de la antigua Séléka y las diferentes milicias anti balaka), la patronal, representantes de la sociedad civil, líderes comunitarios y grupos religiosos, que intentaron definir cuál debería ser el futuro del país. Se celebraron diferentes reuniones y comisiones temáticas sobre los principales elementos de la agenda de construcción de paz del país, entre los que destaca el ámbito de la paz y la seguridad, la justicia y la reconciliación, el desarrollo económico y social, y la gobernabilidad. Los principales resultados y recomendaciones adoptadas durante el Foro fueron: 1) la firma de un nuevo acuerdo de cese de hostilidades y desarme entre 10 facciones de Séléka y las milicias anti balaka, que establece la integración de sus miembros en los cuerpos de seguridad a los miembros que no hayan cometido crímenes de guerra o ser beneficiarios de proyectos de desarrollo comunitario; 2) la liberación de los menores soldados, ya que se estima que entre 6.000 y 10.000 menores forman parte de los grupos rebeldes, y el libre acceso del personal humanitario, programas de apoyo a la población desplazada y refugiada; 3) un calendario electoral, la extensión del actual mandato de Catherine Samba-Panza y el aplazamiento de las elecciones (que no era ninguna sorpresa ante los requisitos que todavía estaban pendientes); la reforma de la Constitución (y un referéndum posterior) y del código de nacionalidad, que permita a la población musulmana convertirse en ciudadana del país; 4) el establecimiento de comisiones locales y nacionales de justicia y reconciliación; y 5) una agenda de prioridades para el desarrollo económico y social del país, la revitalización del sector agrícola (distribución de insumos agrícolas), ganadero (para recuperar la cabaña ganadera del país) y minero (negociar el levantamiento de las sanciones a la explotación y comercio de diamantes a través del Proceso de Kimberley). El Centro para el Diálogo Humanitario estuvo llevando a cabo tareas de apoyo técnico y asesoría al proceso de reconciliación nacional desde 2014. Cabe señalar que desde 1980 se han celebrado cinco debates nacionales de reconciliación, que no han evitado el reinicio de la inestabilidad, los dos últimos en 2003 y 2008. La financiación de los principales proyectos (menores y DDR), así como la capacidad de los líderes de controlar a sus guerrilleros fueron los principales retos planteados. Cabe destacar, no obstante, que las milicias anti balaka y Séléka liberaron a centenares de menores como parte del compromiso alcanzado en el Foro de Bangui. La segunda parte del año estuvo marcada por las dificultades en la implementación de los acuerdos del Pacto republicano y por las dificultades y retrasos

derivados de cara a celebrar las elecciones legislativas y presidenciales que pusieran fin a la etapa de transición en el país, que se pospusieron a finales de diciembre.⁴

En la **República Democrática del Congo (RDC)**, las Fuerzas Armadas congoleñas iniciaron la operación militar contra el grupo armado de origen rwandés FDLR, con una ofensiva en la provincia de Kivu Sur. Esta operación fue anunciada a finales de enero contra los miembros de las FDLR que rechazaron el desarme voluntario que el grupo había anunciado en abril de 2014. No obstante, las FDLR manifestaron la apertura de un diálogo político con Rwanda como condición para continuar con el desarme, diálogo que Rwanda rechazó. En paralelo, la ONU anunció que retiraba su apoyo a la operación militar del Ejército congoleño contra las FDLR, tras la negativa del Gobierno de sustituir a dos generales implicados en la operación debido a graves acusaciones de violaciones de los derechos humanos que pesan contra ellos.

Magreb

En **Libia**, representantes de los dos gobiernos y parlamentos instaurados en el país participaron en las negociaciones auspiciadas por la ONU, aunque estos contactos no dieron frutos en la primera mitad del año. Durante el primer trimestre la ONU presentó a las autoridades en Tobruk y en Trípoli un plan de seis puntos. El plan incluía la formación de un gobierno de transición que liderara el país hasta la aprobación de una nueva Constitución en referéndum y la celebración de elecciones. Este Gobierno de unidad estaría encabezado por un presidente y un consejo presidencial de figuras independientes. Además, se conformaría un Parlamento representativo de toda la población libia y se crearían un consejo de Estado, un consejo de seguridad nacional y un consejo de municipios. En junio, Bernardino León presentó un nuevo borrador de acuerdo (el cuarto desde el inicio de las gestiones diplomáticas a comienzos de año), que definía un esquema de transición hasta la adopción de una nueva Constitución. Sectores de la línea dura de Trípoli y Tobruk cuestionaron la iniciativa, que tuvo mejor acogida entre las autoridades de la capital libia. Finalmente, el Parlamento de Tobruk también aceptó en principio la propuesta, aunque planteó que sería necesario introducir enmiendas. Representantes de ambas partes se sentaron, por primera vez, en la misma mesa durante una reunión celebrada en Skhirat (Marruecos) a finales de junio, hecho que fue considerado relevante de cara a la posible conformación de un Gobierno de unidad. Según el plan, que recogía 29 principios y casi 70 artículos, debería conformarse un Gobierno de acuerdo nacional que operaría durante un año. La Casa de Representantes actuaría como poder legislativo y se crearía además un Consejo de Estado integrado por 120 personas, 90 de las cuales procederían del Parlamento basado en Trípoli. En julio, las negociaciones impulsadas por la ONU derivaron

en la suscripción de un acuerdo político preliminar en Skhirat (Marruecos), pero que no fue firmado por las autoridades de Tobruk, que consideraron que faltaba claridad sobre las competencias y el papel que jugaría el Consejo de Estado. A finales de año, se intensificaron las presiones internacionales para avanzar en un acuerdo político en Libia. En este contexto, a mediados de diciembre miembros de los parlamentos rivales firmaron el acuerdo que establece un gobierno de unidad nacional, una Cámara de Representantes, un Consejo de Estado y Consejo Presidencial. El pacto no contó con el respaldo de los líderes de los dos gobiernos operativos en Libia. Por el contrario, el acuerdo fue validado por el Consejo de Seguridad de la ONU, en una resolución (2259) aprobada a finales de año. No obstante, al finalizar 2015 persistían las dudas sobre las posibilidades de que este gobierno llegara a conformarse.

En el estancado proceso del **Sáhara Occidental**, el Rey Mohammed VI y el secretario general de la ONU hablaron por teléfono y llegaron a un acuerdo sobre el camino a seguir. En agosto, trascendió que la jefa de la MINURSO, Kim Bolduc, se había reunido secretamente en Tindouf (Argelia) con el líder del Frente POLISARIO, Mohamed Abdelaziz, con el fin de abordar una visita del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a los campos de refugiados de la zona. La visita a Tindouf, tendría como propósito dar un impulso a las negociaciones entre Marruecos y el Frente POLISARIO, estancadas en los últimos años. Fuentes marroquíes aseveraron que Ban también visitaría el reino antes de acabar su mandato en la ONU en 2016, en la que sería la primera visita al país del secretario general. El enviado especial del secretario general para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, realizó viajes a la región en febrero, septiembre y noviembre, pero no se informó de la posibilidad de retomar las negociaciones directas entre las partes en disputa. En octubre, el dirigente del Frente POLISARIO, Mohamed Abdelaziz, no se reunió directamente con el representante de la ONU, en su viaje a los campamentos de refugiados a instancias de Argelia. A finales de año algunas informaciones apuntaron a que Marruecos deseaba involucrar a Argelia de manera formal en las negociaciones, pero que las autoridades argelinas se negaban a tratar el conflicto en un formato bilateral.

3.3.2. América

En **Colombia**, prosiguieron las negociaciones con las FARC. En dos ocasiones, las FARC declararon un alto el fuego bilateral. El Gobierno, por su parte, dio la orden de suspender los bombardeos contra los campamentos de las FARC, de forma temporal, también en dos ocasiones. Se logró un acuerdo para el desminado, y las dos delegaciones hicieron público que habían alcanzado un acuerdo para poner en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que será

4. Véase el apartado sobre RCA en el capítulo 1 (Conflictos armados).

un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. El 23 de septiembre, el presidente Santos y el líder de las FARC, “Timochenko”, se encontraron en La Habana para hacer público el acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, por el que se decidió crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. El Acuerdo incluía un compromiso para esclarecer el problema de las personas desaparecidas. El 15 de diciembre, se hizo público el contenido íntegro del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, cuyas líneas generales ya fueron avanzadas en septiembre. El presidente y “Timochenko” se comprometieron, además, a finalizar las negociaciones antes del 23 de marzo de 2016, aunque quedaban pendientes algunos temas de extrema dificultad. Los acuerdos alcanzados hasta el momento, no obstante, situaron el proceso de las FARC como uno de los más avanzados en el mundo. Por su parte, la guerrilla del ELN finalizó su fase exploratoria, acordando con el Gobierno una agenda de negociación para inicios de 2016.

3.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

En **Afganistán**, se realizaron varios encuentros con los talibán en diferentes países, con la ayuda y coordinación de un buen número de países: EEUU, Pakistán, China, Irán, Qatar y Noruega. Reuters reveló que una delegación talibana viajó de Qatar a Pakistán para reunirse con representantes pakistaníes y diplomáticos chinos y que la delegación talibana también se habría trasladado a Quetta (Baluchistán, en Pakistán) para reunirse con la dirigencia talibana, aunque oficialmente representantes talibán y del Gobierno chino negaron que la reunión hubiese tenido lugar. En el segundo trimestre, lo más significativo desde la llegada al poder del presidente Ashraf Ghani, fue el cambio en la política de Afganistán hacia Pakistán y la implicación del resto de vecinos y otros aliados para garantizar la paz en el país. La política de mano tendida de Ghani hacia Pakistán hizo posible el acercamiento. El presidente afgano estaba convencido de que los militares pakistaníes tenían la clave para involucrar a los talibán en el diálogo. El 30 de julio se publicó que el líder supremo del movimiento, el mulá Omar, había muerto en abril de 2013. Ese mismo día, se cancelaron las negociaciones y se reunió parte de la cúpula talibana para elegir a su sucesor, el mulá Akhtar Mansur. Su elección no fue del agrado de varios líderes talibán, entre los que se hallaba la familia del mulá Omar, que mostraron su desacuerdo y acusaron a Mansur de manipular la elección. Estos eventos presagiaron divisiones en las filas talibanas y posibles luchas internas por el liderazgo, lo que desvió la atención del grupo respecto a las negociaciones con el Gobierno. En diciembre, el presidente afgano, Ashraf Ghani, y el pakistaní Nawaz Sharif acordaron reanudar de nuevo el diálogo de paz.

En la **India**, se produjo una primera ronda de conversaciones entre el Gobierno indio y la facción favorable a las negociaciones del grupo armado de oposición de **Assam**, ULFA. La delegación del ULFA-Pro Negociaciones destacó que se abordaron todos los temas principales y que sus reivindicaciones centrales fueron la concesión de la categoría de Scheduled Tribes para seis comunidades y, por tanto, espacios reservados, a partir de esta clasificación, en la Asamblea estatal y en otros organismos legislativos. El líder del ULFA-Pro Negociaciones, Anup Kumar Chetia, encarcelado en Bangladesh desde 1997 hasta 2005, y luego asilado en dicho país, fue deportado inicialmente a la India para poder participar en las negociaciones de paz. A finales de diciembre, Chetia fue puesto en libertad. Además, el Gobierno indio y el grupo armado de oposición de **Nagalandia**, NSCN-IM, alcanzaron un preacuerdo marco de paz, de 33 puntos. El acuerdo lo firmaron los líderes del grupo armado, Isak Chishi Swu y Th. Muivah, y el interlocutor principal del Gobierno, R.N. Ravi, en presencia del primer ministro indio, Narendra Modi. El acuerdo, que fue calificado por representantes nagas de «preámbulo» para la resolución final de la cuestión naga y que deberá servir de marco para continuar con el proceso negociador hasta que se alcance un acuerdo final, se adoptó después de más de 80 rondas de negociaciones, que se habían iniciado en el año 1997. Ambas partes aceptaron la idea de “soberanía compartida” y la coexistencia. El formato de éstas fue cambiado para hacerlo más ágil y efectivo. Las negociaciones ya no consistirán en la convocatoria de rondas de negociación formales, sino que se mantendrán series de reuniones entre el interlocutor gubernamental y los líderes del NSCN-IM, que podrán reunirse con el primero para discutir cualquier tema, lo que permitirá acelerar el proceso de conversaciones.

En cuanto al contencioso entre **India y Pakistán** por la región de **Cachemira**, el primer ministro de Pakistán propuso al Gobierno de la India una nueva iniciativa de paz para Cachemira, basada en una tregua indefinida, en la desmilitarización total de este territorio y la retirada conjunta del glaciar de Siachen. Posteriormente, el primer ministro indio, Narendra Modi y su homólogo pakistaní, Nawaz Sharif, protagonizaron un encuentro informal en el que intercambiaron ideas para retomar el diálogo de paz. A finales de año, ambos líderes volaron juntos en el helicóptero oficial de Sharif desde Lahore a Raiwind, donde el primer ministro pakistaní tiene su residencia. Allí trataron principalmente los procesos de diálogo de Cachemira y Afganistán. Un primer ministro de la India no visitaba Pakistán desde 2004. La visita duró tan solo unas horas. Igualmente, en la frontera entre ambos países, miembros de sus fuerzas armadas se reunían para tratar temas de seguridad.

En **Pakistán**, el Gobierno y líderes nacionalistas de **Baluchistán** reconocieron la importancia de iniciar un proceso de diálogo para resolver el conflicto baluchí por la vía política. El Gobierno concedió una amnistía para los insurgentes de Baluchistán que dejaron las

armas y renunciaran a la violencia. El líder del Partido Republicano Baluchí (BRP), Bugti, exiliado en Ginebra, concedió una entrevista a la BBC, en la que anunció que apoyaba una salida negociada al conflicto y que abandonaba la reclamación para la independencia de Baluchistán. Al finalizar el año, el Gobierno estaba intentando abrir conversaciones con los líderes baluchis.

Sudeste asiático

En **Filipinas**, el proceso entre el Gobierno y el MILF vivió su peor crisis en los últimos años, después de que, a finales de enero, alrededor de 70 personas, entre ellas 44 miembros de un cuerpo especial de la Policía, murieran en la localidad de Mamasapano (provincia de Maguindanao) durante un enfrentamiento en el que participaron, entre otros, el MILF y el BIFF. En este sentido, se incrementó la presión contra el presidente, el Congreso y el Gobierno para paralizar o ralentizar la aprobación de la Bangsamoro Basic Law (BBL) y hubo algunos congresistas que, tras el incidente armado, incluso manifestaron su oposición al borrador de ley. El MILF emitió un comunicado oficial en donde señalaba que, si finalmente el Congreso aprobaba una ley que distase sustancialmente de la letra y el espíritu del Acuerdo Marco de Bangsamoro y el Acuerdo Global sobre Bangsamoro aprobados respectivamente en 2013 y 2014, el MILF pondrá fin a la entrega de armas y desmovilización de combatientes, que ya se inició de manera simbólica en el mes de junio. Por otro lado, Manila consideró que no existía tiempo suficiente para lograr un acuerdo integral con el NDF antes del fin del mandato de Aquino a mediados del 2016, pero sí de lograr avances sustanciales en la agenda negociadora.

En **Myanmar**, a finales de marzo, el Gobierno y los grupos armados de oposición que conforman el Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT) afirmaron haber alcanzado, en Yangon, tras la celebración de la séptima ronda de negociaciones, un acuerdo para la consecución de un alto el fuego de alcance nacional. El acuerdo debería ser ratificado por los diferentes grupos antes de su firma, y quedó pendiente determinar qué organizaciones armadas serían las signatarias, puesto que en aquel momento cinco de las 16 organizaciones que componían el NCCT no estaban reconocidas por el Gobierno como organizaciones políticas y tampoco mantenían acuerdos bilaterales de alto el fuego con el Ejecutivo. Además, durante las negociaciones, se estableció que algunos de los asuntos más espinosos, como la formación de un Ejército federal y la creación de un código de conducta, no serían abordados hasta que se hubiera producido la firma del acuerdo de alto el fuego y se hubiera dado inicio a un proceso de negociaciones de carácter político. En octubre, el Gobierno alcanzó un acuerdo de alto el fuego con ocho grupos armados –KNU, KNLA-PC, DKBA, Pa-O NLO,

CNF, ALP, ABSDF, RCS/SSA– del total de 21 actores insurgentes en el país. Además de los firmantes, otros siete grupos armados habían formado parte del proceso negociador con el Gobierno. De entre los grupos que no se adhirieron al acuerdo cabía destacar el UWSA, el SSA o el KIA, grupos que controlaban amplios territorios y que poseían gran cantidad de armamento. En diciembre, se iniciaron los primeros pasos para el proceso de diálogo político en el país. Algunos de los ejes centrales de discusión serían la reforma constitucional, la cuestión del federalismo y una mayor autonomía.

En **Tailandia (sur)**, y según algunos analistas, la intención del Gobierno era establecer dos vías paralelas de diálogo, una oficial (en la que se abordarían las cuestiones sustantivas políticamente) y otra secreta en la que se abordarían cuestiones más operacionales. Respecto de la vía secreta, se desconocía entonces quién la lideraría por parte del Gobierno, aunque sí trascendió que en diciembre de 2014 se llevaron a cabo dos reuniones entre dos grupos armados y altos cargos de las Fuerzas Armadas en el sur del país. A mediados de marzo, el general Aksara Kerpol viajó al sur del país y se reunió con líderes religiosos de la región para abordar algunos aspectos relacionados con la reconciliación y para instarles a que convencieran a miembros de los grupos armados para que abandonaran las armas. Posteriormente se celebraron conversaciones entre el Gobierno y una plataforma, conocida como Majlis Syura Patani (Mara Patani, Consejo Consultivo de Patani), que agrupa a seis organizaciones insurgentes: el BRN, tres facciones distintas de PULO, el BIPP y el GMIP. Se inició una serie de encuentros informales entre ambas partes en Kuala Lumpur, con la facilitación del Gobierno de Malasia. Mara Patani exigió el reconocimiento de la nación Patani (y por tanto de su derecho a la autodeterminación) y la presencia de mediadores y observadores internacionales en las conversaciones de paz. Al finalizar el año, el negociador gubernamental declaró que las negociaciones estaban divididas en tres fases: la creación de medidas de confianza, ratificar los acuerdos ya alcanzados, y consensuar una “hoja de ruta”.

3.3.4. Europa

Sudeste de Europa

En **Chipre**, trascendió que las autoridades grecochipriotas y turcochipriotas estaban considerando, en marzo, paralizar sus actividades unilaterales de exploración de reservas de hidrocarburos en el Mediterráneo para facilitar la vuelta a la mesa negociadora, en reacción también al parón de las actividades de un buque turco de exploración sísmica. Las partes mantuvieron una primera reunión conjunta el 15 de mayo, que marcó el reinicio formal del proceso. Los líderes acordaron reunirse al menos dos veces al mes, dirigir

personalmente las negociaciones, así como la puesta en marcha de medidas de confianza. El asesor especial del secretario general de la ONU anunció, a finales de mayo, una batería de cinco compromisos adoptados por las partes: trabajos para la apertura de nuevos puntos de cruce, empezando por Lefka-Aplici y Deryneia; medidas prácticas para avanzar hacia la interconexión de la red eléctrica; inicio de discusiones y propuestas para la interoperabilidad de la telefonía móvil; prevención de interferencias radiofónicas, y establecimiento de un comité sobre igualdad de género. En la reunión conjunta del 17 de junio, los líderes grecochipriota y turcochipriota formularon el mandato para el comité de género y designaron a sus participantes. Los líderes grecochipriota y turcochipriota, Nicos Anastasiades y Mustafa Akıncı, se reunieron bajo la facilitación de la ONU, el 29 de junio, el 10 y el 27 de julio y el 1 y el 14 de septiembre, mientras sus equipos negociadores y grupos de trabajo aceleraron la frecuencia de los encuentros. A finales de año, decidieron intensificar el ritmo de los diálogos.

En **Kosovo**, los primeros ministros de Serbia y Kosovo, firmaron un acuerdo, en Bruselas, para la integración de las estructuras judiciales del norte de Kosovo en el sistema judicial kosovar. También acordaron disponer de una línea telefónica directa para abordar cuestiones específicas o inesperadas. Se firmó un acuerdo entre Serbia y Kosovo para el desmantelamiento de la fuerza de seguridad serbia que había operado de facto en las áreas serbias y su integración en la Policía de Kosovo. El proceso de diálogo asistió a una nueva ronda al nivel de primeros ministros, a finales de junio, en Bruselas, facilitada por la líder de Exteriores de la UE, Federica Mogherini. Según Mogherini, las partes lograron progresos en lo relativo a la futura creación de una Asociación de Municipalidades Serbias de Kosovo y en cuestiones de telecomunicaciones. En junio, las partes pactaron un paquete de cuatro acuerdos relevantes: sobre energía, telecomunicaciones, asociación de municipalidades serbokosovares y sobre el puente que divide la ciudad de Mitrovica. En diciembre, continuó la tensión política y social en Kosovo con nuevos incidentes violentos de lanzamiento de gases lacrimógenos a mediados de mes en el Parlamento kosovar, protagonizados por parlamentarios de los tres partidos de la oposición albanokosovar, en protesta contra el acuerdo de agosto entre Serbia y Kosovo para la creación de una Asociación de Municipalidades Serbias de Kosovo y contra un acuerdo de delimitación fronteriza con Montenegro.

El nuevo primer ministro de **Moldova**, Chiril Gaburici –nombrado para el cargo en febrero, tras meses de negociaciones para la formación de nuevo Gobierno desde los comicios de noviembre–, y el líder de **Transdniestria**, Yevgeny Shevchuk, se reunieron el 14 de marzo en Chisinau. Se trataba de la primera reunión a ese nivel desde octubre de 2013. Ambas partes valoraron positivamente la reunión, de dos horas, y el

clima de confianza. Entre los resultados, firmaron un protocolo que extendía el acuerdo sobre transporte de cargamentos por vía ferroviaria hasta diciembre de 2016. Pese a la tensión provocada por el conflicto de Ucrania, el vice primer ministro y jefe negociador de Moldova, Viktor Osipov, señaló, a finales de junio, que observaba diferencias entre la escalada de tensión en los medios de comunicación rusos y la línea política oficial de Rusia. Tras una reunión con su homólogo ruso Dmitry Rogozin, el 24 de junio, Osipov afirmó que Rusia había subrayado la necesidad de reducir la tensión y prevenir mayores escaladas.

En **Turquía (provincias del Sudeste)**, el proceso de diálogo entre el Gobierno y el PKK transcurrió con gran incertidumbre en el primer trimestre, en que el líder del PKK llamó al grupo a poner fin a la lucha armada contra Turquía con ciertas condiciones. Según informaciones de prensa, se llegó a cierto principio de acuerdo sobre la declaración en la reunión del 4 de febrero entre la delegación kurda del HDP, Öcalan y representantes del Gobierno y de los servicios de inteligencia. No obstante, surgieron obstáculos de peso. Entre ellos, los mensajes posteriores del Gobierno en los que señalaba que el PKK iba a abandonar las armas, cuestión que el PKK no consideró un tema previo sino a negociar durante el proceso. Finalmente, la comparecencia pública conjunta se produjo el 28 de febrero entre representantes políticos del movimiento kurdo (diputado del HDP Sürreya Önder, diputada del HDP Pervin Buldan) y del Gobierno (vice primer ministro, Yalcın Akdoğan, y ministro de Interior, Ercan Karatoprak). Durante la comparecencia, Önder enunció los 10 puntos considerados por Öcalan como centrales e interpretados en diversos análisis como temas a abordar en las negociaciones. El vicepresidente Akdoğan afirmó, el 18 de marzo, que el Gobierno daba apoyo a la creación de un comité de supervisión del diálogo, como tercera parte en el proceso. Sin embargo, el presidente Erdoğan negó que hubiera acuerdo sobre ese mecanismo, lo rechazó, y afirmó también que la comparecencia conjunta no había sido oportuna, lo que implicaba, además, el rechazo de los 10 puntos de Öcalan leídos en el acto. Erdoğan afirmó en varias ocasiones, entre finales de marzo y abril, que el Gobierno no daría más pasos hacia la paz si el PKK no deponía las armas, negó que fuera a establecerse un comité local de supervisión y negó que existiera una cuestión kurda, abandonando los intentos realizados pocos meses antes, de abrir unas negociaciones formales. A consecuencia de la reanudación de los combates, el PKK puso fin a su alto el fuego unilateral desde 2013, con una escalada de acciones de violencia. En diciembre se agravó la situación de guerra en las áreas kurdas del sudeste de Turquía por la multiplicación e intensificación de las operaciones especiales de las fuerzas de seguridad de asedio a núcleos urbanos, con medidas de toques de queda prolongados y un despliegue de gran escala militar (10.000 efectivos y fuerzas especiales, respaldadas con tanques y artillería), mientras milicias kurdas mantenían su estrategia de desafío armado dentro de las ciudades.

El movimiento kurdo, incluyendo partidos políticos y organizaciones y representantes políticos como el copresidente del partido kurdo HDP Selahattin Demirtas, respaldó la declaración de autonomía y legitimó la insurgencia urbana.

En **Ucrania**, durante el primer trimestre se asistió a una grave escalada de violencia entre enero y mediados de febrero, que forzó negociaciones internacionales de emergencia y resultó en la firma del acuerdo de Minsk II el 12 de febrero. Se dio paso a negociaciones de urgencia en Minsk en el marco del Cuarteto de Normandía (cancillera alemana Angela Merkel; presidente francés François Hollande; presidente ucraniano Petro Poroshenko; presidente ruso Vladimir Putin) y del Grupo Trilateral de Contacto, con participación de los representantes de las autoridades de Donetsk y Lugansk. Resultaron en un nuevo pacto (Acuerdo de Minsk II) así como en una declaración política firmada por Poroshenko, Putin, Merkel y Hollande, que apuntó a la revisión del acuerdo sobre libre comercio entre la UE y Ucrania a través de un proceso trilateral que también involucraría a Rusia, así como a dar respuesta a cuestiones de preocupación para Rusia. Por otra parte, el Parlamento ucraniano aprobó el 17 de marzo el proyecto de ley de estatus especial para las áreas bajo control rebelde, que entraría en vigor después de la celebración de elecciones locales en esas zonas. Rusia y las autoridades rebeldes criticaron que el condicionamiento del estatus a los comicios locales contradecía el acuerdo de Minsk II y que incluía términos no incluidos en las negociaciones. Tras conversaciones a puerta cerrada entre representantes ucranianos y de las fuerzas rebeldes, con participación de Rusia y de la OSCE, a comienzos de mayo, los grupos de trabajo se establecieron ese mismo mes, con un formato bajo el paraguas del Grupo Trilateral de Contacto (Ucrania, Rusia y OSCE y con participación de las fuerzas rebeldes), que mantendrá el poder de toma de decisiones. Rusia abrió un canal diplomático bilateral con EEUU para abordar la crisis ucraniana, que se sumó a los espacios de diálogo bajo el paraguas del Grupo Trilateral de Contacto y del formato de Normandía. Se consiguieron nuevos acuerdos tanto de alto el fuego como de retirada de armamento que llevaron a una desescalada de la violencia, y se llegó a un compromiso que para que se completara una ley de amnistía y un nuevo estatus constitucional para las áreas actualmente bajo control rebelde.

Cáucaso

Respecto a las negociaciones entre **Armenia y Azerbaiyán** por la región de **Nagorno-Karabaj**, el proceso, estancado en los últimos años, se vio negativamente afectado en el primer trimestre por el marcado deterioro de la situación en torno a la línea de alto el fuego. Los presidentes armenio y azerbaiyano acordaron estudiar las propuestas del Grupo de Minsk para reforzar el alto el fuego y discutieron sobre preparativos para una

futura reunión entre ambos mandatarios. La escalada de incidentes en septiembre llevó al Grupo de Minsk a expresar preocupación seria por el uso de morteros y armas pesadas por parte de Armenia y Azerbaiyán en torno a zonas civiles, algo que calificaron de inaceptable, en un comunicado del 25 de septiembre. En la segunda quincena de diciembre, los presidentes de Armenia y Azerbaiyán se reunieron en Suiza, reconociendo que la situación de Nagorno-Karabaj se había deteriorado.

En **Georgia**, se firmó un tratado de alianza e integración entre Rusia y **Osetia del Sur**, lo que enrareció y dificultó el clima en las negociaciones. También se repitió la negativa de **Abjasia** y Osetia de garantizar el derecho al retorno, y las acusaciones de sus gobiernos a Georgia sobre la politización del tema. En el segundo trimestre, se celebró la 32ª ronda de las conversaciones internacionales de Ginebra (30 de junio-1 de julio), en la que prevaleció un clima constructivo, si bien con claras diferencias entre las partes y sin avances significativos. El formato negociador mantuvo la estructura de dos grupos de trabajo, uno sobre cuestiones de seguridad y otro sobre aspectos humanitarios. En el primero, se abordaron cuestiones relativas al no uso de la fuerza, y continuaron los trabajos preparatorios para una declaración conjunta al respecto. Osetia del Sur y Abjasia reiteraron su negativa a debatir sobre el retorno, hasta que Georgia retirara sus resoluciones anuales sobre población desplazada y refugiada en la Asamblea General de la ONU. En cambio, sí abordaron otras cuestiones sobre idioma de instrucción en los colegios en las áreas de mayoría georgiana en Osetia del Sur.

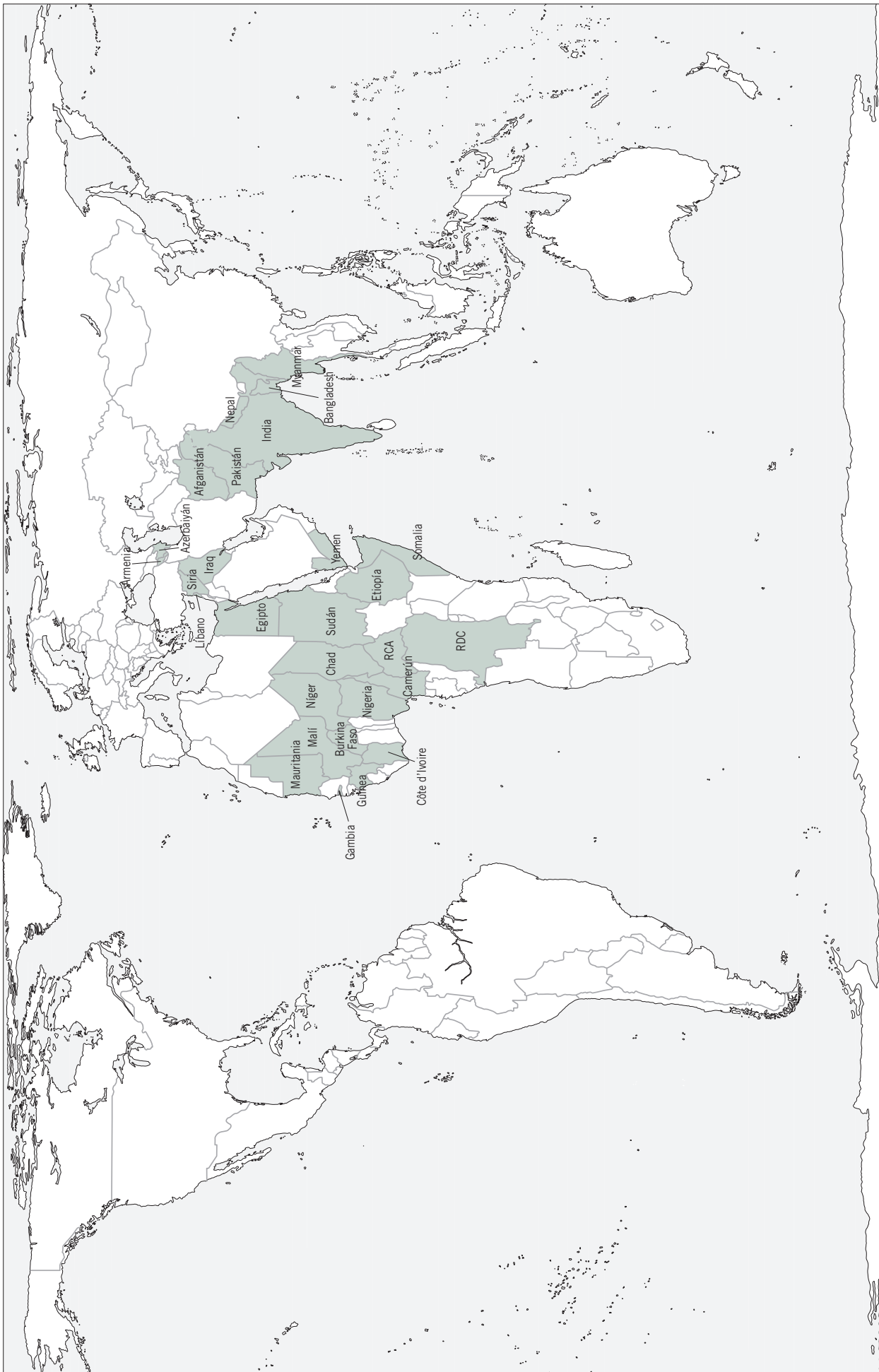
3.3.5. Oriente Medio

Respecto al conflicto entre **Israel y Palestina**, la Autoridad Palestina (AP) mantuvo su estrategia de internacionalización de la causa palestina y avanzó en el proceso de adhesión a la Corte Penal Internacional, que se oficializó el 1 de abril. Israel, en tanto, respondió con represalias, en concreto con una suspensión de los impuestos que recauda en nombre de la AP. Durante la campaña electoral, Benjamin Netanyahu aseguró que si era reelecto no habría un Estado palestino. Estas declaraciones agudizaron la brecha entre el Gobierno israelí y el Ejecutivo estadounidense, que valoró negativamente el distanciamiento de la fórmula de dos Estados. Tras su triunfo electoral, sin embargo, Netanyahu aseveró que seguía siendo partidario de la solución de dos Estados, pero que en la actualidad no estaban dadas las condiciones para alcanzar esta solución. El Gobierno israelí rechazó una iniciativa de Francia para reactivar las negociaciones entre israelíes y palestinos, que incluía un calendario para el reconocimiento del Estado palestino. A finales de mayo, dimitió el enviado del Cuarteto para Oriente Próximo, Tony Blair, tras su rotundo fracaso como facilitador durante ocho años en el cargo. En agosto, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu negó de plano las versiones sobre conversaciones indirectas con el grupo islamista palestino Hamas.

En lo relativo a **Siria** y los intentos por buscar una salida negociada para frenar las hostilidades, a finales de enero de 2015 Rusia promovió una reunión entre representantes de la disidencia y del Gobierno sirio en Moscú. Si bien fueron los primeros contactos desde el fracaso de las negociaciones impulsadas por la ONU a principios de 2014 (el llamado proceso “Ginebra II”), el encuentro se celebró en medio de bajas expectativas debido al rechazo a participar de sectores relevantes de la oposición como por ejemplo la Coalición Nacional Siria, el mayor conglomerado disidente. Tras un proceso de consultas con múltiples actores vinculados al conflicto en Siria, el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, presentó una nueva propuesta de aproximación a la crisis al Consejo de Seguridad, que la aprobó a mediados de agosto. El plan consistía en profundizar el proceso de consultas a través de la creación de grupos temáticos que trataran temas clave (asuntos políticos y constitucionales, militares y de seguridad, instituciones públicas, reconstrucción y desarrollo). Esta aproximación, sin embargo, encontró resistencia en diversos grupos armados. A partir de octubre, en un contexto de creciente internacionalización del conflicto armado, se activó la vía de Viena. En esta ciudad se reunió el Grupo Internacional de Apoyo a Siria, integrado por la ONU, la UE, la Liga Árabe, China, Egipto, Francia, Alemania, Iraq, Italia, Jordania, Líbano, Omán, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Turquía, EAU, Reino Unido, EEUU e Irán (cuya participación se aceptó por primera vez en los esfuerzos internacionales para poner fin al conflicto sirio). Este grupo emitió una declaración en noviembre en la que reconoce que el Comunicado de Ginebra (2012) seguía siendo la base para una transición política en Siria y se acuerda apoyar la implementación de un cese el fuego en todo el país –a excepción de ISIS y el Frente al-Nusra (filial de al-Qaeda)– e instar al diálogo al Gobierno sirio y a la oposición, con el fin de avanzar hacia la creación de un gobierno de unidad “inclusivo, creíble y no sectario”, la elaboración de una nueva Constitución en un plazo de 18 meses seguido de la celebración de elecciones. En diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU dio su apoyo unánime a este plan. Sin embargo, hasta finales de año persistían las diferencias entre uno y otro bando respecto a quiénes podrían participar en las negociaciones y sobre el futuro de Bashar al-Assad.

En **Yemen**, durante el primer trimestre la agudización del conflicto confirmó el colapso del acuerdo de paz alcanzado en septiembre de 2014, que intentaba dar respuesta a la profunda crisis política en el país. Pese a ello, en el país se anunciaron acuerdos preliminares entre varias facciones rivales para formar un consejo de transición. Ante la grave escalada de violencia y el deterioro del conflicto, el enviado especial de la ONU, Jamal Benomar, renunció en abril a su cargo después de más de cuatro años intentando facilitar una transición política en el país y en medio de críticas de países del Golfo. Fue sucedido por el diplomático mauritano Ould Cheikh Ahmed, quien a lo largo del segundo trimestre intentó promover negociaciones entre las partes. Tras varias semanas de gestiones, el nuevo enviado especial consiguió que tanto representantes de los al-houthistas como del gobierno del depuesto presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi viajaran en junio a Ginebra para intentar una negociación. Los contactos acabaron sin resultados y el enviado especial para Yemen insistió en que cualquier nuevo intento de diálogo debía estar precedido de un cese el fuego. Cabe mencionar que Arabia Saudita también intentó promover un encuentro entre actores yemeníes con el presunto objetivo de abordar una salida política a la crisis, pero los al-houthistas se negaron a participar teniendo en cuenta que Riad lideraba la coalición militar que venía lanzando ataques contra el grupo armado desde finales de marzo. Otra propuesta de cuatro puntos para abordar la crisis planteada por Irán –considerado aliado de los al-houthistas– tampoco tuvo mayor eco. Durante el período, informaciones de prensa también dieron cuenta de una reunión en Omán entre los al-houthistas y representantes de EEUU para abordar la crisis. Durante agosto trascendió que por primera vez los al-houthistas habían ofrecido algunas concesiones significativas, entre ellas el repliegue de las ciudades bajo su control en línea con lo dispuesto en la resolución 2216 aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en abril. Una nueva ronda de negociaciones entre las partes en conflicto, celebrada en Suiza a partir del 15 de diciembre, no logró avanzar hacia una solución pactada y se vio empañada por la persistente violencia en el país, pese a la declaración inicial de cese el fuego. Se trataba de la primera vez que las partes se sentaban a una misma mesa a dialogar, pero en el plano político el Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi y las fuerzas al-houthistas mantuvieron sus divergencias.

Mapa 4.1. Desigualdades de género



Países en conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género altos o muy altos en 2015

4. Género, paz y seguridad

- El 70% de los conflictos armados activos durante 2015 para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con graves o muy graves desigualdades de género.
- Durante 2015 se documentó la utilización de la violencia sexual en diferentes conflictos armados, entre los que cabe destacar los casos de Darfur, (Sudán), RCA (con personal de Naciones Unidas implicado) o Myanmar, entre otros.
- Las Fuerzas Armadas de la RDC firmaron una declaración que les comprometía a combatir la violencia sexual y a implementar un plan de acción gubernamental en el seno de la institución.
- La crisis de refugio en la UE estuvo marcada por la dimensión de género y evidenció graves violaciones a los derechos humanos de la población que huye de las guerras.
- Durante 2015 se llevó a cabo una revisión de alto nivel de 15 años de implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad.
- Las negociaciones de paz en Colombia, Chipre y Afganistán evidenciaron la importancia de la dimensión de género en los procesos de paz.

En el presente capítulo se analizan las diversas iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género.¹ Esta perspectiva permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género.² Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

4.1. Desigualdades de género

El Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI)³ es una medición de la discriminación contra las mujeres en las instituciones sociales, que refleja las leyes, normas y prácticas discriminatorias en 160 países teniendo en cuenta cinco dimensiones: la discriminación en el seno de la familia, la violencia contra las mujeres, la preferencia por hijos varones, el acceso de las mujeres a los recursos y su acceso al espacio público. Las instituciones sociales discriminatorias (normas formales e informales, actitudes y prácticas) restringen el acceso de las mujeres a los derechos, la justicia y el empoderamiento, y perpetúan las desigualdades de género en áreas como la educación, la salud, el empleo o la participación política.

1. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.

2. Este capítulo es una síntesis de los acontecimientos más relevantes durante el año. Para ampliar la información en este ámbito puede consultarse la publicación Género y Paz que trimestralmente elabora la Escola de Cultura de Pau.

3. El SIGI es un índice elaborado por la OCDE que mide 5 subíndices integrados por 14 indicadores que incluyen: edad legal de matrimonio, matrimonio precoz, autoridad parental, violencia contra las mujeres, mutilación genital femenina, autonomía reproductiva, abortos selectivos por sexo, preferencias de fertilidad, acceso seguro a la tierra, acceso seguro a la propiedad de otros recursos, acceso a servicios financieros, acceso al espacio público, acceso a la participación y la representación política. OCDE, *Social Institutions & Gender Index. 2014 Synthesis Report*. OCDE, 2014.

Tabla 4.1. Países en conflicto armado y tensión con niveles de discriminación de género altos o muy altos⁴

	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación
Conflictos armados⁵	Etiopía Iraq India (3) Myanmar Pakistán (2) Afganistán RCA	Nigeria Siria RDC (2) Egipto Somalia Malí Sudán (2) Yemen (2)
Tensiones	Burkina Faso Camerún Côte d'Ivoire Etiopía (3) Guinea India (3) ⁶ Myanmar Nepal Pakistán (2) Armenia ⁷ Azerbaiyán Iraq Líbano (2) ⁸	África Central (LRA) Chad Gambia Mauritania Níger Nigeria (2) RDC (3) Somalia Sudán (2) Bangladesh Egipto Siria Yemen

De acuerdo con el SIGI, los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 38 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este indicador con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **21 de los 35 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2015 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación y que cinco conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Argelia, Libia, Israel-Palestina, Rusia, Sudán del Sur–**. Así, el 70% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con graves o muy graves desigualdades de género. Asimismo, en otros siete países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles medios (China, Burundi, Filipinas) y

21 de los 35 conflictos armados que tuvieron lugar en 2015 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género

en otros con niveles bajos (Ucrania, Colombia, Tailandia y Turquía). El elevado porcentaje sería coincidente con las tesis que defienden algunas autoras que apuntan a que la inequidad de género en un país eleva las probabilidades de que éste experimente un conflicto armado de carácter interno.⁹ En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, al menos 33 de las 83 tensiones activas durante el año 2015 transcurrieron en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles altos o muy altos según el SIGI), lo que supone un 51% de las tensiones para las que existían datos.

4.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género

En este apartado se aborda la dimensión de género en el ciclo del conflicto, en especial en referencia a la violencia contra las mujeres. Los conflictos armados y las tensiones son fenómenos con una importante dimensión de género. Mediante el análisis de género se desmonta la tradicional visión de los conflictos armados como realidades neutras y se pone en cuestión el hecho de que la génesis de los conflictos armados sea independiente de las estructuras de poder en términos de género que se dan en una determinada sociedad. Desde esta perspectiva también se plantean serias dudas a las afirmaciones que pretenden homogeneizar las consecuencias de los conflictos sin tener en cuenta la dimensión y las desigualdades de género.

4.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones

La violencia sexual¹⁰ estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos durante el año 2015. Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes.

- Tabla elaborada a partir de los niveles de la discriminación de género del SIGI (OCDE) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escuela de Cultura de Pau. El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.
- Entre paréntesis el número de conflictos armados o tensiones en dicho país.
- Una de las tensiones protagonizadas por la India hace referencia a la disputa que mantiene con Pakistán.
- Armenia y Azerbaiyán protagonizan una única tensión internacional, la relativa a la disputa en torno a Nagorno-Karabaj.
- Una de las tensiones en Líbano hace referencia a la tensión internacional que involucra a Líbano, Siria e Israel.
- Mary Caprioli, "Gender equality and state aggression: the impact of domestic gender equality on state first use of force", *International Interactions* 29, no. 3, 2003: 195-214.
- La ONU considera violencia sexual relacionada con los conflictos los "incidentes o pautas de violencia sexual [...], es decir, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable que se cometa contra las mujeres, los hombres, los niños o las niñas. Estos incidentes o pautas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos o en otras situaciones motivo de preocupación (por ejemplo, durante un enfrentamiento político). Además, guardan una relación directa o indirecta con el propio conflicto o enfrentamiento político, es decir, una relación temporal, geográfica o causal. Aparte del carácter internacional de los supuestos crímenes que, dependiendo de las circunstancias, constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio u otras violaciones manifiestas de los derechos humanos, la relación con el conflicto puede ser evidente teniendo en cuenta el perfil y las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad o la situación de colapso en que se encuentre el Estado en cuestión, las dimensiones transfronterizas o el hecho de que violen lo dispuesto en un acuerdo de cesación del fuego". UN Action Against Sexual Violence In Conflict, *Marco analítico y conceptual de la violencia sexual en los conflictos*, noviembre de 2012.

Cuadro 4.1. Actores armados y violencia sexual en conflictos⁶

El informe de 2015 del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos incluyó una lista de actores armados sobre los que pesan sospechas fundadas de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia sexual en situaciones de conflicto armado, o de ser responsables de ellos, que son objeto de examen por el Consejo de Seguridad.

Côte d'Ivoire	Grupos de ex integrantes de milicias, incluidos la Alianza Patriótica de la Etnia Wé, el Frente para la Liberación del Gran Oeste, el Movimiento de Liberación del Oeste de Côte d'Ivoire y la Unión Patriótica de Resistencia del Gran Oeste; Fuerzas Republicanas de Côte d'Ivoire
Iraq	ISIS
Malí	MNLA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI
RCA	LRA; excombatientes de las fuerzas Séléka; fuerzas antibalaka, incluidos elementos asociados de las fuerzas armadas de la RCA; Revolución y Justicia; Frente Democrático del Pueblo Centroafricano
RDC	Grupos armados: APCLS; ADF-NALU; Fuerzas para la Defensa del Congo; FDLR; Fuerzas de Resistencia Patrióticas de Ituri; LRA; Mai-Mai Cheka/Defensa de Nduma para el Congo Mai-Mai Kifuafua; Mai-Mai Simba/Morgan; Mai-Mai Simba/Lumumba; grupo armado Nyatura; Raia Mutomboki. Fuerzas Armadas de la RDC; Policía nacional de la RDC
Siria	ISIS; otros grupos armados en las zonas en disputa como Ar-Raqqa, Al-Hasaka, Damasco y Damasco Rural, que incluyen: Frente Al-Nusra, Liwa Al-Islam, Aknaf Bait Al-Maqdes, Ansar Bait Al-Maqdis, Harakat Ahrar Ash-Sham al-Islamiyya; fuerzas gubernamentales que incluyen a las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia sirios y las fuerzas partidarias del Gobierno, incluidas las milicias de las Fuerzas de Defensa Nacional
Somalia	Al-Shabaab; Ejército Nacional de Somalia; Policía Nacional de Somalia y sus milicias aliadas; fuerzas militares de Puntlandia
Sudán del Sur	LRA; Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército/Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición; Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán; Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur
Otros casos	Otras partes que generan preocupación sometidas a consideración del Consejo de Seguridad: Boko Haram

El secretario general de la ONU presentó en marzo su informe anual de seguimiento del impacto de esta violencia en los conflictos armados, que cubría el periodo de enero a diciembre de 2014, identificando actores armados responsables de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia de sexual. El informe también documenta los patrones y tendencias en la utilización de la violencia sexual en el marco de los conflictos de Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Darfur (Sudán), Siria, Yemen; de los casos de posconflicto de Bosnia y Herzegovina, Côte d'Ivoire, Liberia, Nepal y Sri Lanka, además de la situación en Nigeria. En el informe se recogen también diferentes iniciativas de respuesta llevadas a cabo por los Gobiernos o desde otras instancias como Naciones Unidas o la sociedad civil.

Durante todo el año se registraron numerosos casos de violencia sexual en diferentes lugares afectados por conflictos armados, tensiones sociopolíticas o en situación posbélica. Uno de los casos más graves fue el de la región de **Darfur** en Sudán, donde diferentes organizaciones informaron del impacto de la violencia sexual en los últimos años. Human Rights Watch (HRW), denunció que el Ejército sudanés violó a 221 mujeres y menores en un ataque organizado en la localidad de Tabit, en la región de Darfur Norte, en octubre de 2014.¹² Radio Dabanga, un medio de comunicación con base en

los Países Bajos, lanzó la primera alerta a principios de noviembre de ese año cuando llevó a cabo las primeras investigaciones sobre los hechos. El Gobierno sudanés negó aquel primer informe y no permitió el acceso a la localidad a la misión híbrida de la ONU/UA (UNAMID). Posteriormente, los cuerpos de seguridad permitieron un breve acceso de la misión a la localidad pero le impidieron llevar a cabo una investigación creíble. Posteriormente, HRW, a pesar del bloqueo al acceso a la localidad, realizó una investigación documentando 27 incidentes separados de violaciones y obtuvo información creíble de otros 194 casos. Las Fuerzas Armadas sudanesas llevaron a cabo varias operaciones militares durante las cuales los soldados saquearon la localidad, arrestaron a los hombres, llevaron a cabo torturas y malos tratos contra los habitantes de Tabit y violaron a mujeres y menores, en su mayoría pertenecientes a la comunidad fur. El Gobierno bloqueó el acceso a la comunidad internacional, por lo que HRW exigió a la ONU y a la UA que pusieran en marcha las medidas necesarias para proteger a la población civil, evitar futuros abusos y realizar una investigación creíble sobre los hechos. HRW añadió que la violencia sexual cometida por las fuerzas gubernamentales no solo ha tenido lugar en Darfur, ya que HRW también determinó que la fuerza gubernamental Rapid Support Forces fue responsable de ataques y violencia sexual contra la población civil en el estado de Nilo Azul. Diferentes organizaciones como Sudan Social Development

11. Consejo de Seguridad de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General*, S/2015/203, 23 de marzo de 2015.

12. Human Rights Watch, *Mass Rape in North Darfur: Sudanese Army Attacks Against Civilians in Tabit*, HRW, 11 de febrero de 2015.

Organisation (SUDO) o Radio Dabanga documentaron violaciones producidas en diferentes ataques por parte de las fuerzas paramilitares Rapid Support Forces (RSF), el Ejército sudanés y las milicias janjaweed en todas las regiones de Darfur. También la ONG británica Waging Peace publicó una investigación en la que denuncia cómo la práctica de la violencia sexual en el conflicto de Darfur se había convertido en algo “rampante”.¹³ Todos los actores armados, incluido el Ejército de Sudán, están implicados. Waging Peace denuncia la total indefensión en la que se encuentran las mujeres en la región, donde ni la justicia, ni las fuerzas de seguridad o la misión de la ONU en el país, UNAMID, han sido capaces de responder para proteger a la población.

Especialmente graves fueron los **casos de violencia sexual cometidos por personal de Naciones Unidas** que se denunciaron en diferentes momentos del años. La situación en la RCA destacó especialmente después de que la organización reconociera que la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MINUSCA) había sido acusada de abusos sexuales a menores en la capital, Bangui. Algunos de los hechos podrían haber sido cometidos durante el año 2014, pero no se informó de ellos a la MINUSCA hasta junio de 2015.¹⁴ Uno de los abusos habría sido perpetrado contra dos niñas menores de 16 años que habrían sido explotadas sexualmente a cambio de alimentos y otros productos. En agosto el secretario general de la ONU nombró al gabonés Parfait Onanga-Anyanga como nuevo representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la MINUSCA (RCA) en sustitución del senegalés Babacar Gaye. Ban Ki-moon había exigido la dimisión de este último por haber fracasado en hacer frente a las numerosas y serias acusaciones sobre abusos sexuales cometidos por parte de los cascos azules en el país centroafricano. Se trató de una decisión sin precedentes sobre la que informó ante el Consejo de Seguridad de la ONU a puerta cerrada, en el marco de la política de responsabilidad y tolerancia cero, tras la publicación por parte de Amnistía Internacional de diferentes casos de violaciones en RCA por parte de cascos azules.¹⁵ Esta destitución se produjo como consecuencia del elevado número de acusaciones de crímenes sexuales contra menores cometidos por los cascos azules de la misión en el país: existen 57 acusaciones de abusos sexuales de los cuales 11 corresponderían a abusos a menores.

En este contexto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, realizó en septiembre un llamamiento a los Estados miembros cuyos soldados son responsables de violaciones y explotación sexual en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU para que dejaran de protegerles por sus crímenes y les sometieran a juicio.¹⁶

Durante 2015 se denunciaron casos graves de violencia sexual por parte de personal de Naciones Unidas, especialmente en RCA

Fuentes de la institución y el propio secretario general reconocieron que la respuesta de la organización ha sido limitada debido a que los Estados se resisten a ceder autoridad y tomar medidas que vayan más allá de ordenar a los responsables de abusos sexuales el retorno al país. Ban Ki-moon se puso en contacto con líderes de los países implicados en los últimos casos de abusos para tratar de garantizar que se enjuiciará a los responsables de crímenes de acuerdo a las leyes de estos Estados. El secretario general de la ONU no desveló los nombres de los países de forma individualizada, pero mientras que Francia, Marruecos y Sudáfrica anunciaron el enjuiciamiento de los soldados involucrados, otros como

Pakistán o RDC no han tomado ningún tipo de iniciativa. Además, algunos países, según funcionarios de la organización, utilizan a la organización para proteger a sus Ejércitos exponiendo a la ONU a que asuma el peso de la crítica de la opinión pública. La organización ha decidido iniciar la suspensión de los pagos a los países contribuyentes de tropas que rechacen actuar cuando existan acusaciones creíbles de abusos sexuales, pero ha declinado revelar los nombres de estos países. En junio, un informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, destacó que a pesar de los esfuerzos de la organización desde 2003, las denuncias persisten, y que el sexo transaccional (sexo a cambio de dinero, joyas, teléfonos móviles, televisiones o comida) es una práctica muy común y poco investigada. La organización ha recibido 480 alegaciones de explotación y abusos sexuales cometidos por miembros de las misiones de mantenimiento de la paz y construcción de paz entre 2008 y 2013, siendo las tropas sudafricanas las que enfrentan el mayor número de acusaciones, seguidas de las uruguayas y de las nigerianas. Por otra parte, a pesar del esfuerzo que estableció el informe del secretario general de la ONU en 2003 para desalentar el sexo transaccional, investigaciones realizadas en dos misiones de la ONU (Liberia y Haití) señalan que esta práctica entre el personal de la ONU y las poblaciones beneficiarias es muy común en ambas misiones, y está muy poco investigada.

En **Myanmar**, las organizaciones de derechos humanos denunciaron la persistencia de la violencia sexual, especialmente contra mujeres de los diferentes grupos étnicos minoritarios. Las organizaciones denunciaron que a pesar del compromiso adquirido por el Gobierno birmano para poner fin a la violencia en el conflicto durante la Cumbre de Londres sobre violencia sexual en 2014, durante 2015 no se adoptaron medidas al respecto. Entre los diferentes casos de violencia sexual que se registraron en el país, cabe destacar el de dos mujeres kachin que fueron violadas y asesinadas

13. Crowther, Madeleine and Chalaby, Odette, *Rape in Darfur: A History of Predation*, Waging Peace, noviembre de 2015.

14. Jeune Afrique, “Centrafrique : nouvelles accusations d’abus sexuels sur enfants par des Casques bleus”, *Jeune Afrique*, 23 de junio de 2015.

15. Amnistía Internacional, “CAR: UN troops implicated in rape of girl and indiscriminate killings must be investigated”, *Amnistía Internacional*, 11 de agosto de 2015. Amnistía Internacional, “UN peacekeeper reform plan falls short on sex abuse”, *Amnistía Internacional*, 11 de septiembre de 2015.

16. The Guardian, “Stop protecting peacekeepers who rape, Ban Ki-moon tells UN member states”, *The Guardian*, 17 de septiembre de 2015.

por el Ejército birmano en el mes de enero, sin que el caso fuera investigado adecuadamente ni los responsables castigados. Además, las organizaciones que lo denunciaron recibieron amenazas. Otros muchos casos de violencia sexual atribuidos a las fuerzas de seguridad gubernamentales permanecen sin haber sido debidamente investigados.

Otro caso destacado del año 2015 fue **Egipto**, donde de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desde el golpe militar de julio de 2013 se registró un importante incremento en el uso de la violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de reprimir a la oposición política y evitar protestas.¹⁷ En este informe se detalla que la violencia sexual se utiliza de manera amplia durante los arrestos y en los centros de detención, afectando a integrantes de la oposición al Gobierno del general Abdel Fatah al-Sisi, pero también a manifestantes, representantes de ONG y a personas acusadas de atentar contra el orden moral. Así, mujeres, menores, estudiantes e integrantes del colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) han estado entre las víctimas de estos abusos. Respecto a las mujeres, el informe especifica que en muchos casos se convierten en objetivo de abusos en tanto que son consideradas como depositarias de la identidad colectiva, como una manera de castigar a las comunidades a las que pertenecen. Asimismo, denuncia casos de abusos a mujeres durante operaciones de registro y redadas, detenciones arbitrarias de mujeres para presionar a familiares y violencia sexual contra prisioneras políticas y activistas. Según fuentes cercanas a los Hermanos Musulmanes (HM) –formación declarada ilegal y terrorista por el Gobierno– citadas en medios de prensa, habría unas 150 mujeres del grupo en prisión y se habrían registrado al menos 20 casos de violación y algunos abortos forzados. Paralelamente, se ha destacado que tradicionalmente las prácticas abusivas que implican el uso de violencia sexual se han aplicado contra personas detenidas o en estaciones policiales, pero que se observa una creciente prevalencia en espacios públicos relacionada con una mayor presencia de la Policía, el Ejército y personal de seguridad en espacios públicos (calles, puestos de control en carreteras, universidades, entre otros).

Con respecto a la situación de **Sri Lanka**, Naciones Unidas presentó su informe sobre las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.¹⁸ El informe recogió que entre la ruptura del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y el LTTE el 21 de febrero de 2002 y el fin del conflicto armado el 19 de mayo de 2009 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos que podrían ser constitutivas de crímenes internacionales. Con respecto a la violencia de género de manera específica, el informe destaca que se produjo

violencia sexual de manera sistemática por parte de las fuerzas de seguridad fundamentalmente contra hombres y mujeres detenidos y especialmente después del fin del conflicto armado. La violencia sexual fue una forma específica de tortura para extraer información y castigar y humillar a aquellas personas acusadas de tener vínculos con el grupo armado de oposición LTTE. El informe señala las enormes dificultades para investigar esta violencia y establecer su escala, pero señala que todo apunta a que podría ser constitutiva de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Una parte importante de los casos de violencia sexual se produjeron contra personas que fueron detenidas tras su regreso al país una vez finalizado el conflicto armado. Por otra parte, se recogen algunas violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario con importantes impactos en términos de género como los ataques deliberados contra la población civil por parte de las fuerzas de seguridad en la fase final del conflicto armado, los ataques contra instalaciones humanitarias y en particular hospitales y el reclutamiento de menores por el LTTE y la milicia del coronel Karuna. Además, también se señala que hay 60.000 hogares encabezados por mujeres en la Provincia del Norte muy seriamente afectados por la inseguridad alimentaria y la falta de medios de vida, lo que los hace especialmente vulnerables al acoso sexual, la explotación y la violencia.

4.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la **RDC** firmó una declaración que le comprometía a combatir la violencia sexual y a implementar un plan de acción gubernamental en el seno de las Fuerzas Armadas congoleñas. La declaración fue considerada por diversos analistas como un paso integral y decisivo para la implementación del primer Plan de Acción contra la Violencia Sexual en los conflictos aprobado por el Gobierno del país en septiembre de 2014, lo que supuso un histórico avance que deberá ser llevado a la práctica. El Plan de Acción tiene como objetivo fortalecer e incrementar la visibilidad de la justicia militar, y mejorar la protección de las víctimas y de los testimonios. Este Plan de Acción se construye a partir del compromiso manifestado por la RDC a la hora de llevar a cabo acciones más decisivas para frenar la persistencia de la violencia sexual en el país en el marco de la Cumbre de Londres sobre violencia sexual en 2014. La representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en situaciones de conflicto, Zainab Hawa Bangura, celebró esta decisión durante la firma de esta declaración, junto a los comandantes de las Fuerzas Armadas congoleñas; diversos altos cargos del Gobierno como los ministros de Justicia, Defensa,

17. FIDH, *Exposing State Hypocrisy: Sexual Violence by Security Forces in Egypt*, FIDH, 19 de mayo de 2015.

18. ACNUR, *Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka - Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (A/HRC/30/61)*

Género, Educación y Sanidad; el representante especial del presidente congolés sobre violencia sexual y reclutamiento de menores y diversos altos cargos de la misión de la ONU en el país (MONUSCO).

La declaración deberá ser llevada a la práctica por cada comandante del Ejército y exige la puesta en marcha de una serie de acciones concretas por parte de los líderes militares, como son el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en relación con la violencia sexual y la aplicación de medidas concretas contra la violencia sexual cometida por los soldados bajo su mando. La declaración también incluye el enjuiciamiento de presuntos autores de violencia sexual, facilitar el acceso a la justicia militar a las áreas bajo su mando y la entrega de los autores que están siendo investigados, hayan sido solo acusados o ya condenados. Finalmente, pretende sensibilizar a los soldados en torno a la política de tolerancia cero y llevar a cabo medidas específicas para garantizar la protección de las víctimas, testimonios, funcionarios judiciales y otros actores clave implicados en esta cuestión. Cabe destacar que el ministro de Defensa estableció una comisión que debe supervisar la implementación de este plan de acción, que incluye representantes del Ejército, de los Ministerios de Justicia, Sanidad y Género, la MONUSCO y ONU Mujeres. Sin embargo, la sociedad civil denunció la falta de voluntad política y de avances concretos en su puesta en marcha. Además, las relaciones entre Naciones Unidas y la RDC atravesaron graves dificultades como consecuencia de las responsabilidades gubernamentales en el conflicto armado.¹⁹

El Gobierno de **Colombia** y la guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo sobre las víctimas del conflicto y la conformación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El acuerdo establece que este sistema adopte un enfoque diferencial de género que tenga en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los niños y niñas y que este enfoque se aplique a los diferentes aspectos, como por ejemplo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, para evidenciar los diferentes impactos del conflicto armado en todos los colectivos que conforman la sociedad colombiana. En lo relativo a la violencia sexual, cabe destacar que se acordó que ésta quedara excluida de la amnistía, el indulto o beneficios equivalentes, junto a otros crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Las organizaciones de mujeres en varias ocasiones habían presentado aportaciones sobre cómo debía ser abordada esta violencia en el marco de los acuerdos sobre justicia transicional.²⁰ Las organizaciones de mujeres habían reclamado la erradicación de la violencia sexual, el

establecimiento de una comisión de la verdad sobre la violencia sexual y su exclusión de las amnistías e indultos. Además, habían destacado la importancia de reconocer que la violencia sexual no es una conducta orientada a alcanzar los objetivos de las partes y que por tanto no puede conectarse con los delitos políticos. Las organizaciones también habían reclamado la creación de un programa especial para mujeres y niñas víctimas sobrevivientes de violencia sexual que establezca medidas de reparación, así como un plan con medidas concretas y estructurales para avanzar hacia la inclusión y la igualdad de las mujeres y las niñas, como garantía de no repetición de esta violencia. Asimismo señalaron la importancia de que el compromiso con la erradicación de la violencia sexual sea inmediato; la importancia de la aplicación del principio de distinción para la población civil; el establecimiento de una comisión de verificación; la atención inmediata a las víctimas de la violencia sexual; y la paridad en las estructuras de verificación.

Los Gobiernos de **Japón y Corea del Sur** alcanzaron un acuerdo relativo a la cuestión de las mujeres confort por el que el Gobierno japonés pidió disculpas a las antiguas esclavas sexuales y comprometió 8 millones de dólares a un fondo gestionado por el Gobierno coreano que prestará diferentes servicios a las víctimas. No está contemplado que las víctimas reciban directamente ninguna compensación económica. Alrededor de 200.000 mujeres (diferentes investigaciones recogen cifras que van desde 45.000 hasta 410.000), en su mayoría procedentes de Corea

del Sur, pero también de otros países como China, Filipinas u Holanda entre otros, fueron convertidas en esclavas sexuales en burdeles militares japoneses durante la IIª Guerra Mundial. Sin embargo, desde que esta cuestión recibiera mayor atención a partir de la década de los noventa, únicamente 238 mujeres reconocieron públicamente haber sido víctimas, y de éstas solo 46 siguen vivas. A cambio de las disculpas y el dinero, el Gobierno de Corea del Sur se comprometió a cerrar la disputa diplomática y a estudiar la retirada de una estatua en homenaje a las víctimas erigida frente a la embajada japonesa en Seúl. Las organizaciones de víctimas rechazaron los términos del acuerdo, señalando que no se las consultó durante el proceso de negociaciones y destacando que para estas organizaciones un aspecto crucial era la admisión por parte de Japón de responsabilidades legales así como el ofrecimiento de reparaciones formales, ya que las compensaciones comprometidas por Japón tienen la forma de ayuda humanitaria pero no de reparación legal. Además, la declaración conjunta de ambos países obvia las circunstancias en las que se produjo la esclavitud sexual, sin hacer referencia al carácter sistemático,

Los Gobiernos de Japón y Corea del Sur alcanzaron un acuerdo relativo a la cuestión de las mujeres confort considerado insuficiente por las víctimas

19. Véase el resumen sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

20. Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer, No es hora de callar, Corporación Humanas, *Cinco claves para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en los acuerdos sobre la justicia transicional en el proceso de paz y Cinco subclaves para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en los contextos de desescalamiento, cese de hostilidades y de cese al fuego*, 2015.

forzado y organizado de ésta. Según diversos análisis, la firma del acuerdo debe ser entendida en el marco de las relaciones geoestratégicas entre ambos países y otros actores de enorme relevancia en la región como China o EEUU. Así, el acuerdo ha buscado fortalecer la relación diplomática entre Corea del Sur y Japón en el marco del enfrentamiento mantenido con Corea del Norte y también allanar el camino a la integración de Corea del Sur en el acuerdo transpacífico de asociación económica (TTP). Además, EEUU habría presionado para la materialización del acuerdo sobre las mujeres confort puesto que el fortalecimiento de las relaciones entre Corea y Japón representaría un contrapunto al poder de China en la región.

4.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado

Se multiplicaron los actos de denuncia de mujeres turcas y kurdas contra la grave escalada de violencia en **Turquía**, especialmente en la segunda mitad del año, con manifestaciones y actos de protesta, participación como escudos humanos, llamamientos al reinicio del proceso de paz y reuniones con representantes gubernamentales internacionales, entre muchos otros. También la prestigiosa diputada kurda y Premio Sájarov, Leyla Zana, amenazó el 10 de septiembre con iniciar una huelga de hambre si no se ponía fin a todos los actos de violencia diaria, mensaje que dirigió a todos los actores armados, e instó a un reinicio de las negociaciones. Turquía asistió desde finales de julio a un escenario de reanudación de la guerra entre el Estado y el PKK, principalmente tras la puesta en marcha de una vasta ofensiva militar, policial y judicial contra el PKK y el movimiento kurdo, con repetidos bombardeos aéreos en el norte de Iraq y zonas del sudeste de Turquía; la declaración de zonas de seguridad, toques de queda, operaciones de asedio a núcleos urbanos y gran despliegue militar y policial; y detenciones, incluyendo de periodistas, co-alcaldes y co-alcaldesas y activistas kurdos, entre otras acciones. En ese contexto, los ataques entre fuerzas de seguridad y guerrilla del PKK se multiplicaron, incluyendo las acciones del PKK –que anunció el fin de su alto el fuego en julio tras el atentado contra un centro cultural kurdo en Suruç atribuido a ISIS– y de las milicias urbanas kurdas.

El reinicio de la guerra tuvo un grave impacto sobre la población civil, incluyendo sobre mujeres y niñas kurdas de los núcleos urbanos, principalmente a causa de las operaciones de asedio militar, que fueron calificadas de desproporcionadas por numerosas organizaciones y defensores de derechos humanos locales e internacionales. Organizaciones locales denunciaron impactos como muertes de civiles –incluyendo de niños y niñas–, cortes de electricidad, agua y redes telefónicas, obstáculos al acceso a atención sanitaria, hostigamiento a personas civiles que han denunciado la situación, entre otros y desplazamiento forzado. Mujeres activistas del movimiento kurdo y abogadas denunciaron también casos de uso de tortura sexual por parte de las fuerzas de seguridad contra mujeres kurdas y asesinatos de mujeres activistas. El movimiento kurdo alertó también sobre los bloqueos al acceso a delegaciones de observación en diversos momentos. Una delegación de mujeres que visitó Cizre tras el fin del bloqueo de septiembre informó de impactos específicos sobre mujeres, incluyendo varios abortos a causa del estrés por la violencia. Otras voces, incluyendo organizaciones y organismos internacionales expresaron también preocupación. Así, en el contexto del cerco sobre Cizre en septiembre, el comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, expresó grave preocupación por la escalada de la violencia en el país y por la “alarmante” información que estaba recibiendo sobre la situación en Cizre, incluyendo serias alegaciones sobre un uso desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad contra la población civil, grave interrupción de la vida pública, incluyendo servicios básicos como la atención sanitaria y una situación próxima a una censura informativa total. Respecto a balances, la Fundación de Derechos Humanos de Turquía afirmó que entre mediados de agosto y primeros días de febrero de 2016, al menos 224 civiles, incluyendo 31 mujeres, murieron en las 58 operaciones de asedio militar transcurridas en al menos 19 distritos de siete ciudades. Entre las víctimas civiles se incluían 42 menores y 30 personas de más de 60 años. Se vieron especialmente afectados núcleos como Cizre y Silopi (provincia de Sirnak), Sur (Diyarbakir). Asimismo, algunas personas defensoras de derechos humanos expresaron también preocupación por el impacto en civiles de la estrategia de guerra urbana por parte de las milicias kurdas urbanas, dado que sitúa a la población civil de los núcleos urbanos en una situación de vulnerabilidad.

Cuadro 4.2. La crisis de refugio en Europa desde una perspectiva de género

La crisis de refugio que se viene produciendo en los últimos años y que ha alcanzado una enorme notoriedad pública durante el año 2015 es un reflejo de las gravísimas consecuencias que los conflictos armados y las crisis sociopolíticas tienen en las vidas de las personas, forzando a millones de seres humanos a huir de sus hogares. Analizar esta crisis de derechos humanos desde una perspectiva de género permite dar visibilidad a algunos elementos importantes que permiten una aproximación más completa y menos parcial. Uno de los elementos a tener en cuenta es el demográfico. Si bien no hay cifras desagregadas por sexo para el total de las personas desplazadas de manera forzada en el mundo, lo cierto es que en los últimos años se ha producido un importante incremento en la disponibilidad de las cifras, que permiten señalar a partir

de los datos parciales disponibles que aproximadamente la mitad de la población desplazada de manera forzada son hombres y la mitad mujeres. Las mujeres representaban a finales de 2014 el 49% de la población refugiada y el 52% de la población desplazada interna según ACNUR. Sin embargo, en la crisis de refugio que afecta a Europa, las cifras son notablemente diferentes. De acuerdo con algunas estadísticas parciales ofrecidas por Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de las 382.000 personas emigrantes y refugiadas que habían entrado en Macedonia entre junio y diciembre de 2015, el 51,4% de ellas eran hombres adultos, el 16,9% eran mujeres adultas, y el 29% eran menores, sin que la cifra de menores estuviera desagregada por sexo.²¹ Diferentes medios de comunicación han señalado, no obstante, que la mayor parte de los menores que llegan a las costas europeas, especialmente en el caso de menores no acompañados, son niños. Según cifras ofrecidas por ACNUR, del total de personas llegadas a Europa por el Mediterráneo entre enero de 2015 y enero de 2016, el 49% eran hombres, el 19% eran mujeres y el 31% eran menores, cifra esta última sin desagregar.²² Así pues, la demografía importa y debería ser objeto de una atención más detenida. Por una parte revela la necesidad de un análisis más profundo de las razones de este desequilibrio entre hombres y mujeres en la composición de la población que llega a las costas europeas huyendo de la guerra y la pobreza. Por otra parte, la propia experiencia del proceso de desplazamiento y refugio también debe ser abordada desde una perspectiva de género.

En lo que respecta a las causas del desplazamiento forzado, algunos factores que podrían explicarlo harían referencia a los impactos diferenciados de género de los conflictos armados, que hacen que los hombres sean víctimas en mayor medida del reclutamiento forzado y también constituyan la mayor parte de las víctimas mortales directas de los conflictos armados.²³ Los conflictos armados impactan de manera diferenciada en hombres y mujeres, lo que ha sido objeto de una amplia atención por parte de investigaciones feministas, que ha analizado desde cómo el género ha moldeado la génesis de los conflictos armados legitimando las ideologías patriarcales que justifican y sustentan la militarización, hasta cuestiones más concretas como el impacto de los conflictos en la salud de las mujeres o la violencia sexual. En el caso del desplazamiento forzado de hombres adultos, que como se señaló anteriormente parecen constituir el principal grupo demográfico dentro de la población refugiada, podría encontrarse el elevado impacto en términos de letalidad que el conflicto armado sirio está teniendo. Durante el año 2015, por ejemplo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos documentó la muerte de casi 21.000 civiles (de un total de 55.000 fallecidos como consecuencia del conflicto armado), de los que cerca de 9.000 eran hombres adultos y 2.000 eran mujeres adultas.²⁴ La proporción de hombres entre los combatientes fallecidos es mucho mayor, puesto que la presencia de mujeres en las filas armadas es más reducida.

Otro factor añadido a tener en cuenta sería el impacto de las políticas de reclutamiento forzoso. En Siria existe una política de conscripción forzosa para todos los hombres de 18 años. Esto ha generado que un elevado número de hombres jóvenes se hayan desplazado a zonas que no están bajo control gubernamental, pero también, y sobre todo con el avance e incremento de poder de la insurgencia yihadista, ha llevado a un incremento en la cantidad de hombres que huyen del país.²⁵ A pesar de la prohibición que existe para que cualquier hombre entre 18 y 42 años abandone Siria sin autorización previa y de las restricciones por parte de países como Iraq y Jordania para que hombres sirios accedan a su territorio, lo cierto es que numerosos sirios están atravesando las fronteras de manera ilegal y recurren a las redes de tráfico de personas para alcanzar territorio europeo. En el caso de las mujeres, uno de los factores detrás del desplazamiento sería el impacto de la violencia sexual. El informe del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos armados presentado en marzo de 2015 recoge cómo las mujeres que han huido de Siria aluden con frecuencia al temor a la violencia sexual como uno de los factores importantes para explicar su decisión de refugiarse.²⁶ La violencia sexual puede ser utilizada como una estrategia de guerra en un conflicto armado porque permite no solo “limpiar” un territorio garantizando que lo sucedido dificultará la voluntad de la población de retornar a ese territorio.²⁷ Por otra parte, son numerosas las mujeres que relatan haber sido víctimas de la violencia sexual durante el trayecto que llevan a cabo para llegar a Europa, o que se han visto obligadas a recurrir al sexo para poder afrontar los elevados costes que conlleva acceder de manera ilegal al territorio europeo.

Es importante también analizar desde una perspectiva de género no solo las causas del desplazamiento forzado o las dinámicas que se producen durante el tránsito hacia los países de refugio, sino también lo que sucede una vez que las personas que huyen de la guerra llegan a Europa. Las mujeres enfrentan di-

21. International Organization For Migration, *Situation Report, Europe/Mediterranean Migration Response*, 31 de diciembre de 2015.

22. ACNUR, *Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean* [consultado el 14 de enero de 2016].

23. Ormhaug, Christin Marsh; Patrick Meier y Helga Hernes, *Armed Conflict Deaths Disaggregated by Gender*, PRIO Paper. Oslo, PRIO, 2009.

24. Syrian Observatory for Human Rights, *Syria is still bleeding... more than 55,000 thousand persons were killed during the year of 2015*, 31 de diciembre de 2015.

25. Rochelle Davis, Abbie Taylor y Emma Murphy, “Gender, conscription and protection, and the war in Syria” *Forced Migration Review*, N°47, septiembre de 2014.

26. Consejo de Seguridad de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General, S/2015/203*, 23 de marzo de 2015.

27. Wood, Elisabeth J., “Rape Is not Inevitable during War” en Morten Bergsmo, Alf B. Skre, y Elisabeth Jean Wood, eds., *Understanding and Proving International Sex Crimes*. Oslo, Torkel Opsahl Academic Epublsher, 2012.

ficultades específicas en los procesos de demanda de asilo, puesto que la violencia de género no siempre es reconocida como un motivo para garantizar el acceso a este derecho fundamental. Por otra parte, la atención humanitaria que se presta a las personas refugiadas no siempre responde a criterios de género que tengan en cuenta aspectos específicos, como por ejemplo la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres o la respuesta frente a la violencia sexual. En lo que respecta a los hombres, especialmente en el caso de los jóvenes que viajan solos, en ocasiones son percibidos como una amenaza a la seguridad, puesto que responden al estereotipo de combatientes o terroristas, y no siempre se tiene en cuenta que en un gran número de ocasiones los hombres huyen para no tener que participar activamente en el ejercicio de violencia. Estos estereotipos de género en ocasiones se han entremezclado con otros prejuicios racistas e islamófobos relativos a los hombres musulmanes, como por ejemplo en el relato de las agresiones sexuales contra mujeres en Colonia,²⁸ poniendo de manifiesto la importancia de llevar a cabo análisis interseccionales que permitan abordar la complejidad de los acontecimientos teniendo en cuenta que la violencia sexual siempre responde a dinámicas de desigualdad y abuso de poder entre hombres y mujeres.

Así pues, la crisis de refugio que atraviesa Europa se muestra como un fenómeno de una enorme complejidad que debe ser analizado desde una perspectiva de género que ponga de manifiesto cómo las desigualdades entre hombres y mujeres, así como los roles de género, tienen un claro impacto en las causas, dinámicas, consecuencias y respuestas al desplazamiento forzado de población.

4.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género

En este apartado se analizan algunas de las iniciativas más destacadas para incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la construcción de la paz.

4.3.1. La resolución 1325

Durante el año 2015 se cumplió el 15º aniversario de la aprobación de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU. Coincidiendo con esta efeméride, se llevó a cabo una extensa revisión de su implementación a lo largo de estos 15 años por Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil.²⁹ A tal efecto se presentaron diferentes informes de evaluación y se llevó a cabo un **debate abierto en el Consejo de Seguridad**. Además **del informe anual del Secretario General de la ONU**, presentado ante el Consejo de Seguridad en cumplimiento de lo establecido en la resolución, Naciones Unidas presentó el **Estudio Global sobre 15 años de aplicación de la resolución 1325** elaborado de manera independiente por la experta Radhika Coomaraswamy. Además, el Consejo de Seguridad aprobó una **nueva resolución, la 2242 (2015)**, que se añade a las siete resoluciones previas que conforman la agenda sobre mujeres, paz y seguridad –1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) y 2122 (2013)–.

El Estudio Global llevado a cabo por Radhika Coomaraswamy supone la revisión más exhaustiva que se ha llevado a cabo hasta el momento de la

implementación de la resolución 1325. Está basado en una revisión muy completa de esta implementación, incluyendo investigaciones específicas sobre los diferentes temas abordados, así como numerosas consultas con los diferentes actores involucrados (sociedad civil, gobiernos, organismos regionales y Naciones Unidas) aportando conclusiones pertinentes. **El estudio, que destaca que la resolución 1325 debe ser interpretada como un mandato de derechos humanos para la comunidad internacional**, ofrece evidencias sobre la importancia y el impacto positivo de la inclusión de la dimensión de género en la prevención de conflictos y la construcción de la paz –específicamente en los procesos y acuerdos de paz–, poniendo énfasis en la importancia de potenciar la prevención frente al uso de la fuerza y la securitización de los conflictos. Además, se constatan los múltiples desafíos que persisten para esta implementación. Entre éstos cabe destacar que la mayoría de los progresos están muy lejos de ser prácticas estándar y se trata de “primeros logros”. También se señala que la persecución y procesamiento de la violencia sexual es muy escasa y tampoco se ha logrado demostrar que los marcos normativos hayan servido para disuadir futuros actos de violencia; y que la subrepresentación de las mujeres en todos los niveles es una práctica persistente, especialmente en los procesos de paz y las misiones de paz, donde la igualdad y la participación significativa de las mujeres son metas muy lejanas todavía. El informe también identifica la falta de financiación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad como uno de los mayores obstáculos. Otro de los desafíos identificados hace referencia al ascenso del extremismo y de políticas antiterroristas violentas con un severo impacto en las vidas de las mujeres. En el proceso de elaboración del informe se llevaron a cabo

28. Cientos de mujeres fueron víctimas de agresiones durante Nochevieja en Colonia y otras ciudades alemanas. Algunos de los hombres detenidos sospechosos de ser agresores fueron identificados como solicitantes de asilo, generando una respuesta de ataques racistas contra población refugiada que reside en Alemania.

29. Para una valoración más amplia de la revisión de alto nivel puede consultarse: María Vilellas, *15 años de la resolución 1325. Una evaluación de la agenda sobre mujeres, paz y Seguridad*. ICIP/ACCD, 2015.

diferentes consultas con la sociedad civil, que presentó aportaciones para enriquecer el informe.³⁰ El estudio plantea una serie de recomendaciones y líneas de acción para los Estados miembros, las organizaciones internacionales y la sociedad civil:

- No a la militarización: sí a la prevención.
- La agenda sobre mujeres, paz y seguridad debe ser respetada como un mandato de derechos humanos.
- Los mediadores en los procesos de paz y el liderazgo de las misiones de la ONU en terreno deben ser proactivos con respecto a la participación de las mujeres: la presencia de mujeres hace a la paz sostenible.
- Los perpetradores deben ser castigados y la justicia debe ser transformadora.
- La adecuación al contexto local de los programas de construcción de paz debe implicar la participación de las mujeres en todos los niveles y debe ser complementada con planes de seguridad exhaustivos para proteger a las mujeres y las niñas tras el fin de los conflictos.
- Financiar a las mujeres constructoras de paz y respetar su agencia es una forma importante de luchar contra el extremismo.
- Todos los actores claves deben jugar un papel: Estados miembros, organizaciones regionales, medios, sociedad civil, juventud.
- Se debe trabajar por un Consejo de Seguridad bien informado que aplique la perspectiva de género a todas las cuestiones.
- El 15% de toda la financiación para paz y seguridad debe estar específicamente destinada a programas que impacten en las mujeres.
- Se debe trabajar por una arquitectura de género fuerte en la ONU, en el terreno y en la sede central.

Como se señaló anteriormente, durante la celebración del debate abierto en el Consejo de Seguridad se aprobó la resolución 2242 y los Estados adquirieron una serie de compromisos para mejorar la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad.³¹ En lo que respecta a la nueva resolución, su contenido hacía referencia a cuestiones como la financiación de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad; la integración del género en el análisis y el trabajo de las diferentes entidades de Naciones Unidas; el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y la integración de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad en la llamada lucha contra el terrorismo y lucha contra el extremismo violento. Este último fue uno de los temas importantes durante todo el proceso de revisión de los 15 años de implementación y que evidenció las tensiones y diferencias entre la agenda de los Gobiernos y las prioridades de la sociedad civil. Las organizaciones de mujeres expresaron su

preocupación por el hecho de que la agenda sobre mujeres, paz y seguridad pueda ser utilizada para dar legitimidad a actuaciones militaristas que puedan llegar a implicar violaciones a los derechos humanos, al servicio de políticas e intereses gubernamentales, y destacaron la importancia de fortalecer los procesos de empoderamiento de las mujeres que viven en contextos afectados por el extremismo, apuntando a la complejidad de adjetivar la violencia y de llevar a cabo distinciones entre la violencia extremista y otros tipos de violencia. No obstante, sí hubo coincidencia en señalar el grave impacto que tiene la violencia en la vida de las mujeres en aquellos contextos que la comunidad internacional identifica como afectados por la violencia extremista y las continuas violaciones a sus derechos a las que estas mujeres deben hacer frente.

Con respecto al **debate abierto en el Consejo de Seguridad**, cabe destacar que éste tuvo elementos positivos y negativos. Por una parte, hubo una importante presencia de Gobiernos, muestra de que el perfil político de esta agenda ha logrado ascender en los últimos años. Además, la resolución resultante del debate fue aprobada con el apoyo de un elevado número de Gobiernos. En el lado más negativo de la balanza, debe señalarse la fragilidad de los compromisos adquiridos, que no permiten inferir que haya voluntad política de avanzar de manera sustantiva en la implementación de la agenda. Gran parte de los compromisos enunciados hacían referencia a actividades ya llevadas a cabo por los diferentes países y las cantidades comprometidas en los anuncios económicos eran muy reducidas. Así pues, se pone de manifiesto que los Gobiernos dan relevancia al tema por la visibilidad que éste ha adquirido internacionalmente, pero que no existe una voluntad genuina de fortalecer su puesta en práctica.

Con respecto a la **implementación de la resolución 1325 por parte de otras organizaciones**, cabe destacar que la **Unión Europea (UE)** creó un cargo de alto nivel dedicado a la dimensión de género y a la resolución 1325: Asesora Principal de EEAS sobre Género y la Implementación de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, y nombró para ese cargo a Mara Marinaki. La creación de un cargo de género de alto nivel era una demanda de las organizaciones de la sociedad civil del ámbito de género y construcción de paz. Asimismo, el posterior documento de trabajo conjunto de la Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad *Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020* (SWD [2015] 182 final), del 21 de septiembre, se compromete al establecimiento de “un consejo asesor

30. Véase por ejemplo: WILPF, *Through the Lens of Civil Society: Summary Report on the Public submissions to the Global Study on the Women, Peace and Security Agenda*, WILPF, 2015; Danielle B. Goldberg, *Civil Society Organization (CSO) Survey for the Global Study on Women, Peace and Security. CSO Perspectives on UNSCR 1325 Implementation 15 Years after Adoption*, GNWP, Cordaid, ICAN, NGOWG on WPS, 2015; María Vilellas, *Enhancing women's participation in peace processes. Submission to the Global Study on Women, Peace and Security*, Escola de Cultura de Pau, 2015.

31. Puede consultarse la lista completa de compromisos adquiridos por los Gobiernos en octubre de 2015 en: <http://www.peacewomen.org/member-states/call-to-action-2015>.

con personas expertas destacadas de los países socios”. A diferencia de la UE hasta ahora, otras organizaciones regionales e internacionales sí contaban con cargos de alto nivel en materia de equidad de género y agenda de mujeres, paz y seguridad (ej. representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en los conflictos; enviada especial de la UA sobre Mujeres, Paz y Seguridad; representante especial de la presidencia de turno de la OSCE sobre cuestiones de género). La UE ha desarrollado un marco normativo significativo sobre mujeres, paz y seguridad, que compromete a sus instituciones a implementar dicha agenda y evaluar e informar sobre su implementación. No obstante, informes y evaluaciones independientes coinciden en señalar un déficit de implementación, a pesar de avances en los últimos años. La ONG sueca Kvinna til Kvinna había calificado de gran éxito la creación del cargo de alto nivel dedicado a la resolución 1325 y la perspectiva de género.

4.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz

Varias negociaciones de paz fueron especialmente relevantes desde un punto de vista de género durante el año 2015. Diferentes investigaciones recientes han puesto de manifiesto cómo la presencia de actores más allá de las partes en conflicto, especialmente de la sociedad civil, incrementa la sostenibilidad de los procesos de paz. Además, la inclusión de la sociedad civil y, de manera específica, los grupos de mujeres, tiene efectos positivos tanto sobre las posibilidades de alcanzar acuerdos de paz, como sobre su sostenibilidad.³²

Colombia

Las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC avanzaron de manera positiva durante todo el año, incorporando de manera importante diferentes cuestiones relativas a la dimensión de género y la participación de las mujeres y los colectivos LGTBI, un hecho poco frecuente en este tipo de procesos. Algunos aspectos especialmente reseñables del proceso fueron por un lado la celebración de varias sesiones de la subcomisión de género que reunió a representantes de las organizaciones de mujeres y LGTBI en La Habana. En febrero tuvo lugar la visita de una segunda delegación, integrada por representantes de las organizaciones Alianza tejedoras de vida, Corporación Caribe Afirmativo, Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados CND, ANMUSIC, Red Mariposas y la Red Nacional de Mujeres Ex Combatientes de la Insurgencia. En marzo se celebró una nueva reunión en la que participaron representantes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), Asociación de Mujeres Araucanas Trabajadoras (AMART), Colombia Diversa, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC

y una líder de un movimiento estudiantil universitario. Como en anteriores ocasiones, las organizaciones participantes instaron a que las partes negociadoras acuerden un alto el fuego bilateral y que haya un desescalamiento inmediato del conflicto armado y se ponga fin a las violencias contra las mujeres, además de una declaración explícita en contra de la discriminación contra la población LGTBI. Además, tras las visitas de representantes de la sociedad civil se produjo también un encuentro de la subcomisión con las expertas Magalys Arocha, Mireia Cano e Hilde Salvesen, con el objetivo de presentar recomendaciones para garantizar la inclusión de un enfoque de género en los acuerdos ya logrados. En el mes de agosto, una delegación de mujeres representantes de diferentes organizaciones de mujeres y centros de investigación –Corporación Humanas, IMP, DEJUSTICIA, Escuela de Género de la Universidad Nacional, Sisma Mujer, Taller Abierto, Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, Ruta Pacífica, Casa de la Mujer y PROFAMILIA– participaron en una nueva sesión de la Subcomisión de Género en La Habana y se reunieron con representantes del Gobierno y de las FARC para abordar la cuestión de la violencia de género y la violencia sexual. Las organizaciones participantes hicieron un llamado a que las partes se comprometieran con la erradicación de la violencia de género en todas sus formas, incluida la sexual y al impulso de medidas de reconocimiento de lo sucedido, reparación, esclarecimiento, acceso a la justicia y participación en el diseño de mecanismos de justicia acordados, así como no repetición. La delegación de mujeres destacó la necesidad de que la violencia sexual sea enmarcada en un contexto más amplio de desigualdades y discriminaciones de género, lo que es necesario para el logro de una paz sostenible y duradera.

También cabe destacar que la representante especial del secretario general de la ONU para la violencia sexual en los conflictos, Zainab Bangura, visitó Colombia y posteriormente se desplazó a La Habana para reunirse con las delegaciones negociadoras. Esta reunión coincidió con la declaración por el Gobierno de Colombia del Día Nacional para la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Conflicto Armado Interno. Y finalmente, fue especialmente remarcable el acuerdo alcanzado entre Gobierno y FARC sobre las víctimas del conflicto y el establecimiento de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.³³ En paralelo, la sociedad civil y las organizaciones de mujeres continuaron con su intenso trabajo para promover la participación de las mujeres en el proceso y presionar para que éste integrara la perspectiva de género.

Chipre

En el marco del reinicio en mayo del proceso formal de negociaciones de paz, las partes en conflicto acordaron

32. Véase “La perspectiva de género en los procesos de paz: inclusividad y sostenibilidad” en el capítulo 5 (Oportunidades de paz para 2016).

33. Véase el apartado 4.2.2. en este capítulo.

a finales de ese mes –junto a otros compromisos– la creación de un comité técnico sobre igualdad de género, cuyo mandato incluye referencia a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. Se designó a sus participantes (hombres y mujeres: Xenia Loizidou, Soula Zavou, Mary Papadopoulou, Soula Hadjikyriacou Helen Apegitou, Harris Chrysostom, Maria Hadjipavlou Olga Demetriou y Nicolas Kyriacou) y se celebró la primera reunión en agosto, seguidas de otras reuniones a lo largo de 2015. El European Women's Lobby, que expresó su apoyo al reinicio de las conversaciones de paz, había advertido de que las negociaciones carecían de manera evidente de perspectiva de género y de que se había excluido la participación adecuada de las mujeres en el proceso.

El comité propuso en octubre a los líderes de las comunidades grecochipriota y turcochipriota, que lideran las negociaciones, diversas medidas, incluyendo que los equipos negociadores, los grupos de trabajo y los comités técnicos tengan equilibrio de género, de un ratio de entre 30-50%. Asimismo, instaron a que cada grupo de trabajo y comité técnico incluya a una persona experta en género y paz. El comité tiene el objetivo de que todos los documentos que se preparen con vistas a incorporarse a un futuro acuerdo de paz y a una constitución cumplan con los estándares internacionales de igualdad de género y con las prácticas relativas a la resolución 1325. En su informe de enero de 2016, el secretario general de la ONU celebró los pasos dados para reforzar la participación de las mujeres en las negociaciones, incluyendo la creación del comité así como un aumento del número de mujeres involucradas en el proceso de paz, ya sea como miembros de los equipos negociadores o en los grupos de expertos, aunque no explicitó los porcentajes o cifras.

Afganistán

La reactivación del proceso de paz con la insurgencia talibán durante el año 2015 llevó consigo también la exigencia de una mayor presencia de mujeres en el marco de las negociaciones y algunas iniciativas interesantes al respecto. Lo más relevante del año fue el encuentro sin precedentes que mantuvieron en Oslo representantes talibanes con una delegación de nueve mujeres, entre las que había parlamentarias, integrantes del Alto Consejo para la Paz y defensoras de los derechos humanos. El encuentro fue facilitado por el Gobierno de Noruega como parte de su apoyo al proceso de paz en Afganistán, pero no tuvo un carácter oficial y fue calificado de preliminar. Las mujeres no participaron en calidad de representantes del Gobierno afgano. El portavoz talibán Zabiullah Mujahid reconoció que la reunión, que se prolongó durante varios días, había tenido lugar, pero señaló que las discusiones eran informales y que no podían ser categorizadas como negociaciones de paz. Independientemente del grado de oficialidad

que pudiera tener el encuentro, su valor simbólico es innegable, puesto que la participación de las mujeres en los esfuerzos formales de construcción de paz en Afganistán ha estado enormemente restringida por parte de todos los actores implicados. En paralelo al de Oslo, también se produjo otro encuentro directo entre talibanes y mujeres en el marco de la reunión de carácter informal en Qatar organizada por la organización canadiense Pushwag Council que contó con la participación de una delegación del Gobierno afgano –que incluía a varias mujeres– y otra talibán. La antigua parlamentaria Malalai Shinwari, presente en la reunión, durante la cual mantuvo conversaciones directas con los talibanes, relató que éstos habían hecho referencia a los derechos de las mujeres en varias ocasiones afirmando que no se oponían a la participación política de las mujeres y el propio texto de conclusiones del encuentro recogía que todos los asistentes habían remarcado la importancia del derecho a la educación para hombres y mujeres.

Estos encuentros venían precedidos de algunos gestos, fundamentalmente de carácter simbólico, tras la formación del nuevo Gobierno liderado por el presidente Ashraf Ghani, que podrían indicar que el nuevo Gobierno tendrá un mayor compromiso con la mejora de la situación de las mujeres en el país. Así, un gesto que ha sido ampliamente recogido por los medios de comunicación, especialmente los internacionales, fue el reconocimiento directo que Ghani hizo al trabajo de su esposa durante su discurso de toma de posesión o el hecho de que ella se dedique activamente a la defensa de la población desplazada interna, algo inédito en la vida política del país. En paralelo, se produjeron algunos nombramientos de mujeres en cargos políticos como los de gobernadoras, en consonancia con las promesas electorales del nuevo Ejecutivo. Sin embargo, estos nombramientos han estado plagados de dificultades por diferentes motivos, entre los que cabe destacar la oposición del Parlamento y las difíciles condiciones de seguridad. Las mujeres afganas que ocupan puestos de relevancia pública se ven sometidas a continuas amenazas y agresiones que han llegado incluso al asesinato. Por otra parte, en junio el Gobierno afgano presentó su Plan de Acción Nacional (PAN) sobre la resolución 1325, uno de cuyos objetivos es garantizar la participación efectiva de las mujeres en el proceso de paz. El PAN no cuenta por el momento con ningún plan concreto de implementación, aunque durante la reunión de donantes del país celebrada en septiembre la implementación de este plan fue una exigencia por parte de éstos. La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) reclamó en varias ocasiones acciones decididas por parte del Gobierno para incorporar activamente a las mujeres a la construcción de la paz en el país.³⁴ HRW instó al Gobierno afgano a que incluyera a mujeres en el equipo de asesores de primer nivel para las negociaciones de paz, a que las mujeres que forman parte del Alto

34. HRW, "Afghanistan: Don't Leave Women Out of Peace Talks", *HRW*, 1 de marzo de 2015; HRW, "Afghanistan: Accept Full Role for Women in Talks. Donors Need to Back Women's Rights, Uphold UN Resolution 1325", *HRW*, 27 de septiembre de 2015.

Consejo para la Paz tengan un papel más relevante, a una implementación efectiva del PAN sobre la 1325 y a que haya una mayor presencia de mujeres afganas en los diferentes foros internacionales en los que el país participa. Por su parte, organizaciones de mujeres reclamaron a los donantes que no diesen apoyo a los procesos que excluyen a las mujeres y reclamaron una mayor exigencia al Gobierno de cambios efectivos. Sin embargo, ninguna mujer participó en las conversaciones de paz entre talibanes y Gobierno afgano celebradas en Murree (Pakistán) en el mes de julio.

Turquía

Con respecto a las negociaciones entre el Gobierno de Turquía y el grupo armado kurdo PKK, que afrontaron numerosos obstáculos en los primeros meses del año y que acabaron de colapsar a mitad de 2015, cabe destacar que el proceso de diálogo incorporó en enero a Ceylan Bağrıyanık. La activista y escritora kurda pasó a participar como representante del movimiento de mujeres kurdas en la delegación kurda que visitaba al líder del PKK, Abdullah Öcalan, en la prisión de Imrali. La delegación kurda era uno de los actores en el formato de diálogo de Imrali entre Turquía y el líder del PKK, tras el fracaso del proceso anterior de Oslo (2009-2011), con el objetivo de hacer de puente entre Öcalan y la dirigencia del PKK, así como en contacto con las autoridades turcas. La participación directa del movimiento de mujeres kurdas en la delegación era una demanda reiterada, y que tras muchas dificultades y reticencias previas fue aceptada por el Gobierno turco. Su incorporación suponía un fortalecimiento de la participación de las mujeres en el proceso, debido a la mayor interacción y comunicación directa entre el movimiento de mujeres y la delegación y la mayor oportunidad que se abre para reforzar las demandas específicas de las mujeres kurdas. La participación de Bağrıyanık se enmarca en doble sistema organizativo del movimiento kurdo (sistema mixto y movimiento solo de mujeres). La parlamentaria Pervin Buldan, participante también en la delegación, señaló que la perspectiva de las mujeres se había discutido en todos los encuentros de la delegación kurda. Asimismo, entre los diez puntos de la llamada Declaración de Dolmabahçe de febrero –en referencia a la comparecencia conjunta de representantes kurdos y del Gobierno y que supuestamente explicitaba la existencia de una base de acuerdo para proceder a negociaciones– se incluía un punto que hacía referencia conjunta a soluciones y garantías legales para las cuestiones relativas a mujeres, cultura y ecología. Al mismo tiempo, el movimiento de mujeres tenía intención de trabajar desde perspectiva de género todas las cuestiones.

Tras el colapso del proceso negociador –con denegación de las autoridades a visitas a Öcalan a partir de abril y el reinicio de la guerra abierta en julio– se sucedieron

las peticiones de vuelta al diálogo de paz. Del lado kurdo, entre otras voces, el Congreso de Mujeres Libres (KJA, organización del movimiento de mujeres kurdas, con estatus legal como asociación desde mayo) hizo un llamamiento al reinicio inmediato de las negociaciones de paz en Turquía. En su llamamiento pusieron especial énfasis en que el proceso debe garantizar la seguridad y libertad del máximo líder del PKK, Abdullah Öcalan. Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil como Iniciativa de Mujeres por la Paz, plataforma independiente que agrupa a mujeres de diversos orígenes y ámbitos, incluyendo turcas y kurdas de ámbitos académicos y activistas, hicieron llamamientos al diálogo y organizaron actos durante el año de apoyo a una resolución pacífica del conflicto.

Por otra parte, en el marco del incremento de represión contra sectores activistas y civiles, se iniciaron procesos judiciales durante el año contra ayuntamientos kurdos. Además de por acusaciones relativas a apoyo a organización terrorista, entre otros, también se incluyen cargos contra el sistema de co-liderazgo. Desde hace años el movimiento kurdo promueve la co-representación de hombres y mujeres en todos los niveles, incluyendo en el partido político y ayuntamientos. Así, de manera informal –puesto que no está contemplado en la legislación turca–, han creado figuras de co-alcaldes y co-alcaldesas que ejercen en la práctica las funciones de alcaldía conjuntamente con el alcalde o alcaldesa legalmente electo, en el marco de la agenda política de promoción de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación.

4.3.3. Iniciativas de la sociedad civil

Durante 2015 tuvieron lugar múltiples iniciativas de construcción de paz llevadas a cabo por organizaciones de mujeres de la sociedad civil. Un estudio de la Fundación Badael, documentó el **trabajo de construcción de paz llevado a cabo por organizaciones de mujeres en el marco del conflicto armado en Siria**.³⁵ El estudio recogió el trabajo de 49 organizaciones, entrevistas a 35 activistas individuales y llevó a cabo grupos de discusión con 100 mujeres sirias en la mayor parte del territorio, aunque excluyó algunas zonas especialmente afectadas por la violencia como Homs, Hama y Raqqqa. El trabajo de estas organizaciones abarca desde el ámbito político (p.ej. promoviendo la introducción de la perspectiva de género en una futura Constitución siria u organizando audiencias con víctimas de la violencia sexual), los esfuerzos por la reducción de la violencia y la lucha contra el extremismo (trabajando en contra del reclutamiento de menores por los diferentes actores armados) y la promoción de la transformación noviolenta de los conflictos, entre otras cuestiones. La investigación documenta las condiciones de extrema dificultad que enfrentan las organizaciones de mujeres y

35. Razan Ghazzawi, Afra Mohammad y Oula Ramadan, "Peacebuilding Defines Our Future Now" A Study Of Women's Peace Activism In Syria. Badael Foundation, 2015.

las activistas para llevar a cabo sus actividades, aunque reconoce que existe una sociedad civil activa en contra de la violencia. En el informe se identificó la urgente necesidad de un alto el fuego inmediato e incondicional como primer requisito para un proceso que lleve a unas negociaciones que deriven en una solución política.

En mayo, una delegación de 30 activistas por la paz internacionales procedentes de 15 países y cientos de mujeres de **Corea del Norte y Corea del Sur**, llevaron a cabo una marcha en la zona desmilitarizada que separa a ambos países, Women Cross DMZ, para reclamar el fin formal de la guerra de Corea, la reunificación de las familias separadas por el conflicto y un papel de liderazgo de las mujeres en las negociaciones entre ambos países. La marcha, llevada a cabo en el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, estuvo integrada por activistas de todo el mundo, incluyendo a las premios Nobel de la Paz Leymah Gbowee y Mairead Maguire, entre otras destacadas mujeres, que cruzaron los 4km que conforman el límite territorial de la tregua que se alcanzó en 1953, aunque con algunas restricciones por parte del Gobierno de Corea del Sur. Entre las propuestas de las participantes de cara a dar un impulso a las negociaciones de paz entre ambos países, están el desminado de la zona desmilitarizada y la adhesión al tratado para la prohibición de las minas antipersona, así como el establecimiento de protocolos para permitir que delegaciones internacionales crucen la zona desmilitarizada en representación de la ciudadanía de ambos países. Las participantes apelaron a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir una mayor participación de mujeres en la resolución de este contencioso y alertaron sobre el impacto profundamente negativo de la militarización en las condiciones de vida de la población. La marcha recibió críticas por diferentes sectores sociales, que acusaron a las activistas de servir a los intereses de Corea del Norte.

La organización **Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)** celebró el centenario de su creación en 1915 durante la Primera Guerra Mundial con la organización de un congreso y una conferencia internacionales que reunieron a más de 1.000 mujeres activistas por la paz de todo el mundo. Bajo el lema *Women's Power to Stop War*, WILPF aprobó el manifiesto que orientará su trabajo por la paz en los

próximos años abogando por el desarme total mundial; sistemas económicos que brinden bienestar a todos los seres humanos y a otras formas de vida en planeta; organizaciones multilaterales capaces de mediar entre los países y garantizar el derecho internacional; gobernabilidad democrática del nivel local al global; sistemas sociales que no otorguen privilegios a personas o poblaciones de un determinado tipo físico, cultura o religión; el fin de la supremacía masculina y el respeto de los derechos de las mujeres y los derechos humanos.

4.3.4. Agenda internacional de igualdad de género

En el mes de marzo se celebró la sesión 59ª de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW59), que marcó el inicio de un año con numerosos encuentros y acontecimientos relacionados con la agenda internacional sobre equidad de género. En 2015 coincidieron la celebración del 20º aniversario de la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+20) –cuya revisión se hizo durante la CSW59–, con la revisión de la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y el impulso a una nueva agenda para el desarrollo sostenible con la conclusión del proceso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El balance de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil a la conclusión de la CSW59 fue negativo, apuntando a la preocupante falta de compromiso por parte de los Gobiernos con el avance real en la agenda internacional de equidad de género. La CSW59 finalizó sin que se hubiera aprobado ningún documento de resultados finales, únicamente una declaración política, que 1.000 organizaciones de mujeres de todo el mundo consideraron de perfil bajo, generalista, y con un lenguaje alejado de un enfoque de derechos humanos. Así pues, el contenido de la declaración política contrastaba notablemente con el fuerte peso que tuvo la equidad de género en un marco de derechos en la Plataforma de Acción de Beijing 20 años atrás. Algunas de las cuestiones de mayor importancia ausentes en la Declaración fueron los derechos sexuales y reproductivos, el impacto del cambio climático en las vidas de las mujeres, la situación de las mujeres defensoras de los derechos humanos o el papel determinante del movimiento feminista en los avances hacia la igualdad de género.

Cuadro 4.3. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿suficientes para la igualdad de género?

En el mes de septiembre Naciones Unidas adoptó la nueva agenda para el desarrollo que deberá substituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuyo plazo finalizó en 2015. La nueva agenda, conocida como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), está conformada por 17 objetivos que deberán ser alcanzados en los próximos 15 años. Cabe destacar que la agenda incluye un objetivo específicamente de género, “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, importante puesto que una de las principales debilidades de la agenda de los ODM fue que no se marcó explícitamente como objetivo la igualdad. Además, otros objetivos contienen referencias expresas a la igualdad o marcan metas que serán decisivas para lograr la plena igualdad. Las organizaciones de mujeres llevaron a cabo un intenso trabajo durante los años previos a la aprobación de la agenda para lograr que la dimensión de género tuviera una presencia significativa en el documento final, bajo la premisa de que es imposible lograr un desarrollo genuinamente sostenible sin lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres. Algunas de las metas más importantes en materia de igualdad que establece el documento final son la erradicación de todas las formas de discriminación, la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y las prácticas dañinas como el matrimonio forzado o la mutilación genital, el reconocimiento del trabajo no remunerado, la consecución de la plena participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades para el liderazgo o el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, entre otras cuestiones. Cabe destacar que tras la aprobación de la agenda de los ODS se llevó a cabo una conferencia de Naciones Unidas, “Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment: A Commitment to Action”, que reunió a diferentes Gobiernos con el objetivo de mostrar los compromisos específicos en materia de igualdad.

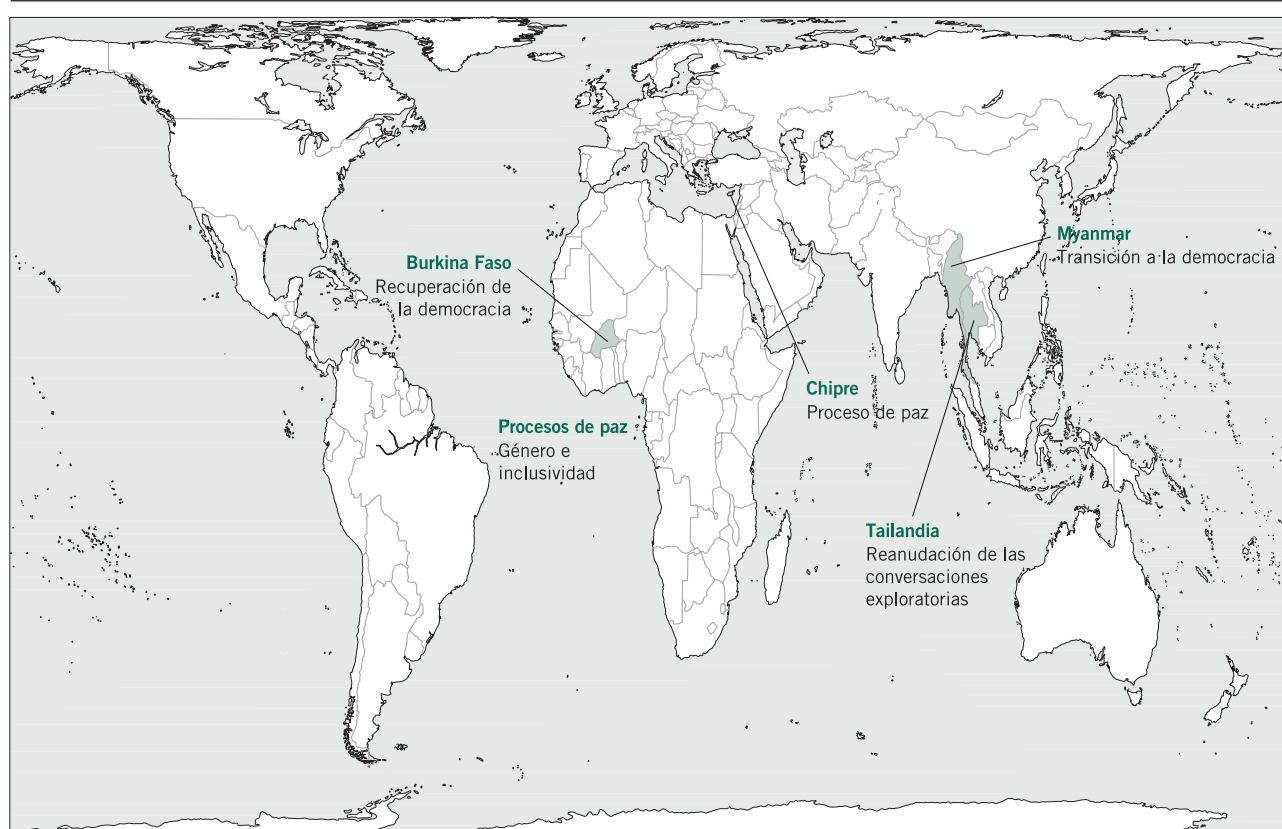
A pesar del reconocimiento de que el documento aprobado representa un avance importante con respecto a los ODM, diferentes plataformas de mujeres que han llevado a cabo un seguimiento cercano y un trabajo de incidencia a lo largo del proceso destacaron que el texto de los ODS sigue sin ser suficientemente ambicioso. La agenda no aborda con la suficiente contundencia la cuestión de la profunda desigualdad en la distribución de la riqueza a nivel mundial o el sistema comercial y financiero internacional, cuestiones que están en la raíz de las desigualdades planetarias y que tienen importantes derivadas en materia de desigualdad entre hombres y mujeres. Además, otorga un papel importante al sector privado sin abordar la responsabilidad de este sector en la generación de pobreza, exclusión y desigualdad en todo el mundo. En aspectos más concretos, la agenda de los ODS no aborda explícitamente los derechos de las personas LGTBI y deja de lado algunas discriminaciones como las resultantes como consecuencia de procesos migratorios. Por otra parte, algunas autoras pusieron énfasis en el hecho de que diferentes países incluyeran reservas con respecto a las metas relativas a la salud sexual y reproductiva (metas 3.7 y 5.6), lo que implica debilitar el texto, puesto que los Estados expresan reservas con respecto al cumplimiento de estas metas. Por otra parte, también se puso de manifiesto la debilidad de los mecanismos de implementación contemplados en el texto. Además, cabe destacar que en el objetivo 16, relativo a la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, no se hace ninguna alusión específica a la igualdad de género ni a la agenda internacional sobre mujeres, paz y seguridad, crucial para la construcción de la paz internacional, a pesar de las demandas específicas al respecto por las organizaciones de mujeres. Así pues, el balance final es desigual, puesto que si bien se ha avanzado en la visibilización del papel crucial e imprescindible que tiene la igualdad de género para el pleno desarrollo sostenible, los mecanismos adoptados no son lo suficientemente fuertes para lograrlo.

5. Oportunidades de paz para 2016

Tras el análisis del año 2015 en materia de conflictividad y construcción de paz, la Escola de Cultura de Pau de la UAB destaca en este capítulo cinco ámbitos que constituyen oportunidades de paz para el año 2016. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva y/o temas de la agenda internacional que pueden contribuir, a corto o medio plazo, a la construcción de la paz. Las oportunidades identificadas de cara a 2016 hacen referencia al reinicio de las negociaciones de paz en Chipre, a la nueva etapa política en Burkina Faso tras concluir el proceso de transición, a la exploración de escenarios de paz en Tailandia, al proceso de transición hacia la democracia y la paz en Myanmar y al positivo impacto de la introducción de la perspectiva de género en los procesos de paz en términos de inclusividad y sostenibilidad.

Todas estas oportunidades de paz requerirán del esfuerzo y compromiso real de las partes implicadas y, en su caso, del apoyo de actores internacionales para que las sinergias y factores positivos ya presentes conduzcan a la construcción de la paz. En este sentido, el análisis de la Escola de Cultura de Pau pretende ofrecer una visión realista de estos escenarios y temáticas, identificando los elementos positivos que alimentan las expectativas de cambio, pero poniendo de manifiesto también las dificultades que existen y que podrían suponer obstáculos para su materialización como oportunidades de paz.

Mapa 5.1. Oportunidades de paz para 2016



5.1. El reinicio de las negociaciones en Chipre: ¿El proceso de paz definitivo?

El año 2015 fue testigo del reinicio de las negociaciones formales de Chipre para la consecución de una solución al conflicto no resuelto de la división de la isla, territorio partido *de facto* desde la invasión militar de Turquía en 1974 en respuesta al derrocamiento del presidente chipriota Makarios en un golpe que pretendía la unificación con Grecia. En los últimos años, intentos de paz oficiados por la ONU no consiguieron resultados positivos, como el Plan Annan (2004), el Proceso Gambari (2006) el proceso iniciado en 2008 y otros acercamientos sucesivos. Tras un periodo de estancamiento de algo más de medio año, el proceso de diálogo se reanudó en mayo de 2015 con nuevos factores alentadores: liderazgo local plenamente comprometido con el proceso; apoyo claro de la comunidad internacional; relanzamiento del diálogo en un formato intenso orientado a la consecución de resultados y avances tangibles entre mayo y diciembre, incluyendo medidas de confianza significativas y acuerdos preliminares sobre temas de peso; y movilización de actores no gubernamentales de ambas comunidades de la isla. Al mismo tiempo, el conflicto no resuelto de Chipre tiene una larga historia de intentos de paz fallidos – incluyendo en la fase final de ratificación popular –, las partes mantienen diferencias profundas entre asuntos sustantivos y su dimensión internacionalizada lo sitúa en una posición sensible ante factores externos. La ventana de oportunidad es clara, lo que requiere de un proceso de acompañamiento sostenido y plenamente volcado, con el fin de superar obstáculos y aprovechar la coyuntura favorable.

El reinicio de las negociaciones en Chipre en 2015, de la mano de la voluntad de los líderes locales, iniciativas de actores no gubernamentales y una amplia batería de medidas de confianza, podría dar frutos sustantivos en 2016

Las interrupciones periódicas de las negociaciones en estos últimos años –parón entre finales de 2012 y febrero de 2014 a causa de la crisis económica en la isla y por la influencia de la presidencia de turno de la UE ostentada por Chipre; así como entre octubre de 2014 y mayo de 2015– dieron paso finalmente en mayo al reinicio formal del proceso de paz. En esta reanudación influyó la decisión de ambas partes, así como de Turquía, de paralizar las medidas unilaterales de exploración de reservas de hidrocarburos en el Mediterráneo. A partir de ahí, y en un contexto en que la ONU constató la existencia de condiciones adecuadas para el diálogo, se puso en marcha de nuevo el proceso negociador en línea con la declaración conjunta de febrero de 2014, de siete puntos (constatación de que el *status quo* es inaceptable; determinación de los líderes de reanudar negociaciones estructuradas y orientadas a resultados, y en que todos los temas no resueltos estarán en la mesa negociadora, serán abordados de manera independiente, con el fin de alcanzar un acuerdo lo antes posible; admisión de que la resolución del conflicto está basada en un Chipre unido, con modelo de federación bicomunal y bizonal y

con igualdad política, ciudadanía única y personalidad legal internacional única; requerimiento de aprobación de la solución en referéndums simultáneos separados; el principio de que nada está acordado hasta que todo está acordado; plenos poderes para las personas negociadoras y posibilidad de que los líderes de ambas comunidades se reúnan cuantas veces sea necesario; y compromiso de las partes con la creación de un clima positivo). En esta decisión de reinicio del diálogo sobre una base consensuada, confluyeron además diversos factores que refuerzan las perspectivas de un proceso sostenible.

En primer lugar, cabe destacar el compromiso con el proceso por parte del liderazgo local, tanto del líder grecochipriota, Nicos Anastasiades, como el nuevo líder turcochipriota, Mustafa Akıncı, elegido en segunda ronda en los comicios turcochipriotas de abril de 2015.

En su etapa como alcalde de la parte turca de Nicosia entre 1976 y 1990, Akıncı fue impulsor de proyectos de colaboración entre las dos comunidades de la isla. La voluntad de ambos se plasmó desde el comienzo, a través del compromiso con un proceso intenso y la puesta en marcha desde el inicio del proceso de medidas significativas. Entre las primeras acciones, destacó el paseo simbólico de ambos mandatarios por el casco antiguo de las partes grecochipriota y turcochipriota de Nicosia, durante el cual enfatizaron su compromiso de alcanzar una solución y de visión conjunta para un Chipre unido. En un formato negociador como el de Chipre –basado en el liderazgo político y sus equipos negociadores–, la existencia de voluntad clara a ese nivel y su simbología es clave para el proceso. Al mismo tiempo, conviene señalar que Chipre celebrará elecciones parlamentarias en mayo de 2016, lo que podría influir en el ambiente político, si bien Anastasiades –elegido en febrero de 2013– tiene por delante dos años más de mandato y una posible renovación. En todo caso, y para prevenir posibles influencias negativas de la campaña electoral, el presidente Anastasiades señaló, por ejemplo, que no sería posible organizar un referéndum sobre la solución pocos meses antes de la cita electoral.

Otro factor que fortalece el nuevo proceso electoral es el acompañamiento internacional, tanto a través del papel mediador de la ONU, como del apoyo explícito mostrado por actores internacionales con implicaciones en el conflicto, como Grecia y Turquía –referentes, respectivamente, de la comunidad grecochipriota y de la turcochipriota, y con presencia militar en la isla por parte de Turquía. El nuevo asesor especial del secretario general de la ONU sobre Chipre, el diplomático noruego Espen Barth Eide, designado en agosto de 2014 para ese cargo, ha desempeñado un papel destacado en el reimpulso del proceso. En relación al apoyo de países

relevantes en el conflicto chipriota, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, y su homólogo griego, Alexis Tsipras, han mantenido contacto telefónico de manera regular en torno a diversas cuestiones, incluido el conflicto chipriota, y tras una visita de Tsipras a Turquía en noviembre de 2015, ambos líderes afirmaron que existía una ventana de oportunidad. Según Davutoglu, existía una aproximación común con Grecia con el fin de apoyar las negociaciones de Chipre. También otros actores internacionales, como la UE, han mostrado su apoyo al reimpulso al diálogo. En el marco del proceso, los líderes políticos de Chipre han dado relevancia a que el acuerdo final integre los principios de la UE y el grupo de trabajo sobre cuestiones de la UE se reunió durante la segunda mitad del año para abordar la incorporación del acervo comunitario en la isla. A su vez, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, visitó Chipre en julio en señal de compromiso con el proceso. A su vez, EEUU y Reino Unido también expresaron su confianza en que el proceso avance.

Por otra parte, desde su reinicio en mayo, el proceso negociador avanzó con un ritmo intenso y un amplio despliegue de medidas de confianza y resultados preliminares. Así, durante 2015 se produjeron numerosas rondas a nivel presidencial y de equipos negociadores así como de niveles inferiores técnicos. En señal de compromiso real, se pusieron en marcha medidas de confianza desde el inicio. Entre ellas, ya en la reunión conjunta previa al reinicio de las negociaciones formales, Anastasiades facilitó información de coordenadas de campos de minas instaladas por la Guardia Nacional chipriota antes de 1974 y Akıncı anunció que se anulaba el requisito de formularios administrativos en los puntos de paso para entrar en la zona turcochipriota. Otras medidas acordadas en mayo incluyeron el compromiso de cooperación para la apertura de nuevos puntos de paso, medidas prácticas para avanzar hacia la interconexión de la red eléctrica, inicio de discusiones y propuestas para la interoperabilidad de la telefonía móvil, prevención de interferencias radiofónicas, y establecimiento de un comité sobre la igualdad de género, así como otro de cultura. A su vez, como parte de la evolución de las discusiones en el proceso negociador, las partes alcanzaron un acuerdo en julio para el respeto a los derechos individuales de propiedad y la creación de una Comisión sobre la Propiedad, con el mandato de resolver reclamaciones bajo criterios acordados y con la participación igualitaria de miembros grecochipriotas y turcochipriotas. Se trata de un tema

Actores internacionales, como la ONU, la UE y actores regionales clave como Turquía y Grecia, han dado su apoyo a la nueva fase del proceso de paz en Chipre

sustantivo del proceso. Según el asesor de la ONU, habrá diferentes alternativas para la regulación del derecho de propiedad, con diversas opciones para que las personas desposeídas a consecuencia del conflicto reclamen sus propiedades. No obstante, durante el año se hicieron evidentes las dificultades en torno a ese y otros temas, y en septiembre las partes reconocían que quedaba por delante un arduo trabajo. Al mismo tiempo, la continuación del proceso hasta finales de año y nuevos acercamiento en diversas áreas continuaban apuntando a la posibilidad de lograr avances hacia una solución definitiva. Así, entre esos otros pasos, se acordó la creación de un Comité Técnico sobre Educación dirigido a promover medidas de confianza en el ámbito educativo y buenas prácticas en educación para la paz, medida acordada tras incidentes en que escolares grecochipriotas atacaron vehículos turcochipriotas en la capital en noviembre.

Otro factor que ha acompañado el proces, y que ha contribuido a crear un clima social más favorable a una salida negociada, es la movilización de actores locales no gubernamentales, incluyendo líderes religiosos, actores económicos, organizaciones de mujeres, actores del ámbito del deporte, entre otros. Se trata de un factor que pese a no ser novedoso ha continuado en el tiempo, ampliando apoyos sociales a una solución y erosionando líneas divisorias. Así, por ejemplo, Anastasiades y Akıncı se reunieron en septiembre con los líderes religiosos de la iglesia ortodoxa cristiana, armenia, maronita y católica y con el líder musulmán turcochipriota (Gran Mufti). En cambio, y pese al peso de las mujeres en movilizaciones de paz en Chipre, se continuó denunciando que las negociaciones carecían de perspectiva de género. Así, pese al anuncio en mayo sobre la creación de un comité sobre igualdad de género, apenas trascendió información sobre su alcance y actividades.

En definitiva, en su conjunto se da un cúmulo de factores y condiciones favorables a un proceso negociador que puede ser el definitivo para la consecución de una solución negociada en Chipre. Al mismo tiempo, la experiencia acumulada de fracasos anteriores recuerda que los temas divisorios son complejos y los desacuerdos sustantivos y que los acuerdos entre las élites negociadores no siempre obtienen después el respaldo de la población si ésta no es incluida a lo largo de todo el proceso. Se requieren, por tanto, grandes esfuerzos para que el 2016 sea un año decisivo para la transformación del conflicto en Chipre.

5.2. Nueva era política en Burkina Faso tras concluir la etapa de transición

El 29 de noviembre de 2015 Burkina Faso celebró sus primeras elecciones presidenciales y parlamentarias luego de la caída del régimen de Blaise Compaoré. Los comicios, que han supuesto el cierre de la etapa del Gobierno de transición en el país, han devuelto al pueblo burkinés el control de las instituciones políticas tras 18 meses, abriendo una nueva etapa democrática. Las elecciones han tenido una importante repercusión histórica, ya que representan los primeros comicios abiertos en décadas, siendo las primeras después de 27 años en las cuales no aparece el nombre de Compaoré en las papeletas, y sobre todo, porque el nuevo presidente entrante se ha convertido en el primer civil elegido como jefe de Estado en cincuenta años. Todo ello está representando para la sociedad burkinesa el comienzo de un nuevo periodo democrático, en el cual la retirada del Ejército de la vida política será uno de los elementos centrales que permitan consolidar la nueva era.

La celebración de las elecciones presidenciales y legislativas representaban el último paso del periodo de transición abierto en el país tras la caída del régimen de Compaoré, producido el 31 de octubre de 2014 después de 37 años en el poder, gracias a una histórica insurrección del pueblo burkinés contra el intento de reformar la Constitución para optar a una nueva reelección presidencial. La Constitución impedía a Compaoré ser reelegido nuevamente, ya que en ella se estipulaba que el presidente del país únicamente podía ser elegido en dos periodos presidenciales de cinco años cada uno, período que el presidente ya había cumplido. Las revueltas populares que dieron pie a la caída del régimen evitaron la aprobación de la reforma constitucional y supusieron la apertura de un proceso de transición bajo liderazgo civil –aunque con presencia del Ejército–, que contempló el nombramiento de un presidente civil interino, Michel Kafando, así como la celebración de elecciones presidenciales y legislativas tras un año de transición –entre otras medidas–. En un inicio las elecciones que debían culminar la etapa transicional, estaban previstas para desarrollarse durante el mes de octubre de 2015, sin embargo, el golpe de Estado del 16 de septiembre –el sexto en la historia del país desde que obtuviese su independencia– por el Regimiento de Seguridad Presidencial (RSP) –un cuerpo de élite creado bajo el régimen de Compaoré compuesto por alrededor de 1.200 efectivos militares–, disolvió las instituciones y el Gobierno de transición y obligó a retrasar los comicios. El general Gilbert Diendéré –

El nuevo escenario político nacional en Burkina Faso caracterizado por una mayor pluralidad, representa el fin del sistema de dominio de partido único de Estado, abriendo un nuevo marco político para la consolidación de la democracia

quien había sido la mano derecha de Compaoré durante su régimen– asumió el poder poniendo en riesgo la continuidad de la transición abierta en el país. Sin embargo, nuevamente la sociedad civil burkinesa, encabezada por el movimiento ciudadano Balai Citoyen, volvió a tomar las calles para defender la transición. La presión ciudadana y las reacciones de la comunidad internacional frente al golpe –organismos como la ONU, UA, CEDEAO, Francia y EEUU, entre otros, condenaron la nueva desestabilización del país–, obligó a los golpistas a desistir de sus intenciones y a entregar nuevamente el poder a las autoridades de transición. El Gobierno fue restaurado días después del golpe, e inmediatamente acordó la disolución de la RSP, su desarme, la detención de los responsables, así como un nuevo calendario para la celebración de los comicios.

Sin lugar a dudas, este acontecimiento significó la mayor amenaza que vivió el país a lo largo de los 18 meses de transición, proceso que estuvo marcado por otros importantes obstáculos, sobre todo vinculados a la suspensión realizada al partido de Compaoré, el Congreso por la Democracia y el Progreso (CDP), y otras fuerzas y movimientos afines al antiguo régimen, a los cuales se les impidió participar en la vida política así como a presentarse a las elecciones. La nueva ley electoral emitida por las autoridades de la transición, prohibió a los miembros afines al depuesto Compaoré poder presentarse a las elecciones, lo cual incrementó las tensiones en el país. En este escenario, las elecciones presidenciales y legislativas se presentaban como el cierre definitivo de la etapa del régimen anterior y el inicio de un nuevo periodo en la historia del país.

El 29 de noviembre, el pueblo burkinés eligió como nuevo presidente –con un 60% de participación del censo electoral– a Roch Marc Christian Kaboré, candidato del partido Movimiento Popular para el Progreso (MPP),¹ quien se impuso en la primera vuelta con el 53,49% de los votos a Zéphirin Diabré, de Unión para el Progreso y el Cambio (UPC), que obtuvo el 29,65%. En las legislativas –donde concurrieron la histórica cifra de 99 diferentes partidos políticos– los resultados estuvieron mucho más repartidos, no obteniendo ningún partido político la mayoría absoluta,² lo cual obliga a generar coaliciones y pactos para gobernar, incrementando la pluralidad del sistema político del país, aunque también sienta las bases de la fragilidad del nuevo Gobierno. Las elecciones fueron

1. El partido Movimiento Popular para el Progreso (MPP) fue creado por Kaboré luego de su ruptura con el entonces partido hegemónico de Compaoré, el CDP, en enero de 2014, debido al intento de reforma constitucional para posibilitar una nueva reelección del presidente. El MPP se caracteriza por ser un partido de centroizquierda, aunque en sus filas incluye a muchos ex miembros del CDP.

2. El partido de Kaboré (MPP) obtuvo 55 de los 127; el UPC de Diabré 33 escaños; los partidarios del régimen anterior lograron 18 escaños; el partido sankarista (UNIR/PS) 5 escaños.

declaradas por los diferentes organismos de observación –nacionales e internacionales–, como libres, limpias, transparentes, pacíficas y válidas, y todas las fuerzas políticas participantes reconocieron sus resultados. Ello representa, sin duda, un paso adelante en la historia nacional burkinesa, ya que anteriormente, durante el régimen de Compaoré, los partidos opositores frecuentemente boicoteaban los comicios y no reconocían sus resultados.

La victoria del MPP de Kaboré, si bien abre un nuevo camino en la historia de Burkina Faso, ha generado en diferentes analistas incertezas sobre la capacidad de ruptura con el régimen anterior, debido a que el MPP y su candidato Kaboré emergen del anterior partido de gobierno, el CDP. Kaboré ocupó los cargos durante la etapa de Compaoré, de primer ministro, presidente de la Asamblea Nacional y presidente del partido CDP. Sin embargo, el nuevo presidente electo había renunciado a sus cargos en oposición al intento de reforma constitucional para alterar los límites del mandato presidencial, uniéndose a la oposición y a las movilizaciones populares que precipitaron la caída del régimen. Este pasado genera dudas sobre las capacidades del MPP de romper con la vieja política, sin embargo, el escenario resultante de la elecciones, caracterizado por una mayor pluralidad de fuerzas políticas nacionales que obliga a los partidos a dialogar, representa para Burkina Faso una política más competitiva y el fin del sistema de dominio de partido único de Estado, hechos que hacen que el marco con el cual se cierra la transición sea propicio para romper con los resquicios del antiguo régimen.

En esta nueva etapa que empieza el país seguirá siendo fundamental para el control de las instituciones y la consolidación de la democracia la fortaleza del movimiento ciudadano, que ha mostrado con creces su capacidad de articulación y movilización. Acontecimientos como las movilizaciones que lograron precipitar la caída del régimen de Compaoré o la resistencia civil frente al golpe de Estado de la guardia presidencial –contribuyendo a su fracaso–, han puesto de manifiesto las capacidades de la sociedad civil del país,

que sin duda seguirán jugando un papel fundamental como garantes de la nueva política nacional.

Por otro lado, la reforma del sector de seguridad, sobre todo en lo concerniente a las Fuerzas Armadas, cuya comisión encargada ya fue establecida por el Gobierno interino de Michel Kafando, se presenta a su vez crucial para relegar de manera definitiva al Ejército del control del aparato político nacional. En junio de 2016 la comisión encargada deberá presentar la propuesta de reforma, que incluya la prohibición permanente sobre la participación de los militares en la política así como propuestas para el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y de buen gobierno del aparato castrense. En este apartado, la disolución de la guardia presidencial ha significado un gran paso para la estabilidad nacional, aunque falta por ver la capacidad del Estado para recolocar a los miembros de este cuerpo en otros estamentos castrenses y evitar que vuelvan a representar un factor de inestabilidad para el país.

Al respecto cabe resaltar, y en clave de principales factores de riesgo a considerar en la nueva etapa burkinesa, la detención y posteriores procesos judiciales abiertos contra el general Diendéré, líder del RSP, acusado por el tribunal militar de ser el responsable directo del golpe de Estado –con cargos de alta traición– así como co-responsable junto con otras diez personas, de la muerte del ex presidente Thomas Sankara, casos que sin duda pueden abrir viejas heridas y representar inestabilidad para el país. Por otro lado, otro factor que puede incidir negativamente en la estabilidad nacional, lo representa la desestabilización regional, marcada por los conflictos armados en Malí y Nigeria, y el impacto que éstos puedan tener en las fronteras nacionales.

Aun existiendo algunos factores de riesgo que pueden desestabilizar la consolidación de la democracia en el país, las perspectivas que ha abierto el cierre del periodo transicional, aunadas a la fortaleza de una sociedad civil que ha dado buena muestra de su papel como garante de la democracia, están generando en la sociedad burkinesa grandes esperanzas en el nuevo periodo político que empieza.

La reforma del sector de seguridad edn Burkina Faso se presenta crucial para relegar de una vez por todas al Ejército del control del aparato político nacional

5.3. La exploración de escenarios de paz en el sur de Tailandia

Durante el 2015 se reanudaron, con la facilitación del Gobierno de Malasia, los contactos y las conversaciones exploratorias entre Bangkok y las principales organizaciones insurgentes que operan en las provincias sureñas de mayoría musulmana con el objetivo de reivindicar la independencia, autodeterminación o singularidad cultural y religiosa de la región que anteriormente había sido el sultanato de Patani. Estas conversaciones exploratorias son las primeras que se producen tras el colapso del último proceso de diálogo a finales del 2013 y tras el golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas de mayo de 2014. Las perspectivas de lograr un acuerdo a corto plazo parecen sumamente improbables, principalmente por la negativa tajante de la Junta Militar a asumir las principales demandas sustantivas de los grupos insurgentes, por las dudas expresadas por el más importante de los grupos armados en el sur a entablar negociaciones con el Gobierno, y por el carácter transitorio de la actual Junta Militar, que en principio debería ser disuelta tras la aprobación de una nueva Constitución y la celebración de elecciones en una fecha aún por determinar. Sin embargo, a pesar de las dificultades que experimentan las conversaciones y del escepticismo que han expresado algunos analistas acerca del futuro del actual proceso de diálogo, existen algunos motivos para pensar que durante el 2016 ambas partes pueden avanzar sustancialmente en la comprensión de sus respectivas demandas, en la identificación de aspectos compartidos y en la generación de confianza mutua. En definitiva, a la espera de unas mejores circunstancias políticas, las actuales conversaciones exploratorias podrían sentar las bases de un proceso de negociación formal para resolver o canalizar el conflicto armado, actualmente uno de los más virulentos de todo el Sudeste Asiático.

Uno de los aspectos que genera mayor optimismo respecto de las perspectivas del actual proceso de diálogo es que en el año 2015 se cumplieron parcial o totalmente las tres condiciones que en diciembre de 2014 acordaron los primeros ministros de Tailandia, Prayuth Chan-ocha, y de Malasia, Najib Razak, para el inicio de un proceso de paz: una reducción sustancial de la violencia antes del inicio de las negociaciones; la inclusión de todos los grupos armados que operan en el sur de Tailandia; y la presentación de demandas comunes o unificadas por parte de las organizaciones insurgentes. Respecto del primer punto, tanto el Gobierno como varios centros de investigación han constatado una notable reducción de la violencia en las tres provincias meridionales de mayoría musulmana durante el año 2015. Bangkok incluso ha señalado que ésta se ha reducido aproximadamente a la mitad. Los motivos de esta disminución son variados y seguramente incluyen, como sostiene el Gobierno, una

mayor eficacia de los cuerpos de seguridad del Estado y una mayor colaboración de la ciudadanía en las operaciones de contrainsurgencia, pero tampoco habría que descartar que las cúpulas de las organizaciones armadas hubieran decidido rebajar la intensidad de su lucha armada como gesto de buena voluntad y como demostración de su capacidad de influencia sobre los combatientes en el terreno. Cabe señalar que uno de los principales motivos para el colapso del último proceso de paz fue la incapacidad del grupo armado presente en la mesa de negociación, el BRN, de demostrar una ascendencia y control real sobre los combatientes en el terreno y de lograr una reducción de la violencia durante el Ramadán de 2013.

En 2015 se cumplieron parcial o totalmente las tres condiciones que acordaron los Gobiernos de Tailandia y Malasia para el inicio de un proceso de paz: una reducción sustancial de la violencia antes del inicio de las negociaciones; la inclusión de todos los grupos armados que operan en el sur de Tailandia; y la presentación de demandas comunes o unificadas por parte de las organizaciones insurgentes

Respecto de los otros dos principios acordados por los Gobiernos de Tailandia y Malasia –la inclusión de todos los grupos armados en las conversaciones de paz y la presentación de demandas unificadas– en 2015 se creó una organización paraguas, denominada Mara Patani (Majilis Sura Patani, o Consejo Consultivo de Patani), que agrupa a los seis grupos armados que operan en el sur del país: el BRN, el GMIP, el BIPP y tres facciones de PULO. Durante su presentación en el mes de agosto, los representantes de Mara Patani declararon su intención de utilizar el diálogo y otros cauces pacíficos para conseguir el fin del conflicto y lograr una solución basada en el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo de Patani. Asimismo, señalaron que su demanda de mínimos pasaba por la formación de una región autónoma con competencias en materia fiscal, de seguridad local y de gestión de recursos naturales, con reconocimiento oficial de la lengua malaya y el alfabeto jawi, aplicación de la sharia a la población islámica e introducción del sistema islámico de educación. Además, Mara Patani también planteó

tres precondiciones al diálogo: garantías de seguridad e inmunidad para sus negociadores; reconocimiento de Mara Patani como legítima representante de las mencionadas seis organizaciones armadas; y reconocimiento oficial por parte del Gobierno y el Parlamento de que el proceso de paz forma parte de la agenda nacional y es una política de Estado, independientemente de los cambios de Gobierno que pudieran producirse en el futuro. Más allá de la cohesión interna de Mara Patani y de la voluntad del Gobierno de asumir alguna de sus propuestas o condiciones, varios analistas pusieron en valor la importancia de haber logrado esta plataforma común entre organizaciones insurgentes con trayectorias, composiciones y objetivos dispares tras muchos meses de reuniones discretas y la participación decisiva del Gobierno de Malasia, que históricamente había tenido ascendencia sobre algunos de estos grupos insurgentes.

Otro de los aspectos positivos que algunos analistas han destacado es que la Junta Militar reconoció en varias ocasiones durante el año que las estrategias contrainsurgentes que ha practicado el Estado desde el año 2004, fecha de reinicio del conflicto armado, han sido equivocadas o insuficientes, de modo que la única opción para poner fin al conflicto o reducir sustancialmente la violencia era a través del diálogo y la cooperación entre el Estado, los grupos insurgentes y la población civil. Este reconocimiento del diálogo como una estrategia más (aunque no exclusiva) para canalizar el conflicto armado por parte de la Junta militar es aún más relevante si se tiene en cuenta que anteriores procesos de negociación, y en particular el que transcurrió en 2013 bajo Gobierno de Yingluck Shinawatra, contaron con la férrea oposición de las Fuerzas Armadas y de las principales instituciones de seguridad del país. Así, el hecho de que sea precisamente una Junta Militar la que impulse un proceso de diálogo reduce sustancialmente las posibilidades de que el boicot por parte de determinados sectores del Estado debilite o bloquee las conversaciones de paz. En este sentido, algunos informes han destacado que el actual panel negociador gubernamental, liderado por el ex general Aksara Kerdphol, es mucho más coherente y cohesionado que el del anterior Gobierno. De igual modo, el hecho de que tras 12 años de lucha armada el movimiento insurgente no haya obtenido ni una sola concesión significativa por parte del Estado habría provocado entre determinados sectores un cierto desánimo y a la vez incentivado una mirada más posibilista y pragmática entre algunos dirigentes insurgentes.

A pesar de todos estos aspectos positivos, numerosos informes han puesto en duda las posibilidades de éxito del actual proceso negociador por la falta de voluntad política de ambas partes y por las circunstancias políticas y sociales que atraviesa Tailandia. Bangkok ha rechazado categóricamente y en varias ocasiones el núcleo fundamental de las demandas del movimiento insurgente: desde el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo patani hasta la concesión de autonomía o incluso descentralización administrativa para las provincias sureñas de mayoría musulmana. Además, también se ha mostrado reacio a aceptar algunas de las condiciones procedimentales planteadas por Mara Patani, como su reconocimiento formal como interlocutor, la inclusión del proceso de paz en la agenda nacional o la aceptación de observadores internacionales. Respecto de este último punto, los sucesivos Gobiernos tailandeses siempre han considerado el conflicto en el sur del país como un tema estrictamente interno y han sido reacios a cualquier tipo de internacionalización de la resolución de la disputa. En este sentido, fuentes periodísticas revelaron que el Gobierno es incluso temeroso de que Mara Patani, presentándose como una coordinadora de grupos insurgentes, logre una visibilidad y relevancia internacionales que Bangkok no desea. Por tanto, según algunos analistas, el actual Gobierno es preso de su propio nacionalismo y visión unitarista y homogénea del país y, en consecuencia, no puede ofrecer nada que

pueda ser atractivo para los grupos insurgentes. Según estas visiones, Bangkok estaría tratando de atraer al movimiento insurgente a la mesa de negociación con el objetivo de conseguir una reducción o eliminación de la violencia (de aquí su insistencia en acordar zonas de seguridad o libres de violencia con los grupos armados) o bien lograr su rendición o desmovilización sin apenas coste político alguno.

Desde el punto de vista de la insurgencia, el principal escollo del actual proceso es que parece no estar clara la posición del principal grupo armado en el sur del país, el BRN, respecto del proceso de paz. Oficialmente forma parte de Mara Patani (de hecho, el presidente de dicha organización es miembro del BRN), pero poco después de la presentación pública de esta plataforma unitaria varios representantes del BRN emitieron un comunicado en el que criticaban duramente al Gobierno por falta de voluntad política y en el que afirmaban claramente no participar de las negociaciones. Según algunas fuentes, un núcleo dirigente importante dentro de BRN es reacio al actual proceso de paz y es partidario de retomar las negociaciones con un Gobierno electo que no esté sujeto a la interinidad de la actual Junta Militar y que no se oponga tan claramente como el actual Ejecutivo a algunas formas de autonomía o descentralización. Sea como sea, no está claro si las declaraciones contrapuestas respecto del proceso de paz emitidas por miembros distintos del BRN reflejan un cierto faccionalismo interno dentro del grupo o bien es una estrategia del BRN para mantener el control de Mara Patani y a la vez poner presión sobre la Junta Militar. En cualquier caso, parece fuera de toda duda que la posición del BRN acabará siendo determinante para el futuro de la región por ser el grupo responsable de la inmensa mayoría de actos de violencia cometidos por la insurgencia. Según algunas fuentes, el resto de grupos de Mara Patani apenas tienen incidencia en la violencia en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat y participarían en la mesa de negociación para tratar de obtener determinadas contrapartidas.

En resumen, las dificultades que enfrenta el proceso de diálogo son tan considerables que resulta improbable que se produzca un acuerdo de paz (o incluso un acercamiento de posturas en cuanto a los contenidos) a corto plazo. Sin embargo, tanto el Gobierno como Mara Patani han declarado en varias ocasiones su compromiso hacia el proceso negociador y en ningún momento del año, ni siquiera ante actos de violencia de envergadura, se han interrumpido los contactos. Los numerosos encuentros discretos que se produjeron durante el 2015 desembocaron a finales de año en una propuesta del Gobierno de conformar un grupo de trabajo conjunto –con participación de organizaciones de la sociedad civil– para abordar paralelamente temas de seguridad, desarrollo y justicia. Teniendo en cuenta la polarización social y política que ha sufrido Tailandia desde principios del siglo XXI y la intensidad del conflicto armado desde el año 2004, cualquier intento de diálogo debería considerarse como un aspecto positivo en la resolución de un conflicto armado que parece improbable que pueda solucionarse a través de cauces militares.

5.4. La transición a la democracia y la paz en Myanmar

Desde que en el año 2011 Myanmar emprendiera la senda de la transformación política y la transición hacia la democracia tras la disolución de la Junta Militar y la conformación de un Gobierno de carácter civil, el país ha experimentado cambios importantes. Si bien quedan numerosos retos pendientes en materia de respeto a los derechos humanos, seguridad y democracia, 2015 ha sido un año de acontecimientos cruciales para la profundización de esta transición, especialmente la celebración de elecciones generales en el mes de noviembre y la firma del acuerdo de alto el fuego con diversos grupos insurgentes en octubre.

Las elecciones otorgaron una abrumadora mayoría al principal partido de la oposición, la NLD liderada por Aung San Suu Kyi. La NLD obtuvo el 79% de los escaños electos en unas elecciones en las que los incidentes tuvieron un carácter menor, teniendo en cuenta las condiciones del país. Incluso sumando el 25% de los escaños reservados al Ejército, la NLD mantiene la mayoría, lo que le permitirá legislar y, al mismo tiempo, designar a dos de los tres candidatos presidenciales y elegir al futuro presidente del país. Este resultado, que ha sido aceptado sin reticencias por el Gobierno actual, permite identificar una importante oportunidad para la consolidación de la democracia en el país en un futuro cercano, aunque no exenta de riesgos e incertezas, en un contexto plagado de dificultades políticas y de seguridad.³ Las elecciones fueron consideradas creíbles por los observadores y, aunque se produjeron algunos incidentes, en general fueron calificadas como justas y transparentes.

El Gobierno que finalmente resulte de estas elecciones, y que se formará en marzo será el primero elegido por las urnas y formado sin la tutela militar directa o indirecta de las últimas cinco décadas. La líder Aung San Suu Kyi, que no podrá ser la presidenta del país puesto que la Constitución impide que alguien con hijos extranjeros detente este cargo, ha invitado al jefe de las Fuerzas Armadas, al actual presidente y al portavoz del Parlamento a iniciar un diálogo sobre un futuro Gobierno de reconciliación nacional. La capacidad de la NLD, y particularmente de su líder para gestionar las relaciones con los representantes del antiguo régimen será un factor clave para el eventual éxito de la transición, puesto que las Fuerzas Armadas retienen importantes dosis de poder en el país. A los escaños directamente reservados para el estamento militar se une la provisión constitucional que asigna la gestión de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos al Ejército, carteras cruciales en un país como Myanmar. Así pues, de la habilidad para tejer un diálogo constructivo dependerá en gran parte

la posibilidad de que la NLD pueda consolidar su poder y garantizar la sostenibilidad de la transición y de los cambios políticos e institucionales que puedan tener lugar. Uno de los temas centrales del debate político del país seguirá siendo la cuestión de la reforma Constitucional, de máxima prioridad para la NLD. En la actualidad el Ejército tiene capacidad efectiva de veto de cualquier reforma, así que cualquier paso que quiera darse en este sentido tendrá que pasar necesariamente por un pacto con los militares. Sin lugar a dudas las negociaciones serán complejas y el juego de equilibrio entre transformación y sostenibilidad requerirá de la mayor habilidad negociadora. La NLD deberá tratar de poner en valor la legitimidad que las urnas le han otorgado, pero debilitar el poder del hasta ahora casi omnipotente estamento militar no será un reto fácil. Sin una profunda transformación de las Fuerzas Armadas difícilmente podrá consolidarse la democracia en Myanmar.

Las elecciones han puesto de manifiesto el elevado apoyo popular que tiene la NLD y el rechazo mayoritario al actual Gobierno. Así pues, la NLD cuenta con una enorme legitimidad para su acción política. Sin embargo, las expectativas que se han creado en torno a su victoria y su capacidad para transformar la realidad política y social del país pueden derivar en una enorme frustración, puesto que las limitaciones existentes son enormes y difícilmente podrán ser superadas en el corto plazo. Así pues, la NLD tendrá que gestionar estas expectativas para que el apoyo masivo no derive en un descontento social generalizado que ponga en peligro su acción de Gobierno. Por otra parte, la gestión de la tensión en torno a la situación de la población rohingya será otra de las cuestiones cruciales a las que deberá hacer frente y una prueba de fuego para la calidad democrática del país.

En paralelo a las elecciones y al proceso político, en el mes de octubre se produjo la firma de un acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y ocho grupos armados insurgentes de adscripción étnica –KNU, KNLA-PC, DKBA, Pa-O NLO, CNF, ALP, ABSDF y RCS/SSA–. El proceso para lograr el fin del conflicto armado en Myanmar se había iniciado en el año 2011, con la firma de acuerdos de alto el fuego de carácter bilateral entre el Ejecutivo y 14 grupos armados entre 2011 y 2013. El acuerdo logrado en 2015 fue fruto de un largo proceso negociador que había incluido a 15 grupos armados, aunque finalmente siete quedaron fuera de la firma. Como han señalado algunas voces, si bien el acuerdo está lejos de ser óptimo, allana el camino a un acuerdo político mucho más amplio.⁴ El proceso

En 2015 Aung San Suu Kyi obtuvo la victoria en las urnas en Myanmar y se logró la firma de acuerdo de alto el fuego con ocho grupos insurgentes

3. International Crisis Group, *The Myanmar Elections: Results and Implications*, Asia Briefing N°147, 9 de diciembre de 2015; Transnational Institute, "The 2015 General Election: A New Beginning?" *Transnational Institute*, 4 de diciembre de 2015.

4. International Crisis Group, *Myanmar's Peace Process: A Nationwide Ceasefire Remains Elusive*, Asia Briefing N°146, 16 de septiembre de 2015; Horsey, Richard, "The Importance of the Myanmar Peace Deal", *In Pursuit of Peace*, International Crisis Group, 16 de octubre de 2015.

negociador y el acuerdo de alto el fuego firmado han servido para fortalecer la agenda de la paz en el país, dar mayor visibilidad y legitimidad a los actores étnicos y romper algunos tabúes como la organización territorial del país y el reconocimiento a las minorías. El hecho de que se consiguiera su firma antes de la celebración de las elecciones fue un logro importante, ya que de lo contrario los riesgos se incrementaban notablemente, puesto que la formación del nuevo Gobierno resultante de las elecciones implicaría por una parte un retraso en la firma y, por otro, riesgos añadidos al producirse un cambio en la interlocución directa. De hecho, el texto del acuerdo alcanzado fue aceptado por todos los grupos que participaron en las negociaciones, incluso por los que finalmente no se adhirieron, y la única cuestión que quedó sin acordar fue la de qué grupos podían firmarlo. Otro de los puntos que ha sido identificado como fortaleza en el marco de este proceso es el carácter nacional e interno, ya que la presencia y apoyo internacional, al menos públicamente, ha sido mínimo.

Así pues, si bien se trató de un acuerdo de enorme importancia que abre la puerta a uno posterior que permita poner fin al conflicto armado en el país, los riesgos que se derivan del proceso son numerosos. En primer lugar, aunque el acuerdo de alto el fuego ha sido bautizado como “de alcance nacional” –*nationwide ceasefire*– un gran número de grupos insurgentes han sido excluidos, ya que el Gobierno se negó a que aquellos grupos con los que no había un acuerdo de alto el fuego bilateral previo firmaran el acuerdo conjunto. Especialmente importante es el hecho de que el UWSA, el SSA o el KIA, grupos que controlan amplios territorios y que poseen numeroso armamento, hayan quedado fuera del acuerdo. Los enfrentamientos armados han persistido en los últimos meses y se han registrado choques entre las Fuerzas Armadas y especialmente KIA, SSA-N, TNLA, MNDAA y AA. Como consecuencia de los enfrentamientos se han continuado produciendo desplazamientos forzados de población civil, lo que pone de manifiesto las difíciles condiciones de seguridad en las que vive gran parte de la población en las zonas

afectadas por la violencia y el serio impacto que ésta continúa teniendo en la vida cotidiana.

A los riesgos evidentes que se derivan de la persistencia de la violencia se unen otros de carácter político, principalmente el cambio que se producirá en el equipo negociador gubernamental como consecuencia del resultado de las elecciones. Aunque un representante de la NLD asistió a la ceremonia del acuerdo, el partido no estuvo representado al más alto nivel ni participó en la firma, alegando que la exclusión de diferentes organizaciones insurgentes le restaba el carácter de “alcance nacional” y lo hacía parcial, contribuyendo a crear malentendidos entre las organizaciones firmantes y las excluidas. Los próximos meses serán decisivos para el futuro de las negociaciones políticas con la insurgencia y también para la posibilidad de que más grupos armados se unan al acuerdo de alto el fuego. Por su parte la insurgencia, en el marco de la coordinadora UNFC que agrupa a 11 grupos armados ya ha anunciado la formación de un comité para iniciar conversaciones con la NLD.⁵

Myanmar atraviesa un momento crucial para el futuro del país. Los retos, tanto en materia de democratización como de seguridad son numerosos y acuciantes, y obligan a análisis prudentes alejados de cualquier triunfalismo. Por una parte, el Ejército, máximo exponente del antiguo régimen, detenta un enorme poder y cuenta con una gran capacidad de control de las instituciones políticas del país, lo que supone un importante lastre para cualquier avance democratizador. Por otra parte, la violencia armada persiste con cierta intensidad y un gran número de grupos, algunos con importante capacidad militar, han sido excluidos del acuerdo de alto el fuego. No obstante, desde que en 2011 se iniciara la transición en el país, las reformas se han ido consolidando, como muestra de manera especialmente evidente el hecho de que el resultado electoral haya sido aceptado por el hasta ahora Gobierno birmano. Si en 2016 se logra consolidar los avances logrados en los últimos años, la vuelta atrás en Myanmar se alejará del horizonte.

5. Radio Free Asia, “Myanmar Chief Negotiator Briefed Aung San Suu Kyi on Peace Process: NLD”, *Radio Free Asia*, 9 de diciembre de 2015.

5.5. La perspectiva de género en los procesos de paz: inclusividad y sostenibilidad

Los procesos de paz constituyen oportunidades de enorme importancia para la transformación de los conflictos armados, la superación de la violencia y la construcción de sociedades pacíficas y justas. De manera creciente, en los últimos años, el papel de la sociedad civil en la construcción de la paz en las sociedades afectadas por la violencia y la conflictividad armada se ha convertido en un tema de gran relevancia para la investigación para la paz. Más específicamente, uno de los interrogantes centrales gira en torno al papel que la sociedad civil debe jugar en los procesos de paz y cómo debe articularse su participación. Frente a las visiones más clásicas que sostienen que las negociaciones de paz deben primar la presencia de los actores enfrentados en un conflicto armado, con el objetivo de alcanzar acuerdos de paz que de manera eficaz pongan fin a la violencia directa y los enfrentamientos, otras perspectivas apuntan a la importancia de generar procesos inclusivos que conducirían a una mayor sostenibilidad de los acuerdos eventualmente alcanzados.

En paralelo a este debate, tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad y la posterior consolidación de la agenda mujeres, paz y seguridad, también se ha puesto de manifiesto la importancia de que los procesos de paz sean a su vez inclusivos desde una perspectiva de género y que no sean reproductores de las dinámicas de desigualdad que relegan a las mujeres del ámbito público. Tradicionalmente, los procesos de paz han sido profundamente excluyentes con las mujeres y patriarcales, en consonancia con las dinámicas que han prevalecido en los conflictos armados. Puesto que los actores sentados a la mesa han sido generalmente quienes se han enfrentado en el campo de batalla, y de manera más específica, las elites de estos grupos, y dado que éstas están fuertemente masculinizadas, las mujeres han tenido pocas oportunidades de participar en la negociación de la paz.

Las investigaciones disponibles sobre la participación de las mujeres en las negociaciones de paz señalan que, aunque se constata un aumento en los últimos años, la presencia de mujeres es muy reducida. Naciones Unidas señalaba en 2012 que en una muestra de 31 procesos de paz entre 1992 y 2012 solo el 2% de mediadores principales, el 4% de testigos y signatarios y el 9% de negociadores eran mujeres.⁶ El informe de 2015 del Secretario General de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad se hace eco de algunos avances parciales,

señalando que de los 12 procesos de paz con apoyo de Naciones Unidas durante el año 2014, en todos los equipos de mediación de la organización había al menos una mujer y en nueve de ellos las mujeres ocupaban cargos senior, lo que representaba un incremento con respecto a años anteriores. Además, en todos los procesos se incluyeron mecanismos de consulta con la sociedad civil y en el 88% de éstos procesos se consultó con organizaciones de mujeres. A pesar de los avances, estas cifras no dejan de mostrar algunos aspectos muy concretos de los procesos de paz y, por otra parte, no permiten una evaluación en profundidad de la capacidad de influencia de las mujeres.

Tratando de ir más allá de los aspectos meramente cuantitativos sobre la presencia de mujeres en los procesos de paz o de otros actores también tradicionalmente excluidos, algunas investigaciones recientes han intentado evaluar el impacto de esta presencia en términos más cualitativos. Diferentes investigaciones han buscado responder a la pregunta de si los procesos de paz más inclusivos tienen mejores resultados, sobre todo en términos de sostenibilidad, que aquellos que no lo son. Aunque se trata de un campo incipiente

de investigación, que requiere de mayor desarrollo, las primeras conclusiones apuntan a que la presencia de actores más allá de las partes en conflicto, especialmente de la sociedad civil, incrementa la sostenibilidad de los procesos de paz. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Uppsala concluyó que aquellos casos en los que se ha alcanzado un acuerdo de paz y ha habido algún tipo de participación de la sociedad civil esta presencia tiene un impacto positivo en la durabilidad de los acuerdos de paz, incrementándola.⁷ Sobre una muestra de 83 acuerdos firmados tras la Guerra Fría, la autora concluye que las posibilidades de fracaso de aquellos acuerdos que han sido firmados con participación de la sociedad civil se reducen en un 64%, frente al 50% en el conjunto de casos.

Otras autoras han puesto el foco de manera específica en el impacto de la presencia de mujeres y, tras analizar 48 casos de negociaciones de paz y transiciones políticas, concluyen que cuando los grupos de mujeres tuvieron capacidad sustantiva de influir en los resultados se incrementaron las probabilidades de que un acuerdo fuera alcanzado y no se produjo ningún caso en el que esta presencia tuviera un impacto negativo.⁸ Solo en un caso con presencia significativa de mujeres no se logró la firma de un acuerdo, frente a seis casos sin

Los acuerdos alcanzados en procesos de paz más inclusivos son más sostenibles

6. UN Women, *UN Women Sourcebook on Women, Peace and Security*, UN Women, 2012.

7. Desirée Nilsson, "Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accords and Durable Peace", *International Interactions*, 38(2), pp.243-266, 2012.

8. Marie O'Reilly, Andrea Ó Súilleabháin y Thania Paffenholz, *Reimagining Peacemaking: Women's Roles in Peace Processes*, International Peace Institute, junio de 2015.

presencia de mujeres en los que no se alcanzaron acuerdos. Según este estudio, además, la presencia de los grupos de mujeres fue crucial para impulsar la firma de acuerdos o superar momentos de estancamiento y también incrementó las posibilidades de que los acuerdos alcanzados fueran implementados.

Así pues, estas investigaciones demuestran que la inclusión de la sociedad civil y, de manera específica, los grupos de mujeres, tiene efectos positivos tanto sobre las posibilidades de alcanzar acuerdos de paz, como sobre su sostenibilidad, sin que de esta presencia se deriven efectos negativos que obstaculicen la firma de acuerdos. Así pues, los argumentos utilizados tradicionalmente para justificar la exclusión de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres apuntando a que su presencia restaba eficacia y efectividad a las negociaciones de paz, se demuestran falsos.

La tendencia recogida en el informe del Secretario General mencionado anteriormente relativa a una creciente presencia de mujeres en las negociaciones de paz representaría una oportunidad para construir procesos más inclusivos y que, por tanto, sean más sostenibles en el tiempo. En paralelo a una mayor inclusividad, otras autoras también han destacado la importancia de que los acuerdos de paz recojan en su contenido la perspectiva de género y constatan también una creciente –aunque insuficiente– referencia a las mujeres y la dimensión de género en los textos firmados. De un total de 1.168 acuerdos de paz alcanzados entre 1990 y 2014, antes de la aprobación de la resolución 1325, el 11% incluían referencias a las mujeres o la dimensión de género, frente al 27% que lo hicieron tras la aprobación de la resolución.⁹ Además, no solo se han incrementado los acuerdos, sino también los procesos en los que se han incorporado

estas menciones.¹⁰ La mayor presencia de mujeres en las negociaciones, así como su creciente capacidad de incidencia en los esfuerzos de construcción de paz fruto de la aprobación de la resolución 1325, podría ser uno de los principales factores explicativos de esta mayor referencia a la dimensión de género en los acuerdos de paz firmados. La presencia de grupos de mujeres con capacidad de influencia ha servido para integrar en las discusiones diferentes cuestiones y preocupaciones concretas en la agenda de las negociaciones¹¹ y esto estaría teniendo efectos materiales en el texto de los acuerdos. La inclusión de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género en los acuerdos de paz es de enorme relevancia para el diseño de procesos de rehabilitación posbélicos que sean inclusivos y respetuosos con la igualdad de género.

En conclusión, desde la constatación de que las mujeres han sido tradicionalmente excluidas de las negociaciones, investigaciones han tratado de poner de manifiesto como su inclusión es tanto una cuestión de justicia social como una manera de hacer más sostenibles y efectivos los esfuerzos de construcción de paz. Los resultados de recientes investigaciones revelan los efectos positivos concretos que en términos de sostenibilidad tienen los procesos que responden al principio de la inclusividad, tanto de actores de la sociedad civil en general como de las mujeres específicamente. Por otra parte, permiten apuntar al impacto que esta presencia también puede estar teniendo para generar acuerdos que integren en mayor medida la igualdad de género y cómo esta integración puede derivar en procesos de rehabilitación posbélica más equitativos. Así pues, debe ser una tendencia a reforzar para avanzar en la implementación de procesos que permitan garantizar la construcción de una paz sostenible e incluyente.

9. Christine Bell, *Text and Context. Evaluating Peace Agreements for their 'Gender Perspective'*, Political Settlements and Research Programme, octubre de 2015.

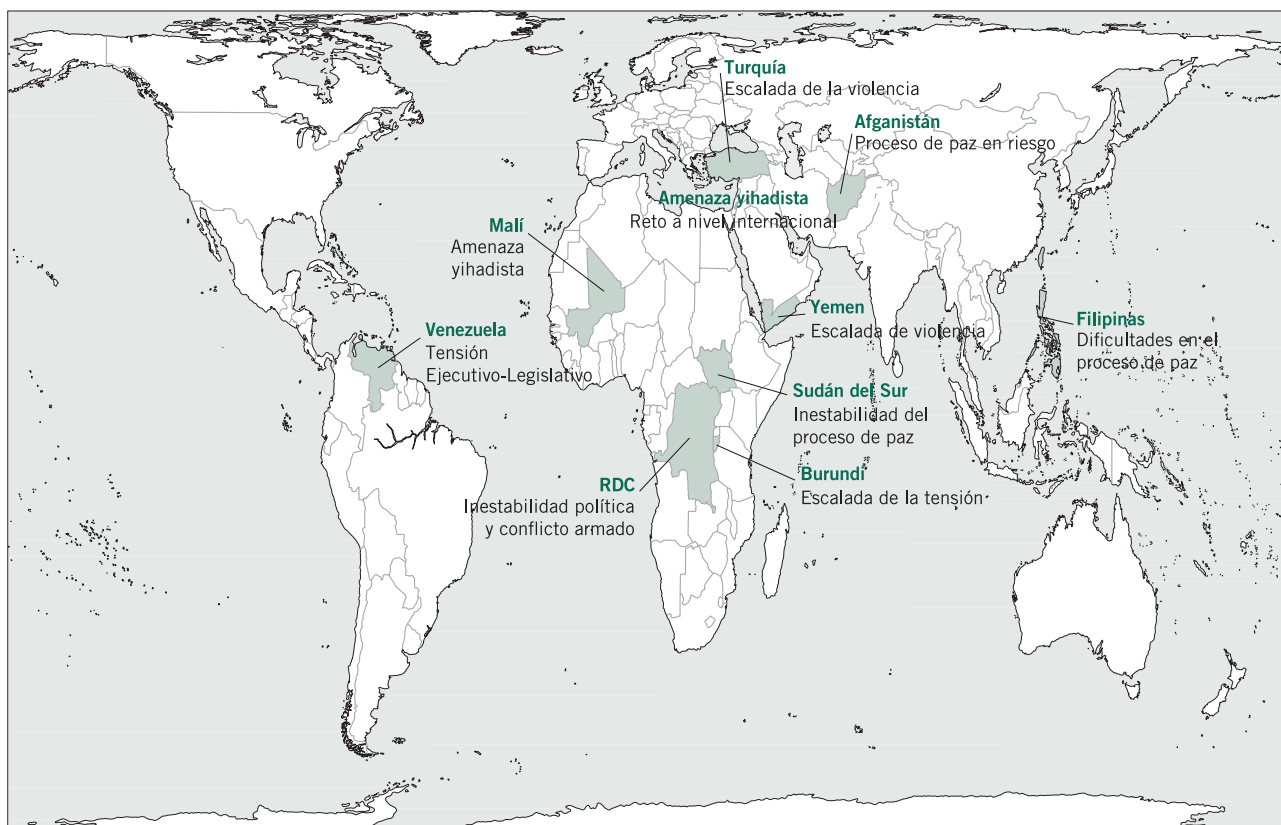
10. En un mismo proceso puede producirse la firma de varios acuerdos, por lo que es importante que la inclusión de la perspectiva de género tenga lugar en acuerdos firmados en diferentes procesos.

11. Marie O'Reilly, Andrea Ó Súilleabháin y Thania Paffenholz, op. cit.

6. Escenarios de riesgo para 2016

A partir del análisis del año 2015 de los contextos de conflicto armado y tensión, la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo diez escenarios que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante el año 2016. Los escenarios de alerta de cara al año 2016 hacen referencia al incremento de la violencia y la inestabilidad en Burundi que han puesto al país al borde de la guerra civil, al riesgo para la estabilidad que suponen las actividades de grupos yihadistas en Malí, a las perspectivas de incremento de la violencia y la convulsión política en RDC, a las fragilidades del acuerdo de paz en Sudán que pueden poner en entredicho su implementación, a la polarización de poderes en el nuevo escenario político en Venezuela, al impacto de la falta de legitimidad del liderazgo talibán en el proceso de paz de Afganistán, a las dificultades del proceso de paz en Mindanao, a los riesgos de una deriva mayor en el conflicto entre Turquía y el PKK, al grave deterioro de la situación en Yemen tras la intensificación de las dinámicas de violencia en el país y a los efectos desestabilizadores de la amenaza yihadista a nivel internacional.

Mapa 6.1. Escenarios de riesgo para 2016



6.1. Al borde de la guerra civil en Burundi

En los últimos años se ha producido un deterioro significativo de la gobernabilidad en Burundi. El creciente autoritarismo del presidente Pierre Nkurunziza, puesto de manifiesto a partir de la crisis política derivada de las elecciones de 2010, el creciente deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato, su victoria en unas elecciones presidenciales sin ningún tipo de credibilidad, además de la escalada de la violencia política y el intento frustrado de golpe de Estado en mayo, las violaciones de los derechos humanos y la presión sobre los medios de comunicación opositores, son diferentes elementos que revelan la gravedad de la situación.

El proceso de transición iniciado con la firma del Acuerdo de Arusha en el 2000, que pretendía poner fin al conflicto armado iniciado en 1993 y a la violencia etnopolítica que había afectado al país desde su independencia en 1962, culminó formalmente en el año 2005, con la aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y las elecciones que condujeron a la formación de un nuevo Gobierno liderado por Pierre Nkurunziza. En paralelo, no fue hasta diciembre de 2008 que el último grupo armado, las FNL de Agathon Rwaswa, firmó un acuerdo definitivo que abrió las puertas a su participación en las elecciones de 2010. Sin embargo, ya desde 2005 las relaciones entre el Gobierno y la oposición fueron difíciles, y en el seno del gubernamental CNDD-FDD también se produjeron divisiones y la expulsión y posterior encarcelamiento del que fuera su presidente, Hussein Radjabu, acusado por el Gobierno de Nkurunziza de organizar un nuevo grupo armado. El creciente autoritarismo y polarización social tuvo su reflejo en las elecciones de 2010, marcadas por un clima de violencia y denuncias de la oposición de continuas presiones y actos de intimidación, de los que se responsabilizó principalmente al CNDD-FDD y al propio Gobierno, aunque también, en menor medida, al nuevo partido FNL. En las elecciones comunales de mayo se impuso el CNDD-FDD, en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición. A raíz de esta situación, la oposición boicoteó los comicios presidenciales, lo que vino acompañado de una escalada de la violencia que continuó tras las elecciones –ataques, casos de torturas y detenciones de activistas, explosiones, incendios de sedes, movilización de las secciones juveniles –sobre todo las del CNDD-FDD, las Imbonerakure– entre otras cuestiones. Las instituciones quedaron bajo el control del CNDD-FDD, que incrementó la presión sobre la

oposición y redujo el espacio político, en paralelo a una creciente corrupción.

Esta evolución autoritaria tras las elecciones de 2010 comportó la movilización de la oposición que dio pie a una espiral de acción-reacción entre el CNDD-FDD, el Gobierno y la oposición en un clima de precampaña permanente de cara a las elecciones de 2015. La dura represión de la oposición durante 2014 y la primera parte de 2015 con la detención y juicio de líderes opositores,⁹ amenazas a periodistas (100 exiliados, la mayoría del sector) y defensores de los derechos humanos (juicio y posterior liberación del célebre defensor local de los derechos humanos, Pierre-Claver Mbonimpa, por presión internacional); y estrategias de división de la oposición a través de la promoción desde el Gobierno de facciones en el seno de los partidos opositores, entre otras cuestiones. Esta situación se agravó ante la calculada ambigüedad con que el presidente Nkurunziza y el CNDD-FDD fueron respondiendo ante la posibilidad de que él se presentara a un tercer mandato. El acuerdo de Arusha del 2000 establece el límite de dos mandatos por sufragio universal directo (art. 96 de la Constitución), pero ante la posibilidad de que forzara su candidatura a un tercer mandato, en enero de 2015 más de 300 organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña “*Halte au troisième mandat*” (No al tercer mandato), en línea

con el acuerdo de Arusha y la Constitución. En abril de 2015 anunció su candidatura, ratificada por la Corte Constitucional en mayo. Nkurunziza argumentó que su primer mandato post transición no debía ser contabilizado porque fue escogido por las Cámaras alta y baja, tal y como admitía de forma excepcional el art. 302 de la Constitución para dar encaje al presidente saliente de la transición en 2005. Incluso líderes de su propio partido y el Consejo de Sabios del CNDD-FDD (órgano directivo) se opusieron a su candidatura, lo que supuso la expulsión de varios de ellos. Su candidatura desencadenó amplias movilizaciones en abril y mayo y un clima de violencia política que provocó entre abril y noviembre alrededor de 240 víctimas mortales, según ACNUR, y que más de 210.000 personas huyeran del país. A pesar de la movilización social, las elecciones legislativas y comunales se celebraron el 29 de junio y fueron ganadas por el CNDD-FDD en un clima de miedo y boicoteadas por la oposición. Posteriormente, el 21 de julio tuvieron lugar las elecciones presidenciales nuevamente boicoteadas por la oposición. El proceso fue criticado de forma unánime, también por la Iglesia Católica local, y calificado como no creíble por la comunidad internacional debido al clima de

***Hasta 2014 los
garantes del acuerdo
de Arusha fueron
complacientes con el
régimen a pesar de la
creciente corrupción
y autoritarismo en
Burundi***

9. Entre otros, destaca el caso del líder del ADC Ikibiri, Léonce Ngendakumana, juzgado y sentenciado a un año en prisión por “Acusaciones perjudiciales, denuncias calumniosas y aversión étnica”; el líder del MSD, Alexis Sinduhije, huido a Bélgica, y centenares de sus seguidores del MSD detenidos; el histórico líder del CNDD, Léonard Nyangoma, exiliado; el ex presidente del partido gubernamental CNDD-FDD, Hussein Radjabu, escapado de prisión con el supuesto apoyo de sus carceleros y exiliado.

violencia, intimidación, restricciones a los medios de comunicación y a la falta de legitimidad del tercer mandato de Nkurunziza.

Existe una cierta división en el seno de los cuerpos de seguridad sobre cómo hacer frente a la situación, tal y como han señalado, entre otros, el International Crisis Group, en paralelo al surgimiento de focos de insurgencia. Aunque una gran parte del Ejército se mantuvo neutral, el intento de golpe de Estado de mayo puso de manifiesto esta división y la gravedad de la situación. El 13 de mayo el antiguo jefe de los servicios secretos, el general Godefroid Niyombare, anunció la destitución del presidente burundés, Pierre Nkurunziza, mientras éste se encontraba en Dar es Salaam (Tanzania) en una reunión de la Comunidad de África Oriental (EAC). Niyombare había sido destituido en febrero de 2015 tras desaconsejar a Nkurunziza presentarse al tercer mandato. El Gobierno consiguió desarticular la intentona ya que las fuerzas especiales burundesas junto a las Imbonerakure permanecieron fieles a Nkurunziza, lo que desencadenó duros combates en la capital y posteriormente los tres generales que lideraban el golpe de Estado se entregaron a las autoridades. Por otra parte, la Policía y el Ejército han tomado aproximaciones diferentes hacia las movilizaciones sociales, y mientras que la Policía y los servicios secretos (SNR) han llevado a cabo un uso excesivo de la fuerza y han sido acusados de haber cometido numerosas ejecuciones extrajudiciales, junto a las milicias Imbonerakure y en menor medida, grupos y milicias opositoras, el Ejército se ha mantenido neutral. En él se integran los antiguos grupos armados y se ha constatado la existencia de cadenas paralelas de mando y fidelidades vinculadas a las antiguas insurgencias que podrían activarse. En este sentido, ya en diciembre de 2014 se produjo una primera acción de envergadura con la ejecución de un centenar de combatientes procedentes de RDC en el bosque de Kibira, en Cibitoke –en algunos casos, ya desarmados– y posteriormente durante 2015 han proliferado algunas milicias y se han producido diversos choques, como en julio, cuando el Ejército anunció la muerte de 15 insurgentes y la captura de otros 170 en diversos combates en el norte del país. A su vez, la MONUSCO confirmó en octubre la presencia del Ejército burundés en la provincia congoleesa de Kivu Sur en persecución de sectores de las FNL, produciéndose diversos combates. La muerte de altos cargos del Gobierno o de la oposición, como el general Adolphe Nshimirimana, jefe de los servicios de seguridad y aliado próximo de Nkurunziza, el antiguo jefe del Estado Mayor en tiempos de Pierre Buyoya (1993-2006), el coronel Jean Bikomagu, o de líderes políticos como Pontien

Barutwanayo (FNL), Patrice Gahungu y Zedi Feruzi (UPD), entre otros, y el intento de asesinato del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Prime Niyongabo, o del activista Pierre-Claver Mbonimpa, del que asesinaron a su hijo, ponen de manifiesto la gravedad de la situación.

Por otra parte, la reacción de la comunidad internacional ha llegado tarde y ha sido incapaz de frenar la crisis. En general, hasta 2014 los países y organizaciones garantes del acuerdo de Arusha fueron complacientes con el régimen a pesar de la creciente corrupción y autoritarismo. Ya en 2014, la UE incrementó la AOD a Burundi y el Consejo de Seguridad de la ONU cerró la misión política presente en el país, BNUB, el 31 de diciembre, porque supuestamente el país había hecho importantes avances hacia la paz. El anuncio del presidente en abril de 2015, las graves movilizaciones derivadas y el intento de golpe de Estado en mayo encendieron las alarmas en las cancillerías africanas y europeas. Desde entonces, a pesar de las diferentes iniciativas puestas en marcha, ya sea a través de las presiones e incluso congelación de fondos para la celebración de las elecciones por países de la UE y los intentos de mediación de la EAC y de la Conferencia Internacional para la región de los Grandes Lagos (CIRGL) liderados por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, sólo se consiguió posponer la fecha de las elecciones pero no se logró mejorar las condiciones en que iban a ser celebradas ni recuperar el diálogo. Las presiones llevadas a cabo por la EAC y la UA para fomentarlo se vieron debilitadas por sus propios líderes vecinos, que han seguido estrategias similares a Nkurunziza para permanecer en el poder, como Yoweri Museveni, Robert Mugabe o Paul Kagame, entre otros. La reelección desencadenó la congelación de la AOD bilateral, presiones para que la EAC hiciera lo mismo ya que la financiación de la EAC procede en un 70% de Occidente, y el deterioro de las relaciones con Bélgica y Rwanda. EEUU y la UE decidieron establecer sanciones contra algunos de los responsables, y el Consejo de Seguridad de la ONU condenó en noviembre el incremento de la violencia y señaló su intención de considerar medidas adicionales, aunque Rusia, China y diversos países africanos frenaron el establecimiento de sanciones. En conclusión, los diferentes elementos ponen de manifiesto de cara al futuro inmediato que sólo una presión más decidida sobre las partes para forzar el diálogo entre el Gobierno y la oposición, el monitoreo de la situación y el establecimiento de sanciones para frenar la incitación de la violencia, por parte de los países vecinos, organizaciones regionales y de la comunidad internacional puede evitar que el país retorne al clima de violencia que ya se creía superado.

6.2. Malí: riesgo para la estabilidad debido a acciones de grupos yihadistas

Durante el mes de junio de 2015 Malí logró la firma y adhesión al conocido como Acuerdo de Paz de Argel por parte de los principales movimientos rebeldes de corte árabe-tuareg que operan en la región septentrional: la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) –que aglutina a los grupos que luchan por la independencia de la región de Azawad– y la Plataforma –que coordina a los movimientos árabe-tuareg pro-unidad nacional–.² El acuerdo de paz, logrado bajo la mediación de Argelia, abrió un nuevo escenario para la construcción de la paz en el norte del país después de tres años y medio de conflicto armado, y puso fin al cuarto levantamiento tuareg contra el Estado de Malí desde el logro de la independencia nacional en 1960.³ Cada uno de estos levantamientos armados concluyó con la firma de diferentes acuerdos de paz⁴ que trataron de responder a las demandas norteñas, principalmente concentradas en la repartición del poder político, el reconocimiento identitario y el desarrollo. El Acuerdo de junio de 2015 se retomó nuevamente sobre la base de los pactos anteriores con el objeto de resolver las dinámicas históricas de agravios del Estado maliense frente a la parte septentrional y poder así avanzar en la reconciliación y reconstrucción nacional.

Sin embargo, si ya la firma de la paz traía consigo grandes interrogantes sobre las posibilidades reales de conseguir los compromisos adquiridos que resolviesen las históricas demandas norteñas y lograsen poner fin a las escaladas periódicas de violencia –debido a la desconfianza que genera el incumplimiento sistemático de los acuerdos de paz y pactos anteriores–, en el presente Acuerdo de Argel las incertidumbres sobre su recorrido, y sobre todo, sobre su capacidad para conducir al fin de la violencia en el país, han sido desde un inicio mayores debido a la exclusión de las negociaciones de los movimientos armados de corte yihadista. Grupos como al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), anteriormente conocido como Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC); la organización Ansar Dine (defensores de la fe), encabezada por el histórico líder tuareg Iyad Ag Ghaly; el Movimiento para la Unidad y Yihad en África Occidental (MUYAO); el grupo liderado por el argelino Mokhtar Belmokhtar, conocido como al-Mourabitoun; o la reciente aparición de las autodenominadas Fuerzas de Liberación de Macina (MLF), cuyo líder es Hamadoun Kouffa; fueron excluidos de las mesas de negociación

del proceso de paz, adoptando el Estado maliense una respuesta meramente militar frente a ellos.

Estos movimientos armados se han mantenido operativos en el país y están representando un gran riesgo para la estabilidad y la paz en Malí. Si bien la ofensiva internacional lanzada en enero de 2013 encabezada por Francia, bautizada con el nombre de Operación Serval, logró contener momentáneamente el avance del yihadismo en el país –que se había hecho con el control del norte y amenazaba con tomar la capital–, la presencia y capacidad de articulación y desestabilización de estos grupos ha seguido presente en Malí. Los movimientos yihadistas han ido intensificado

Una de las características actuales del yihadismo en Malí, que se mostró en el ataque al Radisson Blu, tiene que ver con su capacidad para desarrollar alianzas entre diferentes organizaciones

los ataques y atentados desde la firma de la paz con los movimientos seculares, teniendo como objetivos prioritarios a las fuerzas internacionales, así como los intereses extranjeros. Algunos de los ataques más notorios de estos movimientos, como los atentados en el hotel Byblos en Sévaré (7 de agosto) reivindicado por MLF, o el perpetrado en el hotel Radisson Blu en Bamako (20 de noviembre), reivindicado paralelamente por al-Mourabitoun –en colaboración con AQMI– y por MLF –en colaboración con Ansar Dine–, representan una muestra de la capacidad de desestabilización que estos grupos aún poseen. Una de las características actuales

del yihadismo en el país, que se mostró en el ataque al Radisson Blu –donde hasta cuatro grupos yihadistas reivindicaron su participación–, tiene que ver con la capacidad para desarrollar alianzas entre las diferentes organizaciones, lo cual representa un nuevo escenario que supone un mayor potencial de desestabilización. El líder de AQMI, Abu Musab Abdul Wadub, en un discurso de audio confirmaba la unión de su grupo con al-Mourabitoun, reivindicando el ataque al hotel como un símbolo de esa unidad. Dicha acción, que se saldó con 22 personas fallecidas y el secuestro de unas 170 personas durante horas, mostró por un lado la creciente capacidad ofensiva de las organizaciones yihadistas –tomando uno de los centros presumiblemente de mayor seguridad del país– y por otro lado, la vulnerabilidad frente a la amenaza yihadista del Estado maliense, que decretó diez días de estado de emergencia nacional.

Estas acciones han mostrado a su vez, la incapacidad de las fuerzas de seguridad nacionales para responder al yihadismo, así como también cuestionan la eficiencia de las iniciativas de *securitización* llevadas a cabo en

2. Movimientos armados presentes en CMA: Movimiento Nacional por la Liberación de Azawad (MNLA), Alto Consejo para la Unidad de Azawad (HCUA), Movimiento Árabe de Azawad (MAA). Movimientos presentes en Plataforma: Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados (GATIA), Coordinadora de Movimientos Patrióticos de Resistencia (CMFPR) formada por milicias songhais “Ganda Koy” y “Ganda Iso”, Coalición del Pueblo por Azawad (CPA), y Frente Nacional para la Liberación de Azawad (FNLA).

3. Las cuatro insurrecciones tuaregs contra el Estado que se han producido han sido: 1) 1963-1964; 2) 1990-1996; 3) 2006-2009; y 4) 2012-2015

4. Los distintos acuerdos de paz firmados entre el Gobierno de Malí y los movimientos rebeldes árabe-tuareg en las diferentes insurrecciones han sido: 1991 Acuerdo de Tamanrasset; 1992 Pacto Nacional; 1996 Acuerdo de Tombuctú; 2006 Acuerdo de Argelia; 2009 Acuerdo de Sebha (Libia); 2015 Acuerdo de Argel.

la región. Tanto los programas de entrenamiento de las fuerzas nacionales de seguridad implementados por los EEUU y por la misión europea EUTM, como las operaciones de combate francesas en la zona (primero bajo el paraguas de la operación Serval y posteriormente bajo la operación Barkhane), se han mostrado ineficaces a la hora de contener sustancialmente –y menos aún acabar– la amenaza yihadista en el país. Al contrario de lo que cabría suponer, la presencia, áreas de actuación y capacidad de los movimientos radicales en el país se ha intensificado. La Misión de las Naciones Unidas en el país, la MINUSMA –que tiene asignados por el Consejo de Seguridad 11.240 militares bajo un mandato basado en la protección de la población y no en el combate al terrorismo– se ha convertido en el objetivo central del yihadismo, siendo la misión de la ONU que mayor número de bajas militares tiene.

Si bien anteriormente las acciones de los movimientos yihadistas se habían concentrado en las regiones norteñas de Kidal, Gao y Tombuctú, aprovechando el contexto de guerra entre los movimientos árabe-tuareg y el Estado maliense, este escenario se ha modificado sustancialmente con la firma de la paz en el norte, lo cual ha obligado a los movimientos radicales a diversificar sus métodos y áreas de actuación, desplazándose desde sus áreas tradicionales de acción, ubicadas en el norte, a las regiones del centro y sur del país. El escenario de enfrentamientos constantes y violaciones al alto el fuego perpetradas por parte de los grupos armados signatarios del acuerdo de Paz de Argel (la Coordinadora y la Plataforma) representaba para el yihadismo un terreno propicio para mantener sus actividades armadas. Este contexto, que se mantuvo luego de la firma del Acuerdo de Paz –registrando su peor incidente durante el mes de agosto, cuando miembros de la CMA y las milicias progubernamentales GATIA (Plataforma) se enfrentaron durante días por el control de la ciudad de Anéfis, al norte de la región de Kidal–, ha dado paso a un nuevo escenario de estabilidad entre las facciones rivales tuaregs que perjudica a los movimientos islamistas.

A raíz de los enfrentamientos en Anéfis, que simbolizaron la primera gran crisis del proceso de paz, se abrieron negociaciones directas entre la CMA (grupo tuareg ifoghas) y la Plataforma (grupo tuareg inghad), logrando a mediados de octubre un acuerdo de cese de enfrentamientos entre ambos grupos, así como la

ratificación del compromiso con la paz. La CMA y la Plataforma acordaron establecer patrullas mixtas en las regiones de Kidal, Gao y Tombuctú para velar por el mantenimiento de la paz, lo cual ha producido choques entre estos movimientos y los grupos yihadistas. El acuerdo de Anéfis generó duras críticas por parte de algunos movimientos yihadistas, sobre todo de Iyad ag Ghaly (líder tuareg del movimiento Ansar Dine), quien acusó a los movimientos seculares de traicionar al pueblo de Azawad. Algunos analistas señalaban al respecto que el ataque al hotel Radisson Blu de Bamako se podía leer en clave de respuesta al acuerdo de Anéfis, en un intento de tratar de desestabilizar el proceso de paz.

Adicionalmente cabe reseñar el impacto que el contexto global actual, caracterizado por el protagonismo de las acciones del Estado Islámico (ISIS) y su competencia con al-Qaeda en el escenario internacional, puede tener

en Malí, aun sin ser clara la presencia del ISIS en el país actualmente. La espectacularidad mediática de las acciones del ISIS, y el impacto que la organización está teniendo en todo el mundo –logrando afiliaciones de movimientos armados en diferentes regiones–, está abriendo un escenario de competencia por ser la organización yihadista de referencia entre ISIS y la red al-Qaeda⁵. En Malí, y en la región del Sahel en general, este escenario se está traduciendo en un incremento de las acciones armadas de grupos vinculados a al-Qaeda –cada vez cargadas de mayor impacto mediático– como medida para evitar la posible influencia de ISIS –quien ya lograra durante el 2015 la lealtad del grupo armado nigeriano Boko Haram a la red dirigida por Abu Bakr al-Baghdadi–. En esta lógica, grupos como AQMI o Ansar Dine, vinculados a al-Qaeda, estarían tratando de activar sus acciones militares, su notoriedad, para evitar perder protagonismo. Ello hace prever que este tipo de violencia mediática, que busca estar en las portadas y desestabilizar el país, continuarán estando presentes durante el 2016.

Estos diferentes escenarios, caracterizados por la exclusión de los movimientos yihadistas de las negociaciones, la ineficacia de las medidas de *securitización* para contener su presencia, así como el contexto global de lucha por el protagonismo entre las redes de al-Qaeda e ISIS, representan en Malí serios obstáculos para lograr el fin de la violencia, e incluso, pueden suponer serios riesgos para la implementación efectiva de los acuerdos de paz en el norte.

Tanto los programas de entrenamiento de las fuerzas nacionales de seguridad implementados por EEUU y por la misión europea EUTM, como las operaciones de combate francesas se han mostrado ineficaces a la hora de contener la amenaza yihadista en Malí

5. Véase “La amenaza yihadista y sus efectos desestabilizadores a nivel internacional” en este capítulo.

6.3. RDC ante el riesgo de una escalada de la inestabilidad política y del conflicto armado en 2016

Aunque la intensidad de la guerra que ha padecido la República Democrática del Congo (RDC) en las dos últimas décadas se ha reducido paulatinamente, en el este del país persiste el conflicto armado iniciado en 1998, que ha causado hasta la fecha, según diversas fuentes, alrededor de cinco millones de víctimas mortales, al menos 200.000 mujeres víctimas de la violencia sexual –que fue y sigue siendo utilizada como arma de guerra y persiste incluso en zonas de postconflicto–, el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas y una crónica crisis humanitaria. Algunos elementos positivos, como el fin de la violencia en la mayoría del país, el inicio de las reformas institucionales, el crecimiento económico (aunque distribuido de forma desigual), entre otras cuestiones, pueden verse truncados por la proximidad del nuevo ciclo electoral, que aunque debería contribuir a afianzar el sistema político en RDC, puede entrañar numerosos riesgos. El país vive una creciente inestabilidad política derivada de la proximidad del fin del segundo mandato del presidente Joseph Kabila. En febrero de 2015, con la publicación del calendario electoral y de la ley electoral, se dio inicio al proceso que debe conducir a la celebración de 11 elecciones directas e indirectas en los niveles locales, provinciales y nacionales antes de diciembre de 2016. Diferentes iniciativas políticas puestas en marcha por el Gobierno de Kabila; la creciente violencia política que ha tenido lugar durante 2015 y los intentos del mandatario para posponer las elecciones presidenciales y así prolongar su mandato; los pocos avances en la operación militar contra las Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) y el fracaso de la amnistía y retorno del grupo armado Mouvement du 23-Mars (M23), que podrían suponer la reactivación del conflicto y su influencia en la situación general, ponen de manifiesto la gravedad de la situación.

En primer lugar, cabe destacar las consecuencias del incumplimiento del calendario electoral, que puede conducir al retraso en la celebración de las elecciones y la prolongación del mandato presidencial de Joseph Kabila. La Constitución no permite un tercer mandato presidencial, pero Kabila todavía no se ha manifestado en torno a si va a renunciar y cumplir la Constitución o postular por un tercer mandato en las elecciones presidenciales de 2016. Según las diferentes disposiciones constitucionales, las nuevas elecciones legislativas y presidenciales deben ser organizadas antes del 19 de diciembre de 2016 para elegir un nuevo presidente y a los miembros del Parlamento, ya que su mandato culmina en esta fecha. Las elecciones locales, proyectadas para 2008, han sido pospuestas numerosas veces, y en enero de 2015 el Parlamento

adoptó un proyecto de ley que incluía una disposición que condicionaba la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales a la organización de un nuevo censo nacional, para cuya elaboración existen dificultades técnicas y financieras que provocaron que numerosos actores de la sociedad civil y de la oposición interpretaran esta disposición como una maniobra que comportará un retraso del calendario electoral. El 23 de enero, tras las importantes movilizaciones desencadenadas, la controvertida disposición fue retirada del proyecto de ley. No obstante, la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) condicionó la puesta en marcha del calendario a la resolución de 23 cuestiones externas ligadas al marco legal (censo, voto en el extranjero, descentralización provincial, entre otras cuestiones) y a la disposición de fondos para poder desarrollar el proceso: algunas de estas cuestiones sufren retrasos y otras todavía no han podido ser abordadas por la autoridad competente, por lo que el régimen ha creado las condiciones por las cuales cumplir el calendario electoral es prácticamente imposible.

Esta situación ha venido acompañada por los intentos del presidente Joseph Kabila de promover un diálogo nacional desde abril entre la coalición mayoritaria en el poder, la oposición política y la sociedad civil. Este diálogo pretende abordar el calendario electoral, la inclusión en el censo de varios millones de votantes que habrían adquirido el derecho de voto desde 2011, la financiación del proceso y la seguridad en las elecciones. Aunque en algunos momentos la oposición política, muy dividida, ha manifestado su disposición a participar en el proceso, finalmente se ha retirado de las consultas preliminares alegando que este diálogo podría utilizarse para justificar el aplazamiento de las elecciones presidenciales con la finalidad de prorrogar el mandato presidencial. Además, la misma coalición gubernamental también ha sufrido divisiones como consecuencia de la evolución del proceso, y en septiembre un grupo de siete partidos políticos (el “G7”) de la coalición gobernante advirtió a Kabila sobre el riesgo de desestabilizar el país en caso de incumplimiento de la Constitución. El grupo solicitó la celebración de las elecciones locales tras las elecciones nacionales y provinciales, ya que se teme que una revisión del calendario implique que las elecciones presidenciales sean también retrasadas, lo que supondría la prolongación de facto de la presidencia de Kabila. A raíz de este posicionamiento, el G7 fue expulsado de la coalición gubernamental.

Durante el año también se ha producido un incremento de la inestabilidad y de la violencia política. En enero se produjo la más importante movilización, en años, de la

La creciente violencia política durante 2015 y los intentos del mandatario para posponer las elecciones presidenciales y así prolongar su mandato hacen temer un deterioro de la situación en 2016

sociedad civil congoleesa apoyada por la Iglesia Católica, para frenar los intentos de modificar el calendario electoral. Esta movilización, la más importante desde las elecciones celebradas a finales de 2011, fue reprimida con dureza por los cuerpos de seguridad congoleeses y causó la muerte de más de 40 personas y centenares de heridos y detenciones. Desde entonces ha persistido la escalada de la violencia política y el Gobierno ha buscado silenciar la disidencia con amenazas, violencia y arrestos arbitrarios, tal y como denunciaron diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos locales e internacionales. En diciembre de 2015 la Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe publicado conjuntamente por la MONUSCO y el ACNUDH que daba cuenta de las violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, entre ellas un aumento de las violaciones de los derechos políticos y de las libertades cometidas por parte de los agentes del Estado y la prevalencia de un clima de impunidad. El informe destacó las graves violaciones de los derechos humanos y la represión por parte de los cuerpos de seguridad en enero en las manifestaciones contra la ley electoral, y aunque los incidentes se redujeron después de marzo, desde julio se observó un recrudecimiento de las amenazas, arrestos arbitrarios y la instrumentalización de la justicia contra activistas de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Estas restricciones y amenazas marcaron una tendencia de progresiva reducción del espacio político susceptible de afectar a la credibilidad del proceso.

Por otra parte, a pesar de la reducción paulatina de la violencia en el este del país, existen diferentes elementos a tener en cuenta que podrían modificar el statu quo actual y que podrían contribuir a la inestabilidad del conjunto del país. La operación militar Sukola II contra el grupo armado rwandés FDLR durante el año 2015 fue un fracaso. En enero culminó el plazo establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU para proceder al desarme voluntario de las FDLR tras la negativa de Rwanda a aceptar un diálogo político propuesto por el grupo armado y la nula presión regional e internacional en ese sentido, dando luz verde a una la operación militar contra el grupo. Aunque las FDLR no habían lanzado operaciones militares contra Rwanda desde el año 2000, su presencia en RDC había dado a Rwanda excusas para intervenir directamente o indirectamente a través de grupos armados locales afines a Kigali. Al vencimiento del plazo voluntario, de un total de 1.500 combatientes de las FDLR solo se habían rendido 339. En febrero el Gobierno puso en marcha la operación militar. Numerosos analistas habían dudado de la voluntad del Gobierno congolés

de llevar a cabo esta ofensiva contra el que ha sido su aliado en determinados momentos para frenar las actividades de Rwanda y de grupos pro-rwandeses en el país. En paralelo, la ONU había anunciado que retiraba su apoyo a la operación militar del Ejército congolés contra las FDLR tras la negativa del Gobierno a sustituir a dos generales implicados en la operación debido a graves acusaciones de violaciones de los derechos humanos que pesan sobre ellos. El Gobierno decidió iniciar la ofensiva sin el apoyo de la MONUSCO. En paralelo, Kinshasa ha estado presionando para reducir el tamaño de la MONUSCO en el país.

Estas decisiones fueron tachadas de populistas por diversos analistas, argumentando la necesidad de recuperar su maltrecha imagen a raíz del lento avance de las reformas en el país y de la represión de las movilizaciones de enero en contra de la voluntad presidencial de modificar la Constitución para poder prolongar la presidencia de Kabila. En paralelo se produjo la dimisión de Russ Feingold, representante de EEUU en la región de los Grandes Lagos, crítico con el intento de reelección y escéptico respecto con la voluntad real de RDC de perseguir a las FDLR. Tras meses de una ofensiva, hasta finales de 2015 las operaciones habían tenido un éxito limitado ya que no se había desmantelado a las FDLR y su capacidad militar y estructuras de mando seguían intactas. A esta situación, o como consecuencia directa de ella, se añade la negativa evolución de la aplicación de las Declaraciones de Nairobi, que significaron hace dos años la rendición del grupo armado M23, amnistía y retorno de los ex combatientes del grupo. Solo 180 miembros del M23 han regresado a RDC de los 2.000 combatientes que tendría oficialmente el grupo. El Gobierno y el M23 se han acusado mutuamente de incumplir el acuerdo. El Gobierno congolés ha denunciado filtraciones de ex rebeldes en el este de RDC y se estima que unos 1.000 ex combatientes y civiles del M23 habrían desaparecido de Uganda y Rwanda. De las 1.600 personas identificadas en Uganda hace un año, en la actualidad solo quedan 640. Además, la escasez de fondos para sufragar el programa nacional de desarme y reintegración de excombatientes, la proliferación y fragmentación de grupos y milicias en el este, alrededor de 70 según algunas fuentes, ponen de manifiesto la persistencia del conflicto e incluso la volatilidad de la situación. Un deterioro en el conflicto en el este unido a la inestabilidad que se puede derivar de cambios que puedan retrasar el calendario electoral que no procedan de un proceso de diálogo y negociación consensuado entre el Gobierno y la oposición política con el respaldo de la comunidad internacional, hacen temer una deriva autoritaria y una escalada del conflicto armado para 2016.

6.4. Sudán del Sur: un acuerdo de paz muy frágil

Tras 20 meses de cruenta guerra civil que ha provocado decenas de miles de víctimas mortales y una grave crisis humanitaria con más de 2,3 millones de personas desplazadas de sus hogares y 4,6 millones en situación de emergencia por riesgo elevado de padecer hambruna, a mediados de agosto del 2015, y bajo los auspicios de la mediación de la IGAD-Plus,⁶ se logró la firma de un acuerdo de paz. Las partes enfrentadas –el Gobierno de Sudán del Sur (GoSS) presidido por Salva Kiir y el principal grupo opositor, el SPLA/M-IO, comandado por el ex vicepresidente Riek Machar–, firmaron el texto propuesto por IGAD-Plus y decretaron el cese de hostilidades en medio de un clima marcado por las fuertes presiones internacionales, con amenazas de sanciones y embargos a las dos partes si no se detenía la violencia. El acuerdo fue ratificado primero por Machar el 17 de agosto, y después por Kiir el día 26. El GoSS estampó su firma en el texto, mostrando su disconformidad con el mismo y con las formas en las cuales se había logrado ésta, mediante presiones y amenazas, e incluyó una lista de 16 reservas al acuerdo que no fueron aceptadas por la IGAD-Plus.⁷ El acuerdo de paz resultante se compone de medidas incluidas en siete diferentes capítulos de actuación: 1) Gobierno de Transición de Unidad Nacional; 2) Cese al fuego permanente y mecanismos de seguridad; 3) Asistencia humanitaria y reconstrucción; 4) Recursos económicos y financieros; 5) Justicia transicional, rendición de cuentas, reconciliación y restitución; 6) Constitución; 7) Comisión de seguimiento y evaluación.⁸

El acuerdo fue presentado por la IGAD-Plus como el texto definitivo para lograr la paz y la reconstrucción nacional, luego de la firma de hasta nueve acuerdos anteriores que no tuvieron recorrido. Sin embargo, los hechos que marcaron su adhesión por las partes –relativos a las amenazas y presiones externas– así como la evolución del contexto durante los últimos meses del año, han levantado las alarmas sobre su cumplimiento. Al respecto, distintos son los hechos que están marcando el proceso representando escenarios de alerta que pueden evocar la vuelta a los enfrentamientos durante el 2016.

En primer lugar cabe resaltar el hecho de que el acuerdo haya nacido sin el consenso y la aprobación de las partes enfrentadas, lo cual representa un riesgo capital para su continuidad. El GoSS no solo manifestó su disconformidad con las formas en las que se firmaba el pacto, sino que además expresó su desacuerdo con el texto incluyendo un anexo de 16 reservas al mismo. Ese documento incluyó

importantes aspectos que confrontan artículos capitales del Acuerdo, el cual es calificado como de “humillación”, “recompensas para la rebelión” e incluso como “neo colonialista”. Este punto de partida ha sido leído por muchos analistas como una importante debilidad del proceso, debido a que limita la apropiación por los agentes de los compromisos adquiridos dificultando su aplicación. Ello se ha mostrado en su implementación en los primeros meses, donde está siendo evidente el fracaso en cumplir los plazos estipulados. Por ejemplo, el Gobierno de Transición de Unidad Nacional que debía crearse en un plazo máximo de 90 días desde la firma del texto, representando la institución fundamental del pacto, a finales de año aun no se había creado.

Por otro lado, y como segundo escenario de riesgo que se vincula directamente con el anterior, la distancia que mantiene el GoSS con las cláusulas del acuerdo ha hecho que el Ejecutivo confronte el pacto tomando importantes medidas políticas de forma unilateral que deberían de incluirse dentro del Gobierno de Transición. Estas medidas están poniendo en entredicho el valor del acuerdo, tensionando fuertemente las relaciones con la oposición. Una de las medidas tomadas por Kiir de forma independiente tuvo que ver con la destitución de tres gobernadores en la región de Ecuatoria, hecho que generó fuertes críticas políticas. Otra de las medidas adoptada fuera del acuerdo de paz ha sido la disolución de todas las estructuras de liderazgo del partido SPLM –a excepción del puesto de presidente–. Un hecho similar desató la crisis de diciembre de 2013 que dio inicio a la guerra civil. El líder opositor Riek Machar criticó duramente la medida, calificándola como una amenaza para la paz. Esta acción ningunea la Declaración de Arusha (Tanzania) firmada en enero de 2015, donde las diferentes facciones del SPLM (Gobierno, SPLA/M-IO y la facción SPLM 7), alcanzaron un acuerdo de reunificación en Tanzania con el objetivo de reconciliar a las tres facciones y facilitar las conversaciones de paz.

Pero sin duda, en el riesgo que está suponiendo la política unilateral del ejecutivo, la medida que mayor controversia está causando ha sido el anuncio realizado el 2 de octubre por el cual Sudán del Sur pasaría a adoptar una fórmula de Estado federal. El Gobierno de Kiir anunció la modificación de la división administrativa actual, basada en 10 estados, a una fragmentación de 28 estados federales. La nueva división planteada por el presidente –sin consultar con las fuerzas opositoras– revisa las divisiones territoriales

La distancia que mantiene el GoSS con las cláusulas del acuerdo de paz, ha hecho que el Ejecutivo confronte el pacto tomando importantes medidas de forma unilateral que están poniendo en riesgo la paz en Sudán del Sur

6. La IGAD-Plus está conformada por los miembros de la IGAD (Sudán, Sudán del Sur, Kenya, Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia y Uganda), algunos países de la UA (Nigeria, Rwanda, Sudáfrica, Chad y Argelia) y finalmente por China, Rusia, Egipto y la Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega).

7. Véase el listado de 16 reservas al Acuerdo de Paz del GoSS: <https://es.scribd.com/doc/276484376/On-South-Sudan-Salva-Kiir-s-12-Pages-of-Reservations-to-CPA>

8. Véase Acuerdo de Paz completo en: <http://southsudan.igad.int/index.php/91-demo-contents/news/299-agreement-on-the-resolution-of-the-conflict-in-the-republic-of-south-sudan>

establecidas en la Constitución actual, para crear nuevas fronteras basadas principalmente en características étnicas. En la nueva propuesta, el grupo dinka –al que pertenece Kiir y la plana mayor del GoSS– obtendría el control administrativo del 42% del territorio del país– al frente de 12 de los 28 estados propuestos– frente al 25% del control administrativo que posee con la división de los 10 estados. Por otro lado, la comunidad nuer, mayoritaria en el SPLA/M-IO y de la cual es oriundo Machar, pasaría de tener el 15% de predominio administrativo en la fórmula de los 10 estados, al 13% en la nueva división propuesta. Riek Machar afirmó que este nuevo decreto unilateral representa una grave violación del acuerdo de paz, poniendo en serio riesgo su continuidad, e insistió en que la medida puede hacer descarrilar el acuerdo a menos que se revoque. La IGAD-Plus también condenó enérgicamente el anuncio de Kiir, mostrando su preocupación y avisando al Gobierno que el anuncio contradice directamente el acuerdo y que cualquier cambio fundamental del país se deberá de realizar dentro del Gobierno de Transición de Unidad Nacional, instando al Gobierno a retirar el decreto.

Una de las lecturas que subyace detrás de esta estrategia del Gobierno, es la relativa a evitar una de las cláusulas del acuerdo que el ejecutivo había vetado en su lista de 16 puntos. El artículo 15 del capítulo 1 estipula la creación de gobiernos transicionales en los estados de Jonglei, Alto Nilo y Unidad. Los dos últimos quedarían bajo administración de la oposición, mientras que Jonglei seguirá en manos del Gobierno. Con la nueva división propuesta, ambos estados se fragmentarán en tres partes: en el estado de Unidad dos de ellas estarían bajo predominio de la mayoría nuer y una bajo control dinka, mientras que el estado de Alto Nilo –que además modificaría sus fronteras físicas–, un estado quedaría bajo administración nuer, otro dinka y otro shilluk. De esta forma, los dos estados concebidos en el acuerdo de paz que deberían quedar bajo gobierno de la oposición, pasarían a subdividirse en 6, de los cuales únicamente 3 de ellos estarían bajo administración opositora. Esta nueva división administrativa del GoSS representa un serio bloqueo del citado artículo 15, que ha sido fuertemente rechazado por el SPLM/A-IO. A su vez, otro de los problemas que la fragmentación unilateral del país está generando, que el propio Kiir ha reconocido, es el relativo a la nueva división fronteriza de los nuevos estados, donde muchos de ellos no se rigen por las líneas actuales de demarcación territorial, lo cual está siendo un nuevo factor de tensión y enfrentamientos, que podría traducirse en nuevas disputas bélicas.

En tercer lugar, otra amenaza del proceso de paz subyace en la creciente división interna y fragmentación de las partes, así como en el surgimiento de nuevos actores armados en el país. Desde la misma firma de la paz se generaron divisiones y escisiones en el seno de ambas partes. Por parte del GoSS, altos mandos militares cuestionaron el documento y lo valoraron como una rendición frente a los rebeldes. Del

lado del SPLA/M-IO, un grupo de comandantes desertaron y anunciaron la creación de otro movimiento armado opuesto al acuerdo pactado. A su vez, otros grupos armados ya existentes en el momento de la firma, como el Revolutionary Movement For National Salvation (REMNASAS) o el South Sudan National Liberation Movement (SSNLM), no se adhirieron a la paz, manifestando que proseguían la lucha armada. Posteriormente, durante el mes de noviembre de 2015 han surgido al menos dos nuevos grupos armados: en la región de Ecuatoria, medios locales informaban de la aparición del South Sudan People's Patriotic Front (SSPPF), que se declaró en guerra contra el Gobierno; en la región del Alto Nilo, y como reacción a la nueva división fronteriza –la cual divide el reino shilluk entregando algunas de sus tierras a la comunidad dinka de Apadang–, miembros de esta comunidad étnica crearon el Tiger Faction New Forces (TFNF), afirmando su intención de combatir al Gobierno y de no deponer las armas hasta que se revierta la fórmula de división administrativa.

Finalmente, y en lo que representaría el cuarto riesgo, el acuerdo de paz no ha logrado mantener de manera efectiva el cese al fuego pactado, produciéndose diferentes enfrentamientos entre las partes, y ampliándose las acciones militares debido a la creciente presencia de nuevos actores beligerantes. Esta reiteración de la violación del cese de hostilidades podría convertir en papel mojado el actual acuerdo dando pie a la reapertura de los enfrentamientos a gran escala, o como mínimo dificultar la implementación de otros capítulos del acuerdo como consecuencia de la inseguridad. El Mecanismo de Verificación y Monitoreo de la IGAD ha informado al respecto del registro de 50 violaciones al alto el fuego desde el primer acuerdo de cese de hostilidades

firmado en febrero de 2014, de las cuales cinco de ellas (tres por parte del Gobierno y dos por parte del SPLA/M-IO) se han producido después del acuerdo de agosto.

Este conjunto de elementos representa un grave riesgo para el mantenimiento de la paz en el país. El propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, alertó cómo las constantes violaciones al cese al fuego, así como el fracaso de las partes a cumplir los plazos estipulados en la implementación del acuerdo, ponen en serio riesgo la paz en el país. En esta coyuntura, el propio secretario general recomendó al Consejo de Seguridad de la ONU, –en previsión de una nueva escalada de la violencia– el mantenimiento de la misión de la UNMISS, misión que concluía operaciones el 15 de diciembre, así como el envío de 1.100 cascos azules extraordinarios para mejorar la seguridad en los campos de desplazados y proteger a los civiles. Dependerá mucho del papel de los mediadores internacionales y de las presiones de la comunidad internacional, que el país pueda seguir avanzando en la reconciliación nacional y supere los diferentes escenarios de riesgos que están poniendo en cuestión el recorrido de la paz en la nación más joven del continente.

6.5. Venezuela, un nuevo escenario político marcado por la polarización de poderes

El contundente triunfo en las elecciones parlamentarias de la oposición ha abierto en el país un nuevo escenario político marcado por la polarización de fuerzas entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. Tras más de 15 años de control absoluto de las instituciones que habían permitido al chavismo el desarrollo de las reformas necesarias para la puesta en marcha de su proyecto socialista, las elecciones del 6 de diciembre han supuesto un golpe importante al régimen y su proyecto de revolución bolivariana, abriendo un escenario incierto, caracterizado por el temor al incremento de las tensiones políticas, a la mayor polarización social y a posibles estallidos de violencia.

En unas elecciones legislativas que se vislumbraban de antemano complicadas para el ejecutivo presidido por Nicolás Maduro, la coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se alzó con la victoria de manera rotunda, logrando 112 diputados de los 167 que componen la Asamblea Nacional, alcanzando la mayoría cualificada de 2/3 partes de la cámara, que le otorga un control absoluto de la misma. Según los datos facilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con una participación del 74,25% del censo, el MUD obtuvo el 67,07% de los votos (7.707.422 votos), mientras que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró un 32,93% de respaldo popular (5.599.025 votos), lo que se traduce en 55 escaños. De manera comparativa con los que eran hasta la fecha los últimos comicios, el MUD obtuvo 343.000 votos más que en los obtenidos por Henrique Capriles en las presidenciales de 2013, mientras que el PSUV perdió casi dos millones de votos de forma comparada.⁹ Estos resultados representan la segunda derrota electoral del chavismo en 15 años –la primera corresponde a la pérdida del referéndum de reforma constitucional celebrado en 2007–,¹⁰ y además son los peores de su historia en cuanto a respaldo popular se refiere, lo cual ha dejado seriamente tocado al régimen. Una de las lecturas realizada por analistas locales sobre el holgado triunfo de la oposición tiene que ver con su capacidad de unión y de aglutinamiento de fuerzas, así como la gran movilización del voto conseguida gracias a un contexto local caracterizado por el fuerte descontento social frente a la crisis económica y sus efectos en el desabastecimiento de productos y la elevada inflación del país.

La alianza opositora ha salido de los comicios ampliamente fortalecida, con una mayoría absoluta en

el Parlamento que le da la posibilidad de transformar la política nacional, teniendo capacidad en la cámara para aprobar leyes orgánicas importantes, reformar la Constitución, derogar leyes habilitantes, emitir votos de censura y destitución contra el vicepresidente de la República y los ministros, designar y remover a los integrantes del Poder Electoral, etc. En definitiva, llevar la iniciativa parlamentaria. Incluso, las fuerzas opositoras se encuentran en disposición de activar la recolección de firmas para impulsar durante el 2016 un referéndum revocatorio que podría dar paso a nuevas elecciones presidenciales, evitando así que el presidente Maduro pudiese agotar su legislatura, que concluye en 2019.

Sin embargo, por otro lado, el Gobierno bolivariano tiene aún capacidad de respuesta, ya que sigue controlando de facto todos los poderes del Estado, pudiendo utilizar la figura del presidente, así como al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –controlado por el Gobierno– para bloquear cualquier iniciativa parlamentaria, vetándola por considerarla inconstitucional.

Este nuevo escenario político nacional, que se iniciará oficialmente a partir del 5 de enero de 2016, cuando se constituya la nueva Asamblea Nacional, se presenta por un lado esperanzador para la oposición política venezolana, que ansia cambios y reformas importantes en el rumbo del país, y por otro lado, representa una crisis de grandes dimensiones –en palabras de Maduro– que pone en riesgo el proyecto socialista del Gobierno. En esta polarización de intereses, y con un nuevo balance de fuerzas en Venezuela, es de esperar que las tensiones políticas, los enfrentamientos de una sociedad fragmentada e incluso el estallido de brotes de violencia se presenten como futuros escenarios de riesgo en el país. De hecho, las reacciones de ambas partes a los resultados electorales han dado una muestra del nuevo pulso que se avecina en la nueva correlación de posiciones.

El Gobierno de Maduro, incluso desde la campaña electoral, empleó discursos contradictorios en un hipotético escenario de derrota. Por un lado anunciaba su disposición a reconocer cualquier escenario adverso que pudiera surgir, a la par que empleaba alegatos amenazantes frente a la posibilidad del triunfo de la oposición, avisando que la revolución no sería “entregada” de ninguna manera. Con la presentación

Tras más de 15 años de control absoluto de las instituciones por el chavismo el régimen ha recibido un duro golpe que abre un escenario incierto, caracterizado por el temor al incremento de las tensiones políticas, a la mayor polarización social y a posibles estallidos de violencia

9. Las elecciones presidenciales de 2013, las primeras tras la muerte de Hugo Chávez, contaron con una participación del 79,68% del censo y dieron a Nicolás Maduro la victoria electoral con un ajustado 50,61% de los votos (7.587.579), frente al 49,12% del candidato opositor Henrique Capriles, quien obtuvo 7.363.980 votos.

10. El 2 de diciembre de 2007 se celebró el referéndum para la reforma constitucional, en el cual más de tres millones de venezolanos se abstuvieron, permitiendo el triunfo del no y generando el primer revés del chavismo.

de los resultados, y el golpe que han supuesto para el Gobierno, las declaraciones han ido subiendo el tono dejando latente que no se tenderá ningún puente al diálogo y que se defenderá el legado chavista, aunque también aquí se ha mostrado la otra cara más moderada, reconociendo el triunfo de la oposición como una victoria del sistema democrático nacional. El Gobierno, en esta polarización del discurso, ha intentado leer los resultados como un triunfo de la contrarrevolución, a través de su guerra económica para derrocar al Gobierno, y ha advertido que abrirá una crisis de grandes dimensiones que generará importantes tensiones. A la par que las declaraciones han subido de tono, el Gobierno ha reaccionado aprovechando las últimas semanas de control parlamentario para tratar de blindar su poder. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y número dos del partido de Gobierno, anunció el nombramiento de 12 nuevos magistrados del TSJ, así como la designación de la jueza que condenó al opositor Leopoldo López, Susana Barreiros, como defensora pública general de Venezuela. Estos movimientos dejan patente que por ahora, el Gobierno de Maduro ha reaccionado a la defensiva, tratando de proteger sus políticas, pero también, tratando de enviar un mensaje de cohesión frente a las posibles divisiones internas que se generen en el seno del partido y sus aliados debido a la debacle electoral, que ha vuelto a mostrar nuevamente –como ocurrió con la victoria por la mínima en las elecciones presidenciales de 2013– que Maduro no es Chávez, y que el fallecimiento del emblemático líder venezolano abrió el principio del fin de un ciclo en la política nacional.

Por otro lado, la oposición también presenta diferentes líneas internas de fractura que han logrado dirimir para concurrir a los comicios en coalición, pero que siguen estando presentes, existiendo una línea dura, encabezada por Leopoldo López –condenado en la actualidad a más de 13 años de prisión–, que buscará un referéndum revocatorio que ponga fin al Gobierno

Las elecciones legislativas dieron una victoria rotunda al bloque opositor, que obtuvo 112 diputados de los 167 que componen la Asamblea Nacional, alcanzando la mayoría cualificada de 2/3 partes de la cámara, que le otorga un control absoluto de la misma

de Maduro, y otra más moderada, encabezada por Capriles, que propone tender puentes de diálogo para iniciar la transicional nacional. Una de las primeras medidas que la oposición ha anunciado que planteará en bloque en las primeras sesiones y que representará posiblemente el primer choque con el Ejecutivo, será la relativa a la aprobación de la ley de amnistía de la que se beneficiarían unas 80 personas que la oposición considera presos políticos, sobre la cual el presidente ya ha afirmado rotundamente que de ninguna manera se aprobará.

En este escenario, destacan algunos elementos que incidirán en el devenir de la vida política. Por un lado, será de vital importancia el impacto social que tengan sobre el país las medidas necesarias que se tendrán que tomar para paliar la grave crisis económica que vive actualmente Venezuela, condicionado por el hundimiento del precio del petróleo que ha mermado la capacidad de ingresos del ente público. La salida o no de la crisis económica y el talante de sus medidas –la impopularidad que pueden suponer, que hasta ahora el Ejecutivo ha tratado de evitar– puede aumentar el gran descontento social ahondando más en la crisis de gobernabilidad. Paralelamente, a su vez será crucial el papel que jueguen las Fuerzas Armadas. Todavía está por verse si el nuevo ciclo político abierto contará con su lealtad al régimen chavista o bien se posicionarán del lado de la legalidad, como ya algunos sectores castrense han manifestado.

Sin duda, la nueva situación política de Venezuela, que tras 15 años ha cambiado sustancialmente la correlación de fuerzas, abrirá nuevas tensiones y disputas entre un Ejecutivo y un Legislativo completamente polarizados, cargados de agravios y pugnas históricas que pueden degenerar en convulsionar aun más la política nacional, ampliar la brecha y fragmentación de la sociedad, así como en el estallido de nuevos brotes de violencia.

6.6. Afganistán: la falta de legitimidad del nuevo liderazgo talibán y sus repercusiones en el proceso de paz

El 7 de julio de 2015 por primera vez, se sentaron a la mesa de negociación representantes del movimiento talibán y del Gobierno afgano en la ciudad pakistaní de Murri con el objetivo de buscar salidas negociadas al conflicto armado que asola al país. Durante los meses anteriores, en las rondas de contacto en diferentes escenarios, se establecieron las condiciones para el acercamiento. Los contactos, no obstante, se realizaron en medio de la ofensiva insurgente más violenta de los últimos años. A pesar de todo, las señales que llegaban de las partes eran contradictorias. Mientras que el líder en funciones, el Mulá Akhtar Mansoor accedía a negociar (en nombre del líder, Mulá Omar), una serie de mensajes de la oficina política deslegitimaba a la delegación talibán en Murri. Las divisiones surgidas a raíz de las negociaciones con el Gobierno requerían que el líder talibán diera su opinión públicamente. Por eso, el 15 de julio, el Mulá Mansoor daba a conocer un mensaje del Mulá Omar,¹¹ en el que respaldaba las negociaciones con el Gobierno, aunque en el mensaje recordaba que la oficina de Doha estaba encargada de los asuntos políticos de los talibán. Un día antes de la segunda ronda de negociación, planificada para el 30 de julio, se hizo pública la muerte del Mulá Omar. Al día siguiente, los talibán lo admitían y anunciaban su sucesor, el Mulá Mansoor.

Inmediatamente, se hicieron públicas las discrepancias. La muerte del líder ponía en evidencia la manipulación del Mulá Mansoor, que llevaba años dirigiendo el movimiento, y según sus detractores, manipulando a los líderes y comandantes para hacerse con el liderazgo. Pero el proceso no solo dividía a los talibán. El apoyo del Presidente Ashraf Ghani a la negociación en medio de la violencia y el acercamiento a Pakistán debilitaba su posición en el dividido Gobierno de Afganistán.

Tras 14 años de conflicto armado, la necesidad de llegar a un acuerdo de paz entre el movimiento talibán y el Gobierno afgano llegó a ser obvia para todas las partes implicadas. EEUU, que durante mucho tiempo llevó una estrategia de eliminación total de la insurgencia, finalmente admitió que la única salida al conflicto pasaba por un diálogo con los talibán. Los primeros encuentros sirvieron para explorar cuáles eran las demandas de las partes. Estos contactos previos fueron el primer paso para la apertura de la oficina política de los talibán en Qatar, como representación oficial, incluyendo el proceso

de reconciliación. En 2009, hubo varios encuentros entre interlocutores alemanes y talibán en Dubai.¹² En la Conferencia de Londres de enero de 2010, Hamid Karzai recibió el respaldo definitivo al presentar su hoja de ruta para la reconciliación y la reintegración.¹³ Entre otros encuentros, el representante de Naciones Unidas, Kai Eide, se reunió con una delegación talibán enviada por el Mulá Baradar, en Dubai a principios de 2010; en Maldivas, hubo varios encuentros entre parlamentarios afganos, miembros del *Hizb-e Islami* y de los talibán en febrero y mayo 2010; EEUU llevó a cabo contactos intermitentes desde 2010 a 2012 en Alemania y Qatar. En enero de 2012, tras una ronda de consulta con todos los sectores talibán (tanto los comandantes en terreno como los gobernadores no oficiales), la oficina talibán en Doha hizo oficial su voluntad de comenzar un esfuerzo político para la resolución del conflicto. El 2015 comenzaba con una nueva ronda de encuentros calificados como “meros contactos” en Qatar, China, Dubai y Noruega, entre representantes del Alto Consejo para la Paz afgano y los talibán. Este proceso culminó el 7 de julio en Murri.

Sin embargo, la revelación de la muerte del Mulá Omar (la fecha oficial es abril de 2013) marcó un punto de inflexión. Sacó a la luz las luchas de poder que, hasta el momento, se mantenían de forma privada. La figura de Omar servía de nexo de unión para el movimiento. La obediencia al emir era un deber religioso que formaba parte de la doctrina talibán,¹⁴ aunque los rumores de su muerte fueran constantes desde que al menos una década atrás, desapareciera de la escena pública. Durante el Gobierno talibán, Akhtar Mansoor fue ministro de Aviación Civil y Turismo. En 2007, según su biografía oficial, fue uno de los dos líderes en funciones junto al Mulá Abdul Ghani Baradar. Cuando este último fue encarcelado por Pakistán en 2010, se convirtió en el líder en funciones del Emirato Islámico y del Consejo de Liderazgo talibán.¹⁵ La oposición a Mansoor se centraba en torno a varios conocidos líderes y miembros de la familia del Mulá Omar.¹⁶ El principal es el Mulá Abdul Qayyum Zakir, que siempre se opuso a las negociaciones. Zakir es un líder veterano y comandante de la insurgencia en el sur, el cual, al igual que los sectores más fuertes militarmente, se opone al diálogo. Cuenta con una historia de enfrentamiento con Mansoor, que se agravó tras la apertura de la oficina

Mientras los talibanes resuelven sus problemas de liderazgo, sectores disidentes pueden formar grupos más radicales o unirse a Estado Islámico (ISIS), que ya está presente en algunas provincias

11. La publicación de sus edictos u opiniones políticas se hacían de forma bianual, en las fiestas del *'Eid ul-Fitr* y de *'Eid ul-Adha*.

12. Thomas Ruttig, “Is the Afghan Peace Process Really in Shambles?”, *Afganistão*, Nação e Defesa. n.º 130, Lisboa, 2011, pp. 31-54.

13. Thomas Ruttig, “The Taliban Arrest Wave. Reasserting Strategic Depth?” *CTC Sentinel*, Vol 3(3), págs.3-6, 03 de marzo de 2010

14. Michael Semple, “The Mullah Omar Myth”, *Politico*, 30 de julio de 2015.

15. Según B. Rubin, su base de apoyo puede llegar al 40% mientras que el Mulá Zakir puede controlar cerca del 20%. Barnett Rubin, “Turmoil in the Taliban”, *The New Yorker*, 31 de julio de 2015.

16. El hermano pequeño, Abdul Mannan, y el hijo del Mulá Omar, el Mulá Muhammad Yakub.

de Doha. Zakir, además, siempre se opuso al liderazgo de Mansoor. De hecho, tras meses de enfrentamiento verbal, en agosto de 2014, Mansoor le destituyó como comandante “en nombre” de Omar.

En relación al Gobierno afgano, poco después de ser nombrado presidente el 29 de septiembre de 2014, Ashraf Ghani hacía dos visitas oficiales a los países con los que su vecina Pakistán tenía mayor afinidad: Arabia Saudí y China. Poco después visitó Pakistán, con la oposición del Parlamento y del jefe ejecutivo, Abdulá Abdulá. Antes de su visita en noviembre, el director de las Fuerzas Armadas, el general Raheel Sharif y el director de los Servicios de Inteligencia pakistaníes (*Inter-Services Intelligence*, ISI) habían visitado Kabul. Para conseguir el éxito de las negociaciones, Ghani creía necesario implicar a Pakistán en el proceso. Según él, Pakistán tenía la obligación de cooperar con el Gobierno afgano, dado que consideraba que el conflicto no se libraba entre su Gobierno y los talibán, sino entre Afganistán y Pakistán. Pero la presión a la que Pakistán fue sometido para sentar a los talibán a negociar, demostró por una parte, que no controlaba a todo su liderazgo, y por otra, su posición de poder en el proceso.

Pakistán no ha cambiado su visión estratégica respecto a lo que quiere en Afganistán. Aunque el Gobierno siempre lo haya negado, la cúpula talibán ha estado ubicada en la capital de la provincia de Baluchistán, Quetta, desde la invasión estadounidense de 2001. Desde el anuncio de la retirada de las tropas extranjeras, Pakistán se acercó más al liderazgo talibán en un intento por establecer una cúpula de mando afín. La elección del Mulá Mansoor se entendió bajo este prisma, dado que se hizo con premura y en suelo pakistaní. Con la fecha de retirada de las últimas tropas en mente, desde marzo de 2015, Pakistán presionó cada vez más a los talibán para sentarse a negociar. Desde el principio, el papel de la oficina política en Qatar estuvo en cuestión, no solo por las divisiones en cuanto a la reconciliación. En buena parte, el problema tiene que ver con este control que Pakistán quiere ejercer en las negociaciones. Una de las razones de su apertura era la de llevar a cabo contactos oficiales en un ambiente más neutral. Los talibán, aunque eran vistos como meras marionetas de Pakistán, mostraban la intención de mantener el proceso de

reconciliación lejos de su influencia. Pero desde el inicio de los contactos, Pakistán dejó clara su postura de no consentir que se llevaran a cabo sin su consentimiento o conocimiento. Una muestra de ello fue la detención del Mulá Baradar en febrero de 2010, cuando se supo que estaba llevando a cabo negociaciones con el Gobierno afgano de forma independiente.¹⁷

Un buen número de talibán acusó a Pakistán de manipular el encuentro de Murri. Incluso, se afirma que no fueron autorizados a negociar.¹⁸ Además junto a ellos, estuvieron sentados miembros del ISI. Una acusación similar se hizo tras el encuentro en Urumqi (Xinjiang, China), cuando Pakistán no fue capaz de sentar a la mesa líderes de peso. Esta delegación, formada por el Mulá Abdul Jalil (anterior ministro en funciones de Exteriores), Mulá Hassan Rahmani (ex gobernador de Kandahar) y Mulá Abdul Razaq (anterior ministro de Interior) no tenía conexión con la comisión política talibán ni influencia en su jerarquía.¹⁹ Mohammad Naim Wardak, portavoz de la Oficina de Qatar, acusó a Pakistán de “secuestrar el proceso al sentar a la mesa miembros no elegidos ni representantes del movimiento”.²⁰ Igualmente, los talibán querían que el encuentro en Murri fuera secreto y sin embargo, Pakistán hizo pública la negociación.

A la espera de que los talibán resuelvan sus problemas de liderazgo, hay que tener en cuenta que los disidentes pueden formar grupos más radicales o unirse al grupo armado Estado Islámico (ISIS), con presencia en algunas provincias. De hecho, en Zabul, hay una nueva escisión que lidera el Mulá Rasool Akhund, que lucha junto al ISIS. Un movimiento talibán dividido plantea que el futuro acuerdo con el Gobierno sea frágil y no se respete. Además de debilitar más la posición del presidente Ghani en el Gobierno, la presión de la administración estadounidense, con unas elecciones en el horizonte y un plan de retirada de tropas previsto para diciembre de 2017, pone en peligro el proceso, al querer apresurarlo. Por otra parte, Pakistán no puede mantener la duplicidad de lanzar una ofensiva militar contra sus talibán, mientras sigue albergando a los talibán afganos, a pesar de que en este año han lanzado la mayor campaña de violencia desde 2001. De ello depende el futuro de la reconciliación afgana.

17. Thomas Ruttig, “The Taliban Arrest Wave. Reasserting Strategic Depth?”

18. Abdul Latif Mansoor, Haji Ibrahim Haqqani y Mulá Abbas. Barnett Rubin, “Turmoil in the Taliban”, op.cit.

19. Posteriormente, estos tres líderes se posicionaron en contra del nombramiento del Mulá Mansoor como líder. B. Rubin, What Could Mullah Mohammad Omar’s Death Mean for the Taliban Talks? *The New Yorker*, 29 de julio de 2015.

20. Abubakar Siddique, “Talks divide Taliban. Herald an End to its Relationship with Islamabad”, Gandhara, 10 de julio de 2015.

6.7. Filipinas: El proceso de paz en Mindanao, en la encrucijada

En marzo de 2014, tras más de 17 años de negociaciones, el Gobierno de Filipinas y el grupo armado de oposición Moro Islamic Liberation Front (MILF) firmaron el Acuerdo Global sobre Bangsamoro para tratar de poner fin a un conflicto armado que se remonta a finales de los años 60 y que según algunas fuentes ha provocado la muerte de más de 120.000 personas y el desplazamiento forzoso de más de dos millones de personas en Mindanao, la región meridional del país. Previamente, en octubre de 2012, ambas partes, con la facilitación del Gobierno de Malasia, habían sentado las bases de dicho histórico acontecimiento con la firma del Acuerdo Marco sobre Bangsamoro. En términos generales, el acuerdo de paz prevé la desmovilización del MILF y la sustitución de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), tras un periodo transitorio liderado por el MILF, por una nueva entidad denominada Bangsamoro que tenga un mayor alcance competencial y territorial que la RAMM. Sin embargo, para que el proceso de paz siga su curso y el acuerdo de paz pueda ser implementado, se requiere que el Congreso apruebe una ley –a ser posteriormente ratificada en referéndum en las áreas de Mindanao afectadas– que concrete los contenidos del acuerdo de paz y regule la nueva entidad autónoma de Bangsamoro. El borrador de la denominada Bangsamoro Basic Law (BBL), una suerte de constitución o estatuto de autonomía de Bangsamoro, fue finalizado a principios de 2014 y, tras varios meses en los que el Gobierno revisó la constitucionalidad y viabilidad política de sus contenidos, fue entregado al Congreso para que fuera tramitado y aprobado con carácter de urgencia. Sin embargo, desde entonces el Congreso no ha aprobado la BBL y cada vez son más las voces las que se oponen firmemente al acuerdo de paz, generando un enorme malestar en el seno del MILF y provocando una gran incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz e incluso sobre una posible reanudación de la violencia en Mindanao.

La presión en contra del presidente, el Gobierno y el Congreso para ralentizar o incluso paralizar la aprobación de la BBL se incrementó sustancialmente a principios de enero, cuando alrededor de 70 personas, entre ellas 44 miembros de un cuerpo especial de la Policía, murieron en la localidad de Mamasapano (provincia de Maguindanao) durante un enfrentamiento en el que participaron, entre otros, el MILF y el Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF, una escisión del MILF opuesta a las conversaciones de paz). Dicho enfrentamiento generó una de las peores crisis de confianza de los últimos años entre el Gobierno y el MILF y provocó la suspensión indefinida de la tramitación parlamentaria de la mencionada ley. A pesar de que en el mes de abril se reanudaron las

deliberaciones en la Cámara de Representantes, un porcentaje importante de congresistas y numerosos medios de comunicación mostraron abiertamente su oposición a la BBL por considerarla anticonstitucional y por sus dudas acerca de las intenciones del MILF de desarmarse. En este sentido, en el mes de junio, la Philippine Constitution Association y un partido político presentaron una instancia ante la Corte Suprema para que declarara inconstitucionales tanto el Acuerdo Marco sobre Bangsamoro como el Acuerdo Global sobre Bangsamoro por considerar que violaban varios preceptos de la Carta Magna y que incluían concesiones que sobrepasaban las competencias del Gobierno. Cabe recordar que en 2008, la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y el MILF, denominado Memorando sobre Territorios Ancestrales, provocó la fractura interna del MILF, el surgimiento del BIFF y la espiral de violencia más importante que ha vivido la región en los últimos años.

Por otra parte, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron dos borradores de ley muy alejados de la propuesta original acordada entre el Gobierno y el MILF. El presidente del comité del Senado encargado de la tramitación parlamentaria de la BBL declaró que el 80% de los contenidos de la versión original de la ley habían sido modificados. De hecho, la cúpula del MILF denunció que dichas versiones de la BBL preveían para Bangsamoro unos niveles de autogobierno incluso inferiores a los de la actual RAMM. Además del desencuentro acerca de los contenidos de la BBL, la confianza del MILF en el proceso de paz también se vio erosionada por los constantes retrasos que ha sufrido su tramitación parlamentaria desde septiembre de 2014. Tras la presión que durante todo el año ejercieron el presidente, Benigno Aquino, y el Gobierno al Parlamento, los presidentes de ambas cámaras se comprometieron a aprobar la BBL hacia mediados de diciembre. Sin embargo, numerosos analistas advirtieron que la urgencia e importancia del debate sobre los presupuestos de 2016 y el inicio de la campaña electoral a principios de 2016 de cara a los comicios del mes de mayo concedían escaso tiempo y margen para la aprobación de la BBL. En diciembre, el propio Aquino se reunió directamente con más de un centenar de congresistas para convencer al Congreso sobre las virtudes del acuerdo de paz, pero al finalizar el año algunos parlamentarios declararon abiertamente que no había ninguna posibilidad de que la BBL fuera aprobada.

Ante todas estas dificultades y retrasos, en varias ocasiones durante el año el MILF advirtió sobre los riesgos de que finalmente no se apruebe la BBL y dejó clara su oposición a la aprobación de cualquier ley

Para que el proceso de paz en Filipinas siga su curso y el acuerdo de paz pueda ser implementado, se requiere que el Congreso apruebe una ley que concrete los contenidos del acuerdo de paz y regule la nueva entidad autónoma de Bangsamoro

que diste sustancialmente de la letra y el espíritu del acuerdo de paz. Así, el MILF declaró que pondría fin a la entrega de armas y desmovilización de combatientes, que ya se inició de manera simbólica en el mes de junio; admitió estar recibiendo numerosas presiones para abandonar las conversaciones de paz y dar por imposible la aprobación de la BBL; aseguró no poder garantizar su control sobre todas las facciones internas que se oponen al proceso de paz; y advirtió sobre las posibilidades de que un colapso del proceso de paz provoque una radicalización ideológica en Mindanao, una mayor legitimación de aquellas voces y grupos que apuestan por la continuación de la lucha armada y un claro incremento de las peticiones de independencia en la región. En este sentido, la cúpula del MILF señaló que la comunidad internacional pedirá responsabilidades al Gobierno filipino si la guerra vuelve a estallar en Mindanao.

Tanto si la Corte Suprema declara inconstitucionales el Acuerdo Marco de Bangsamoro y el Acuerdo Global sobre Bangsamoro, como si el Congreso no aprueba un borrador de BBL que el MILF considere aceptable, existe el riesgo de que las facciones más intransigentes y militaristas del MILF acaben imponiéndose y arrastren nuevamente al MILF al conflicto armado, o bien que algunos de los grupos armados que operan en Mindanao vean legitimada su estrategia militar y fortalecida su membresía por el ingreso de hasta entonces combatientes del MILF. Respecto del primer punto, tanto el MILF como el propio Gobierno recordaron en más de una ocasión que cualquier paso en el proceso de desarme y desmovilización del MILF está vinculado a los avances que se vayan produciendo en la implementación del acuerdo de paz. Según éste, además de la ceremonia simbólica de inicio del proceso que se llevó a cabo en junio, el 30% de los combatientes del MILF se desmovilizarían tras la aprobación de la BBL, otro 35% tras la creación de una fuerza policial en la nueva región de Bangsamoro y el 30% restante con la finalización de la implementación del acuerdo de paz. Cabe recordar que, según la mayor parte de estimaciones, el MILF contaría con entre 10.000 y 12.000 combatientes, un contingente muy considerable.

Por otra parte, algunos grupos armados que también operan en Mindanao y dicen luchar por objetivos parecidos a los del MILF y representar al mismo colectivo (el pueblo moro) podrían verse claramente fortalecidos por un fracaso del actual proceso de paz. A modo de ejemplo, en la segunda mitad de los años noventa, las dificultades en la implementación del acuerdo de paz de 1996 entre el Gobierno y el Moro National Liberation Front (MNLF) provocaron un fortalecimiento del MILF, que se opuso a dicho acuerdo. En 2008, el colapso del acuerdo de paz entre el Gobierno y el MILF provocó la emergencia del BIFF, un grupo claramente opuesto

al diálogo con el Gobierno y que ha estado detrás de los principales hechos de violencia en la región hasta mediados de 2015. A pesar de que la intensidad de las operaciones de contrainsurgencia por parte de las Fuerzas Armadas y el fallecimiento de su líder y fundador –Ameril Umbra Kato– provocaron un debilitamiento del grupo, no sería descartable que un colapso abrupto del proceso de paz fortaleciera la posición del BIFF. Del mismo modo, algunas de las facciones del MNLF han expresado su oposición al proceso de paz entre el MILF y el Gobierno por considerar que el acuerdo que alcanzaron ambas partes en 2014 invalida y sustituye buena parte de los contenidos del acuerdo de paz que firmó el MNLF con el Gobierno en 1996. Algunos de los líderes del MNLF, como su fundador, Nur Misuari, se mostraron más beligerantes al respecto y declararon su disposición a acoger entre sus filas a combatientes desengañados o descontentos con la línea oficialista del MILF y a seguir luchando por el establecimiento de una república bangsamoro en Mindanao. Otros dirigentes del MNLF han sido más conciliadores respecto del MILF, pero todos ellos han puesto de relieve las dificultades de que la BBL sea capaz de recoger las aspiraciones del MNLF y de incorporar los aspectos sustanciales del acuerdo de paz de 1996. Cabe recordar que el MILF se escindió del MNLF a finales de los años 70' y que algunos de sus bastiones son cercanos a los del MNLF.

Hasta el momento, tanto el MILF como el Gobierno han mostrado públicamente su compromiso hacia el diálogo y han mostrado su esperanza de que una BBL respetuosa con el acuerdo de paz sea aprobada antes de la finalización del mandato de Benigno Aquino, a finales de junio. Además, la comunidad internacional se ha involucrado de manera importante tanto en la negociación como en la implementación del acuerdo y durante el 2015 se han registrado importantes movilizaciones a favor del proceso de paz en Mindanao. También cabe resaltar que el MILF y el Gobierno tienen vigente un acuerdo de alto el fuego desde el año 2003 y que en los últimos años los niveles de violencia entre las partes han sido prácticamente inexistentes. A pesar de ello, el proceso de paz se halla en una situación enormemente compleja. Incluso el mejor de los escenarios (una pronta aprobación de la BBL) implicaría un retraso importante respecto de la hoja de ruta originalmente trazada y dejaría en manos de la siguiente administración la implementación de los aspectos más sustanciales del acuerdo de paz. Algunos de los candidatos presidenciales, por ejemplo, ya han mostrado su escepticismo respecto de un acuerdo de paz que no habría sido diseñado por su Gobierno, sino que sería una herencia del anterior Ejecutivo. En el peor de los escenarios, no habría que descartar un fin abrupto del proceso de paz, que en anteriores ocasiones ha comportado nuevos y dramáticos ciclos de violencia.

6.8. El conflicto Turquía-PKK: los riesgos de una deriva mayor

El conflicto entre Turquía y la guerrilla kurda del PKK, que acumula desde los años 80 varias decenas de miles de muertes, desplazamiento, desapariciones y elevados niveles de trauma, asistió en 2015 al colapso del diálogo y a una grave vuelta a la violencia, con diversos elementos preocupantes. Entre ellos: los interrogantes cada vez de más calado en torno a la visión del Gobierno sobre la solución al conflicto; la urbanización de la guerra y un aumento de los impactos indiscriminados; una mayor “sirianización” de la cuestión kurda de Turquía y la irrupción de ISIS como un actor desestabilizador en suelo turco; y el deterioro del clima social en las calles. Además, el retorno a la guerra abierta entre Turquía y PKK tiene lugar en un contexto de regresión democrática en el conjunto de Turquía, acentuada en un año clave en lo electoral. Si no se reconduce la situación a corto plazo, se podría asistir a una deriva más compleja y con mayores impactos sobre la población civil.

Entre los elementos preocupantes a corto y medio plazo, cabe destacar que 2015 fue el año del naufragio del proceso de diálogo de Imrali iniciado a principios de 2013 –precedido del diálogo de Oslo (2009-2011)– y el año de la vuelta a la guerra abierta entre Turquía y PKK a finales de julio. En esa transición de diálogo a guerra operaron factores diversos. Entre ellos, la fragilidad acumulada del proceso de diálogo, incluyendo falta de mecanismos suficientes para su propio desarrollo, la falta de un marco o hoja de ruta conjunta clara y asumible y las expectativas poco realistas (ej. expectativa gubernamental de un abandono automático de la lucha armada por el PKK tras la declaración de Dolmabahçe en febrero). Y con todo ello, un gran interrogante de fondo sobre si existe voluntad real del Gobierno de una salida negociada –pese a ser Erdogan el impulsor del diálogo– o si lo que falló fue el proceso en sí. La campaña militar que siguió, más indiscriminada, hace pensar más en una falta de voluntad clara.

Otro factor en la transición de diálogo a guerra ha sido la contaminación del proceso de paz por la contienda electoral, en un contexto de máxima rivalidad entre el AKP y el HDP –y en el que el movimiento kurdo compitió por vez primera como partido, desafiando el elevado umbral del 10%– y de gran polarización política y social ante el empeño de Erdogan de promover un cambio a régimen presidencialista. Después de la pérdida de votos del AKP en las elecciones de junio –tras la cual no hubo acuerdo para un gobierno de coalición–, aparentemente la campaña militar y la acentuación del discurso antiterrorista resultó funcional para la gran remontada del AKP en las elecciones de noviembre. Aun así, el HDP consiguió superar el umbral del 10%. Está por ver aún si en el proyecto de hegemonía política del AKP

cabe realmente el pluralismo político parlamentario y un diálogo formal sólido entre Gobierno y el PKK.

Por otra parte, si bien la vuelta a la violencia no es una dinámica nueva, sí se da un elemento más novedoso: la urbanización de la guerra. La escalada de violencia desde julio de 2015 ha incluido no solo bombardeos en zonas remotas sino también operaciones antiterroristas de envergadura en barrios urbanos del sudeste. Las operaciones, presentadas por el Estado como acciones contra el PKK, han incluido toques de queda y bloqueos a localidades. Según organizaciones locales de derechos humanos, estas ofensivas han supuesto víctimas mortales civiles, incluyendo menores, y otros impactos en seguridad humana y de carácter indiscriminado como desplazamiento, cortes de electricidad, restricciones

El colapso del diálogo entre Ankara y el PKK, la urbanización de la guerra y la “sirianización” de la cuestión kurda en Turquía apuntan a riesgos de una mayor deriva del conflicto

de acceso a agua, alimentos y atención sanitaria y algunos abortos forzados por estrés psicológico. Las restricciones de movimiento han impedido una cobertura informativa adecuada y el acceso a observadores. Estas operaciones y la campaña militar general se produce en el marco de un fortalecimiento del Ejército como aliado del AKP, frente a su rivalidad anterior. Con ello, la doctrina de la guerra recobra fuerza y aleja el diálogo.

Paralelamente, se ha asistido a un proceso de fortalecimiento de las milicias armadas pro-kurdas en ciudades del sudeste, impulsadas por el PKK, que habría promovido su organización y armamento, según algunas fuentes. La perspectiva de la población local es diversa, y abarca desde el apoyo local a las milicias en barrios afectados por las operaciones especiales hasta el rechazo a la estrategia del PKK por población kurda de otros barrios que temen que la inestabilidad llegue a sus calles. Se asiste, por tanto, a un deterioro del clima cotidiano y al incremento de armas en las calles. En todo caso, analistas señalan que las milicias, aún siendo autónomas, siguen reconociendo al PKK como autoridad última, descartándose a corto plazo espirales de violencia descontrolada. El despliegue de las milicias urbanas ha ido de la mano de declaraciones unilaterales de autonomía en diversas localidades, rechazadas por el Estado a través de sus operaciones especiales, evidenciándose la brecha que separa a ambas partes.

Un tercer factor preocupante es la *sirianización* del conflicto. El avance de las fuerzas kurdas en el norte de Siria –organizadas en torno al partido PYD y a las guerrillas YPG/YPJ, vinculadas al PKK– y el creciente apoyo internacional que reciben de manera abierta o encubierta como fuerza aliada clave en el terreno en la lucha contra ISIS, incluyendo por parte de EEUU y Rusia, ha aumentado la preocupación de Turquía. Ankara quiere evitar a toda costa el fortalecimiento del PKK y la

consolidación del autogobierno kurdo –además de su otro gran objetivo, el derrocamiento de Assad– y ha advertido de que su línea roja pasa porque las fuerzas kurdas en Siria no se expandan al oeste del Éufrates. Así, Turquía lanzó algunos ataques a finales de 2015 contra los kurdos de Siria. Al mismo tiempo, Turquía sigue siendo importante para EEUU, que se beneficia de la luz verde al uso de la base militar turca de Incirlik en el marco de la campaña de la coalición internacional. La mayor implicación de Rusia en Siria en el último cuatrimestre de 2015, con su vasto poder militar, y la crisis entre Turquía y Rusia por el derribo de Turquía de un avión ruso, supone un movimiento tectónico y está por ver aún todo el alcance de sus consecuencias para Turquía y la cuestión kurda. Mientras, para el movimiento kurdo de Turquía, Siria ha adquirido una importancia estratégica, simbólica y de supervivencia crucial, ejemplificada en la respuesta al asedio de ISIS a Kobane entre finales de 2014 y principios de 2015 y en su proyecto de autogobierno –por primera vez en la historia del PKK–. Los kurdos de Siria y Turquía acusan a Ankara de apoyo directo o indirecto a ISIS, principal enemigo de los kurdos de Siria. Asimismo, conviene no olvidar la presencia de fuerzas del PKK en Iraq contra ISIS, y los interrogantes sobre qué impactos tendrá ello en las relaciones –de rivalidad y en ocasiones de cooperación pragmática– entre el PKK y el oficialista kurdo KDP, aliado de Turquía. Ni el KDP ni Turquía querrán ver incrementada la zona de influencia del PKK, pero el KDP puede también ser puente pragmático entre PKK y Turquía. Así, pese a las dinámicas diferenciales y propias, el contexto regional influye directamente en la cuestión kurda en Turquía y está por ver si lo hace de manera determinante.

Vinculado a la “sirianización” del conflicto kurdo en Turquía, conviene alertar sobre la irrupción en suelo turco de círculos afines a ISIS. Así se plasmó en 2015 en los atentados en Diyarbakir (en junio, contra un mitin electoral del HDP, con media decena de muertes y un centenar de heridos), Suruç (en julio, contra una delegación turca y kurda en apoyo a Kobane, con una treintena de muertes y un centenar de heridos) y Ankara (en octubre, contra una marcha pro-diálogo de paz con amplia participación kurda, con un centenar de fallecidos y más de 400 heridos). El movimiento kurdo acusó al Gobierno turco, al que atribuyen apoyo a ISIS. Analistas pusieron en evidencia las negligencias

Está por ver si en el proyecto de hegemonía política del régimen de Erdogan hay voluntad real para una solución pacífica y dialogada al conflicto kurdo

del Estado en materia de seguridad y las consecuencias de su insuficiente control de la frontera con Siria. Se produjeron detenciones de personas con vínculos con ISIS por los atentados. En prensa se señaló la existencia de células de ISIS en Turquía, nutridas en gran parte de jóvenes de origen kurdo, influidos por un contexto complejo de victimización y expuestos a la radicalización. Según esos análisis, no hay bases aún para que ISIS se convierta en movimiento social en Turquía –contrarrestado en parte por el espacio que ocupa el islamista Huda Par, que no apoyaría a ISIS– pero hay riesgo de que células de ISIS exploten las líneas de división y se deteriore el clima que rodea a la cuestión kurda en Turquía.

Otro elemento del que conviene alertar es la profusión de incidentes violentos en las calles, visibilizados de manera clara durante la campaña electoral de junio, en que una multitud de sedes del HDP fueron atacadas en muchas zonas del país. Ha habido también mensajes de incitación al odio en medios de comunicación y redes sociales y hechos de violencia e intimidación contra medios y personas no seguidoras de las líneas políticas gubernamentales. En campos de fútbol, este enrarecimiento del clima social se ha hecho evidente en pitadas e insultos durante los minutos de silencio por las víctimas de atentados como el de Suruç o Ankara. Algunos análisis periodísticos señalan a bases seguidoras del AKP. Sean acciones dirigidas o no, existe el riesgo de un mayor deterioro del clima social en las calles, con expresión de fractura étnica y política.

Finalmente, cabe señalar también que en 2015 se acentuó la regresión democrática. El retroceso en libertad de prensa y libertad de expresión, la represión violenta de manifestaciones, y las detenciones contra civiles acusados de vínculos con el PKK son ejemplos de este endurecimiento de la esfera civil. Ante todo ello, el futuro inmediato contiene elementos de riesgo que podrían dificultar un reinicio temprano y sólido de un proceso de solución pacífica y dialogada a la cuestión kurda. Al mismo tiempo, existen aún ventanas de oportunidad para el diálogo, sobre la base de aproximaciones previas y la necesidad imperiosa de evitar un mayor deterioro de la situación. Urge por tanto redoblar los esfuerzos dentro y fuera de Turquía para sentar nuevas bases para la paz.

6.9. Violencia armada en Yemen: ¿una nueva Siria invisibilizada?

Yemen ha sido escenario de una conflictividad armada crónica en la última década, con una serie de dinámicas de violencia vinculadas a la guerra que desde 2004 enfrentó a los al-houthistas con las fuerzas de seguridad en el norte del país, a una constante y creciente actividad de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y, más recientemente, a la crisis que derivó en la salida de la presidencia de Alí Abdullah Saleh en 2011, en el marco de la oleada de revueltas populares contra regímenes autoritarios en toda la región. Yemen inició entonces una accidentada transición que inicialmente despertó ciertas expectativas, aunque transcurrió en paralelo a periódicos episodios de violencia armada. La situación se deterioró de manera acusada a finales de marzo de 2015, fecha en que una coalición internacional liderada por Arabia Saudita decidió intervenir para frenar el avance de las milicias al-houthistas, que habían forzado la caída del Gobierno de transición yemení a comienzos de año. A finales de 2015, el balance de esta nueva escalada era devastador: casi 6.000 personas fallecidas a causa de la violencia, la mitad de ellas población civil; más de un millón de personas desplazadas; y una dramática situación humanitaria, con un 80% de la población necesitada de ayuda. De cara a 2016, la situación en el país amenaza con agravarse dada la creciente complejidad del conflicto armado; el severo impacto de la violencia en la población yemení; y los obstáculos para la búsqueda de una salida política al conflicto. A finales de diciembre de 2015 un nuevo esfuerzo por comprometer a las partes contendientes en un diálogo ofrecía margen para una cauta esperanza, en medio de una crisis que tiene rasgos cada vez más similares a los de la guerra en Siria, pero que recibe escasa atención a nivel internacional.

Los antecedentes de esta última escalada de violencia en el país se remontan a 2014, en un contexto de frustración por la marcha del proceso de transición en el país. El acuerdo promovido por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en 2011 logró en su momento evitar una guerra civil, pero no sentó las bases para abordar los problemas de fondo del país, entre ellos el deterioro de la situación económica, la corrupción y las rivalidades entre las élites del país.²¹ El trabajo de la Conferencia de Diálogo Nacional (CDN) fue valorado positivamente en algunos aspectos, pero tampoco logró ofrecer una solución consensuada para temas clave, entre ellos la futura estructura del Estado. A mediados de 2014, el gobierno del presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi (ex vicepresidente de Saleh) enfrentaba un creciente descontento popular –en parte por la decisión de suspender subsidios a los combustibles– que fue aprovechado por los al-houthistas para dar un paso más en la ampliación de su influencia desde el norte. Con la implícita colaboración de sectores de las fuerzas de seguridad yemeníes leales a Saleh –en una alianza de conveniencia, ya que en los años previos se habían enfrentado en el marco de la guerra– los al-houthistas tomaron el control de Sanaa en septiembre. Poco después, a principios de 2015, forzaron la

salida del gobierno de Hadi en medio de desacuerdos sobre la división federal que se pretendía consagrar en la nueva Constitución. Pese a los intentos de mediación de la ONU, la crisis se agudizó. Los al-houthistas tomaron el control del poder y Hadi, que había sido sometido a arresto domiciliario, huyó a Aden (sur), denunció las acciones como un golpe de Estado y se exilió en Arabia Saudita. En este contexto, y ante el avance de los al-houthistas hacia el sur, a finales de marzo Riad decidió intervenir militarmente en Yemen, a la cabeza de una coalición integrada por EAU, Bahrein, Kuwait, Qatar, Jordania, Marruecos, Sudán y Egipto, que cuenta con el respaldo de países como EEUU y Reino Unido.

A partir de entonces, los niveles de violencia se intensificaron y el conflicto ganó en complejidad, fruto de la proliferación de actores armados, la influencia de intereses regionales y el cariz sectario que han ido adquiriendo los enfrentamientos. Si bien en un principio la coalición anti-houthi centró su estrategia en una campaña aérea, el conflicto derivó en una participación creciente de fuerzas terrestres de países de la alianza. Durante el verano, varios países de la coalición –entre ellos Arabia Saudita, Bahrein, EAU y Sudán– desplegaron efectivos para reforzar a las tropas yemeníes leales a Hadi y enviaron vehículos blindados importados de Occidente –tanto EEUU como Reino Unido han aprobado nuevas transferencias de armas a Riad y EAU– y consiguieron hacer retroceder a los al-houthistas de Adén. Informaciones dadas a conocer durante el segundo semestre de 2015 indican que cientos de mercenarios estaban llegando al país para reforzar el frente anti-houthi. Al menos 450 combatientes de origen latinoamericano –en su mayoría militares colombianos, a los que se ha dado preferencia por su experiencia de combate a las FARC– habrían sido trasladados a Yemen por EAU, introduciendo un elemento volátil más a un contexto ya muy complejo.²² Adicionalmente, Yemen ha sido crecientemente considerado como un escenario de confrontación indirecta entre Arabia Saudita e Irán, en el marco de su disputa por la hegemonía regional. Aunque el propósito declarado de su intervención es restaurar a Hadi en el poder, Riad también considera a los al-houthistas como una amenaza, y los acusa de ser aliados y peones de Teherán. Sin embargo, observadores y analistas destacan que los vínculos entre los al-houthistas e Irán no son estrechos ni operativos –no comparables a los que existen, por ejemplo, entre Teherán y Hezbollah–, aunque se han intensificado en el marco del conflicto. Los al-houthistas se han aproximado a Irán pero, según algunos analistas, el apoyo es limitado, y responde sobre todo a su potencial como “spoilers” (saboteadores) contra los saudíes.²³ El conflicto, y la influencia de la situación regional, también han contribuido a intensificar la lectura sectaria de los enfrentamientos entre los distintos actores armados, un aspecto que antes no era prevalente en la violencia armada yemení. Como han destacado algunos análisis, las diferencias entre las comunidades zaidíes (shiíes, predominantes en el norte del país) y shafíes (suníes, mayoría en el centro, sur y

21. International Crisis Group, *Yemen at War*, Crisis Group Middle East Briefing n°45, ICG, 27 de marzo de 2015.

22. Emily Hager y Mark Mazetti, «Emirates Secretly Sends Colombian Mercenaries to Yemen Fight», *New York Times*, 25 de noviembre de 2015.

23. Iba Abdo y Nick Grinstead, *Yemen: under fire, desperate for peace*, *Open Democracy*, 16 de junio de 2015.

occidente) de Yemen son menos marcadas que entre suníes y shííes, pero su historia de coexistencia se está viendo amenazada a causa del conflicto.²⁴ Cabe destacar también que la convulsión en el país está siendo aprovechada por AQPA para avanzar posiciones y consolidar su influencia en zonas suroccidentales del país –el grupo también se ha involucrado en los combates a los al-houthistas– y por la filial de ISIS en Yemen. Creada a fines de 2014, ISIS ha intentado capitalizar la narrativa sectaria y durante 2015 reivindicó sangrientos ataques a mezquitas frecuentadas por los al-houthistas y por la comunidad zaidí, en atentados sin precedentes en Sanaa, además de otras acciones de impacto, como el asesinato del gobernador de Adén. El conflicto ha tenido un gravísimo impacto en la población civil. La mitad de las 5.800 muertes desde la escalada de violencia a fines de marzo y hasta principios de diciembre eran civiles, incluyendo cientos de menores, producto del uso indiscriminado de la violencia en zonas pobladas. Decenas de personas han fallecido a causa de minas y otros artefactos explosivos. Ambos bandos han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos por la comisión de hechos constitutivos de crímenes de guerra. Más de 27.000 personas han resultado heridas y las infraestructuras de salud que continúan en pie están totalmente desbordadas para atender las necesidades de la población. El conflicto incluso ha favorecido la expansión de enfermedades, como dengue o malaria. ONG y agencias de la ONU advierten que más de 21 millones de personas (80% de la población yemení) necesitaban ayuda, y han denunciado que la asistencia se ha visto dificultada por el bloqueo naval y aéreo al que está sometido el país. El conflicto también ha obligado a 2,3 millones de personas a abandonar sus hogares, 120.000 de las cuales han huido del país. La intensificación de la violencia, por tanto, ha contribuido a agravar la ya precaria situación de la población en el país más pobre del mundo árabe, con graves consecuencias a largo plazo. A finales de 2015 las estimaciones de la ONU indicaban que 1,8 millones de niñas y niños no acudían al colegio desde marzo, 19 millones de personas carecían de acceso a agua potable y servicios sanitarios y 7,6 millones de personas se encontraban en una situación de inseguridad alimentaria severa. El rápido deterioro de la situación llevó a la Cruz Roja a advertir en septiembre que después de cinco meses de conflicto Yemen ofrecía un panorama similar al de Siria después de cinco años de guerra. Pese a la gravedad de la situación, el llamamiento de emergencia lanzado a mediados de año había alcanzado menos de la mitad de los fondos requeridos. Las perspectivas de frenar la espiral de violencia y reconducir la crisis por la vía política son complicadas, teniendo en cuenta los precedentes de los intentos de mediación y los condicionantes que se derivan de la naturaleza más compleja que ha adquirido el conflicto. Las diversas iniciativas que ha intentado promover la ONU para acercar a las partes a un acuerdo político no han prosperado hasta ahora. El pacto alcanzado por los al-

La Cruz Roja advirtió en septiembre que después de cinco meses de conflicto Yemen ofrecía un panorama similar al de Siria después de cinco años de guerra

houthistas y el Gobierno de Hadi tras la toma de Sanaa en septiembre de 2014 no fue respetado por ninguna de las dos partes. Los intentos por facilitar una aproximación en enero y febrero de 2015 tampoco fructificaron. Tras la dimisión del hasta entonces enviado especial de la ONU para Yemen, Jamal Benomar, su sucesor, el diplomático mauritano Ismail Ould Cheikh Ahmed, ha intentado sin éxito comprometer a las partes en un cese el fuego. Las treguas alcanzadas o no han sido respetadas, o han sido muy breves o han estado precedidas de una intensificación de los combates. En una reunión en junio, en Ginebra, las partes no estuvieron dispuestas a sentarse en la misma mesa para negociar y, en septiembre, los anuncios de una nueva ronda de negociaciones fueron suspendidos a última hora. La nueva ronda de negociaciones en Suiza en diciembre aparecía como una nueva oportunidad. En medio de la alarma internacional en torno a ISIS, y ante el bloqueo de la contienda, Washington y Londres habrían intensificado la presión a Hadi para que adopte una posición menos estricta respecto al cumplimiento de la resolución 2216, aprobada en abril por el Consejo de Seguridad de la ONU con la abstención de Rusia, y considerada proclive a las tesis del mandatario y de Riad. El texto exige a las partes que pongan fin a la violencia y demanda que los al-houthistas entreguen las armas de los arsenales arrebatados al Estado y que se replieguen de los territorios capturados en el último año, incluyendo la capital, Sanaa. Los al-houthistas se han mostrado dispuestos a un repliegue, pero exigen que las negociaciones aborden el futuro político del país de manera amplia. La posibilidad de que las negociaciones supongan un giro en terreno deberá sortear una serie de obstáculos. Entre ellos, la previsible acción de “spoilers” no implicados en las negociaciones, como AQPA e ISIS y la fragilidad de las alianzas yemeníes involucradas en la disputa, que puede condicionar el apoyo al diálogo si no se recogen las demandas de algunos sectores (la cooperación entre los al-houthistas y el entorno de Saleh ha sido por conveniencia, pero persiste la desconfianza entre ambos; mientras que el bando pro-Hadi incluye a actores, como grupos secesionistas del sur, que se han adherido ante lo que perciben como un enemigo común, pero que no tienen una relación de lealtad con el mandatario). Adicionalmente, hay que tener en cuenta la influencia de los intereses regionales, en especial de Arabia Saudita e Irán, el eventual bloqueo a concesiones que puedan ser interpretadas como una ganancia para el adversario o una deriva en la que Yemen se convierta en moneda de cambio en el marco de una negociación paralela sobre Siria. En este contexto, diversos análisis advertían que la ronda de diciembre se iniciaba con expectativas muy limitadas pese a la mayor presión diplomática, debido a las profundas divisiones que persisten. Aun así, algunos anticipaban la posibilidad de alcanzar acuerdos puntuales como un cese el fuego de largo plazo, intercambios de prisioneros, el levantamiento del bloqueo y un marco para continuar el diálogo. Dados los niveles de violencia y destrucción en el país, todas las medidas conducentes a una reducción de las hostilidades, muertes y sufrimiento de la población serán consideradas como un avance.

24. ICG, op.cit.

6.10. La amenaza yihadista y sus efectos desestabilizadores a nivel internacional

En los últimos años, el informe *Alerta!* ha llamado la atención sobre las dinámicas de radicalización en Oriente Medio y, en concreto, sobre la emergencia del fenómeno Estado Islámico (ISIS), primero por los avances del grupo armado en Siria e Iraq en medio del clima de inestabilidad en la región y, luego, por su creciente control de territorios en ambos países, que marcó un punto de inflexión con la declaración de un califato a mediados de 2014. Desde entonces, ISIS se ha consolidado como nuevo modelo para el yihadismo internacional y competidor de al-Qaeda, y se ha perfilado como un actor con mayor capacidad para actuar con una proyección global, ya sea a través de los numerosos grupos armados locales que –por diversas razones– han declarado su lealtad a ISIS, principalmente en países de África y Asia; o de una implicación del grupo en acciones perpetradas más allá de estas regiones, como quedó en evidencia en los atentados de París de noviembre de 2015. En este contexto, múltiples factores pueden incidir en una intensificación de la violencia vinculada a la amenaza yihadista en el futuro. Entre ellos, una pugna más abierta entre ISIS y al-Qaeda, que puede traducirse en un aumento de las acciones armadas de ambas organizaciones –tendientes a reforzar el perfil de sendos proyectos–; una mayor incidencia de acciones armadas de milicianos de ISIS que retornan a sus países de origen o de “lobos solitarios” –individuos radicalizados con acceso a armas y dispuestos a perpetrar ofensivas, como en el caso de San Bernardino (EEUU)–; y los posibles efectos adversos de la respuesta internacional a ISIS, que si continúa privilegiando la vía militar puede redundar en un incremento de las dinámicas de radicalización.

Una pugna más abierta entre ISIS y al-Qaeda puede traducirse en un aumento de las acciones armadas de ambas organizaciones, tendientes a reforzar el perfil de sus respectivos proyectos

El pulso entre al-Qaeda e ISIS se arrastra desde hace años, pero se ha ido haciendo cada vez más explícito. Las diferencias entre ambas organizaciones datan de la época en que el actual ISIS operaba sólo en Iraq como filial de al-Qaeda, bajo el liderato de Abu Musab al-Zarkawi. La dirigencia de al-Qaeda, entonces encabezada por Osama bin Laden, reprobó las estrategias de la filial iraquí, en especial los ataques contra la población shií por considerar que era prioritario centrarse en el “enemigo externo” y evitar acciones que podrían mermar su apoyo en la región. Las diferencias continuaron tras la asunción de Abu Bakr al-Baghdadi al mando del grupo iraquí –en una decisión que no habría sido consultada con la central del grupo– y se exacerbaron en medio de la convulsión creada por la guerra en Siria. Al-Baghdadi envió a uno de sus lugartenientes a aprovechar el caos en el vecino país y sus acciones derivaron luego en la formación del Frente al-Nusra, que fue adquiriendo un creciente protagonismo. El grupo iraquí decidió proclamar unilateralmente una fusión con el Frente al-Nusra en 2013, pero esta última organización se negó

e insistió en ser considerada como la filial de al-Qaeda en Siria. La decisión de la central de al-Qaeda (liderada por Ayman al-Zawahiri tras la muerte de Bin Laden) de respaldar la postura del Frente al-Nusra y rechazar la fusión marcó el quiebre con el grupo de al-Baghdadi a comienzos de 2014. La ruptura se confirmó en los posteriores enfrentamientos armados entre milicianos del Frente al-Nusra e ISIS y, según versiones, en el asesinato por ISIS del emisario enviado por al-Zawahiri para mediar en la disputa.²⁵

ISIS ha ido eclipsando a al-Qaeda gracias a sus conquistas en Iraq y Siria, sus mayores recursos económicos –en la actualidad es el grupo armado más rico a nivel mundial– y su capacidad para atraer reclutas, en parte por el uso de la propaganda y las nuevas tecnologías para cooptar y promover sus acciones, con un alto impacto mediático. Algunos análisis han apuntado también a una diferencia generacional que juega en contra de la dirigencia de al-Qaeda y a una falta de carisma y autoridad de al-Zawahiri – en comparación con Bin Laden–, que habría favorecido esta fractura, descrita por algunos como un “coup d’état” desde el seno de al-Qaeda.²⁶ En sus medios de comunicación, ISIS no ha tenido reparos en acusar de conspiración contra el califato a algunos de los ideólogos yihadistas que inspiraron a al-Qaeda y que ahora critican a ISIS por asesinar musulmanes y “corromper” la yihad.²⁷

En este contexto, en los últimos años se han observado diversas muestras de lealtad a ISIS por parte de grupos armados, algunos de ellos antiguos simpatizantes de al-Qaeda, en países como Egipto, Libia, Túnez, Afganistán o Nigeria. Esta alineación responde a diversas motivaciones –que ameritarían un análisis particular en cada caso–²⁸, aunque entre ellas se combinarían la afinidad ideológica, la búsqueda de financiamiento, apoyo logístico, visibilidad mediática o, simplemente, la aproximación al proyecto yihadista que aparece como más poderoso a nivel mundial. Algunas de estas organizaciones han adoptado aspectos del *modus operandi* que ha dado fama a ISIS y han declarado sus zonas de influencia como nuevas “provincias” del califato. Este es el caso de Ansar Beit al-Maqdis, en Egipto, que a finales de 2014 asumió el nombre de Provincia del Sinaí. El grupo ha mantenido sus ofensivas contra las fuerzas de seguridad egipcias, pero también ha reivindicado acciones como el atentado contra un avión ruso que causó más de 200 muertes en octubre de 2015. En Libia, las principales facciones de Ansar al-Sharia –relacionada con inicialmente con al-Qaeda– decidieron sumarse a ISIS y anunciaron el establecimiento de Barqa (Cirenaica). Durante 2015 ISIS en Libia reclamó la autoría de atentados explosivos, decapitó a una veintena de egipcios de religión copta y protagonizó una creciente actividad en Sirte y Derna, donde

25. Shiv Malik et al., “How ISIS crippled al-Qaida”, *The Guardian*, 10 de junio de 2015.

26. Ibid.

27. Al-Qaeda también aspira a establecer un califato a largo plazo, pero cree que aún no están dadas las condiciones para su establecimiento.

28. Véase “Malí: riesgos para la estabilidad debido a acciones de grupos yihadistas” en este capítulo.

ha practicado crucifixiones. Por su proximidad geográfica, la actividad yihadista en Libia genera una especial preocupación en Europa. Uno de los grupos que más recientemente se ha alineado con ISIS ha sido Boko Haram (BH), que en el pasado habría recibido ayuda de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). BH, considerado por algunos analistas como el grupo armado más letal del mundo, proclamó la Provincia de África Occidental. ISIS, por su parte, estaría instando a sus simpatizantes africanos que no pueden llegar a Iraq o a Siria a sumarse a las filas de BH.²⁹

En medio de estos movimientos en el yihadismo global, grupos como AQMI –que opera en Argelia y el Sahel– y al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), en Yemen, o al-Shabaa, en Somalia, se han mostrado leales a la central de al-Qaeda, aunque han tenido que lidiar con facciones disidentes o nuevos actores armados favorables a ISIS en sus áreas de influencia, como Jund al-Khilafa en Argelia o la nueva filial de ISIS en Yemen, que ha protagonizado ataques sin precedentes contra mezquitas shiíes. Simpatizantes de AQMI y AQPA también han reivindicado sonadas acciones, como los atentados en París contra Charlie Hebdo a comienzos de 2015 –dos de los perpetradores tenían vínculos con Al-Qaeda en Yemen³⁰– o la ofensiva contra un hotel en Bamako, a finales de noviembre. En medio de la conmoción por los sucesivos ataques de ISIS en Sinaí, Líbano y París, ocurridos en un lapso de tan solo 15 días, esta última acción en Malí fue interpretada como un llamado de atención de simpatizantes de al-Qaeda para subrayar que el grupo continuaba siendo relevante y alentó debates en círculos yihadistas sobre cuál de los dos grupos estaba haciendo un mejor servicio a la causa.³¹ Asimismo, agudizó la preocupación por los previsibles efectos letales de una mayor competencia entre al-Qaeda e ISIS a nivel global, ya que su disputa por proyección y visibilidad puede llevar a los grupos leales de uno y otro proyecto a escalar sus acciones, en paralelo a sus propias agendas locales.

A esto se suma que, como quedó patente en 2015, pueden continuar registrándose ataques perpetrados por yihadistas radicalizados en sus países de origen, con ayuda –o no– de milicianos retornados de contextos como Siria o Iraq. Prueba de ello son los atentados de París de noviembre –varios de los atacantes habían regresado de Siria– o los ataques en Túnez, que padeció ofensivas en el Museo de El Bardo (marzo), en Soussa (junio) y contra la guardia presidencial (noviembre). Dada la experiencia, Túnez teme la llegada de milicianos entrenados en la vecina Libia y el retorno de los más de 3.000 tunecinos que han salido del país para sumarse a actividades yihadistas en Oriente Próximo. Tanto al-Qaeda como ISIS han hecho llamamientos a

ataques yihadistas de “lobos solitarios” contra objetivos en Occidente. La facilidad en el acceso a armas en muchos países puede propiciar este tipo de ofensivas similares a las de San Bernardino (California), reivindicada por una pareja que había declarado su lealtad a ISIS por Facebook.

Las dinámicas de radicalización también pueden verse favorecidas por los efectos de la respuesta internacional a este fenómeno, y en particular a ISIS, hasta ahora con un marcado acento en la dimensión militar y securitaria. Sobre todo después de los ataques de París, pero también desde antes, diversos análisis³² han subrayado los riesgos de una respuesta apresurada y una sobre-reacción –buscada por ISIS– y han advertido sobre las consecuencias de una aproximación armada que refleje una falta de aprendizaje de experiencias previas –una nueva guerra contra el terrorismo puede resultar tan fracasada como la primera– y contribuya a alimentar la propia narrativa de ISIS y sus profecías sobre una batalla definitiva entre las fuerzas del califato y los infieles. En este sentido, se ha destacado que la prioridad debe ser poner freno a la polarización, todo un reto considerando el ascenso de los discursos de ultraderecha y xenófobos en Europa y EEUU, llevados al límite de la caricatura por el candidato republicano Donald Trump.

La respuesta internacional requiere de una mayor coordinación y una estrategia política para enfrentar un desafío que trasciende fronteras y al que no se puede responder de manera efectiva privilegiando las armas. Unas armas que, como se ha demostrado, incluso han contribuido a engrosar los arsenales de ISIS.³³ Debe existir una mayor conciencia de que el problema principal son los conflictos y el vacío de poder que han propiciado la emergencia de este tipo de actores armados, y que se requiere la configuración de gobiernos legítimos en las zonas más afectadas por este flagelo y una apuesta decidida para apoyar acuerdos de paz inclusivos. En este sentido, se deben evitar las alianzas con regímenes represivos que se ofrecen como garantes ante el terrorismo, ya que supondría repetir los mismos errores que en el pasado. Asimismo, se deben intensificar las respuestas no violentas al fenómeno –control de flujos de armas, bloqueo a vías de financiamiento, sanciones y embargos, etc– y poner atención a las condiciones que han favorecido la radicalización de miles y miles de personas y a la marginación que, en muchos contextos, puede convertir en atractivo a cualquier proyecto –incluyendo el yihadismo– que ofrezca una oportunidad de ascenso social. En suma, se requiere una aproximación reflexionada, concertada y con perspectiva de largo plazo que, hasta ahora, no ha caracterizado la respuesta internacional a un fenómeno tan complejo como el yihadismo.

29. Jakkie Cilliers, *Violent Islamist extremism and terror in Africa*, ISS Paper 286, octubre de 2015.

30. Un tercer atacante en los atentados de París en enero de 2015 se declaró seguidor de ISIS y mostró sus simpatías por los otros dos agresores, pero no habría existido una coordinación logística entre ambos grupos.

31. Anne Barnard y Neil MacFarquhar, “Paris and Mali Attacks Expose Lethal Qaeda-ISIS Rivalry”, *New York Times*, 20 de noviembre de 2015.

32. Véanse, por ejemplo, Virginie Collombier, *Fighting the Islamic State in Libya: by political means first*, NOREF, marzo de 2015; Joseph Bahout, *ISIS and Syria: What to Do -And Not Do- About It*, Carnegie Endowment for International Peace, 24 noviembre de 2015; David Rothkopf, “Our Reaction Is More Dangerous Than the Terrorists”, *Foreign Policy*, 25 de noviembre de 2015; Jean-Marie Gueneno, *The Problem with Coalition Air Strikes in Syria and The Dangers of a European War on Terror*, ICG, 15 de septiembre y 24 noviembre de 2015; Jane Kinnimot, *Europe Needs to Take an Holistic Approach to Tackling ISIS*, Chatham House, 25 de noviembre de 2015.

33. Amnesty International, *Iraq: 'Islamic State' atrocities fuelled by decades of reckless arms trading*, AI, 8 de diciembre de 2015.

Glosario

- ABM:** Ansar Beit al-Maqdis
- ACNUDH:** Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ACNUR:** Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
- ADF-NALU:** Allied Defence Forces - National Army for the Liberation of Uganda (Fuerzas de Defensa Aliadas – Ejército Nacional para la Liberación de Uganda)
- ADSC:** All Darfur Stakeholders Conference (Conferencia de Actores de Darfur)
- AFISMA:** Misión Internacional de Apoyo a Malí bajo Liderazgo Africano
- AIEA:** Agencia Internacional de la Energía Atómica
- AKP:** Adalet ve Kalkinma Partisi (Partido de la Justicia y el Desarrollo)
- AKR:** Nueva Alianza de Kosovo
- ALBA:** Alianza Bolivariana para las Américas
- ALP:** Arakan Liberation Party (Partido de Liberación Arakan)
- AMISOM:** Misión de la Unión Africana en Somalia
- AP:** Autoridad Palestina
- APCLS:** Alliance de Patriots pour un Congo Libre et Souverain
- APHC:** All Parties Hurriyat Conference
- APRD:** Armée Populaire pour la Réstauration de la République et de la Démocratie (Ejército Popular para el Restablecimiento de la República y la Democracia)
- AQMI:** Al-Qaeda en el Magreb Islámico
- AQPA:** Al-Qaeda en la Península Arábiga
- ARS:** Alianza para la Reliberación de Somalia
- ASEAN:** Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sureste Asiático)
- ASWJ:** Ahlu Sunna Wal Jama'a
- ATLF:** All Terai Liberation Front (Frente de Liberación de Todo Terai)
- ATMM:** Akhil Tarai Mukti Morcha
- ATTF:** All Tripura Tiger Force (Fuerza de los Tigres de Todo Tripura)
- BDP:** Partido de la Paz y la Democracia
- BH:** Boko Haram
- BIFF:** Bangsamoro Islamic Freedom Fighters
- BIFM:** Bangsamoro Islamic Freedom Movement
- BINUCA:** Oficina Integrada de Construcción de Paz de Naciones Unidas en R. Centrafricana
- BLA:** Baluch Liberation Army (Ejército de Liberación Baluchi)
- BLF:** Baluch Liberation Front (Frente de Liberación Baluchi)
- BNUB:** Oficina de las Naciones Unidas en Burundi
- BLT:** Baloch Liberation Tigers
- BM:** Banco Mundial
- BRA:** Balochistan Republican Army (Ejército Republicano de Baluchistán)
- CAP:** Consolidated Appeal Process (Proceso de Llamamientos Consolidados)
- CARICOM:** Comunidad del Caribe
- CDH:** Consejo de Derechos Humanos
- CEEAC:** Comunidad Económica de los Estados de África Central
- CEMAC:** Comunidad Económica y Monetaria de África Central
- CIA:** Central Intelligence Agency
- CHD:** Centre for Humanitarian Dialogue
- CICR:** Comité Internacional de la Cruz Roja
- CMA:** Coordinadora de Movimientos de Azawad
- CMPFPR:** Coordinadora de Movimientos Patrióticos de Resistencia
- CNDD-FDD:** Congrès National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la Défense de la Démocratie (Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia)
- CNDP:** Congrès National pour la Défense du Peuple (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo)
- CNF:** Chin National Front (Frente Nacional Chin)
- CNT:** Consejo Nacional de Transición de Libia
- CPA:** Comprehensive Peace Agreement (Acuerdo de Paz Global)
- CPI:** Corte Penal Internacional
- CPI-M:** Communist Party of India-Maoist (Partido Comunista de la India-Maoísta)
- CPJP:** Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz)
- CPN-UML:** Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist) (Partido Comunista de Nepal [Marxista Leninista])
- DDR:** Desarme, Desmovilización y Reintegración
- DHD:** Dima Halim Daogah
- DHD (J):** Dima Halim Daogah, Black Widow faction (Dima Halim Daogah, facción Viuda Negra)
- DHD (Nunisa):** Dima Halim Daogah, Nunisa faction (Dima Halim Daogah, facción Nunisa)
- DIH:** Derecho Internacional Humanitario
- DKBA:** Democratic Karen Buddhist Army (Ejército Democrático Budista Karen)
- DMLEK:** Democratic Movement for the Liberation of the Eritrean Kunama (Movimiento Democrático para la Liberación del Pueblo Kunama de Eritrea)
- DPA:** Darfur Peace Agreement (Acuerdo de Paz de Darfur)
- EA:** Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca)
- EAU:** Emiratos Árabes Unidos
- ECOMIB:** Misión de ECOWAS en Guinea Bissau
- ECOWAS:** Economic Community Of West African States (Comunidad Económica de Estados de África Occidental)
- EDA:** Eritrean Democratic Alliance (Alianza Democrática Eritrea)
- EEBC:** Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía
- EEUU:** Estados Unidos de América
- EFDM:** Eritrean Federal Democratic Movement (Movimiento Democrático Federal Eritreo)
- EIC:** Eritrean Islamic Congress (Congreso Islámico Eritreo)
- EIPJD:** Eritrean Islamic Party for Justice and Development (Partido Islámico Eritreo para la Justicia y el Desarrollo)
- ELF:** Eritrean Liberation Front (Frente de Liberación Eritreo)
- ELK:** Ejército de Liberación de Kosovo
- ELN:** Ejército de Liberación Nacional
- ENSF:** Eritrean National Salvation Front (Frente de Salvación Nacional Eritreo)
- EPC:** Eritrean People's Congress (Congreso del Pueblo Eritreo)
- EPL:** Ejército Popular de Liberación
- EPDF:** Eritrean People's Democratic Front (Frente Democrático del Pueblo Eritreo)

EPP: Ejército del Pueblo Paraguayo

EPPF: Ethiopian People's Patriotic Front (Frente Patriótico Popular Etíope)

EPRDF: Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Eritreo)

ESL: Ejército Sirio Libre

ETA: Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad)

ETIM: East Turkestan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental)

ETLO: East Turkestan Liberation Organization (Organización para la Liberación del Turquestán Oriental)

EUAM Ukraine: Misión de Apoyo de la UE a la Reforma del Sector de Seguridad Civil en Ucrania

EUAVSEC South Sudan: Misión de la Unión Europea en materia de seguridad de la aviación en Sudán del Sur

EUBAM: Misión de Asistencia Fronteriza de la UE a Moldova y Ucrania

EUBAM Libia: Misión de la Unión Europea de Asistencia y Gestión Integrada de Fronteras en Libia

EUBAM Rafah: Misión de Asistencia Fronteriza en el Paso Fronterizo de Rafah

EUCAP NESTOR: Misión de la Unión Europea de Desarrollo de las Capacidades Marítimas Regionales en el Cuerno de África

EUCAP SAHEL Mali: Misión de Naciones Unidas en el Sahel – Malí

EUCAP SAHEL Niger: Misión de Naciones Unidas en el Sahel - Níger

EUFOR ALTHEA: Operación Militar de la UE en Bosnia y Herzegovina

EUFOR RCA: Misión de mantenimiento de la paz de la UE en RCA

EUJUST LEX: Misión Integrada de la UE por el Estado de Derecho en Iraq

EULEX Kosovo: Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo

EUMM: Misión de Observación de la UE en Georgia

EU NAVOR Somalia: Fuerza Naval de la Unión Europea – Somalia, Operación Atalanta

EUPOL Afghanistan: Misión de Policía de la UE en Afganistán

EUPOL COPPS: Misión de Policía de la UE para los Territorios Palestinos

EUPOL RDC: Misión de Policía de la UE en RD Congo

EUSEC RDC: Misión de Asistencia de la UE a la Reforma del Sector de Seguridad en RD Congo

EUTM Mali: Misión de la UE para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Malí.

EUTM Somalia: Misión Militar de la UE para contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad de Somalia

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FATA: Áreas Tribales bajo Administración Federal

FDLP: Frente Democrático de Liberación de Palestina

FDLR: Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda)

FDPC: Front Démocratique du Peuple Centrafricain (Frente Democrático del Pueblo Centrafricano)

FEWS NET: Red de Sistemas de Alerta Temprana Contra la Hambruna de USAID

FFR: Front des Forces de Redressement (Frente de Fuerzas de Reorganización)

FIS: Frente Islámico de Salvación

FLEC-FAC: Frente de Liberação do Enclave de Cabinda (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda)

FNL: Forces Nationales de Libération (Fuerzas Nacionales de Liberación)

FOMUC: Force Multinationale en Centrafrique (Fuerza Multinacional de la CEMAC en RCA)

FPLP: Frente Popular de Liberación de Palestina

FPI: Front Populaire Ivoirien (Frente Popular Marfileño)

FPR : Front Populaire pour le Redressement (Frente Popular por la Liberación)

Frente POLISARIO: Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro

FRF: Forces Republicaines et Federalistes (Fuerzas Republicanas y Federalistas)

FRODEBU: Front pour la Démocratie au Burundi (Frente para la Democracia en Burundi)

FRUD: Front pour la Restauration de l'Unité et la Démocratie (Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia)

FSN: Frente de Salvación Nacional

FUC: Front Uni pour le Changement Démocratique (Frente Unido para el Cambio Democrático)

FUDD: Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura

FURCA: Force de l'Union en République Centrafricaine (Fuerza de la Unión en la R. Centrafricana)

GAM: Gerakin Aceh Merdeka (Movimiento de Aceh Libre)

GATIA: Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados

GFT: Gobierno Federal de Transición

GIA: Grupo Islámico Armado

GSPC: Grupo Salafista para la Predicación y el Combate

HAK: Congreso Nacional Armenio

HCUA: Alto Consejo para la Unidad de Azawad

HDZ: Unión Democrática Croata

HDZ 1990: Unión Democrática Croata 1990

HM: Hermanos Musulmanes

HPG: Humanitarian Policy Group

HRW: Human Rights Watch

HUM: India Assam

IBC: Iraq Body Count

ICG: International Crisis Group

ICR/LA: Iniciativa de Cooperación Regional contra el LRA

IDG: Índice de Desigualdad de Género

IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre

IDP: Internally Displaced Person (Persona Desplazada Interna)

IEG: Índice de Equidad de Género

IFLO: Islamic Front for the Liberation of Oromia (Frente Islámico para la Liberación de Oromiya)

IGAD: Intergovernmental Authority on Development (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo)

IISS: International Institute for Strategic Studies

IMU: Islamic Movement of Uzbekistan (Movimiento Islámico de Uzbekistán)

INLA: Irish National Liberation Army (Ejército Irlandés de Liberación Nacional)

IRA: Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés)

ISAF: International Security Assistance Force (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad)

ISF: Misión de Estabilización Internacional en Timor-Leste

ISIS: Estado Islámico

JEM: Justice and Equality Movement (Movimiento para la Justicia y la Igualdad)

JKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front (Frente de Liberación de Jammu y Cachemira)

JTMM: Janatantrik Terai Mukti Morcha (Frente de Liberación del Pueblo de Terai)

KANU: Kenya African National Union (Unión Nacional Africana de Kenya)

KCK: Koma Civakên Kurdistan (Unión de las Comunidades en Kurdistán)

KDP: Partido Democrático de Kurdistán

KFOR: Misión de la OTAN en Kosovo

KIA: Kachin Independence Army (Ejército para la Independencia de Kachin)

KIO: Kachin Independence Organization (Organización para la Independencia Kachin)

KLNLF: Karbi Longri National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional Karbi Longri)

KNA: Kuki Liberation Army (Ejército de Liberación Kuki)

KNF: Kuki National Front (Frente Nacional Kuki)

KNPP: Karenni National Progressive Party (Partido Progresista Nacional Karen)

KNU: Kayin National Union (Unión Nacional Kayin)

KNU/KNLA: Karen National Union/Karen National Liberation Army (Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen)

KPF: Karen Peace Force (Fuerza de Paz Karen)

KPLT: Karbi People's Liberation Tigers (Tigres de Liberación del Pueblo Karbi)

KRG: Gobierno Regional del Kurdistán

KYKL: Kanglei Yawol Kanna Lup (Organización para la Salvación del Movimiento Revolucionario en Manipur)

LeT: Lashkar-e-Toiba

LJM: Liberation and Justice Movement (Movimiento para la Liberación y la Justicia)

LRA: Lord's Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor)

LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tigres de Liberación de la Tierra Tamil)

MAA: Movimiento Árabe de Azawad

MAPP-OEA: Misión de la OEA de apoyo al proceso de paz en Colombia

M23: Movimiento 23 de Marzo

MDC: Movement for Democratic Change (Movimiento para el Cambio Democrático)

MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Movimiento para la Emancipación para el Delta del Níger)

MFDC: Mouvement de las Forces Démocratiques de Casamance (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance)

MFO: Fuerza Multinacional de Observadores para la supervisión del tratado de paz entre Egipto e Israel

MIB OEA: Misión de la OEA de Buenos Oficios en Ecuador y Colombia

MICOPAX: Mission de Consolidation de la Paix en République Centrafricaine (Misión de Consolidación de la Paz en R. Centroafricana de la CEEAC)

MILF: Moro Islamic Liberation Front (Frente Moro de Liberación Islámico)

MINURCA: Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana

MINURCAT: Misión de Naciones Unidas para la República Centroafricana y Chad

MINURSO: Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental

MINUSCA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en RCA

MINUSMA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí

MINUSTAH: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

MISCA: Misión de Apoyo a Rep. Centroafricana bajo Liderazgo Africano

MISMA: Misión Internacional de Asistencia a Malí

MIT: Organización Nacional de Inteligencia de Turquía

MJLC: Mouvement des Jeunes Libérateurs Centrafricains (Movimiento de los Jóvenes Libertadores Centroafricanos)

MLC: Mouvement pour la Libération du Congo (Movimiento para la Liberación del Congo)

MMT: Madhesi Mukti Tigers (Tigres Mukti Madhesi)

MNLA: Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad

MNLF: Moro National Liberation Front (Frente Moro de Liberación Nacional)

MONUC: Misión de las Naciones Unidas en la RD Congo

MONUSCO: Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de RD Congo

MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People (Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni)

MOVADEF: Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales

MPRF: Madhesi People's Right Forum (Foro de los Derechos del Pueblo Madhesi)

MRC: Mombasa Republican Council (Consejo Republicano de Mombasa)

MQM: Muttahida Qaumi Movement (Movimiento Nacional Unido)

MSF: Médicos Sin Fronteras

MUYAO: Movimiento Unido por la Yihad en África Occidental

MVK: Madhesi Virus Killers (Asesinos de Virus Madhesi)

NC: Nepali Congress Party (Partido del Congreso Nepali)

NCP: National Congress Party (Partido del Congreso Nacional)

NDF: National Democratic Front (Frente Democrático Nacional)

NDFB: National Democratic Front of Bodoland (Frente Democrático Nacional de Bodoland)

NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force (Fuerza Voluntaria del Pueblo del Delta del Níger)

NDV: Niger Delta Vigilante (Patrulla del Delta del Níger)

NLD: National League for Democracy (Liga Nacional por la Democracia)

NLFT: National Liberation Front of Tripura (Frente de Liberación Nacional de Tripura)

NMSP: New Mon State Party (Partido del Nuevo Estado Mon)

NNC: Naga National Council (Consejo Nacional Naga)

NNSC: Neutral Nations Supervisory Commission (Comisión de Supervisión de Naciones Neutrales)

NPA: New People's Army (Nuevo Ejército Popular)

NSCN-IM: National Socialist Council of Nagaland-Isaac Muivah (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Isaac Muivah)

NSCN-K: National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia- Khaplang)

OAS/AZ: Oficina de la OEA en Belice - Guatemala

OCHA: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas

OCI: Organización para la Cooperación Islámica

OEA: Organización de los Estados Americanos

OFDM: Oromo Federalist Democratic Movement (Movimiento Democrático Federalista Oromo)

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OLF: Oromo Liberation Front (Frente de Liberación Oromo)

OMC: Organización Mundial del Comercio

OMIK: Misión de la OSCE en Kosovo

ONG: Organización No Gubernamental

ONLF: Ogaden National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional de Ogadén)

ONU: Organización de las Naciones Unidas

ONUCI: Operación de Naciones Unidas en Côte d'Ivoire

OPC: Etiopía Oromiya

OPM: Organisasi Papua Merdeka (Organización de la Papua Libre)

OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

OTAN: Organización para el Tratado del Atlántico Norte

OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief

PALU: Parti Lumumbiste Unifié (Partido Lumumbista Unificado)

PARECO: Patriotes Résistants Congolais (Patriotas Resistentes Congoleses)

PCP: Partido Comunista del Perú

PCP: India Manipur

PJAK: Partido por la Vida Libre en Kurdistán

PLJ: Partido Libertad y Justicia

PKK: Partido de los Trabajadores del Kurdistán

PLA: People's Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional)

PLJ: Partido Libertad y Justicia

PMA: Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PPP: Pakistan People's Party (Partido del Pueblo de Pakistán)

PPRD: Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia)

PREPAK: People's Revolutionary Party of Kangleipak (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak)

PREPAK (Pro): People's Revolutionary Party of Kangleipak / Progressive (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak / Progresista)

PYD : Democratic Union Party (Partido Unión Democrática de kurdos en Siria)

RAMM: Región Autónoma del Mindanao Musulmán.

RAMSI: Regional Assistance Mission to Solomon Islands (Misión Regional de Asistencia a las Islas Salomón)

RASD: República Árabe Saharaui Democrática

RCA: República Centroafricana

RDC: República Democrática del Congo

RENAMO: Resistencia Nacional Mozambiqueña

RFC: Rassemblement des Forces pour le Changement (Coalición de las Fuerzas para el Cambio)

RPF: Rwandan Patriotic Front (Frente Patriótico Rwandés)

RPF: Revolutionary People's Front (Frente Popular Revolucionario)

RSADO: Red Sea Afar Democratic Organization (Organización Democrática Afar del Mar Rojo)

RTF: Regional Task Force (Grupo de Trabajo Regional)

SADC: Southern Africa Development Community (Comunidad de Desarrollo del África Austral)

SAF: Sudanese Armed Forces (Fuerzas Armadas de Sudán)

SCUD: Socle pour le Changement, l'Unité Nationale et la Démocratie (Plataforma para el Cambio, la Unidad Nacional y la Democracia)

SSA-S: Shan State Army South (Ejército Sur del Estado Shan)

SSC: Sool, Saanag y Cayn

SFOR: Fuerza de Estabilización de la OTAN en Bosnia y Herzegovina

SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo)

SLA: Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán)

SLA-Nur: Sudan Liberation Army-Nur (Ejército para la Liberación de Sudán, facción Nur)

SLDF: Sabaot Land Defence Forces (Fuerzas de Defensa de la Tierra Sabaot)

SNNPR: Southern Nations, Nationalities, and People's Region (Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos Meridionales)

SPLA: Sudan People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, Fuerzas Armadas de Sudán del Sur)

SPLM: Sudan People's Liberation Movement (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés)

SPLM-N: Sudan People's Liberation Army-North (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte)

SSA-S: Shan State Army-South (Ejército del Estado Shan-Sur)

SSDM/A: South Sudan Democratic Movement/Army (Movimiento/ Ejército Democrático de Sudán del Sur)

SSLA: South Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán del Sur)

SSNPLO: Shan State Nationalities People's Liberation Organization (Organización Popular para la Liberación del Estado de las Nacionalidades Shan)

TAK: Los Halcones de la Libertad del Kurdistán

TIPH: Presencia Internacional Temporal en Hebrón

TMLP: Terai Madhesh Loktantrik Party

TPIR: Tribunal Penal Internacional para Rwanda

TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

TPLF: Tigrayan People's Liberation Front (Frente Popular de Liberación de Tigrayan)

TTP: Tehrik-e-Taliban Pakistan

UA: Unión Africana

UAD: Union pour l'Alternance Démocratique (Unión por la Alternancia Democrática)

UCPN-M: Unified Communist Party of Nepal (Maoist) (Partido Comunista Unificado de Nepal) [Maofista]

UE: Unión Europea

UFDD: Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (Unión de las Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo)

UFDG: Union des Forces Démocratiques de Guinée (Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea)

UFDR: Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (Unión de Fuerzas Democráticas para la Coalición)

UFF: Ulster Freedom Fighters (Luchadores por la Libertad del Ulster)

UFR: Union des Forces de la Résistance (Unión de las Fuerzas de la Resistencia)

UFDR: Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (Unión de las Fuerzas Democráticas por la Unidad)

ULFA: United Liberation Front of Assam (Frente Unido de Liberación de Assam)

UNAMA: Misión de asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán

UNAMI: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq

UNAMID: United Nations and African Union Mission in Darfur (Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur)

UNDOF: Fuerza de Observación de la Separación de Naciones Unidas

UNEF: Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas

UNFICYP: Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

UNIFIL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (o FPNUL)

UNIOGBIS: Oficina Integrada de Construcción de Paz de Naciones Unidas en Guinea Bissau

UNIPSIL: Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona

UNISFA: Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei

UNITAF: Unified Task Force (Fuerza de Tareas Unificadas)

UNLF: United National Liberation Front (Frente Unido de Liberación Nacional)

UNMIK: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo

UNMIL: Misión de las Naciones Unidas en Liberia

UNMISS: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur

UNMIT: Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste

UNMOGIP: Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en la India y Pakistán

UNOCA: Oficina Regional de Naciones Unidas en África Central

UNOGBIS: Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau

UNOWA: Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental

UNPOS: Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia

UNRCCA: Centro Regional de Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central

UNRWA: Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo

UNSCO: Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio

UNSCOL: Oficina del Coordinador Especial de Naciones Unidas para Líbano

UNSMIL: Misión de Apoyo a Naciones Unidas en Libia

UNMIT: Misión integrada de Naciones Unidas en Timor Leste

UNSOM: Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Somalia

UNTSO: Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua

UPDS: United People's Democratic Solidarity (Solidaridad Democrática del Pueblo Unido)

UPPK: United People's Party of Kangleipak (Partido Unido Popular de Kangleipak)

UPRONA: Union pour le Progrès National (Unión para el Progreso Nacional)

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

USAID: United States Agency for International Development (Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU)

UTI: Unión de Tribunales Islámicos

UVF: Ulster Volunteer Force (Fuerza de Voluntarios del Ulster)

UWSA: United Wa State Army (Ejército del Estado Wa Unido)

VIH/SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana/ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

VRAE: Valle entre los Ríos Apurímac y Ene

WILPF: Women's International League for Peace and Freedom (Liga Internacional de las Mujeres para la Paz y la Libertad)

WPNL: West Papua National Coalition for Liberation

ZANU-PF: Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (Unión Nacional Africana de Zimbabwe – Frente Patriótico)

ZUF: Zeliangrong United Front (Frente Unido Zeliangrong)

Escola de Cultura de Pau

La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la paz ubicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de investigación, diplomacia paralela, formación y sensibilización. Sus principales ámbitos de trabajo incluyen el análisis de conflictos, procesos de paz, género, derechos humanos y justicia transicional y la educación para la paz.

Los ámbitos de acción de la Escola de Cultura de Pau son:

- Investigación. Las áreas de investigación de la ECP incluyen los conflictos armados y las crisis sociopolíticas, los procesos de paz, los derechos humanos y la justicia transicional, la dimensión de género y la educación para la paz.
- Diplomacia paralela. La ECP promueve el diálogo y la transformación de conflictos a través de iniciativas de diplomacia paralela, incluyendo tareas de facilitación con actores armados.
- Servicios de consultoría. La ECP lleva a cabo servicios de consultoría para instituciones locales e internacionales.
- Educación y formación. El personal investigador de la ECP imparte clases en cursos de grado y postgrado en universidades catalanas, incluyendo la Diplomatura en Cultura de Paz, el título de postgrado que la propia ECP ofrece en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, se ofrecen clases y talleres en temas específicos, entre ellos la educación en y para el conflicto y la sensibilidad al conflicto.
- Sensibilización. Las iniciativas de la ECP en materia de sensibilización incluyen actividades dirigidas a la sociedad catalana y española, entre ellas colaboraciones con medios de comunicación.

Escola de Cultura de Pau

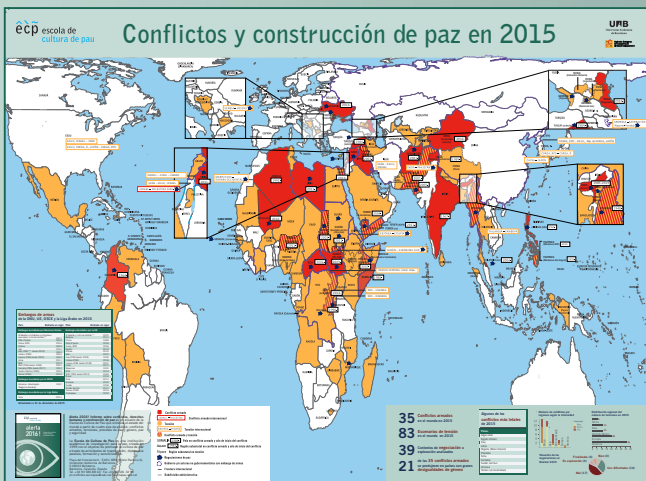
Parc de Recerca, Edifici MRA, Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (España)

Tel: +34 93 586 88 42; Fax: +34 93 581 32 94

Email: pr.conflict.escolapau@uab.cat / Website: <http://escolapau.uab.cat>

Alerta 2016! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de cuatro ejes: Conflictos armados, tensiones, procesos de paz, y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2015 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

Con prólogo de **Martin Griffiths**
Director Ejecutivo del European Institute of Peace



MAPA de conflictos y construcción de paz desplegable en el interior

Con el apoyo de:



Alerta 2016! arroja luz sobre algunas de las cuestiones más pertinentes en el ámbito de la paz y seguridad de nuestro tiempo. En concreto, aporta una valiosa panorámica de tendencias en materia de conflictos y construcción de paz a nivel global en el período reciente. Para la comunidad académica interesada en la paz y los conflictos, así como para responsables políticos que trabajan en este ámbito, *Alerta 2016!* constituye una importante fuente de referencia.

Isak Svensson,
Profesor del Departamento de Investigación sobre Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala

Alerta 2016! ofrece una concisa y multifacética panorámica sobre el estado de la paz y los conflictos en el mundo. Además de proveer información clave para la comunidad investigadora, *Alerta 2016!* da un paso más allá y presenta proyecciones para la paz a corto y medio plazo, identificando señales de alerta y ventanas de oportunidad para ser consideradas por responsables políticos y otros profesionales. Al asumir esta perspectiva, el informe constituye una de las pocas publicaciones que adopta una posición decidida a favor de una efectiva transferencia de la investigación al ámbito de la decisión política en el campo de la construcción de la paz.

Thania Paffenholz,
Investigadora del Graduate Institute's Centre on Conflict, Peacebuilding and Development

El anuario *Alerta!* es una ventana al mundo. Panorámica, además. Permite observar el presente y aprender del pasado para anticipar el futuro. Y eso, en un mundo convulso, donde las tensiones derivan en conflictos y los procesos de paz son a menudo demasiado frágiles, es de un valor incalculable. *Alerta 2016!* muestra el mundo tal y como es, recuerda como ha sido y aporta claves para afrontar los nuevos procesos con la ventaja de la experiencia. No es un informe sobre guerras, tensiones y conflictos, en realidad es un anuario sobre prevención, rehabilitación y paz.

Xavier Aldekoa,
Corresponsal en África del diario La Vanguardia

